
¿UNA NUEVA RURALIDAD EN AMÉRICA LATINA?

⇐ **Norma Giarracca**
(Compiladora)

Edelmira Pérez
María de Nazareth Baudel Wanderley
Miguel Teubal
Deis Siqueira
Rafael Osório
David Barkin
Leonilde Servolo de Medeiros
Norma Giarracca
Hubert C. de Grammont
Alejandro Diez Hurtado
Ramón Fogel
Sergio Gómez
Diego Piñeiro
María A. Moraes Silva
Karina Bidaseca
Daniela Mariotti
Mónica Isabel Bendini
Josefa Salete Barbosa Cavalcanti
Sara María Lara Flores

Colección Grupos de Trabajo de CLACSO

Grupo de Trabajo *Desarrollo Rural*

Coordinadora: Norma Giarracca

Director de la Colección

Dr. Atilio A. Boron
Secretario Ejecutivo de CLACSO

Area Académica de CLACSO

Coordinador: Emilio H. Taddei
Asistente Coordinador: Sabrina González
Revisión de Pruebas: Daniel Kersfeld

Area de Difusión de CLACSO

Coordinador: Jorge A. Fraga
Arte y Diagramación: Miguel A. Santángelo
Edición: Florencia Enghel

Impresión

Gráficas y Servicios S.R.L.

Imagen de tapa:

Fotografía realizada por Carlos Reboratti.

Primera edición

"¿Una nueva ruralidad en América Latina?"
(Buenos Aires: CLACSO, enero de 2001)



**Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales**



**Agencia Sueca de
Desarrollo Internacional**

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales / CLACSO

Callao 875, piso 3° (1023) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4811-6588 / 4814-2301 - Fax: (54-11) 4812-8459
e-mail: clacso@clacso.edu.ar - <http://www.clacso.edu.ar> - www.clacso.org

ISBN 950-9231-58-4

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

INDICE

Prólogo
Norma Giarracca
11

Parte I
Repensando el desarrollo rural

Edelmira Pérez
Hacia una nueva visión de lo rural
17

Maria de Nazareth Baudel Wanderley
A ruralidade no Brasil moderno.
Por un pacto social pelo desenvolvimento rural
31

Miguel Teubal
Globalización y nueva ruralidad en América Latina
45

Deis Siqueira e Rafael Osório

O conceito de rural

67

David Barkin

Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular sustentable

81

Parte II

***Acciones colectivas: movimientos, protestas
y organizaciones sociales***

Leonilde Servolo de Medeiros

*“Sem Terra”, “Assentados”, “Agricultores familiares”:
considerações sobre os conflitos sociais e as formas
de organização dos trabalhadores rurais brasileiros*

103

Norma Giarracca

*El “Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha”:
protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina*

129

Hubert C. de Grammont

*El Barzón, un movimiento social inserto en la transición
hacia la democracia política en México*

153

Alejandro Diez Hurtado

*Organizaciones e integración en el campo peruano
después de las políticas neoliberales*

191

Ramón Fogel

*La estructura y la coyuntura en las luchas
del movimiento campesino paraguayo*

221

Sergio Gómez

*Democratización y globalización: nuevos dilemas
para la agricultura chilena y sus organizaciones rurales*

243

Parte III
Cambios en el mundo del trabajo

Diego Piñeiro
*Población y trabajadores rurales en el contexto
de transformaciones agrarias*
269

Maria A. Moraes Silva
Reestruturação produtiva e os impactos sobre os migrantes
289

Norma Giarracca, Karina Bidaseca y Daniela Mariotti
*Trabajo, migraciones e identidades en tránsito:
los zafreiros en la actividad cañera tucumana*
307

Josefa Salete Barbosa Cavalcanti y Mónica Isabel Bendini
*Hacia una configuración de trabajadores rurales en la fruticultura
de exportación en Brasil y Argentina*
339

Sara María Lara Flores
*Análisis del mercado de trabajo rural en México,
en un contexto de flexibilización*
363

“El camino subía y bajaba: *‘Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja’*.”

– ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?

– Comala, señor.

– ¿Está seguro de que ya es Comala?

– Seguro, señor.

– ¿Y por qué esto está tan triste?

– Son los tiempos, señor.

Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre; su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno; pero jamás volvió. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver: *‘Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarillo por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche’*. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma... Mi madre”.

Juan Rulfo, “Pedro Páramo”

Prólogo

Este libro es el resultado de una serie de encuentros que durante 1998 y 1999 el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural (GTDR) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), llevó a cabo. Los encuentros se realizaron en los marcos del IX Congreso Brasileiro de Sociologia en Porto Alegre y de la XIX Asamblea General de CLACSO en Recife.

A fines de 1997, los miembros del GTDR nos habíamos reunido en Buenos Aires con el propósito de armar una agenda de trabajo para los siguientes dos años. El tema que cruzó el debate fue: ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al desarrollo rural? Se trataba de actualizar conceptos, dar sentido a los nuevos, referir a las realidades del hoy. No podíamos seguir pensando con los mismos parámetros que unas décadas atrás; pasaron muchas cosas en nuestros países y en las teorías sociales. Allí comenzó a circular el interrogante que otorga el título a este libro: ¿una nueva ruralidad en América Latina?

Las imágenes rurales de nuestros países cambiaron con tal intensidad que habilitan a pensar “una nueva ruralidad”, donde coexisten empresas de alta complejidad tecnológica, empresas que forman parte de “grupos económicos” extra-agrarios transnacionalizados, empresas del agroturismo, con mundos rurales heterogéneos con campesinos, productores medios y trabajadores rurales segmentados por los procesos de mecanización, grupos étnicos y nuevos desocupados. Todos ellos están presentes en las nuevas arenas tratando de imponer o adaptarse a las nuevas reglas del juego, resistir y organizarse para modificar gramáticas de

poder políticas, o también buscar estrategias que les permitan encontrar otros espacios territoriales que los integren (migraciones nacionales e internacionales). Se plantea, además, que en esta nueva ruralidad la producción agraria se descentró para dar lugar a territorios donde ella es sólo un elemento de un amplio abanico de aspectos a considerar (bienes simbólicos como lenguas, arte, comidas, producciones no-agrarias, servicios, etc.).

En el nuevo contexto, el “desarrollo rural” se transforma en un concepto polisémico. Para algunos factores de poder (sus especialistas y sus comunicadores) suele significar crecimiento de la productividad a costa de los recursos naturales y de la exclusión social. Otros actores son más cuidadosos e incorporan cuestiones del medioambiente. Nosotros proponemos pensarlo como una construcción social orientada a nivelar socialmente el crecimiento económico-productivo; que debe tender a la sustentabilidad y poner atención en los pactos intergeneracionales con relación a los recursos naturales así como en el respeto por las diferencias, las diversidades culturales, étnicas, de género, de religión, de edades, de formas de vida, en un contexto social de igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, vivienda y alimentación¹.

Pero desde nuestro punto de vista, en tal construcción intervienen muchos actores sociales cuyas prácticas y discursos pueden coincidir en distintos grados o pueden estar enfrentados de modo irreductible (funcionarios, políticos, organizaciones gremiales, etc.). Parafraseando a Norman Long (1992)², existe “una batalla” para otorgar sentidos a los conceptos, particularmente a aquél al cual nos referimos anteriormente, cuyos efectos se registran en programas de desarrollo con fuertes financiaciones internacionales y con fuertes repercusiones en la vida de la gente. Nosotros mismos, como especialistas en la temática, intervenimos en tal arena produciendo nuevos sentidos y marcando agendas temáticas para las próximas décadas que resultan de nuestras propias prácticas de concedores y de quienes recorren los territorios agrarios y rurales.

Como coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural, durante estos dos años conté con la colaboración invaluable (mediante el correo electrónico primero y luego con las herramientas informáticas proporcionadas por CLACSO) de un grupo de colegas latinoamericanos. Se trataba, en primer lugar, de darle forma a aquel desafío al que nos habíamos lanzado en Buenos Aires acerca de la reflexión sobre la ruralidad y sus problemas. Durante varias semanas circularon por el espacio cibernético muchos temas, ideas, debates que nos acercaban miles de aspectos a los que “las novedades” pueden estar referidas. Finalmente tomamos tres temas con los que quisimos alertar sobre la dinámica actual de los procesos agrarios y mundos rurales de nuestros países: los cambios en el trabajo rural (que

¹ Véase conclusiones del seminario sobre desarrollo rural, CLACSO, Buenos Aires, noviembre de 1997.

² Long, N. y Long, N. (1992) *Battlefields of knowledge*, (Londres: Routledge).

hace referencia a los sujetos más afectados por las políticas neoliberales); y los movimientos sociales. Por último, propusimos una reflexión que diera un marco más amplio a estos temas: el desarrollo rural entendido como proceso de cambio. Somos muy conscientes de que, como en toda decisión, quedaron afuera importantes tópicos.

Estos temas son tratados, en este libro, por prestigiosos académicos de América Latina, con diversos abordajes teóricos metodológicos y con distintos referentes empíricos. La mayoría de estos trabajos fueron presentados y discutidos en los encuentros; otros fueron solicitados por mí, con el fin de que se cubrieran distintas regiones de nuestro sub-continente.

Agradecimientos

En primer lugar quiero agradecer a los autores de este libro por el compromiso con el GTDR. En segundo lugar, a las colegas que durante los primeros meses de 1999 colaboraron con la agenda temática de los encuentros: Sara Lara de México, Edelmira Pérez de Colombia, Josefa Salette Cavalcanti de Brasil, y María Isabel Remmy de Perú. A ellas debo sumar la inestimable ayuda de los colegas más cercanos territorialmente, con los que suelo consultar acerca de las sendas a tomar para darle a esta Red un carácter plural bajo todo punto de vista. Ellos son Diego Piñeiro de Uruguay, Vicente Tavares Dos Santos y Anita Brumer, ambos de Brasil, y Sergio Gómez de Chile. Por último, agradezco a quienes me ayudan a resolver en estos territorios académicos las dudas más personales acerca de las decisiones a tomar: Miguel Teubal y Miguel Murmis.

Deseo agradecer también a todo mi equipo de investigación: el Grupo de Estudios Rurales de la Universidad de Buenos Aires, que suple con esfuerzo y voluntad las carencias institucionales que la mayoría de los universitarios latinoamericanos sufrimos. Dos de sus miembros –Karina Bidaseca y Daniela Mariotti– funcionan como facilitadoras del Campus Virtual de CLACSO, y han brindado una gran ayuda en la gestión de GTDR así como en la compilación de este libro.

Todo este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, Buenos Aires, que gestiona los recursos y marca las buenas sendas para el trabajo de los grupos. Quiero agradecer a todos ellos, y en especial a Atilio A. Boron.

El contenido del libro

El libro está dividido en tres partes con el solo fin de orientar al lector en las singularidades de cada uno de los aportes, ya que en casi todos los artículos se registra una visión amplia que permite vislumbrar tendencias de cambios y aspectos que hacen a las “nuevas ruralidades.

En la Parte I incluimos la discusión acerca del desarrollo rural con una extensa variedad de aspectos, que van desde los fuertes procesos de globalización (Miguel Teubal) hasta los posibles caminos alternativos a los conocidos (David Barkin, María N. Baudel Wanderley, Edelmira Pérez), pasando por discusiones conceptuales (Deis Siqueira y Rafael Osório).

En la Parte II incluimos los trabajos que dan cuenta del dinamismo de los actores agrarios latinoamericanos en la arena de la negociación y resistencia, en la búsqueda de nuevos derechos, o en la resistencia a la pérdida de aquellos que fundaron realidades en otras décadas. En esta parte incluimos el análisis de las organizaciones y acciones de los actores del Brasil (Leonilde Servolo de Medeiros), otro referido a un nuevo e importante actor dentro de la protesta social agraria de Argentina -el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (Norma Giarracca)-, y un trabajo referido a un actor de importancia en la América Latina de los años '90 -El Barzón (Hubert C. de Grammont)-, así como tres estudios acerca de las organizaciones rurales y sus acciones, en Paraguay (Ramón Fogel), en Chile (Sergio Gómez), y en Perú (Alejandro Diez Hurtado).

Por último, en la Parte III se presentan los trabajos que relacionan estas nuevas ruralidades con los cambios en el mundo del trabajo. Observamos aportes que desde posiciones más generales presentan fuertes relaciones con la primera parte del libro, como el de Diego Piñeiro (Uruguay) o el de Sara Lara F. (México), ú otros que abordan comparaciones intrarregionales de un mismo sector, como el de Mónica Bendini y Josefa Cavalcanti (Argentina y Brasil), y dos trabajos más específicos de cada país pero que abordan trabajadores de un mismo producto (María Moraes Silva y Giarracca, Bidaseca y Mariotti, sobre los trabajadores de la caña de azúcar en Brasil y Argentina respectivamente).

Norma Giarracca
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO

Parte I
Repensando el desarrollo rural

Hacia una nueva visión de lo rural

◀ Edelmira Pérez C. *

Introducción

Las concepciones del desarrollo rural se han ido modificando en la medida en que se percibe con mayor claridad la complejidad y diversidad de la realidad y se evidencian las restricciones y posibilidades de sus explicaciones y alcances. Por su parte, las sociedades rurales han presentado cambios estructurales, debidos en buena parte al modelo de desarrollo global. Estos cambios hacen que tengamos que ver y analizar lo rural de distinta forma y, en esta medida, que las definiciones y estrategias del desarrollo rural se adapten a dichas modificaciones.

De esta manera, el desarrollo rural se entiende hoy, en un sentido amplio, como “...un proceso de mejora del nivel del bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales...” (Ceña, 1993: 29).

A su vez, el medio rural es un conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya población desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, como la agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros. En dichas regiones o zonas hay asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales interactúan una serie de instituciones, públicas y privadas.

* Profesora titular en la Pontificia Universidad Javeriana. Directora del Departamento de Procesos Sociales y Desarrollo y de la Maestría en Desarrollo Rural.

Lo rural trasciende lo agropecuario, y mantiene nexos fuertes de intercambio con lo urbano, en la provisión no sólo de alimentos sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los espacios para el descanso, y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura.

El modelo de crecimiento y la crisis del sector rural

La idea de progreso surgida en el siglo XVIII desde la economía clásica, asociaba a éste con el camino de la civilización moderna y el reconocimiento de que la humanidad avanza del pasado al futuro mejorando, es decir, pasando de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Esta idea de progreso afianzada en el siglo XIX tiene como mira la revolución industrial. Busca hacer énfasis en los sectores más productivos, es decir los industriales, apoyando el crecimiento de dichos sectores y dejando descansar allí la absorción del empleo, y por tanto la transformación estructural. Esto conduciría a una disminución del producto y del empleo agrícola en el PIB y en el empleo total, como resultado de las diferencias de la productividad entre la agricultura y la industria.

Bajo esta concepción de progreso económico, la transformación estructural va de lo rural hacia lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, y por ende de lo atrasado a lo moderno.

Según este planteamiento, lo rural se ajusta pasivamente y en función de factores exógenos. En el plano productivo el comportamiento agrícola es residual, y depende de las demandas industriales y urbanas. Lo endógeno en el sistema es la urbanización y la industrialización; y el resultado, la modernización tanto en términos técnicos como en el sistema de ideas y valores.

Si se concibe lo rural como lo local, autárquico, cerrado, con unas pautas socioeconómicas y valores propios, una estructura social a partir de la propiedad de la tierra entendida como la territorialización de lo agrícola, se tendría como implicancias que el progreso es la absorción de lo rural, los ajustes son exógenos y pasivos, lo agrícola tiene un comportamiento residual, y las políticas de desarrollo rural significan la absorción del rezago.

Pero esta vieja visión de lo rural ya no puede sostenerse más. No se trata de atenuar la supuesta línea divisoria entre lo rural y lo urbano, ni de su equivalencia a lo atrasado y lo moderno. Es necesario visualizar un esquema de desarrollo y de cambio de la sociedad en un sentido diferente (Bejarano, 1998: 10).

Es más pertinente tratar de ver la estrecha interdependencia del mundo rural con el resto de la economía y con el medio urbano en particular. Las relaciones económicas se establecen a través de flujos comerciales de bienes agrarios y manufacturados, flujos financieros y de recursos naturales y humanos.

En las áreas urbanas se decide, a través de las fuerzas del mercado, la asignación de los recursos del medio rural, tanto los naturales para el ocio y turismo entre otros usos, como los humanos, generando movimientos migratorios hacia donde se concentran los empleos, e incluso los financieros, desviando el ahorro hacia las zonas urbanas.

Es por eso que las zonas rurales, aún las más recónditas, tienen una fuerte interdependencia con los centros urbanos más próximos, con las grandes ciudades, y hoy, en la era de la globalización, con mercados urbanos remotos. Esta situación ha llevado a algunos autores a plantear como absurda la existencia de una política sectorial para la economía rural en vez de que esté integrada en las políticas económicas generales. Esta visión predomina de manera especial en los países miembros de la Unión Europea, en donde el impacto de la política agrícola ha tenido efectos diversos, por factores como la reducción de barreras arancelarias y la intensificación de la interdependencia internacional.

Varios autores europeos plantean la necesidad de un nuevo enfoque para resolver los problemas que aquejan al medio rural, en especial sus interrelaciones con lo urbano, destacando su papel en la contribución al bienestar para el conjunto de la sociedad y modificando la visión de una importancia secundaria en el crecimiento general de la economía que se le venía asignando.

En los países en vía de desarrollo se viene impulsando también una revalorización de lo rural, tratando de superar la dicotomía entre sector agropecuario y rural, y el papel marginal que se le asigna al sector rural en el desarrollo.

Es necesario romper el estrecho paradigma económico en el que se ha situado al papel del sector rural, y trasladarlo al contexto de la política y las instituciones.

Se reconoce también en varios países que el manejo de la vieja concepción de lo rural como lo atrasado y el énfasis puesto en los procesos de industrialización, han generado en estos países crisis de magnitudes impredecibles, con el aumento de la pobreza, el desempleo, la generación o agudización de conflictos por la tierra, y procesos de luchas internas con características de guerra como es el caso actual en Colombia.

El ordenamiento del territorio, la integración nacional, el restablecimiento de condiciones de convivencia en el campo, el fortalecimiento de la democracia participativa, el capital social y político, deben ser el fundamento de una estrategia humana de desarrollo que tome como eje al sector rural. Sólo así el desarrollo rural podrá mejorar el nivel de bienestar de la población rural y contribuir al bienestar de la población en general, sea ésta urbana o rural.

El medio rural ha experimentado cambios muy importantes en los últimos cuarenta años, en los distintos continentes y con efectos muy diversos por región y por país. Pero puede hablarse en términos generales de tres grandes cambios:

- a) Demográficos: como resultado del éxodo masivo en los años sesenta y setenta, tanto en Europa como en América, y el fenómeno de la “contra-urbanización” en algunos países europeos en los años setenta.
- b) Económicos: que se originan por el declive de la agricultura y, en algunos países, por la nueva visión que el mundo urbano tiene del medio rural, que ha dado lugar a una mayor diversificación.
- c) Institucionales: debido a la descentralización política que pretende dar mayor poder a lo local y lo regional, obviamente con desarrollos desiguales en los distintos países y continentes, y a la supra-nacionalización de la política agraria, de manera especial en la Unión Europea (Ceña, 1993: 30).

Como principales causas de estos cambios se pueden señalar, entre otras, el declive de la agricultura y la intensa urbanización.

Respecto de la primera, es indudable que en vastas regiones del mundo rural se ha presentado una disminución drástica tanto en la población empleada como en la participación en el PIB nacional. Todo ello debido al modelo de industrialización que condujo a acelerar los procesos de urbanización y el desarrollo tecnológico, ahorrador de mano de obra mediante capital mecánico y ahorrador de tierra mediante el uso de capital químico y biológico.

Las aglomeraciones económicas que caracterizan al modelo de industrialización de los países comunitarios europeos en las primeras décadas del desarrollo generan una intensa urbanización y un despoblamiento masivo de grandes áreas rurales. Dicho modelo fue seguido en países latinoamericanos, aunque en muchos de ellos la población rural sigue siendo un porcentaje importante de la población total. Como ejemplo tenemos a Perú, México, Brasil y Colombia, en donde las capitales concentran a buena parte de la población.

Hoy en día se están desarrollando estrategias que modifiquen este flujo poblacional, pero aún en Europa el sector rural sigue perdiendo población debido a factores como agotamiento del suelo, cambios en las políticas agrícolas, concentración urbana de actividades económicas, posibilidades de colectividad y acceso a servicios, etc. Las regiones periféricas y montañosas siguen conservando parte de la población rural, pero son las que tienen menor potencialidad económica por el grado de alejamiento y la diseminación de la población.

No todas las zonas rurales son periféricas aunque la mayoría de los problemas rurales se asientan en dichas zonas, como es el caso de las zonas mediterráneas en Europa, y de los países latinoamericanos.

El mundo rural se encuentra ante una difícil conjunción de problemas que se manifiesta en la perplejidad con que afrontan el futuro los agentes sociales que intervienen en su gestión.

Algunas manifestaciones son:

- Crisis de la producción y orientación: hoy en día el agricultor se debate entre la necesidad de asegurar la manutención de su familia, la competitividad comercial y la diversidad de orientaciones que recibe, lo cual aumenta sus dificultades para la toma de decisiones tanto de tipo productivo como de articulación al mercado.
- Crisis de población y poblamiento: la población está desmotivada y en la mayoría de las zonas envejecida, aún en los países subdesarrollados. La decadencia de lo rural frente a lo urbano ha propiciado un desprestigio social de las actividades agrícolas, que ocasiona su abandono y dificulta la incorporación y retención de los jóvenes en el campo.
- Crisis de las formas de gestión tradicionales: el agricultor, habituado a tomar por sí mismo las decisiones sobre qué, cómo y cuánto producir con el simple recurso de la intuición y la imitación, depende ahora más que nunca de las políticas nacionales e internacionales, de las señales del mercado y de la competitividad empresarial.
- Crisis en el manejo de los recursos ambientales: la deforestación sufrida, la contaminación del suelo, la erosión, el despilfarro y sobreexplotación del agua, la penetración urbana (población e industrias), son problemas cuyo tratamiento y solución sólo se pueden abordar teniendo en cuenta la presencia del agricultor en el medio rural.
- Crisis de las formas tradicionales de articulación social: el papel jugado por muchas instituciones del mundo rural ha entrado en crisis o ha cambiado en forma significativa, y la búsqueda de las nuevas funciones genera conflictos de competencia y vacíos de poder (Ramos y Romero, 1993: 18-19).

Así, todo el modelo de sociedad rural está en crisis, pues aún no comprende su papel actual y sus nuevas funciones, y así no sólo pierde su identidad sino también su población, sus modelos de organización y muchas de sus actividades.

Mientras que en los países de Europa occidental no es previsible un futuro con escasez de alimentos, en las poblaciones de determinadas regiones del planeta se presenta un crecimiento demográfico muy rápido, lo que provoca desequilibrios cada vez más importantes en la situación alimentaria mundial. Por tanto, los países en vías de desarrollo reclamarán, cada vez con más fuerza, su derecho a su porción de la riqueza mundial, y se hará necesario que tengan la posibilidad de desarrollar un sector agrario propio.

Por todo ello, es evidente que la agricultura del futuro se verá obligada a enfrentarse con la tarea de satisfacer nuevas funciones en la sociedad y en la economía. Los conceptos agrarios existentes ya no bastan para hacer frente a las demandas de hoy día. La sociedad post-industrial se ve en la necesidad de lograr un

equilibrio entre su capacidad de producción y las posibilidades de los mercados, asignando al mundo rural nuevas funciones y tareas.

Nueva concepción de lo rural

Como ya se ha dicho, la nueva visión de lo rural no va de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Hay más bien un buen número de características que muestran la multi-direccionalidad del proceso, sobre las cuales hay múltiples evidencias, en diferentes países, con distintos grados de desarrollo. Vale la pena destacar la pérdida relativa de la significación económica y social de los sectores primario y secundario, y la evidente terciarización de lo rural. Esta evidencia es más clara en Europa por la complejidad de las actividades agrícolas y las tendencias a la concentración y la especialización. En América Latina, esa tendencia va en aumento, y sobre todo es una meta puesta por el nuevo modelo de desarrollo. Es claro entonces que lo rural ya no es equivalente a lo agrícola, y al mismo tiempo que la llamada tercera revolución agrícola implica que lo agrícola no sea exclusivamente la producción primaria. Todo esto conduce a la desagrarización de la actividad productiva, en especial desde el punto de vista de los requerimientos de la población empleada.

La agricultura comprenderá una amplia serie de usos de la tierra, que va desde producciones agrícolas de uso no alimentario hasta el mantenimiento del medio ambiente. Por otro lado se acentúa la especialización territorial en función de la existencia de ventajas competitivas, y se acrecienta la dependencia de la actividad agrícola de las empresas industriales y de distribución.

Otro factor importante es que las comunidades rurales, como se entendían antes, están siendo socavadas y debilitadas en sus solidaridades colectivas. Todo ello debido a factores de desintegración territorial y de desintegración social. Fenómenos como los desplazamientos forzosos por problemas de violencia o fenómenos naturales, en varios países latinoamericanos, son sólo una muestra de esto.

Aunque en muchas regiones persisten los conflictos por la falta de equidad en la distribución y acceso a la tierra, también es claro que el nuevo modelo va imponiendo formas diferentes de acceso, dándole un mayor papel al capital en el crecimiento agrícola y a la incorporación de la propiedad financiera o industrial en las áreas rurales y en las actividades agropecuarias.

Seguramente se presentará, como de hecho ya está ocurriendo, un cambio importante en las demandas colectivas de lo rural, que van más allá de la sola tensión por la propiedad raíz. La población reclama ahora servicios básicos y mecanismos de participación, por ejemplo.

Otro elemento importante es la acentuación de los desequilibrios territoriales, y una mayor importancia política de dichos desequilibrios. Esto ocurre de distintas maneras al interior de cada país, y se acentúa en las relaciones norte-sur.

Este conjunto de hechos implica la necesidad de recomponer o elaborar una visión que permita por fin esclarecer que lo rural no es exclusivamente lo agrícola, ni lo atrasado, ni la sola expresión de la producción primaria. Acogeríamos entonces la siguiente definición: el medio rural es entendido como “...el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados...” (Ceña, 1993: 29).

Además de las actividades citadas, están también la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo. El medio rural es entonces una entidad socioeconómica en un espacio geográfico con cuatro componentes básicos:

- “...Un *territorio* que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas.
- Una *población* que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un entramado socioeconómico complejo.
- Un *conjunto de asentamientos* que se relacionan entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de canales de relación.
- Un *conjunto de instituciones públicas y privadas* que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico determinado...” (Ramos y Romero, 1993: 17).

De estas dos definiciones surgen varios elementos importantes:

- El concepto de desarrollo, aunque sigue marcado por su equivalencia con la acumulación, la industrialización y el consumo, ha estado cuestionado por el reto de la equidad. El desarrollo rural, en particular, debe buscar la equidad territorial, de género y social, en el acceso a bienes, servicios y demás beneficios del desarrollo. La equidad es una meta que en los albores del siglo XXI está aún muy distante, ya que los procesos de concentración de la riqueza y de los medios de producción siguen siendo factores que prevalecen. Por ello, en la raíz de lo que se puede considerar como desarrollo, está la comprensión de lo que es la pobreza como su antítesis. Dicho de otra manera, la persistencia de la pobreza “...es un desafío al modelo general de desarrollo y el mayor condicionante a la construcción de una sociedad rural estable...” (Echeverri y Ribero, 1998: 20).
- La medición y valoración que se haga de lo que es la pobreza exige salir de los esquemas estrechos de la producción, el empleo y el ingreso, como indicadores que se comparan con estándares provenientes de otras latitudes, otros procesos históricos y culturales, y otra posición en la correlación de fuerzas

económicas y políticas en el mundo. Se hace necesario, entonces, asumir pobreza y desarrollo como conceptos relativos, puesto que "...sólo una visión de complementariedad entre la inversión social y el desarrollo productivo podrá redundar en la reducción de los niveles de pobreza y el logro de la justicia social..." (Echeverri y Ribero, 1998: 20).

En la actualidad, los problemas que afectan a los habitantes urbanos, los problemas del territorio y las zonas rurales, son objeto de atención general y llevan a buscar unas nuevas funciones a los espacios rurales que se constituyan en una vía posible a su reequilibrio y desarrollo. Destacamos las siguientes:

- Equilibrio territorial, para contrarrestar los efectos del despoblamiento, que han sido inducidos por las políticas orientadas a la concentración urbana y por fenómenos como la violencia en varios países.
- Equilibrio ecológico, en cuanto conservador de ecosistemas y a la producción de paisaje de calidad, abierto y natural.
- Producción de agua limpia y conservación de sus fuentes.
- Espacio para actividades de esparcimiento y recreo al aire libre que, cada vez más, están ampliamente demandadas por los habitantes urbanos.
- Usos agrarios no alimentarios como, por ejemplo, la producción de fibras textiles, la obtención de productos energéticos y de recursos minerales en general.
- Sumidero de contaminantes del aire, del agua y del suelo.

Las nuevas demandas sociales ponen en manos de los habitantes de las zonas rurales la posibilidad de conducir su futuro por una senda inédita pero posible. Mientras estas funciones constituyen la oportunidad para superar la crisis y encontrar una nueva posición en la distribución de roles en la sociedad, el reto estriba en superar el rechazo de una gran parte de la población rural a abandonar o modificar sus actividades históricas.

Paralelamente, la población urbana debe entender que ha de modificar sus pautas de consumo aceptando pagar adecuadamente ciertos servicios que le presta el mundo rural, y que hasta ahora se habían considerado "bienes libres".

Para plantear el nuevo modelo de relaciones entre el mundo rural y el mundo urbano, es necesario redefinir los papeles de cada uno de estos ámbitos llegando a formular un nuevo "contrato social" entre ellos, según plantea el grupo de Seillac. Mediante este contrato, la sociedad moderna debe reconocer y asumir la necesaria interdependencia de las áreas rurales y urbanas; definir explícitamente el decisivo papel del mundo rural y dotarlo de instrumentos adecuados de desarrollo (Ramos y Romero, 1993: 21).

La revalorización de lo rural

La revalorización de lo rural parte del supuesto de que no sólo existe, sino de que es de suma importancia para la sociedad y la economía en su conjunto. La revalorización más importante sería, entonces, la cultural: la visión de *lo rural como una nueva, aceptable y mejor alternativa de vida*. Es así como se están mirando las cosas en los países industrializados de Europa y en los Estados Unidos. Algunos países latinoamericanos empiezan a abordar de ese modo la revalorización de lo rural, pero subsisten problemas estructurales y coyunturales que falseen esta interpretación, dándosele una visión más romántica y bucólica.

En muchos países de diversas culturas se está mirando lo rural como una nueva alternativa de vida. Los desarrollos en los diferentes países son desiguales, pero ya hay abundante literatura sobre este asunto. En buena medida hay una tendencia en Europa a ruralizar las comunidades urbanas y el empleo. En algunas sociedades latinoamericanas también se presentan procesos de ruralización, pero por razones distintas y con manifestaciones diferentes también. Buena parte de la población urbana de nuestras grandes ciudades deriva sus ingresos de actividades relacionadas con el sector rural, y su modo de vida sigue manteniendo los esquemas rurales y gran parte de sus valores también.

Entre las justificaciones económicas vale la pena destacar la contribución no sólo de las actividades agrícolas, sino de las rurales en su conjunto, al crecimiento global. En este punto es de gran trascendencia la producción de servicios ambientales.

Es también muy importante la contribución de lo rural al desarrollo sostenible, al empleo, a la reducción de la pobreza, y por tanto al crecimiento económico. No puede seguirse sosteniendo entonces que lo rural y lo agrícola son una carga para el desarrollo económico. Así lo suponían las teorías residuales de la economía agrícola, y sobre todo los modelos duales. Más bien, es necesaria su consideración como factores dinámicos del crecimiento global.

Pero hace falta también una revalorización sociopolítica de lo rural. Hay que partir de la transformación de las viejas estructuras de poder local y formas de dominación como efecto parcial de las reformas constitucionales y de los procesos de descentralización desarrollados como parte del modelo global. Otro aspecto es el cambio de la dicotomía rural-urbana por la dicotomía local-global. Parece ser que éste es el enfoque predominante, aunque aún persisten dificultades de articulación entre lo local, lo regional y lo global.

Un tercer elemento es el cambio en las demandas colectivas. Aunque en los países latinoamericanos y del tercer mundo en general persisten las demandas por tierra y demás bienes para las unidades productivas, es cada vez más claro que las demandas colectivas se enfocan hacia la exigencia de servicios, infraestructura y participación en la sociedad civil, es decir, reconstrucción de redes locales y pro-

pósitos colectivos relacionados con servicios públicos, lo cual cambia la dinámica de las sociedades rurales y genera demandas distintas al Estado.

De una manera especial se busca, en Europa principalmente, articular respuestas locales a los fenómenos de inseguridad e incertidumbre generados por el derrumbe del estado de bienestar, y buscar el fortalecimiento de comunidades locales y redes de estructura rural que permitan asumir el riesgo.

La revalorización de lo rural desde el punto de vista cultural lleva a pensar en la ruralización en funciones de las condiciones ambientales, la ruralización de las comunidades urbanas, y la búsqueda de formas de vida alternativa (Bejarano, 1998: 13).

Lo rural en Colombia

En los umbrales del siglo XXI, Colombia es un país con una población cercana a los cuarenta millones de personas, equivalente al 7,2% del total de habitantes de toda América Latina. Con una tasa de crecimiento demográfico equivalente al 1,58%, registrada para la década 1990-2000. El país concentra el 69% de su población en áreas urbanas.

El número de habitantes rurales (definidos en el censo poblacional como los que no viven en las “cabeceras municipales”) ha tenido un aumento en términos absolutos, entre 1973 y 1993, al pasar de 9.300.000 a 11.800.000 aproximadamente, aunque su participación porcentual en el total de la población cayó de 41% al 31%. Si el concepto de rural se extiende a aquellas localidades con una población menor a 10.000 habitantes en la cabecera municipal, se tiene que la población rural llega al 42% del total (trece millones), lo que le imprime al país un carácter más rural de lo que se estima usualmente.

Este cambio estructural en la población colombiana ha estado ligado a modificaciones en la estructura económica y social, y al imperio de relaciones de poder que han determinado el curso de la acción del Estado en lo político, especialmente durante la segunda mitad del presente siglo. Desde esta época, en virtud del modelo endógeno de industrialización, se van forjando las condiciones económicas y sociales que van a diferenciar marcadamente los espacios urbanos y rurales, y que de algún modo van a motivar los múltiples conflictos que se ciernen hoy sobre el país.

El sector rural ingresa a la modernización en los años cincuenta, basado en una estructura bimodal soportada por un lado sobre un modelo empresarial altamente protegido, originado en el latifundio y especializado en la oferta de materias primas agroindustriales, en su mayoría de carácter transitorio; y por otro en la permanencia de un alto número de unidades familiares campesinas, ubicadas en las zonas de ladera y dedicadas al suministro de bienes-salario para los sectores urbanos.

Este tipo de desarrollo agropecuario, exitoso en lo económico dentro del modelo proteccionista vigente hasta la década del noventa, fue causa de las asimetrías sociales incubadas en el área rural y del rechazo tecnológico dominante en la esfera productiva. La política de protección del Estado dio origen a un modelo altamente inestable, inequitativo en la asignación de los recursos estatales, y poco competitivo en el mercado internacional. Fuera del café, sólo las flores y el banano lograron sobrevivir a las medidas de apertura aplicadas desde 1990. Además, el modelo proteccionista generó ampliación de la frontera agrícola y migraciones del campo a la ciudad.

Las economías campesinas, por su parte, aumentaron su participación en la oferta alimentaria, ingresaron en los circuitos económicos agroindustriales, y adaptaron sus estructuras productivas y técnicas a los requerimientos de los mercados agropecuarios. Las políticas del Estado para este sector se apoyaron básicamente en las estrategias de Desarrollo Rural Integrado (DRI) y en los recursos de la banca multilateral. Frente al ajuste estructural, las economías de los campesinos ampliaron su participación dentro de los productos no exportables y buscaron adaptarse a las medidas de reconversión productiva, pero el avance de los indicadores sociales fue lento.

Frente a los nuevos desafíos que impone el proceso de globalización, el sector rural acusa serias restricciones para acceder a las corrientes de transformación: la persistencia de una estructura pétrea de la propiedad que genera subutilización de los factores productivos y falta de equidad social, el rezago tecnológico, la deficiente infraestructura, y el carácter insostenible de la producción agropecuaria, que impiden la vinculación a los mercados internacionales. La pobreza que afecta a más de la mitad de la población rural, y la crudeza del conflicto armado, son factores que deben ser asumidos de manera contundente para ingresar al nuevo milenio con otra perspectiva.

Las reformas macroeconómicas de los últimos años se han venido aplicando con un balance muy preocupante en lo social. La reactivación del sector agropecuario permanece aplazada, y los impactos sobre el bienestar apenas son registrados por los indicadores sociales. Lo cierto es que la crisis afecta de manera profunda a la sociedad colombiana en su conjunto. El aumento del desempleo urbano, el estancamiento de la economía en los dos últimos años, la crisis del sistema financiero, y la lenta recuperación de las exportaciones, son síntomas del carácter incompleto que tuvieron muchas de las reformas impulsadas, y del fuerte acento puesto en las variables monetarias y cambiarias.

Precisamente, el desconocimiento y omisión de los componentes institucionales y del nuevo rol asignado en el nuevo modelo, relegaron a un segundo plano la tarea de construir un marco institucional que estuviese de acuerdo con los objetivos de liberación de mercados, la articulación al nuevo orden internacional de la globalización y la participación de la sociedad civil en la toma de decisio-

nes. La necesidad de construir un capital institucional surge entonces como un imperativo para estos tiempos de crisis, donde es preciso incorporar de manera creativa al país en el concierto internacional.

La complejidad del desarrollo del país, determinado por la dimensión y naturaleza del conflicto armado, la escasa participación democrática, la incidencia de fenómenos como el narcotráfico, y el aplazamiento de reformas estructurales en el sector rural, demanda un mayor esfuerzo de comprensión y análisis, y sobre todo un proceso intenso de diseño y concentración institucional que no sea excluyente ni accesorio (Pérez *et al*, 2000: 25).

Bibliografía

- Bejarano, Jesús Antonio 1998 “El concepto de lo rural: ¿Qué hay de nuevo?”, en *Revista Nacional de Agricultura* (Santafé de Bogotá) N° 922 – 923.
- Ceña, Felisa 1993 “El desarrollo rural en sentido amplio”, en *El Desarrollo Rural Andaluz a las Puertas del siglo XXI. Congresos y Jornadas* (Andalucía, España) N° 32.
- Echeverri, Rafael y Ribero, María del Pilar 1998 “Hacia un nuevo sentido del desarrollo: una visión desde lo rural”, en *Misión Rural: Transición, Convivencia y Sostenibilidad* (Santafé de Bogotá: IICA - Departamento Nacional de Planeación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tercer Mundo Editores) Documentos de Trabajo. Versión Preliminar.
- Pérez, Edelmira 1998 “Una visión del Desarrollo rural en Colombia”, en *Cuadernos de Desarrollo Rural* (Santafé de Bogotá) N° 41.
- Pérez, Edelmira y Farah, María Adelaida 1998 “Género y Desarrollo Rural: De lo invisible a lo visible”, en *Equidad, Género y Desarrollo* (Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores).
- Pérez, Edelmira y Farah, María Adelaida 1999 *Descentralización, Municipio y Desarrollo Rural. Retos para la participación ciudadana* (Santafé de Bogotá) Serie IER-20 Años.
- Pérez, Edelmira *et al* 2000 *Reconstruir la confianza en Colombia: Nueva institucionalidad en el sector rural* (Bogota: Javegraf).
- Ramos R. Eduardo y Romero, José Juan 1993 “La crisis del modelo de crecimiento y las nuevas funciones del medio rural”, en *El Desarrollo Rural Andaluz a las Puertas del siglo XXI. Congresos y Jornadas* (Andalucía, España).

A ruralidade no Brasil moderno. Por um pacto social pelo desenvolvimento rural

— Maria de Nazareth Baudel Wanderley*

Introdução

A sociedade brasileira parece ter hoje um olhar novo sobre o meio rural. Visto sempre como a fonte de problemas –desenraizamento, miséria, isolamento, currais eleitorais etc– surgem, aqui e ali, indícios de que o meio rural é percebido igualmente como portador de “soluções”. Esta percepção positiva crescente, real ou imaginária, encontra no meio rural alternativas para o problema do emprego (reivindicação pela terra, inclusive dos que dela haviam sido expulsos), para a melhoria da qualidade de vida, através de contatos mais diretos e intensos com a natureza, de forma intermitente (turismo rural) ou permanente (residência rural) e através do aprofundamento de relações sociais mais pessoais, tidas como predominantes entre os habitantes do campo.

A ruralidade, o desenvolvimento rural, o desenvolvimento local no Brasil moderno são hoje temas em debate na comunidade acadêmica, entre militantes de movimentos e organizações sociais e entre responsáveis pelas políticas públicas voltadas para a agricultura e o meio rural.

No presente trabalho, gostaria de propor algumas idéias centrais que norteiam minha percepção sobre esta problemática. Não terei condições, certamente, de desenvolver cada uma delas, porém as formulo enquanto *hipóteses de trabalho*, sob a forma de tópicos, que estão sendo desenvolvidas em minha pesquisa atual.

* Professora Visitante na UFPE. Bolsista do CNPq.

O rural permanece nas sociedades modernas, como um espaço específico e diferenciado

Quando estou falando de mundo rural, refiro-me a um universo socialmente integrado ao conjunto da sociedade brasileira e ao contexto atual das relações internacionais. Não estou, portanto, supondo a existência de um qualquer universo isolado, autônomo em relação ao conjunto da sociedade e que tenha lógicas exclusivas de funcionamento e reprodução. Porém, considero que este mundo rural mantém particularidades históricas, sociais, culturais e ecológicas, que o recortam como uma realidade própria, da qual fazem parte, inclusive, as próprias formas de inserção na sociedade que o engloba.

Este mundo rural se move em um espaço específico, o espaço rural, entendido em sua dupla face. Em primeiro lugar, enquanto um espaço físico diferenciado. Faz-se, aqui, referência à construção social do espaço rural, resultante especialmente da ocupação do território, das formas de dominação social que tem como base material a estrutura de posse e uso da terra e outros recursos naturais, como a água, da conservação e uso social das paisagens naturais e construídas e das relações campo-cidade. Em segundo lugar, enquanto um lugar de vida, isto é, lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e referência “identitária”) e lugar de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção na sociedade nacional). Dada a grande diversidade de situações encontradas no meio rural, considero de grande necessidade e urgência a elaboração de tipologias que evitem generalizações precipitadas e que, ao mesmo tempo, consiga articular os diversos “tipos” observados em um quadro geral de análise.

O continuum rural-urbano expressa as relações entre dois pólos que se interrelacionam

O fim do isolamento entre as cidades e o meio rural é frequentemente expresso através do conceito de continuum rural-urbano. Este conceito –tanto quanto o de urbanização do campo– é utilizado em duas vertentes principais. A primeira delas corresponde a uma visão “urbano-centrada” (Rambaud, 1973), que privilegia o pólo urbano do continuum como a fonte do progresso e dos valores dominantes que se impõem ao conjunto da sociedade. O extremo rural do continuum, visto como o pólo atrasado, tenderia a reduzir-se sob a influência avassaladora do pólo urbano, desenvolvido, num movimento que Elena Sarraceno comparou ao de “vasos comunicantes, em que, quase por definição, um só –o urbano– se “enchia”, enquanto o outro –o rural– só podia, conseqüentemente, esvaziar-se” (1996). Levada às últimas conseqüências, esta vertente das teorias da urbanização do campo e do continuum rural-urbano apontam para um processo de homogeneização espacial e social, que se traduziria por uma crescente perda de

nitidez das fronteiras entre os dois espaços sociais e, sobretudo, o fim da própria realidade rural, espacial e socialmente distinta da realidade urbana.

A segunda vertente, ao contrário da primeira, considera o continuum rural-urbano como uma relação que aproxima e integra dois pólos extremos. Nesta segunda perspectiva, a hipótese central é de que, mesmo ressaltando-se as semelhanças entre os dois extremos e a continuidade entre o rural e o urbano, as relações entre o campo e a cidade não destroem as particularidades dos dois pólos e, por conseguinte, não representam o fim do rural; o continuum se desenha entre um polo urbano e um polo rural, distintos entre si e em intenso processo de mudança em suas relações.

A afirmação da permanência do rural, enquanto espaço integrado, porém específico e diferenciado, é reforçada quando se leva em conta as representações sociais a respeito do meio rural. Considero particularmente fértil, nesta reflexão, a idéia de que, mesmo quando se atinge uma certa homogeneidade, no que se refere aos modos de vida e à chamada “paridade social”, as representações sociais dos espaços rurais e urbanos reiteram diferenças significativas, que têm repercussão direta sobre as identidades sociais, os direitos e as posições sociais de indivíduos e grupos, tanto no campo quanto na cidade. O que parece mais importante a registrar é que estas diferenças se dão não mais ao nível do acesso aos bens materiais e sociais, que seriam, então, de uma certa forma, similarmente distribuídos entre os habitantes do campo ou da cidade, nem mesmo no que se refere ao modo de vida de uns e de outros. As diferenças vão se manifestar no plano das “identificações e das reivindicações na vida cotidiana”, de forma que o “rural” se torna um “ator coletivo”, constituído a partir de uma referência espacial e “inserido num campo ampliado de trocas sociais”.

É importante observar que esta abordagem sobre a pertinência do recorte campo-cidade, como forma de apreender as diferenças espaciais e sociais nas sociedades modernas, se enriquece hoje no novo contexto gerado pelos processos de globalização/mundialização e o pós-fordismo. Com efeito, a revalorização dos espaços locais, a capacidade de organização e de pressão revelada pelos movimentos sociais que se reclamam do “rural” e do “agrícola” –particularmente na Europa e os próprios impactos das políticas públicas, nacionais e macroregionais sobre os espaços rurais– reiteram a existência do rural, como espaço específico e como ator coletivo.

O espaço local é, por excelência, o lugar da convergência entre o rural e o urbano; um programa de desenvolvimento local não substitui o desenvolvimento rural, mas o incorpora como parte integrante

O espaço local é, de fato, o lugar do encontro entre estes dois “mundos”. Porém, nele, as particularidades de cada um não são anuladas, ao contrário são a fonte da integração e da cooperação, tanto quanto das tensões e dos conflitos. O que resulta desta aproximação não é a diluição de um dos pólos do continuum,

mas a configuração de uma rede de relações recíprocas, em múltiplos planos que, sob muitos aspectos, reitera e viabiliza as particularidades. É esta complexidade que constitui, precisamente, o objeto dos estudos rurais. Considero extremamente enriquecedora desta formulação, a pesquisa de Carlos Rodrigues Brandão sobre o município de São Luís de Paraitinga, São Paulo, na qual o autor expõe a forma como compreende as relações entre o que chama os “lugares da vida”: o sertão, o sítio, o bairro, a vila e a cidade (1995)¹.

Se a vida local é o resultado do encontro entre o rural e o urbano, o desenvolvimento local, entendido como o processo de valorização do potencial econômico, social e cultural da sociedade local, não pode supor o fim do rural. Neste sentido, é importante precisar que o desenvolvimento local será tanto mais abrangente e eficaz quanto for capaz de incorporar e valorizar o potencial de forças sociais para o desenvolvimento presentes no meio rural local, isto é, incorporar o próprio desenvolvimento rural. A perspectiva proposta por Ricardo Abramovay, sobre esta questão me parece de grande pertinência (1998). Não se trata, portanto, de substituir uma categoria pela outra.

O pequeno município é parte integrante do mundo rural

No Brasil, parcela significativa da população rural vive nas zonas rurais dos pequenos municípios. Este fato é evidente no Nordeste, onde 40,3% da população rural se encontram nos municípios com até 20 mil habitantes (78,9%, no conjunto dos municípios com até 50 mil habitantes). Embora em proporções menores, o mesmo ocorre em São Paulo, onde 31,9% da população rural vive em municípios com até 20 mil habitantes (52,7% no conjunto dos municípios com até 50 mil habitantes).

Apesar desta semelhança – seria necessário verificar este mesmo processo em outros Estados – observa-se que existem duas formas distintas de ocupação do espaço municipal. A população paulista dos pequenos municípios é minoritária, em relação ao conjunto do Estado – apenas 19,4% vivem nos municípios com até 50 mil habitantes (8,8% naqueles cuja população não ultrapassa os 20 mil habitantes). Além disso, ela se encontra sobretudo nas sedes municipais, sendo, portanto, segundo os critérios do IBGE, uma população urbana. De fato, da população dos municípios com até 20 mil habitantes apenas 25% vivem no meio rural, proporção que atinge 38,6%, se se considera o conjunto dos municípios com até 50 mil habitantes.

Ao contrário do que acontece em São Paulo, na região nordestina os pequenos municípios abrigam a maioria da população da região. De fato, 50,6% dos nordestinos vivem em municípios com até 50 mil habitantes. Além disso, mais da metade da população destes municípios é constituída pela população rural: 57,7%, no caso dos municípios com até 20 mil habitantes e 51%, nos municípios entre 20 mil e 50 mil. A tabela abaixo sintetiza estes dados:

Tabela 1

**1996. São Paulo. População dos pequenos Municípios
(Até 50 mil habitantes)**

	Municípios com até 20 mil habitantes (A)	Municípios entre 20 mil e 50 mil habitantes (B)	Municípios com até 50 mil habitantes (A+ B)
População total	3.008.256	3.611.994	6.620.250
% sobre a população total do Estado	8,8	10,6	19,4
População rural	750.892	490.596	1.241.488
% da população rural sobre a população rural total do Estado	31,9	20,8	52,7
% da população rural sobre a população total da categoria de municípios considerada	25,0	13,6	38,6

Fonte: Cálculos a partir de: IBGE. "Contagem da população". 1996.

Tabela 2

**1996. Nordeste. População dos pequenos Municípios
(Até 50 mil habitantes)**

	Municípios com até 20 mil habitantes (A)	Municípios entre 20 mil e 50 mil habitantes (B)	Municípios com até 50 mil habitantes (A+ B)
População total da categoria de municípios considerada	10.875.895	11.775.784	22.651.679
% sobre a população total da região	24,3	26,3	50,6
População rural	6.274.892	6.010.283	12.285.175
% da população rural sobre a população rural total da região	40,3	38,6	78,9
% da população rural sobre a população total da categoria de municípios considerada	57,7	51,0	54,2

Fonte: Cálculos a partir de: IBGE. "Contagem da população". 1996.

A pequena dimensão dos municípios e sua estreita dependência do mundo rural é um fato reconhecido no processo de urbanização nacional em seu conjunto e os estudiosos da cidade a ele se referem com termos extremamente expressivos, entre os quais: “vida urbana morta” (Florestan Fernandes); “municípios semi-rurais” (Juarez R. Brandão Lopes); “cidades não urbanas” (Vilmar Faria). A fronteira entre estes espaços e o espaço propriamente urbano também é vista de forma diversa. George Martine, por exemplo, estabelece como limite, o patamar da população total não inferior a 20 mil habitantes, enquanto Vilmar Faria propõe uma definição ainda mais restrita da população urbana, correspondendo às “pessoas vivendo nas sedes urbanas dos municípios”, ao mesmo tempo que considera cidades, apenas “as sedes municipais com mais de 20 mil habitantes.”

Estes dados apontam para um importante campo de reflexão a respeito das particularidades da urbanização nos pequenos municípios, e neles, as relações campo-cidade que me parece ainda pouco desenvolvida entre nós.

A grande propriedade patronal no Brasil está na origem de uma “ruralidade dos espaços vazios”

Um meio rural dinâmico supõe a existência de uma população que faça dele um lugar de vida e de trabalho e não apenas um campo de investimento ou uma reserva de valor. A perda de vitalidade dos espaços rurais, que gera o que se pode chamar a “questão rural” na atualidade, emerge precisamente, quando se ampliam no meio rural os espaços socialmente vazios. Na maioria dos países considerados de capitalismo avançado, isto vem acontecendo onde a população rural, particularmente a sua parcela que é vinculada à atividade agrícola, tem a constituição ou a reprodução do seu patrimônio ameaçado e onde as condições de vida dos que vivem no campo, sejam ou não agricultores, não asseguram a “paridade” socio-econômica em relação à população urbana, ou, pelo menos a redução da distância social entre os cidadãos rurais e urbanos.

No Brasil, os espaços vazios são, antes de mais nada, a consequência direta da predominância da grande propriedade patronal. Para perceber a significação deste processo basta considerar a dimensão das áreas “improdutivas”, associada à quantidade de trabalhadores agrícolas, antes residentes nas grandes fazendas, que foram expulsos do campo nas últimas décadas. O grau de influência da grande propriedade patronal sobre a dinâmica da vida local poderia ser utilizado como uma das variáveis a considerar para a elaboração de uma tipologia dos espaços rurais.

Se a estrutura fundiária inibe o acesso à terra a uma grande maioria dos que trabalham na agricultura, também explica o fato de que o Brasil esteja longe de ter atingido qualquer meta aproximativa de paridade social. A população rural ainda é a principal vítima da pobreza, do isolamento e da submissão política².

No Brasil, os agricultores familiares constituem parcela importante e significativa da população rural

Desenvolve-se hoje, sobretudo no meio acadêmico, importantes pesquisas que tentam e compreendem a importância e o significado da agricultura e dos agricultores no meio rural. Penso que, além da mensuração dos dados disponíveis, deve-se ressaltar, igualmente, a significação da família dos agricultores para o meio rural, sejam ou não, eles, a maioria da população.

Pode-se formular, a este respeito, a hipótese de que parte significativa da diversificação econômica e da pluriatividade tem origem nas famílias agrícolas. A pluriatividade, neste sentido, não constitui, necessariamente, um processo de abandono da agricultura e do meio rural. Frequentemente –e diria mesmo, cada vez mais– a pluriatividade expressa uma estratégia familiar adotada, quando as condições o permitem, para garantir a permanência no meio rural e os vínculos mais estreitos com o patrimônio familiar.

Estas famílias, pluriativas ou não, são depositárias de uma cultura, cuja reprodução é necessária para a dinamização técnico-econômica, ambiental e sociocultural do meio rural. Da mesma forma, o “lugar” da família, isto é, o patrimônio fundiário familiar constitui um elemento de referência e de convergência, mesmo quando a família é pluriativa e seus membros vivem em locais diferentes. Daí, a importância do patrimônio fundiário familiar e das estratégias para constituirlo e reproduzi-lo, sobretudo em um processo que valorize a identidade territorial³. Em consequência, o estudo do lugar dos agricultores não pode deixar de tratar de questões tais como:

- a) o caráter polivalente e pluriativo do potencial de trabalho das famílias dos agricultores;
- b) os valores e as práticas familiares de valorização (ou tentativas de valorização, mesmo nas condições mais adversas) do patrimônio familiar;
- c) os valores e as práticas familiares de valorização da educação como meio de ascensão pessoal e de aperfeiçoamento profissional;
- d) os valores e as práticas sociais que reforçam o sentimento de pertencimento a um lugar e de identidade territorial;
- e) os esforços já realizados no sentido da integração com a cidade e o mundo urbano e de implantação de formas associativas diversas no meio rural;
- f) a presença no meio rural, em função precisamente dos agricultores familiares, de uma grande quantidade de quadros técnicos, vinculados sobretudo a instituições governamentais e de militantes de organizações não governamentais.

A dinâmica do meio rural nordestino depende, para o bem ou para o mal, do desempenho da agricultura e de suas condições de funcionamento

Considerando apenas as últimas décadas, este desempenho foi particularmente afetado por uma série de fatores negativos: a ocorrência recente de secas sucessivas, a erradicação da cultura do algodão em toda a zona semi-árida, a crise, que parece definitiva, do setor açucareiro regional e a redução das possibilidades de migração extra-regional. No entanto, apesar destes fatores de crise, no Nordeste, como em outras regiões do País, a agricultura, ainda é, e será por muito tempo, a atividade principal, a fonte principal de ocupação e renda, a base para a criação de novas alternativas econômicas e para o desenvolvimento de atividades de transformação e comercialização. Com efeito, se a crise dos setores tradicionais da agricultura afeta negativamente a economia do Nordeste, é, a partir da agricultura e da agroindústria que estão sendo gestados novos pólos dinâmicos do desenvolvimento regional. Situados em zonas delimitadas e explorando vantagens comparativas, estes pólos agro-industriais vêm tentando ocupar os chamados “nichos de mercado”, tanto o mercado nacional como, sobretudo, o mercado internacional.

As conseqüências da implantação destas atividades ultrapassam, efetivamente, os quadros do setor agrícola, atingindo o conjunto da economia e da sociedade locais⁴.

Além da expansão destas atividades, estudos mais recentes sobre o meio rural brasileiro apontam para o crescimento de atividades não agrícolas, sobretudo na área de serviços, nos moldes do que vem ocorrendo nos países avançados da Europa e da América do Norte. Neste sentido, o meio rural não seria apenas o lugar da produção agrícola, mas também um espaço diferenciado, capaz de oferecer à população urbana, padrões de residência específicos e formas de lazer ligadas ao contato com a natureza. Esta tendência é, evidentemente, mais forte nas regiões mais urbanizadas do País, particularmente no Sudeste e no Sul, mas o meio rural do Nordeste também está integrado a este processo. São inúmeras as indicações hoje disponíveis, a respeito da expansão das residências secundárias em certas áreas rurais e do turismo rural, este, em grande parte associado ao patrimônio natural e ao calendário das festividades tradicionais de cada região. É importante, no entanto, registrar que as possibilidades do desenvolvimento destas atividades estão diretamente dependentes por um lado, do maior acesso das populações urbanas a formas diversificadas de lazer e, por outro lado, aos padrões de qualidade e conforto que o meio rural pode oferecer a seus visitantes. Neste sentido, vale lembrar que boa parte do meio rural nordestino não dispõe sequer de rede elétrica ou saneamento básico.

A fragilidade da urbanização do Nordeste funciona como um desestímulo ao desenvolvimento rural da região

A Contagem da População efetuada pelo IBGE, em 1996, registrou, na região Nordeste, uma população rural de 15.575.505 habitantes. Apesar de decrescente, desde 1980, a importância relativa deste contingente é inegável. De fato, em primeiro lugar, ele corresponde a 45,8% dos efetivos rurais de todo o País (de 33.997.406). Isto tem levado estudiosos e planejadores a insistir no caráter “nordestino” da “questão rural” brasileira, particularmente nas últimas décadas. Em segundo lugar, mesmo considerando o processo, por muitos apontados, da “desruralização” da população, os “rurais” nordestinos equivalem hoje a quase 35% da população total da região, com variações entre os Estados que vão de 26% em Pernambuco a 48%, no Maranhão. Estes dados nos permitem supor que a “questão regional” nordestina passa, de uma certa forma, pela solução dos problemas rurais.

Para além desta dimensão propriamente rural, deve-se registrar as formas que assume o processo de urbanização na região nordestina. Aqui, fora das áreas metropolitanas, apenas 3 municípios funcionam como grandes polos interioranos, com população entre 250 mil e 500 mil. Da mesma forma, são pouco numerosos -30 no total- os municípios, cuja população total variava, em 1996, entre 100 mil e 250 mil, correspondendo a apenas 10% da população regional. Estes municípios parecem, de fato, constituir centros populacionais mais dinâmicos no interior dos Estados, mas estão concentrados, sobretudo na Bahia, em Pernambuco e no Maranhão.

Estes dados nos permitem afirmar que uma das grandes limitações no processo de desenvolvimento regional é, precisamente, a fragilidade da urbanização, cujo processo foi incapaz de criar centros dinâmicos no interior da região, que –como aponta Ricardo Abramovay (1998)– para outras regiões do País, estivessem em condições de descentralizar, em níveis satisfatórios, as iniciativas econômicas, principalmente no que se refere à instalação de indústrias e à disseminação de redes de serviços e de promover o desenvolvimento das forças sociais existentes nas pequenas aglomerações e nos espaços rurais. Como afirma Maria do Livramento Miranda Clementino “a maioria dos municípios do Nordeste tem uma frágil estrutura produtiva. A tradição agrícola regional definiu uma estrutura urbana deficitária, formada essencialmente por pequenos municípios, com função de intermediação comercial primária, com baixo nível de urbanização e uma estrutura política marcada pelo “mandonismo local”, cuja base de poder sempre foi a propriedade da terra” (1997).

A consequência direta deste quadro é que a dimensão do “problema rural” é bem maior do que os números da “desruralização” indicam e seu enfrentamento exige tratamentos especiais da relação campo-cidade, especialmente, a relação que envolve a pequena cidade em seu conjunto - sede do município e seu entorno rural.

Areforma agrária é um componente essencial do desenvolvimento rural no Brasil

Areforma agrária é, sem dúvida, o caminho para resolver a questão da terra que permanece pendente até hoje no País. Adisseminação de assentamentos, na medida em que estes se tornam uma “sementeira” de agricultores familiares, permite recuperar as forças sociais para o desenvolvimento, que existem na agricultura familiar, até então desperdiçadas. Parece-me particularmente promissora a multiplicação de estudos sobre os assentamentos da reforma agrária que introduzem novas questões a respeito da “nova” ou “renovada” inserção dos assentados na vida rural. Assim, além do desempenho econômico dos assentamentos, creio de grande interesse a pesquisa sobre as demais “conquistas” dos assentamentos, tais como, a melhoria do padrão nutricional, a ênfase que vem sendo dada à educação e à formação dos jovens e a dinamização da economia e da sociedade locais.

Uma avaliação dos impactos da reforma agrária teria que, necessariamente, levar em conta a capacidade dos assentamentos instalados em repovoar e reanimar a vida rural e de integrar os habitantes do campo à sociedade local.

Conclusão

A proposta central deste trabalho é a reiteração da necessidade de um pacto social pelo desenvolvimento rural:

- a) que seja baseado em uma *concepção* do meio rural, enquanto um lugar específico de vida e de trabalho, historicamente pouco conhecido e reconhecido pela sociedade brasileira, porém carregado, em sua diversidade, de um grande potencial econômico, social, cultural e patrimonial, que deve ser transformado em forças sociais para o desenvolvimento;
- b) que se constitua como um *movimento*, capaz de envolver, sob todas as formas, os habitantes do meio rural em sua diversidade, bem como as instituições e as pessoas que sempre se ocuparam da agricultura e dos agricultores, no Governo, nas Universidades, nas ONG e nos movimentos sociais; elas são as que mais conhecem o meio rural em sua complexidade, as que demonstram maior sensibilidade para os problemas rurais, tendo criado, de uma certa forma, uma “cultura rural” e integrado às forças sociais para o desenvolvimento;
- c) que defina *pressupostos e objetivos* que garantam este mesmo dinamismo de suas forças sociais:
 - considerar o habitante do meio rural como um cidadão pleno, em todos os níveis, material, cultural e político;

- favorecer a cooperação e o intercâmbio, sem anular as particularidades, entre o meio rural e o meio urbano, entre a agricultura e os demais setores e entre o local e as dimensões mais amplas, regionais, nacionais e globais;
- d) que, reconhecendo a importância dos agricultores, que são hoje os principais personagens do campo, assegure que as *políticas voltadas para a agricultura*:
- recuperem produtivamente o potencial de terras e recursos naturais, hoje “desperdiçados”, de forma a revitalizar socialmente os espaços vazios ou esvaziados;
 - valorizem o patrimônio natural e cultural do meio rural, inclusive seu “patrimônio” produtivo;
 - favoreçam não o proprietário, mas o produtor;
 - considerem a agricultura familiar como uma forma social adequada para responder às exigências da agricultura moderna;

Bibliografia

Abramovay, Ricardo 1998 *Bases para a formulação da política brasileira de desenvolvimento rural; agricultura familiar e desenvolvimento territorial*. Relatório de Pesquisa.

Brandão, Carlos Rodrigues 1995 *A partilha da vida* (São Paulo: GEIC/Cabral).

Clementino, Maria do Livramento Miranda 1997 *Receitas municipais e grau de dependências dos pequenos municípios do Nordeste*. Relatório de Pesquisa.

Faria, Vilmar 1984 (2ª edição) “Desenvolvimento, urbanização e mudanças na estrutura do emprego; a experiência brasileira dos últimos 30 anos”, in Almeida, Maria Hermínia T. de (org.) *Sociedade e política no Brasil pós-64*. (São Paulo, Brasiliense).

Fernandes, Florestan (org.) 1973 *Comunidade e sociedade no Brasil; leituras básicas de introdução ao estudo macro-sociológico do Brasil* (S. Paulo: Nacional).

Godoi, Emilia Pietrafesa de 1999 *O trabalho da memória; cotidiano e história no sertão do Piauí* (Campinas: UNICAMP).

IBGE 1996 *Contagem da População* (Brasília).

Lopes Juarez, Rubens Brandão 1978 *Desenvolvimento e mudança social; formação da sociedade urbano-industrial no Brasil* (São Paulo: Nacional).

Marin, Maria Cristina de Melo 1984/1985 “Migração sem urbanização: o caso da cidade paraibana de Serra Branca”, in Raizes, C. Grande, Volume 4, Nº 4/5 Jan/Dez, pp. 197-203.

Martine George y Garcia, Ronaldo Coutinho 1987 *Os impactos sociais da modernização agrícola* (São Paulo: Caetés).

Medeiros, Leonilde S. y Leite, Sérgio (org.) 1999 *A formação dos assentamentos rurais no Brasil; processos sociais e políticas públicas* (P. Alegre: UFRGS, R. Janeiro, CPDA).

Norder, Luis Antonio Cabello 1997 *Assentamentos rurais: casa, comida e trabalho* (Campinas: UNICAMP). Dissertação de Mestrado.

Rambaud, Placide 1973 “Village et urbanisation. Problèmes sociologiques”, in *Études Rurales* (Paris) Nº 49/50, Jan/Jui, pp. 14-32. (Número Especial: “L’urbanisation des campagnes”).

Sarraceno, Elena 1996 *O conceito de ruralidade; problemas de definição em escala européia* (Unine: CRES). Trad. Angela Kageyama.

Silva, Aldenor y Gomes da (s/d) *Atividades não agrícolas no rural potiguar; uma “nova” opção de emprego no campo* (Natal, s/n).

Silva, Aldenor y Gomes da 1999 *Características e transformações no rural do Rio Grande do Norte*. Relatório de Pesquisa.

Silva, José Graziano da 1995 “Urbanização e pobreza no campo”, in Ramos, Pedro y Reydon, Bastiaan P. (orgs.) *Agropecuária e agroindústria no Brasil: ajuste, situação atual e perspectivas* (Campinas: ABRA).

Vilela, Sergio Luiz de Oliveira 1999 *Globalização e emergência de múltiplas ruralidades; reprodução social de agricultores via produtos para nichos de mercado* (Campinas: UNICAMP). Tese.

Notas

1 • O sertão: “é o lugar onde, por oposição aos campos com matas, existem apenas matas sem campos, algumas impenetráveis, de um lado ou do outro da Serra” (p. 62).

• O sítio: “o sertão se transforma: é conquistado e dá lugar ao mundo onde se mora e trabalha como camponês”(p. 64).

• O bairro: “O oposto mais próximo do sertão é o bairro... visto como um lugar ainda plenamente rural, mas já não selvagem e é o lugar da vida para onde converge o trabalho camponês... o bairro é o lugar que torna estável a cultura rural e, sobretudo, faculta que se torne comunitária a vida familiar dos sítios” (p. 66).

• A vila: “a vila é o lugar para onde convergem os bairros de perto...Assim como os vários bairros são vistos, um a um, como uma conquista do trabalho sobre o sertão... a vila também é percebida como o desdobramento do bairro e uma espécie de conquista da cidade sobre ele... lugar simbólico entre o bairro e a cidade, a vila é também o lugar social da passagem da vida de um à outra” (p. 69).

• A cidade, “um espaço de trocas oposto ao bairro e à vila, domínios da cultura (camponesa).” Os moradores do campo passam a lidar com as cidades - também elas diferenciadas - em função de seus negócios, de seus “compromissos com o poder”, do acesso aos recursos que elas podem oferecer e, finalmente, um lugar de destino para muitos.

2 Ver especialmente o conjunto das pesquisas reunidas no Projeto Rurbano, do Instituto de Economia da UNICAMP, sob a coordenação de José Graziano da Silva.

3 Ver, entre outros, Godoi (1999).

4 Ver as pesquisas do Projeto Rurbano feitas nos estados do Nordeste, especialmente Silva (s/d e 1999) e Vilela (1999).

Globalización y nueva ruralidad en América Latina

◀ Miguel Teubal *

“...En un mundo en el que rápidamente se hacen evidentes los límites de los paradigmas industriales estamos redescubriendo el hecho histórico de que el control de la tierra y de los alimentos ha sido un elemento fundamental de la ecuación política, tanto dentro y entre estados, por una parte, como mediante la construcción y reconstrucción de las dietas, por la otra. El pasaje a lo largo de este siglo de la cuestión de la tenencia de la tierra (la cuestión agraria clásica) a las cuestiones alimentarias y verdes aparece recurrente. O sea, que los movimientos globales que resisten el ideal autoregulado del mercado impulsado por las corporaciones, procuran reintegrar estas dos cuestiones que históricamente fueron separadas entre sí...”

McMichael, Phillip, “The agrarian question revisited on a global scale”, preparado para la Conferencia Internacional sobre la Cuestión Agraria, Wageningen, mayo de 1995.

Desde comienzos de los años 1970, tras la crisis de las instituciones de Bretton Woods, la globalización, denominada en aquel entonces como el proceso de internacionalización del capital, adquiere una nueva entidad. Quizás porque desde entonces se perfila, según numerosos trabajos, una nueva etapa en la evolución del capitalismo mundial. Según Chesnais (1994: 14) el concepto de globalización comenzó a ser utilizado en los años 1980 en los cursos de administración de empresas de las universidades norteamericanas. El término ganó una expresión mundial –fue mundializado– a partir de su utilización por parte de la prensa empresarial y financiera de Gran Bretaña. Desde entonces se han multiplicado los trabajos sobre los procesos de globalización, poniéndose en evidencia que se trata de un concepto complejo y multifacético.

Según Glyn y Sutcliffe los procesos de globalización describen la expansión de las relaciones capitalistas de “mercado”, o sea, la creciente mercantilización de numerosas esferas de la actividad económica, social y cultural que anterior-

* Ph. D. en economía agraria (Universidad de California, Berkeley, California, Estados Unidos); Profesor titular regular de la Universidad de Buenos Aires. Investigador Principal del CONICET en el Centro de Estudios Avanzados.

mente no estaban incorporadas a él. Asimismo, refiere a una serie de procesos que contribuyen a la integración de las diversas partes de la economía mundial en aras de la constitución de un auténtico “mercado mundial”. Ese mercado es “...más global, más interdependiente, y más abierto en cuanto a sus conexiones macroeconómicas mediante la integración de los patrones de producción y de consumo que surgen de una ramificación creciente de la división internacional del trabajo, la interacción de los mercados nacionales de bienes y servicios, de capitales, divisas y trabajo, y mediante la organización transnacional de la producción en el interior de las firmas...” (Bromley, 1996: 3 citando a Glyn y Sutcliffe, 1992).

Cabe señalar la importancia que asumen las grandes empresas transnacionales en estos procesos de constitución y consolidación del mercado mundial. La globalización también se remite a una nueva etapa en la evolución del sistema capitalista mundial, una etapa en la que el Estado nacional aparece perdiendo relevancia frente al Estado transnacional (McMichael y Myhre, 1991), y a un nuevo discurso o proyecto inherente a estos grandes intereses transnacionales o transnacionalizados que ha sido descrito como formando parte del “pensamiento único” (Ramonet, 1995).

En este trabajo consideramos la influencia de los procesos de globalización sobre la problemática agraria y agroalimentaria de América Latina y la forma en que inciden sobre lo que se ha denominado la “nueva ruralidad”. Para ello nos proponemos señalar algunas de las transformaciones que se han operado en el sector agropecuario y el sistema agroalimentario mundial, y su incidencia sobre el medio rural latinoamericano. En este contexto nos preguntamos acerca de las nuevas modalidades que asume la cuestión agraria en la era actual. También nos preguntamos acerca del nuevo papel que asume el agro en el marco del proceso de globalización, contrastándolo con el que habría tenido en los primeros años de la postguerra.

Globalización y el sistema agroalimentario mundial

En décadas recientes la cuestión agraria cobró una nueva entidad en América Latina, enmarcada en estos procesos de globalización y de ajustes estructurales que la acompañaron. Muchos de los fenómenos que se manifiestan en la actualidad en el medio rural latinoamericano pueden relacionarse con la naturaleza de dichos procesos y con algunas de sus consecuencias. Entre ellos se destaca la exclusión social que estarían generando. En efecto, muchos de los fenómenos que se agudizaron en estas décadas reflejan la intensificación del dominio del capital sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado: la difusión creciente del trabajo asalariado; la precarización del empleo rural; la multiocupación; la expulsión de medianos y pequeños productores del sector; las continuas migraciones campo-ciudad o a través de las fronteras; la creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados; la articulación de

los productores agrarios a complejos agroindustriales en los que predominan las decisiones de núcleos de poder vinculados a grandes empresas transnacionales o transnacionalizados; la conformación en algunos países de los denominados *pool de siembra*, etc. Todos estos factores pueden ser relacionados con procesos de globalización y con procesos tecnológicos asociados a ellos, incidiendo sobre la exclusión social en el medio rural y afectando así a la mayoría de los productores y trabajadores rurales, sean éstos medianos y pequeños productores, campesinos o campesinos y trabajadores sin tierra, incluyendo a los trabajadores y medianos y pequeños propietarios no agropecuarios del medio rural.

En el otro polo del proceso se manifiesta la importancia creciente que asumen los complejos agroindustriales comandados por grandes corporaciones transnacionales o transnacionalizadas que se vinculan con el comercio mundial de productos agropecuarios, la provisión de insumos y tecnología agropecuaria, el procesamiento industrial y la distribución final de alimentos, y la difusión de los *pool de siembra* y/u otros mecanismos financieros que inciden sobre el quehacer agropecuario. La mayor concentración de la tierra, la consolidación de un nuevo latifundismo en el medio rural relacionado con el capital financiero y agroindustrial, la mayor concentración del capital en los diversos sectores que integran los sistemas agroalimentarios de los países latinoamericanos, la provisión de nuevos insumos y tecnología agropecuaria, la transnacionalización de partes importantes del sistema agroindustrial al que se asocia el medio rural, y la estrecha articulación y creciente integración vertical en el interior de importantes complejos agroindustriales, son asimismo fenómenos que pueden relacionarse con los procesos de *globalización* en ciernes.

En los años '70 los cambios en el panorama mundial incidieron significativamente sobre el sector agropecuario de los países del tercer mundo en general, y en particular de los países latinoamericanos. Diversos estudios señalan que en ese período se hizo manifiesto un cambio de estrategia de los EE.UU. en relación con el comercio de productos agropecuarios. Por una parte, ese país dio impulso a sus exportaciones cerealeras, oleaginosas y de otros productos agropecuarios y agroindustriales a la economía mundial, pero esencialmente a las de productos de bajo valor agregado en términos generales. Como consecuencia la ayuda alimentaria provista anteriormente por el programa PL 480 fue sustituida por exportaciones de cereales. Esta expansión de las exportaciones cerealeras de los EE.UU., que alcanza un pico a comienzos de 1980, cuando el país llegó a controlar aproximadamente el 60% del mercado cerealero mundial, se produce en gran medida a costa de la creciente dependencia cerealera externa de la mayoría de los países del Tercer Mundo (Teubal, 1987; Teubal, 1995; McMichael, 1995). Como contrapartida, los EE.UU. promueven exportaciones de alto valor agregado, desde el Sur hacia el Norte, en consonancia con algunas de las tendencias de la denominada *revolución verde*, una estrategia que servía a intereses financieros mundiales por cuanto permitía a los países del Sur acumular las divisas necesarias para el pago de los servicios de sus respectivas deudas externas.

Asimismo, en los años '70, frente a la dependencia alimentaria externa de los países del tercer mundo, fueron concitados una serie de proyectos tendientes a promover la autosuficiencia alimentaria.

Sin embargo, cuando bajo la égida del “reaganismo” en los años 1980 se produce la desregulación de una serie de industrias y se promueve la Ronda Uruguay como un “...vehículo para consolidar la política agraria y alimentaria estadounidense...”, estas medidas también habrían de servir para la remoción de las barreras al comercio exterior y los subsidios agropecuarios en gran parte del Tercer Mundo tal como eran reclamados por las corporaciones agroindustriales en plena expansión. Se trataba de una política deliberada. McMichael cita al Secretario de Agricultura de los EE.UU, John Block, quien en 1986 expresaba: “El empuje por parte de algunos países en vías de desarrollo de ser más autosuficientes en materia alimentaria es reminiscente de épocas pasadas. Estos países podrían ahorrar dinero importando más alimentos de los EE.UU. Los EE.UU. han utilizado al Banco Mundial para sostener esta política, han incluso obligado a países a dismantelar sus programas de apoyo agropecuario como una condición necesaria para la obtención de préstamos, tal como fuera el caso del apoyo que daba el gobierno de Marruecos a sus agricultores” (McMichael, 1995: 8). Es útil ubicar en este contexto la problemática del GATT y de la Ronda Uruguay.

En los años de la segunda postguerra, las grandes corporaciones adquieren un nuevo cariz relacionado con el comercio y la producción mundial de productos agroindustriales, la inversión extranjera y otros aspectos financieros y especulativos inherentes a los procesos de globalización. Los EE.UU. y Europa emergen como potencias agropecuarias y agroindustriales en el panorama económico internacional, con dificultades para colocar sus excedentes alimenticios en la economía mundial. Tras la aplicación de diversos mecanismos de ayuda alimentaria que caracterizaron a la política agraria de los países centrales en los primeros años de la postguerra, en la década de 1970, los EE.UU. y Europa habrían de dar cabida a las exportaciones de sus productos agroindustriales a la economía mundial, incluyendo a los países del Tercer Mundo, y sustituyendo de ese modo la anterior “ayuda” por exportaciones efectivas. Como consecuencia crece la dependencia alimentaria de los países del Tercer Mundo, incluyendo la dependencia cerealera, de la mayoría de los países latinoamericanos, siendo los cereales los alimentos básicos por excelencia de consumo popular masivo. Este proceso ha sido vinculado con la creciente descampesinización operada en el agro latinoamericano (Teubal, 1995: caps. 2 y 3).

Grandes empresas agroindustriales transnacionales incidieron sobre las políticas que influyen en el comercio exterior de productos de origen agropecuario, expandiendo de este modo sus esferas de influencia hacia múltiples países del Tercer Mundo y de la economía mundial. En la actualidad, grandes corporaciones transnacionales agroindustriales (CTA) dominan una parte importante del comercio mundial de los productos agropecuarios. Seis corporaciones comerciali-

zan el 85% del comercio mundial de granos –Cargill (EE.UU.), Continental (EE.UU.), Mitsui (Japón), Louis Dreyfus (Francia), André/Garnac (Suiza) y Bunge y Born (Brasil); quince corporaciones controlan entre el 85% y el 90% del comercio algodonero; ocho corporaciones responden por el 55% al 60% del comercio mundial del café; siete empresas comercializan el 90% del té consumido en el mundo occidental; tres empresas dominan 80% del comercio de bananas; otras tres empresas dominan el 83% del comercio de la cocoa; cinco firmas compran el 70% del tabaco en rama.

El comercio mundial de productos alimentarios y no alimentarios de origen agropecuario aumentó de 65 mil millones de dólares en 1972 a más de 500 mil millones en 1997. Si bien contribuyó al surgimiento y fortalecimiento de importantes corporaciones transnacionales, no necesariamente cooperó para mejorar las condiciones de vida de millones de medianos y pequeños productores y trabajadores rurales del Tercer Mundo. La creciente liberalización del comercio mundial de productos agropecuarios bajo los auspicios del GATT y la OMC ha contribuido a mejorar las ganancias de las grandes empresas, pero no necesariamente la situación de los más pobres del medio rural (Madeley, 1999: 36-38).

La división internacional del trabajo en materia agroalimentaria fue modificándose sustancialmente. A los tradicionales productos de exportación de los países del Tercer Mundo se agrega una serie de nuevos productos de exportación. Los campesinos y productores agropecuarios de América Latina tradicionalmente cultivaban frutas y legumbres para el autoconsumo o para mercados locales y/o nacionales. Sin embargo, en años recientes éstos se transformaron en importantes productos de exportación, impulsados por las grandes corporaciones agroindustriales. En muchos casos las exportaciones no tradicionales reemplazaron la producción de alimentos básicos, generándose escaseces y alzas de sus precios, afectando de este modo a la población más pobre de la comunidad. Asimismo se han generado importantes problemas de salud y ambientales como consecuencia de la utilización masiva de agroquímicos, en particular de pesticidas, muchos de ellos prohibidos en los países altamente industrializados.

Durante la década de 1990 crecieron significativamente las exportaciones de hortalizas de América Latina a los EE.UU. Se trata de un proceso impulsado por los gobiernos de los países centrales y las CTAtendiente a la generación de las divisas necesarias para poder seguir pagando los servicios de las respectivas deudas externas, creadas en muchos casos a raíz de las caídas de los precios de los tradicionales productos de exportación de la región. En efecto, frente a la caída de los precios del café, la banana, el azúcar y el algodón que se produce en los '80, los gobiernos locales fueron inducidos a reemplazar estas exportaciones tradicionales por otras de alto valor agregado, por ejemplo, mangos, kiwis, flores y otras frutas y hortalizas.

Las agencias internacionales, en particular el Banco Mundial, promovieron estas exportaciones no tradicionales en el marco de las políticas de liberalización

del comercio y ajustes estructurales. Se trata de una política "...que provee a los compradores norteamericanos una oferta continua a lo largo del año de frutas, hortalizas y flores, aunque cause severos problemas a los pobres de América Latina..." (Madeley, 1999: 64). Si bien se trata de productos que todavía representan una proporción ínfima de las exportaciones totales de los países latinoamericanos, tienen altos precios y generan un alto valor agregado. Entre 1985 y 1992 el valor de las exportaciones no tradicionales de América del Sur (excluyendo al Brasil) aumentó 48%, mientras que en Centroamérica aumentó 17,2%. El rubro de exportación "trabajo intensivo" contribuyó a la generación de empleo, especialmente femenino, incidiendo asimismo sobre el auge de actividades conexas tales como el transporte, el empaque y la comercialización de estos productos.

Sin embargo, los éxitos de mercado de estas exportaciones no siempre fueron acompañados por los correspondientes beneficios sociales. Cabe contabilizar los "...costos en materia de salud de los trabajadores, una distribución inequitativa de los beneficios económicos, y la degradación ambiental generadas en muchos de los países exportadores..." (Thrupp *et al*, 1995). Asimismo, en muchos casos estos nuevos productos de exportación afectaron la producción de alimentos básicos de consumo popular masivo, y desplazaron a grandes contingentes de campesinos, pequeños productores agropecuarios y trabajadores del medio rural.

El famoso "modelo chileno" se basó en esta estrategia durante muchos años. Desde 1980 a esta parte, las exportaciones de nuevos y viejos productos agropecuarios chilenos aumentaron sustancialmente. Las exportaciones de porotos aumentaron más rápidamente que su producción orientada al mercado local. Si bien en 1980 Chile exportaba una cantidad de porotos igual a la consumida internamente, en 1990 esas exportaciones triplicaban el consumo local, alcanzando 55 mil toneladas frente a 20 mil toneladas orientadas al mercado interno. En términos generales, entre 1989 y 1993 la superficie destinada a la producción de alimentos básicos bajó en un 30%. Estos cultivos fueron sustituidos por otros de exportación, básicamente frutas y flores. El comercio exterior estuvo dominado por grandes empresas, pertenecientes a tres de las cuatro corporaciones transnacionales más importantes. En este contexto fueron afectados los pequeños productores agropecuarios y campesinos, resultando muchos de ellos desplazados del sector al no disponer de los recursos necesarios para poder realizar las inversiones que la nueva producción requería.

También fueron impulsados nuevos productos de exportación en otros países latinoamericanos. Brasil y Argentina son considerados "nuevos países agropecuarios" debido fundamentalmente a sus exportaciones de soja y de otros productos oleaginosos (por ejemplo, el girasol, en el caso argentino). México y los países centroamericanos también han aumentado sus exportaciones de hortalizas a los EE.UU, especialmente el tomate, que representa en la actualidad casi la mitad de las remesas mexicanas de hortalizas.

Estos cambios en las exportaciones de la región reflejan cambios más profundos. Por una parte, los protagonistas de importancia, los principales beneficiarios de estas nuevas exportaciones, son grandes inversores, compañías extranjeras y distribuidoras. Las grandes empresas han acumulado tierra utilizada en la producción exportable, mientras que los productores más pobres han sido desplazados del mercado u obligados a asentarse en tierras marginales (Thupp *et al*, 1995), o bien han perdido su autonomía, debiendo articularse a grandes complejos agroindustriales para poder sobrevivir.

Asimismo, los apoyos que tradicionalmente realizaban los gobiernos de muchos países latinoamericanos en favor de la producción de alimentos básicos cayeron estrepitosamente y fueron sustituidos por nuevos apoyos a productos de exportación. Hubo también un cambio en la orientación dada a la investigación científica en materia agropecuaria. Si bien en 1980 casi el 90% de los fondos disponibles para la investigación agropecuaria se utilizaba en investigaciones que tenían que ver con la producción de alimentos básicos, en la actualidad sólo el 20% se destina a éstos: el remanente se orienta a investigaciones destinadas a la producción agropecuaria exportable. Han cambiado las prioridades en materia agropecuaria: la tierra, vista tradicionalmente como un recurso que debía ser utilizado para la producción de alimentos básicos, se destina cada vez más a la producción agropecuaria exportable capaz de generar los recursos requeridos por el país para pagar los servicios de su deuda externa. En algunos países ya no se investigan problemas vinculados con las necesidades de los medianos y pequeños productores y campesinos agropecuarios. Estos también se han visto obligados a orientar su producción hacia nuevos cultivos o producción exportable.

Estos cambios en la producción agropecuaria han traído aparejadas otras consecuencias negativas. Los nuevos cultivos requieren la utilización masiva de nuevos pesticidas en cantidades mucho mayores a las requeridas por la producción de cultivos tradicionales. Sea por el mal manejo en el uso de estos pesticidas y de otros agroquímicos o por sus características intrínsecas, estos factores han incidido sobre la aparición de nuevas pestes, la difusión de nuevos virus y el deterioro creciente del medio ambiente. La expansión de la producción de hortalizas ha resultado en la aparición de nuevos problemas virales: miles de hectáreas plantadas con porotos tuvieron que ser abandonadas debido a la incidencia de nuevos virus. Como consecuencia en muchos países cayó significativamente su producción, en gran medida debido a este factor. Se trata de un problema que también en cierto modo afecta a la soja (Madeley, 1999: 67)

La producción de nuevas frutas y hortalizas, y la utilización masiva de agroquímicos que ello requiere, también inciden sobre la salud de los trabajadores. Asimismo se generan nuevas incertidumbres dada la gran volatilidad de los precios de exportación, y las exportaciones de estos productos a los EE.UU. se encuentran con estándares sanitarios muchas veces difíciles de sobrellevar. La situa-

ción también afecta a otros cultivos, como por ejemplo aquellos producidos con semillas transgénicas. Tanto la Comunidad Europea como el Brasil limitan las importaciones de maíz producido en base a semillas transgénicas, lo cual afecta muy especialmente a los productores agropecuarios argentinos.

Las grandes corporaciones agroindustriales también inciden sobre la producción mundial de productos agropecuarios a través de la provisión de insumos y el procesamiento industrial de la producción agropecuaria. Podría decirse que fue consolidándose a escala mundial un sistema agroalimentario dominado en gran medida por estas grandes corporaciones transnacionales agroindustriales (CTA). Son grandes corporaciones las que dominan el mercado mundial de diversos tipos de insumos –semillas, fertilizantes y pesticidas– que venden a los productores agropecuarios de todo el mundo. En años recientes incluso se han patentado nuevos cultivos o variedades de cultivos, estando estas empresas involucradas en la investigación en ingeniería genética y la crianza de nuevas plantas y animales. Como consecuencia, dominan gran parte de la producción y el comercio de determinados insumos agropecuarios, o sea de ciertos insumos químicos y semillas. Por otra parte tienen incidencia sobre la producción de alimentos procesados y la consolidación y difusión de marcas alimentarias mundiales y nuevos productos procesados: lácteos, jugos de naranjas, etc. También venden servicios vinculados con la aplicación de semillas híbridas e impulsan nuevas prácticas de manejo agropecuario y, en forma creciente, un número reducido de empresas está vinculado con la producción, difusión y venta de las denominadas semillas transgénicas. Como consecuencia, podría decirse que en esta etapa en la evolución del capitalismo se ha ido consolidando un sistema agroindustrial mundial, dominado por grandes corporaciones transnacionales agroindustriales que operan en la provisión de insumos y tecnología, procesan productos de origen agropecuario, comercializan internacionalmente esta producción, y realizan gran parte de la investigación de punta en materia agropecuaria.

Según Madeley, es tal el poder que han acumulado las grandes corporaciones agroindustriales transnacionales, que “...la política agropecuaria y alimentaria está en peligro de estar concentrada bajo su control...” (1999: 26).

El mercado mundial de agroquímicos representaba ventas por 32 mil millones de dólares en 1997. Entre las principales corporaciones mundiales involucradas en este sector se encuentran Novartis (que surge de la fusión de Ciba y Sandoz), Zeneca (anteriormente formaba parte de ICI), AgroEvo (por efecto de la fusión de Hoechst y Schering), Du Pont, Bayer y Monsanto. La elaboración de semillas, que representa un mercado que mueve 13 mil millones de dólares por año, es una de las áreas agroindustriales que rápidamente va concentrándose. Se caracteriza por ser un mercado en el cual también las principales empresas químicas tienen fuertes intereses. A partir de la *revolución verde* de la década de 1960, muchas grandes empresas químicas transnacionales comenzaron a comprar las

pequeñas empresas familiares que operaban en muchos países del mundo. Si bien en 1980 la FAO señalaba la existencia de más de siete mil fuentes de semillas públicas y privadas a escala mundial, entre 1985 y 1990, y en forma plena en los '90, se producen compras masivas de pequeñas empresas por parte de las grandes empresas semilleras transnacionales. Entre 1985 y 1990 las grandes corporaciones adquieren seiscientos treinta empresas vinculadas a la actividad semillera de todo el mundo, y en los '90 se produce otro auge de compras y fusiones empresariales en este campo. En 1998 se estimaba que operaban en el mundo mil quinientas empresas semilleras, veinticuatro de las cuales dominaban la mitad del mercado semillero comercial mundial. En los países en vías de desarrollo, el 34% del mercado de semillas de maíz está en manos de empresas transnacionales. En 1997 las principales empresas semilleras mundiales incluían a Pioneer, Jo-Bred (EE.UU.), Novartis, Limagrain (Francia), Avanta (Holanda), Cargill, AgroEvo, y Dekalb Plant Genetics (EE.UU.) que pertenece en un 40% a Monsanto y a Takii (Japón).

Existe una tendencia a combinar la venta de semillas y agroquímicos, incluso en una misma semilla. La integración de estas tecnologías duales en un mismo paquete tecnológico le permite a la empresa vender más semillas y más agroquímicos, creándose de este modo un mercado doble. Asimismo, en muchos casos existen los mismos canales de distribución tanto para los agroquímicos como para las semillas. Vemos así que la venta de la semilla al productor lo induce también a comprar los agroquímicos que la acompañan.

Estas tendencias tuvieron asimismo sus contras. Los productores agropecuarios tradicionalmente ahorran y producían su propia semilla. En la actualidad dependen cada vez más de la semilla que les vende la gran empresa agroindustrial, la cual generalmente es un híbrido que no se reproduce fácilmente, obligando al productor a comprarla año tras año en forma permanente. De allí un elemento que disminuye continuamente su autonomía relativa.

Estas tendencias también contribuyeron a que se perdiera significativamente la diversidad genética en el globo terráqueo. Según la FAO, a lo largo del siglo XX se han perdido las tres cuartas partes de las especies vegetales que habitaban la tierra. Este factor es vital para el mantenimiento de la seguridad alimentaria y agropecuaria. Según la FAO, en más de ochenta países, la difusión de la agricultura moderna y comercializada, y la introducción de nuevas variedades, se consideran como los principales factores que han contribuido a la pérdida de sus recursos genéticos vegetales (Madeley, 1999: 28-29).

Las grandes corporaciones semilleras están también patentando plantas, animales y semillas que históricamente fueron utilizados por los productores agropecuarios locales. Las CTA no sólo contribuyen a la pérdida de la biodiversidad en el mundo: mediante el patentamiento de semillas, también están obligando a los productores agropecuarios a depender de ellos en forma creciente, contribu-

yendo significativamente a la pérdida de su autonomía. Esta situación se da en forma significativa en América Latina. La pérdida de los “derechos” que sobreviene como consecuencia del patentamiento que realizan las grandes empresas, incluso de cultivos utilizados por centurias por los productores nativos, limita para esos productores el desarrollo de sus propias semillas y, en última instancia, de “su derecho de supervivencia”.

“...Las comunidades de los países en vías de desarrollo están en peligro de tornarse dependientes de fuentes externas de semillas y de los productos químicos que requieren para su crecimiento y para protegerlos. La autonomía alimentaria se torna cada vez más difícil. Aún si la diversidad genética fuese salvada, no quedaría garantizada la autonomía ni el desarrollo. No obstante, la pérdida de la diversidad genética reduce las opciones de los productores agropecuarios y promueve su dependencia...” (Madeley, 1999: 31).

Las grandes CTA también dominan una parte apreciable del procesamiento y la distribución final de alimentos a escala mundial. Entre las estrategias que utilizan para acrecentar su participación en los diversos mercados en que operan se encuentran mecanismos para aumentar la concentración y centralización horizontal del capital en ramas industriales definidas, la creciente integración vertical de la producción, la conformación de conglomerados (o sea, la expansión de estas empresas hacia actividades no necesariamente vinculadas con su producción tradicional) y, por último, estrategias de globalización que involucran la difusión de su actividad hacia múltiples áreas geográficas y países. En este sentido son empresas que ocupan un lugar estratégico en el sistema agroalimentario y agroindustrial mundial frente a infinidad de productores agropecuarios y consumidores.

En términos generales, las actuales CTA comenzaron siendo empresas relativamente pequeñas vinculadas con mercados locales. A los efectos de aumentar su rentabilidad, comenzaron a expandirse hacia otras regiones geográficas. Esta expansión involucró la construcción de nuevas facilidades productivas, la adquisición de empresas y la fusión empresarial. Ya a comienzos de siglo en los EE.UU. se había logrado un alto grado de concentración en algunas ramas industriales. Por ejemplo, la faena y el procesamiento de cerdos y carne vacuna eran dominados por las empresas Wilson, Armour y Swift. Con el andar de los años Swift y Armour fueron adquiridas por ConAgra, que también se hizo cargo de Miller y Monfort. En la actualidad, las cuatro empresas procesadoras más importantes de sus respectivos sectores dominan el 87% de la faena de carne vacuna en los EE.UU.: IBP, ConAgra (Armour, Swift, Monfort, Miller), Cargill (Excel) y Farmland Industries (National Beef); el 60% de la de cerdos (Smithfield, IBP, ConAgra, Cargill); el 55% de la faena de pollos (Tyson-Foods, Gold Kist, Perdue Farms, ConAgra); y el 73% de la faena de cordero (Conagra, Superior Packing, High Country).

En otras áreas agroindustriales de los EE.UU. el grado de concentración es semejante: en el sector molinero las empresas Archer Daniels Midland, ConAgra,

Cargill y Cereal Food Processors dominan el 62% del mercado; en lo que respecta al procesamiento de la soja, Archer Daniels Midland, Cargill, Bunge y Ag Processors participan con el 76% del mercado.

En el Medio Oeste de los EE.UU., las cuatro firmas agroindustriales más importantes dominan más del 40% del procesamiento de todos los productos agropecuarios de la región. El control oligopólico de estas empresas les otorga "...una influencia desproporcionada sobre la calidad, cantidad, tipo, localización y precios de la producción, y sobre el conjunto del sistema alimentario. La única etapa en la cual un conjunto de firmas se equipara al poder económico de las procesadoras es a nivel minorista, en donde también se da una gran concentración horizontal..." (Heffernan, 1998: 51). En efecto, aquello que se describe para la etapa del procesamiento industrial se repite en forma significativa a nivel de la distribución final de productos alimenticios, en donde el supermercadismo se expande a pasos agigantados a escala mundial.

No cabe duda de que las grandes empresas tienen una serie de ventajas que les permiten dominar los mercados mundiales y posicionarse en ellos mucho mejor que las medianas y pequeñas empresas. No sólo se trata de la posibilidad de disponer de fuentes financieras, de financiamientos cruzados para diversas actividades, sino también de ejercer una creciente integración vertical a lo largo de las respectivas cadenas agroindustriales. Por ejemplo, una firma como Cargill no sólo tiene una participación importante a nivel de la faena y el procesamiento de diversos tipos de carnes; también es una importante comercializadora de granos y alimentos balanceados, que en los EE.UU. y en otros países centrales constituyen la materia prima básica del complejo cárnico. Otro ejemplo lo constituye ConAgra: tal como señalamos más arriba, no sólo tiene intereses en el procesamiento de carnes, cereales y oleaginosas de todo tipo, siendo además el principal productor mundial de pavos y el segundo productor de aves; entre otras actividades, también posee cien silos para granos, dos mil vagones de ferrocarril y mil cien barcas para el transporte de sus productos. Produce sus propios alimentos balanceados, y es dueña de una serie de establecimientos incubadores de pollos. También tiene intereses en etapas posteriores de la cadena agroalimentaria. Los pollos hechos pueden ser vendidos por Country Pride, y luego están los denominados "TV Dinners" y otros productos elaborados con las marcas Banquet y Beatriz Foods, todos los cuales pertenecen a ConAgra. Vemos así que una parte importante del sistema alimentario estadounidense es controlada por ConAgra. Es la segunda firma agroalimentaria más importante de los EE.UU. después de Phillip Morris, y la cuarta más importante a escala mundial, con operaciones en treinta y dos países.

Estas empresas operan en una serie de países y por ende constituyen los símbolos más destacados de los procesos de globalización. Muchas se han transformado en conglomerados. Cargill, por ejemplo, no sólo es un importante procesador de carnes y granos: también procesa hierro, otros metales y productos petro-

líferos. Phillip Morris, asociada fundamentalmente al tabaco y los cigarrillos, es la corporación alimentaria más importante de los EE.UU. y la segunda en importancia en el mundo en general. La monopolización creciente de los mercados y la aglomeración de las empresas se manifiesta también en lo que respecta a Mitsubishi, conocida como una de las principales automotrices del mundo, es en la actualidad también se ha transformado en una de los principales procesadoras de carnes. La creciente integración que realizan estas empresas en el marco del sistema agroalimentario mundial se manifiesta por el hecho de que Pioneer Hi-Bred, DeKalb, Mycogen y otras semilleras, que son dueñas de una serie de variedades creadas mediante el uso de biotecnologías, están constituyendo una nueva relación organizativa con empresas químicas (Novartis, Monsanto, DuPont, Dow) y con aquellas firmas que en última instancia procesan las nuevas variedades genéticamente modificadas (ConAgra, Cargill) (Heffernan, 1998: 59).

Estos son los elementos que nos permiten visualizar los procesos de globalización en los cuales están involucrados una serie de importantes actores sociales, en particular grandes empresas transnacionales agroindustriales. La concentración económica que han impulsado en décadas recientes ha sido acompañada por la correspondiente concentración del poder. Cabe preguntarse entonces qué es lo que esta situación depara a los millones de productores agropecuarios del continente americano, a los trabajadores y a vastos sectores sociales en términos del acceso a la alimentación. Un primer abordaje de esta problemática se presenta a continuación, destacando algunos de los avatares que han sustentado a la política agraria y agroalimentaria en el continente desde los años de la postguerra a esta parte.

Cambios en las políticas y procesos agroindustriales en América Latina

Hacia fines de la década de 1960 y comienzos de los años '70, el modelo o *régimen de acumulación*³ de la postguerra, denominado *fordista* en los países centrales y de *industrialización por sustitución de las importaciones* (ISI) en América Latina, parecía llegar a su fin, o bien porque tendía a “agotarse”, o porque entraba en crisis. Concluida la etapa de reconstrucción de Europa y del Japón inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo capitalista desarrollado impulsó el Estado Benefactor y las políticas de tipo keynesianas como mecanismos de regulación del ciclo económico. Los regímenes equivalentes para algunos de los países de América Latina fueron los procesos y políticas de *industrialización por sustitución de las importaciones* (ISI), impulsados como respuesta a los efectos de la crisis de los años '30 y de las dos guerras mundiales de este siglo³.

Esos años de la postguerra fueron interpretados como la “edad de oro del capitalismo” (Hobsbawm, 1996 (1994); Marglin y Schor, 1991), entre otras razones

porque en Europa y en los países capitalistas centrales se logró un desarrollo relativamente exitoso, con altas tasas de crecimiento económico, combinado con mejoras sustanciales en las condiciones de vida de las clases trabajadoras. En América Latina, en cambio, tales procesos no siempre tuvieron los mismos efectos, ya que continuaron manifestándose muchos desequilibrios y crisis sectoriales así como conflictos y luchas de numerosos movimientos sociales. No obstante ello, en muchos países de la región hubo cierto desarrollo industrial, se estimuló la formación de nuevas clases sociales –incluyendo a la clase obrera–, y se asentaron las bases de un mercado interno de consumo en los centros urbanos, lo que contribuyó al crecimiento del capitalismo agrario. “...Toda la red de sistemas de apoyo que creció junto con la industria -sistemas nacionales de transporte, sistemas bancarios y financieros, instituciones de educación e investigación- facilitó el desarrollo y la expansión de la agricultura capitalista (...) y puso a disposición de los agricultores diversas máquinas e insumos tales como fertilizantes y pesticidas que antes de las décadas de 1950 y 1960 tenían que importarse a precios muy altos...” (Burbach y Flynn, 1983: 106-107).

Durante la etapa de ISI se impulsa el proceso de modernización de la agricultura en América Latina. Se producen fuertes inversiones en infraestructuras, en apoyos tecnológicos, y en la consolidación de una serie de instituciones que regulan o promueven la actividad agropecuaria. Sin embargo se planteó la disyuntiva de si esto era suficiente y no sólo necesario para la modernización del sector, o si previa o coetáneamente era necesario algún tipo de reforma agraria que acompañara esta modernización, dado el fuerte arraigo que en la región tenían las tradicionales oligarquías terratenientes.

Según de Janvry, durante la etapa de ISI las reformas agrarias en toda América Latina fueron consecuencia del “derrumbe del orden oligárquico” tras la crisis de los años ‘30. La pérdida de los tradicionales mercados de exportación impulsó a los gobiernos nacionales a promover un proceso de industrialización orientado al mercado interno (la ISI). La pérdida de mercados externos para los tradicionales productos de exportación obligó a las elites nacionales a promover industrias productoras tanto de “bienes salario” (aquellos demandados por los asalariados) como de “bienes de lujo” (demandados por sectores de altos ingresos) orientados hacia el mercado interno. Asimismo se captaron excedentes agropecuarios para invertirlos en la industria, al tiempo que comenzaron las migraciones masivas del campo a la ciudad. En parte éstas habrían de aportar la mano de obra necesaria para la industria incipiente, pero también –especialmente en los países con grandes excedentes de mano de obra- se constituyeron en un factor limitante para la organización sindical de los trabajadores urbanos. En este contexto, el sector agropecuario habría de proporcionar los alimentos baratos y los requerimientos de divisas para el proceso de industrialización (de Janvry, 1981: 203). No obstante, se produjo una redistribución de ingresos hacia la emergente clase trabajadora y las clases medias. Las crisis periódicas de los balances de pagos y los procesos inflacionarios reflejaron algunas de las limitaciones de estas estrategias.

Durante la etapa de ISI adquieren un importante protagonismo los medianos y pequeños productores agropecuarios, el campesinado y, en algunos países, los trabajadores rurales. En numerosos países asumen gran importancia el movimiento campesino y la lucha por la tierra. La reforma agraria en la etapa cardenista de México (1936-1940), y las que fueron impulsadas en otros países del continente, reflejan esta tendencia. Esta lucha fue acompañada en gran medida por la eliminación de formas precapitalistas de organización del trabajo y de enclaves “latifundio minifundio”.

En la Argentina de los años '40 se regularon los contratos de arrendamiento y se estableció el “Estatuto del peón”. En otros países también se generaron políticas de protección a los intereses de los medianos y pequeños productores familiares (*farmers* o campesinos) y a los trabajadores rurales sin tierra.

En esta etapa se reafirman numerosas reformas agrarias de diferente tenor, sucedidas en muchos casos por contrarreformas agrarias. Entre las reformas agrarias impulsadas en distintos momentos históricos están las del México cardenista (1934-1940), Guatemala (1952-54), Bolivia (1952-70), Chile (1967-1973), Perú (1969-75), y aquellas que tardíamente comienzan en Centroamérica. En Nicaragua, la más importante de las políticas sandinistas, “...la que aún perdura y la que tendrá efectos irreversibles, es la reforma agraria y sus consecuencias, así como la organización campesina resultante...” (Torres Rivas, 1994). Según de Janvry (1981) algunas reformas eran de tipo *junker* en oposición a las de tipo *farmer*: constituían procesos de modernización del latifundismo, haciéndolo asequible al desarrollo capitalista (Colombia 1968, Ecuador 1964, Venezuela 1959, etc.).

En la década de 1960, como consecuencia de la Alianza para el Progreso que se configuró a modo de respuesta a la Revolución Cubana, la reforma agraria apareció legitimada en el marco del desarrollo capitalista de la época, como un mecanismo que garantizaba alguna medida tanto de justicia social como de eficiencia productiva, pero también como medio para evitar la insurgencia en el medio rural. Numerosos trabajos de la época señalan al productor familiar como el de mayor productividad en el campo y, por consiguiente, como la figura que debía ser apoyada (Domike y Barraclough, 1972). Durante esta etapa también se aplicaron medidas promocionales en apoyo al sector: subsidios, precios sostén o de garantía, y créditos especiales, muchas veces en favor de los medianos y pequeños productores. Asimismo, en muchos países se promovió la producción de alimentos básicos de consumo popular masivo, por lo general como una respuesta a la creciente dependencia alimentaria externa que comenzaba a tener vigencia junto con la desarticulación de las economías campesinas.

En Brasil, durante la etapa de ISI, incluyendo el período autoritario militar, surgían un movimiento sindical agrario e importantes programas de colonización, generalmente, aunque no siempre, mantenidos bajo la égida y el control del Estado. Entre 1985 y 1994 se expandían programas de colonización que se extendie-

ron significativamente hacia regiones del interior. El gobierno militar enmarcó estos programas en la doctrina de la seguridad nacional, mostrando su especial preocupación por evitar la insurgencia agraria que había cobrado importancia a comienzos de los años '60 y por integrar las vastas y desconocidas regiones del interior a la economía y Estado nacionales. De allí que junto con el andamiaje de medidas tendientes a la modernización rural, especialmente en lo que concierne al crédito agrario, el Estado impulsó diferentes medidas distributivas en favor de los trabajadores rurales: medidas de seguridad social, de salud, salario social, etcétera. El Programa de Asistencia Técnica y Extensión Rural, PRORURAL, "...fue un programa que por primera vez otorgó a los trabajadores rurales la seguridad social, medidas de salud, y otros beneficios sociales (...): el programa estaba diseñado para lograr un mayor control sobre los sindicatos rurales mientras que impulsaba el crecimiento del movimiento sindical..." (Houtzager, 1998: 118).

En cierto modo, estas medidas, que también se aplicaron en otros países, podían ser compatibles con las políticas de integración que caracterizaban a la ISI, ya que medidas redistributivas en el agro en apoyo del campesinado y los medianos y pequeños productores significaban el fortalecimiento del mercado interno, considerado como de fundamental importancia para la producción industrial incipiente⁴. Asimismo debilitaban a las clases terratenientes tradicionales, favoreciendo (o por lo menos no siendo incompatibles con) el surgimiento de burguesías industriales en ascenso.

Hacia los años '70, en la mayoría de los países latinoamericanos comienzan cambios en las políticas agrarias que modifican sustancialmente las modalidades de funcionamiento del sector. Los ajustes estructurales empiezan a tener efectos en el sector agropecuario al potenciarse desregulaciones de todo tipo, aperturas y privatizaciones que afectan a gran parte del andamiaje institucional y empresarial desarrollado en la etapa anterior. La nueva política gubernamental "...basada en la privatización de la economía, la inversión extranjera y la apertura comercial...", junto con la disminución en términos reales de los subsidios y del gasto público, y el retiro del Estado en los procesos de comercialización y regulación de la actividad agropecuaria, "...pretenden crear las condiciones para transformar el capital privado nacional y extranjero en el principal agente de la reactivación del sector..." (Romero Polanco, 1995: 69-70). Esta modalidad de política que abre el campo a procesos de globalización, motorizada en muchos casos por las grandes CTA, se difunde a lo largo y a lo ancho del continente.

Entre las normas o políticas más corrientes que se adoptan se encuentra el fin de subsidios, precios sostén o de garantía, y de los créditos presuntamente "subsidiados" para el sector. Estas medidas son acompañadas por abruptas medidas de liberalización arancelaria y aperturas al exterior que en muchos casos impiden a las agriculturas nacionales competir con productos y empresas internacionales fuertemente subsidiados en sus países de origen. Como consecuencia el crédito

se hace caro, y los productores agropecuarios se enfrentan con precios mucho más variables e inestables. Asimismo se reducen los recursos públicos destinados a la asistencia técnica, la extensión, la investigación científica y tecnológica vinculada con el sector, y las inversiones en infraestructuras.

A partir de 1976 el gobierno del Brasil comenzó a disminuir los incentivos crediticios al sector agropecuario. Eliminó el crédito para las inversiones, y en la década de 1980 redujo el monto del crédito destinado al sector agropecuario a la mitad (de 250 billones de cruzeiros a 125 billones de cruzeiros) (Brumer y Tavares, 1998: 25). Sin embargo, continuaron determinadas políticas de precios mínimos, por ejemplo para la soja. Asimismo, el gobierno se comprometió a mantener los incentivos para que siguiera creciendo el sector a tasas razonables⁵.

En diversos países, muchos de los organismos que tradicionalmente regulaban la actividad son eliminados o se privatizan. En la Argentina, por el decreto de desregulación del año 1991, quedaron eliminados de cuajo los principales organismos que habían regulado la actividad agropecuaria desde 1930 a esta parte: la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos, la Dirección Nacional del Azúcar, etcétera. La eliminación de estos organismos de control, por ejemplo de la Junta Nacional de Granos, significó que se volviera a dar a las grandes empresas exportadoras el control de las exportaciones cerealeras.

Como parte de esta política se desreguló y privatizó gran parte de la estructura agroindustrial vinculada con el campo mexicano. Una serie de empresas, fideicomisos y organismos estatales fueron transferidos al sector privado. “...El saldo de la desincorporación en el medio rural apuntaló la emergencia y fortalecimiento de grandes grupos financieros nacionales y transnacionales que adquirieron las entidades públicas económicamente más redituables y con mejores perspectivas comerciales. (...) En 1989 el sector agropecuario contaba con ciento tres entidades y organismos, en 1992 cuenta con veintiséis. Los grandes grupos financieros compraron bodegas, supermercados y centros comerciales, complejos agroindustriales de granos, leche y productos pecuarios de la gigantesca paraestatal CONASUPO, plantas industriales de Fertimex, Tabamex e Inmecafé, infraestructura portuaria, laboratorios, ingenios azucareros, etcétera” (Encinas, de la Fuente, Mackinlay y Romero, 1995: 24).

Entre las medidas más “estructurales” que acompañaron a estos cambios de política, se plantea el fin de la reforma agraria. En México, la reforma del artículo 27 de la Constitución da por finalizado el reparto agrario que se venía manifestando desde la Reforma Agraria cardenista. La reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana, “...piedra angular del pacto social entre el Estado y el sector campesino (...) busca desde la óptica oficial readecuar la estructura de tenencia de la tierra de acuerdo con las necesidades impuestas por la privatización y globalización de la economía mexicana, creando un nuevo marco jurídico más favorable para atraer inversiones en el campo, generar economías a escala y fo-

mentar distintas formas de asociación entre el capital privado y los productores tradicionales con potencial productivo...” (Romero Polanco, 1995: 70)⁶.

En la Argentina, en los años ‘70 y ‘80 surge un nuevo contratismo con el auge de contratos accidentales, dejándose de lado las normas atinentes a las leyes de arrendamiento promulgadas en los años ‘40. Asimismo comienza un período de consolidación de la gran propiedad y desaparición continua de la mediana y pequeña propiedad. En los años ‘90 los medianos y pequeños propietarios se encuentran en una situación difícil, atacados por la política desregulatoria del gobierno, generándose protestas y movilizaciones de diferente tenor. Funcionarios de gobierno proclaman que es inevitable la desaparición de 200 mil productores, la mitad de los existentes en la actualidad (Giarracca y Teubal, 1995).

En Brasil la situación es sustancialmente diferente en este aspecto. Desde el inicio del régimen civil en los años ‘80, los conflictos sociales agrarios asumen una nueva centralidad, influyendo significativamente sobre la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva constitución nacional de 1988 incluye, entre otras, reglas referentes a la política agrícola, la política de tierras, la reforma agraria, del medio ambiente, y de la seguridad y previsión sociales. Las disposiciones constitucionales referidas a la reforma agraria fueron reglamentadas en 1993. A través de la Ley Agraria de 1993 “...fueron establecidos criterios operacionales para la reglamentación del principio de la función social de la propiedad fundiaria...” (Brumer y Tavares, 1998: 33). El movimiento más importante que en la actualidad motoriza a los trabajadores rurales es el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).

Reflexiones finales

La consolidación de un sistema agroalimentario mundial bajo la égida de grandes corporaciones transnacionales, conjuntamente con las políticas de liberalización y de ajuste estructural aplicables al medio rural, son factores que influyen significativamente sobre la “nueva ruralidad” en ciernes de América Latina. No cabe duda de que se han ido estableciendo pautas, estructuras, tendencias y nuevas formas organizativas que estarían transformando profundamente al medio rural.

Si las tendencias globalizantes a las que hacemos referencia en este artículo se mantienen, es muy probable que tal ruralidad resulte vaciada en forma creciente de su contenido agrario. En este sentido, las transformaciones que se manifiestan en el medio rural y que describiéramos al inicio de este trabajo, pueden, como hemos intentado establecer aquí, relacionarse estrechamente con los procesos de globalización en sus diversas manifestaciones. Estas tendencias de la globalización apuntan al empobrecimiento e incluso la desaparición de los tradicionales actores sociales del medio rural: campesinos, medianos y pequeños productores agropecuarios, trabajadores rurales, etcétera.

Sin embargo, debemos remarcar que lo señalado aquí constituye tan sólo tendencias y, por lo tanto, factores que pueden ser contrarrestados por otros, en particular por la lucha de múltiples movimientos sociales tanto dentro como fuera del sector rural -de pequeños productores agropecuarios, campesinos, trabajadores rurales, verdes, medioambientales o de otra naturaleza, por ejemplo, aquellos que protestan contra la Organización Mundial del Comercio, el FMI y el Banco Mundial, etc. Todos estos movimientos resisten el embate de los procesos de globalización que hemos descrito en este artículo, y por lo tanto habrán de contribuir a la definición de otra ruralidad, diferente a la que aparentemente estaría siendo impulsada por los Estados y las grandes corporaciones transnacionales agroindustriales de la globalización.

Bibliografía

- Brenner, R. y Glick, M. 1991 “The Regulation Approach: Theory and History”, en *New Left Review* (Londres) N° 188.
- Bromley, Simon 1996 “Globalization”, en *Radical Philosophy* (Londres) N° 80, Noviembre/Diciembre, pp. 2-5.
- Brumer, Anita y Tavares dos Santos, José V. 1998 “Tensões agrícolas e agrarias na transição democrática brasileira”, en Giarracca, Norma y Cloquell, Silvia (comps.) *Las agriculturas del MERCOSUR. El papel de los actores sociales* (Buenos Aires: Editorial La Colmena).
- Burbach, Roger y Flynn, Patricia 1983 *Las agroindustrias transnacionales: Estados Unidos y América Latina* (México D. F.: Ediciones Era).
- Chesnais, F. 1994 *La mundialización du capital* (París: Syros).
- de Janvry, Alain 1981 *The Agrarian Question and Reformism in Latin America* (Baltimore: The John Hopkins Press).
- Djurfeldt, G. 1992 “Classical discussions of capital and peasantry: a critique”, en Harriss, J. *Rural Development* (Nueva York y Londres: Routledge).
- Domike, Arthur y Barraclough, Solon 1972 “La estructura agraria en siete países de América Latina”, en Flores, Edmundo (selección) *Lecturas sobre desarrollo agrícola* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Encinas, Alejandro (Coordinador); de la Fuente, Juan; Mackinlay, Horacio y Romero, Emilio 1995 *El campo mexicano en el umbral del siglo XXI* (México D. F.: Espasa-Calpe).
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel 1995 “El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo”, en Teubal, Miguel et al *Globalización y expansión agroindustrial. ¿Superación de la pobreza en América Latina?* (Buenos Aires: Corregidor).
- Glyn, A y Sutcliffe, B. 1992 “Global but Leaderless”, en Miliband, Ralph y Panich, Leo (coords.) *The Socialist Register 1992* (Londres: Merlin Press).
- Heffernan, W. D. 1998 “Agriculture and Monopoly Capital”, en *Monthly Review*, Nueva York, Vol. 50 N° 3, Julio/Agosto.
- Hobsbawm, Eric 1996 (1994) *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991* (New York: Vintage Books).
- Houtzager, Peter 1998 “State and Unions in the Transformation of the Brazilian Countryside, 1964-1979”, en *Latin American Research Review* Albuquerque (EE:UU) Vol. 33, N° 2.
- Kotz, David 1990 “A Comparative Analysis of the Theory of Regulation and

the Social Structure of Accumulation Theory”, en *Science and Society* Nueva York) Vol. 54, N° 1, Primavera.

Maglin, S. y Schor, J. (compiladores) 1991 *The Golden Age of Capitalism* (Oxford: Clarendon Press).

Madeley, J. 1999 *Big Business, Poor People: The Impact of Transnational Corporations on the World's Poor* (Londres y Nueva York: Zed Books).

McMichael, Phillip 1995 “The Agrarian Question revisited on a global scale”. Ponencia presentada a la Conferencia Internacional sobre la Cuestión Agraria, Wageningen, Holanda, 21 a 14 de Mayo.

McMichael, Phillip 1998 “Global Food Politics”, en *Monthly Review* (Nueva York) Vol. 50, N° 3, Julio/Agosto.

McMichael, Phillip y Myhre, David 1991 “Global Regulation vs. The Nation-State: Agro-Food Systems and the New Politics of Capital”, en *Capital & Class* (Londres) N° 43, Primavera.

Ramonet, I. 1996 (1995) “El pensamiento único”, en *Le Monde Diplomatique* Edición española (Madrid) Enero.

Romero Polanco, E. 1995 “La modernización del campo mexicano: saldos y perspectivas”, en Encinas, A. (coord.); de la Fuente, Juan; Mackinlay, Horacio y Romero, Emilio (comps.) *El campo mexicano en el umbral del siglo XXI* (México D. F.: Espasa-Calpe).

Teubal, M. 1987 “Internationalization of Capital and Agroindustrial Complexes: Their Impact on Latin American Agriculture”, en *Latin American Perspectives* (Newbury Park, California) Issue 54, Vol. 14, N° 3, Verano.

Teubal, M. 1995 *Globalización y Expansión Agroindustrial. ¿Superación de la pobreza en América Latina?* (Buenos Aires: Ediciones Corregidor).

Teubal, M. 1998 “Globalización y sus efectos sobre las sociedades rurales de América latina”, en *Globalización, Crisis y Desarrollo Rural en América Latina*. Memoria de Sesiones Plenarias, V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural de ALASRU. 13 a 15 de Octubre, Colegio de Postgraduados y Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco, México.

Torres-Rivas, E. 1994 “Democracia y participación campesina en Centroamérica”, en Tangermann, Klaus-D. y Ríos Valdés, Ivana *Alternativas campesinas. Modernización en el agro y Movimiento Campesino en Centroamérica* (Managua: Latino Editores/CRIES).

Thrupp, L. A. con la colaboración de Bergeron, G. y Waters, W. F. 1995 *Bittersweet Harvests for Global Supermarkets: Challenges in Latin America's Agricultural Export Boom* (Washington D.C.: World Resources Institute).

Notas

1 También se dejó sin protección en los EE.UU. a industrias textiles, automotrices y siderúrgicas a cambio de un mejor acceso de mercado para los sectores de servicio y financiero (McMichael, 1995).

2 Por *régimen de acumulación* nos referimos a una “...particular forma del proceso de acumulación gobernada por un conjunto particular de normas sociales...” (Kotz, 1990: 7); “...representa un patrón distintivo de la evolución económica que, aunque limitado en el tiempo histórico, es relativamente estable...” (Brenner y Glick, 1991: 47).

3 “...Uno de los factores cruciales que afectaron al sector agrario latinoamericano fue el desarrollo de una industria capitalista, aparejado al ascenso de la burguesía industrial y del Estado moderno. En países como Brasil, Argentina, México y Colombia, en donde ya había una industria ligera desde principios del siglo, la crisis económica internacional de los treinta estimuló notablemente el proceso de industrialización. En efecto, la disminución de las ganancias obtenidas mediante la exportación y la consiguiente falta de divisas para pagar la importación de manufacturas -ambas resultantes de la contracción de los mercados mundiales- produjo una situación favorable al desarrollo industrial acelerado. Muchos gobiernos revisaron su política económica para alentar la ‘sustitución de importaciones’, o sea, la producción local de artículos tales como textiles, calzado, productos químicos ligeros y alimentos empacados, la mayoría de los cuales antes se habían importado...” (Burbach y Flynn, 1983: 106).

4 No es de extrañar que en Corea y en Taiwán los inicios del auge económico en los años de la postguerra se basaran también en la instauración de importantes reformas agrarias. Sin embargo, en muchos países de América Latina, como señala de Janvry, el efecto de la reforma agraria sobre la consolidación del mercado interno era mínimo (de Janvry, 1981: 211-212).

5 Los complejos agroindustriales se hallaron relativamente consolidados para esa época. Según la política de precios mínimos de los dos primeros años de la década de 1980, el gobierno se comprometió a comprar los productos agrícolas incluidos en el programa al precio mínimo establecido independientemente de los precios vigentes del mercado (Brumer y Tavares, 1998: 25).

6 El nuevo esquema modernizador del agro mexicano exigía “...una nueva actitud de los productores rurales, ya que sólo aquellos sectores de agricultores que demuestren eficiencia productiva y competitividad...” podrían aspirar a recibir apoyos y subsistir en el mercado. En este esquema, la mayoría de los recursos financieros y tecnológicos se concentran en estimular la producción de actividades donde existen perspectivas de competir en el mercado nacional e internacional (Romero Polanco, 1995: 71).

O conceito de Rural

Deis Siqueira * e Rafael Osório **

Introdução

As políticas neoliberais vêm se tornando cada vez mais hegemônicas, sobretudo após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Identificam-se, nesta atual “etapa superior do desenvolvimento do capitalismo”, novas formas de flexibilização do trabalho, liberalização financeira, privatizações, novas aberturas ao exterior e fragilização dos Estados nacionais. Afinal, trata-se da substituição de formas “tradicionais” estatais, por formas globais de se governar as práticas de mercado, no sentido de que se reorganizem os Estados para que as condições de realização da livre circulação de dinheiro e de mercadorias sejam facilitadas. Podemos pensar, portanto, em uma disciplina e uma autoridade abstrata do mercado. Ainda que a globalização seja antiga, vem tomando esta nova configuração.

Como categoria histórica, *la globalización es un equivalente a la “internacionalización económica”, y por lo tanto es un fenómeno intimamente vinculado com el desarrollo capitalista. Si por globalización entendemos la internacionalización económica ... entonces no es un fenómeno nuevo, inédito ni irreversible* (Saxe-Fernández, 1998: 88).

* Licenciada em antropologia e sociologia, Universidade de Brasília, 1975. Dra., Universidad Nacional Autónoma de México, 1984. Professora do Departamento de Sociologia, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília; investigadora del CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Presidenta da ONG-Organização Não-governamental IDB – Instituto Diversidade Brasil. Pós-doutoranda, Departamento de Antropologia Social e História da América e África, Universidade de Barcelona, Espanha.

** Mestrando em Sociologia, Departamento de Sociologia, Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Brasília.

O universo do consumo constrói-se enquanto instância legitimadora da transnacionalização que se contrapõe cada vez mais a outras instâncias, tais como o Estado, a escola, a família. O mundo do consumo está em cada país, mas de maneira vinculada à “modernidade do mundo”. O consumo poderia ser definido como uma nova territorialidade transnacionalizada e simultaneamente diferenciada: universo do consumo e universo de estilos de vida.

O eixo deste movimento de internacionalização financeira, industrial e comercial parece ser a tendência à transformação das relações sociais, dos produtos e dos valores em mercadorias, fomentando o domínio do mercado.

Mas não se trata de um sistema, e sim de um processo, não implicando em homogeneização do planeta em todas suas dimensões. Pode-se, com mais segurança, falar-se de uma tecnologia, porém não de uma cultura, cada vez mais hegemônica. Neste sentido, torna-se útil utilizarmos a distinção que propõe Renato Ortiz: dá-se uma globalização da economia e uma mundialização da cultura.

Entretanto este processo de globalização na agropecuária é particularmente irregular, na medida em que aí, mais visivelmente, não consegue alcançar a todos os setores econômicos igualmente. Afinal, intervêm fatores específicos que dificultam ou retardam a sua internacionalização. A agropecuária possui formas complexas de funcionamento, que estorvam sua transformação em um regime aberto, tal como é requerido pelas empresas cada vez mais globalizadas.

Si pensamos en lo “global”...com producciones flexibles, diversificadas, internacionalizadas y acotadas a mercados específicos, el panorama agrícola es aún poco expresivo ... La agricultura, debido a sus factores estructurales, conformados por recursos dados e inmóviles, es un sector predeterminado por las ventajas comparativas y por lo tanto poco permeable a la nueva dinámica (Mundt, 1998: 63).

Ainda assim, destaca-se a crescente orientação da produção para mercados capitalistas e a articulação dos produtores com o complexo agro-industrial, destacando-se cada vez mais os Complexos Agroindustrias a partir de relações de poder crescentemente assimétricas. Ou seja, a regra são decisões tomadas por grupos ou nichos de poder vinculados a grandes empresas ou conglomerados transnacionais ou transnacionalizados. Muitas conseqüências do processo de intensificação do domínio do capital sobre a agropecuária, como parte do movimento de crescente globalização, têm sido insistentemente indicadas: expropriação, expulsão do campo, precarização do trabalho, pluri-atividade, o aumento das relações de trabalho assalariadas. Assimetrias de poder vêm sendo acompanhadas por assimetrias em outras dimensões, sendo a mais visível, a exclusão de grandes parcelas da população, a partir sobretudo da exclusão do mundo do trabalho. Assim, ... *las regiones rurales en el Sur están siendo reconstruídas como plataformas de agro-exportación ... El asalto corporativo*

sobre las políticas agrícolas nacionales ... La relación contractual integra a los productores en una empresa esencialmente industrial, en la que semillas híbridas se combinan con insumos químicos. La coordinación global de sitios múltiples de producción, para obtener productos frescos todo el año, se logra a través de la tecnología de la información. La mercantilización de alimentos y recursos está en marcha desde hacia varios siglos ... Al cierre del siglo, somos testigos de una dislocación aún más amplia como resultado de la intensificación del dominio del mercado (McMichael, 1998: 135-151-153).

E como as ciências sociais vêm acompanhando este movimento?

Em reflexão anterior (Porto e Siqueira, 1997) indicamos como, no caso do Brasil, a partir da segunda metade da década de oitenta, evidenciou-se uma produção sociológica marcada pela fragmentação e pela dificuldade da construção de novos conceitos-sínteses que dessem conta do rural. Multiplicaram-se os estudos voltados especialmente à realidade dos *Sem-Terra*, dos *barrageiros*, dos *assentados* etc., ou seja, busca de compreensão de processos e de movimentos sociais em curso naquele período.

Apesar destas limitações (categorias descritivas, pouca capacidade de generalização), identificávamos a sinalização de algo novo: a existência de problemas e questões comuns a diversas áreas do conhecimento e da pesquisa, configurando temáticas, conceitos e categorias que pelo seu caráter transversal podiam permitir novos recortes, tais como identidade social, cidadania, relações de gênero, violência, ecologia.

Sem dúvida, surgiram novos objetos, conceitos e caminhos explicativos, tendencialmente multidimensionais ou integrativos, indicando possibilidades de novas propostas epistemológicas e metodológicas, tais como o *princípio de complexidade* de Edgar Morin, que objetiva justamente superar a divisão dominante entre ciências da natureza e cultura.

Dentro deste movimento destacam-se os *problemas ambientais ou ecológicos*, que parecem impor, eles mesmos, uma metodologia interdisciplinar e disciplinas híbridas. Assim, dentro da Sociologia, a Sociologia Ambiental, ou seja, o estudo da interação entre a sociedade e o ambiente, ancorada em uma definição de mão dupla – social da natureza e ecológica da sociedade – é considerada por muitos estudiosos como uma especialização da Sociologia. Entretanto, para outros, esta estaria permitindo um questionamento a fundo da própria Sociologia (Woodgate, G., 1997). Neste sentido, também o conceito de Desenvolvimento Sustentável, basilar tanto na academia quanto nos movimentos sociais, indicaria a possibilidade de se transcender a antiga polaridade tradição/modernidade, ancorada em uma nova forma de apropriação da natureza (Toledo, 1998: 175).

Ocorre, sin embargo, que esta original nitidez de las demarcaciones territoriales tiende inexorablemente a disolverse conforme nos acercamos

al presente. Un presente marcado por la moderna sociedad industrial, donde el cambio tecnológico, la transmisión de la información y de la cultura, los nuevos medios de transporte y, en fin el proceso general de globalización, tienden a disolver la estrecha correlación que existía entre aquellos tres universos (natural, rural e urbano-industrial) y sus correspondientes territoriales (Toledo, 1998: 172).

Assim, para a discussão que nos ocupa, a reflexão em torno da categoria espaço é fundamental.

Esta vem se transformando profundamente, permitindo-nos olhar o universo do mundo globalizado de maneira privilegiada. Isto porque uma das conseqüências da globalização é o fenômeno da desterritorialização. Não se está afirmando que as fronteiras tenham se acabado, e sim que estas vêm sendo reconstruídas, a partir de novas lógicas, ainda que não se extingam as antigas. Afinal, critérios sócio-culturais podem ser muito mais importantes do que fatores tais como clima e tecnologia no processo de construção e reconstrução do espaço (Rosendahl, 1996: 38).

Em algumas regiões do planeta torna-se cada vez mais difícil distinguir os jardins urbanos, os jardins das casas, as paisagens não manejadas, as parcelas agropecuárias. Inclusive o aparecimento de novas indústrias, dispersas e mesmo camufladas *...en el paisaje de una naturaleza completamente humanizada terminan por trastocar, de manera definitiva, la expresión territorial o geográfica, compondo-se mais um continuum paisagístico do que espaços definíveis* (Toledo, 1998: 172).

Como pensar o espaço, categoria tão fundamental até recentemente para se pensar o rural, e mesmo o rural em sua relação, tão habitualmente referida em termos de rural-urbano?

O Conceito de Rural

A realidade é um fenômeno extremamente complexo. Nossos sentidos nos permitem apreendê-la em alguns de seus aspectos e hoje sabemos que outras espécies que conosco compartilham o planeta têm outros sentidos (ou às vezes o mesmo sentido organizado de outra forma) que lhes facultam apreender a mesma realidade sob aspectos inteiramente distintos. Assim, os limites à compreensão integral da realidade começam pela nossa percepção dela.

É na realidade que os seres vivos têm que satisfazer as exigências de seus organismos. Para tanto, não basta perceber a realidade, é preciso agir nela e sobre ela, a partir da forma como é percebida. Nos animais esta ação é preponderantemente instintiva: os comportamentos que os animais adotam em função da sua percepção da realidade, a forma de organização das suas

experiências individuais, são geneticamente determinados e, ainda que algumas espécies possam ser condicionadas, ou mesmo levadas a aprender algumas coisas, isto desempenha um papel muito pequeno na existência do ser em questão.

Entretanto, o ser humano tem uma peculiaridade que o distingue dos demais animais. Como aponta o antropólogo Clifford Geertz (1973), a partir de um determinado ponto de sua evolução biológica, o aparato cerebral passou a desenvolver-se de forma dependente da cultura: Como nosso sistema nervoso central – e principalmente a maldição e glória que o coroam, o neo-córtex – cresceu, em sua maior parte, em interação com a cultura, ele é incapaz de dirigir nosso comportamento ou organizar nossa experiência sem a orientação fornecida por sistemas de símbolos significantes (p. 37). A cultura é um poderoso sexto sentido que serve aos seres humanos como instrumento para orientar a organização das experiências individuais e da coletiva. Através dela temos acesso a uma extensão da realidade, o seu mundo particular, que só por ela mesma é perceptível.

Embora a cultura tenha infinitos aspectos, um deles nos interessa particularmente aqui, que é o seu caráter taxonômico. Toda cultura, por menos elaborada que seja, possui uma estrutura de classificação da realidade, tanto da “real” quanto da “cultural” e social (Durkheim e Mauss, 1973). Vários autores clássicos das Ciências Sociais, como por exemplo Marx, Weber, Durkheim, Parsons, concordam que com o desenvolvimento histórico as sociedades e as culturas foram progressivamente se tornando mais diferenciadas. Embora existam diversas diferenças entre eles a respeito de como se deu o processo e porquê e em que áreas, este é um ponto sobre o qual existe um razoável consenso: a diferenciação amplia as possibilidades de classificação e de composição de cosmovisões sobre a realidade. A diferenciação é um processo dialético não só na diacronia, mas também em sincronia. Ao mesmo tempo em que gera uma autonomia entre as esferas, ou instâncias, da vida humana, que progressiva e continuamente derivou, fragmentando algo que antes estava integrado, cria uma maior interdependência entre elas. Diacronicamente, leva a uma multiplicação de esquemas concorrentes ou coexistentes de classificação da realidade.

Estes esquemas não são produtos de indivíduos isolados. São socialmente produzidos e se constituem de representações. Entretanto, as representações não estão uniformemente distribuídas pelo corpo social e um objeto pode ter representações variadas dependendo do tipo de socialização que o seu observador “sofreu” (Durkheim, 1989). Esta distribuição se torna mais desigual à medida que a diferenciação progride e as sociedades contemporâneas passam a abrigar, negociando essa convivência da melhor forma possível, conflitos inerradicáveis de valores últimos (Weber, 1992). Um dos sistemas de classificação do mundo mais complexos que existe é o técnico-científico, que detém, na modernidade, o monopólio da verdade, conquistado à religião.

A ciência possui uma peculiaridade que a distingue dos demais esquemas de classificação e conhecimento do mundo, que é a impessoalidade e a objetividade (ao menos hipoteticamente) das suas representações, que por isso são denominadas conceitos. Assim, para uma pessoa normal, a idade dos outros é objeto de representações: o outro é velho, ou é novo, ou outra coisa, mas as representações da velhice e da juventude são extremamente variadas e calcadas em diferentes aspectos, ainda que possuam um núcleo comum. Para o pesquisador, a idade é o tempo transcorrido do nascimento da pessoa até a data de referência da pesquisa. É possível também definir quem é velho, mas a definição não pode ser feita nas mesmas bases que sustentam as representações sobre a velhice. Para conceituar a velhice é necessário dizer a partir de quantos anos se é velho, precisamente. Logicamente, este limite não é estabelecido a partir de nada. O conceito é um tipo especial de representação construído a partir da sujeição sistemática das representações relacionadas ao aspecto da realidade que está sendo conceituado a “testes” empíricos; uma média aceitável e construída metodicamente a partir de um conjunto de representações que pré-informavam o produtor do conceito e que o levaram a empreender a pesquisa e conceituar um aspecto determinado da realidade. Retomaremos isto adiante.

A diferenciação é o processo que cria o objeto da nossa discussão, o rural. Se nos remetemos ao período da Idade Média, o qual antecede à época em que vivemos, não precisamos refletir para constatarmos a irrelevância de uma discussão sobre o rural e o urbano para o homem medieval.

Logicamente, as cidades já existiam, entretanto, apenas parcela pouco significativa da população nelas residia. As pessoas plantavam para o sustento de sua própria comunidade feudal, levando uma vida que hoje classificaríamos de “rural”, embora para eles isto não tivesse, provavelmente, importância. Naquela época as cidades eram sobretudo pontos onde se localizava o(s) santuário(s), onde se realizava troca de mercadorias e portanto centros comerciais e administrativos.

Já no período paleolítico, o que efetivamente foi verificado com o surgimento das cidades foi a concentração de diversas funções até ali dispersas, e desorganizadas dentro de uma área limitada. Essa concentração, realizada no interior de muralhas, já continha partes da proto-cidade: santuário, fonte, aldeia, mercado e fortificação (Rosendahl, 1996: 41).

De qualquer forma as cidades começam a ganhar importância no processo de transição para o capitalismo. Centros de comércio, as cidades-estado italianas, Gênova, Milão, Florença e Veneza, foram as pioneiras do capitalismo em sua fase de acumulação primitiva (Arrighi, 1996). Era então o capitalismo essencialmente comercial. Todavia, a população ainda era majoritariamente “rural”.

Costumamos identificar a aceleração da migração da população para as cidades com o advento da Revolução Industrial e a ascensão do capitalismo industrial dando à

produção, em substituição à comercialização, o papel de principal fonte de acumulação de capital. Entretanto, como diz Marx (1994), nos primórdios da industrialização, a técnica ainda não havia produzido meios de domar as forças capazes de prover movimento às máquinas e, assim, as indústrias tinham que ser sediadas não nas cidades, mas nos locais aonde forças motrizes de origem animal ou natural (quedas d'água, moinhos de vento), estivessem disponíveis, ou seja, no campo. Com o desenvolvimento da máquina a vapor, a força motriz foi domada e a indústria tornou-se espacialmente independente, podendo se instalar nos centros urbanos. As vantagens desta mudança não serão discutidas aqui. O que nos interessa é que quando isto ocorre, como aponta José Graziano (1996), consuma-se a separação entre cidade e campo. Para este autor, o surgimento do rural é datado, pois ele apreende a realidade histórica a partir do desenrolar dos processos econômicos. Assim, na medida em que crescentemente vem ocorrendo uma industrialização do campo, sobretudo com a intensificação da globalização, os limites entre rural e urbano tornam-se tênues e haveria mesmo uma reintegração do campo e da cidade, o que seria marcado pela transição dos complexos rurais para os complexos agro-industriais.

Mas, o que seria o rural? Segundo Aldo Solari (1979), à primeira vista a definição parece dada, ou seja, quando falamos sobre rural achamos que estamos falando sobre algo bem definido. Entretanto, a definição de um conceito de rural suscitaria problemas complexos. As definições clássicas do conceito de rural partem de uma enumeração de vários aspectos da realidade que seriam indicadores da situação do local estudado. Solari enumera os traços que caracterizariam a sociedade rural, os componentes do conceito, segundo a obra clássica de Sorokin e Zimmermann. Abase do conceito é a dimensão econômica, o rural se caracteriza por um determinado tipo de atividade: a produção de alimentos através da criação de plantas e de animais. A esta atividade econômica estão vinculados todos os outros traços que caracterizariam o rural, como a diferença ambiental, já que no rural o contato com a natureza é direto e constante, e a própria atividade econômica que lhe é peculiar é realizada ao ar livre. O meio rural seria também mais arreado à técnica, nas atividades rurais lida-se com organismos vivos e com as forças da natureza, que não podem ser inteiramente controlados.

Outra diferença colocada por Sorokin e Zimmermann (apud Solari, 1979) diz respeito ao tamanho das comunidades, já que as comunidades rurais seriam menores (embora o termo menores já traga consigo problemas novos de definição), sua população seria mais homogênea que a urbana cultural e socialmente. No rural haveria também menos mobilidade social. A interação entre os indivíduos no mundo rural, devido a restrição do tamanho do grupo, é mais direta e concreta, as pessoas conhecem mais “intimamente” seus interlocutores. Existe uma pessoalidade nas relações em oposição à impessoalidade que reina nas relações urbanas.

Finalmente, há a questão da complexidade: o rural seria menos complexo que o urbano.

Embora, como nos diz Solari, Sorokin e Zimmermann tenham postulado que essas oposições eram extremos de uma escala gradativa, estes critérios, que no fundo são uns derivados dos outros, tendo como ponto de partida a caracterização da atividade produtiva e da técnica de produção, serviram de base para a elaboração de conceituações dicotomizadas do rural e do urbano. José Graziano da Silva (1997) considera que clássicos como Weber e Marx (anteriores a Sorokin e Zimmermann) tinham na distinção entre o rural e urbano a expressão do conflito entre duas realidades sociais diferentes, uma que havia incorporado o capitalismo, caracterizada pelo progresso da técnica e identificada com o novo - a urbana - e outra refratária ao capitalismo e à técnica, refúgio da aristocracia em extinção e de antigas relações e formas de vida - a rural.

Entretanto, as relações entre o rural e o urbano não foram sempre, historicamente, definidas pela heterogeneidade ou pela polaridade, como já vimos. A preocupação em conceituar o rural e o urbano surge em um momento específico. Isto porque estas relações dependeriam, como defende Maria Isaura Pereira de Queiroz (1979), fundamentalmente da estrutura organizacional da sociedade em questão. Se a sociedade fosse do tipo tribal, não haveria distinção prática entre rural e urbano; se fosse do tipo sociedade agrária, haveria distinção entre rural e o urbano, mas este último seria simplesmente um centro administrativo regulado pelo rural. Por fim, quando a sociedade assume o tipo urbano, ela já se libertou da dependência do meio rural no que toca à produção. Estes tipos de sociedades devem ser vistos como ideais no sentido weberiano, já que uma única sociedade global pode incorporar os três tipos, o que, segundo a autora, é justamente o caso da sociedade brasileira. De qualquer forma, dadas as relações sempre existentes entre o rural e o urbano, seria, na visão da autora, uma manifestação de pobreza metodológica o tipo de abordagem efetuado pela sociologia rural norte-americana, modelo aplicado no Brasil por um bom tempo.

As definições clássicas e dicotômicas podem ser entendidas como um fruto do processo de diferenciação ao qual nos referimos anteriormente. A sociedade vai se diferenciando, tornando a realidade mais complexa e, acompanhando o processo, a cultura elabora ainda mais os seus esquemas de classificação da realidade. Assim, no momento em que a diferenciação introduz diferenças marcantes em um espaço antes percebido como contínuo, representações distintas são engendradas e associadas a cada domínio, reificando o rural e o urbano. Passando a existir, estas dimensões passam a ser também objeto de preocupação e reflexão humana.

Quando a diferenciação se opera, o contraste é enorme e fetichizado: perde-se de vista a interdependência, as relações sempre existentes entre as duas dimensões, conceituadas agora sobretudo por oposição. Os conceitos de rural e urbano são construídos sobre as representações das mesmas coisas, com as quais estão em constante troca e mediação. O curso dos eventos não pára, e os

conceitos deixam com o tempo de ser operacionais em relação aos conteúdos a que se aplicam. Com a agregação de novos elementos às representações do rural e do urbano e graças aos efeitos que estas exercem sobre as realidades que representam, torna-se mais difícil “achar” um rural que equivalha ao definido no conceito tradicional. Mas as mudanças não se dão somente neste nível, dão-se também em vários outros.

Para o marxismo o desenvolvimento do campo nos moldes capitalistas, com o estabelecimento de uma sociedade dividida em duas classes, a dos grandes proprietários e donos dos meios de produção rurais, e um proletariado rural “sem terra”, possuidor apenas de sua força de trabalho, era uma questão de tempo – o crescente desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Isto representava uma séria ameaça aos camponeses, que trabalhavam a terra em moldes tradicionais com a família. Entretanto, nem todos os teóricos consideravam que os camponeses estariam fadados ao desaparecimento com uma inevitável capitalização do campo. Alguns, como Chayanov (1974), consideravam que a agricultura camponesa resistiria por ter vantagens em relação ao capitalismo, pois a economia familiar poderia se manter em condições inviáveis para uma empresa capitalista, como trabalhar por períodos sem angariar lucros. Outros, como Kautsky (1968), líder da II Internacional, preferiam acreditar que com o desenvolvimento do capitalismo na agricultura não haveria nem a supressão do campesinato e da pequena exploração agrícola, tampouco o estabelecimento da exploração camponesa por sua suposta eficiência superior, mas a coexistência da pequena e da grande exploração. O que importava destacar seria o processo de industrialização da agricultura.

Graziano da Silva (1996, 1997) chama a atenção para as mudanças que ao se operarem na sociedade brasileira transformaram o rural, o urbano e as suas relações, tornando praticamente impossível a análise destes meios através da conceituação dicotômica tradicional. Assim sendo, seria necessário na contemporaneidade entender o rural e o urbano como um contínuo. Isto porque o rural se urbanizou, tanto devido ao desenvolvimento e aplicação de técnicas industriais de agricultura, quanto devido, o que é sem dúvida muito interessante, ao transbordar do urbano para o rural. Solari (1979) concorda com o fato de que em face das mudanças por que passou o campo, a idéia de contínuo passa a ser mais eficiente para conceituar a realidade. Entretanto ele pondera, como também faz Carneiro (s.d.), que a idéia do contínuo não deve ser comprada sem reflexão, pois em vários locais, especialmente nos países em desenvolvimento e nos países “atrasados”, a industrialização da agricultura e as outras mudanças que levam à formulação da continuidade entre o rural e o urbano ainda não se constituíram. A diferenciação não opera com a mesma intensidade em todos os pontos do globo terrestre. Assim, se a nova conceituação de rural e urbano é eficiente para o campo altamente industrializado e urbanizado dos países desenvolvidos e de determinadas áreas dos países em desenvolvimento, a conceituação tradicional

pode ser ainda eficiente para conhecer a realidade nos locais aonde ainda impera a dicotomia e o campo ainda está longe da cidade.

Retomando a relação com o processo de diferenciação, podemos perceber que após o surgimento do urbano e do rural, a diferenciação prossegue dentro das instâncias. Acontinuada diferenciação interna termina por contribuir para minimizar a externa, que ocorreu inicialmente, trazendo de novo à tona as relações profundas existentes entre as instâncias que haviam sido perdidas de vista. Metaforicamente, é como se um plano fosse dividido ao meio e suas metades recebessem respectivamente as cores preto e branco. É a primeira etapa da diferenciação, em que a atenção se foca no contraste, e não no relacionamento profundo que existe, não pelas cores, mas pelo fato de serem as metades partes do mesmo plano. Gradualmente, a fronteira antes nítida entre as cores começa a se transformar. O preto entra no branco e o contrário, gradualmente, as tintas se misturam e por fim temos o plano preenchido não mais por duas metades, mas por um gradiente que vai do branco em um extremo do plano ao preto em outro, passando por infinitos tons de cinza. É a segunda etapa da diferenciação, quando as definições precisas são implodidas e ressurgem gloriosas a relação profunda e a unidade existente entre preto e branco, componentes do mesmo plano, da mesma realidade. Em alguns lugares do Brasil, o plano ainda se encontra seccionado em metades contrastantes, em outros, já há o gradiente, o contínuo.

Assim, se levarmos em consideração os alertas de Solari (1979) e Carneiro (s.d.), não precisamos desqualificar os argumentos de Graziano da Silva (1996, 1997), pois podemos entendê-los não com a pretensão de se referir ao Brasil inteiro, mas a um “novo rural” que emerge em algumas áreas específicas do país, principalmente naquelas áreas rurais mais próximas e integradas a grandes centros metropolitanos. Nestes locais, o apelo ambiental do rural, que é um tipo de representação relativamente novo, conjugado às antigas representações idílicas e românticas do rural, fizeram com que este espaço passasse a ser ressignificado. Como nos diz Graziano da Silva (1997), as pessoas passaram a buscar o rural como ambiente para o lazer e para a fuga dos problemas da vida urbana, investindo em chacáras, hotéis-fazenda, spas e coisas do gênero. Paralelamente, o homem do campo deixa de ter uma atividade fixa e começa a se configurar como um trabalhador de tempo parcial, que não mais se ocupa de tarefas exclusivamente rurais. Torna-se um trabalhador pluriativo, fenômeno bem descrito por alguns estudiosos, como, por exemplo, Lauro Mattei (s.d.) no seu trabalho sobre a pluriatividade em Santa Catarina. Ou seja, começa a se formar no rural um mercado para profissões outrora tipicamente urbanas, motoristas, secretárias, professores, administradores e muitos outros. Graziano da Silva (1997) aponta que este processo teve um efeito curioso, que foi um aumento da renda do rural, algo que sempre tinha sido, sem sucesso, o objeto de políticas públicas de combate à miséria no campo. São precisamente as rendas oriundas de atividades não-agrícolas as responsáveis por esta melhoria. Mas não devemos perder de vista o fato de que em grandes áreas do país parte da população rural vive como no século passado.

Assim, a conceituação de rural vai depender diretamente da localidade a que nos referimos, já que, por exemplo, no interior de São Paulo a realidade está organizada de uma forma totalmente diversa da forma que assume em outros rincões do país. Entretanto, a forma que escolhemos para conceituar a realidade não depende exclusivamente de como a percebemos organizada, mas também de como a organizamos. Assim os conceitos partem das representações e dos conceitos pré-existentes. Graziano da Silva e seus colegas jamais fariam de um contínuo se a dicotomia não estivesse conceitualmente postulada, se novas representações não houvessem sido acrescidas ao estoque de possibilidades de classificação de aspectos da realidade, se representações antigas não tivessem sido polissemizadas, investidas de novos conteúdos e significações. O conceito de rural, como muitos outros, é simultaneamente suficiente e insuficiente, porque a realidade não conhece classificações ou esquemas de qualquer espécie: nós é que os criamos para nos orientarmos na complexidade da existência, da realidade, a qual precisamos conhecer, seja através de teorias científicas, religiosas ou de senso comum. Para organizar a nossa experiência, nós emolduramos de várias formas a realidade, e o conceito de rural é uma delas.

Mesmo os conceitos que se poderiam pensar os mais precisos e objetivos são calcados nas representações várias existentes sobre o aspecto da realidade que se pretende conceituar. Assim, por exemplo, o conceito de rural utilizado nas pesquisas do IBGE (PNADs, Censos...) é o seguinte: o que o município define como rural em seu plano diretor. Ora, o plano diretor do ordenamento espacial dos municípios é elaborado por uma equipe de técnicos, mas é submetido à aprovação das câmaras municipais. Ou seja, são critérios políticos que definem, em última análise, o que é urbano e o que é rural. E os políticos não decidem com base em critérios racionais, mas com base na tradição e nas representações que eles têm do que é o rural, já que esta história de fazer conceitos precisos e objetivos é um problema das ciências sociais e não da política. Concluindo, podemos dizer que o conceito de rural está passando por uma reelaboração.

Provavelmente, jamais haverá consenso sobre ele nas ciências sociais, devido às características peculiares do nosso ramo do conhecimento, já exaustivamente discutidas por vários autores. Assim, é prudente ao se empreender um trabalho de fôlego que envolva a utilização deste conceito, explicitar claramente em que sentido ele é entendido e quais os fenômenos, quais aspectos da realidade, a que se refere. Obviamente isto tem que ser calcado tanto nas representações do domínio do senso comum quanto nos conceitos existentes no campo das teorias científicas, senão correríamos o risco extremo de nos deparar com alguém que denominasse urbano o rural e vice-versa.

Bibliografia

- Arrighi, G. 1996 *O Longo Século XX* (Rio de Janeiro: Contraponto; São Paulo: Unesp).
- Carneiro, M. J. s/f *Ruralidade: novas identidades em construção*, in <http://www.eco.unicamp.br/projetos/rurbzeze.html>.
- Chayanov, A. V 1974 *La Organización de la Unidad Camponesa* (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Durkheim, É. 1989 *As Formas Elementares de Vida Religiosa* (São Paulo: Paulinas).
- Durkheim, É. e Mauss, M. 1973 “Algumas formas primitivas de classificação”, in Rodrigues, J. A. (org.) *Durkheim* (São Paulo: Ática, Grandes Cientistas Sociais) Vol. 1, Nº 1.
- Geertz, C. 1973 *The Interpretation of Cultures* (Nova Iorque: Basic Books).
- Graziano Da Silva, J. 1996 *A Nova Dinâmica da Agricultura Brasileira* (Campinas: Unicamp).
- Graziano Da Silva, J. 1997 “O Novo Rural Brasileiro”, in Shiki, S.; Graziano Da Silva, J. e Ortega, C. (orgs.) *Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade do Cerrado Brasileiro* (Uberlândia: Embrapa, UFU; Campinas: Unicamp).
- Kautsky, K. 1968 *A Questão Agrária* (Rio de Janeiro: Laemert).
- Marx, K. 1994 *O Capital* (Rio de Janeiro: Bertrand) Vol. 1, Livro 1.
- McMichael, Pp. 1998 “Globalización monetaria e estatal: reestructuración agroalimentaria al fin del siglo”, in *Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina: Memória de sesiones plenarias* (México: Universidad Autónoma Chapingo–Colégio de Postgraduados).
- Mundt, M. F. 1998 “Globalización y agricultura: escenarios y controversias”, in *Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina: Memória de sesiones plenarias* (México: Universidad Autónoma Chapingo–Colégio de Postgraduados).
- Porto, M. S. G. e Siqueira, D. E. 1997 “A pequena produção no Brasil: entre os conceitos teóricos e as categorias empíricas”, in Porto, M. S. G. (org.) *Politizando a Tecnologia no campo brasileiro: dimensões e olhares* (Rio de Janeiro: Relume-Dumará).
- Queiroz, M. I. Pp. 1979 “Do Rural e do Urbano no Brasil”, in Szmrecsányi, T. e Queda, O. (orgs.) *Vida Rural e Mudança Social* (São Paulo: Companhia Editora Nacional).

- Rosendahl, Z. 1996 *Espaço e religião* (Rio de Janeiro: UERJ-NEPEC).
- Saxe-Fernández, J. 1998 “Neoliberalismo y TLC: hacia ciclos de guerra civil?”, in *Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina: Memória de sesiones plenarias* (México: Universidad Autónoma Chapingo–Colégio de Postgraduados).
- Solari, A. B. 1979 “O Objeto da Sociologia Rural”, in Szmrecsányi, T. e Queda, O. (orgs.) *Vida Rural e Mudança Social* (São Paulo: Companhia Editora Nacional).
- Toledo, V. M. 1998 “Estudiar lo rural desde una perspectiva interdisciplinaria: el enfoque ecológico-sociológico”, in *Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina: Memória de sesiones plenarias* (México: Universidad Autónoma Chapingo–Colégio de Postgraduados).
- Weber, M. 1992 “A ciência como vocação”, in *Metodologia das Ciências Sociais* (São Paulo: Cortez; Campinas: Unicamp) Vol. 1.
- Woodgate, G. 1997 *The international handbook of environmental sociology*, Redclift M. & Woodgate, G. (Orgs.).

Superando el paradigma neoliberal: desarrollo popular sustentable

David Barkin *

“...Ciertas sociedades, traumatizadas por los choques políticos, económicos y ecológicos, necesitan catalizadores para recuperar sus capacidades organizativas y creativas...”.

Ben Abdallah y Engelhard (1993)

El neoliberalismo está exacerbando la polarización de la sociedad en todas sus dimensiones. El ajuste estructural, con su programa de integración a la economía internacional y austeridad del sector público, ha reducido radicalmente las posibilidades de crecimiento equitativo y satisfacción de las necesidades sociales. Para la mayoría de los latinoamericanos, esta apertura neoliberal es una pesadilla. La caída del ingreso real, el creciente desempleo y el acelerado retiro de las redes de seguridad social nos dejan pocas alternativas.

Un número significativo de personas, como sea, han elegido intentar construir sus propios caminos de sobrevivencia. En el presente muchas de estas estrategias no son más que arreglos precarios para asegurar el ingreso necesario a fin de mantener cuerpo y alma unidos. Comprenden una combinación de formas tradicionales de producción para incrementar el nivel de autosuficiencia local, financiado por otras actividades en la misma región u otra. En este momento la gente es forzada a emigrar, aceptando frecuentemente trabajos en las circunstancias más desafortunadas, con un deterioro consecuente de sus vidas y contribuyendo a la desintegración de la cultura y la sociedad.

Esta inesperada respuesta de millones que no están dispuestos a aceptar la inevitable absorción del pantano neoliberal ofrece un punto de partida para estrategias alternativas, que son exploradas por innumerables comunidades y acadé-

* Profesor de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. Recibió su doctorado en Yale University y el Premio Nacional de Economía Política en México.

micos en todo el hemisferio. Las contradicciones del desarrollo neoliberal son tan profundas que hasta el desarrollo de la comunidad internacional ahora reconoce su importancia como un camino para responder a la presente crisis y buscar una ruta progresiva de transición hacia un mundo mejor. Son tan importantes, que una nueva bibliografía se está enfocando a propuestas de nivel local, incluyendo la exploración de problemas relacionados con la participación y el género, mientras que nuevas organizaciones han surgido para tomar ventaja de los espacios políticos que esta apertura está creando y para utilizar los recursos que están disponibles (Martínez Alier, 1995).

Muchas de estas alternativas surgen del interés por la necesidad de buscar un nuevo enfoque de sustentabilidad. Este trabajo se concentra en los problemas para desarrollar una estrategia de desarrollo sustentable. La sustentabilidad se ha convertido en una parte importante de la discusión sobre el desarrollo. De igual forma, es cada vez más claro para profesionales y académicos que nuestra opinión sobre las estrategias de desarrollo debe cambiar. A menos que a los diferentes enfoques se les permita crecer, la estrategia de integración económica internacional prevaleciente destruirá nuestra capacidad de emprender esta tarea. Dichos nuevos enfoques requieren más que la defensa de nuestro medioambiente. La conservación de los ecosistemas de una región depende de más que de un reconocimiento político de la importancia del problema. También requiere del fortalecimiento y reconstrucción de la capacidad económica y social de la población con el conocimiento y las habilidades necesarios para emplearse en las actividades productivas requeridas para proteger y enriquecer los sistemas naturales en los que estos recursos existen. Este trabajo se da a la tarea de explorar una estrategia de desarrollo sustentable. Construye, sobre los principios de una base productiva diversificada, el uso creativo de los recursos locales y la participación local en la planeación e implementación.

La herencia del desarrollo

La economía dual de hoy en día es un anacronismo. Mientras la internacionalización promete hoy más que nunca mayores ganancias para el capital, las contradicciones creadas por el empobrecimiento están provocando una intensa y amplia rebelión en muchas partes. En este ensayo se ha trazado la expansión internacional del capital y la manera en que integra a los recursos y a la gente en un sistema polarizado de gran riqueza acompañado por pobreza y despojo. La expansión ha creado vastas áreas deforestadas, sin posibilidades de ser cultivadas, con importantes grupos de gente viviendo en condiciones precarias en las áreas rurales o marginales urbanas. Este desperdicio de recursos naturales y humanos impone una pesada carga a la sociedad, no sólo en términos de oportunidades desaprovechadas, sino también por los costos del manejo de las tareas de control social.

Sustentabilidad

El desarrollo sustentable se ha convertido en un poderoso y controvertido tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y los funcionarios de los organismos del desarrollo. Ahora todos formulan sus propuestas para el cambio en términos de su contribución a la “sustentabilidad”. Existe un reconocimiento amplio de que *no se pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per cápita en los países ricos* a la gente que vive en el resto del mundo. Muchos añaden que los niveles actuales de consumo no pueden ser mantenidos, aun para aquellos grupos que ahora disfrutan de elevados niveles de consumo material¹. En este nuevo discurso, los recursos que nos rodean no son sólo el capital natural heredado, incluyendo las materias primas (tales como productos del suelo y subsuelo, buena calidad del agua y el aire, bosques, océanos y tierras húmedas), sino también la capacidad de la tierra para absorber los desperdicios producidos por nuestros sistemas productivos. Por supuesto, el análisis de los recursos también incluye consideraciones sobre la calidad de los ambientes construidos en los cuales vivimos y trabajamos (una introducción excelente para la discusión subyacente puede encontrarse en Wilson, 1992).

El interés en la sustentabilidad se ha globalizado, reflejando el miedo generalizado al deterioro de la calidad de la vida. Los sistemas productivos y los patrones de consumo existentes amenazan la continuidad de nuestras organizaciones sociales. Los patrones actuales de desarrollo son injustos y antidemocráticos. Como reacción, surge el espectro de la desintegración de los sistemas presentes: social, político, productivo y, aún, de riqueza personal. Una estructura diferente, más acorde con las posibilidades de la tierra para mantener y reproducir la vida, debe reemplazarlos.

Para dirigirnos a las cuestiones de sustentabilidad, debemos entonces confrontar los dilemas fundamentales que enfrentan las instituciones del desarrollo. Aunque los enfoques de la difusión del progreso económico por goteo enriquecen a algunos y estimulan el crecimiento en economías y sectores “modernos” dentro de las sociedades tradicionales, no responden a las necesidades de la mayor parte de la gente. Aún más, contribuyen a agotar las reservas mundiales de riqueza natural y al deterioro de la calidad de nuestro ambiente natural.

En el análisis final, descubrimos que en las condiciones presentes *la misma acumulación de riqueza crea pobreza*. Mientras que los pobres sobreviven en condiciones infrahumanas y por eso son obligados a contribuir a la degradación ambiental, lo hacen porque les falta la posibilidad de evitar esta destrucción. Aún en el más pobre de los países, los abismos sociales no sólo evitan que los recursos sean utilizados para mejorar la situación, sino que realmente agravan el daño, sacando a la gente de sus comunidades y negándole las oportunidades para proyectar sus propias soluciones. Por esta razón, la búsqueda de sustentabilidad implica una estrategia de un dualismo moderno: por una parte, debe facilitar a la

gente el fortalecimiento de sus propias organizaciones o la creación de nuevas, utilizando sus recursos relativamente magros en la búsqueda de una alternativa y de una resolución autónoma de sus problemas; por otra parte, una estrategia de desarrollo sustentable debe contribuir al surgimiento de un nuevo pacto social, cimentado en el reconocimiento de que son esenciales la erradicación de la pobreza y la incorporación democrática de los desamparados dentro de una estructura productiva más diversificada.

La sustentabilidad no es “simplemente” un asunto del ambiente, de justicia social y de desarrollo. También se trata de la gente, y de nuestra sobrevivencia como individuos y culturas. Es decir: de manera más significativa, la pregunta es si los diversos grupos de gente continuarán sobreviviendo y de qué manera. De hecho, la nueva bibliografía sobre el movimiento hacia la sustentabilidad celebra a los diversos grupos que han adaptado exitosamente sus herencias culturales, sus formas especiales de organización social y productiva y sus tradiciones específicas que los acercan a sus ambientes naturales.

La sustentabilidad es entonces acerca de una lucha por la diversidad en todas sus dimensiones. Las campañas internacionales para conservar el germoplasma, para proteger las especies en peligro de extinción y para crear reservas de la biosfera, están multiplicándose como reacción a la expansión de un modelo ofensivo. Pero las comunidades y sus miembros se sienten fuertemente presionados; luchan contra fuerzas externas poderosas para defender su individualidad, sus derechos y sus habilidades para sobrevivir mientras tratan de satisfacer sus necesidades. El interés por la biodiversidad, en su sentido más amplio, abarca no sólo a la flora y la fauna amenazadas sino también a la supervivencia de estas comunidades humanas como administradoras del ambiente natural y como productoras.

La internacionalización ha obstaculizado este movimiento hacia la diversidad. Los poderosos grupos que modelan la economía del mundo (corporaciones transnacionales, instituciones financieras y poderes locales influyentes, entre otros) están haciendo lo posible para romper estos intentos individuales o regionales, moldeándonos dentro de grupos sociales más homogéneos y tratables. Querrán colocarnos, cual piezas de ajedrez, como soportes de la actual estructura de desigualdad, comprometiéndonos con empleos productivos. Y para aquellos con suficiente suerte, con ingresos suficientes, para llegar a ser consumidores.

Revisión de bibliografía

En contraste con las teorías generalizadas sobre el proceso de desarrollo o los modelos sofisticados de crecimiento económico, la bibliografía sobre desarrollo sustentable ofrece una mezcla de loables principios éticos, manuales de organización e instrumentación, prácticas y estudios de caso muy concretos de éxitos y

fracasos. En esta sección, ofrecemos una rápida revisión de algunos de los enfoques generales y soluciones característicos de esta bibliografía, que pueden ser adecuados para varias regiones y problemas. Más que un intento por analizar todas las corrientes, esta revisión pretende comunicar el sentir de la discusión y las direcciones para el trabajo futuro. Por sobre todo, pretende demostrar que el desarrollo sustentable es una idea “cuyo tiempo ha llegado”. Su instrumentación requiere enfrentar directamente no sólo los intereses de la minoría rica, sino también el paquete de consumo que actualmente está definiendo la calidad de nuestras vidas. Este es el reto real que enfrentamos hoy.

La sustentabilidad es un proceso, más que un conjunto de metas bien específicas. Implica la modificación de un proceso en la naturaleza, la economía y la sociedad. Se ha puesto más de moda conforme la gente ha descubierto que el crecimiento de la producción, o aún de la riqueza nacional, no garantiza la mejora de los estándares de vida ni una mayor calidad de vida. Pero los retos de la protección ambiental son quizá la fuerza más inmediata que hace tan importante la discusión. Hay cuestiones éticas fundamentales sobre la sustentabilidad de una estructura global que perpetúa altos grados de desigualdad internacional mientras trabaja con las comunidades rurales con pocas oportunidades de satisfacer sus necesidades más básicas². Tales cuestiones globales van más allá del alcance de este documento, que se centra en estrategias para promover un mayor grado de sustentabilidad en el desarrollo rural y, en un esfuerzo por tener éxito, contribuirá a las modificaciones en los programas de desarrollo nacional conducentes a una participación popular mayor en su diseño e instrumentación.

Una estrategia para promover la sustentabilidad debe focalizarse en la importancia de la participación local y en la revisión de la forma en que la gente vive y trabaja. La cuestión de la autonomía y la autarquía locales o regionales es una parte importante de cualquier discusión sobre la integración nacional o internacional. Asimismo, promover la autonomía no requiere sacrificar la cooperación y la coordinación entre comunidades y regiones, y de esta manera pueden promover la autosuficiencia aun cuando producen para el mercado internacional. El análisis de las secciones previas de sustentabilidad está en el extremo opuesto a las recetas de las reformas neoliberales. Pero aun así, los defensores de la sustentabilidad reconocen que las elecciones no son tan simples: los productos y tecnologías industriales no serán rechazados simplemente porque implican control jerárquico y trabajo alienado. La respuesta debe ser reflexiva y confrontar las realidades de una sociedad global urbanizada en crisis, en la cual algunas naciones son incapaces de ofrecer los medios para resolver las necesidades más elementales a sus ciudadanos, mientras que al mismo tiempo otros se enriquecen, saqueando los tesoros de la naturaleza. En lo que sigue revisaremos brevemente algunas de las estrategias propuestas para promover el desarrollo sustentable en diferentes contextos.

Autosuficiencia alimentaria y relación entre producción y consumo

El primer asunto que debe ser tratado claramente es la autosuficiencia versus la integración. El sistema actual de comercio global promueve la especialización basada en los sistemas de monocultivo. La sustentabilidad no necesita ser equivalente a la autarquía o al aislamiento. Sí conduce a un grado de especialización mucho menor dentro de todas las áreas de la producción y de la organización social. La autosuficiencia alimentaria surgió como una necesidad de muchas sociedades debido a la precariedad de sus sistemas internacionales de comercio. Las tradiciones culinarias específicas surgieron de un conocimiento local altamente sofisticado de frutas y vegetales, hierbas y especies. Aunque la introducción de las tecnologías de la revolución verde elevó tremendamente el potencial productivo de los productores de alimentos, pronto descubriremos cuán duro fue alcanzar este potencial, y los altos costos sociales y ambientales que tal programa puede acarrear.

La autosuficiencia alimentaria es un objetivo controvertido que hace surgir la cuestión fundamental de la autonomía. Los partidarios del desarrollo rechazan unánimemente las llamadas de una posición extrema, aunque la declaración mexicana en favor de ese programa en 1980 ante el Consejo Mundial de Alimentación fue ampliamente aplaudida por los representantes del tercer mundo. Hoy la discusión es más compleja, ya que hay acuerdo general sobre dos factores contradictorios en el debate:

1. por un lado, la producción local de los bienes básicos que pueden ser producidos de manera más eficiente en otro lugar es un lujo que pocas sociedades pueden sostener, *si y sólo si* los recursos humanos y naturales no dedicados a la producción de estos bienes comerciables pueden encontrar empleo productivo dondequiera;
2. por otra parte, una mayor producción local de alimentos básicos contribuye a elevar los estándares nutricionales y mejorar los índices de salud. En el contexto de las sociedades actuales, en el que la desigualdad y las fuerzas discriminatorias contra los pobres rurales son la norma, un mayor grado de autonomía en la provisión de la base material para un estándar adecuado de vida parece ser una parte importante de cualquier programa de sustentabilidad regional. Contribuirá a crear más empleos productivos y un interés en mejorar la administración de los recursos naturales.

Hay algunas partes del mundo en las que la estrategia de la autosuficiencia constituiría un lujo dispendioso. Implicaría desviar recursos de otros usos que serían más productivos por su contribución económica, creando exportaciones que permitirían adquirir mayores volúmenes de alimentos. Pero aún en circunstancias en las que la importación al por mayor de los bienes básicos es recomendable, la gente interesada en el desarrollo sustentable cuestiona la modificación de las die-

tas locales que sean adecuadas a las posibilidades productivas de sus regiones. En la escena actual, la tendencia a sustituir los productos importados por los alimentos tradicionales es particularmente problemática, y presenta terribles consecuencias para el bienestar humano en muchas sociedades³.

La autosuficiencia alimentaria, sin embargo, es sólo una faceta de una estrategia más amplia de diversificación productiva, cuyos principios son en gran medida parte del movimiento hacia la sustentabilidad. Los principios de un mayor auto-abasto (en algunos trabajos en América Latina se usó la palabra *autoconfianza*) son fundamentales para todos los productos y servicios que una sociedad quisiera asegurarse a sí misma. Históricamente, los habitantes rurales nunca han sido “sólo” agricultores, o productores especializados en cualquier producto. Más bien, las comunidades rurales fueron caracterizadas por la *diversidad de sus actividades productivas en las que se comprometen para asegurar su subsistencia*; son comunidades de administradores de sistemas complejos de recursos. Fue sólo la aberración de transferir modelos de agricultura comercial a la teoría del desarrollo en el tercer mundo lo que contribuyó a menospreciar el carácter multifacético de los sistemas locales de producción tradicional. Las estrategias de desarrollo sustentable enfrentan directamente este problema, intentando reintroducir esta diversidad, conforme se aferran a los problemas de escalas apropiadas de operación y multiplicidad de productos.

La diversificación productiva tiene que relacionarse con el patrón de necesidades y recursos locales. En la medida en que la gente no esté involucrada en el diseño e instrumentación de programas que le aseguren sus propias necesidades de consumo, tendrá menos conciencia del impacto de sus demandas sobre el resto de la sociedad y del ambiente natural. En consecuencia, el enfoque de la sustentabilidad confiere gran importancia a establecer una relación directa entre la gente que planifica la producción y aquella que determina qué niveles de consumo son posibles.

Participación popular, justicia social y autonomía

La sustentabilidad involucra la participación directa. Si existe una constante en la bibliografía en el área, es el reconocimiento de que el movimiento ha surgido de las bases populares. Participan en las ONGs y las mantienen como intermediarios que canalizan las demandas de los diversos grupos comunitarios y organizaciones cívicas que están empezando a exigir un papel creciente en el debate político nacional.

Estas demandas y las respuestas de las agencias oficiales multilaterales y nacionales son muy ilustrativas. Hay un acuerdo generalizado entre sus defensores con respecto a que las políticas de desarrollo sustentable no pueden ser diseñadas o instrumentadas desde arriba⁴. Para tener éxito requieren de la participación di-

recta de los beneficiarios y de otros que puedan ser impactados. Pero hay un acuerdo general de que su participación debe implicar más que un papel meramente de consulta. Para que tal enfoque funcione, se requiere que quienes detentan el poder se den cuenta de la necesidad de integrar a la gente dentro de las estructuras *reales* de poder con el fin de confrontar los problemas principales de nuestro tiempo. Ello implica una redistribución del poder tanto político como económico. Este prerrequisito es fundamental para cualquier programa de sustentabilidad, ya que la mayoría de los análisis técnicos destacan que los patrones que perpetúan estas desigualdades conducen a una mayor degradación ambiental (Boyce, 1994; Goodland y Daly, 1993).

En esta formulación, la sustentabilidad no versa simplemente sobre la preservación ambiental. También involucra la participación activa de la gente, a los efectos de que entienda la dinámica de los sistemas naturales y oriente el rediseño de los sistemas productivos, de modo tal que sean productivos mientras conservan la capacidad del planeta para hospedar a las generaciones futuras. Es un enfoque basado en la movilización política. Quizá los aspectos más reveladores de la literatura sobre sustentabilidad son el cúmulo de ejemplos sobre la forma en que la gente puede realizar “actos de solidaridad con el otro cuando el estado no los está viendo” para resolver problemas comunes e iniciar experimentos creativos para la innovación social (Friedmann, 1992: 168-171; Ostrom, 1993). Por supuesto, el trabajo de Albert Hirschmann ofrece ejemplos incontables de las formas en que las ONGs y otros grupos de base han tenido éxito en forzar la presión para modificar proyectos de desarrollo como parte de su propia percepción de las prioridades del desarrollo⁵. Sin embargo, bajo circunstancias especiales, el mismo estado podría (verse forzado a) fomentar la “liberación” creativa de energías participativas para inspirar programas de desarrollo local y justicia social que también contribuyan a mover a la sociedad en la dirección de la sustentabilidad (Alves Amorim, 1994; Tandler, 1993).

Sin embargo, no debemos acelerarnos: mucha de la bibliografía muestra cómo y por qué el estado no opera para fortalecer a los pisoteados. La difícil coyuntura de fines de los ochenta obligó al gobierno mexicano a financiar esquemas de desarrollo de las bases a través de movilizaciones locales en comunidades dispersas por todo el país. El Programa de Solidaridad fue altamente respetado por la presión internacional y las instituciones multilaterales como un proyecto efectivo de bienestar (y de voto), pero hizo poco por crear oportunidades productivas permanentes para los participantes, quienes rara vez pudieron continuar una vez que los programas oficiales terminaban. La copia colombiana del programa no promete ofrecer mayores oportunidades a los pobres. En su examen de los problemas de erosión del suelo, Blaikie va más allá para explicar cómo las señales del mercado generalmente empujan a los gobiernos hacia programas que benefician a los ricos. Peor aún, gran parte de la investigación para mejorar la productividad agrícola está mal orientada, pero su crítica más general encapsula nítidamente mucha de la

experiencia de desarrollo del pasado medio siglo: "...el énfasis está en los bienes particulares aislados del contexto social, económico y ambiental..." (1985: cap. 2).

En el análisis final, un programa que enfoca la sustentabilidad también tendrá que ver con la pobreza. Existe un amplio reconocimiento de que la pobreza y la destrucción ambiental van de la mano, aunque se ha puesto menos atención a los enormes problemas ambientales ocasionados en todo el mundo por los estándares actuales de consumo de quienes tienen más dinero. En los años venideros, el progreso socio-económico mismo dependerá de que los grupos de base se involucren para obligar a quien tiene más dinero a encontrar formas de control de su propio consumo (suntuoso), y en la organización de programas de desarrollo para los demás que ofrezcan progreso material a los pobres y una mejor administración de los recursos del planeta.

Una estrategia de participación democrática para la diversificación rural y el mejoramiento productivo

El desarrollo sustentable es un enfoque de reorganización productiva que aprovecha las experiencias combinadas de los grupos locales de todo el mundo. Las técnicas de instrumentación varían enormemente entre regiones y ecosistemas. Un único común denominador permea este trabajo: la necesidad de participación democrática efectiva en el diseño e instrumentación de los proyectos. Su importancia es evidente en los títulos de algunos de los excelentes escritos sobre el tema: Ben Abdallah y Engelhard (1993), Calderón *et al* (1992), Machado *et al* (1993), Nuñez (1998). Otra lección proveniente de la experiencia reciente es la importancia de la creación de redes que mantengan y defiendan este trabajo. Sin el mutuo reforzamiento que la agrupación internacional de ONGs proporciona, las unidades individuales no serían tan efectivas en la obtención de fondos para sus proyectos, en la obtención de asistencia técnica para su instrumentación, y en el soporte político contra los políticos e instituciones intransigentes o incrédulos tanto locales como nacionales (Friedmann y Rangan, 1993). Los éxitos se deben, sin embargo, no sólo a la tenacidad y sacrificio de los trabajadores comprometidos y a los participantes locales, sino también al surgimiento de una estructura de soporte, nacional e internacional, de trabajadores, campesinos, eruditos y activistas que están deseando movilizarse para mantener los esfuerzos espontáneos o bien organizados de los grupos individuales de todo el mundo, quienes están promoviendo proyectos de participación democrática para el desarrollo sustentable. Las organizaciones están formándose, las alianzas rehaciéndose, las experiencias revaluándose. En Latinoamérica, una de las más promisorias es la RIAD (Red Interamericana de Agriculturas y Democracia, 1993), con su sede en Chile.

El desarrollo sustentable no es sin embargo un enfoque que será aceptado simplemente porque "su tiempo ha llegado". La apertura de la comunidad multilateral

de desarrollo a las ONGs y a otros grupos de base, incluyendo el compromiso de largo plazo de las organizaciones como la Fundación Interamericana en EE.UU., el IICA en Costa Rica, y numerosas fundaciones de Europa Occidental que mantienen esos esfuerzos, no es justamente un gesto de las agencias poderosas para con las más pobres: refleja el reconocimiento de que estos grupos de nivel de base han sido efectivamente movilizados de gente y recursos para lograr mejoras palpables en los estándares de vida, a la vez que contribuyen notablemente a proteger el ambiente. Tales victorias señalan el principio, y no el fin del proceso.

Además, el reconocimiento no significa la aceptación de las metas o de los principios de los grupos que conforman la comunidad del desarrollo sustentable. Como hemos acentuado repetidamente en las páginas precedentes, el modelo prevaleciente de desarrollo industrial ha creado estructuras de riqueza y poder concentradas que sistemáticamente generan problemas sociales y ambientales a escala global. En el proceso, las élites, pequeñas pero poderosas, han consolidado su control en muchas sociedades, y otras innumerables se benefician de los productos del modelo de consumo que el sistema ha engendrado. Este es un patrón insustentable de producción y consumo: un modelo que puede hacerse más eficiente, menos contaminante, pero que al final continuará siendo inviable. Los intereses creados niegan activamente el acceso a los recursos, a las oportunidades de empleo, a los más mínimos niveles de servicios sociales para segmentos enormes de la humanidad, mientras que se desperdician cantidades exorbitantes en expresiones ostentosas de consumo para los pocos privilegiados.

El desarrollo sustentable, en el análisis final, implica una lucha política por el control sobre el aparato productivo. Requiere de una redefinición no sólo de qué y cómo producimos, sino también de a quién le será permitido producir y con qué fines. Para las organizaciones implicadas en proyectos de desarrollo sustentable en áreas rurales, el conflicto se centrará en torno al control de mecanismos de poder político y económico local, y el uso de recursos. La lucha por asegurar una voz mayor en el proceso para los campesinos, las poblaciones indígenas, las mujeres y otras minorías menos privilegiadas, no asegurará que sus decisiones conduzcan al desarrollo sustentable. Pero esa participación democrática de base creará los cimientos para una distribución más equitativa de la riqueza, uno de los principales prerrequisitos para el surgimiento de una estrategia de desarrollo sustentable.

Las variedades del desarrollo sustentable⁶

Las regiones que quedaron atrás

La integración económica internacional no afectará a todo el mundo por igual. En el caso del NAFTA, por ejemplo, grandes segmentos de los tres países se mantendrán rezagados del progreso internacional. En alguna medida, esta gen-

te se encuentra en regiones que tienen la oportunidad única de tomar ventaja de su status como marginada. Muchas de estas regiones están pobladas con grupos de origen indígena, que todavía atesoran gran parte de la experiencia que ha sido transmitida a través de las generaciones. Las investigaciones recientes en el tercer mundo sobre etnobotánica, etnobiología, agrobiología y agrosilvicultura están intentando capturar algo de esta sabiduría. Este trabajo muestra que el potencial productivo de la agricultura tradicional es mucho mayor que el comúnmente obtenido, que hay factores culturales que evitan la plena aplicación de este conocimiento (incluyendo por supuesto el desdén prevaliente por la cultura indígena, excepto como un bien de consumo para los turistas e intelectuales excéntricos), y que algunos de nuestros descubrimientos de estos sistemas son transferibles entre culturas, así como útiles para mejorar los sistemas de cultivo usados por los agricultores “modernos”. Finalmente, conforme hemos realizado más investigaciones sobre tales prácticas culturales indígenas, estamos aprendiendo que los que utilizan este conocimiento han comenzado a integrar los avances tecnológicos más recientes en sus prácticas tradicionales, a fin de mejorar la productividad y reducir la cantidad de trabajo requerida para la producción.

En estas regiones, el volver a desarrollar la “economía campesina” es tanto deseable como urgente. No es simplemente un asunto de rescate de culturas antiguas, sino el tomar ventaja de una herencia cultural y productiva importante para proporcionar soluciones a los problemas de hoy y del mañana. *No es una cuestión de “reinventar” la economía campesina*, sino de reunirla con sus propias organizaciones para esculpir espacios políticos que les permitirán ejercitar su autonomía, definir formas en las que sus organizaciones guiarán la producción para ellos mismos y para comerciar con el resto de la sociedad. Una vez más, la identificación tecnocrática de los mecanismos productivos y la catalogación de los sistemas de conocimiento indígenas (que, por ejemplo, están ahora a la orden del día entre las corporaciones transnacionales en busca de nuevas fuentes de germoplasma para sus avances biotecnológicos) no van a revertir la estructura de la discriminación a menos que se acompañen de participación política efectiva (Nuñez, 1998).

Estas regiones que han sido dejadas de lado tienen muchas oportunidades de explorar caminos en los cuales utilizar sus dotaciones de recursos en formas creativas. Entre las más importantes están los proyectos administrados por los grupos de las comunidades locales que comienzan a diversificar su base productiva, utilizando fuentes de energía renovable y evaluando el ambiente natural para desarrollar nuevos productos o encontrar nuevas formas de adicionar valor a las tecnologías y bienes tradicionales. Los proyectos mencionados en la literatura incluyen el aprovechamiento de la energía solar, geotérmica y eólica para el procesamiento de alimentos, mejorando la calidad y desarrollando sistemas que aumenten el producto de las artesanías (o comerciar con ellas obteniendo precios mejores a través del comercio justo), desarrollando instalaciones para la recreación y convenios institucionales que permitan a la gente de fuera lograr una apreciación

de las culturas indígenas. Las oportunidades de buscar nuevas formas de organización de la base de recursos naturales son grandes, y las iniciativas para instrumentar tales programas están encontrando gradualmente a quienes respondan interesados por la exploración de estas y otras alternativas (Barkin, 1992).

Los centros de biodiversidad

La comunidad científica y ambiental mundial se ha movilizado para identificar y proteger un creciente número de áreas particularmente valoradas. Estas “reservas de la biosfera” en las selvas y montañas y los centros culturales urbanos, “patrimonio de la humanidad”, son guardianes de parte de los tesoros naturales y producidos del ecosistema. Pero también son campos de batalla controvertidos, donde la ciencia y la comunidad están luchando por una definición operacional de la protección ambiental y la sustentabilidad. Las líneas de batalla se dibujan con mayor claridad cuando se montan esfuerzos por crear áreas núcleo en los espacios designados como reservas de la biosfera, donde no se permite a la gente entrar. En algunos casos, la designación especial de zona protegida implica remover a los habitantes locales del área en nombre del ambiente. En una escala más general, el interés creciente por proteger las especies en peligro de extinción ha conducido a conflictos entre las poblaciones locales que han coexistido tradicionalmente con estas especies, explotándolas en formas sustentables, hasta que las poderosas fuerzas del mercado condujeron a tasas de exterminio que amenazaron la sobrevivencia de la flora y fauna y de las comunidades humanas.

Mientras no haya una solución generalizada para las necesidades y metas en conflicto de los grupos inmersos en estas regiones, pareciera que el enfoque filosófico de la “sustentabilidad” ofrece algunas ideas. Una propuesta prometedora sugiere la creación de “reservas campesinas de la biosfera” o “clubes de restauración del vecindario”, en los cuales las comunidades locales son animadas a continuar viviendo dentro de la región, ahorrando recursos. A cambio, el “mundo exterior” aceptaría la obligación de asegurar que la comunidad sea capaz de disfrutar de una calidad socialmente aceptada de vida, con oportunidades económicas similares a aquellas de otros grupos, y participación política plena a todos los niveles. Un ejemplo particularmente importante de este enfoque es el intento de crear un modelo de este tipo en la región de Chimalapas del suroeste de Oaxaca, en México, un intento que inicialmente estaba comprometido con actividades predatorias para participar en (o ayudar realmente al diseño de) actividades protectoras como parte de la estrategia de diversificación productiva para el desarrollo de la comunidad, el cual incluiría ecoturismo pero no estaría limitado a este tipo de actividad, debido a que la investigación lo ha mostrado como demasiado esporádico e inseguro a los efectos de ofrecer seguridad económica a la mayoría de las comunidades.

Desarrollo autónomo: una estrategia para la sustentabilidad

El desarrollo sustentable no es consistente con la expansión de la agricultura comercial “moderna”. La producción especializada basada en el uso de maquinaria y/o agroquímicos que surgió del enfoque tecnológico de la revolución verde ha producido un enorme caudal de alimentos y otros productos primarios. Sin embargo, los costos sociales y ambientales están resultando demasiados altos. El desarrollo rural comercializado ha traído en su estela la progresiva marginación de las poblaciones campesinas e indígenas.

La integración global está creando oportunidades para algunos, y pesadillas para muchos. La producción doméstica se está ajustando a las señales del mercado internacional, respondiendo a las demandas del exterior e importando aquellos bienes que pueden ser adquiridos más baratos en cualquier otro lugar. La expansión urbano-industrial ha creado polos de atracción para la gente y sus actividades que no pueden ser absorbidos productiva o saludablemente. Las ciudades perdidas y los deteriorados vecindarios albergan a la gente que busca empleos marginales, mientras sus gobiernos locales están abrumados por la imposibilidad de administrar estas regiones por falta de presupuesto y capacidad profesional. Al mismo tiempo las comunidades campesinas están siendo desmembradas, y sus residentes, forzados a emigrar y abandonar los sistemas tradicionales de producción. Ellos también han dejado de ser buenos intendentos de los ecosistemas de los cuales son parte.

En esta yuxtaposición de ganadores y perdedores, una nueva estrategia de desarrollo rural debe ser considerada: una estrategia que revalorice la contribución de las estrategias de producción tradicionales. En la economía mundial actual la vasta mayoría de productores rurales del tercer mundo no puede competir en los mercados mundiales con productos alimentarios básicos y otros productos primarios: la tecnología y financiamiento de los productores en las naciones ricas puede combinarse con la necesidad política de exportar sus excedentes para bajar los precios internacionales, con frecuencia por debajo de los costos reales de producción en el tercer mundo, especialmente si estos agricultores fueran a recibir un salario competitivo. Sus productos tradicionales no podrían comercializarse fuera de las mismas comunidades pobres.

Los productores rurales marginados ofrecen una promesa importante: si se fomenta su producción, pueden sostenerse por sí mismos y hacer contribuciones importantes al resto de la sociedad. En contraste, si prevalecen las políticas rurales que los países del tercer mundo definen como eficiencia según el criterio del mercado internacional, basadas en la estructura política y tecnológica de las naciones industrializadas, los campesinos serán arrebataados de sus campos de siembra tradicionales, y las importaciones de alimentos comenzarán a competir fuertemente por las divisas, desplazando a los bienes de capital y otras prioridades nacionales como ha pasado en muchos países (Barkin, Batt y DeWalt, 1991). El enfoque sugerido por la búsqueda de sustentabilidad y participación popular tiene el fin de crear meca-

nismos dondequiera que las comunidades campesinas e indígenas encuentren apoyo para continuar cultivando sus propias regiones. Aun con el criterio estricto de la economía neoclásica, este enfoque no debe ser descartado como un proteccionismo ineficiente, ya que la mayoría de los recursos implicados en el proceso tendrían poco o ningún costo de oportunidad para la sociedad en su totalidad⁷.

En efecto, proponemos la formalización de una economía dual. Reconociendo la permanencia de una sociedad drásticamente estratificada, el país estará en una mejor posición para diseñar políticas que reconozcan y tomen ventaja de estas diferencias a fin de mejorar el bienestar de los grupos de ambos sectores. Una estrategia que refuerce a las comunidades rurales, un medio para hacer posible la diversificación, hará que el manejo del crecimiento sea fácil en aquellas áreas que desarrollan encadenamientos con la economía internacional. Pero más importante es que tal estrategia ofrecerá una oportunidad para que la sociedad confronte los cambios del manejo del ambiente y la conservación activa y significativamente con un grupo de gente calificado de manera única para tales actividades⁸.

La economía política de la autonomía económica no es nueva. A diferencia del modelo actual que permea todas nuestras sociedades confrontando a ricos y pobres, la propuesta pide la creación de estructuras, de modo que un segmento de la sociedad que *elige* vivir en las áreas rurales encuentre apoyo en el resto de la nación para instrumentar un programa alternativo de desarrollo regional. Este modelo de autonomía comienza con la base heredada de la producción rural, mejorando la productividad mediante el uso de la agroecología. También implica la incorporación de nuevas actividades que se construyan sobre la base cultural y de recursos de la comunidad y de la región para su desarrollo posterior. Requiere respuestas muy específicas al problema general y, en consecuencia, depende fuertemente de la participación local para su diseño e instrumentación. Mientras que los planes generales son ampliamente discutidos, los detalles requieren programas bien definidos de inversión de los productores directos y sus socios⁹.

El elemento nuevo está dado por la introducción de una estrategia explícita de fortalecimiento de la base social y económica para una estructura que permite a estos grupos mayor autonomía. Mediante el reconocimiento y fomento a fin de que los grupos marginales creen una alternativa que les ofrezca mejores perspectivas para su propio desarrollo, la propuesta de la economía autónoma podría malinterpretarse como una nueva encarnación de la “guerra (norteamericana) contra la pobreza” o el enfoque mexicano de “solidaridad” para aliviar los efectos más nocivos de la marginalidad. Esto sería un gran error. No se trata de una simple transferencia de recursos para compensar a los grupos atrasados por su pobreza, sino de un conjunto integrado de proyectos productivos que ofrezca a las comunidades rurales la oportunidad de generar bienes y servicios, que contribuyan a elevar sus estándares de vida y los de sus conciudadanos mientras mejoran el ambiente en el que viven.

Bibliografía

- Altieri, Miguel A 1987 *Agroecology: The scientific basis of alternative agriculture* (Boulder, Colorado: Westview).
- Alves Amorim, Monica 1994 "Lessons on Demand", en *Technology Review* (Cambridge, Maryland) Enero.
- Andrae, Gunilla y Beckman, Bjorn 1985 *The Wheat Trap* (London: Zed Books).
- Barkin, David 1991 *Un desarrollo distorsionado: México en la economía mundial* (México: Siglo XXI Editores).
- Barkin, David 1992 "Morelia hacia finales del milenio", en *Las Ciudades Medias* (México: Red Nacional de Investigación Urbana).
- Barkin, David 1998 *Riqueza, pobreza y desarrollo sustentable* (México: Editorial Jus).
- Barkin, David 1999 "Dos Milagros: Las Monarcas y Los Campesinos", en *Proceedings of the North American Conference on the Monarch Butterfly* (Montreal: Comisión de Cooperación Ambiental).
- Barkin, David; Batt, Rosemary y DeWalt, Billie 1991 *Alimentos versus Forrajes: La sustitución global de granos en la producción* (México: Siglo XXI Editores).
- Barraclough, Solon 1991 *An End to Hunger? The social origins of food strategies* (London y Atlantic Highlands, NJ: Zed Press y UNRISD).
- Ben Abdallah, Taoufik y Engelhard, Phillippe 1993 "The urgency of fighting poverty for democracy and the environment", en *Occasional paper* (Geneva) N° 5, UN Non-governmental Liaison Service.
- Blaikie, P. 1985. "Why do policies usually fail?", en *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries* (London: Longman) Capítulo 2.
- Boyce, James 1994 "Inequality as a cause of environmental degradation", en *Ecological Economics* (Solomons, Maryland) Vol. 11.
- Boyce, James (compilador) 1999 *Ajuste hacia la paz: Las lecciones de El Salvador* (México: Plaza y Valdés).
- Calderón, Fernando; Chiriboga, Manuel y Piñeiro, Diego 1992 *Modernización Democrática e Incluyente de la Agricultura en América Latina y el Caribe* (San José: CR -IICA) Serie Documentos de Programas N° 28.
- Friedmann, John 1992 *Empowerment: The politics of alternative development* (New York: Basil Blackwell).

- Friedmann, John y Rangan, Haripriya 1993 *In Defense of Livelihood: Comparative studies on environmental action* (West Hartford, CT: Kumarian Press).
- Glade, William y Reilley, Charles (eds.) 1993 *Inquiry at the Grassroots: An Inter-American Foundation reader* (Arlington, VA: Inter-American Foundation).
- Goodland, Robert y Daly, Herman 1993 “Why Northern income growth is not the solution to Southern poverty”, en *Ecological Economics* (Solomons, MD) Vol 8.
- Lewis, W. Arthur 1972 (1954) “Desarrollo económico con oferta ilimitada de mano de obra”, en Flores, E. (comp.) *Desarrollo agrícola* (México: Fondo de Cultura Económica) Lecturas del Trimestre, N° 1.
- Machado, A.; Castillo, L. C. y Suárez, I. 1993 *Democracia con Campesinos, o Campesinos sin Democracia* (Bogotá: Ministerio de Agricultura-Fondo DRI-IICA y Universidad del Valle).
- Martínez-Alier, Juan 1991 “Ecology and the poor: A neglected dimension of Latin American history”, en *Journal of Latin American Studies* (Londres) Vol. 23, N° 3.
- Martínez-Alier, Juan 1995 *De la Economía Ecológica al Ecologismo Popular* (Barcelona: Icaria).
- Núñez, Orlando 1998 *El manifiesto asociativo y autogestionario* (Managua: Centro Para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social).
- Ostrom, Elinor 1993 *Institutional Incentives and Sustainable Development: Infra-structure policies in perspective. Theoretical lenses on public policy* (Boulder, CO: Westview).
- Red Interamericana de Agriculturas y Democracia (RIAD) 1993 *¿Qué es la agricultura sustentable?* (México: Grupo de Estudios Ambientales y RIAD).
- Rodwin, Lloyd y Schön, Donald A. (eds.) 1994 *Rethinking the Development Experience: Essays provoked by the work of Albert O. Hirschman* (Washington, DC and Boston, MA: Brookings and Lincoln).
- Sen, Amartya 1981 *Poverty and Famines* (New York: Oxford University Press).
- Sen, Amartya 1992 *Inequality Reexamined* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Stiefel, Matthias y Wolfe, Marshall 1994 *A Voice for the Excluded: Popular participation in development: Utopia or Necessity?* (London and Atlantic Highlands, NJ: Zed Books and UNRISD).
- Sunkel, Osvaldo 1993 *Development from Within: Toward a neostructuralist approach for Latin America* (Boulder, CO: Lynne Rienner).

Tendler, Judith 1993 "Tales of dissemination in small-farm agriculture: Lessons for institution builders", en *World Development* (Washington, DC) Vol. 21, N° 10.

Wilson, Edward O. 1992 *The Diversity of Life* (Cambridge, MA: Harvard University Press).

Notas

1 En este sentido, rechazamos la noción de que se está sustentando el crecimiento en sí mismo. Más bien es un proceso que se propone para elevar el nivel de bienestar de la gente en un ambiente que se está conservando.

2 De esto se ocupa la Asociación Internacional de Desarrollo y Ética, con sede en la Universidad de Maryland, Estados Unidos.

3 La complejidad de la tarea de terminar con el hambre es ampliamente reconocida. Pero la bibliografía reciente ha acentuado los orígenes sociales y no los técnicos (o basados en la oferta) de la carestía y el hambre. Sen (1981,1992) es un exponente particularmente efectivo de este punto, mientras otros han entrado en gran detalle sobre los “orígenes sociales” de las estrategias alimentarias y las crisis (Barraclough 1991). La “modernización” de las dietas urbanas en Nigeria, sustituyendo al trigo y arroz por sorgo y mijo, es un caso espeluznante de creación de dependencia, reduciendo las oportunidades de los productores campesinos y elevando el costo social de alimentar a una nación (Andrae y Beckman, 1985).

4 Este es el tema del libro de Stiefel y Wolfe (1994), que sintetiza un gran rango de experiencias sobre la participación popular. Ellos hablan de la “decreciente capacidad del Estado para proporcionar servicios y reducir las desigualdades en el ingreso”, acompañada por una reducción igual en la “confianza pública en la legitimidad de sus esfuerzos”. No sorprende, entonces, que la comunidad internacional esté “...viendo la ‘participación’ popular como un medio de hacer que sus proyectos de desarrollo funcionen mejor, ayudando a los pobres a manejar su situación (y) como una dimensión indispensable de las políticas ambientales (...) que no pueden ya ser evadidas o pospuestas...” (Stiefel y Wolfe, 1994: 19).

5 Rodwin y Schön (1994) nos ofrecen la oportunidad de explorar las contribuciones singulares de Hirschman a la teoría y práctica del desarrollo. Enfatizando la importancia de colocar a la gente al centro del proceso, hemos aprendido de Hirschman que, para tener éxito, estos actores deben llegar a sumarse dentro de los sistemas integrales de los cuales ellos son parte.

6 Para una discusión más amplia de este tema, véase Barkin (1998).

7 Este es un elemento crucial. Muchos analistas descartan a los productores campesinos por trabajar a una escala demasiado pequeña y con muy pocos recursos para ser eficientes. Sin embargo, es importante y factible promover un incremento en la productividad consistente con una estrategia de producción sustentable, tal como la definen los agro-ecólogos: la propuesta de animarlos para mantenerse como miembros productivos de sus comunidades debiera ser instrumentada bajo las condiciones existentes. En gran parte de La-

tinoamérica, si los campesinos cesaran de producir los cultivos básicos, las tierras e insumos no serían simplemente transferidos a otros para la producción comercial. Los bajos costos de oportunidad de la producción primaria en las regiones campesinas e indígenas derivan de la falta de empleos productivos alternativos para la gente y las tierras de este sector. Aunque la gente generalmente tiene que buscar ingresos en el “sector informal”, su contribución al producto nacional sería magra. La diferencia entre el criterio social para evaluar el costo de este estilo de producción y la valoración del mercado está basada en la determinación de los sacrificios que la sociedad haría para tomar una u otra opción. La base teórica para este enfoque vuelve como punto de partida al ensayo inicial de W. Arthur Lewis (1954) y estudios posteriores, que encuentran su última expresión en la demanda de un enfoque “neoestructuralista” para el desarrollo de Latinoamérica (Sunkel, 1993).

8 Mucha de la bibliografía sobre participación popular enfatiza la contribución multifacética que la incorporación productiva de los grupos marginales puede hacer a la sociedad (Friedmann, 1992; Friedmann y Rangan, 1993; Stiefel y Wolfe, 1994). Mientras que se ha hecho muy poco sobre estrategias específicas de sustentabilidad en las comunidades rurales pobres, es claro que mucha de la experiencia referida por quienes la practican con los grupos de base (Glade y Reilley, 1993) es consistente con los principios enunciados por teóricos y analistas como Altieri (1987).

9 Boyce (1999) ofrece un programa específico para la reconversión de El Salvador, basado en los principios discutidos en este artículo. Las propuestas de grupos como la IAF y la RIAD ofrecen ejemplos específicos de los esfuerzos que las bases están llevando a cabo para instrumentar alternativas como aquellas discutidas en el texto. El Centro de Ecología y Desarrollo en México (Barkin 1999) propuso un programa de desarrollo regional consistente con la estrategia propuesta en el área de invernación de la mariposa monarca.

Parte II
Acciones colectivas:
movimientos, protestas y organizaciones sociales

***“Sem Terra”, “Assentados”, “Agricultores familiares”:
considerações sobre os conflitos sociais e as formas de
organização dos trabalhadores rurais brasileiros***

Leonilde Ser volo de Medeiros*

Os anos 90 se encerram no Brasil com o crescimento da visibilidade política de dois segmentos sociais no meio rural: os “sem terra” e os “agricultores familiares”. O objetivo deste artigo é discutir a historicidade dessas categorias, buscando fazer uma leitura de sua conformação a partir da trajetória organizativa dos trabalhadores rurais e das potencialidades do reconhecimento de sua presença política pelo Estado, através da gestação de políticas públicas a elas direcionadas e da constituição de novas instituições que passam a ser o espaço para onde as suas demandas se dirigem. Numa primeira parte do artigo, apresentamos alguns traços dos momentos iniciais de organização dos trabalhadores do campo, ressaltando o papel do sindicalismo rural no esforço de constituição de uma identidade única para esse segmento. A seguir, indicamos como essa unidade sofre fraturas derivadas do intenso processo de mudanças econômicas, sociais e políticas que marcam os anos 70/80. Nas partes seguintes, tecemos algumas considerações sobre algumas das novas categorias que emergem nesse contexto: “sem terra”, “assentados” e “agricultores familiares”, tentando indicar a importância das lutas políticas e da ação do Estado na sua conformação. Finalizando o artigo, apresentamos as novas iniciativas do setor público estatal e sua relação com a eclosão de demandas no campo.

* Professora do curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Doutora em Ciências Sociais pela Unicamp.

O sindicalismo rural e a constituição dos “trabalhadores rurais” como categoria política

Nos anos 50, os trabalhadores do campo emergiram no cenário político, através da luta de resistência na terra da qual eram ameaçados de expulsão, identificando-se como “lavradores”, “trabalhadores agrícolas” e, já no início dos anos 60, como “camponeses”. Essas nomeações, na maior parte dos casos estranha aos contextos locais, eram resultado do processo organizativo em curso e da ação de diferentes mediadores que buscavam traduzir demandas pontuais locais em uma linguagem mais geral, que as unificava (Martins, 1981; Medeiros, 1995; Novaes, 1997). Assim, na conformação das categorias que começaram a ser utilizadas no debate político para designar os trabalhadores do campo e também foram por estes incorporadas, tiveram papel central o Partido Comunista Brasileiro, as Ligas Camponesas e, já no início dos anos 60, a Igreja Católica.

A regulamentação do sindicalismo rural pelo Estado brasileiro e a conseqüente criação e/ou transformação das entidades organizativas pré-existentes em sindicatos culminaram na constituição, no final de 1963, de uma Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) que unificava a enorme diversidade de segmentos no campo e centralizava as organizações sindicais até então existentes. O golpe militar de 1964, a prisão, desaparecimento ou exílio de várias lideranças, a intervenção sobre os sindicatos existentes não implicaram no desaparecimento da Contag. Como vários sindicatos oriundos da ação da Igreja Católica haviam sido relativamente poupados do processo de intervenção (Palmeira, 1985), foi possível reconstituir, a partir dessa matriz, uma rede sindical, que se consolidou no final dos anos 60 e durante os anos 70, em grande medida a partir da ação da Contag. Nesse período, o principal investimento desta entidade foi no sentido de articular um conjunto de sindicatos, então dispersos e atomizados, através de concepções comuns, cuja matriz era a demanda por direitos trabalhistas e por reforma agrária, previstos através da legislação (Estatuto do Trabalhador Rural de 1963 e Estatuto da Terra de 1964), mas não efetivados no cotidiano dos trabalhadores¹.

A enorme diversidade de situações existentes, o fato de que muitos sindicatos surgiram a partir do estímulo de prefeituras e demais forças ligadas ao poder local, especialmente a partir da criação do Funrural, acabaram por criar uma tensão permanente, ao longo dos “nós” dessa rede (sindicatos e federações), entre o peso das forças políticas locais que tendiam a arrastar o sindicato para as malhas das diferentes formas de dominação consolidadas e a ação da Contag que procurava, através da busca de direitos reconhecidos, constituir uma outra rede de relações e contrabalançar o peso do poder local. Em o fazendo, falava em nome de uma categoria genérica, “trabalhadores rurais”, que recobria segmentos tão diferenciados como “assalariados”, “parceiros”, “arrendatários”, “pequenos proprietários”, “posseiros”, etc e que fora imposta à organização sindical por

força de lei, contrariando a tendência organizativa que se delineava no período pré-golpe². Segundo Palmeira, buscando produzir a “*cristalização da unidade de classe*”, a entidade pôde “*desnaturalizar simultaneamente o mais neutro (porque genérico) e menos neutro (pela referência ao trabalho) dos termos em curso no arsenal ideológico dominante - trabalhador rural - e inculcá-lo como um termo ‘naturalmente’ genérico para reunir todos os que vivem do trabalho na terra*” (Palmeira, 1985: 50). Para tanto, precisou se fazer reconhecer como porta-voz de um amplo e diversificado segmento, num processo permeado não só por recorrentes disputas internas, mas também pela concorrência com o sindicalismo patronal, que disputava a adesão de uma parcela de “pequenos proprietários”. Ao longo do final dos anos 60 e dos anos 70, as antigas identidades descristalizaram-se (Novaes, 1997) em função não só da ação da Contag mas também da instituição de políticas públicas que, através de instrumentos como a legislação sindical (com suas categorias de enquadramento), trabalhista (com a definição de trabalhador rural), fundiária (através da definição de “módulo rural” e de “minifúndio”) e das políticas agrárias e agrícolas, tiveram um papel importante no sentido de moldar segmentos no interior do sindicalismo e abrir espaço para que fosse possível construir uma identidade que enfatizava o vínculo com a esfera do *trabalho*, mesmo em se tratando de produtores proprietários da terra e dos meios de produção e que eventualmente empregavam outros trabalhadores.

Através do esforço de constituição e de representação dessa “unidade de classe” (Palmeira, 1985), no final dos anos 70 e início dos 80, a Contag passou a se constituir em importante referência nacional, a partir das campanhas salariais e greves dos canavieiros nordestinos, de seu apelo pela reforma agrária e do apoio às mobilizações por melhores preços para os produtos agrícolas, num contexto de intensificação das mobilizações demandando a redemocratização do país. No entanto, sua concepção sobre formas de ação e organização no campo e a defesa da unidade de representação da categoria “trabalhador rural” começou a ser posta à prova pela própria eclosão de conflitos no campo nesse mesmo período.

Já em meados dos anos 70 começaram a se esboçar críticas à prática sindical “contagiana” e à ação levada a efeito no cotidiano pelos sindicatos: a ação da Contag era apontada como ineficaz, por ser voltada principalmente para a denúncia de situações concretas aos poderes públicos, mas pouco efetiva no sentido de estimular a organização e mobilização dos trabalhadores para pressões. Muitos dos sindicatos eram considerados como eminentemente assistencialistas e, portanto, incapazes de dar consistência à luta por direitos pregada pela própria confederação sindical³. O principal porta-voz dessas críticas foi um segmento da Igreja Católica, adepto da Teologia da Libertação, e que tinha seu trabalho eclesial disseminado pelo país, em especial nas áreas de fronteira, onde eram mais intensos os conflitos por terra. Em 1975, a criação da Comissão Pastoral da Terra mostrou a força desse segmento e gerou as condições para a consolidação de uma poderosa rede de influência. Com sua legitimidade, inerente ao seu

caráter institucional, fornecia uma legitimação teológica para as demandas emergentes e para as ações de resistência, formava quadros, através da ação das pastorais e viabilizava espaços e infra-estrutura para encontros e gestão de organizações, num período em que o próprio ato de reunir era posto sob suspeita pelo regime militar (Novaes, 1997).

Esse trabalho molecular da Igreja foi um dos principais responsáveis pelo aparecimento de “oposições sindicais”, portadoras de críticas não só à estrutura sindical vigente, mas também às práticas cotidianas dominantes no sindicalismo. Inicialmente dispersas, as “oposições” articularam-se a novas redes, constituindo laços com o chamado “novo sindicalismo”, gestado nas áreas urbanas, e com os temas centrais das lutas políticas nacionais (liberdade e autonomia sindical, redemocratização, eleições diretas, etc). Em 1983, quando se criou a Central Única dos Trabalhadores, era notável a presença nela das “oposições rurais”, criando-se um novo campo de disputa com a Contag que se alinhara com outra central sindical então criada (Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, CONCLAT)⁴.

Essas ligações mais extensas ofereciam, como já afirmamos anteriormente, possibilidades para escapar das malhas do poder local e uma linguagem através da qual os diferentes segmentos de trabalhadores expressavam suas demandas: uma linguagem reconhecida em outros espaços, permitindo traduzir os problemas locais em termos do debate nacional, construindo questões comuns, possibilitando a articulação de uma enorme diversidade de situações e alianças políticas. Esses elementos são fundamentais para se perceber a importância de que essas organizações se revestiram, em especial quando se considera o isolamento dos trabalhadores do campo em relação aos espaços onde se produzem as decisões políticas e a trajetória de violência que marca o meio rural no Brasil. É também a partir dessa rede que se pode entender o crescente peso que ganhou a oposição às estratégias políticas da Contag, permitindo a constituição de uma clara divisão no interior do sindicalismo rural com a conformação do grupo identificado como os “rurais da CUT”.

Nesse processo de rupturas no interior do sindicalismo, reafirmou-se a identidade dos “rurais” com o mundo do trabalho, inclusive no que se referia aos “pequenos produtores”, cujo engajamento numa central sindical de trabalhadores chegou a ser questionado pelos sindicalistas ligados à área “urbana”⁵.

Transformações no campo e emergência de novas identidades e formas organizativas

O aparecimento das “oposições sindicais” no meio rural não pode ser dissociado do processo de intensificação dos conflitos que marcaram o final da década de 70 e os anos 80, momento em que a modernização da agricultura

brasileira, fortemente estimulada pelo Estado, começou a evidenciar seus efeitos sobre os trabalhadores do campo. As “oposições” se alimentaram e se fortaleceram a partir dos próprios limites que o sindicalismo “contaguiano” encontrava para falar por um novo conjunto de temas que extrapolavam o modelo de ação sindical que desenhara.

No que se refere à luta pela terra, surgiram novos personagens e demandas que se agregaram aos anteriores. Se nos anos 60/70 a marca dos conflitos fundiários foi a luta de “posseiros”, “rendeiros” e “foreiros”, resistindo à expulsão da terra, no final dos anos 70 e início dos 80 surgiram novos espaços de confronto, trazidos por novos segmentos de expropriados, principalmente no sul do país, coração do processo de modernização agrícola. É nesse quadro que emergiram os “sem terra”, fruto do processo de pauperização ou expropriação de segmentos de trabalhadores que antes tinham acesso à terra na condição de pequenos proprietários ou arrendatários. Passando a demandar terra na sua região de origem e negando-se a se inserir nos projetos de colonização abertos, durante o regime militar, nas áreas de fronteira (Tavares dos Santos, 1985; Tavares dos Santos, 1993), num primeiro momento suas lutas estiveram intimamente articuladas à criação das “oposições” sindicais (Esterci, 1991). Aos poucos, no entanto, constituíram-se num movimento com perfil próprio que questionava não só a ação sindical relacionada às questões fundiárias, como também a estrutura organizativa do sindicalismo. Transformaram as ocupações e acampamentos em estratégia para criar fatos políticos e ver suas demandas atendidas. Sob essa ótica, a reforma agrária, bandeira que foi o cimento da construção da identidade “trabalhador rural” pela Contag (Palmeira, 1985), foi aos poucos sendo socialmente identificada com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), produtor de uma nova identidade política (“sem terra”) e que, através de suas ações, passou a impulsionar desapropriações e assentamentos (Caldart, 2000).

Do ponto de vista dos “pequenos produtores”, nos anos 70, a política agrícola dos governos militares desencadeou importantes processos de transformação, decisivos para reforçar o trabalho político de constituição de uma identidade com o mundo do trabalho. Um primeiro aspecto a ser ressaltado é a intensa diferenciação econômica que esse segmento sofreu, em especial no sul do país. Muitos pequenos produtores se pauperizaram e, acoitados por dívidas, acabaram ou por perder a propriedade ou arriscar a sorte nos projetos de colonização públicos ou particulares na Região Norte ou Centro-Oeste do país. Muitos deles, marcados pelo insucesso, voltaram para suas regiões de origem e, pela sua própria situação, constituíram-se em testemunhos importantes para a progressiva conformação de um consenso sobre a falácia da alternativa da migração em busca de novas terras (Tavares dos Santos, 1985). É esse segmento pauperizado que vai se constituir numa das mais importantes bases para as mobilizações para acampamentos e ocupações de terra que ocorreram no final dos anos 70. Outros conseguiram se tecnificar, agregar-se a cooperativas ou integrar-se às

agroindústrias que proliferaram na região. Os produtores tecnificados, principalmente os que se especializaram na produção de soja e trigo, foram os principais atores de diversas manifestações ocorridas no início dos anos 80 contra a política agrícola do governo. Ocupando as ruas com suas máquinas, trancando as portas de bancos, procuravam denunciar os efeitos perversos da política de modernização e exigiam uma política agrícola que privilegiasse também os “pequenos”⁶. O segmento integrado à agroindústria (viticultores, fumicultores, suinocultores, avicultores, entre outros) constituiu novo adversário: não se tratava mais de ter como referência as políticas públicas, mas sim de questionar os termos dos contratos de integração. O bloqueio dos portões das agroindústrias, a realização de “greves”, visando impedir a entrega dos produtos para processamento, foram algumas das iniciativas que marcaram a trajetória desses grupos sociais e produziram a reiteração de sua identificação como trabalhadores⁷.

O espaço onde a Contag conseguiu, nesse contexto, assegurar por um longo tempo sua visibilidade foi o das lutas salariais, em especial nas áreas canaveiras. No Nordeste, no início dos anos 80, foram várias e significativas as greves de “cortadores de cana”. No entanto, numa conjuntura de crise de produção (como é o caso do Nordeste) ou de intensificação da mecanização, inclusive no corte da cana (como é o caso de São Paulo) provocando um forte desemprego, verificou-se uma desestruturação das campanhas salariais. Em São Paulo, as disputas por concepções sobre formas de condução da luta sindical e de formas de representação dos trabalhadores levaram à criação de uma Federação de Empregados Rurais, gerando uma outra estrutura organizativa que negava o papel da Federação dos Trabalhadores Rurais já existente. Conduzindo não só greves, como, em anos mais recentes, ocupações de terra, a nova federação existe à revelia da estrutura sindical “contaguiana”, uma vez que não foi reconhecida por esta.

Grande parte dessas mobilizações deu origem à criação, em diferentes regiões do país, de “oposições sindicais” ou foram por elas conduzidas, sem, no entanto, alterar a identidade básica desses segmentos como “trabalhadores”. A emergência de novos atores, novas identidades e novas demandas deram maior visibilidade política a essa categoria e, ao mesmo tempo, acentuaram a percepção social de sua diversidade. Inauguraram novas iniciativas de enfrentamento estranhas às práticas sindicais até então vigentes no sindicalismo “contaguiano” e também buscaram alternativas organizativas, de caráter local (em especial “associações”) para tentar enfrentar alguns de seus problemas imediatos, principalmente os relacionados à produção e comercialização.

Esse conjunto de mudanças afetou profundamente o sindicalismo rural dirigido pela Contag. Apesar da reiteração da identificação dos diferenciados segmentos com o mundo do trabalho, ela passou a se dar através de uma clara diferenciação das categorias que passaram a ganhar identidade própria e a se constituir como atores diferenciados no cenário político. Ocorreu uma

“implosão” da categoria “trabalhador rural” tal como constituída nos anos 70, acompanhada pela emergência de diversas possibilidades organizativas que romperam com a tradição unitária de representação do sindicalismo rural. Surgiram tanto alternativas externas ao universo sindical, como é caso do MST, como outras que, dentro da lógica sindical, apontaram para a criação de sindicatos por categorias específicas (como é o caso dos “empregados rurais”, de “fumicultores”, de “suinocultores” e, mais recentemente, dos “agricultores familiares”). Mesmo muitos dos sindicatos que continuaram como de “trabalhadores rurais” reorganizaram-se internamente, criando secretarias específicas para tratar de temas relacionados aos assalariados, agricultores familiares e luta por terra, reconhecendo e legitimando a diversidade de situações e interesses emergentes, adequando a eles a organização interna dos sindicatos.

Nesse processo, a Contag deixou de ter o monopólio de falar pelos trabalhadores do campo, passando a disputar sua representação e bandeiras com outras formas organizativas, sindicais (como é o caso da Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo, FERAESP, e da Federação de Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina, FETRAFESC, no plano estadual), não sindicais (MST, Conselho Nacional dos Seringueiros), além da CUT⁸.

Para além disso, novos temas se impuseram ao sindicalismo, entre eles os das demandas envolvendo questões relacionadas a gênero e geração. No que se refere a gênero, a crescente organização e mobilização dos movimentos de mulheres trabalhadoras rurais traduziu-se em preocupações em trazer ao sindicato questões como reconhecimento legal da mulher como trabalhadora rural, envolvendo a demanda pelos direitos daí decorrentes; garantia da presença da mulher nas direções sindicais, através de um sistema de cotas; criação de programas de saúde voltados para a mulher, etc. No que diz respeito ao tema geração, destaca-se a crescente preocupação com os jovens (formação, possibilidades profissionais)⁹ e aposentados, através do reconhecimento de sua especificidade no interior do sindicalismo. O aumento relativo da população idosa no campo, pelo envelhecimento que vem progressivamente caracterizando a população brasileira e também pelo crescente abandono do campo pelos jovens (Abramovay e Camarano, 1999), a situação de pobreza nas áreas rurais fizeram com que o tema da aposentadoria começasse a ganhar maior visibilidade no sindicalismo, tornando-se uma questão que começa a ser tratada não apenas como serviço a ser prestado. Para se entender esse fato é importante lembrar que a aposentadoria representa uma renda mensal regular (que a atividade agrícola tem dificuldade em produzir) e que muitas vezes se constitui numa forma de crédito indireto para segmentos pauperizados da agricultura familiar. Além disso, a contribuição dos aposentados tornou-se uma das fontes importantes de arrecadação de fundos para a sustentação do sindicalismo. Assim, se as ações em relação aos aposentados (emissão de guias, certificados, acompanhamentos, etc) ocupam parte importante do cotidiano sindical, também se evidencia recentemente algumas atividades

mobilizatórias (atos públicos e ocupações de sedes do INSS), demandando a desburocratização excessiva da previdência social, indicando a configuração de novas formas de abordar o tema.

Os “sem terra” e a revitalização do debate sobre reforma agrária

A gênese de um grupo social não pode ser entendida apenas através de processos econômicos de transformação (Thompson, 1987; Bourdieu, 1989). Desse ponto de vista, a origem dos “sem terra” como grupo dotado de uma identidade política sedimentada por uma complexa organização, liga-se não só à trajetória de expropriação dos pequenos produtores, em especial do sul do país, mas, entre outros elementos, também ao molecular trabalho da Igreja e à crítica formulada por esta instituição e pelas “oposições sindicais” à forma como a luta por terra e a demanda por reforma agrária estava sendo conduzida pelo sindicalismo rural. Embora a demanda por reforma agrária tenha sido constitutiva da ação sindical desde sua origem, o caminho pelo qual era conduzida (reivindicações de desapropriação usando estritamente os mecanismos institucionais/legais existentes, sem investimento na organização e mobilização dos envolvidos) não mostrou eficácia: durante os anos 70, em que pese a quantidade de conflitos cuja marca mais forte era a resistência na terra e as constantes denúncias e solicitações de desapropriações feitas pela Contag, pouquíssimas foram levadas a cabo. As ocupações apareceram assim como alternativa para pressionar o Estado, criando fatos políticos e atraindo a atenção da opinião pública. Iniciadas no Rio Grande do Sul, ainda no final dos anos 70, rapidamente passaram a acontecer em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tornando-se a principal forma de luta por reforma agrária e, mais do que isso, constitutiva de uma identidade política. Em torno dela, constituíram-se princípios organizativos próprios, bastante distintos dos que regem as organizações sindicais, baseados na arregimentação de famílias inteiras (e não apenas de indivíduos), sem um processo de filiação ou associação formal, mas apenas na participação, que pode começar em qualquer tempo e lugar e que pode envolver pessoas das mais diferentes trajetórias, inclusive aquelas sem origem rural (Caldart, 2000).

Apresentando alguns momentos de refluxo em função do contexto nacional ou de conjunturas locais, o MST foi progressivamente se impondo como portavoza da demanda por reforma agrária no Brasil e abrindo espaços de negociação com os poderes públicos. Sua ação, ao longo dos anos 80 e 90, apresentou diversas facetas, tanto implicando na produção de fatos políticos, com a recorrência de mobilizações e ocupações envolvendo grande número de pessoas, dando maior visibilidade às lutas por terra, como num trabalho cotidiano e molecular de fortalecimento dos assentamentos. Quer na esfera produtiva

(através da criação de cooperativas, por exemplo), quer na política, formando lideranças, “liberando quadros” para expandir a ação do MST em outras regiões e iniciando um trabalho de divulgação do movimento junto aos meios de comunicação, de forma a legitimá-lo junto à opinião pública.

O sucesso das suas primeiras ações (entendido como tal o aumento do número de desapropriações) levou o MSTa ampliar sua esfera de atuação no sul do país mas também a “nacionalizar-se”, ou seja, consolidar-se para além dos pólos originários e, assim, credenciar-se como principal porta-voz da luta por terra no Brasil. Desse processo faz parte a sua inserção em São Paulo, em especial na região do Pontal do Panapanema, que começou a ser objeto das ações mais sistemáticas do MST no início dos anos 90 (Fernandes, 1996) e a intensificação das suas ações nas regiões Norte e Nordeste do país, tradicionais áreas de conflitos de resistência na terra. As ocupações tornaram-se não só mais constantes em termos de número de eventos, mas também em termos de quantidade de pessoas envolvidas. Os jornais passaram a noticiar ocupações com mil, duas mil pessoas, principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Pará, voltadas principalmente para terras de titulação duvidosa. Em alguns lugares, elas passaram a se voltar para imóveis em processo falimentar, dada a crise de tradicionais atividades agrícolas, como é o caso da região canavieira pernambucana e fluminense. Sendo áreas com alto índice de miséria e desemprego, essas opções não só facilitavam a arregimentação de pessoas dispostas a ir para os acampamentos como também legitimavam as ações dos “sem terra”¹⁰.

Nesse quadro, intensificou-se a competição com o sindicalismo. Reconhecendo que grande parte do que se havia conseguido em termos de assentamentos nos anos 80 tinha por razão as ocupações de terra, o sindicalismo rural também se dispôs a incentivar esse tipo de ação. Ganhando espaços na Contag, o sindicalismo “cutista”, herdeiro das “oposições”, passou a investir nas ocupações em diversas áreas, legitimando essa prática e disputando o direito de falar pelos “sem terra”. Embora sua implementação tenha sido localizada e em escala bem menor, foi politicamente significativo, uma vez que representou um reconhecimento da pertinência dessa forma de agir e um certo consenso de que as ocupações são necessárias para que as desapropriações ocorram¹¹. Mesclando elementos da cultura sindical consolidada com o novo momento de disputa pela representação dos que demandavam terra, a entrega às autoridades federais de vastas listas de propriedades consideradas improdutivas tem sido um ponto constante nas pautas dos Gritos da Terra: ciclo de mobilizações anuais do movimento sindical, com manifestações públicas em diversos estados do país, culminando com um grande ato em Brasília¹². Aos poucos, as ocupações foram ganhando maior peso nas ações sindicais e, em 1999, foi definido um “dia nacional de ocupação de terra”, como parte do calendário de mobilizações do Grito da Terra¹³. No entanto, como veremos mais adiante, em que pese participar da disputa, o sindicalismo rural optou por investir, prioritariamente, em outra categoria, a dos “agricultores familiares”.

No entanto, se o sindicalismo rural, em determinadas regiões, aderiu às ocupações de terra, não incorporou outras nuances menos visíveis, porém cruciais para a sua reprodução, da estratégia de consolidação do MST. Uma das mais significativas é o intenso investimento na produção nos assentamentos, de forma não só a garantir a sobrevivência econômica dos assentados como também de legitimá-los socialmente. Tendo ascendência sobre um número importante de assentamentos realizados quer pelo governo federal, no contexto da Nova República, quer pelos governos estaduais (num momento em que era forte a pressão sobre a terra e a criação de assentamentos rendia dividendos políticos), ao lema “ocupar e resistir”, que marcou os momentos iniciais da formação do MST, acrescentou-se, no final da década de 80, o “produzir”. Dentro dessa estratégia, passaram a ser estimuladas formas de produção cooperada¹⁴, estabeleceram-se rígidas regras de conduta no interior dos assentamentos (desde proibição de bebida até regulamentação sobre transferência e divisão de lotes), ênfase na educação não só política, mas também formal (escolarização básica, visando a erradicação do analfabetismo entre os adultos e a preparação de crianças e jovens) e tecnológica¹⁵. Especial atenção passou a merecer a educação das crianças e jovens, bem como sua mobilização para atos públicos, buscando tanto iniciar precocemente a formação de lideranças, quanto expor para a sociedade sua preocupação com a formação de uma nova geração¹⁶.

O investimento na viabilização dos assentamentos também está na base da “liberação de quadros”, ou seja, os assentados que aderiam à proposta do MST passaram a contribuir para que algumas lideranças de maior destaque no assentamento se deslocassem para outras regiões, para organizar novas ocupações e, assim, nacionalizar o movimento. Faz parte dessa estratégia o compromisso dos assentados de cuidar do lote dos “liberados” e a cobrança de uma taxa (cerca de 2%) sobre o valor recebido pelos assentados do crédito do Programa Crédito para Reforma Agrária (PROCERA), criando assim um fundo de recursos destinado a financiar o movimento. Buscando formas de se autofinanciar, o MST também passou a disputar recursos estatais, em linhas específicas para apoio à criação de agroindústrias, infraestrutura etc. Dessa forma, abandonou a posição típica dos chamados “novos movimentos sociais” dos anos 80, de ficar “de costas para o Estado”, passando a olhar para este como gestor de recursos que são públicos e, como tal, passíveis de disputa pelos diferentes segmentos da sociedade. Conforme depoimento de um assessor parlamentar, no início dos anos 90, os deputados defensores da reforma agrária tinham um papel ativo no sentido de viabilizar a vinda dos trabalhadores a Brasília, preparar pauta, marcar audiências. Nos anos mais recentes, *“muitas audiências se dão até sem a presença de deputados e senadores ... Hoje o principal local onde passam as coisas do MST é o escritório de Brasília, não o de São Paulo. Tem uma equipe grande, tem gente só nos ministérios buscando convênios e projetos”* (dados de entrevista). Ainda de acordo com esse

depoimento, a própria regulamentação do Proceira foi resultado de uma negociação direta entre o MST e o Incra. Esses dados indicam um aprendizado dos procedimentos de negociação, de utilização dos espaços públicos, de conversas multipartidárias¹⁷, numa atuação que combina a negociação com a mobilização que potencializa essa mesma negociação, conforme sugere Offe (1989), quando analisa os dilemas próprios às organizações de interesse, em especial às ligadas ao mundo do trabalho.

Do ponto de vista de sua visibilidade, tratava-se de trazer a questão da terra para um público mais amplo, de forma a poder mobilizar apoios e fortalecer suas demandas. O lema do III Congresso Nacional, no início dos anos 90, “Reforma Agrária: essa luta é de todos”, sinalizava para um esforço no sentido de os benefícios para a sociedade de uma política de reforma agrária, buscando ampliar seu campo de alianças. É nesse contexto que o MST procura ampliar suas ações em direção às cidades, buscando ampliação de interlocução através da realização de grandes manifestações públicas.

O crescimento da organização dos “sem terra” não ocorreu sem tensões. A bibliografia sobre assentamentos é pródiga na análise de divergências internas, principalmente pela resistência de muitas famílias em aceitar as novas regras, que, muitas vezes, confrontavam-se com as experiências anteriores acumuladas. Em algumas situações tanto essas divergências como outras referentes às estratégias de construção de alianças políticas provocaram fraturas mais profundas, gerando o aparecimento de novas organizações de luta por terra, em diversos pontos do país (MLT, MCC, MT, MLST, etc.)¹⁸. Em outras, houve flexibilização das propostas do MST. Para além das disputas políticas que testemunhavam, esses movimentos, de caráter mais localizado, indicavam a extensão que a luta pela terra assumia e a amplitude da legitimação das ocupações como forma de acesso à terra.

“Assentados”: novos atores, novos temas

A intensificação da luta por terra e da criação de assentamentos teve múltiplos efeitos não só no plano nacional, mas também, talvez principalmente, no plano local. Em termos numéricos, ela correspondeu a um aumento do número das famílias assentadas: segundo dados do Incra, no período entre 1985 (início da Nova República) e 1994 foram beneficiadas cerca de cento e quarenta mil famílias e, de 1985 a 1998, duzentos e oitenta e sete mil. Esses dados foram muitas vezes questionados pelo MST, uma vez que boa parte do que aparece como “assentamento” pode ser entendido como regularização de áreas, viabilizando a permanência na terra de famílias que lá estavam de há muito, em situação conflituosa. Se esse procedimento infla os dados governamentais sobre o número de assentamentos realizados, não se pode desconhecer que, essas

unidades sendo consideradas como “assentamento”, o conflito tende a desaparecer, os trabalhadores passam a ter direito a receber crédito, etc, produzindo-se, conseqüentemente, uma nova situação social e jurídica.

Do ponto de vista que nos interessa aqui, é preciso assinalar que os números tendem a esconder a precariedade com que se reproduz a grande maioria dos assentamentos, marcados pela falta de infraestrutura, assistência técnica, apoio à produção, etc (Bruno e Medeiros, 1998). No entanto, em que pese essas condições, várias pesquisas têm apontado os assentamentos como espaços de produção, sociabilidade e intervenção política. Áreas onde a intensidade dos conflitos tem provocado um adensamento dos assentamentos, como é o caso do sul do Pará, da zona da mata pernambucana, do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, do oeste de Santa Catarina, etc, têm tornado visíveis essa presença, muitas vezes pouco estudada do ponto de vista de suas repercussões, em especial sobre o espaço local.

Como o indicaram Medeiros e Leite (1998), a constituição de um assentamento (em muitos casos, de diversos assentamentos no âmbito de um mesmo município ou região), em especial quando ele é produto de acampamentos e ocupações, acarreta a introdução de novos elementos e agentes que geram alterações nas relações de poder locais, visto que ela envolve graus diferenciados de negociação com o proprietário da terra que pode ou não ser membro da elite local, mas que, de qualquer forma, implica em cunha que se insere nas relações até então prevalentes. Se o espaço do conflito não é o mesmo, do ponto de vista administrativo, daquele onde o assentamento é realizado, nem por isso deixam de se configurar alterações nas relações sociais. A entrada de novos agentes, a realocação de trabalhadores, muitas vezes de outros municípios, criam uma disputa em torno de quem deve ser assentado, que prioridades estabelecer para eles nas políticas públicas municipais, em especial no que se refere à educação, saúde, infraestrutura de estradas, transporte, etc. São diversas as menções a situações em que, no caso de uma desapropriação, prefeitos reivindicam lugar para os trabalhadores sem terra do seu município e se opõem aos “de fora”, não estendendo a eles os benefícios de uma série de políticas municipais. Nesse contexto, o assentamento pode tornar-se um espaço de questionamento de laços tradicionais de patronagem, promover sua ruptura, criar novos laços a partir das novas redes em que estão inseridos ou, em algumas circunstâncias, fortalecê-los.

As novas demandas que surgem (saúde, educação, transporte, apoio à produção, etc), se somam e, às vezes, disputam com as de outras comunidades locais, potencialmente não beneficiadas por nenhuma atenção pública especial, acirrando disputas locais, inclusões e exclusões. A própria trajetória dos assentamentos e dos assentados, marcada pelo menos em parte dos casos pela participação no MST e, conseqüentemente, ligados a redes mais extensas que potencializam as demandas, torna-se um elemento importante para entender como, em muitos locais, acabou por se constituir uma dinâmica mais participativa

e reivindicativa do que a tradicionalmente existente nos municípios brasileiros. Isto nos permite indagar sobre a possibilidade de estarem ocorrendo alterações moleculares na cultura política local.

Algumas pesquisas têm também demonstrado que os assentamentos tendem a promover um rearranjo do processo produtivo nas regiões onde se instalam, no geral caracterizada por uma agricultura com baixo dinamismo (o que inclusive sustenta legalmente a demanda por desapropriação). A diversificação da produção agrícola, a introdução de novos produtos e atividades, mudanças tecnológicas, reflete-se na composição da receita dos assentados, afetando o comércio local, a geração de impostos, a movimentação bancária, etc., com efeitos sobre a capacidade do assentamento se firmar politicamente como um interlocutor no plano local/regional. No que diz respeito ao comércio local, por exemplo, essa nova população movimenta, seja o mercado ligado a bens de consumo (vestimentas, calçados, alimentos, material de construção, eletrodomésticos), seja o de insumos agropecuários (adubos, insumos químicos, etc), principalmente a partir do momento em que começam a ser liberados os primeiros recursos creditícios. O mercado local é dinamizado ainda pela venda de produtos oriundos dos assentamentos, através de feiras, venda direta a supermercados, ou mesmo de porta em porta, ocasionando um novo tipo de concorrência e oferta de produtos que, principalmente quando os municípios pequenos são considerados, tem um peso relativo maior. Há ainda que se ter em conta a organização de associações e cooperativas que, além de movimentarem e modificarem as relações do processo produtivo (a montante e a jusante), muitas vezes alteram uma prática de comercialização generalizada no interior do país: a realizada por “atravessadores” que, no cotidiano dos produtores, muitas vezes, mais do que comerciantes, são fornecedores de crédito e ajudas dos mais diferentes tipos, constituindo-se em elos importantes nas redes de patronagem. O assentamento promove ainda uma dinamização na movimentação bancária, com a chegada de financiamento do Procefa e também de outros projetos dos quais muitas vezes os assentamentos são alvos, como os do Comunidade Solidária e de inúmeras organizações não governamentais que atuam de forma mais independente.

No que se refere à organização territorial, o assentamento tende a representar uma mudança na sua dinâmica, uma vez que traz novas formas de ocupação do espaço - pequenos lotes em áreas onde antes o que predominava era a grande propriedade, agrovilas em áreas onde a população era dispersa, etc. Desse ponto de vista, é notável a capacidade de inovação organizacional produzida pelos assentamentos, em áreas onde predominavam culturas perenes e pastagens extensivas. Na região de Bagé, Rio Grande do Sul, por exemplo, a produção de sementes introduzida por um conjunto de projetos de assentamentos modificou sensivelmente a estrutura produtiva local e incentivou a instalação de indústria de beneficiamento em municípios próximos (Benedetti, 1998).

A criação dos assentamentos afeta ainda a demografia de certas áreas, em especial quando envolvem a vinda de uma população “de fora” do município ou da região, ou quando representam algum deslocamento de populações urbanas para áreas rurais, resultando em aumento populacional ou mudança na relação população rural/população urbana. O aumento da população municipal decorrente dos assentamentos pode implicar ampliação do mercado de trabalho e de consumo, gerando efeitos sobre o comércio local, aumento da arrecadação de impostos, etc. Também tende a gerar um aumento na pressão das demandas em torno de infra-estrutura e equipamentos sociais, o que coloca os assentamentos numa relação direta com as autoridades públicas (locais, estaduais, federais).

Dessa forma, a presença dos assentamentos tende a desencadear processos de reorganização local, que se tornam objeto de disputa política e freqüentemente vêm engrossar tanto os argumentos dos defensores da reforma agrária, em especial do MST que contabilizam os seus resultados positivos, quanto os de seus opositores, que ressaltam a precariedade e instabilidade das novas unidades.

Agricultores familiares

Paralelamente ao crescente peso das ocupações e acampamentos e, conseqüentemente da presença política do MST e do revigoramento do debate sobre reforma agrária, nos anos 90 começou a ganhar corpo um rearranjo de posições no interior do sindicalismo, levando a um aumento da importância dos chamados “pequenos produtores” e a um declínio da importância política dos assalariados. É a partir desse novo quadro que se gestou o que os sindicalistas passaram a chamar de um “projeto alternativo de desenvolvimento rural com base na agricultura familiar” (Projeto CUT/Contag, 1998).

Já na década de 80, evidenciou-se um reordenamento do lugar político dos “pequenos agricultores” no sindicalismo rural e na sociedade, indicado não só pelo seu aparecimento na cena pública através de uma série mobilizações, como pelo crescente peso que passaram a ganhar lideranças desse segmento no interior do sindicalismo. Vários foram os fatores que contribuíram para isso, entre eles a crescente descrença no potencial da modernização da agricultura como forma de melhoria de suas condições de vida; o efeito acumulado de experiências localizadas de incentivo às formas associativas, para buscar saídas para o que se passou a chamar “questão da produção” (através da ação de organizações não governamentais ou do Estado); o germinar de um conjunto de novas lideranças, com forte influência da Igreja ligada à teologia da libertação (mesma matriz de diversas lideranças do MST), questionadoras da ação da Contag também em relação às ações junto aos “pequenos produtores”. Nesse contexto, surgiram diversas experiências de “oposições sindicais” em diferentes regiões do país. Elas passaram a conduzir mobilizações marcadas pela prática de trancamentos de

estradas, portas de bancos e de órgãos públicos, como forma de dar visibilidade às suas demandas e pressionar o Estado a atendê-las. Amadureceram ainda propostas de “tomada” de cooperativas (na maior parte das vezes, frustradas), alimentadas pela percepção de que os pequenos produtores, se eram maioria dentro delas, não detinham nenhum controle político sobre suas decisões. Também foram criados, como já apontado, sindicatos por categorias específicas (“fumicultores”, “suinocultores”, “avicultores”), voltados para as complexas negociações que envolviam os contratos de produção com a agroindústria.

Nas disputas políticas que recortavam o sindicalismo, os “pequenos produtores” progressivamente passaram a ocupar lugares de mais destaque, com as demandas de há muito existentes ganhando novo perfil, através do seu reenquadramento dentro de um diagnóstico da situação agrária e agrícola do país que os levou a falar cada vez mais da necessidade de um “novo modelo de desenvolvimento”. Nesse processo, foram importantes as atividades de formação e de intercâmbios internacionais, promovidas principalmente por iniciativas da Igreja e de organizações não governamentais, onde diversas lideranças sindicais foram levadas a conhecer experiências européias. Esses elementos somados ao crescimento do debate intelectual sobre a importância econômica e social da agricultura familiar, debate esse que, por meio da ação de assessorias, rapidamente passou a circular no meio sindical, num exemplo característico da reflexividade a que se refere Giddens (1991), colocou, no centro da discussão sobre políticas públicas para o campo, o “agricultor familiar”. Essa categoria rapidamente substituiu, no debate político e na linguagem sindical, o termo dominante até os anos 80, “pequeno produtor”. Sob essa perspectiva, temas antes considerados de menor importância tais como a discussão de alternativas de comercialização, a experimentação de formas de produção associadas, o estímulo à constituição de agroindústrias, o significado e implicações das escolhas tecnológicas, as dimensões ambientais da produção agrícola passaram a ser valorizados e a ganhar novos significados como sinalizadores de novos caminhos possíveis.

Por outro lado, a descentralização de atribuições governamentais, prevista na Constituição de 1988, fez crescer o debate em torno do município como espaço de produção e gestão de políticas públicas, provocando uma valorização da ação sindical relacionadas ao tema no espaço local. Isso implicou num maior interesse na intervenção na esfera municipal, através da atuação em conselhos municipais que passaram a ser criados, projeção de lideranças de associações e sindicatos para a esfera político-partidária, através da entrada na disputa por vereanças e mesmo prefeituras e assembleias legislativas estaduais. Para tanto contribuiu também o alargamento dos temas sindicais que, como vimos mais acima, passaram a incorporar questões não estritamente relacionadas à esfera do trabalho, mas também relacionadas a gênero, geração, saúde, educação, tornando o espaço local uma esfera importante de intervenção.

Para tornar visíveis essas demandas e as novas questões colocadas no interior do sindicalismo, além da ação local, tiveram importância as grandes mobilizações nacionais, como é o caso dos “Gritos da Terra”, cujo principal interlocutor tem sido o Estado. A mobilização de trabalhadores de diversos pontos do país, trazendo-os para as ruas, realizando ocupações de órgãos públicos, manifestações, vem constituindo o eixo do “Gritos da Terra”. Através deles busca-se uma forma espetacular de apresentação/ negociação de demandas com o Estado mas também apoio da sociedade para suas propostas¹⁹. A força dos “gritos” tem sido atribuída, pelos sindicalistas, uma série de medidas entendidas como do interesse dos agricultores, como é o caso do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf), aumento de recursos para o Proceca, medidas de agilização das aposentadorias rurais, etc.

No plano da organização sindical essas mudanças corresponderam à crise de um modelo de condução de conflitos e de um modelo de representação sindical. A crescente repercussão das demandas em torno da “agricultura familiar” vem ligada a um processo de substituição de lideranças e de modos de fazer políticas, correspondendo à ascensão e reconhecimento político de lideranças que expressam os interesses desse setor, paralelamente à perda de importância daquelas ligadas aos assalariados. Essa ascensão implicou na projeção de lideranças geradas nesse âmbito para outras esferas sindicais (Central Única dos Trabalhadores) trazendo o tema da “agricultura familiar” para o interior de debates mais amplos, tanto os que envolvem diferentes dimensões da vida nacional quanto para segmentos que estavam acostumados a ler o campo apenas sob a ótica dos conflitos de terra e da reforma agrária.

Um outro efeito importante desse reordenamento de posições foi o fato de que questões relacionadas aos “pequenos produtores” deixaram de se evidenciar como típicas do sul do país. Não só emergiram experimentos de organização da produção em diferentes regiões, impondo uma “nacionalização” das questões referentes à agricultura familiar, como, em algumas delas, as organizações de trabalhadores se mobilizaram no sentido de disputar recursos dos fundos especiais voltados para o desenvolvimento regional, criados pela Constituição de 1988, de forma a canalizá-los para o apoio à agricultura familiar. É o caso do FNO, FNE e FCO.

Por esses caminhos, é possível constatar uma certa convergência entre as demandas dos “sem terra”, muitos dos quais “agricultores familiares” pauperizados, e os da nova categoria que emerge politicamente de uma mesma matriz, criticando a própria natureza do desenvolvimento brasileiro baseado nas grandes unidades produtivas e apontando formas de levá-lo em outra direção. Essa aproximação, passível de ser constatada pelo conteúdo das demandas, no entanto, não se traduzem mecanicamente em convergência política das organizações que as alimentam, nem das experiências acumuladas por esses segmentos, enquanto grupos organizados.

Estado, reforma agrária, agricultura familiar

A emergência de freqüentes e intensas mobilizações no campo, envolvendo diferentes segmentos, constituindo novas identidades e novas organizações, não afetou somente a dinâmica da representação e demandas dos trabalhadores. Esses eventos vêm guardando íntima relação com mudanças no interior do Estado que passa a reconhecer os conflitos que eclodem e a tentar redirecionar suas demandas, “ressemantizando-as” e gerando mecanismos institucionais para seu enquadramento (Offe, 1984). Desse ponto de vista, não se trata simplesmente de pensar as práticas estatais e a emergência de novas instituições para lidar com os novos problemas que afloram como “respostas”, mas sim de considerá-las como componentes de um complexo jogo político onde são disputados significados e conteúdos das políticas públicas.

No que se refere à reforma agrária, desde o início da década de 80, vem se verificando sucessivas mudanças de importância do tema no interior das instituições estatais. Do ponto de vista de seu lugar político-administrativo, por exemplo, nos momentos de acirramento de conflitos, a questão agrária tendeu a se subordinar diretamente ao Executivo, através da criação de um Ministério específico. Em outros momentos, voltou para a esfera do Ministério da Agricultura, tradicionalmente ligado aos interesses dos grandes empresários agrícolas e das atividades voltadas para o mercado externo. No início dos anos 80, por exemplo, foi criado o Ministério Extraordinário dos Assuntos Fundiários, ainda sob o regime militar. Com a Nova República e o relevo que a questão agrária ganhou em meados da década, instituiu-se um Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário, extinto logo depois. Mais uma vez, as questões agrárias voltaram a se subordinar ao Ministério da Agricultura. O aumento na quantidade de ocupações e de volume de ocupantes em meados dos anos 90, acompanhados do crescimento da violência no campo, culminando com prisões de importantes lideranças do MST em Pontal do Paranapanema, em São Paulo, assassinatos e a grande repercussão, inclusive internacional, dos “massacres” de Corumbiara (agosto de 1995) e Eldorado de Carajás (abril de 1996)²⁰ levaram à criação do cargo de Ministro Extraordinário de Políticas Fundiárias.

As mobilizações que se sucederam, a mais espetacular delas sendo a “marcha” dos “sem terra” a Brasília no ano de 1997, evidenciaram uma intensa disputa por espaço nos meios de comunicação, visando produzir uma imagem pública do movimento, procurando dar visibilidade às suas demandas e, ao mesmo tempo, buscando legitimá-las socialmente²¹. Na conjunção desses elementos, a reforma agrária polarizou mais uma vez o debate nacional, tornou-se um aparente consenso nacional e recolocou a questão da importância das pressões para que se obtivessem novas desapropriações. Também se disseminou um consenso, entre os próprios gestores da política agrária, de que as iniciativas governamentais estavam “*indo a reboque dos movimentos*”²². Em resultado, o

final dos anos 90 foi marcado por uma série de iniciativas estatais que procuraram estabelecer um novo campo para a discussão da reforma agrária, de forma a tentar fazer com que o tema saísse da esfera exclusiva do debate sobre desapropriações e assentamentos e passasse a compor um quadro mais geral de intervenção sobre o campo, num esforço de recuperar a posição de produtor de iniciativas políticas.

Um primeiro passo nessa direção foram sucessivas medidas destinadas a disciplinar as desapropriações. Através de medidas provisórias e decretos-lei o governo alterou alguns dos parâmetros vigentes para tal: reduziram-se os juros compensatórios²³, instituiu-se a obrigatoriedade da visita do juiz às áreas afetadas antes de tomar decisão de decretar um despejo. Na suposição que essa visita poderia mostrar a dimensão da questão social envolvida²⁴, definiu-se que a vistoria de terras seria acompanhada por representantes das entidades sindicais rurais (de trabalhadores e patronal). Sem, no entanto, mencionar o MST, deu-se autorização para que as entidades representativas de trabalhadores indicassem terras para desapropriação. Ao mesmo tempo, proibiu-se a desapropriação de áreas previamente ocupadas por movimentos, procurando fragilizar o principal instrumento de pressão dos “sem-terra”. Configurava-se, assim, uma complexa disputa que, por um lado, indicava, a preocupação governamental em se contrapor às iniciativas dos movimentos e, por outro, em criar mecanismos que evitassem que as desapropriações, através das ações judiciais, implicassem em vultosas indenizações que não guardavam nenhuma relação com o valor de mercado.

Um segundo passo foi a tentativa de fazer confluir as políticas voltadas para os assentamentos com as destinadas à agricultura familiar. Da mesma forma como a pressão dos conflitos fundiários acelerou a constituição de assentamentos e provocou todo um conjunto de alterações legais e institucionais, o reconhecimento do “agricultor familiar” como ator social relevante não pode ser entendido sem considerar, de um lado, as mobilizações dessa categoria, em especial através dos “Gritos” e, de outro, as disputas em torno de quem deveria ser o público preferencial para as ações governamentais no campo. Sem dúvida, a tentativa de buscar novas bases de apoio para as propostas governamentais estiveram na origem de medidas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), criado em 1996, um programa de crédito que passava a atender uma parte das bases sindicais (os agricultores familiares em melhores condições de produção), deixando de lado todo um vasto segmento em processo de pauperização crescente.

Como mostra Offe (1989), as organizações de interesse são, do ponto de vista das políticas públicas, um problema a ser equacionado pelo seu poder de nelas interferir de forma altamente antifuncional, mas que, ao mesmo tempo, são absolutamente indispensáveis à política pública, porque detém um monopólio de informações relevantes e por sua capacidade de controlar seus membros. Sob essa ótica, há ainda um longo caminho a percorrer no sentido de delimitar uma agenda

de pesquisas sobre o significado político que a “agricultura familiar” vem adquirindo no Brasil, bem como sobre as relações entre sindicalismo rural e políticas públicas, uma vez que o acesso ao Estado, simbolizado na possibilidade de pressionar para a elaboração ou implementação de determinadas políticas, é condição para o reconhecimento e eficácia da organização dos trabalhadores.

Nesse quadro, em que “agricultores familiares” e “sem terra” aparecem como atores relevantes, capazes de criar fatos políticos significativos, projetando formas organizativas e estratégias políticas distintas, verifica-se a progressiva constituição de um novo desenho institucional, expresso não só nas mudanças legais, mas na própria ossatura do Estado. Dentre elas merece destaque a recente institucionalização de um Ministério de Desenvolvimento Agrário, que abriga as funções do antigo Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários, mas também traz para seu bojo toda a política voltada para a agricultura familiar, antes ligada ao Ministério da Agricultura. Tais mudanças refletem o delineamento de novas diretrizes políticas para esses segmentos, configuradas no documento “Agricultura Familiar, Reforma Agrária e Desenvolvimento Local para um Novo Mundo Rural”, que consolida diversas iniciativas que já estavam em curso e buscam recolocar os termos do debate.

No que se refere à reforma agrária, partindo da constatação do alto custo das desapropriações e do fato de que constitucionalmente havia um amplo espectro de propriedades não passíveis de desapropriação, o documento dá lugar de destaque ao programa Banco da Terra, impondo o tema, distante das demandas dos movimentos sociais, da “reforma agrária de mercado, sem confronto e violência”. O princípio da proposta é que os trabalhadores de um determinado local, interessados em obter terra, formem uma associação comunitária, escolham uma propriedade, negociem com o proprietário sua compra e recebam, através da associação, financiamento para a aquisição do imóvel. Experiência iniciada em alguns estados do Nordeste, com apoio do Banco Mundial, com o nome de “Cédula da Terra”, tornando-se um programa de âmbito nacional, passou a disputar as próprias bases potenciais do MST e do sindicalismo, em especial através do seu apelo à possibilidade de acesso à terra sem os riscos envolvidos nas ocupações e acampamentos.

No que se refere aos assentamentos já constituídos e a serem implantados, a proposta é a de emancipação rápida (no prazo de dois ou três anos) de maneira a transformar os assentados em “produtores familiares”. Dentro dessa perspectiva, o Programa Especial de Crédito para Reforma Agrária foi extinto e ambos os públicos passaram a disputar os recursos do Pronaf, que não é voltado para a totalidade dos “produtores familiares”, mas para parte deles, envolvendo critérios de seleção sobre quem faz juz ou não ao crédito.

Um outro aspecto relevante da nova política é a ênfase no contrato e na competitividade. Sob esse aspecto, impõe-se aos beneficiários da política

governamental uma lógica contratual, estranha ao universo desses produtores. Esta tende a repetir a ficção da igualdade das partes no processo de negociação, num contexto em que a demanda dos movimentos sociais é a de um tratamento privilegiado que lhes garanta possibilidades de sobrevivência num mercado altamente competitivo, onde as grandes agroindústrias acabam levando vantagens não só pela sua escala de produção, mas por todo um conjunto de regulamentações que dificulta a entrada de novos produtores.

Ao mesmo tempo, ganha fôlego a descentralização como política por excelência de implantação dessas ações, responsabilizando crescentemente estados e municípios, e criando novas áreas de disputa, reavivando o debate em torno do significado das instâncias administrativas locais e das possibilidades de participação nessa esfera. Desse ponto de vista, a descentralização coloca novas questões, na medida em que as ações na esfera local passaram a ser valorizadas. Um exemplo disso é a recente criação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, condição para que os municípios possam ter acesso à linha de crédito Pronaf infraestrutura. Abrem-se novas possibilidades de participação, mas também de repor políticas de clientela, tanto do sindicato em relação ao poder local, como no interior do sindicato, na medida em que é o sindicato que credencia agricultores para o Pronaf²⁵.

Nesse quadro, o que se pode observar é uma reconversão dos focos de disputa política. Se a lógica dos movimentos sociais rurais no Brasil sempre foi a de dirigir suas pressões ao governo federal, eles agora são levados a um aprendizado sobre as possibilidades de fazer política no âmbito local e submetem-se ao risco de pulverizar suas ações em iniciativas locais, para responder às particularidades presentes em cada situação. Por outro lado, pela sua própria trajetória, os movimentos sociais no Brasil têm uma estrutura bastante centralizada, o que pode significar a possibilidade de atuar nas duas frentes, local e nacional, de forma articulada, de tal maneira que uma possa fortalecer a outra.

Novos campos de enfrentamento se delineiam, tanto no plano nacional como no plano local. Mas não há respostas a priori sobre seu desfecho. A vitalidade dos movimentos sociais rurais no Brasil vem se reafirmando cotidianamente, colocando por terra todas as previsões sobre sua impossibilidade de questionar iniciativas que lhe são desfavoráveis.

Bibliografia

- Abramovay, Ricardo e Camarano, Ana Maria 1999 “Êxodo Rural, envelhecimento e masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos”, in *Textos para Discussão* (Brasília: IPEA).
- Benedetti, Adriane C. 1998 *Na conquista da fronteira: um estudo de caso nos assentamentos rurais de Hulha Negra (RS)* (Rio de Janeiro: CPDA/UFRRJ). Dissertação de mestrado.
- Bourdieu, Pierre 1989 *O poder simbólico* (Brasil, Lisboa: Difel/Bertrand).
- Bruno, Regina e Medeiros, Leonilde 1998 “Razões das evasões nos assentamentos rurais” (Convênio FAO/INCRA). Relatório de pesquisa.
- Caldart, Roseli 2000 *Pedagogia do Movimento Sem Terra* (Petrópolis: Vozes).
- Concrab 1996 *Concrab: quatro anos organizando a cooperação* (São Paulo: Concrab).
- Champagne, Patrick 1990 *Faire l'opinion* (Paris: Minuit).
- Esterci, Neide 1991 “Sindicalismo e luta por terra”, in *Sindicalismo no campo. Reflexões, balanços, controvérsias* (Rio de Janeiro: CEDI) Cadernos do CEDI, N° 21.
- Fernandes, Bernardo Mançano 1996 *MST, formação e territorialização* (São Paulo: Hucitec).
- Giddens, Anthony 1991 *As conseqüências da modernidade* (São Paulo: Hucitec).
- Iorio, Maria Cecília 1993 *Fumicultores em Greve. Um estudo de representação político-sindical* (Rio de Janeiro: IFCS/UFRJ). Dissertação de mestrado.
- Martins, José de Sousa 1981 *Os camponeses e a política no Brasil* (Petrópolis: Vozes).
- Medeiros, Leonilde Servolo de 1989 *História dos Movimentos Sociais no Campo* (Rio de Janeiro: Fase).
- Medeiros, Leonilde Servolo de 1995 *Lavradores, trabalhadores agrícolas, camponeses. Os comunistas e a constituição de classes no campo* (Campinas: IFCH/UNICAMP). Tese de doutorado.
- Medeiros, Leonilde Servolo e Leite, Sérgio Pereira 1998 “Perspectivas para a análise das relações entre assentamentos rurais e região”, in Teixeira da Silva, Francisco Carlos *et al* (org.) *Mundo Rural e política, ensaios interdisciplinares* (Rio de Janeiro: Campus).

Novaes, Regina R. 1989 “Dissolver a neblina”, in *Teoria e Debate* N° 8, Out/Dez.

Novaes, Regina Reyes 1997 *De corpo e alma. Catolicismo, classes sociais e conflitos no campo* (Rio de Janeiro: Graphia).

Offe, Claus 1984 *Problemas estruturais do estado capitalista* (Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro).

Offe, Claus 1989 *Capitalismo Desorganizado* (São Paulo: Brasiliense).

Palmeira, Moacir 1985 “A diversidade da luta no campo. Luta camponesa e diferenciação do campesinato”, in Paiva, Vanilda (org.) *A Igreja e questão agrária* (São Paulo: Loyola).

Projeto CUT/Contag 1998 *Desenvolvimento e Sindicalismo Rural no Brasil* (Brasília: CUT/Contag).

Tarso, P. 1989 “Limpar o terreno”, in *Teoria e Debate* (ciudad) Ano II, N° 6, Abr/Jun.

Tavares dos Santos, José Vicente 1985 “A gestação da recusa: o ‘colono retornado’ dos projetos de colonização na Amazônia”, in Tavares dos Santos, J. V. (org.) *Revoluções Camponesas na América Latina* (São Paulo: Icone e Editora da Unicamp).

Tavares dos Santos, José Vicente 1993 *Matuchos: exclusão e luta* (do Sul para a Amazônia Occidental) Petrópolis, Vozes.

Thompson, Edward P. 1987 *A formação da classe operária inglesa* (Rio: Paz e Terra).

Notas

1 O isolamento, a incipiente experiência organizativa, a repressão exercida não só pelos militares mas principalmente pelos proprietários de terra, tornava a demanda pelos direitos inscritos na lei em algo temido pelos trabalhadores, uma vez que o simples ato de se organizar e pleitear seu cumprimento implicava no rompimento com as formas de dominação anteriores, desencadeando ondas de violência e expulsões da terra.

2 O Funrural, criado no início da década de 70, garantia instrumentos de previdência social para os trabalhadores do campo, entre eles aposentadoria. Através de convênios com os sindicatos, também possibilitava assistência médica e dentária aos trabalhadores. Num quadro de carência como o que havia no meio rural brasileiro, é fácil perceber como esses convênios e a possibilidade de intermediar as aposentadorias fizeram com que muitos políticos locais se interessassem em apoiar a criação de sindicatos, visando ampliar sua base de apoio.

3 A Contag se conformou sobre um equilíbrio instável entre propostas afinadas com a defesa dos direitos e as práticas diversificadas das federações e sindicatos. Assim, a própria sobrevivência de um discurso em defesa dos direitos trabalhistas e da reforma agrária e, em diversos momentos, de incisivas denúncias, dependia de acordos e negociações com as federações que nem sempre estavam dispostas a traduzir esse discurso em prática sindical. Esses acordos resultavam, eleitoralmente, na manutenção da direção da Contag através de grandes composições que, por sua vez, acabavam por assegurar a continuidade das práticas de determinadas federações.

4 A CUT abrigava o chamado “novo sindicalismo” e tinha como principal base de sustentação os metalúrgicos do ABC, em São Paulo, que, através das greves do final dos anos 70, catalizaram a oposição ao regime militar. Opunha-se à estrutura sindical vigente e pautava sua ação pela ênfase nas mobilizações. A Conclat pautava sua ação por práticas menos mobilizatórias e defendia a unicidade sindical.

5 Não cabe aqui desenvolver os termos dessa polêmica, mas ela é extremamente interessante quando se analisa a constituição de regras de pertencimento e enquadramento no interior do sindicalismo. Para o conteúdo do debate, ver Tarso (1989) e Novaes (1989).

6 Das manifestações dos sojicultores, por exemplo, participaram também grandes produtores, cooperativas. Embora falte consenso sobre que forças lideraram o movimento, não há como secundarizar a participação de “pequenos produtores” e de sindicatos de trabalhadores rurais e da FETAG/RS na sua articulação.

7 Um dos casos mais ilustrativos é o dos fumicultores do Rio Grande do Sul, que, significativamente chamaram de “greve” às suas primeiras

manifestações de bloqueio às fábricas, no sul do país (Iório, 1993). No final dos anos 80 discutia-se, em Santa Catarina, a possibilidade de uma espécie de “negociação coletiva”, nos moldes do que os assalariados urbanos faziam, como instrumento de pressão sobre as agroindústrias.

8 Apesar da filiação formal da Contag à CUT, em meados dos anos 90, diversas federações e sindicatos não acompanharam essa adesão, permanecendo a tensão, no interior do sindicalismo rural entre “cutistas”, herdeiros das propostas das “oposições sindicais” do final dos anos 70 e os que se opõem à CUT. Evidentemente, essas dicotomias reduzem a complexidade das disputas políticas no interior do sindicalismo rural. No entanto é a forma visível do debate, através da qual grande parte das lideranças se identificam e constituem suas relações políticas.

9 Até muito recentemente, a questão da educação e busca de possibilidades profissionais eram discussões restritas ao âmbito privado, da família. A dificuldade de acesso à terra mas também aos empregos urbanos (caminho aberto para os jovens nos anos 70), as novas exigências de ser competitivo num mercado onde a disputa é cada mais acirrada, fizeram com que a questão da formação profissional fosse crescentemente um tema incorporado pelo sindicalismo.

10 O sucesso dessa ofensiva em termos de visibilidade do MST pode ser avaliado pelo fato de que embora boa parte dos assentamentos do Brasil não tenham origem nas ações do MST (em especial na região NE), no imaginário popular e mesmo acadêmico, há uma identificação entre essas duas realidades.

11 Os estados onde as ocupações se constituíram, em diferentes momentos, com grau maior ou menor de resultados, iniciativa do sindicalismo foram Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia (grande parte das ações em conjunto com o Movimento de Luta pela Terra, MLT), São Paulo, a partir da Federação de Assalariados Rurais de São Paulo, entidade sindical não reconhecida pela Contag e que agregava sindicatos da região canavieira de Ribeirão Preto. Note-se que nos estados onde o MST estava mais consolidado (estados do Sul e Sudeste) não ocorreram ações a partir do sindicalismo (Projeto Cut/Contag, 1998).

12 Os “Gritos da Terra Brasil” começaram a ser organizados nos anos 90, pela Contag, com a finalidade de chamar a atenção da opinião pública e dos governantes para as reivindicações dos trabalhadores do campo. Tratava-se de dar extensão nacional a eventos de grande repercussão política que se gestaram no Pará. Traduzem um conjunto de demandas de categorias diferenciadas em uma pauta unificada nacionalmente, mobilizando trabalhadores de diversos pontos do país. É um momento importante de

apresentação e negociação de demandas com o Estado. Os sindicalistas atribuem à força dos “Gritos” uma série de medidas entendidas como de interesse dos agricultores, como é o caso do Pronaf, aumento de recursos para o Proceara, agilização das aposentadorias (Projeto Cut/Contag, 1998). Alguns desses eventos foram organizados com a participação do MST, outros não.

13 Nesse momento, foram realizadas, pelo movimento sindical, oitenta e duas ocupações, envolvendo oito mil famílias, em dezesseis estados (Boletim TR, 14, 1 a 15/04/99).

14 Segundo João Pedro Stedile e Gilberto Portes de Oliveira entre 1986 e 1998 o MST organizou mais de 70 cooperativas de produção e comercialização, nove cooperativas centrais, duas de crédito e dezenas de pequenas e médias unidades industriais (FSP, 22/03/98, 1-399)

15 O MST criou uma escola técnica, no sul do país, destinada a preparar os assentados para gerir as cooperativas que estavam se constituindo nos assentamentos (Curso Técnico em Administração de Cooperativas). Além dele há ainda um curso de formação de Agentes de Desenvolvimento Rural e um outro de Magistério Rural, todos no Rio Grande do Sul (Concrab, 1996). Além disso, até 1996, o MST atuava com um universo de cerca de 600 escolas de primeiro ciclo, 20 escolas de 5ª à 8ª série, totalizando 35 mil crianças e adolescentes e cerca de 1400 professores (Concrab, 1996).

16 Ocorreram passeatas de jovens “sem terra” em Florianópolis e Porto Alegre, reivindicando educação e saúde e também Reforma Agrária, e foram feitos congressos dedicados a esse público. Crianças participaram do 1º Congresso Infantil em áreas de Assentamento e Acampamento do Estado, organizado pelo MST. No ano de 1999, um curso ministrado em Campinas agregou cerca de mil jovens “sem-terra”. Em 2000 a experiência repetiu-se com êxito. Sobre os projetos educacionais do MST e sua relação com jovens e crianças.

17 Segundo o entrevistado, atualmente os movimentos encaminham coisas com vários partidos e não mais só com o Partido dos Trabalhadores, seu tradicional aliado. Pedro Simon, Emília Fernandes, no Congresso, assumem as demandas dos sem terra. Marina Silva, Vilson Kleinubing, Esperidião Amin são referências quanto às demandas referentes à agricultura familiar.

18 A ação dessas organizações é muitas vezes identificadas pela imprensa como parte do movimento dos “sem terra”, sem muita preocupação em distinguir formas organizativas distintas.

19 Foi recorrente nas entrevistas que fizemos a ênfase na importância de conseguir “falar” para a sociedade e a preocupação com a veiculação de uma imagem positiva dos rurais.

20 Nos dois casos, não se tratou da ação de milícias privadas, fato comum nos conflitos de terra brasileiros, mas sim de forças policiais. Ambos os fatos tiveram grande repercussão internacional e foram várias as manifestações de denúncia e protesto em diversas capitais, em especial no caso de Eldorado de Carajás, uma espécie de morte anunciada, pela crescente intensificação das tensões na região, noticiadas pela imprensa nacional em todo o ano que antecedeu a chacina.

21 A Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça, de caráter nacional que, partindo de diferentes pontos do país, agregando assentados e “sem terras”, tinha como meta a chegada a Brasília no dia em que o massacre de Eldorado de Carajás completasse um ano (abril de 1997). Esse evento assumiu o caráter de espetáculo político, cuidadosamente planejado, para denúncia da intensidade da luta pela terra. Juntando a questão da terra com a do emprego, a marcha tocava em temas candentes e despertava a simpatia popular. Trazendo os trabalhadores do campo para o espaço público num ato de protesto, tornou-se, por ocasião da chegada à Brasília, pela adesão de entidades sindicais e partidos de oposição ao governo, num grande ato público em protesto ao governo Fernando Henrique Cardoso. Sobre o papel das manifestações e da importância, para o debate político, da imagem que delas a imprensa constrói, ver Champagne (1990).

22 Expressão utilizada pelo então presidente do Incra, no “Seminário descentralização das ações de apoio da reforma agrária”, realizado em Recife entre 19 e 21 de novembro de 1997.

23 Em diversas situações o Poder Judiciário garantiu aos proprietários a correção referente a todos os planos econômicos e juros compensatórios de 12% ao ano, incidentes sobre o valor da diferença de preços apurada no processo de desapropriação. Por esse mecanismo, o preço final da terra acabava superando, e em muito, o preço de mercado, fazendo da desapropriação, além de um excelente negócio para o proprietário de terras, um argumento que alimentava as críticas daqueles que eram contrários à reforma agrária.

24 Algumas dessas medidas estavam há muito em discussão no Legislativo, mas eram sempre bloqueadas pelos interesses contrários à reforma agrária ali fortemente representados.

25 Diversas iniciativas governamentais abrem espaço para a participação sindical, mas não do MST, o que tende a acirrar disputas entre essas duas formas de organização.

El “Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha”: protesta agraria y género durante el último lustro en Argentina

Norma Giarracca*

*“...Nadie pudo ver nunca la incesante morada
donde todo repite nuestros nombres mas allá de la tierra.
Mas nosotros sabemos que ella existe, como nosotros mismos.
Por el deseo de volver a vivir, entre el afán del polvo
y la tristeza de aquello que quisimos...”.*
Olga Orozco, La Casa. Poeta pampeana.

Introducción

En el último Censo Nacional Agropecuario de 1988, el 11% de las explotaciones figuran encabezadas por mujeres que son “jefe de explotación”. Pero esta proporción aumenta cuando consideramos a las “mujeres ocupadas en las tareas agropecuarias” (17,34% de la PEA rural), y más aún cuando sólo se toma la categoría “trabajadores familiares del productor”, donde la proporción de mujeres llega casi al tercio (Biaggi, 1998).

Los trabajos históricos muestran a las mujeres criollas o indias, anteriores a la expansión capitalista y a la colonización europea, como activas compañeras de los gauchos trashumantes: “...como una integrante permanente del grupo (...) y no como una simple y ocasional visitante...” (Vedoya, 1975). Esta situación se modifica con la expansión de la agricultura a partir de la segunda mitad del siglo XIX, momento que coincide con el comienzo de la colonización europea. A partir de entonces, el discurso “agrarista”, orientado a los colonos, se centró en la necesidad de la extensión técnica (extraída de los países europeos) y en ciertos valores de austeridad y laboriosidad familiar dentro del hogar, especialmente dedicado a las mujeres (Diodati y Fernández, 1998).

Durante este siglo las mujeres del campo ocuparon espacios sociales anteriormente dedicados sólo a los hombres, sobre todo en las cooperativas y, a par-

* Master en Sociología, UNAM. Licenciada en Sociología (UBA), Profesora Titular de Sociología Rural en la Carrera de Sociología y Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Coordinadora de DTDR de CLACSO.

tir de 1980, en programas gubernamentales dedicados a estimular su participación. Lograron también algunos cargos en sindicatos de trabajadores rurales donde la proporción de mujeres era significativa, como el de embalaje y empaclado de frutas de la región Sur del país (Bendini y Bonaccorsi, 1998). Pero el espacio gremial de los agricultores estuvo, hasta 1995, reservado para los hombres, y en esto no hubo ninguna excepción: desde la Sociedad Rural Argentina (representación gremial de los grandes terratenientes pampeanos) hasta las radicalizadas Ligas Agrarias, que agruparon a campesinos y colonos del Norte durante los años 1970.

En este trabajo reflexionamos acerca de un movimiento agrario iniciado y constituido por mujeres, esposas de pequeños y medianos agricultores o bien ellas mismas agricultoras. Este movimiento se denomina Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML), y surgió en 1995 de la acción espontánea de un sector de colonos de una región vecina pero marginal en cuanto a la productividad de la rica Región Pampeana, productora de cereales y ganado vacuno.

Es importante señalar que la organización surge en un mundo rural “pampeano” tradicionalmente masculino: irrumpen con modos de acción novedosos y transgresores, como por ejemplo impedir una acción judicial. Lo hacen con un discurso que se radicaliza, y que marca discontinuidades con las acciones de protesta social agrarias previas, y establece nuevas alianzas desde un inicio al incluirse en el movimiento social de las mujeres. Estas características habilitan para pensarlo no sólo como “un enfrentamiento” coyuntural, sino como “acciones colectivas” (que podrían derivar en un movimiento social o ser parte de él), las cuales se conectarían tanto al mundo rural como al movimiento social de las mujeres de los noventa.

En sus estudios acerca de las acciones de protesta, Charles Tilly (1986) caracteriza al “enfrentamiento” como una acción colectiva discontinua a favor de los propios intereses. En el caso de MML hay un intento de generar un nuevo sujeto social, de producir nuevos sentidos que dan cuenta de un conflicto que, más allá del reclamo puntual -parar los remates de los campos-, muestra un problema cultural del país de hoy: la posibilidad o imposibilidad de seguir viviendo en el campo o en las zonas rurales como lo hicieron los padres o los abuelos de las protagonistas. Dicho en otras palabras, el conflicto enuncia la tensión entre la posibilidad de persistencia o la desaparición de la “explotación agraria familiar capitalizada”, con todas las consecuencias culturales que esta aporía implica.

Estos rasgos alientan a pensar el MML en el marco analítico que ofrecen los estudios de los “nuevos movimientos sociales”. Sin embargo, hemos optado por no establecer denominaciones que indiquen puntos de partida, y por tratar de lograr la reconstrucción y el sentido de las acciones mismas que emprendieron estas mujeres partiendo del concepto más general de “acciones colectivas”. Como sostiene Melucci (1992), tenemos que precavernos de caer en la concepción fre-

cuenta de un sentido común que observa una unidad precisamente allí donde ella debe ser investigada. El problema es cómo este “nosotras” que aparece en los relatos se convirtió en “nosotras”, cómo y por qué un agregado social llegó a la definición de sí mismo como un colectivo capaz de actuar como grupo.

En los últimos años del siglo XX, después de un tiempo en el que las acciones del MML se limitaban a parar los remates judiciales de otros agricultores endeudados, su visibilidad pública volvió a aumentar considerablemente con marchas, apariciones en los medios, etcétera.

A nuestro entender, esta mayor visibilidad del MML desde fines de 1998 se relaciona con dos situaciones: a. un aumento de la protesta social general del país que se repite en los años de elecciones nacionales importantes; b. un aspecto intrínseco al MML que tiene que ver con su expansión tanto territorial como en el nivel del fortalecimiento de la organización.

En efecto, después del período de emergencia, que fue de alta visibilidad pública, siguieron otros tiempos donde se reforzaron las solidaridades y se crearon nuevos códigos que permitieron desarrollar prácticas comunes. En ese otro momento -de latencia, como otro polo de la misma acción (Melucci, 1984)- se buscó armar las redes que sostendrían ese primer “mensaje” lanzado en el momento fundacional.

En los comienzos del 2000, a un poco más de cuatro años de sus primeras apariciones, no sólo cuentan con la personería jurídica que las habilita como organización gremial, con una amplia expansión en el nivel territorial y una metodología de acción (códigos) que las identifica en todo el país, sino que son reconocidas como un actor de peso en el gremialismo agrario nacional, que siempre se caracterizó por estar conformado por hombres.

En el análisis de la organización recurrimos a las dirigentes y participantes del movimiento como sujetos sociales, con prácticas, conocimientos, calificaciones, deseos y motivaciones que las habilitan a traspasar los límites marcados por las restricciones, y situarse con sus demandas y métodos de acción en el escenario de la protesta nacional, y por lo tanto en el espacio de la política. En tal sentido nos centraremos en las capacidades agenciales (en el sentido de Giddens, 1984) que habilitan al MML a intervenir como “actor” en un curso de acontecimientos o en un estado de cosas. Este presupuesto teórico que enuncia la relación entre la capacidad agencial y el poder precede a cualquier ubicación socioeconómica que formulemos para comprender al movimiento.

El proceso de expansión territorial y el fortalecimiento del movimiento no son dos procesos que se dan de modos necesariamente correlativos. Desde los comienzos mismos del MML aparecieron colonos en situaciones parecidas a las de las “pioneras”, quienes empezaron a comunicarse telefónicamente con ellas dispuestos a iniciar el mismo tipo de acciones. La expansión territorial siguió el im-

pulso espontáneo de los primeros momentos, y no fortaleció necesariamente al MML como “actor”. Sin embargo, este primer paso de “expansión” facilitó un proceso de identificación, una integración simbólica de estos colonos (o mejor dicho de estas mujeres), cuyas voces no habían sido recogidas por los otros actores gremiales. Este fue un primer e importante paso.

Cuando pensamos en el concepto “fortalecimiento” (*empowerment* en la conceptualización anglosajona), aparece en primer lugar el interrogante de Tarrow (1997) en su fundamental análisis sobre el tema: ¿cuáles son las circunstancias en las que surge el poder de los movimientos? Tarrow se orienta hacia las “oportunidades políticas” que organizan nuevas oleadas y dan formas a sus despliegues. Cuestiones como las tradiciones políticas, la tolerancia de las elites, los niveles de apertura y cierre de posibilidades políticas, el proceso de democratización en Argentina, etc., tienen una importancia fundamental para dar cuenta del poder en las organizaciones. Sin dejar de tomarlos en consideración, rescatamos otros aspectos relacionados con el fortalecimiento de las propias acciones de las primeras participantes.

El “poder” es un atributo de toda relación social, un proceso por el cual, en nuestro caso, las pioneras se percibieron como capaces de ocupar espacios públicos, y sobre todo de ocupar aquellos lugares donde se toman las decisiones que hacen a sus problemáticas económicas, sociales y culturales. Ellas se fueron fortaleciendo a medida que desplegaban acciones que las convertían en “más capaces y cognoscentes”.

Desde esta concepción del “poder”, y tomando las ideas de Pettersen y Solbakken (1998), “fortalecimiento” significa un proceso en el cual personas, organizaciones o grupos:

- adquieren conocimientos de dinámicas de poder trabajando en sus diferentes contextos de vida;
- desarrollan habilidades y capacidades para ganar un razonable control sobre sus vidas;
- ejercen ese control sin infringir los derechos de los otros;
- apoyan el fortalecimiento de otros en la comunidad.

En tal sentido, “poder” y “fortalecimiento” están fuertemente relacionados con el “conocimiento” en sentido amplio, que incluye tanto los conocimientos prácticos como los técnicos, pero también los “autoconocimientos” y aquellos otros que habilitan para tomar decisiones y optar. Aquellos que según Giddens (1991) dan sostén a las opciones de vida (políticas de vida).

En un primer momento desarrollaremos las demandas originales del MML, y luego nos dedicaremos a la extensión y al fortalecimiento del movimiento, marcando en especial las formaciones de redes sociales y las situaciones de encuentros.

Los orígenes del movimiento

Casi un año después de la Marcha Federal de 1994 (en la que participaron todas las provincias dirigiéndose a la ciudad capital), y con un gobierno nacional recién reelecto (Menem fue reelecto el 15 de mayo de 1995), los periódicos de la provincia de La Pampa alertaban acerca del riesgo que corrían los establecimientos agropecuarios cuyas deudas seguían un trámite que derivaría en la acción judicial. Los dirigentes agropecuarios locales transmitían muy poco optimismo acerca de las posibles negociaciones: no habían tenido éxito en los tiempos de campaña política preelectoral, menos aun -argumentaban- lo conseguirían después del triunfo político alcanzado por el presidente Menem (50% de los votos). El remate de las explotaciones agropecuarias se convertía en una amenaza real para los campos hipotecados.

La zona elegida para comenzar los remates fue Winifreda, una localidad situada a 45 kilómetros de Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa. Es una localidad fundada sobre los campos de un británico que murió en 1924, y cuyos herederos -dentro de los cuales estaba su hija Winifreda- arrendaron y vendieron a colonos alemanes, franceses, rusos, españoles e italianos. La zona no está dentro de la rica pampa húmeda, y la lluvia, por falta o demasía, siempre fue un problema. El Ferrocarril Oeste los conectaba con el puerto de Buenos Aires, y en muchos casos con la posibilidad de que el migrante recuperara a una familia que había quedado en Europa.

En el momento en que se inicia el MML, Winifreda tenía una característica inusual en estos pueblos rurales de Argentina: el gobierno y la justicia estaban en manos de dos jóvenes mujeres, que habían sido electas como Intendente (alcalde local) y Juez de Paz (encargada de legalizar nacimientos, casamientos, defunciones, etc.).

El primer intento de remate se llevó a cabo precisamente en Winifreda, en una explotación propiedad de un matrimonio descendiente de franceses él, y de españoles y sirios ella. La explotación fue heredada del padre francés a fines de los setenta, y sostenida y expandida con mucho sacrificio por la familia Cornelis.

Lucy de Cornelis no se cansa de decir que se endeudaron porque le creyeron al ex-presidente Menem cuando prometía que aquellos que incorporaran tecnología y aumentaran la producción recibirían todo el apoyo del gobierno. No fue así. Las variables manejadas por el Ministerio de Economía -a pesar de incorporar tecnologías- los dejaron fuera de los márgenes de ganancia e inversión.

Se dio comienzo a los remates, pero los tasadores del Banco de la Provincia de La Pampa no se imaginaban que en la explotación de los Cornelis sería la esposa del propietario, Lucy, la que no aceptaría la práctica judicial y se lanzaría a una acción llevada por la desesperación, que terminaría convocando a muchas otras mujeres y poniéndolos en apuros. En efecto, cuando el martillero empezó

su tarea, Lucy salió de su casa y acudió a los medios. En la FM local (radio) contó lo que estaba ocurriendo, y muchas otras familias, que estaban o no en la misma situación que los Cornelis, acudieron al llamado e impidieron el remate.

El esposo de Lucy había tenido actuación política en el Partido Radical. Sin embargo, la reacción no salió de él porque, como dice ella, es de la clase de hombres que piensa que una deuda siempre se debe pagar. La que salió fue Lucy, y según ella no fue una acción premeditada: cuando los tasadores iniciaron su trabajo, fue presa de un ataque de furia tal que decidió salir de la casa y dirigirse a la radio local. Había un clima que predisponía a creer que la apelación tendría resultados. Era el primero de una larga lista de remates en carpeta, pero fue el primer llamado en una población que a esas horas estaba en pleno trabajo agrícola y de la que no se conocían reacciones conflictivas.

Es importante el reconocimiento y movilización de los recursos que utilizó Lucy: la radio, apelar a sus pares, poner la situación en un límite tal que apareciera la posibilidad de la “acción social” como eficaz.

Lo que querríamos remarcar en estos orígenes es que no hubo en esta protagonista una lógica de “medio-fines”, una “acción racional” que le llevara a medir medios y fines. El propósito de la acción fue generado por ella misma, y en el sentido que ella y los otros fueron atribuyendo a estas acciones aparecen los limitantes institucionales (la acción jurídica que se puede posponer pero no anular), las condiciones macro-económicas donde operan las fincas, y aparece también -y esto es lo importante de señalar- la capacidad de invención de Lucy como sujeto, su capacidad de iniciar una acción que derivaría en una situación inexistente en el momento previo.

No había nada que predijera que estas acciones sucederían (aun cuando a posteriori algunos quieren creer “que estaba todo armado”). Podrían no haber sucedido. Esta acción inicial fue una contingencia. Estas creaciones de propósitos de una acción colectiva suponen no sólo esquemas de conocimientos, reconocimientos y movilización de los recursos con los que se cuenta, sino también densas interacciones e intercambios emocionales y afectivos (Melucci, 1992: 224).

Joaquina Moreno, una viuda sin hijos de 65 años que es otra de las dirigentes del MML, organiza y gestiona su campo con una prolijidad financiera sorprendente. Sabe que las deudas sólo sirvieron para comenzar un movimiento cuyos propósitos están construyendo entre todas.

“...Mi papá vino de España en 1908 cuando tenía 13 años, lo mandaron solo para acá, empezó de peoncito (...) logró arrendar un campo un poco antes de que yo naciera, 100 hectáreas, en una gran explotación de 400 mil hectáreas. (...) Con el cambio del ‘45 [se refiere al advenimiento del peronismo en 1945] se le obligó a los propietarios a reconocer algunos derechos a los arrendatarios. Se les dio a los arrendatarios la posibilidad de comprar

(...) mi padre compró 150 ha. Yo heredé ese campo (...) me casé con un periodista mendocino, era un “tipo” que podía estar en el campo sin salir (...) como yo, nos gustaba esta vida, no nos importaba nada del mundo, mi marido falleció hace 6 años. (...) Nos fue bien, desde chiquita fui progresando despacito con mi trabajo, por supuesto con las debidas limitaciones y fui progresando casualmente hasta 1989. De entonces para acá me voy para atrás rápidamente...”.

A comienzos de junio de 1995 se realizó la primera asamblea. El diario provincial La Arena afirma: “...Con la sencillez de quien sólo sabe de trabajo, con palabras simples, y en algunos casos hasta con lágrimas en los ojos, las mujeres agropecuarias autoconvocadas en asamblea, ayer en Winifreda, expusieron sin tapujos la difícil realidad del campo pampeano...” (La Arena, 4/6/95). En estos primeros momentos, el movimiento contó con las simpatías de la prensa y de la población en general. Incluso, el gobernador de la provincia de La Pampa, cuando días después le acercaron el petitorio, se mostró comprensivo y prometió “revisar caso por caso” los endeudamientos.

Ellas se sintieron complacidas de tales respuestas, creyeron que las soluciones llegarían pronto. Así recuerda Joaquina Moreno la asamblea y la entrevista con el gobernador:

“...La asamblea era grande esa vez. En Winifreda había como 300 personas por lo menos y la Comisión se hizo en base a un productor por cada pueblo, de Trenel [su pueblo] estaba yo sola. Todas hablamos, cada “chica” fue exponiendo su problema, todas estaban por las deudas. Estaban un poquito “crudas” [se refiere a poco entrenadas en las acción gremial] y entonces yo expuse el problema de todos, porque la deuda no viene porque sí, la deuda era una consecuencia ¿eh? el origen de la deuda era la falta de políticas agropecuarias adecuadas. A la gente le gustó (...) no era una cosa del otro mundo, era lo que todo el mundo sabe, siente por su situación. Y entonces dijimos, qué hacemos, vamos a ver al gobernador, vamos a ver a “fulano” y ahí empezó todo. (...) Y bueno, fuimos, tuvimos una entrevista con el gobernador. El movimiento estaba recién iniciado (...) o sea en esa primera asamblea se originó la idea de elaborar un petitorio para llevárselo al gobernador y fuimos 10 señoras. Y estaba el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, quien “se metió” conmigo [inició un diálogo descortés con ella]; yo daba ejemplos de la desvalorización de los novillos y me quiso hacer callar porque creía que yo no sabía nada, pero se metió mal porque yo tenía datos precisos. Bueno el gobernador nos atendió bien, lo invitamos a ponerse al frente de nuestros reclamos, así que ahora no diga que vamos en contra de él. Bueno no quiso, se “jodió” [él perdió la oportunidad de comprender]. Siempre dicen “La Pampa está linda”, La Pampa está linda en apariencia. En La Pampa hay medio millar de vacas menos que hace 6 ó 7 años...”.

Tanto del relato de las protagonistas como del registro periodístico de la época de esos primeros momentos, se puede inferir la importancia de la primera acción de Lucy de Cornelis (convocar a sus pares para parar los remates): de ella surgía un movimiento con reivindicaciones de tipo económico claras y sencillas. Se proponían el apoyo de las autoridades provinciales para lograr que se pararan las amenazas de remates. Confiaban en que podrían dar cuenta de sus razones, en que sus reclamos serían lógicamente escuchados y sus problemas solucionados. Todavía no pensaban en un enfrentamiento con las autoridades políticas. El movimiento hubiese podido tener una vida coyuntural, y ser meramente reivindicativo.

El desarrollo y la radicalización del movimiento

“...Las mujeres agropecuarias se sienten defraudadas por el gobernador...”.

“...Estamos verdaderamente dolidas...”, dice Rosita de Garat.

Estos titulares del principal diario pampeano preanunciaban el final de las buenas relaciones entre las mujeres agropecuarias y las autoridades provinciales. Sólo unos días después de la entrevista con el gobernador y de escuchar las promesas acerca de la reconsideración de los remates, el Banco de La Pampa (banco oficial de la provincia) remató la maquinaria de dos productores en sociedad, quienes estaban endeudados. La presencia de las mujeres, el pedido de Rosita Garat, y la asistencia de los medios de comunicación, no bastaron para que se impidiera la subasta de una maquinaria perteneciente a estos dos chacareros prendada por el banco.

Rosita Garat, que asistió al remate, se expresó así:

“...Buenos días. Con todo respeto me quiero dirigir a ustedes para decir que integro la comisión de esposas agropecuarias y solamente nuestra presencia acá está diciendo mucho, porque el martes estuvimos con el señor gobernador y nos dijo que el Banco de La Pampa no remataba. Bueno, esto es un remate, nos sentimos un poco tristes y defraudadas...” (La Arena, 18/6/95).

El fracaso en las negociaciones y la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador Marín tuvieron un efecto detonador en la expansión geográfica de las acciones de las mujeres, así como en un cambio de actitud en las dirigentes pioneras.

Es posible que el gobernador de La Pampa haya prometido soluciones sin intenciones serias de buscarlas en modo inmediato (así, por lo menos, se muestra en los resultados). A nuestro juicio, Marín subestimó la capacidad de acción de estas “chacareras”. Sabía que las soluciones negociadas, donde cada parte cede algo, no eran frecuentes en la gestión del gobierno de Menem al cual él pertenecía, y sin embargo les prometió soluciones inmediatas. “...Bueno el gobernador nos atendió bien, lo invitamos a ponerse al frente de nuestros reclamos, así que

ahora no diga que vamos en contra de él. Bueno no quiso, se jodió...”, nos dijo con una lógica muy alejada de la política partidaria Joaquina Moreno.

En la segunda mitad de 1995 el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha crecería en una forma inesperada por las pioneras: se realizan reuniones de mujeres en el oeste de La Pampa, y se conectan mujeres de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Neuquén y Río Negro.

El 21 de septiembre se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional: “Quinientas personas y ningún funcionario”, tituló la prensa el artículo acerca de la asamblea. Las dirigentes, consecuentes con un estilo cívico que indica respeto a las autoridades democráticas, habían cursado invitaciones a todos, incluidos el presidente Menem, el Secretario Nacional de Agricultura, las autoridades provinciales, etc. Querían soluciones consensuadas, no buscaban enfrentamientos.

Dijo Lucy de Cornelis en esa oportunidad:

“...cuando en mayo mi desesperación llegó al límite máximo porque golpeé todas las puertas y nadie me escuchó. Por eso dispuse convocar a las mujeres y encontré una respuesta inesperada. Sentía impotencia porque factores externos nos estaban arrebatando nuestras cosas. Por eso decidimos luchar juntas y hacernos fuertes...”.

“...No somos mujeres ricas, con autos importados ni mansiones lujosas, sino que venimos de familias que andaban en sulky o a caballo por los campos, abriendo surcos, cosechando a mano y hasta pariendo en el monte...” (La Arena, 22/9/95).

En esta Asamblea elaboraron y presentaron a las autoridades un petitorio con 15 demandas y apelaron a las autoridades políticas y a la sociedad civil. El texto decía:

“...la Asamblea Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha, con participación de mujeres representantes del comercio, la industria y otros movimientos de todo el país, reunidas en Santa Rosa, La Pampa, el día 21 de septiembre de 1995 elaboramos el siguiente petitorio para ser elevado al excelentísimo Sr. Presidente de la Nación, gobernadores, senadores, diputados nacionales y provinciales y a los representantes del poder judicial...” (La Arena, 22/9/95).

De esta Asamblea salió el *Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha*. Se fueron conociendo, fueron reconociendo los recursos con los que contaban y generando una sociabilidad que fue importante en la continuidad del mismo. Las rionegrinas, por ejemplo, lograron que asistieran intendentes de las regiones agrarias que provenían de la lucha agraria gremial. Comenzaron a recibir adhesiones de la Federación Agraria, que aún estaba presidida por un viejo partícipe de las luchas agrarias, Humberto Volando. También recibieron apoyos de los pequeños comerciantes en situaciones no muy distintas a las suyas, y comenzaron a recibir el aliento de grupos de mujeres de todo el país.

Esta identidad de género las llevaría a elegir como fecha para ganar Buenos Aires los 8 de Marzo, día internacional de la mujer. En efecto, tanto en 1996 como en 1997, el MML estuvo ese día ocupando la Plaza de Mayo, con tractores manejados por ellas, con adhesiones de todas las entidades agropecuarias que agrupan a las pequeñas y medianas explotaciones y, por supuesto, con el apoyo de los movimientos feministas que ese día recuerdan las luchas mundiales de las mujeres. Pero para entonces el MML ya había radicalizado su posición: había logrado suspender con prácticas confrontativas varios remates (“los gritos hacen imposible los remates”, comentaba un martillero), y el diálogo con las autoridades era “un diálogo de sordos”, como ellas mismas lo caracterizan.

“...Si no hay voluntad de pagar van a ser ejecutadas como cualquier deudor...”, amenazaba a esas alturas el gobernador Marín, a lo que Lucy contestaba: “...Qué voluntad de pagar vamos a tener si no cosechamos y antes de llevarle plata al banco le tengo que dar de comer y educar a mis hijos...” (Clarín, 25/9/96).

“...El remate del campo de un pequeño agricultor, endeudado con un financiero, de la localidad Luis Palacios, no se pudo concretar ayer ante la oposición de las 200 personas, que se concentraron frente al juzgado de Paz, convocadas por el MML de Santa Fe...” (Clarín 1/11/96).

Las entidades gremiales insistían en la refinanciación de pasivos, buscaban la negociación tras el impacto que representaba la presencia en televisión del MML. Mientras tanto, las mujeres se preparaban para suspender los remates, llegar a los medios de prensa y contar al público el diálogo de sordos con las autoridades democráticas.

Y efectivamente, sus voces simples, con la sinceridad y claridad de las mujeres de campo, tuvieron un fuerte impacto en la sociedad nacional. Son invitadas a programas de televisión tanto de tipo político como dedicados a las mujeres y, poco a poco, son identificadas como las dirigentes más combativas del sector agrario.

Fortalecimiento y expansión del MML

El proceso de expansión territorial contribuyó al fortalecimiento del movimiento en la medida en que incluyó actividades grupales, encuentros, incorporación de conocimientos, habilidades, elementos identificadores y construcción de redes de solidaridad. Otro nivel posible para abordar la “expansión” y el “fortalecimiento” del MML se relaciona con los contactos entablados con otras organizaciones de colonos, campesinos, pequeños productores endeudados, etc., del país o del exterior.

El concepto de “redes” al que nos referimos es amplio en tanto fenómeno cultural, conjunto de significados, normas y expectativas usualmente vinculados con correlatos de conductas de todo tipo (Curran *et al*, citado por Roggi, 1998). La red está concebida como estructuración, es decir, medio y resultado de la acción de los actores que participan en ella. El acento está en los actores, en la capacidad de vincularse con el medio y generar un conjunto de relaciones que habilite una estrategia de fortalecimiento.

En este apartado nos proponemos analizar y comprender el proceso de construcción del MML desde los conceptos de “expansión” y “fortalecimiento” enunciados en los párrafos anteriores.

Abordaremos tres niveles: 1. las acciones generadas por sujetos individualizados (10 dirigentes, incluidas las que definimos como “pioneras”) que se orientan a procesos de fortalecimiento de la organización; 2. la expansión territorial del movimiento en estos años; 3. la conformación de redes sociales.

El fortalecimiento desde los sujetos: las dirigentes

Las primeras en organizarse fueron las mujeres de la provincia de La Pampa, desde el liderazgo de su actual presidenta, Lucy de Cornelis (LC). Decíamos antes que ella corría el peligro de perder sus tierras, y fue quien convocó y generó ese acontecimiento. Otra de las “pioneras”, Joaquina Moreno, no estaba endeudada y decidió participar porque consideró que, más allá de su situación personal, las condiciones para los pequeños y medianos agricultores estaban empeorando día a día, y que las organizaciones existentes tenían serias dificultades para reconocer y hacerse cargo de tales problemas. Luego llegan otras mujeres de la provincia de Santa Fe, más cerca de la rica región pampeana, las del Sur del país y, por último, las de las provincias más pobres, del Norte. Lucy cuenta esos primeros momentos con cierto asombro, marcando la precariedad del proceso:

“...En la primera asamblea, había una mesa redonda que habíamos puesto y estaba yo sola delante (...) aparte por la vergüenza, porque antes te ponías roja, de todos los colores. (...) Bueno ahora, dicen las otras mujeres, vamos a hacer una comisión provisoria. Y me eligieron presidenta. El 21 de septiembre [de 1995] cuando vienen las de las provincias dijimos: vamos a discutir. Había mujeres con más capacidad [que yo] y en esa reunión me eligieron presidenta nacional del movimiento. De ahí que se llame “Movimiento Nacional”, las de Santa Fe le ponen ‘en lucha’ y las de Formosa ‘en pie’ pero siempre todas dentro del movimiento...”.

La actual presidenta del MML reconoce la “capacidad” como un elemento fundamental para ser elegida dirigente, aunque el sentido que le da al recurso “capacidad” está básicamente relacionado con la educación formal. Esta es una

creencia social muy difundida entre la población descendiente de los inmigrantes, quienes consideraban que educación formal y capacidad tienen una fuerte relación. Sin embargo, ella fue la elegida como presidenta del movimiento, porque la consideran “capaz” en el sentido de quienes pueden generar, reconocer y movilizar recursos, o de quienes poseen destrezas para iniciar una acción.

“...Estábamos todas desesperadas pero ninguno tuvo la idea de salir al aire, convocar a la gente (...) por eso la apreciamos tanto a Lucy y no la queremos abandonar porque fue la iniciadora y la que hoy mantiene la misma fuerza que en aquel momento...” (Miembro del MML de La Pampa).

En las entrevistas a miembros del MMLo a otras dirigentes, es frecuente encontrar la frase “ella nos unió/reunió/convocó/llamó para poder”, y las frases siguen: “luchar por nuestras tierras”, “enfrentar a los bancos”, “luchar contra todo esto”, “luchar todos juntos”. Esta “capacidad” de Lucy -este poder como acción- no deriva de su experiencia previa en organizaciones gremiales (pues no la había tenido) ni de su educación formal (no completó su educación media). Deriva, a nuestro juicio, de las habilidades e inversiones emocionales que esta mujer pudo poner en acto frente a una situación vivida como injusta y agravante. Ese momento de decisión -resignificar recursos, convocar a otros chacareros- fue relevante en sí, pero además ella *pudo* sostener la acción, asumió su rol de liderazgo.

En un estudio acerca de los “nuevos movimientos sociales” en América Latina, David Slater (1991) rescata la importancia de un “liderazgo” con el que se pueda garantizar una rudimentaria forma organizacional. Liderazgo, agrega el autor, que debe estar en posición de anunciar un proyecto, una serie de conceptos, imágenes y valores dentro de un discurso, que pueda interpelar efectivamente a los sujetos sociales involucrados en la situación o región. Este anuncio de un proyecto -entendido como imágenes, códigos y valores- es lo que otorgó a la acción de LC la relevancia que resultaría en su liderazgo.

Ese liderazgo está basado, además, en sus propias destrezas para generar relaciones con los otros, capacidad para convocar y para ser autorizada por los otros en el propio acto. La “no aceptación” del discurso institucional (rechazo de las acciones judiciales) politizó su acción y la convirtió en una acción colectiva, donde un conflicto está implicado y donde participan dos actores enfrentados por la apropiación y orientación de valores sociales y recursos de tipo material y simbólico (Melucci, 1980).

Este proceso no necesariamente tuvo que ver sólo con los niveles de educación formal alcanzados o con formaciones o capacitaciones previas de las protagonistas. Tuvo que ver con otros aspectos de “las pioneras” como sujetos, que las habilitaron para desplegar sus capacidades agenciales en un campo social dado. Los recursos educativos, las experiencias organizacionales, son elementos de primer orden en los procesos de formación de movimientos, pero también se pueden adquirir si se produce esta predisposición para la acción.

¿Qué sintieron las otras mujeres que escucharon la apelación de Lucy por la radio?

“...¡Ay! Una emoción muy grande porque la verdad estábamos todos desesperados pero ninguno tuvo la idea esa de poder salir al aire, convocar a la gente (...) ella salió, estaba sacando las cosas de su casa porque la iban a rematar, la amenaza del remate y desesperada dejó todo lo que estaba haciendo o sea como decimos nosotras ‘tiramos el delantal’ y se fue a la radio...” (Miembro del MML de la región).

Lo que Lucy logró poner en circulación tenía que ver con una situación económica común a un conjunto de agricultores, pero lo que desencadenó las acciones tuvo que ver con la posibilidad de innovar, de crear, de imaginar, de lograr un efecto. Hubo un campo en el cual los propósitos fueron construidos, coproducidos entre estas “pioneras” (tanto quien convocó como las que acudieron al llamado). Como nos recuerda Melucci (1992), este proceso es activo y relacional, generador de “identidades colectivas”, e implica la presencia de esquemas de conocimientos, de densas interacciones, de inversiones subjetivas e inter-subjetivas, y de intercambios emocionales y afectivos.

Hemos entrevistado a 10 de las principales dirigentes actuales del MML, y de este material registramos algunos aspectos que permiten un primer acercamiento a ellas como sujetos. Las más jóvenes rondan los 40 años, y las más grandes los 65. Todas descienden de familias europeas: italianos, españoles y franceses². La mayoría tiene 3 ó 4 hijos, pero dos no tienen descendencia. Sólo dos habían tenido experiencias de participación política -una estudiantil y en derechos humanos, y la otra había intentado participar en el gremialismo agrario. Algunas habían sido socias o participado en cooperativas.

Estos rasgos permiten ubicarlas en un mundo social formado por las ciudades pequeñas o simples pueblos del interior del país, centros administrativos de los alrededores agrarios de sectores medios habitados por descendientes de inmigrantes que lograron con muchas dificultades cierta movilidad social durante este siglo, confiando en el trabajo y en el esfuerzo familiar, y valorizando la educación formal. Sabemos que Lucy y otras dirigentes tienen hijos universitarios, o por lo menos en el nivel de enseñanza media³.

En varias de las entrevistas a estas 10 dirigentes registramos situaciones familiares difíciles, ubicadas en algún momento de sus pasados, relacionados con pérdidas de patrimonios, quiebras de empresas o de campos, o por lo menos historias de sacrificios para lograr la tierra familiar. Veamos algunos de los casos:

Caso I: “...Mi abuelo era italiano y se vino desde Italia ya grande, en la época en que se venía a ‘hacer la América’ y trabajando compró campos. (...) Mi padre compró un tractor para que mi hermano -que no quería estudiar- fuera contratista rural y, bueno, tuvo mala suerte, se le fundió el tractor, para pagar el arreglo tuvo que vender el campo y sembró y ese año vino mal el clima y

perdimos todo. Yo ya tenía 18 años y tuve que empezar a trabajar de sirvienta y mi hermano de peón rural para sobrevivir...”.

Caso II: “...Yo siempre milité en lo agrario o en derechos humanos antes, en la Universidad, pero esto... lo que pasa es que me toca muy de cerca porque yo soy hija de chacareros fundidos. El primer remate a que asistí fue al de mi familia a los 14 años y sufrí tanto que juré que nunca más iba a dejar que pasara alguno...” (En la entrevista luego se aclara que aquel remate tenía que ver con una pequeña empresa no agraria).

Caso III: “...Bueno el origen de mi familia fue, mi papá que fue inmigrante italiano [vino] con mi abuelo. Mi papá vino a los 14 años de Italia y se instalaron en una pequeña chacrita de Pergamino, antes tenía que arrendar campos, pagaban unos alquileres espantosos, cada vez que después de hacer el pozo, de hacer el rancho de adobe y allí poner a la familia, a lo mejor estaban 3 años y luego venía el dueño y les decía ‘no, no quiero que trabajen más el campo, pongo a otro’ y se tenían que ir dejando todo el sacrificio...”⁴.

Estos relatos testimonian historias frecuentes de los inmigrantes que llegaron masivamente durante varias décadas al país, que poblaron “la pampa gringa”, y cuyas posiciones y derechos se lograron con sacrificios y diversas luchas sociales urbanas y agrarias. El peligro de perder nuevamente aquellos derechos o patrimonios por los que sus familiares tanto lucharon aparece repetidamente en los relatos, y nos arriesgamos a pensarlo como una motivación -consciente o no- de la acción colectiva. Sus familiares se sobrepusieron al sentido de esas pérdidas, y estas mujeres lograron, con sus esposos o solas, conseguir una finca, una producción para el mercado, patrimonios y educación para los hijos. Nuevamente, como en las historias familiares, todo está en peligro.

En síntesis, el nivel de los sujetos es importante para entender aquellos aspectos que posibilitan el fortalecimiento: las trayectorias familiares, sus propios procesos de formación como mujeres de campo, hijas y nietas de inmigrantes, con sus tradiciones culturales, sus imaginarios en relación con la llegada de esos abuelos “gringos”. Se trata de comprender las singularidades que distinguen un relato de otro; los modos en que cada una vivió las condiciones de conformación de la vida social rural argentina. Esas experiencias personales de “logros y pérdidas” también se vinculan con esta decisión imprevista en los años noventa de “tirar el delantal” y salir a la escena pública. Tengamos presente que muchas otras miles de mujeres permanecen en sus hogares sin participar (y a veces criticando al MML), y el análisis de este nivel -el de los sujetos sociales- colabora en la comprensión de estas diferencias.

La expansión del movimiento en el país

Desde el momento mismo de su creación, el MML buscó a los medios de comunicación y los utilizó como una herramienta de expansión. La radio local en el

primer momento, y las repercusiones en la prensa escrita, fueron recursos relevantes para el proceso de expansión. Los periódicos provinciales anunciaban a las pocas semanas de que se parara el remate del campo de los Cornelis: “*Cunde el ejemplo de Winifreda*” (nombre del pueblo de LC). Allí también anunciaron que las mujeres del oeste de la provincia de La Pampa se auto-convocaron y después se pusieron en contacto con LC.

El 3 de junio de 1995 fue el remate en Winifreda, y el 21 de septiembre tuvo lugar la reunión donde se formó la “mesa nacional” a la que asistieron representantes de distintas zonas de La Pampa y de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro y Formosa. La primera etapa de expansión fue espontánea, aun cuando los medios de comunicación fueron de gran ayuda.

En una segunda etapa, “las pioneras” se trasladaban y participaban en los nuevos remates. El mecanismo era simple: los agricultores las llamaban porque les llegaba la cédula judicial; entonces ellas decidían quiénes iban y cómo financiaban el viaje. Las más conocidas se comunicaban con los medios, y las delegadas se trasladaban a la nueva región.

“...Van apareciendo mujeres que se enteran por los medios (...) te digo que todavía es bastante artesanal...”.

Ellas mismas cuentan que muchas veces lograban parar los remates porque los funcionarios retrasaban la acción frente a la posibilidad de intervención del MML, o porque ellas creaban las condiciones para que el remate no se pudiera concretar. En otras ocasiones no lograban pararlos, y los campos se vendían. En estos últimos casos, la presencia del MML generaba una situación solidaria en la que los perjudicados no se sentían solos.

“...Yo creo que a medida que se van haciendo ejecuciones las mujeres se movilizan espontáneamente (...) el otro día en Bariloche no teníamos [formado el MML] y bueno, ‘las mujeres’ fueron y pararon el remate...”.

Una de las dirigentes de la provincia de Santa Fe cuenta de este modo la creación de un grupo que se integró al MML desde la provincia de Tucumán:

“...Y fue muy lindo, primero porque nosotros sabíamos del remate y fuimos a organizar el movimiento. Se organizó el movimiento, a los 15 días se hizo el remate. El remate, en realidad, se transformó en un acto público y político. Fue un montón de organizaciones, UCIT (Unión de Cañeros Independientes de Tucumán), estaban los de Federación Agraria, estaban todos, estaban las Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., estaba todo el movimiento adelante. Era la primera vez en Tucumán, entonces nos ponemos todos de pie cuando empieza el rematador y empezamos a cantar el Himno Nacional, [la situación] era totalmente nueva, el remate en medio del ‘bochinche’ [pero] el remate se hace. Lo anulamos y a los 10 días se vuelve a hacer, lo anulamos otra vez...”.

El MML cuenta con un conjunto de asesores legales que apoyan estos actos y proponen las acciones judiciales a seguir en cada caso. Sus acciones se mueven en estos dos niveles: la protesta para impedir la acción del rematador, pero también las acciones legales necesarias y pertinentes.

Pequeños grupos de mujeres que comienzan a identificarse con el MML aparecen con frecuencia en muchas provincias y regiones del país. Algunas de estas nuevas participantes logran luego viajar a las reuniones de la “mesa nacional”. Pero la organización es, en este terreno, de una marcada precariedad y espontaneidad. Faltan recursos económicos para financiar los viajes, los teléfonos, un simple lugar donde reunirse, o sus publicaciones. Sin embargo, en cada acto donde participan y con cada nuevo grupo de mujeres endeudadas que hace su aparición en el país, logran fortalecerse. Nos dice una activa dirigente de Santa Fe:

“...Mirá últimamente formamos el movimiento en el Valle de Río Negro, en Neuquén, Santiago del Estero, Formosa, Buenos Aires, parte de Córdoba, no tenemos demasiado desarrollo del movimiento todavía. Santa Fe es muy fuerte, La Pampa, Río Negro, que te decía recién que lo creamos hace cuatro meses. Ayer [marzo de 1998] las mujeres pararon por primera vez un remate, tenían una alegría, me llamaron y aplaudían todas por teléfono, me llamaron a Rosario porque habían logrado parar el remate, hicieron su primer experiencia, eran 3 has. de una mujer que estaba ella al frente de la chacra, bueno llamó al movimiento y con la misma modalidad nuestra de cantar el himno y entorpecer el desarrollo del acto. Tuvo bastante repercusión porque hoy lo estaban pasando en TN [noticiero televisivo], anoche lo vi en Canal 9. Todo eso ayuda a que los bancos tomen algunas medidas, yo creo que pesan mucho esas suspensiones de remates, porque *¿cómo explicás vos que un grupo de mujeres, solamente entonando el Himno Nacional y agarrándose de las manos, resista de esa forma, viste, un simple acto?...*” (Entrevista, 1998, la cursiva es nuestra).

La expansión hacia afuera: la formación de redes sociales

Una de las primeras iniciativas de las “pioneras” fue conectarse con otras organizaciones del país y del exterior con mayores experiencias en este tipo de acciones. Sus esposos o padres eran o habían sido miembros de la Federación Agraria Argentina (FAA) o de las sociedades rurales locales que están agrupadas en la Confederación Rural Argentina (CRA). Habían tenido participación en el movimiento cooperativo, y por lo tanto su federación -CONINAGRO- también era una organización cercana.

Dentro de la FAA se había creado una corriente más combativa que la línea nacional oficial, denominada Chacareros Federados, que ha logrado un interesante desarrollo en Santa Fe y el Norte de la provincia de Buenos Aires.

La relación con los Chacareros Federados fue muy importante, ya que el MML, a nuestro entender, tiene dos tipos de problemas con FAA: el primero tiene que ver con una diferencia en la concepción general del papel de las organizaciones gremiales, y el segundo con la concepción patriarcal que manifiestan los principales dirigentes de la Federación.

En efecto, mientras que FAA expresa desde hace unos años una posición negociadora y mantiene un discurso que pone el acento en los factores tecnológicos y en la eficiencia para integrarse al mercado, el MML presenta una posición más combativa, dado que sus demandas cuestionan a las instituciones que las indujeron a endeudarse para tecnificarse: “Estamos endeudadas porque creímos en la modernización tecnológica”, razonan ellas. La FAA no tiene problemas en generar alianzas con los grandes productores de la Sociedad Rural Argentina, en tanto que el MML busca formas de acercamiento al Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.

El segundo problema, muy claramente enunciado en los relatos, tiene que ver con las posiciones de género. Las principales dirigentes del MML creen que sus acciones son cuestionadas por la FAA por haber sido generadas por mujeres. En reuniones gremiales o actos públicos con ellos, se sintieron descalificadas por frases que hacían referencia a sus “lugares naturales en el hogar” o a las “funciones femeninas”. Una y otra vez, los dirigentes nacionales de la FAA aluden a funciones femeninas y masculinas, y se reservan los espacios públicos (hablar en actos, declaraciones a los medios) para ellos.

Es importante atender a estas diferencias señaladas por las dirigentes del MML en referencia a la principal organización gremial de los pequeños y medianos productores, ya que se relacionan con los aspectos que ellas mismas ponderan para generar alianzas. La capacidad para registrar los despliegues de asimetrías por género, criticarlos, y buscar los grupos donde los hombres estén más abiertos a estos nuevos aprendizajes democratizadores, señala ciertas habilidades personales y grupales. En efecto, buscan fortalecer y conectar al movimiento con otras organizaciones que cumplan estos dos aspectos (para ellas esenciales): combatividad y respeto por las posiciones de género⁵.

El MML se conectó además con organizaciones provinciales de pequeños agricultores o de comerciantes endeudados. Con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) desarrollaron no sólo relaciones de solidaridad en las acciones, sino ciertos proyectos de fortalecimiento organizacional. En la provincia de Tucumán el MML tiene una fuerte relación con el Centro de Empresarios de Famaillá, que agrupa a pequeños comerciantes.

Además, están en contacto y tratan de fortalecer vínculos con varias organizaciones de mujeres, con organismos de derechos humanos, y con la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), organizaciones gremiales combativas y alternativas a la vieja y “ofi-

cialista” Confederación General del Trabajo (CGT). Tienen fuertes contactos con algunos legisladores de los partidos de centro-izquierda que conforman la Alianza (pero declaran neutralidad partidaria), con grupos de universitarios, con sectores de la Iglesia progresista (muchas de las dirigentes se manifiestan muy creyentes) y con grupos indigenistas. A sus asambleas nacionales concurren los medios de comunicación provinciales (La Arena, Pampa TV) pero también las grandes empresas nacionales de comunicación (Clarín, La Nación, Multicanal, etc.).

Algunas de estas vinculaciones en el nivel nacional se orientan a la formación de “redes” en el sentido definido anteriormente: producen proyectos comunes, complementan acciones, buscan generar nuevos sentidos que los incluyan en conjuntos, etc. Arriesgamos que es así con Chacareros Federados y con el MOCASE. Las otras relaciones son precarias, y por ahora tienden a conformarse como espacios donde ellas buscan apoyos. Son importantes recursos en las estrategias de sostenimiento de sus acciones y crean grandes corrientes de simpatías y solidaridad en distintos mundos sociales (el de las organizaciones de mujeres, el religioso, el universitario, etc.).

En el nivel de América Latina mantienen contactos con la organización mexicana El Barzón, y con la brasileña Movimiento de los Sin Tierra (MST). Según la presidenta del MML, existe un proyecto para crear un “movimiento de deudores de América Latina”. Viajaron a México invitadas por miembros de El Barzón, y ellos estuvieron en Buenos Aires trabajando con las dirigentes de La Pampa y Santa Fe. La situación común de endeudamientos recientes -producto de las políticas neoliberales- es un punto muy fuerte de encuentro con los mexicanos. Las diferencias residen en la forma de expansión interna de ambos: mientras que El Barzón integró endeudados agrarios y no agrarios (comerciantes, pequeñas empresas), el MML prefiere mantenerse en el sector agrario.

“...El Barzón empezó también con la deuda agraria en México. (...) Ahora estuve en México convocada por El Barzón, lo curioso es que empezamos con El Barzón que fue la primera [organización] que nos invitó pero ahora ellos dicen que nos conocen en Canadá, en Nueva Zelanda que las agriculturas son muy parecidas a las nuestras; ahora con El Barzón somos medio hermanos...”.

Con el MST han mantenido varios encuentros, sobre todo con los dirigentes del Sur (Estado Río Grande Do Sul). Los une la demanda sobre la tierra: los brasileños para acceder a ella, y el MML para no perderla. “...Ellos son tan peleadores como nosotros...”, sostiene una de las dirigentes remarcando el aspecto combativo del MST. Desde hace un tiempo están proyectando viajar a Europa, apelando a sus orígenes, para buscar apoyos y solidaridades.

En esta etapa de la organización, estas redes en formación dan cuenta más que nada de la conciencia y la apuesta que el MML hace a esta estrategia de for-

talecimiento. El éxito dependerá del reconocimiento que logren y de la capacidad para movilizar este tipo de recursos.

Algunas reflexiones a modo de conclusión

La irrupción del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha tuvo lugar a mediados de los años 1990, cuando los escenarios político y económico argentinos presagiaban los ciclos de protestas que aparecerían unos años después.

La generación de la situación de endeudamiento, en especial para los pequeños y medianos agricultores, fue resultado de políticas concretas: convertibilidad y su consecuente disponibilidad monetaria, aumento o disminución de las tasas de interés, etc. A todo esto se sumaban una gran inestabilidad de los mercados internacionales -las crisis de México, la asiática, las de Rusia y Brasil-, los vaivenes de los precios agrícolas, y un Estado que decidió no tener políticas activas para los pequeños y medianos productores; o lo que es igual, un fuerte sesgo en materia de concentración empresarial.

El MML surgió frente a la crisis del endeudamiento del sector, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una fuerte voz crítica al modelo en su conjunto. Y esta radicalización fue posible porque rompieron con un sentido común -muy aceptado por algunos, incluidos varios maridos- que enuncia que las deudas son responsabilidad de los individuos que las poseen. Esta ruptura les permitió analizar y deconstruir sus propias deudas, plantear las irracionalidades de los montos que se fueron acumulando, y generar un nuevo discurso que pusiera en tela de juicio la legitimidad del endeudamiento y del modelo económico general.

Asimismo, el MML aparece como un claro representante de la “nueva protesta social agraria”, y ello porque logra sumar a sus demandas económicas otras que dan cuenta de los problemas de la sociedad de fin de siglo. En efecto, en otros trabajos sostuvimos que la protesta de la década de 1990 puede caracterizarse como novedosa, tanto porque surgen nuevos actores, como por el tipo de problemática social que logra hacer visible. En este caso, el tipo de actor -una organización de mujeres chacareras o campesinas- condiciona esas otras demandas que logran expresar y simbolizar en la construcción del movimiento. En este trabajo deslizamos el problema de género, pero también aparecen cuestiones que hacen a la posibilidad de elegir una manera de vivir (opciones de vida) muy propias de nuestro mundo globalizado (Giarracca y Teubal, 1997).

Nos detuvimos en la “expansión” y el “fortalecimiento” del MML como los aspectos más relevantes de esta última etapa. El “poder del movimiento” se relaciona con las oportunidades políticas (a lo Tarrow), pero también, y de modo fundamental, con las acciones organizativas. De este modo, analizamos las primeras acciones y discursos de un grupo de dirigentes, y reflexionamos acerca de las posibilidades y limitaciones en la tarea de construcción de las redes sociales.

Las posibilidades futuras del MML están condicionadas por el modo de acción y por los logros en relación con sus reclamos, o dicho de otro manera, por el tipo de negociaciones o resistencias que emprendan. Pero más allá del problema del endeudamiento, en el MML se visualiza la comprensión de otro conjunto de problemas o “síntomas” sociales que son de índole cultural, que las dirigentes destacan en sus discursos, y que las orientan a buscar otro tipo de aliados. En tal nivel, las perspectivas del MML están muy relacionadas con la capacidad de constituirse en redes y profundizar el aprendizaje que significa actuar en espacios tanto territoriales como virtuales.

Bibliografía

- Bendini, M. y Bonaccorsi, G. 1998 *Con las puras manos* (Buenos Aires: La Colmena).
- Biaggi, Cristina 1998 “La mujer como productora agropecuaria en Argentina”, en *Temas de Mujeres, perspectivas de género* (Tucumán: CEHIM, Universidad Nacional de Tucumán).
- Diodati, L. y Fernández, S. 1998 “La mujer y la familia en el campo. Reflexiones de Carlos Lemée”, en *Temas de Mujeres, perspectivas de género* (Tucumán: CEHIM, Universidad Nacional de Tucumán).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1995 “El día en que la Plaza de Mayo se vistió de campo”, en Teubal, Miguel *Globalización y expansión agroindustrial* (Buenos Aires: Corregidor).
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1997 “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Las Mujeres en la protesta rural en Argentina”, en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 150.
- Giarracca, N. y Teubal, M. 1999 “Crisis y protesta agraria en Argentina: expansión y fortalecimiento del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha”. Ponencia presentada al IX Congreso de la Asociación Brasileña de Sociología. Universidad Federal de Río Grande do Sul.
- Giddens, Anthony 1984 *The Constitution of Society* (Estados Unidos: University of California Press).
- Giddens, Anthony 1991 *Modernity and Self-Identity, Self and Society in the Late Modern Age* (Estados Unidos: Stanford University Press).
- Melucci, Alberto 1980 “The New Social Movements: a theoretical approach”, en *Social Science Information* (Estados Unidos) N° 19.
- Melucci, Alberto 1984 “An end to social movements? Introductory paper to the sessions on new movements and change in organizational forms”, en *Social Science information* (Londres: SAGE) Vol. 23, N° 5/5.
- Melucci, Alberto 1992 “Frontier Land: Collective Action between actors and systems”, en Diani, Mario y Eyerman, Ron *Studying Collective Action* (Londres: SAGE).
- Pettersen L. y Solbakken, H. 1998 “Empowerment as a Strategy for Change for Farm Women in Western Industrialized Countries”, en *Sociología Ruralis* (Gran Bretaña) Vol. 38, N° 3.
- Roggi, María Cecilia 1998 “Cooperativas de trabajo: el papel de las redes sociales en su viabilidad y desarrollo” (Buenos Aires) Beca Iniciación CONICET, Informe de avance.

Slater, David 1991 “New social movements and old political questions. Rethinking state relations in Latin American Development”, en *XV World Congress of the International Political Science Association* (Buenos Aires).

Tarrow, Sidney 1997 *El poder en movimiento* (Madrid: Alianza).

Tilly, Charles 1986 *The Contentious French: Four Centuries of Popular Struggle* (Estados Unidos: Harvard University Press).

Vedoya, Juan Carlos 1975 “La mujer en las Pampas”, en *Todo es Historia* (Buenos Aires) N° 15.

Otras fuentes

Banco de datos de “expresiones de protestas” del Grupo de Estudios Rurales en base a diarios nacionales, regionales y provinciales.

Notas

1 Con el término “pioneras” nos referimos al grupo de no más de 10 mujeres que iniciaron el MMLsin pensar en un programa racional de “medios-fines”, sino desde una respuesta a una situación vivida como injusta. Entre ellas se encuentran Lucy de Cornelis y Joaquina Moreno, ambas de La Pampa.

2 Aquí debemos aclarar que no fueron entrevistadas aún las representantes del Norte, Formosa y Tucumán, y es posible que en estas zonas encontremos descendientes de “criollos” o incluso indígenas.

3 Esta caracterización de los sectores medios argentinos descendientes de europeos que poblaron no sólo Buenos Aires sino también el interior, está ampliamente sustentada por la literatura de la primera mitad del siglo.

4 Los términos de los arrendamientos se fijaron 5 años después de uno de los grandes movimientos sociales agrarios de este siglo, conocido como “El grito de Alcorta”, en 1912.

5 Están muy atentas a no entablar relaciones con grupos de viejo estilo “nacionalista” xenófobos o conservadores.

6 El problema de la responsabilidad de las deudas es sumamente discutido en un país donde el Estado, durante la última dictadura, se hizo cargo de gran parte de la deuda internacional privada; o donde en la actualidad el Estado auxilia y subsidia a grandes bancos y a empresas automotrices, y se declara impotente frente a los grandes evasores fiscales.

***El Barzón, un movimiento social inserto en
la transición hacia la democracia
política en México****

Hubert C. de Grammont **

El surgimiento de El Barzón, en agosto de 1993 en Jalisco, pareció sorprender a la clase política nacional, tanto al Ejecutivo como a los partidos políticos. La sorpresa se transformó en asombro cuando en términos de semanas las manifestaciones públicas de agricultores en torno a la cartera vencida estallaron con fuerza en diferentes partes del país, y se anunció la realización de una marcha de los productores agropecuarios endeudados con la banca desde varios estados hacia la ciudad de México. El asombro se volvió disgusto cuando estos movimientos, inconexos en un principio, adoptaron espontáneamente el nombre de El Barzón propuesto por los agricultores de Jalisco. Por su referencia al corrido revolucionario que cuenta la vida de los medieros o peones acasillados, siempre endeudados con los hacendados, el nombre de El Barzón tiene una connotación ideológica poco halagadora para un gobierno que se precia de conducir al país hacia la modernidad¹. De hecho, el movimiento de los deudores del campo fue el primer estallido social con resonancia nacional que marcó el desacuerdo de una parte de la sociedad con el nuevo modelo económico en vigor.

A lo largo de sus cinco años de vida, El Barzón se transformó profundamente. Sus bases se ampliaron, su estructura se fortaleció, sus formas de organización y de luchas se modificaron, sus propios objetivos se precisaron; pero el cambio más relevante, que le imprime un sello novedoso frente a las demás organizaciones sociales que no pertenecen al sistema corporativo priista, es la relación que establece con la esfera política.

^{*} Este trabajo es una síntesis de la publicación de Grammont H. C. *El Barzón, clase media, ciudadanía y democracia* (México: IIS-Plaza y Valdés) en prensa.

^{**} Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

En este trabajo analizamos este movimiento social “clasemediero” para ver cómo, a través de su lucha en contra de la banca, se desmorona el corporativismo mexicano bajo el impulso de una nueva ciudadanía consciente de sus derechos frente al gobierno y los propios partidos políticos.

El Barzón y el movimiento social de los deudores

Si bien El Barzón nace en 1993, tiene importantes antecedentes por lo menos en dos estados norteros del país: Sonora y Chihuahua. En ambos casos el movimiento de los deudores estuvo constituido por agricultores que fueron, durante décadas, el modelo de la revolución verde. Se beneficiaron de las grandes inversiones federales en el período del milagro mexicano porque supieron organizarse para canalizar a su favor los apoyos ofrecidos por el gobierno. Fueron también parte de las bases sociales más seguras del corporativismo mexicano. Por su papel en la política nacional de este siglo, así como por su importancia en la producción agropecuaria, el caso de Sonora es paradigmático. Sin embargo, es en Chihuahua donde se inicia el movimiento de los deudores, y encontramos ahí su evolución más fuerte. Surge en 1986, aunque sus acciones no cobran fuerza sino hasta 1992. Durante ese año y el siguiente, los deudores de este estado multiplicaron sus movilizaciones con plantones, marchas, bloqueos de vías públicas, tomas de edificios públicos y de bancos, huelga de hambre, cierre parcial del puente fronterizo de Ciudad Juárez, quemas de productos agrícolas y tractores. Lo más relevante del movimiento fue la creación, en marzo de 1992, del primer movimiento frentista que incluía a organizaciones del partido oficial y de partidos de oposición.

En franco desafío con la Confederación Nacional de los Propietarios Rurales (CNPR)², en julio de 1993 un importante grupo de agricultores endeudados del estado de Jalisco inició una fuerte movilización para protestar por la cerrazón de la banca hacia su problemática. Llevaron a cabo un plantón de 48 días en el zócalo de la ciudad de Guadalajara, que tuvo una fuerte resonancia nacional. Las muestras de solidaridad por parte de deudores de otros estados fueron numerosas, y los contactos con sus representantes, frecuentes. Por unos meses, Jalisco se convirtió en el epicentro del movimiento. Participaron en el plantón representantes de los deudores de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Baja California, Zacatecas, Morelos, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas.

Frente a la falta de propuestas para solucionar su problema por parte de la banca y de la Secretaría de Hacienda, los deudores decidieron crear, en septiembre de ese año, una organización nacional de los deudores de la banca. Para muchos dirigentes del sector agrícola esta decisión fue trascendental, porque apenas se iban desprendiendo de sus organizaciones oficiales y medían aún la conveniencia de romper definitivamente con el sistema corporativo. Si bien a lo largo de su vida las organizaciones corporativas conocieron numerosos conflictos internos,

reacomodos de intereses y cambios en los grupos hegemónicos que las controlaban (de Grammont, 1990: 105-167; de Grammont, 1996: 21-68), esta decisión de los agricultores de crear una nueva organización marcó una fuerte ruptura en su tradicional estructura.

Mientras tanto, otros plantones y movilizaciones se llevaban a cabo en diferentes estados del país. El plantón de Zacatecas, que duró 69 días, se destacó por su fuerza y larga duración. En Chihuahua se llevaron a cabo numerosas y aparatosas movilizaciones. El día 20 de noviembre, aniversario de la revolución mexicana, los barzonistas emprendieron desde varios estados de la república una marcha hacia la ciudad de México, que fue inmediatamente reprimida, con el encarcelamiento de sus principales dirigentes.

Sin duda, la explosión de la guerrilla zapatista en Chiapas tuvo por efecto radicalizar el movimiento de los deudores y propiciar su impresionante crecimiento tanto en la ciudad como en el campo. En este contexto, durante los dos años siguientes (1994 y 1995) los barzonistas acentuaron sus movilizaciones en contra de las instituciones bancarias, las autoridades estatales y las federales. Se mostraron especialmente activos e innovadores para llevar a cabo acciones vistosas en numerosos estados del país: marchas con tractores y vehículos a lo largo de cientos de kilómetros hacia la ciudad de México, una vistosa cabalgada con decenas de jinetes y bandera nacional al frente desde Chihuahua hasta el Distrito Federal (un recorrido a caballo de unos 800 kilómetros que duró cerca de dos meses), bloqueos y tomas de sucursales de instituciones bancarias privadas y de fomento, de carreteras y puentes internacionales, de oficinas regionales y centrales de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gobernación, del Banco de México y de la Comisión Federal de Electricidad; plantones y mitines en palacios de gobierno municipales, estatales y en el Distrito Federal, en tribunales, en el Congreso de la Unión y en los congresos estatales, en la Procuraduría General de la República (PGR), Asociación de Banqueros de México (ABM), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los domicilios de agiotistas, casas comercializadoras de insumos o de maquinaria agrícola, distribuidoras de vehículos para el transporte urbano; marchas con tambora, mariachis, maquinaria agrícola, camionetas, automóviles, caballos y burros, hasta elefantes y camellos; hortalizas depositadas en sucursales bancarias, leche tirada en las carreteras, animales introducidos en oficinas públicas; solicitudes de asilo “económico” en consulados; incendio de cosechas, tractores, casas de madera y tarjetas de crédito; escenas de “strip tease” para simular el despojo provocado por los bancos. Pero las acciones no fueron siempre jocosas, ni mucho menos, porque en momentos de desesperación incluyeron huelgas de hambre; ojos y labios cosidos para simbolizar la cerrazón del gobierno y la banca; brazos desangrados para evidenciar la violencia del despojo del patrimonio familiar. Una amplia gama de acciones para llamar la atención, a como diera lugar, de la opinión pública, y romper el cerco impuesto por la mayoría de los medios de comunicación³.

De todas estas acciones, la más novedosa fue la organización de los grupos de resistencia civil pacífica: verdaderas “columnas volantes” encargadas de impedir los embargos, las adjudicaciones y los remates de las propiedades de los deudores (MGC, 01-06-95). Es imposible conocer la cifra de acciones desarrolladas y el número de órdenes judiciales que se impidieron gracias a la intervención de estos grupos de resistencia, pero es a partir de este tipo de acciones que Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los principales dirigentes del movimiento, podía afirmar que “...después de año y medio de existencia (mayo de 1995) de El Barzón-Unión no nos han quitado una sola pulgada de tierra, casa, ni propiedad alguna...” (ARC, 23-05-95).

En estos dos años se desató una verdadera guerra social entre los deudores por un lado y la Asociación de Banqueros Mexicanos (ABM) y la Secretaría de Hacienda del gobierno federal por el otro. Sin duda, la atropellada coyuntura política de la sucesión presidencial de 1994 influyó fuertemente en la dinámica del movimiento. El Barzón, cercano a los partidos de oposición pero especialmente al Partido de la Revolución Democrática (PRD, centro izquierda), intentó radicalizarse. En el difícil equilibrio de mantener una política económica neoliberal sin perder el favor del electorado, el gobierno apoyó con enormes recursos a la banca comercial a fin de poner en marcha varios programas financieros capaces de atender el problema de la cartera vencida, tanto en el campo, en donde hizo crisis primero, como en la ciudad, en donde creció de manera incontenible después de la devaluación de diciembre de 1994.

Tres programas se destacaron: el SIRECA, el UDI y el ADE. El SIRECA (Sistema de Reestructuración de la Cartera Vencida Agropecuaria) fue implementado en plena campaña electoral por la presidencia de la república (entre marzo y mayo de 1994). La propuesta intentaba remediar el incontenible crecimiento de la deuda en el contexto del fortalecimiento de El Barzón y de las elecciones presidenciales en puerta. El programa consistía esencialmente en la disminución de las tasas de interés y el alargamiento de los pagos hasta 15 años. El gobierno rompió la intransigencia de los banqueros para otorgar facilidades en la negociación de la cartera vencida, aportando a la banca comercial 8.000 millones de pesos para la ejecución del proyecto. Además, Hacienda concedió a la banca privada una importante demanda en el terreno fiscal, que consistía en pagar impuestos sólo sobre los intereses efectivamente cobrados y no sobre los devengados, como se venía haciendo. El UDI (Unidad de Inversión) fue copiado de un programa de rescate de las carteras vencidas aplicado en Chile. Se inició en marzo de 1995 y fue dirigido hacia los pequeños empresarios de la ciudad y los créditos hipotecarios. Se basaba en la indexación de las deudas sobre la inflación, con descuentos sobre el capital y el alargamiento de la deuda hasta 30 años. El ADE (Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca) era similar al UDI, pero dirigido a los tarjeta-habientes. Se aplicó de agosto de 1995 a septiembre de 1996.

Desde el punto de vista de El Barzón, estos programas fueron insuficientes por no permitir la renegociación de todas las deudas (los bancos renegociaban so-

lamente las deudas “viables”, con alguna posibilidad de ser recuperadas) y por no atacar de fondo el problema de la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas y la disminución del ingreso familiar. Aún así, tuvieron por efecto la baja del nivel de conflictividad, porque muchos deudores lograron renegociar su deuda con tiempos más largos. Por su lado, gracias al dinero aportado por el Banco de México a estos programas, los bancos mejoraron sus niveles de ganancia⁴.

A partir de mediados de 1995, pasada la coyuntura electoral, El Barzón cambió drásticamente su estrategia: de ser esencialmente una organización social de protesta callejera, eficaz para impedir el remate de los bienes de los deudores pero incapaz de influir en las decisiones gubernamentales, pasó a redefinirse como un movimiento social propositivo y negociador con capacidad de resolver los problemas por la vía legal. Estableció mayores vínculos con la esfera política, en particular con los partidos políticos, y fortaleció su estructura organizativa.

De ser un movimiento social definido por su rechazo al pago de las deudas (su primer lema fue “Debo no niego, pago no tengo”), implementó una política de pago pero sobre una base considerada justa: pagar el capital prestado y los intereses principales inicialmente pactados (se rechaza el pago de los intereses moratorios por considerarlos ilegales e injustos). En vez de huir de los bancos, El Barzón elaboró una estrategia para demostrar su voluntad de pago y apuntaló el que sería su nuevo lema: “Debo no niego, pago lo justo”. Apartir de entonces, fortaleció su organización interna para desarrollar una verdadera estrategia legal en contra de los bancos. Se trataba de entrar en el terreno de la defensa legal de los deudores, y más aún, de impugnar en el plano jurídico la validez de las acciones de la banca y del propio gobierno. Si bien El Barzón perdió la mayoría de los casos emprendidos, esta lucha no tiene antecedentes en la vida nacional. Marca un cambio fundamental en la relación entre los ciudadanos, la esfera política y el gobierno.

Algunas cifras ilustran la verdadera “guerra jurídica” que se estableció entre El Barzón y la banca. Para fines de febrero de 1996, la organización había depositado ante el Tribunal Superior de Justicia 6.500 demandas de nulidad a la cláusula del anatocismo⁵, argumentando prácticas usureras por parte de la banca. Ese mismo mes, los deudores habían entregado a la banca cerca de 900 mil cartas de intención de pagar el capital, pero no los intereses de su deuda. Para finales de julio, El Barzón había presentado cerca de 400 mil juicios, la enorme mayoría por créditos hipotecarios de vivienda. En esa misma fecha, la banca privada había entablado un millón 145 mil juicios en contra de deudores (de los cuales, cerca de 400 mil correspondían al Distrito Federal), el 62% promovidos por los tres principales bancos: Banamex, Bancomer y Serfin. Sin embargo, la impresionante cantidad de acciones emprendidas por los barzonistas no puede esconder que apenas un 10% de los fallos de los tribunales eran favorables a los deudores (*La Jornada*, 30-1-96, 27-2-96, 18-4-96, 12-6-96, 6-9-96).

Las principales acciones legales en contra del gobierno fueron las siguientes: 1. impedir que se modificara una serie de leyes para quitar toda protección legal a los deudores y permitir la realización de los embargos en contra de los mismos (iniciativa legal conocida como “Ley Zedillo en contra de los deudores”); 2. una demanda presentada a la Procuraduría General de la República en contra del gobierno federal por transgredir el decreto de privatización de la banca; 3. otra demanda presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar ilegal el anatocismo; 4. la lucha en contra de la transferencia de los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a la deuda pública. Por su importancia en la vida nacional, veamos brevemente cada caso.

La Ley Zedillo contra los deudores

En abril de 1996 el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión una compleja iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la Ley Orgánica Nacional Financiera, al Código de Comercio, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al Código Civil para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, destinada a cerrar todos los caminos legales que los barzonistas invocaban para defenderse en contra de la banca y de la usura.

Para los dirigentes de El Barzón, la “Ley Zedillo en contra de los deudores”, como ellos llamaron a esta iniciativa legislativa, tenía una lógica sencilla: hacer más difíciles los trámites para los deudores, pero simplificarlos para los acreedores. El mismo día en que se conoció la noticia, quinientos barzonistas se manifestaron frente al Senado mientras una comisión se reunía con su Comisión de Hacienda y Programación para solicitar que se abriera un amplio debate sobre la propuesta gubernamental que afectaría a cerca de 8 millones de deudores con cartera vencida. A futuro se preveía que podía afectar a todos los acreedores de la banca, o por lo menos a la mitad de ellos, ya que un conocido despacho de especialistas financieros, la Security Auction Capital, estimaba que un 45,4% de los créditos otorgados por la banca no se pagaban en los términos originalmente pactados (*La Jornada*, 1-2-96). Esta iniciativa era tan drástica que provocó reacciones en contra por parte de numerosos dirigentes empresariales⁶.

La discusión de la iniciativa en la Cámara de Senadores fue acompañada por una jornada de protesta por parte de unos dos mil barzonistas, quienes efectuaron un plantón-mitin en las afueras del edificio del Senado. En esos días El Barzón había logrado acercarse a legisladores de todos los partidos políticos, lo cual facilitó su respaldo en contra de la iniciativa del Ejecutivo. Después de intensos debates, la iniciativa fue aprobada con 137 modificaciones, que permitieron eliminar las propuestas más lesivas para los deudores, en particular la retroactividad de la iniciativa. Sin embargo, a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno

federal intentó modificar los Códigos Civiles y Comerciales de las entidades federativas para lograr, en el ámbito de los estados, el desahogo por la “vía rápida” de los juicios mercantiles.

La ilegalidad de la privatización de la banca

El 12 de noviembre de 1996 El Barzón presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Salinas de Gortari y Pedro Aspe Armella por haber incurrido en los delitos de coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones, al publicar fuera del plazo legal varios decretos que convirtieron a sociedades nacionales de crédito en sociedades anónimas. La demanda afectaba a 10 bancos: Banamex, Bancomer, Serfin, Atlántico, Internacional, Mexicano, Inverlat, Unión, Bancrecer y Confia. El argumento legal que esgrimía El Barzón era que la privatización de estos bancos se había llevado a cabo después de la fecha límite autorizada por el Congreso de la Unión (14 de julio de 1991)⁷. En esos meses, El Barzón utilizó masivamente dicha tesis para demandar a los bancos y amparar a los deudores.

Sobre esta base, El Barzón propuso a la Asociación de Banqueros de México un “Acuerdo para Reestablecer la Legalidad del Sistema Bancario Mexicano” que suponía: 1. someter a revisión del Congreso de la Unión el proceso de privatización de los bancos; 2. restituir los bienes adjudicados a los deudores embargados; 3. suspender los juicios mercantiles; 4. revisar los contratos crediticios para asegurar su apego a la ley; 5. establecer un “Programa Nacional de Reestructuración de Adeudos” definido entre el poder legislativo, el ejecutivo, la ABM y El Barzón; 6. reformar el sistema bancario con el control de los márgenes de intermediación, la transformación de la banca de fomento en banca de primer piso, y la revisión del marco normativo que permite la inversión extranjera en el sistema financiero nacional⁸. Pero la ABM ni siquiera contestó la propuesta.

Menos de dos meses después, el 3 de enero de 1997, la PGR hacía saber a El Barzón su decisión de no ejercer la acción penal por “notoria improcedencia”. El Barzón se amparó y solicitó la revisión del caso, pero sin ninguna posibilidad real de obtener una respuesta favorable. En junio siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaba que la existencia de las instituciones financieras no se veía afectada por la publicación extemporánea de los decretos que las transformaron en sociedades anónimas. Como si la sentencia de la SCJN no fuera suficiente, poco después, la cámara de diputados, todavía bajo el control del Partido Revolucionario Institucional (PRI)⁹, emitió un decreto que regularizaba esa situación. Con ello se cerraba la posibilidad de lograr la declaración de la inexistencia legal de la banca.

El anatocismo

En 1983 el Banco de México estableció el mecanismo de capitalización de los intereses, que permite otorgar créditos baratos a muy largo plazo, en particular para la adquisición de vivienda de interés social. Apartir de 1992 la banca reprivatizada generalizó este mecanismo, pero ya no para alargar los tiempos de pago, sino para protegerse de los efectos de la inestabilidad financiera provocada por la liberalización y desregulación del sector financiero establecida en 1991, que abría totalmente el acceso de la banca al sector bursátil para permitir ganancias especulativas de corto plazo. La inestabilidad no tardó en transformarse en crisis.

Después de la devaluación de diciembre de 1994, las tasas de interés de los créditos subieron hasta 130%, para estabilizarse en 85% y disminuir paulatinamente hasta alrededor de 36%. Por su lado, el diferencial entre la tasa otorgada a los ahorradores y la tasa de los intereses cobrados a los deudores se incrementó exageradamente hasta alcanzar unos 20 puntos (16% contra 36%)¹⁰, sin contar la creación de toda clase de comisiones que empezaron a cobrarse a los deudores morosos¹¹. Otro problema fue que ciertos bancos, además de la capitalización de los intereses no pagados, incrementaron el monto del interés de las deudas morosas, con el argumento de que debían reponer el perjuicio provocado por el no pago.

Por todas esas razones, el incremento de las deudas no guardó ninguna relación con el valor de las propiedades adquiridas (que se mueven en función de la inflación) o las inversiones realizadas, por lo cual ni siquiera vendiéndolas se garantizaba el pago de las deudas adquiridas con los bancos.

Frente a las protestas de los deudores, la banca esgrimió dos argumentos en su defensa: que el anatocismo es un mecanismo financiero utilizado en todos los países, porque si se capitalizan los intereses producidos por los depósitos de los ahorradores, el banco se ve obligado a hacer lo mismo con los deudores; y que el mercado es el que define el monto de las tasas de interés.

En 1996 El Barzón decidió iniciar juicios en contra de la banca con el argumento de la ilegalidad del anatocismo, de acuerdo al artículo 2397 del Código Civil que dice: “Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses”.

Sin embargo, en 1997 el decimoséptimo Tribunal, con sede en Chihuahua, falló a favor de Bancomer autorizando el anatocismo con base en otro artículo, el 363 del Código de Comercio, que dice: “Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Los contratantes pueden, sin embargo, capitalizarlos”. El tribunal consideró que las partes habían firmado un contrato que permitía el cobro de intereses sobre intereses, tal como lo prevé la segunda parte del artículo. Meses después, el Tribunal del DF, y luego el Tribunal de Zacatecas, resolvieron a favor de los deudores en contra de los bancos, utilizando el artículo 2397 del

Código Civil¹². Frente a las contradicciones entre las tesis sostenidas por los diferentes tribunales, se llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante los siguientes meses El Barzón se movilizó poco para influir en la decisión de la Corte, probablemente porque sus miembros recordaban que meses antes, en el caso de la solicitud de la inexistencia jurídica de la banca, la Suprema Corte había resuelto a favor de la banca a pesar de todos sus esfuerzos¹³.

El problema del anatocismo desató una amplia campaña en los medios de comunicación. Algunos diputados del Partido Acción Nacional (PAN) hicieron declaraciones a favor de los deudores¹⁴. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer a la SCJN su punto de vista favorable al anatocismo. Por su lado, el congreso local de Jalisco aprobó enviar un documento a la Corte para solicitar que se diera una solución con equidad y justicia a fin de no dejar en el desamparo a 10 millones de deudores (*Reforma*, 9 y 12-5-98, 19-5-98; *La Jornada*, 7-10-98).

No obstante, los partidos políticos no se manifestaron al respecto, probablemente porque en estos mismos meses volcaron todos sus esfuerzos hacia la resolución del FOBAPROA, que competía al poder legislativo.

En su sesión del 7 de octubre de 1998 el pleno de los ministros de la Suprema Corte declaró la legalidad de la capitalización de los intereses, con ocho votos a favor y tres en contra. Si bien se puede considerar que la votación fue ampliamente legitimada, no es menos cierto que el veredicto dejó mucha preocupación entre los propios especialistas en el tema. Muchos juristas apoyaron la decisión de la Corte, pero otros expresaron dudas y plantearon la existencia de posibles salidas alternativas al problema. El problema de fondo no resuelto era saber si el papel de la SCJN debía limitarse a interpretar leyes a todas luces obsoletas y contradictorias, o si podía buscar su reinterpretación a partir de la situación actual.

En respuesta a esta decisión, El Barzón organizó una serie de protestas en numerosas ciudades. También varios congresos locales (Veracruz, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Sonora) se pronunciaron inmediatamente en contra del fallo¹⁵.

El efecto inmediato de la decisión de la SCJN fue provocar el recrudecimiento de las acciones en contra de los deudores en los meses subsiguientes (amenazas, presiones, llamadas telefónicas a horas indebidas), en particular por parte de los despachos contratados por los bancos, al punto de provocar la intervención de la Procuraduría General de la República con citatorios e incluso arraigo domiciliario en contra de los litigantes para limitar las acciones ilegales (*Reforma*, 04-12-98).

EI FOBAPROA

Mientras se resolvía la contradicción de tesis sobre el anatocismo, en marzo de 1998 el poder ejecutivo planteó al legislativo un importante paquete de reformas al

sistema financiero, cuyos principales puntos eran: otorgar autonomía a la CNBV, limitar la protección de los depósitos bancarios, ampliar la participación de la inversión extranjera, transferir los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a la deuda pública, y crear un nuevo organismo para recuperar sus activos. Tras el paquete había dos propósitos. El primero era desconectar a las instituciones dedicadas a la definición de la política financiera y monetaria del país de la esfera política (partidos políticos y poder legislativo), para asegurar la autonomía de la economía frente a las demandas populares (la “despolitización” de la política económica planteada por la teoría neoliberal). El segundo era legalizar las deudas contraídas por el FOBAPROA, ya que se habían contratado al margen de la ley¹⁶.

Por sus enormes consecuencias en la vida económica nacional, el traslado de los pasivos del FOBAPROA a la deuda pública se volvió el punto toral de la discusión y de los desacuerdos entre los partidos¹⁷. En esos meses los dirigentes de El Barzón respaldaron las acciones del PRD, pero no supieron movilizar a sus bases para presionar hacia la solución deseada. Su principal participación se dio el 30 de agosto, cuando se llevó a cabo una consulta popular sobre la propuesta gubernamental, y en octubre, cuando presentaron una propuesta de rescate de la deuda de los pequeños deudores. La organización se inmovilizó porque sus dirigentes se vieron desbordados por su participación en las tareas partidarias del PRD, mientras sus bases esperaban pasivamente el resultado del fallo sobre el anatocismo y la resolución del FOBAPROA. Muchas reuniones del comité ejecutivo nacional, numerosas llamadas a movilizarse, muchos intentos de coordinación entre los estados, fueron inútiles. Prevalecieron la dispersión entre los dirigentes y la desmovilización. De hecho, el propio PRD perdió toda capacidad de injerencia en este problema, porque el PRI y el PAN se aliaron y establecieron negociaciones entre las cúpulas de sus partidos que se llevaron a cabo en la Secretaría de Gobernación, en vez de dirimir sus diferencias en el Congreso. Una vez alcanzado un acuerdo entre los dos partidos, sus diputados y senadores se limitaron a aprobar la propuesta sin siquiera conocerla en detalle. De esta manera, en pleno proceso de transición hacia la democracia, el Congreso de la Unión experimentó una vez más las formas de negociación autoritarias del corporativismo. Es por esta incapacidad de influir en la resolución del FOBAPROA que 1998 aparece como un impasse para el movimiento de deudores.

Después de meses de negociación, el 12 de diciembre de 1998, en una sesión confusa de la Cámara Legislativa interrumpida por un grupo de barzonistas enardecidos¹⁸, se aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

El corporativismo mexicano y la transición hacia la democracia

Los estudios sobre la transición del corporativismo hacia la democracia en México son esencialmente estudios de sociología política que estudian los partidos, las reglas de la competencia electoral (Ley Federal Electoral, Instituto Federal Electoral), las

nuevas relaciones entre el gobierno y la esfera política, etc.: en otras palabras, estudian a las instituciones más que a los actores sociales. En este caso se supone que los actores son entes que actúan en las instituciones sin ninguna carga valorativa cultural e ideológica propia, o dicho de otra manera, que el ciudadano está determinado por la estructura legal e institucional existente más que por su carga cultural e ideológica¹⁹.

En contra de esta idea, creemos que si bien el concepto de ciudadano es inherente al establecimiento de la democracia, no existe un tipo universal de ciudadano, así como no existe un modelo único de democracia. Precisando, podemos decir que las mismas instituciones políticas implementadas en países con diferente historia, capital cultural y desarrollo económico, llevarán a arreglos institucionales diferentes según el tipo concreto de ciudadano que les da vida²⁰.

Es preciso entonces recordar, aunque sea brevemente, cuál ha sido la evolución del corporativismo mexicano como sistema que enmarca la relación entre el Estado y la sociedad, para poder analizar luego esta relación en el marco del movimiento de los deudores de la banca, la democracia naciente, y la conformación del ciudadano mexicano²¹.

El corporativismo mexicano es un sistema que incluye lo político, lo económico y lo social en una misma dinámica. No hay, como en los países de democracia parlamentaria (en donde los partidos actúan esencialmente en la esfera política, los empresarios en la económica, y los sindicatos en la social), una clara diferencia entre estos tres niveles. El Estado, a manera de un pulpo descomunal, asume estas tres funciones. Pero su sobre-dimensión no se debe sólo a factores históricos políticos (la creación del partido único para controlar a los caudillos militares regionales), sino a un hecho social fundamental: la persistencia, en la sociedad mexicana del siglo veinte, de núcleos sociales que actúan colectivamente por encima de la voluntad de cada individuo; o sea, de corporaciones. La familia extensa es el núcleo social más fuerte que conforma la base de este sistema²².

En el campo encontramos otras agrupaciones que han mantenido la acción colectiva por encima de la individual: la comunidad agraria y el ejido para el llamado sector social, y las asociaciones de productores para el sector privado. Conformaron el substrato de la organización productiva, social y política de los pobladores del campo, tanto entre los productores pobres como entre los medianos y grandes empresarios. Eso quiere decir que la relación política de los productores con el Estado no se construyó sobre la base de ciudadanos (individuos con libre albedrío) reagrupados en partidos políticos, sino a partir de la delegación de la representación social y del consenso. Los caudillos o caciques locales nacieron normalmente como legítimos representantes consensuales de sus pueblos, aún si a lo largo de los años su poder degeneró a menudo en imposición²³.

Esta forma de representación social, típica de una sociedad agraria, ha perdurado hasta nuestros días tanto porque el proceso de urbanización es reciente (hasta hace treinta años la mayoría de la población era rural), como porque la urbani-

zación de los países atrasados es un proceso incompleto, que corresponde en gran medida al traslado físico de los pobres del campo a las periferias de las ciudades sin que logren transformarse en clases típicamente industriales (o post-industriales), ni que las ciudades tengan la capacidad de ofrecerles todos los servicios propios de una urbe moderna²⁴. Por eso, la familia extensa es el núcleo social más fuerte, que se ha trasladado del campo a la ciudad y ha sido la base de la organización urbano-popular en las grandes urbes; el clientelismo, típica institución agraria, ha sido la base de la organización social en la ciudad en las últimas décadas²⁵. Como lo plantea Vellinga, la autoayuda entre vecinos en los barrios populares de las grandes urbes latinoamericanas para conseguir servicios básicos (agua, luz, drenaje, asfalto, escuela, etcétera) sustituye a la administración urbana, incapaz de cumplir cabalmente con su función (Vellinga, 1997: 40).

Es por la conformación de estas identidades colectivas corporativizadas que predominó la organización política territorial en el sector ejidal (y comunal), integrando a toda la población sin distinción de estatus social en una sola organización nacional, la Confederación Nacional Campesina²⁶. En el caso de los pequeños propietarios, el peso del territorio no fue tan fuerte (aunque no ausente), pero fue sustituido por una extensa red de cerca de tres mil asociaciones locales de productores reagrupadas en 13 confederaciones nacionales (Ley de Asociaciones Agrícolas de 1932), dominadas por la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad²⁷. A su vez, la Confederación Nacional Ganadera conformó una estructura similar para organizar a los ganaderos (con cerca de 1.500 asociaciones locales de ganaderos), que se conformaron en los grupos regionales de poder más fuertes en muchos estados del país y en uno de los puntales del corporativismo en el campo.

A lo largo de medio siglo, tanto el ejido como las asociaciones de productores jugaron el papel de “órganos intermedios semipúblicos” (Lanzaro, 1992: 87-128) que permitían tener canales permanentes de comunicación con el gobierno, en particular la Secretaría de Agricultura y de la Reforma Agraria, para resolver sus principales demandas. En la ciudad, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares jugaron un papel idéntico.

En síntesis, el corporativismo mexicano, como aparato político, social y económico, fue sin duda construido desde las esferas del poder pero sobre la base de una situación social que lo hizo factible. Sin esta situación social previa, no había posibilidad de construir un régimen de partido único que funcionara por más de medio siglo sin transformarse en abierta dictadura militar²⁸. Dicho de otra manera, el corporativismo mexicano fue autoritario, pero no totalitario²⁹. La represión (por encarcelamiento, tortura, muerte, o simple presencia de guardias blancas o fuerzas armadas gubernamentales) fue un mecanismo importante para mantener este régimen y limitar su posible apertura hacia un sistema político democrático, pero no el fundamental.

Esta relación consensual corporativizada era sumamente compleja. Combinó grandes acuerdos entre masas populares y gobierno en torno a sus principales demandas, formas de contención legal de las mismas cuando afectaban a otros grupos de poder, y, en momentos de crisis, abierta represión (asesinato, encarcelamiento, intervención del ejército). Las grandes demandas que permitieron crear un consenso nacional en el campo entre los pequeños productores, tanto ejidatarios como legítimos pequeños propietarios, fueron el reparto agrario y el fomento a la pequeña producción familiar. En la ciudad fue la política de bienestar, esencialmente con la educación, la salud y la vivienda.

Así, representación social consensual, negociación, control social y represión son elementos indisolubles del corporativismo posrevolucionario mexicano, que tuvieron un peso diferente según los períodos y las regiones consideradas. Si bien hubo importantes cambios en la combinación de estos elementos a lo largo de los sexenios, creemos que la tendencia general ha sido pasar de un corporativismo consensual, que caracterizó al gobierno cardenista en los años treinta, a un corporativismo autoritario a partir de la crisis del Estado desarrollista y su transformación en Estado neoliberal (de Grammont, 1990: 105-167).

Es a partir de la década de los setenta, y más claramente de los ochenta, que este modelo de representación social dejó de servir como mecanismo de negociación y entró en crisis por su autoritarismo, corrupción y concentración del poder en las cúpulas, pero especialmente por no responder a las necesidades del neoliberalismo. El Estado se desentiende poco a poco de las agrupaciones corporativas que por un largo período sirvieron de pilar para consolidar el proyecto político del partido en el poder, y el proceso de representación se desgasta en la medida en que pierden eficacia para defender los intereses de sus agremiados. Esta disfunción entre las viejas organizaciones sociales y el naciente Estado neoliberal tecnocrático obligó al gobierno a intervenir directamente para reconfigurar una estructura de negociación más adecuada a sus metas económicas.

En el campo, tres acontecimientos demuestran claramente esta situación. El primero fue cuando en 1984 Miguel de la Madrid fomentó la creación del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que debía representar al sector empresarial del campo en la víspera de la incorporación de México al GATT (1985). En cuanto se creó, el CNA se volvió el interlocutor privilegiado para negociar la política agropecuaria; en cuanto se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se transformó en el único interlocutor viable para el sector gubernamental. A pesar de algunas críticas puntuales, el CNA decidió apoyar la política de apertura comercial, participando en la Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE) y la desincorporación de las paraestatales destinadas a fomentar la producción del sector. Pero, como contrapartida, logró la resolución de una añeja demanda: el fin del reparto agrario.

El segundo acontecimiento fue la creación, el 6 de enero de 1990, a propuesta de Salinas de Gortari, del Congreso Agrario Permanente (CAP), órgano cúpula de

representación de la mayoría de las organizaciones campesinas (principalmente del sector social) que se encontraban en franco reflujó. Hasta la fecha el CAPno ha tenido ninguna injerencia en las grandes decisiones del gobierno: no participó en las negociaciones del TLC, aunque sirvió para convencer a sus bases de los beneficios del fin del reparto agrario fue sorprendido por la propuesta gubernamental de modificar el artículo 27 constitucional, y sirvió de muro de contención a las demandas de El Barzón. El tercero fue la destrucción sistemática de la poderosa Confederación Nacional de Productores de Hortalizas, en cuanto intentó limitar el proceso de apertura comercial para la agricultura (de Grammont, 1990: 105-167).

En la ciudad, la creación del Congreso del Trabajo, las sucesivas transformaciones de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), y la creación de la FESEBES, la organización territorial de los barrios en la ciudad de México por parte del PRI, respondieron a la misma necesidad.

También nacen nuevas organizaciones para enfrentar nuevos problemas, que las existentes -tanto corporativas como independientes- son incapaces de resolver. Frente al impresionante crecimiento de la cartera vencida, aparecen hacia finales de los ochenta y principios de los noventa diversas agrupaciones con el objetivo principal de defender el patrimonio familiar. El Barzón surge en esta coyuntura en 1993. El movimiento creció entre los productores medianos del campo, pero después de la devaluación del 22 de diciembre de 1994 abarcó ampliamente a los pequeños empresarios de la ciudad y a la clase media urbana.

Esta nueva organización es el resultado de la bancarrota de una importante capa de productores medios por la aplicación de la nueva política económica, pero tres grandes fenómenos políticos íntimamente vinculados y que atraviesan al conjunto de la sociedad le dan su contenido específico. Primero, la ruptura de los tradicionales canales de negociación entre los aparatos intermedios de representación de los productores y el gobierno. Esta ruptura no fue específica de las viejas organizaciones corporativistas, sino que incluyó a las organizaciones de nuevo cuño -las llamadas organizaciones "autónomas" reagrupadas en el Congreso Agrario Permanente- que no tuvieron la capacidad de representar las demandas de los productores con cartera vencida (de Grammont, 1990: 105). Segundo, la transición democrática, que permitió el importante crecimiento de los partidos políticos y la generalización de la lucha electoral en estos mismos años. Tercero, la creación de una nueva cultura política, que contribuye, junto con el fortalecimiento de los partidos de oposición, a la paulatina formación del ciudadano, en particular entre la clase media.

Este proceso de constitución de ciudadanía se da cuando buena parte de este grupo social, que ha sido la justificación última del corporativismo por varias décadas, está en franca crisis por los efectos del nuevo modelo económico. No se trata de un hecho menor, porque se contrapone al proceso del fortalecimiento de los ciudadanos en las democracias avanzadas que se dio esencialmente después

de la segunda guerra mundial, en un período de auge económico y de establecimiento de importantes políticas sociales.

En México, el papel de la clase media en la transformación de la sociedad ha variado a lo largo de las grandes etapas históricas de la vida nacional³⁰. Su participación en la revolución fue preponderante, y se debió a su voluntad de modernización tanto económica como política del país. En este período la clase media emergente respondió a la idea de una clase moderna y democrática. Sin embargo, con la construcción del corporativismo, la estabilidad política y el crecimiento económico, se transformó en una clase esencialmente conformista y sometida a los aparatos burocráticos del Estado. La defensa de sus privilegios, estrechamente vinculados al régimen autoritario estatal, la ha llevado a ser el principal pilar del corporativismo a partir de la creación de la CNOP en 1943. Si bien hubo en sus filas importantes movimientos de oposición reclamando mejores políticas sociales para el pueblo y más democracia³¹, no es menos cierto que hasta la crisis del modelo de desarrollo auto-centrado, la clase media mexicana actuó esencialmente en defensa de sus privilegios, aceptando una total dependencia política del gobierno y su partido. Mientras la clase obrera y el campesinado conocían constantes enfrentamientos con el Estado, la alianza de la clase media con el régimen corporativista autoritario permaneció inmutable. Frente a la falta de opciones democráticas, su voto se transformó en un simple intercambio con el cual aseguraba la permanencia de sus privilegios.

Con la crisis del modelo económico, la clase media vio su nivel de vida fuertemente afectado, y sus compromisos políticos con el PRI se debilitaron. El PAN primero, y luego el PRD, fueron sus dos principales alternativas para expresar inconformidad y recuperar autonomía frente a un sistema político desgastado. En el marco de la transición hacia un sistema plural de partidos empezó a reivindicar su viejo sueño, abandonado desde 1929 con la creación del PNR, de ser una clase media moderna; una ciudadanía políticamente activa, con capacidad de discrepar abiertamente con el gobierno de turno, y socialmente comprometida con un proyecto de nación que la incluyera.

Sin embargo, a pesar de estos profundos cambios en el sistema político nacional, no han desaparecido todos los demás rasgos sociales que conforman nuestra sociedad. En particular, las colectividades mantienen una importancia fundamental en la toma de decisiones de la población, aunque se transforman bajo la influencia de la nueva institucionalidad que prevalece en la esfera política. Es por eso que en México, cuando hablamos de la ciudadanía, no podemos referirnos solamente al individuo politizado como lo supone el esquema de la democracia parlamentaria, sino que debemos tomar en cuenta a las colectividades con conciencia cívica, que podemos conceptualizar como “organismos ciudadanos intermedios” (o “ciudadano colectivo”)³². Aunque es difícil saber dónde termina de actuar este último y cuándo aparece el primero, podemos plantear cuáles son los dos

extremos actuales del continuum que pasa del uno al otro: las comunidades étnicas, en particular aquellas en donde se ejercen la autonomía de los pueblos y las elecciones por usos y costumbres, como en Oaxaca, actúan como “organismos ciudadanos intermedios”; mientras que las clases urbanas medias y altas se acercan más al modelo del ciudadano o del individuo politizado³³.

La diferencia entre los cuerpos sociales colectivos corporativizados (organismos intermedios semipúblicos) y el ciudadano colectivo (organismo ciudadano intermedio) reside en su visión política de la sociedad. Los primeros se someten a una autoridad única e indiscutible, tanto en su interior (el consejo de ancianos, la autoridad ejidal o comunal, el cacique, etc.) como hacia el exterior (la autoridad administrativa y política, el caudillo, etc.). Esto permite la existencia de mecanismos autoritarios de toma de decisión por parte de los representantes, mientras que los demás miembros de la comunidad se ven excluidos de la toma de decisión. Asimismo, permite la existencia de un sistema político basado en el presidencialismo y un partido único. Los segundos, aunque actúan colectivamente y por consenso, tienen una clara visión de lo que es un sistema democrático, o sea, la necesidad de la participación ciudadana en la competencia entre partidos para lograr la representación de diferentes posiciones ideológicas e intereses. Aplican en su interior las reglas de la democracia (todos tienen voz y voto) para alcanzar el consenso. El paso de las comunidades corporativizadas al ciudadano colectivo sigue complejos vericuetos, y a menudo encontramos elementos de ambos en un mismo grupo social³⁴.

En resumen, El Barzón es un movimiento social que se inscribe en la transición política entre una sociedad corporativa autoritaria y otra democrática. Es un movimiento social de nuevo cuño, porque reagrupa tanto a pequeños productores como a consumidores de la ciudad y del campo en su lucha social en contra de la banca para resolver su problema de cartera vencida, o en su lucha política por modificar el modelo económico neoliberal y permitir un mejor reparto de la riqueza. En la historia social y política mexicana es un movimiento que cobra importancia porque reivindica los derechos de los particulares, incluso sobre el gobierno, y con ello contribuye a la formación del nuevo ciudadano mexicano.

El Barzón y su entorno sociopolítico

A lo largo de sus cinco años de vida, El Barzón creció y se fortaleció más que cualquier otra organización social en el mismo período. Intentó establecer alianzas con muchas de las organizaciones sociales, incluso con instituciones del sector empresarial tales como las asociaciones de productores o las cámaras empresariales. Se acercó a los partidos políticos, en particular al PRD, para influir tanto en la esfera del poder legislativo como en las instituciones gubernamentales del poder ejecutivo y judicial. Sin embargo, conoció fuertes tensiones en estos tres

niveles de su trayectoria: entre sus bases locales y su dirigencia nacional, con las otras organizaciones sociales, con los partidos políticos, e incluso con el PRD.

Las dinámicas de su vida local, particularmente entre los productores rurales, fueron marcadas por el tipo de liderazgo y el origen de los afiliados de cada uno de los barzones estatales. Las bases sociales del movimiento fueron tan diversas como lo son las diferentes regiones del país en lo social, lo político, e incluso lo cultural. Es por eso que en los estados aparece una variada gama de organizaciones e instituciones con las que los barzones locales procuraron apuntalar su movimiento. Por ejemplo, en Jalisco El Barzón se formó con empresarios rurales medios, horticultores, ganaderos, productores de aguave, maiceros, que abandonaron la Confederación Nacional de Productores Rurales. En claro rechazo al corporativismo se mantuvieron alejados de los partidos políticos, pero buscaron el reconocimiento de la Iglesia católica y de las organizaciones patronales. En Oaxaca la formación del movimiento de carteras vencidas se extendió entre ejidatarios pobres o medios dedicados a la producción para el mercado local: maiceros, pequeños ganaderos, o en el mejor de los casos pequeños productores de piña. En ese estado el conflicto se manifestó abiertamente con la Confederación Nacional Campesina, porque gran parte de los barzonistas, estimados en mayo de 1996 en unos 4.000 deudores, salieron de las filas de esta central campesina. Allí se buscaron alianzas con otras organizaciones campesinas del sector social. En cambio, en Chihuahua y Zacatecas El Barzón se conformó inicialmente con diferentes grupos de productores independientes o vinculados con la oposición política. Las alianzas abarcaron un amplio abanico de organismos gremiales y políticos, e instituciones para-gubernamentales como el Frente Común Campesino de Zacatecas, impulsado a iniciativa del gobernador Arturo Romo.

Por eso, si bien El Barzón tiene una estructura institucional consolidada a nivel nacional, funciona más bien como una coordinadora de organizaciones regionales, con fuertes dificultades para establecer una verdadera representación nacional.

La relación de El Barzón con las demás organizaciones sociales nacionales ha sido compleja, con numerosos intentos de acercamiento, pero sin lograr concretar nada importante. Desde un principio las organizaciones fijaron su posición frente al movimiento. Las centrales corporativas oficiales del agro (CNPR y CNC), que vieron menoscabar su capacidad de representación, así como el Consejo Nacional Agropecuario, que avaló la política de apertura, se convirtieron en los principales enemigos del movimiento barzonista. Primero argumentaron que El Barzón pretendía desarticular el movimiento campesino y acabar con los avances logrados en el medio rural con la apertura comercial; luego, que sus dirigentes querían politizar el problema de la cartera vencida para fortalecer la oposición al PRI. Sin embargo, mientras las cúpulas de esas agrupaciones se oponían a El Barzón, en no pocas ocasiones sus bases y dirigentes locales simpatizaron, se aliaron temporalmente, o se aunaron al movimiento de la cartera vencida.

Los dirigentes de las organizaciones independientes mantuvieron más bien una posición de neutralidad, sin criticar pero tampoco sin brindar un claro apoyo al movimiento. Los intentos del AgroBarzón para ingresar al Congreso Agrario Permanente fueron inútiles, a pesar de la simpatía demostrada por varias de sus organizaciones.

En la ciudad, aún cuando de manera insistente los barzonistas han buscado el apoyo de las cámaras de industriales y de comercio como la Confederación de las Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco), y la Confederación Nacional de Cámaras de la Industria de Transformación (Canacindra), éstas se han mantenido distantes del movimiento, porque no se han querido comprometer con el problema de la cartera vencida. Al igual que en el campo, grupos de pequeños y medianos empresarios se desprendieron de las cámaras para acercarse a El Barzón e incluso participar activamente en sus filas. Este proceso fue tal que en agosto de 1995, en pleno auge del movimiento barzonista, la Coparmex, que reiteradamente había censurado al movimiento, reconoció que El Barzón “se perfila como un fuerte movimiento social”. Aunque le negó la capacidad de integrar fuerzas económicas y políticas amplias, reconoció que “tiene cada vez mayor incidencia y un claro rumbo político en busca del poder ciudadano” (*El Financiero*, 12-8-95; *El Norte*, 7-8-95).

En dos coyunturas pareció que El Barzón iba a concretizar alguna alianza con otras organizaciones. Primero cuando realizó su cuarta asamblea en la ciudad de Zacatecas a fines de febrero de 1994. La compleja coyuntura política nacional (entre otros motivos por el nivel de movilización alcanzado por El Barzón, la difícil campaña electoral para la presidencia de la república, y el estallido de la guerrilla en Chiapas) propició la participación de dirigentes de organizaciones independientes y disidentes del PRI, entre las que se contaban la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Corriente Crítica Democracia 2000 del PRI, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas (UNORCA), la Unión Campesina Democrática (UCD), y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Pero a pesar de la intención de firmar un plan de lucha común entre El Barzón y las dos organizaciones más cercanas al PRD - la UCD y la CIOAC-, no se concretó nada.

En 1995, con su participación junto con organizaciones empresariales inconformes con la política gubernamental en la elaboración del proyecto de “Estrategia Económica Alternativa para el Desarrollo de México”, buscó crear un frente de organizaciones sociales del campo y de la ciudad. En el campo intentó afianzar acuerdos con líderes de la CNC, la CNPR, el CAP, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la CIOAC y la poderosa Confederación de Asociaciones de Agricultores Del Estado de Sinaloa (CAADES), que había expresado en ese entonces fuertes críticas a la política económica gubernamental. En la ciu-

dad se acercó a la Coparmex, la Asociación Nacional de la Industria de la Transformación (ANIT) y el Foro Cambio Empresarial de Puebla, entre otros. Pero tampoco en esta ocasión se llegó a ningún consenso en cuanto a la forma de resolver los problemas del sector, y sólo se mantuvieron relaciones “fraternas” con esas organizaciones. Varias razones explican por qué no pudo establecer alianzas nacionales claras con otros organismos sociales.

La primera es que no conforma un movimiento clasista corporativo, o por lo menos gremial, cuando todas las demás organizaciones representan un grupo social determinado con intereses particulares claramente definidos. La diversidad en su composición social dificulta la representación nacional de los intereses de sus bases. Ocasionalmente esta diversidad provoca conflictos de difícil solución, como en el caso de los productores agrícolas que piden mejores precios a sus productos, mientras los consumidores exigen que se mantenga el control de los precios de la canasta básica.

Por otra parte, las grandes demandas sociales a lo largo del siglo XX (tierra, salario, servicios e incluso democracia) sirvieron para exigir la incorporación de grupos marginados en el modelo económico vigente. Con El Barzón, por primera vez desde la revolución mexicana surgió un movimiento definido no por su demanda de incorporación al modelo, sino por su oposición al sector social hegemónico, el financiero, que controla el nuevo rumbo de la economía. Como lo recuerda Alain Touraine (Touraine, 1999: 55-9), para mantenerse, madurar y consolidarse, los movimientos sociales no pueden sólo estar en contra de las políticas gubernamentales, sino que necesitan propuestas consideradas válidas por el conjunto de la sociedad. En buena medida, El Barzón logró pasar de una posición defensiva a una ofensiva con propuestas legislativas novedosas y de claro alcance social (como la tipificación de la usura o la protección del patrimonio familiar), pero a costa de una fuerte politización de su movimiento, que lo puso en entredicho frente al conjunto de las organizaciones que siguieron defendiendo hasta la nueva coyuntura electoral del año 2000 la no-participación del movimiento social en la esfera política.

Precisamente, lo que marca el rumbo de El Barzón a nivel nacional es que se conforma cuando el sistema político transita con grandes dificultades del dominio del partido único de estado hacia un pluripartidismo parlamentario. En el contexto de un partido único, ser apolítico era la única manera de construir una organización social democrática. Pero con la presencia de fuertes partidos de oposición (esencialmente el PAN y el PRD) y de un sistema electoral más confiable, la democracia política cambió la relación de las organizaciones sociales con los partidos políticos. Estos ofrecen ahora la posibilidad de pasar de una simple posición ideológica -deslindarse del autoritarismo del partido único- a la acción política para alcanzar la solución de sus demandas. Todas las organizaciones sociales “independientes” vivieron este complejo tránsito de lo social a lo político a partir de 1988. Las elecciones

presidenciales del año 2000 marcan un cambio en cuanto a la relación entre las organizaciones sociales y los partidos políticos, ya que la mayoría de las que antes se definían como “autónomas” o “apolíticas” tomaron posición a favor de la participación política o apoyaron a alguno de los partidos en contienda.

Retomando la idea de matriz sociopolítica de Garretón (Garretón, 1995: 49), se pasó de una matriz bipolar en la cual la sociedad está dominada por un partido corporativista a una matriz más compleja, con tres polos, en donde la esfera política se desvincula del estado y los partidos políticos actúan directamente con las organizaciones sociales o la sociedad civil. De esta manera, El Barzón pudo abrirse espacios en el aparato partidario del PRD y participar en la esfera legislativa. Sin embargo entró inmediatamente en competencia con la estructura profesionalizada del partido, a menudo más propensa a utilizar las demandas de la sociedad para ganar votos que dispuesta a dejarse conducir por la dinámica y las demandas del movimiento social.

Al igual que todas las organizaciones no corporativas, cuando nace El Barzón se define en primer lugar por su posición apolítica. Sin embargo, en septiembre de 1994 se da una primera escisión en su interior por las discrepancias sobre este problema entre un fuerte grupo de dirigentes encabezado por los delegados de Zacatecas, cercanos al PRD, que apoyaban la idea de participar a título individual (no a nombre de la organización) en la contienda electoral nacional y desempeñar puestos de representación popular, y otro encabezado por la gente de Jalisco, cercana al PRI, renuente a tal acercamiento. Por un lado se fundó la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Proveedores de Servicios El Barzón A. C. (Barzón-Unión); por el otro se conformó la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios y Forestales El Barzón A. C. (Barzón-Confederación). Existen otras organizaciones de deudores con una trayectoria importante. Sin embargo, sólo El Barzón-Unión optó por combinar abiertamente la lucha social de los deudores con la lucha política partidaria nacional, y esto le da un interés especial a su experiencia. En los hechos, el acercamiento al PRD le dio mucha fuerza a El Barzón-Unión, al punto de transformarse en la principal representación de los deudores del campo y de la ciudad.

En el contexto de la contienda electoral federal de 1997, El Barzón-Unión abandonó por completo su principio de autonomía de los partidos para suscribir públicamente una alianza con el PRD. Esta alianza provocó la salida de sus filas de algunos grupos que no estuvieron de acuerdo con la politización de su organización. De esta alianza resultó una compleja relación entre la organización social y el partido político. A veces el partido funcionó como una buena palanca para lograr la resolución de demandas concretas, pero otras veces los conflictos entre ambos fueron tan fuertes que las dinámicas partidarias se encimaron sobre las de la organización social y limitaron las posibilidades de su fortalecimiento. Hacer un balance final sobre esta relación -¿qué tanto ha ganado la organización y qué

tanto el partido?- es una tarea espinosa. Pero lo que sí puede aportar luces sobre la evolución de la vida de nuestra sociedad es analizar cómo se fue construyendo esta relación, y cuáles son sus efectos sobre la conformación de un sujeto social desdibujado en nuestra vida política, el ciudadano democrático, así como sobre su relación con la política.

Efectivamente, en un país como México, en donde nunca existió una vida democrática parlamentaria, el problema consiste en saber qué camino seguir no sólo para destruir el corporativismo, sino también para construir un sistema político que no recorra los avatares de las democracias avanzadas, donde los partidos políticos han perdido su capacidad de incorporar la problemática social en su hacer. Dicho de otra forma, el punto está en cómo hacer coincidir la democracia política con la democracia social. La respuesta no es obvia, porque no se encuentra sólo en la construcción de nuevas instituciones (gubernamentales o políticas), sino también en la capacidad de los actores para vincular los procesos políticos con las grandes demandas sociales³⁵. En esta perspectiva, es necesario reflexionar sobre la construcción de la ciudadanía en el contexto de la transición a la democracia³⁶.

Dos grandes momentos marcaron este proceso de transformación en la relación entre el movimiento social y los partidos políticos: primero, la ruptura de los canales de negociación entre el gobierno y los barzonistas; segundo, el establecimiento de una nueva relación entre el movimiento social y la política, que contribuye a la formación de una ciudadanía socialmente comprometida con un proyecto de nación incluyente.

La ruptura de los canales corporativos de negociación entre el gobierno y los barzonistas

Para asegurar canales de negociación con el gobierno, El Barzón demandó desde un principio el reconocimiento formal de su representación. Sin embargo hasta la fecha no ha logrado tal reconocimiento, y nunca existieron canales de comunicación abiertos para negociar con el gobierno. En estos años, la Secretaría de Agricultura (otrotra el aparato de negociación por excelencia para todos los productores del campo) y la Secretaría de Industria y Comercio (para los pequeños empresarios industriales o de servicios) se transformaron en aparatos técnicos, mientras se trasladó todo el poder de decisión en materia de política económica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público³⁷. Esta secretaría siempre consideró, al igual que la banca privada, que los deudores deben resolver su conflicto directamente con los banqueros y los agiotistas³⁸. El problema de la rentabilidad de las empresas y de los bajos ingresos de los deudores son cuestiones a las que nunca ha hecho referencia, y sobre las cuales ni la Secretaría de Agricultura ni la Secretaría de Industria y Comercio tienen ahora injerencia. Cuando El Bar-

zón solicitó a través de la Secretaría de Gobernación que el gobierno tomara una decisión de carácter político acerca de las carteras vencidas, por lo menos para suspender las acciones legales que la banca privada promovía en contra del patrimonio familiar de los deudores, encontró sólo cerrazón y autoritarismo.

Esta ruptura en los tradicionales canales corporativos de negociación entre la pequeña burguesía y el gobierno tiene una razón estructural: los deudores, empresarios de la clase media del campo y de la ciudad, ya no corresponden al modelo de desarrollo neoliberal. El Barzón es un movimiento sostenido por productores que fueron el modelo mismo del Milagro Mexicano, los exitosos de la revolución verde y de la política industrial de sustitución de importación, los protegidos del corporativismo. Es un movimiento en el cual participan tanto pequeños y medianos productores como consumidores, todos en busca de nuevos caminos para recuperar el sueño del “desarrollo compartido”. Si bien la clase media se benefició enormemente de las políticas de desarrollo durante medio siglo, se vio excluida del nuevo modelo económico.

En el campo, el agricultor familiar, que fue el agente preferencial del desarrollo agrícola de las últimas décadas, ya no es pieza clave en los cálculos del neoliberalismo. De acuerdo con los planes neoliberales, deben surgir en su lugar grandes empresas vinculadas con la inversión agroindustrial: el neoliberalismo agro-exportador intenta sustituir al agricultor, que fue el agente de cambio con la revolución verde, por la gran sociedad mercantil, que debe serlo en tiempos de apertura comercial. Desde el punto de vista gubernamental, la cartera vencida, que afecta esencialmente a productores medianos y grandes y tiende a crecer a pesar de los programas de reestructuración financiera, aparece como un mal necesario para lograr la modernización del campo. Por eso, los empresarios que no logran ser competitivos en el actual marco económico y cayeron en cartera vencida, no pueden esperar solucionar su endeudamiento, y tarde o temprano tendrán que desaparecer.

Desde el punto de vista neoliberal este proceso de reacomodo social, o de exclusión según se quiera ver, es necesario para reactivar la economía. El gobierno optó por romper su relación política con una clase media que dejó de ser funcional al modelo económico³⁹. Se asume que no hay nada que negociar, por lo cual toda concesión no puede ser más que focalizada (de corto plazo, para algún grupo particular, sobre algún aspecto específico) a fin de limitar el desmoronamiento del corporativismo, que constituye todavía su principal base de sustento.

Aprovechando la fragmentación del movimiento, el gobierno pudo combinar varias tácticas de acuerdo a los actores sociales en presencia. Con sus propias instituciones (Banrural, Pronasol, Fira, Firco, etc.) emprende a partir de 1990 una gran reforma financiera, y establece políticas diferenciadas según los niveles económicos de los productores (de bajos ingresos, potencialmente productivos y competitivos) para distinguir claramente la política social de la productiva. Sin

embargo no renuncia del todo a utilizar los tradicionales mecanismos del corporativismo, dando un trato preferencial a (o mostrando mayor flexibilidad en las negociaciones para con) los sujetos de crédito de las organizaciones campesinas afiliadas al CAP, ejidatarios en su enorme mayoría. De hecho, condonó las deudas de los productores de bajos ingresos transfiriendo la deuda a Pronasol. Con los sujetos de crédito potencialmente productivos, Banrural, aunque de manera diferenciada según los estados, llevó a cabo una política relativamente conciliadora que permitió controlar el crecimiento de la cartera⁴⁰. Finalmente, aún en estados con una fuerte cartera vencida llegó a soluciones que limitaron los conflictos. Aún en estados en donde hubo un fuerte encono entre Banrural y los deudores, como Chihuahua y Zacatecas, se implementaron acciones que bajaron el conflicto entre los deudores y Banrural a niveles manejables por el gobierno. Con los deudores de la ciudad, tanto pequeños empresarios como consumidores (créditos hipotecarios), el gobierno no tuvo posibilidad de maniobrar porque el crédito estaba en manos de la banca privada.

Con la banca comercial su relación fue de apoyo incondicional. Esta alianza entre el gobierno y la banca privada es la consecuencia inevitable del proceso de privatización del crédito.

La ruptura de los canales de negociación fue claramente percibida por los deudores a lo largo de 1994 y 1995. En este período, El Barzón tuvo una política defensiva que consistió en no dejarse embargar por los bancos. La movilización callejera fue su principal táctica, porque todas sus propuestas para aliviar la carga de la deuda fueron ignoradas.

Agotado este período, El Barzón pasó de la demanda de solución de la cartera vencida a la lucha por un nuevo modelo económico, concretizada en el “Acuerdo Nacional para la Reactivación Económica, el Rescate de la Planta Productiva y el Empleo”. En 1996, su intento de crear un gran acuerdo político nacional con todas las fuerzas opuestas al modelo económico fracasó porque la propuesta tenía un claro sesgo de centro-izquierda ampliamente favorable al PRD o a fuerzas políticas cercanas. Con la promoción de este acuerdo político amplio, El Barzón intentaba todavía mantener su acción en el ámbito de lo social sin comprometerse directamente con ningún partido, dejando abiertas las opciones políticas concretas a sus miembros. Pero fracasado el intento fue necesario optar por el partido más afín a sus metas, porque era la única manera de volver a abrir, ahora no por concesión gubernamental sino por mandato popular, canales de negociación.

De hecho, El Barzón se politizó antes de decidir participar en la lucha electoral a fines de 1996: fue de hecho a lo largo del año de 1995, cuando sus interlocutores dejaron de ser la Secretaría de Agricultura, la de Industria y Comercio, y luego la de Hacienda, para ser finalmente la Secretaría de Gobernación. Lo equivocado no fue politizar a la organización (o dejar que se politizara), sino creer que la democracia consiste en mantener lo social ajeno a la dinámica de lo

político. Reconociendo que ambos niveles se enlazan sin confundirse, la cuestión que queda por resolver es cómo y qué tan estrecha debe ser esta relación.

La aportación política de El Barzón-Unión: la formación de una ciudadanía participativa, socialmente comprometida con un proyecto de nación incluyente

El Barzón es la única organización social que perdió toda posibilidad de negociación con el gobierno, por lo cual se vio en la necesidad de establecer un vínculo preciso con la esfera política. Por eso, contribuye a formar una ciudadanía politizada y participativa⁴¹, socialmente comprometida con un modelo de desarrollo incluyente.

Lechner aporta importantes ideas sobre la situación del ciudadano en América Latina en el contexto de la modernización neoliberal y la democratización de sus sistemas políticos que nos parecen pertinentes para el caso estudiado (Lechner, 1993: 63-75). La democracia representativa, según este autor, supone una distancia entre el ámbito social y la esfera política, aún si entre ambos existe una complementariedad que varía en cada sistema político. En América Latina, frente a su desintegración por el mercado, la clase media recurre a la política para lograr su reinserción en la economía. En México no le queda más que pasarse a las filas de la oposición, ya sea hacia el PRD o el PAN. Aparentemente la opción más coherente es la del PRD, por ser el partido con el programa más cercano al Acuerdo Nacional para la Reactivación Económica, el Rescate de la Planta Productiva y el Empleo, y por haberse comprometido más claramente con el movimiento de los deudores. Sin embargo, para muchos que no comparten la posición de centroizquierda de este partido, el PAN es una opción atractiva por su tradición de lucha democrática.

Para contrarrestar esta tendencia, la corriente neoliberal debe convencernos sobre la inexistencia de una responsabilidad política por la exclusión porque, en la medida en que el mercado es el único mecanismo regulador de la vida social, es un fenómeno natural, inevitable⁴². Solamente entonces se puede pretender separar totalmente lo social de lo político. Esta fue la verdadera apuesta política de los dos últimos gobiernos en México (de Salinas de Gortari y Zedillo), y en ella residen sus propias contradicciones con el PRI, que no puede mantener su hegemonía sin retomar la cuestión social.

La fuerza de El Barzón radica precisamente en que reagrupa a la clase media, que constituía el grupo social más dinámico del desarrollo “autocentrado” durante el milagro mexicano y el modelo social anhelado por gran parte de la población: a su imagen y semejanza, todo mexicano, con su trabajo, podía aspirar a alcanzar el bienestar prometido por la modernidad impulsada por el gobierno. En este proceso, el PRI no sólo justificaba la ausencia de democracia (es por su poder unívoco y su autoridad absoluta que el gobierno tiene la capacidad de distribuir rique-

za), sino que la clase media perdía toda capacidad de transformarse en una ciudadanía republicana. Los grupos que aspiraban a vivir en un régimen democrático encontraban su mejor alternativa en el PAN, como fue el caso en los estados del norte a partir de la década de los ochenta. Ahora, con su exclusión como consecuencia del modelo neoliberal, pierden esta imagen de clase moderna, emprendedora, exitosa por su capacidad y trabajo. Es porque pierden su identidad colectiva, que los definía como los promotores del milagro mexicano, que los barzonistas se “ciudadanizan” con su participación activa en la política a partir de 1996, y adoptan formas de lucha propias de la oposición y de las clases populares. El mejor ejemplo de este proceso es la activa participación de El Barzón en contra de la “Ley Zedillo”, tanto a nivel federal como en los estados, o su férrea lucha para lograr la tipificación legal de la usura o la revalorización del monto del patrimonio familiar en los códigos mercantiles y civiles de las entidades federativas.

Sobre este proceso de ciudadanía de las clases medias para reencontrar una identidad colectiva, Lechner plantea que:

“...En cuanto se desvanece el horizonte de una comunidad integrada, queda al desnudo la situación de desarraigo y desamparo y cualquier sacrificio pierde sentido. Las tendencias de fragmentación y exclusión se hacen insostenibles. Resurge entonces la búsqueda de un mecanismo alternativo de cohesión social. La quiebra económica señala el fracaso de una “integración vía mercado” y actualiza la democracia en tanto integración “política” de la vida social. Es la experiencia de desintegración social la que determina la reivindicación de la democracia otorgándole un significado concreto. En este sentido, la revalorización de la democracia en América Latina significa primordialmente el anhelo de una *comunidad restituida* (cursivas mías)...”³³.

Y concluye:

“...la reivindicación por la democracia puede generar una “sobrecarga” de demandas, imputando a la democracia tareas que ésta no puede cumplir. Éste es el caso cuando se le exige la satisfacción de todos los deseos de arraigo, pertenencia e identidad colectivos...” (Lechner, 1993: 72).

Sin embargo, reconoce que el límite entre lo que podemos esperar de la democracia y lo que no le podemos pedir es necesariamente tenue y variante.

Para mí, esta “búsqueda de sentimientos compartidos” consiste esencialmente en reconstruir una valoración social, en particular frente a los menos favorecidos de la nación, que justifique su posición privilegiada. Dicho con otras palabras: ser reconocido como socialmente útil por la sociedad. Hoy por hoy existen dos alternativas complementarias para lograr esto: pugnar por un modelo económico más equitativo así como por un modelo político más participativo. Ambos aparecen íntimamente vinculados, porque no existen posibilidades de modificar la esfera económica sin lograr previamente una amplia participación ciudadana.

Es allí donde se ubica El Barzón, aún con sus titubeos, porque en primer lugar busca formar un ciudadano con características *sui generis*: que respete la legalidad y la haga respetar, comprometido con la justicia social y que participe en la toma de decisión, la ejecución y la evaluación (*accountability*) de los grandes proyectos emprendidos por el gobierno⁴⁴. Un ciudadano socialmente comprometido y participativo, inserto en la sociedad, conectado y valorizado por los demás mexicanos. No un individuo aislado, sino uno vinculado socialmente.

En su lucha por la legalidad y en su propuesta por un modelo de desarrollo con justicia social (en palabras de Bobbio, por un gobierno de leyes y no de hombres, por un Estado de Derecho entendido como la subordinación del poder en todos sus niveles a las leyes, y por una justicia distributiva) (Bobbio, 1996: 214), El Barzón trasciende la representación de intereses particulares (la resolución de la cartera vencida de sus miembros) para defender una propuesta de nación. Al igual que los partidos políticos democráticos, representa intereses generales nacionales, y con ello se diferencia de las representaciones gremiales (en particular los sindicatos y las organizaciones campesinas), que representan los intereses particulares de sus afiliados. En el contexto mexicano de la transición hacia la democracia, esto tiene dos consecuencias: abre el espacio político para trasladarlo del Estado y de los partidos políticos hacia la sociedad civil, y revaloriza la función del voto.

La apropiación por la sociedad civil de ámbitos de decisión que durante mucho tiempo fueron propios de la esfera política (de los partidos o del Estado) es un fenómeno nuevo de las llamadas sociedades complejas policéntricas, en las cuales el Estado ya no es la cúspide de la pirámide social⁴⁵. En México, este traslado de la cuestión política, de los grandes problemas del país, hacia organismos sociales, le pone un sello particular al proceso de transición hacia la democracia, porque en vez de dirigirnos simplemente hacia un sistema político parlamentario (caracterizado por el monopolio de lo político por los partidos), nos encaminamos hacia una democracia social en la cual la sociedad civil está teniendo una amplia iniciativa política con autonomía de los partidos. La lucha de El Barzón se inscribe en ese contexto.

Se revaloriza el voto no tanto porque una parte importante del movimiento social pugne por la participación electoral (el ciudadano activo), sino porque se pasa del voto de “intercambio” característico del corporativismo autoritario mexicano al voto de opinión propio de un régimen democrático participativo (el ciudadano conciente)⁴⁶.

En cuanto a este último fenómeno, se vive una compleja situación. Si comparamos la evolución del significado del voto en los países de vieja democracia y en México, constatamos que la transformación del voto sigue caminos contrarios. El neoliberalismo plantea la necesidad de desvincular la economía de la política y transformar la política (que en el modelo del Estado benefactor o socialdemócrata responde a la voluntad de los ciudadanos en defender un proyecto

ideológico de nación a través de su voto de “opinión”) en mercado político (en el cual el individuo emite un voto de “intercambio”, o sea que no vota por convicción sino por interés particular y de corto plazo, para obtener un beneficio inmediato). En los países de vieja democracia, este proceso de desideologización y mercantilización del voto se acompaña de un amplio proceso de desinterés por la política, que ya no tiene mucho que ofrecer. En México, el voto corporativista ha sido por definición un voto de “intercambio” (sostenido por la fuerza de la ideología de la revolución mexicana). Ahora por primera vez el voto puede ser un voto de opinión diferente, incluso discrepante.

Una reflexión final

Sin embargo, el camino está lleno de escollos. El mayor peligro que corre la sociedad es que los partidos se enfrasquen en una transición hacia la democracia que se limite a ampliar los procedimientos legales de representación sin tener la capacidad de plantearse objetivos sociales concretos⁴⁷. De ser así, lo máximo que se puede esperar es que, al igual que en los países de vieja democracia, la política se transforme en un mercado, marcando con ello el fin de la representación social. Sólo si el proceso está conducido por las organizaciones sociales se podrá penetrar en “áreas prohibidas” por el gobierno, incluso por los propios partidos políticos. Para algunos, la participación del movimiento social en la vida política provoca inestabilidad; para nosotros, es una condición sine qua non para lograr una vida política que permita alcanzar la justicia social. Coincidimos con Alain Touraine cuando, en su estudio sobre la democracia (Touraine, 1994: 83-84), plantea que una democracia representativa existe sólo cuando los actores sociales tienen la capacidad de definir sus propias acciones e imponérselas a los partidos políticos para su implementación.

Bibliografía

- Beltrán, Ulises *et al* 1997 *Los mexicanos de los noventa* (México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM).
- Bobbio, Norberto 1996 *El futuro de la democracia* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Castro, Juventino V. 1998 *La suprema corte de justicia ante la ley injusta* (s/d: Porrúa).
- Centro de Estudios Sociológicos 1997 *Modernización económica, democracia política y democracia social* (México: El Colegio de México).
- Cisneros Puebla, César A. 1994 “Ciudadanía y modernidad: democratización de espacios metropolitanos”, en Bassols, Mario (coord.) *Campo y ciudad en una era de transición* (México: UAM-Iztapalapa).
- Cook, María Lorena 1996 *Organizing dissent: unions, the state and the democratic teacher’s movement in Mexico* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press).
- Córdova, Arnaldo 1972 *La formación del poder político en México* (México: Ed. Era).
- Córdova, Arnaldo 1973 *La ideología de la revolución mexicana: la formación de un nuevo régimen* (México: Ed. Era).
- Córdova, Arnaldo 1974 *La política de masas del Cardenismo* (México: Ed. Era).
- Córdova, Arnaldo 1989 *La revolución y el Estado en México* (México: Ed. Era).
- de Grammont, Hubert C. 1990[a] *Los empresarios agrícolas y el Estado* (México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM).
- de Grammont, Hubert C. 1990[b] “Nuevos actores y formas de representación social en el campo”, en Prud’Homme, J. F. (coord.) *El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano* (México: Plaza y Valdés/ILET).
- de Grammont, Hubert C. 1996 “La organización gremial de los agricultores frente a los procesos de globalización en la agricultura”, en Grammont, H. C. de (coord.) *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano* (México: IIS/UNAM-Plaza y Valdés).
- Elias, Norbert 1991 *La Civilisation des moeurs* (Paris: Calmann-Lévy).
- Escalante Gonzalbo, Fernando 1992 *Ciudadanos imaginarios* (México: El Colegio de México).
- FIRA 1994 (México: Banco de México) p. 20.

Foweraker, Joe 1993 *Popular mobilization in Mexico: the teachers' movement, 1977-1987* (EE:UU: Cambridge University Press).

Garretón, Manuel Antonio 1986 "Transformación social y refundación política en el capitalismo autoritario", en Labastida Martín del Campo, Julio (comp.) *Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea* (México: Siglo XXI-UNAM).

Garretón, Manuel Antonio 1995 *Hacia una nueva era política* (México: Fondo de Cultura Económica).

Girón, Alicia y Correa, Eugenia (coords.) 1996 *La banca de desarrollo hacia el inicio del siglo XXI* (México: IIE-UNAM/Ed. Cambio XXI).

Girón, Alicia y Correa, Eugenia (comps.) 1997 *Crisis bancaria y carteras vencidas* (México: IIE-UNAM/UAM).

Gonzalez Casanova, Pablo 1970 *La democracia en México* (México: Ed. Era).

Guerra, François Xavier 1999 "El soberano y su reino, Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina", en Sábato, Hilda (coord.) *Ciudadanía política y formación de las naciones, Perspectivas históricas de América Latina* (México: Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México).

Gutiérrez Pérez, Antonio y Perrotini, Ignacio 1994 "Banca central, liberalización financiera y ajuste monetarista en México", en Gutiérrez Pérez, Antonio y Garrido Noguera, Celso (coords.) *Transiciones financieras y TLC* (s/d: Ed. Planeta).

Huerta González, Arturo 1997 *Carteras vencidas, inestabilidad financiera: propuestas de solución* (s/d: Diana).

Huerta González, Arturo 1998 *El debate del Fobaproa* (s/d: Diana).

Knight, Richard 1989 "City, development and urbanization: building the knowledge-based city" en Knight, Richard y Gappert, Gary *Cities in a global society* (London: Stage Publications, Newbury Park).

Lanzaro, Jorge Luis 1992 "El fin del siglo del corporativismo", en Luna, Matilde y Pozas H. Ricardo (coords.) *Relaciones corporativas en un periodo de transición* (México: IIS-UNAM).

Lechner, Norbert 1988 *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política* (México: FLACSO, Santiago de Chile).

Lechner, Norbert 1993 "Modernización y modernidad: la búsqueda de ciudadanía", en *Modernización económica, democracia política y democracia social* (México: CES-COLMEX).

Loeza, Soledad 1988 *Clases medias y política en México* (México: El Colegio de México).

- Loeza, Soledad 1999 *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994* (s/d: Fondo de Cultura Económica).
- López Cámara, Francisco 1971 *El desafío de la clase media* (México: Joaquín Mortiz).
- Luhmann, Niklas 1998 *Sistemas sociales (lineamientos para una teoría general)* (s/d: Anthropos-Universidad Iberoamericana-CEJA).
- Mackinlay, Horacio y De La Fuente, Juan 1994 “Pronasol y el campo: ¿un viraje motivado por los sucesos de Chiapas?”, en *Tiempos Sociológicos* (UAM-IZ) Abril.
- O'Donnell, Guillermo 1994 “The State democratization and some conceptual problems”, en Smith, W. C.; Acuña, C. H. y Gamarro, E. A. (comps) *Latin American political economy in the age of neoliberal reform* (New Bronswik: Transaction Book).
- Pozas Horcasitas, Ricardo 1993 *La democracia en blanco: el movimiento médico en México, 1964-1965* (México: Siglo XXI).
- Pozas Horcasitas, Ricardo 1996 *La reforma electoral y su contexto sociocultural* (México: Instituto Federal Electoral/Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM).
- Rangel Contla, José Calixto 1972 *La pequeña burguesía en la sociedad mexicana, 1985 a 1960* (México: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM).
- Schmitter, Philippe C. 1992 “Corporatismo”, en Luna, Matilde y Pozas, Ricardo (coords.) *Relaciones corporativas en un período de transición* (México: IIS-UNAM).
- Touraine, Alain 1994 *Qu'est-ce que la démocratie?* (Paris: Fayard).
- Touraine, Alain 1997 *Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents* (Paris: Fayard).
- Touraine, Alain 1999 *Comment sortir du libéralisme?* (París: Fayard).
- Vellinga, Menno (coordinador) 1997 *El cambio del papel del estado en América Latina* (México: Siglo XXI).
- Villasante, Tomás 1995 *Las democracias participativas. De la participación ciudadana a las alternativas de la sociedad* (Madrid: Hoac).
- Zermeño, Sergio 1978 *México: una democracia utópica, el movimiento estudiantil del '68* (México: Siglo XXI).

Notas

1 En la tecnología utilizada por los campesinos para cultivar su tierra, el barzón es la correa de cuero que ciñe el yugo al timón del arado.

2 La CNPR es la organización de los agricultores del Partido Revolucionario Institucional.

3 La agresión contra los deudores fue tal en esta época, que en julio de 1995 la Barra Nacional de Abogados denunciaba la existencia de 388 casos de suicidios registrados.

4 Informe anual del FIRA (1994) p. 20. No más para el SIRECA, el Grupo de Economistas Asociados calculaba que las utilidades de la banca debía repuntar de 37% en comparación a 1993 (*El Financiero*, 7-4-94).

5 El anatocismo consiste en cobrar un interés mayor que el normalmente establecido en el contrato del préstamo, cuando el cliente cae en cartera vencida. Se conoce también como interés moratorio. Esta práctica es común en todos los sistemas financieros, pero en el caso de México incrementa el monto de la deuda en tal forma que normalmente el cliente moroso no tiene ninguna posibilidad de solventar sus compromisos.

6 En un documento entregado al Congreso, dirigentes del sector privado plantean que con las reformas propuestas la banca pretende hacerse justicia "...por propia mano y a sus anchas..." y "...amarrar a los deudores y cómodamente ejecutarlos..." sin tener la oportunidad de una instancia defensora (*La Jornada*, 21-4-96).

7 El argumento legal de El Barzón se basó en un amparo ganado por un deudor en contra del Banco del Atlántico SA de CV en el Tribunal del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, por haber sido constituido de manera extemporánea, de acuerdo a la autorización otorgada por el Congreso de la Unión. Efectivamente, el artículo séptimo de la Ley de Instituciones de Crédito otorgaba 360 días al Ejecutivo para efectuar el proceso de privatización a partir de su publicación en el *Diario Oficial* (19 de julio de 1990), a pesar de lo cual los diez bancos mencionados fueron privatizados en 1992 (Oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha del 1 de noviembre de 1996, Amparo N° 468/95 otorgado por el Tribunal del Décimo Quinto Circuito).

8 Carta de El Barzón a la ABM con fecha del 5 de noviembre de 1996.

9 El PRI es el partido gubernamental en el poder desde 1929.

10 En los países desarrollados este diferencial es de 3 a 4 puntos.

11 Según los especialistas este enorme diferencial se debe a: 1) la ineficiencia administrativa de los bancos; 2) la ausencia de competencia entre los ban-

cos para obligarles a disminuir sus márgenes; 3) la falta de regulación por parte del gobierno; 4) lo caro que resultan los juicios en contra de los deudores morosos, que duran varios años debido a las imprecisiones y contradicciones de las leyes (en México son necesarios varios años para lograr un embargo, en EE.UU. en tres meses se puede llevar a cabo un juicio); 5) la falta de rentabilidad de la actividad crediticia debido a la recesión económica.

12 Según el coordinador nacional de El Barzón Empresarial, José María Imaz, por lo menos 250 casos de demandas por anatocismo se han resuelto a favor de los deudores (*La Jornada*, 17-7-98).

13 El 8 de mayo de 1998 se reunió con el juez Castro y Castro para entregarle un documento en el cual planteaba su posición sobre el anatocismo. Días después organizó plantones en 24 ciudades frente a los juzgados para pedir al poder judicial que no aceptara presiones de los banqueros en su decisión sobre la ilegalidad de la capitalización de intereses, mientras se entrevistaba en el DF con el presidente de la Corte. A principios de octubre realizó mítines en Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Quintana Roo (*Reforma*, 11-5-98; *La Jornada*, 15-5-98; *La Jornada*, 7-10-98).

14 El más viejo partido de oposición, de derecha, fundado en 1943.

15 La Barra Nacional de Abogados se pronunció abiertamente en contra de la resolución de la Suprema Corte.

16 El Fondo Bancario de Protección al Ahorro es un fideicomiso privado creado en 1990 para respaldar los créditos de la banca. Está administrado por el Banco de México, y en un principio funcionó con aportaciones de los propios bancos. Sin embargo, con la crisis financiera el gobierno empezó a respaldar los bancos con pagarés no negociables, con términos a 10 años, pero con intereses capitalizables y cobrables trimestralmente, hasta asumir en febrero de 1998 un monto de 560 mil millones de pesos. En la medida en que el Fobaproa es una institución privada, no puede contraer deudas públicas. Además, aún como institución pública, de acuerdo a la Constitución necesitaría la autorización del poder legislativo para contraer tales deudas. Es probable que el gobierno esperara que con la recuperación de la economía los bancos pudiesen recuperar sus pagarés, pero en vez de ello se profundizó la crisis, y se generalizó el rescate a gran parte del sistema financiero en menos de dos años. La situación se volvió insostenible para el gobierno, que tuvo que solicitar la transformación de esos pagarés en deuda pública. Es por esta situación que la deuda del Fobaproa es tipificada por especialistas como una deuda “parafiscal”, porque no tiene vigencia legal en ninguna de las instituciones del gobierno, aunque se ubica en el Banco de México. Existió una fuerte presión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno legalizara su situación y pasara sus pasivos a la deuda pública.

17 Esta operación suponía triplicar el monto de la deuda interna federal y rebasaba el monto de la deuda externa (que era de 88.516 millones de dólares), la deuda interna de 30.700 md y el rescate bancario representaban entonces un monto de 65.000 md (Huerta González, 1998: 125).

18 Con contingentes de varias partes del país, El Barzón había establecido un plantón desde el martes anterior frente al acceso principal del Palacio Legislativo en previsión de la probable aprobación del rescate del FOBAPROA.

19 El problema de la correspondencia entre las instituciones políticas y el “ciudadano realmente existente” es tan viejo como la nación mexicana. En su libro sobre *Ciudadanos imaginarios*, Fernando Escalante recuerda la discusión entre liberales y conservadores sobre este asunto (1992: 190).

20 Coincidimos con César A. Cisneros Puebla cuando plantea que el ciudadano está conformado por “componentes civiles, políticos y sociales”, por lo cual no existe un tipo universal de ciudadano (1994: 217-237).

21 No haremos más que esbozar nuestras ideas sobre el proceso de conformación del corporativismo mexicano. Existe una numerosa bibliografía sobre este tema. Remitimos sólo a algunos trabajos clásicos, como son los de Pablo Gonzalez Casanova (1970) y los de Arnaldo Córdova (1972, 1973, 1974, 1989).

22 En su estudio sobre la génesis del ciudadano en América Latina, en el período de transición del antiguo régimen colonial a la independencia, Guerra analiza con detalle el problema de la conformación de la nación y del ciudadano: “...En la práctica política -y al principio también en los textos constitucionales- se tiende a concebir la nación como surgida no tanto de un contrato entre individuos sino un pacto entre pueblos y, por tanto, a considerar a los representantes como procuradores de ellos...” (Guerra, 1999: 38). Agrega: “...Por más que el ciudadano esté ya cerca de las notas de igualdad y de universalidad que lo caracterizarán en adelante, lo que está mucho menos claro es que este ciudadano sea ya un individuo desligado de sus pertenencias comunitarias. En primer lugar porque, pese a las referencias constantes al individuo, el discurso explícito y el imaginario subyacente a muchas disposiciones legales muestra que los hombres de esta época piensan la sociedad como constituida por comunidades y, especialmente, por la primera de todas: la familia...” (Guerra, 1999). En el mismo libro ver también, sobre México, el trabajo de Antonio Animo y el trabajo de Marcello Carmagnani y Alicia Hernández Chávez. También se puede consultar el trabajo de Howard J. Wiarda, “Determinantes históricas del estado latinoamericano: la tradición burocrático-patrimonialista, el corporativismo el centralismo y el autoritarismo”, en Menno Vellinga (1997: 45-7).

23 Es importante reconocer que también los dirigentes de las llamadas organizaciones independientes ejercieron una representación consensual de sus

bases más que democrática (entendida en su sentido original, de representación de ciudadanos).

24 Una encuesta levantada en junio de 1994 apoya nuestros planteamientos. Sobre la familia muestra que a la pregunta “¿Cuál es el mayor agravio que puede recibir una persona?” el 35% contestó “sufrir el rechazo de su familia”, 33% “sufrir un agravio o una injusticia”, 16% “ser pobre” (p. 79). También establece una fuerte correlación entre el concepto de familia y el de trabajo (p. 81), que destaca a la familia como unidad económica compleja. En cuanto a la solidaridad, a la pregunta “Para poner servicios públicos el programa de Solidaridad pide a la comunidad que coopere con dinero y trabajo. ¿Está usted de acuerdo o no?”, el 59% contestó estar de acuerdo, 21% en desacuerdo, 19% estar de acuerdo en parte (p.149). A la pregunta “¿La gente hace mejor las cosas cuando recibe un pago, cuando lo hace para ayudar, o cuando lo hace por gusto?”, el 36% contestó que lo hace mejor si recibe un pago, 32% para ayudar, y 25% por gusto. O sea que frente a un 36% que opta por una motivación mercantil, el 57% opta por una motivación gratuita o de solidaridad (p. 27). Véase Beltrán *et al* (1997).

25 Entendemos por clientelismo a una red extensa de solidaridades que une individuos y familias, a veces comunidades enteras, a una figura dominante como el cacique o caudillo. El presidencialismo -definido como la existencia de una relación directa, casi personal, del presidente en turno con las masas, que le permite ejercer funciones meta-constitucionales (o extra-legales) en particular para la resolución de conflictos- tiene su base social en este clientelismo aceptado por la mayor parte de la población nacional. Sobre este problema, Soledad Loaeza plantea lo siguiente: “...Las amplias facultades del poder ejecutivo -cuyo alcance frecuentemente violaba los límites constitucionales- permitían las soluciones ad hoc, que además retroalimentaban el poder presidencial porque se traducían en la manipulación personalizada de la soberanía popular con base en la relación directa entre el presidente en turno y las masas. La existencia de esta área no institucionalizada del sistema político contrarrestó de manera muy eficaz el desarrollo de la oposición porque los conflictos se resolvían mediante la negociación extrainstitucional -normalmente entre el Presidente de la República y actores políticos movilizados-, sus efectos eran inmediatos y no suponían compromisos de largo plazo para ninguna de las partes...” (Loaeza, 1999: 71).

26 No es el propósito de este trabajo entrar en la polémica, ampliamente desarrollada entre los antropólogos, sobre el carácter de la comunidad campesina. Planteamos que no creemos en la comunidad igualitaria y perfectamente consensual, porque existen siempre grupos sociales diferenciados, fuertes contradicciones internas, y luchas por el poder. Aún así, los mecanismos de toma de decisión siguen siendo de tipo consensual más que de mayoría.

27 La CNPP pertenece a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, ahora UNE, del PRI. Tiene asociaciones locales en más de 1500 municipios (de 2377) que se reagrupan en 32 federaciones estatales. Además afilia a 9 de las confederaciones nacionales de productores (caña, café, cera de candelilla, leche, limón, barbasco, tabaco, algodón, ganado). Las demás confederaciones que no pertenecen a la CNPP (como la CNPH y la CNG) siguen los mismos patrones políticos, ya que el corporativismo mexicano tuvo la capacidad de incorporar hasta los últimos rincones de la sociedad.

28 Es precisamente en la existencia de esta base social que se diferencia el corporativismo mexicano de otros regímenes corporativos latinoamericanos que derivaron en dictaduras militares, como en Argentina.

29 El totalitarismo niega la posibilidad de todo disenso, por lo cual se asimila a regímenes militares, mientras que el autoritarismo tolera cierta oposición mientras le es funcional, o sea, le permite absorber los conflictos inherentes a cualquier sociedad.

30 Sobre el tema del papel de la clase media en la construcción de la democracia existe una muy extensa bibliografía. Para el caso de México remitimos, entre otros, a: Francisco López Cámara (1971); José Calixto Rangel Contla (1972); Soledad Loeza (1988).

31 Tres movimientos se destacan por su lucha democrática: el de los maestros en 1956-1960 y 1979-1994, el de los médicos en 1964-1965, y el movimiento estudiantil de 1968. Sobre estos movimientos se puede consultar: Maria Lorena Cook (1996); Joe Foweraker (1993); Ricardo Pozas Horcasitas (1993); Sergio Zermeño (1978).

32 Cisneros Puebla anota atinadamente que "...Observar la inacabada realización del proceso de ciudadanización es imprescindible para el análisis de la democracia por la sencilla razón de que, por sus diversos niveles y espacios de manifestación, produce un orden cívico sumamente heterogéneo. A la producción de dicho orden (democrático) le es necesario, en efecto, el concurso de las diferentes historias y versiones de la realidad que los trozos dispersos de ciudadanías colectivas múltiples portan. Es decir, aunque la ciudadanía sea el centro de la democracia, en su periferia se expresan los rostros de su propia falta de uniformidad. De nueva cuenta resulta imprescindible observar los dilemas del pluralismo democrático desde una perspectiva fundada en la heterogeneidad que, en síntesis, no ha generado una sola y única identidad ciudadana..." (Cisneros Puebla, 1994: 227-228).

33 En Oaxaca las comunidades se insertan en un doble sistema de representación. A nivel estatal, con las elecciones por usos y costumbres, ejercen una democracia comunitaria directa, mientras que a nivel federal practican una democracia representativa. En el primer caso la elección de las autoridades

se realiza en asamblea pública del pueblo; en el segundo, si bien el voto es individual y secreto, el peso de la colectividad en la definición del voto mantiene mucha fuerza.

34 El concepto de “organismos ciudadanos intermedios” (o “ciudadano colectivo”) permite explicar la participación de las poblaciones pobres, o marginadas, en el sistema electoral. Me parece que la propuesta de P. Schmitter de considerar a las organizaciones sociales (sindicatos u otras), que tienden a sustituir al ciudadano individual en los países avanzados, como “secondary citizenship”, reconoce también la posibilidad de una acción democrática colectiva. Creo que la amplia discusión que se da por saber si es posible tener un sistema electoral democrático cuando existe una gran inequidad en el reparto de la riqueza, plantea un falso problema. El problema es saber cómo se construye un sistema electoral en estas condiciones, y qué tanto se desvía del modelo republicano.

35 Esta cuestión ha sido muy bien planteada en el libro “Modernización económica, democracia política y democracia social” (CES-COLMEX), aunque a esta pregunta el libro propone muchos interrogantes sin ofrecer respuestas precisas.

36 La discusión sobre la transición hacia la democracia rebasa los objetivos de este trabajo. Aunque hablaremos de transición por ser el concepto normalmente utilizado en México, retomando la propuesta de M. A. Garretón nos parece más correcto hablar de un proceso de reforma que de transición, en la medida en que no se pasa de un régimen militar o autoritario puro a un régimen democrático (Garretón, 1995: 43).

37 Se abandonó la idea de que estas secretarías fueran “la cabeza de sector” con la responsabilidad de definir las políticas sectoriales y coordinar las acciones de las demás instituciones gubernamentales.

38 En 1994, la SARH, a pesar de la cerrazón de la banca privada para facilitar sus datos, logró realizar un seguimiento de la cartera vencida e intentó mediar para facilitar la aplicación del SIRECA. Sin embargo, la banca privada nunca permitió su intervención en los procesos de renegociación.

39 Con otras palabras el gobierno priísta asume claramente esta situación cuando dice que la disminución de la votación a su favor se debe a la aplicación de las políticas de ajuste.

40 A partir de Salinas de Gortari el gobierno implementa, a través de los gobiernos de los estados o de sus propias dependencias, programas especiales para grupos sociales específicos con el objetivo de disminuir el nivel de los conflictos a nivel local. En el caso de la cartera vencida, por ejemplo, el gobierno concedió mejores condiciones de pago en Sinaloa y Sonora; en Zaca-

tecas se condonaron adeudos que los agricultores debían a la Compañía de Luz y se ofrecieron mejores condiciones en la aplicación del SIRECA; en Jalisco El Barzón-Confederación resolvió parte de su deuda negociando directamente con Hacienda, etcétera.

41 Aunque enfatizamos sobre la politización del ciudadano, en su concepción republicana el ciudadano existe sólo en función de su relación con la política.

42 Lechner concluye, siguiendo la lógica del pensamiento neoliberal que: "...Si no hay otro principio normativo que la moral del mercado y si, por tanto, son legítimas las exclusiones producidas por la mecánica mercantil, entonces efectivamente se puede prescindir de la política..." (Lechner, 1993: 63-75).

43 Agrega Lechner: "...El análisis anterior hace pensar que la demanda de democracia en los años ochenta expresa fundamentalmente una demanda de comunidad. Parece anacrónico volver sobre esta noción tradicional pero ella tiene en América Latina una intensidad particular... El mismo proceso de modernización que disuelve los antiguos lazos de pertenencia y familiaridad, recrea demandas de sentido y de identidad colectiva (...). Lo que denomino demanda de comunidad se nutre de deseos y temores que nos remiten a las necesidades de sociabilidad y seguridad, de arraigo social y pertenencia colectiva, en suma, a un sentimiento de certidumbre compartida. Dicho en términos generales, la demanda de comunidad pareciera cristalizar una búsqueda de sentimientos compartidos. Podemos hablar de una "solidaridad posmoderna" en el sentido crítico de que se trata más de una comunidad de sentimientos que de intereses (...). Si mi intuición es correcta, nos encontramos ante un cuadro problemático (porque): la democracia pareciera estar motivada por un anhelo comunitario (...) ¿pueden las instituciones y los procedimientos democráticos, necesariamente formales, dar cuenta del sentimiento de comunidad como su base subjetiva de legitimidad?" (Lechner, 1993: 70-72).

44 Como lo explica en un comunicado del 9 de marzo de 1997, busca renovar la democracia social junto con la democracia política: "...Compañeras y compañeros, a finales de 1996 el Consejo Nacional de nuestra organización acordó participar en la contienda electoral que se realizará el próximo mes de julio. Lo hicimos así para sumarnos y fortalecer ese gran anhelo de cambio y estabilidad que hoy está presente en la mayoría de los mexicanos. Lo resolvimos así para impulsar un gran movimiento político-legislativo que, desde la sociedad y desde el ámbito parlamentario, *impulse las transformaciones legales y constitucionales que hoy son reclamadas por la sociedad en el ámbito de la economía y de la política*, en materia de impartición de justicia y de seguridad pública (...). Queremos estar en el proceso electoral no para dirigirnos a la clase política tradicional, sino a las fuerzas de la producción y del trabajo, de la juventud y de las mujeres. Queremos estar allí para formar una nueva clase política dirigente, *un nuevo acuerdo social, un nuevo espíri-*

tu de servicio. Vamos a construir esta fuerza que reconstruya las instituciones de la República, que sin excluir, haga coincidir las necesidades del mercado con un estado social cada vez más fuerte que invierta más en el futuro y dé más oportunidades de vida y de producción...”.

45 Por lo tanto ya no le corresponde resolver todos los problemas de la sociedad, sino coordinar las acciones entre los diferentes subsistemas sociales (Luhmann, Niklas 1991).

46 El voto de intercambio entendido como un voto clientelar otorgado para obtener ventajas personales (o gremiales); el voto de opinión entendido como un voto otorgado para defender cierta posición ideológica, cierta visión de la sociedad, sin buscar beneficios inmediatos. Sobre estas definiciones se puede ver, entre otros, a Bobbio, 1996: 40 y 155.

47 Sobre este tema de la definición de la democracia, o mejor dicho de qué debe ser la democracia, existe una amplia polémica. Retomando conceptos propuestos por Schmitter podemos distinguir dos posiciones extremas: la democracia que consiste en tener procedimientos (reglas e instituciones) que permiten una competencia clara y equitativa entre partidos, sin pretender defender los intereses de las organizaciones sociales (democracia de procedimientos); o la democracia que consiste en defender principios de justicia social y por lo tanto supone establecer una estrecha relación entre los partidos y la sociedad civil (democracia de principios). Creemos que la transición hacia la democracia en México se inscribe en el contexto de esta segunda opción.

Organizaciones e integración en el campo peruano después de las políticas neoliberales

Alejandro Diez Hurtado *

Uno de los principales rasgos del espacio rural peruano contemporáneo es la coexistencia de múltiples organizaciones. Además de las comunidades y las organizaciones religiosas, de larga data, hay hoy en día una miríada de nuevas organizaciones y formas de asociación ocupadas en las tareas y funciones más diversas, desde supervisar el funcionamiento de una escuela hasta construir un canal de irrigación, pasando por la participación en campeonatos deportivos, el control de la circulación de bienes y personas, el funcionamiento de huertos o piscigranjas, y la alimentación infantil. Ellas interactúan cotidianamente no sólo con las comunidades, sino también con los municipios, las parroquias y las autoridades locales.

Este nuevo escenario rural, organizacionalmente multiforme, es muestra de una sociedad fragmentada en múltiples identidades y grupos de adscripción. Con ello, los habitantes del espacio rural se parecen a los de las ciudades (de hecho, por la movilidad de la población muchas veces son los mismos), pero sobre todo nos plantean nuevos interrogantes. Por el lado de las nuevas organizaciones podemos preguntarnos sobre su diversidad, su funcionamiento y su sostenibilidad. También nos interesa qué pasa con las antiguas formas de organización en el nuevo contexto en el que se mueven, sujetas a la “competencia” de las nuevas asociaciones especializadas.

Pero la pregunta mayor compete a las formas de articulación o de integración de las múltiples asociaciones existentes y a las formas de agregación institucional

* Doctor en antropología social y etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS Paris, 1996). Actualmente coordinador de la especialidad de antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y presidente del Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), asociación de investigadores que reúne a los especialistas peruanos de diferentes disciplinas alrededor de la problemática agraria.

entre organizaciones, a su interlocución con otros agentes externos, pero sobre todo a la existencia de proyectos comunes: tres vías que conducen a prácticas o procesos mayores que el espacio local donde actúan las asociaciones mencionadas.

En el campo peruano actual no existe un movimiento que articule sostenidamente a las organizaciones de base. Hay políticas de estado alrededor de la conservación de aguas y suelos, programas de extensión masivos y superficiales, y titulación de tierras (agregando muchas veces su cuota de asociacionismo adicional al ya existente). Hay también intentos de concertación por parte de grupos de ONGs y algunas organizaciones y gremios, generalmente en torno a temas como la comunidad o a problemas como la minería, el medio ambiente o la titulación de tierras. Hay, finalmente, gremios empresariales interesados en clarificar las políticas agrarias. Pero el mecanismo de integración más difundido es rural y urbano, y se funda en una apuesta más o menos consensual por los municipios como instancia de articulación por lo menos del espacio local, congregando a distintas organizaciones e instituciones en torno a políticas de desarrollo que beneficien al conjunto. En esta apuesta, las versiones locales de los gremios o de los partidos políticos, e incluso de los poderes del estado, son supuestamente un actor local más.

Este trabajo recorre el itinerario de las problemáticas planteadas. Es un artículo más descriptivo que analítico, y se funda en generalizaciones más o menos informadas (y más o menos cautas) en el intento de describir algunos procesos y tendencias.

El texto está organizado en tres partes. La primera es una lectura de los procesos experimentados en el campo peruano después de la Reforma Agraria, dando énfasis a los que competen a la movilidad de la población, la difusión de demandas ciudadanas y los cambios económicos derivados por la inclusión en la economía de mercado. La segunda parte se centra en el análisis de las organizaciones de base. En primer lugar de la comunidad campesina y su circunstancia contemporánea, y luego de las nuevas formas de organización surgidas en los últimos años. El análisis se centra en el funcionamiento y la composición de las mismas. Finalmente, la tercera sección se refiere a las formas de articulación de los espacios rurales, de las experiencias municipales y de algunas de las otras fuerzas y formas de asociación que interactúan en el espacio rural peruano.

Una lectura de los procesos sociales en la sociedad rural

Abusando de la generalización y de la brevedad, se puede decir que el espacio rural peruano experimenta un acelerado proceso de modernización¹ expresado en dos componentes: la movilidad de la población combinada con la democratización de la sociedad rural, y la expansión de una economía de mercado y sus secuelas sobre la propiedad y los comportamientos económicos.

La influencia de una economía fundada sobre leyes del mercado modifica la base de reproducción de las familias y los grupos, y parece estar cambiando las relaciones tejidas entre los intereses individuales (léase familiares) y los intereses colectivos.

La movilidad de la población desde hace varias décadas viene alterando significativamente la relación campo-ciudad: ahora, los pobladores rurales juegan su futuro tanto en su pueblo de origen como en las relaciones que ellos mismos o sus parientes mantengan, o puedan mantener, con la villa o la ciudad más cercanas. Con ello, las diferencias clásicas entre campo y ciudad y entre espacios urbanos y rurales, evidentes en el espacio físico, se hacen más tenues a nivel de la población, que cada vez más pertenece a ambos mundos.

Todos estos procesos, sumados a una serie de cambios en los comportamientos cotidianos y en las mentalidades de los pobladores rurales, confluyen en una cada vez mayor integración de la sociedad rural a los procesos nacionales, y configuran un nuevo escenario aún inestable, entre cuyos rasgos podemos contar: el predominio de la pequeña propiedad; la existencia de una población móvil; las relaciones fluidas, aunque desiguales, entre lo urbano y lo rural; la configuración de diversos espacios regionales con procesos y ritmos diferentes; la existencia de una miríada de organizaciones, instituciones y actores marcados por la heterogeneidad; una gran diversidad en las opciones de los individuos; la ambigüedad en las relaciones sociales y de poder y otros (Diez, 1999a)².

El análisis siguiente se encuadra en tres *a priori* que es importante explicitar. El primero es el convencimiento de que la interrelación entre lo urbano y lo rural es cada vez mayor y más importante. El segundo, la impresión de que el imaginario social de los habitantes rurales no es el mismo que el de sus padres. El tercero es una opción metodológica: creo que la unidad de referencia para el análisis de la sociedad rural es el espacio regional, en tanto ámbito afectado más o menos homogéneamente por procesos más globales.

Muy gruesamente, y en particular, quisiera llamar la atención sobre tres componentes del acelerado proceso de modernización que el espacio rural peruano experimenta desde hace tres décadas. Dichos componentes son: la democratización de la sociedad rural y el reclamo por espacios de ejercicio de ciudadanía; las manifestaciones rurales de la expansión de la economía de mercado; los cambios en la mentalidad y en los comportamientos cotidianos de los pobladores rurales.

Movilidad y democratización en la sociedad rural peruana

Las mentalidades y los comportamientos de los pobladores rurales han cambiado. Sus expectativas son diferentes a las de sus padres, y parecería que tienen mayores posibilidades para intentar satisfacerlas. La apariencia cambia: vesti-

menta y calzado, hábitos alimenticios, gustos musicales; pero también las creencias, identidades y solidaridades se modifican o se redefinen. Al mismo tiempo que la cultura se globaliza (por decirlo de alguna manera), se observa también la revitalización o la creación de manifestaciones localistas o regionalistas.

Por otro lado, la incapacidad del espacio rural para sostener una población cada vez más numerosa, sumada a los deseos de progreso y de mejora en sus condiciones de vida de los campesinos, aceleran su desplazamiento hacia las ciudades. Como resultado de ello se constituye una población sumamente móvil, que no sólo se establece en la capital y en las ciudades intermedias y hace retroceder el porcentaje de habitantes rurales en el total nacional, sino que continúa desplazándose constantemente de un lugar a otro. Según el último censo, la población rural crece más rápido que la superficie agrícola pero más lento de lo que crecen las ciudades, por lo que si bien en el total nacional su peso relativo es cada vez menor, la presión sobre la tierra continúa aumentando.

En términos de comportamientos, la emigración no es sólo una constante sino ante todo una de las posibilidades dentro del abanico de opciones de los habitantes del medio rural. En algunas zonas del Cusco es de hecho la primera opción, seguida por la educación de los hijos y luego por la permanencia en la chacra y por la seguridad (Vargas, 1996). En otros casos, el desplazamiento individual, familiar o colectivo -permanente, temporal o estacional- es una condición para la reproducción social, un comportamiento condicionado ya sea por razones laborales o por simple sobrevivencia (Urrutia, 1996; Coral, 1995). En el primer caso se hallan los grupos de campesinos que no tienen tierra o cuya tierra no es suficiente para asegurar su reproducción y la de su familia; en el segundo, los desplazados por la violencia subversiva de las dos últimas décadas.

Para buena parte de la población rural, la migración es una experiencia vivida en la mayoría de los casos para más de la mitad de la población, como en Huaraz, donde 67% migra o ha migrado, o en Condesuyos, donde lo ha hecho el 80% (Montes, 1996). Según la encuesta nacional de hogares, el 99% de la población hace uso de algún medio de transporte y el 15,2% viaja; de éstos, el 27,5% lo hace por trabajo³. Más allá de las cifras, la facilidad en el transporte y el desplazamiento de la población permiten una relación más fluida entre espacios urbanos y espacios rurales. La población que retorna introduce una serie de cambios tanto en los patrones de autoridad, particularmente merced a su mayor nivel educativo, como en los patrones tecnológicos; pero sobre todo en los hábitos de consumo: al respecto, las preferencias, al menos al nivel pre-electrónico, parecen ser cada vez más “urbanas”.

Los pobladores rurales se desplazan a las ciudades y las costumbres urbanas permean al campo. Con las personas se trasladan e interactúan culturas diferentes (para llamar de algún modo al cúmulo de usos y costumbres, artefactos, preferencias y gustos, comportamientos y actitudes, imaginarios y valores, etc. que

los migrantes llevan de ida y/o vuelta). Ambos espacios se compenetran mutuamente, y poco a poco muchos límites desaparecen (particularmente en lo referente a la dotación de servicios). Consecuencia y muestra de ello son las demandas por servicios, que provocan la creación de comités ad hoc para solicitarlos, implementarlos o administrarlos, jugando con todas las oportunidades posibles, buscando aprovechar sobre todo al Estado.

No es que los pobladores rurales hayan optado por la ciudad en desmedro del campo: aunque con pesos desiguales, han optado por las dos posibilidades. La modernidad, por lo menos en algunas de sus características más difundidas (aún no la postmodernidad de Internet y la globalización), ha tocado por igual ambos espacios. No se puede pensar más en la oposición rural/urbano como pasado/futuro ni como tradicional/moderno.

La consecuencia política de la emigración es una mayor demanda de la población, primero por la no-exclusión y luego por la participación en los espacios de decisión local. El proceso de democratización de la sociedad rural y los cambios en los comportamientos políticos se enmarcan en el proceso general de integración de la sociedad rural a la nacional, aunque a un ritmo más lento y algo rezagado en relación a los espacios urbano-marginales. Sin pretender dar cuenta de todas sus manifestaciones, me limitaré a dos de ellas: el ejercicio de elección (más o menos democrática) de representantes, y la proliferación de nuevas organizaciones. Hechos que se enmarcan en un proceso de redefinición de poderes en medio del cual la pretensión de integración y participación de la población se contraponen a la pretensión de autonomía, lo que dificulta la formación de proyectos comunes que involucren a amplios sectores.

No hay duda de que la proclamación del derecho universal al voto y la realización continuada de elecciones para presidentes, representantes al Congreso y alcaldes, así como la posibilidad de acceder eventualmente a algunos cargos de poder local, han contribuido a modificar los comportamientos políticos de los habitantes del espacio rural. Los pocos trabajos existentes sobre el particular muestran, por ejemplo, que al nivel de la participación electoral los habitantes del espacio rural siguen las mismas tendencias del sistema político nacional. Ello no impide que acumulen las tasas más altas de votos blancos y nulos: el doble del promedio nacional y el cuádruple del índice registrado para Lima (Monge, 1997)⁴.

La demanda por derechos políticos tiene su contraparte en la proliferación de una miríada de organizaciones de todo tipo, creadas ya sea para gestionar la solución de algunas necesidades básicas (desde servicios hasta protección), para el desarrollo de algunas actividades productivas, o para canalizar protestas y descontento. El espectro de estas organizaciones cubre desde los comités del vaso de leche hasta las asociaciones de productores, y desde las comunidades campesinas hasta los comités de desarrollo y las empresas informales. La explicación de este fenómeno va más allá de la insuficiencia del Estado, y no creemos que tenga que

ver con el desarrollo de derechos ciudadanos o con un incremento de la ciudadanía. Nos parece más bien parte de un nuevo escenario en el que interactúan múltiples actores con necesidades e intereses diversos. Creemos que se trata de una manifestación de un nuevo orden social en el que nos movemos: diverso, multi-forme, y aparentemente caótico.

En las últimas décadas se habría abierto y cerrado un ciclo en el comportamiento y las funciones de las organizaciones rurales: desde la constitución de asociaciones de corte reivindicativo, capaces de organizarse a nivel macro mediante la articulación en gremios de mayor alcance, por lo general altamente politizados, se llegaría más tarde a una crisis de representación que provocó la crisis y caída de estos últimos y la fragmentación de muchas unidades de base (hoy, más numerosas que antes, más divididas que nunca). En el espacio rural peruano hay más organizaciones y menos proyectos comunes (una paradoja si tenemos en cuenta que siguen existiendo necesidades comunes y que quizás hoy se requiere más que nunca de la concertación), y por lo tanto menos centralización de organizaciones. El ejemplo más claro de ello son los movimientos alrededor de los derechos por tierras: si durante los años sesenta y setenta las organizaciones agraristas levantaron un movimiento consistente que comenzó por las movilizaciones de protesta, siguió con las tomas de tierras y llegó hasta las luchas por los precios, hoy no hay quien sea capaz de movilizar a los productores rurales alrededor de problemas que les afectan colectivamente, como la ley de tierras.

Es necesario mencionar que las décadas pasadas han sido también marcadas por el proceso de formación, crecimiento, expansión y retroceso de dos movimientos subversivos, que han ocasionado una serie de respuestas tanto por parte del Estado (en particular del ejército) como de la sociedad civil, urbana y rural. Dichas respuestas no sólo han determinado una reconfiguración del espacio, alterado la distribución poblacional en varios departamentos estableciendo una serie de relaciones diversas entre contingentes de desplazados y poblaciones originarias, y permitido la formación de nuevas formas de organización, sino que, en ocasiones, también han reforzado algunas antiguas formas de organización y permitido la reaparición de algunos comportamientos paternalistas y de corte autoritario a contrapelo del proceso general de la sociedad.

Si estamos seguros de que el proceso vivido por la sociedad rural peruana de las últimas décadas está marcado por una mayor participación de su población en el mercado, en el sistema político y en la sociedad mayor en general, no somos capaces de formular un juicio sobre las características específicas de la misma, y menos de precisar sus posibles tendencias o dinámicas a futuro. Estamos ante procesos complejos, marcados por la afirmación de lo ambiguo en las relaciones de los actores (Monge, 1994: 63). Cabe añadir que la ambigüedad de las relaciones, y en general de las múltiples situaciones que podemos encontrar, no es de ninguna manera exclusiva del espacio rural, pues se comparte por lo menos con

los espacios urbano-marginales. Es posible que la participación en la sociedad mayor que hace aparecer una sociedad rural con más opciones, sea el origen de esta situación de indeterminación e incertidumbre que se manifiesta en la organización misma de la sociedad, en la formación de espacios de poder, en sus relaciones con la sociedad mayor, e incluso en las identidades de los pobladores. Los grupos y organizaciones que surgen en el nuevo escenario no tienen necesariamente su fundamento en redes de parentesco, vecindad o paisanaje, sino en una mezcla de factores y circunstancias (entre ellas la violencia). Muchas asociaciones son o se constituyen en formas de organización permanente, otras tienen una vida más efímera, otras existen sólo esporádicamente, de acuerdo a si son o no necesarias. Además de una serie de funciones internas y específicas, casi todas estas organizaciones son al mismo tiempo instancias de defensa y de negociación con el Estado que, dicho sea de paso, muestra también muchas veces un comportamiento errático e igualmente ambiguo.

A raíz de todo esto se generan nuevos espacios y formas de ejercicio y organización del poder o se redefinen los antiguos, todos llevando el mismo sello de la ambigüedad: el clientelismo y la pretensión de autonomía coexisten contradictoriamente, el liderazgo oscila entre la democracia y el autoritarismo, y ello es probablemente válido tanto para las presidentas de los clubes de madres como para los presidentes de las comunidades o los alcaldes. La ampliación de la base de la participación electoral, pero sobre todo la participación en organizaciones, ha supuesto una serie de reajustes políticos y el redimensionamiento de los poderes existentes (Quintín, 1994). A nivel general, pero sobre todo local, surgen nuevos conflictos o se modifican los antiguos. Nuevos grupos de poder se apropian de los municipios provocando diferencias entre éstos y las comunidades o entre la iglesia y los otros poderes locales (Montes, 1996; Mejía y Vargas, 1997). Y sin embargo, el reajuste de poderes no parece haber cambiado significativamente el imaginario del poder: en el ejercicio de la autoridad y la dirigencia, se seguiría combinando un criterio de democracia en los mecanismos de elección (al interior) con una práctica muchas veces autoritaria en la toma de decisiones (en la relación entre miembros y hacia el exterior). Por otro lado, el poder sigue siendo “masculino” y “urbano” (Harvey, 1991), y se podría añadir “blanco” o “misti”. Todo lo más, se podría hablar de una cierta relativización de estos rasgos en el ejercicio del poder y de la autoridad en el espacio rural.

El desarrollo del mercado y los comportamientos económicos

El segundo gran proceso en el medio rural es el avance, al parecer incontenible, de la economía de mercado. En las últimas décadas se viene produciendo una cada vez mayor circulación en volumen, intensidad y cobertura de una serie de productos y de insumos, pero también de capital y de mano de obra, lo que a la larga se ha tra-

ducido en una cada vez mayor participación de los agentes económicos rurales en el “mercado”. Este proceso produce mayor diferenciación en el campesinado y entre los pequeños productores agrarios, y también la diversificación de las actividades de los pobladores rurales, quienes se dedicarían cada vez menos a la agricultura. Dentro de este proceso nos detendremos en algunos componentes vinculados al problema que nos ocupa: la propiedad de la tierra, la articulación de los procesos productivos, y los comportamientos económicos de los pobladores rurales⁵.

Más allá de lo controvertido de sus resultados en los planos productivo o de expansión de la frontera agrícola, el proceso de transformación de las formas de propiedad, iniciado desde la década del cincuenta pero acelerado por la Reforma Agraria y sus secuelas, es sin duda determinante en el proceso de transformación de la sociedad rural. En medio de éste, el ciclo de luchas por la tierra habría terminado con la victoria de los campesinos, de los ex-trabajadores de las haciendas, y sobre todo de las (nuevas) comunidades, que a la vuelta de los años ‘80 controlan la mayor parte del territorio agrícola del país. El fracaso, la disolución, la reconfiguración y sobre todo la parcelación de las empresas asociativas, sumados a la generalización de la apropiación/usufructo individual de las parcelas, generarían la expansión de una economía campesina parcelaria que supondría no sólo la primacía y el crecimiento de la agricultura sobre la ganadería, sino también la generación de procesos de diferenciación.

El 74% de los campesinos del país tiene predios de menos de 10 hectáreas (Eguren, 1992). La pequeña propiedad es, al menos temporalmente, la forma mayoritaria de apropiación y usufructo del suelo agrícola, y con ella se ha impuesto también la pequeña producción sobre la grande o mediana producción⁶.

El destino de las cosechas de las pequeñas parcelas se orienta cada vez más hacia el mercado: en proporciones variables y crecientes, parte de la producción de los parceleros está destinada a su venta desde antes de la siembra. Por supuesto que los mecanismos de articulación y los caminos que llevan a los productos hasta sus consumidores son variados, de acuerdo al grado de posibilidades ubicadas entre la venta directa por los productores y la participación de agentes agroindustriales o agro-exportadores. En la práctica, son sumamente imperfectos y favorecen por lo general a los intermediarios, como lo muestran por ejemplo los casos del mango y del banano (Gómez, 1995; Marañón, 1995). En general, las comunidades serranas se hallarían más cerca del primer polo, mientras que los productores costeros lo estarían del segundo. Es sobre todo en la costa donde la producción para el mercado se halla más vinculada a la consolidación de agroindustrias, que muchas veces organizan la circulación económica (¿y social?) local y regional, absorbiendo parte de la producción para su transformación primaria o secundaria y eventualmente para su exportación.

¿Produce la expansión de la economía de mercado, de carácter fundamentalmente mercantil, un cambio en la mentalidad y los comportamientos de los pro-

ductores rurales? ¿Produce el mercado comportamientos de tipo empresarial en el medio rural? Si lo hace, ¿qué tan generalizados son éstos? En general, en algunas zonas, particularmente de costa, parecería encontrarse evidencia, si no de racionalidades empresariales, al menos de uso de instrumentos propios de economías de mercado. Es el caso, por ejemplo, de las pequeñas empresas de servicios o de algunos comités de productores. Resulta significativo que estos comportamientos empresariales se encuentren sólo en determinados grupos⁷, y no es casual que detrás de buena parte de ellos se halle la labor de algunas ONGs. No es aún el tipo de comportamiento que se puede encontrar en algunos migrantes (artesanos, por ejemplo), que tienen capacidad de espera, de posponer necesidades inmediatas -incluso en base a privaciones- con la finalidad de obtener un beneficio futuro.

Si los primeros estudios de los comportamientos campesinos desde la perspectiva de la economía institucional muestran la existencia y racionalidad de una serie de instituciones de organización para la producción, los actuales trabajos insisten en la ausencia, y sobre todo en la necesidad, de una cultura del “contrato” -para la comercialización, pero también para la producción y cualquier otra transacción-, reclamándola como requisito para la implementación de un desarrollo capitalista moderno en el campo.

En cualquier caso, colectiva o individualmente, los pobladores rurales parecen haber optado por integrarse al mercado y sujetarse a las nuevas exigencias económicas como estrategia de desarrollo inevitable, lo que supone elegir productos vendibles, competir y mejorar la productividad. Y para ello es necesario invertir: los campesinos declaran que si tuvieran más dinero podrían mejorar lo que ya tienen⁸. Sin embargo, se reconoce que la agricultura no es la mejor opción. El estudio de Gonzales de Olarte (1996) sobre comunidades del norte (Lambayeque, Piura) y del sur (Tacna) muestra que, si pudiera, la mitad de los campesinos dejaría la agricultura para dedicarse al comercio, precisamente la única actividad rural en la que parecen observarse comportamientos individuales con cierta visión empresarial.

Instituciones y organizaciones en el espacio rural

El retroceso de la comunidad y el auge de las asociaciones especializadas

Para el análisis de las organizaciones rurales, la comunidad campesina es un punto de partida obligado. Es una de las organizaciones más antiguas, y sobre la que el conocimiento acumulado, aunque muchas veces confuso, es considerable. No comparto la idea según la cual la comunidad encerraría los gérmenes de algún principio de organización fundamental y andino del que participarían todas las demás formas de organización del campesinado peruano. Me parece más interesante y central preguntarnos en cambio sobre su estructura y organización, o

sobre si cumplen o no nuevas funciones en el contexto actual. En general, juego con la hipótesis de que la comunidad ya no es más la única instancia o la principal instancia de organización de la vida rural. Creo que ahora es sólo una de las múltiples organizaciones que se pueden encontrar en la sociedad rural y que forman parte del nuevo escenario.

No existe un trabajo de síntesis que permita una generalización ordenada sobre las comunidades peruanas (Urrutia, 1992). La década del ochenta se abrió con la discusión sobre la naturaleza y características de la comunidad como sujeto sociológico. Algunos estudios formularon por esos años enfoques de análisis sugerentes, en que proponían aproximarse a las comunidades desde la perspectiva del mercado interno tomando en cuenta la tensión entre lo familiar y lo comunal. La “co-determinación” de la organización comunal terminó imponiéndose como marco analítico, incluyendo el papel del conflicto en la regulación de la estructura comunitaria (De la Cadena, 1986). La comunidad es una institución que combina funciones de regulación económica y social en relación al medio, a sus recursos y a sus miembros, y que brinda a los agricultores una instancia de articulación con la sociedad mayor.

La comunidad sigue siendo la forma de organización más difundida y numerosa en el espacio rural peruano. Según las cifras del censo nacional agrario de 1993 existirían 5.168 comunidades, aunque probablemente sean más⁹. Sabemos además que se hallan distribuidas de manera desigual a lo largo del territorio, siguiendo una regla de mayor densidad de comunidades por departamento conforme avanzamos de norte a sur (los departamentos de Puno y Cusco son los que concentran mayor cantidad).

Existe gran diversidad, y bajo la misma etiqueta de comunidad campesina albergamos una serie de instituciones diferentes en su constitución, tamaño, historia, forma de organización y proceso político. No hablamos de lo mismo cuando citamos comunidades de Huancayo, de la sierra de Lima, o de Piura. Para Huancayo, en la sierra central hablamos de agrupaciones con modernas estructuras de gobierno, en las que se conservan faenas comunales y cierto control sobre las tierras, cuyo territorio coincide con el de un distrito con cuyos representantes comparte el poder bajo reglas poco claras (Cueva, 1987). Las comunidades de la sierra de Lima combinan formas modernas y tradicionales de gobierno, cultivan para la capital del país, tienen dos terceras partes de su población emigrada y un alto número de comuneros no registrados, además de ser muchas veces menos consistentes y sólidas que las organizaciones de regantes. Las comunidades de Piura, en cambio, han perdido hace mucho tiempo sus formas de organización tradicionales, y tienen juntas directivas muy débiles, que dependen en gran medida de la personalidad de sus dirigentes; no tienen límites sociales fijos, y sus linderos parecen diluirse en medio de la multiplicidad de relaciones de vecindad entre las familias (Diez, 1999[b]).

La función económica de la comunidad nos remite a la propiedad de la tierra. En las últimas décadas ha cambiado la relación comunidad-territorio. Si en los '70 era necesario conseguir la tierra a como diera lugar, muchas veces por medio de tomas violentas y más tarde por la vía legal y colectiva, en los noventa parece imponerse la vía individual. El boom de la comunidad como instancia representativa a la víspera de la promulgación de la ley (1987), sancionada por la masiva participación en los Rimanacuys, se ratificaba por el principal reclamo de los comuneros de todo el país: "profundización" de la Reforma Agraria y reconocimiento y titulación de comunidades (Cera las Casas, 1987). Es posible que los actuales reclamos por la titulación individual de tierras no sean sino la continuación lógica de las anteriores luchas por la tierra, y que la propiedad individual haya sido desde un inicio el objetivo de muchos campesinos aparentemente comunitaristas. Pero no sólo hay cambios en la propiedad: en numerosas comunidades los espacios comunes desaparecen en desmedro del usufructo sectorial o familiar, mientras no pocas juntas de regantes se autonomizan de la dirigencia central. Estaríamos frente a un proceso de pérdida del tradicional rol comunal de control y regulación del uso de los espacios que putativamente le corresponden.

Parece estar claro que la comunidad no es ni el principal agente económico ni la institución llamada a asegurar la reproducción de sus miembros. Más que una institución para la producción, la comunidad sería un espacio de coordinación, interacción y representación entre múltiples unidades familiares, y por lo tanto una institución fundamentalmente política¹⁰.

Sin embargo, los trabajos recientes sobre comunidades la muestran más bien como una institución persistente pero en crisis permanente. Aún cuando no hay una definición unívoca de comunidad, hay una contradicción aparente entre lo que se supone que debería ser y lo que se encuentra sobre el terreno: a la propiedad comunitaria, la homogeneidad social y una dirección comunal armónica y legitimada, la realidad opone una serie de formas de usufructo privado de las tierras, gran diferenciación entre comuneros, y un proceso de deterioro de la representatividad de las dirigencias comunales.

La organización comunal se presenta crítica en relación a dos fenómenos: la crisis de las dirigencias y del gobierno comunal, y su pérdida de legitimidad como instancia representativa de los intereses de los comuneros. Las etnografías de los noventa reportan la falta de autoridad de los directivos o la dificultad para encontrar candidatos para las elecciones comunales, y hay quienes hablan de desestructuración de la comunidad (Seligman, 1992). Sospecho que la situación de las dirigencias depende en gran medida de su organización y de su peculiar combinación de cargos e instancias: todas las comunidades tienen, al menos formalmente, una directiva comunal de acuerdo a lo estipulado por la ley de 1987, que comparte el espacio con los responsables de otras organizaciones existentes al interior de las mismas y algunas veces también con algunas autoridades tradiciona-

les. En algunas directivas comunales se observan cambios en los patrones de liderazgo. Los criterios de edad, parentesco y conocimientos estarían siendo reemplazados o complementados con la capacidad de lectoescritura, y sobre todo de insertarse en redes sociales más amplias al exterior de las comunidades, entre las que se cuentan las afiliaciones políticas (Revesz, 1992).

Paralelamente encontramos una valoración diferente de lo comunal y del sentido de la comunidad: al lado de aquellas regiones donde ésta sigue siendo la institución de referencia, como en el sur andino (Cusco o Ayacucho), están aquellas -como Carhuamayo en la sierra central- donde la comunidad pierde terreno frente al distrito. Por lo demás, las visiones sobre lo comunal pueden diferir incluso de una generación a otra: son los viejos quienes asocian a la comunidad con el ayllu o los grupos de trabajo. En términos concretos, la “minusvaloración” de la comunidad se traduce en la disminución de las instancias colectivas: varios autores señalan la tendencia a la disminución de la participación en las faenas comunales, y también en la frecuencia y asistencia a las asambleas (Plascencia, 1994). La comunidad parece ser una organización en crisis, y no la instancia más representativa del conjunto de los productores rurales, quienes muchas veces optan por otras formas de asociación, provocando la disminución del número de comuneros inscritos en el padrón, como sucede en la sierra norte o central (Segura *et al*, 1990; Broujere, 1992). Parecería que la multifuncionalidad propia de las antiguas comunidades, que fuera otrora una de las razones de su éxito como institución posibilitando su sobrevivencia por largos períodos de tiempo, se vuelve hoy en día contra ella misma en un contexto que exige especialización.

Asistimos pues a la proliferación de una serie de nuevas organizaciones al interior de las comunidades. Estas pueden estar sujetas e integradas a la administración y la directiva comunales, o no estarlo y coexistir paralelamente, en cuyo caso son vistas muchas veces como organizaciones populares y no comunales¹¹. Estas organizaciones reúnen a los campesinos y productores agrarios en torno a una serie de funciones para la producción o la comercialización de bienes, productos y servicios. Sus miembros no sólo no integran comunidades, sino que sistematizan su producción -pero también sus relaciones sociales- bajo formas organizacionales nuevas. A ellas se les encarga una serie de acciones de carácter colectivo en diversas fases del proceso de producción, así como de la interlocución con agentes externos.

No se sabe cuántas organizaciones agrarias existen en el espacio rural. Nunca se ha hecho un censo de ellas. En 1993, el 10% de las unidades agropecuarias del país declaró en el censo pertenecer a algún comité de productores, y 5% aseguró pertenecer a alguna asociación de productores; un 39% declaró integrar alguna junta de usuarios (de riego).

La mayor parte de estas organizaciones para la producción que se encuentran en el espacio rural, son de creación relativamente reciente. La mayor parte de los comités o asociaciones tiene en promedio 5 y 10 años de actividad, respectiva-

mente. Cabe mencionar que las formas de organización más antiguas son las cooperativas y sus centrales, creadas en su mayoría en la década del setenta. Un inventario reciente a partir de una muestra de estas organizaciones muestra que su número actual es reducido (Glave y Fort, 1999).

La creación de estas organizaciones responde ciertamente a una necesidad de acción colectiva, pero también a la intervención de diversos agentes de promoción externos: tanto el Estado, sus agencias y programas especiales, como diversas ONGs que operan en el espacio rural, promueven la organización de nuevos grupos de trabajo para la implementación de sus políticas o proyectos, generando muchas veces paralelismo en las acciones y siempre la multiplicación de instancias de articulación de los productores.

Distribución de asociaciones de productores (sobre muestra)

Tipo de Organización	Número	Porcentaje
Comité	20	16%
Empresa comunal	47	38%
Asociación	28	22%
Cooperativa	6	5%
Central de Cooperativas	4	3%
Fongal	4	3%
Empresa privada	7	6%
SAIS	1	1%
Otros	8	6%
Total	125	100%

Fuente: Glave y Fort, 1999.

La mayor parte de estas organizaciones se dedica a diversas actividades vinculadas a la producción (producción *strictu sensu*, comercialización, asistencia técnica o crédito; varias cumplen más de una función). Las actividades de corte reivindicativo o político son señaladas por ellas mismas como una actividad secundaria (Heredia, 1998).

Sin embargo, los nuevos comités o asociaciones no llegan a constituirse en el imaginario colectivo como una instancia de organización estable, constante, sostenible y, sobre todo perdurable en el tiempo. Dicho en otras palabras, no logran desplazar a la comunidad o al municipio como institución de organización del espacio rural.

Intermezzo: el ciclo de las rondas o las organizaciones de la emergencia de guerra

El espacio rural peruano fue (y en algunas zonas continúa siendo) el escenario de una guerra política y militar que enfrentó al Estado y la sociedad civil contra grupos subversivos en armas. Dicho proceso de más de quince años era en parte consecuencia de una situación de desgobierno, pobreza e inseguridad, que provocó respuestas diversas por parte de la población rural, la cual se organizó primero para defenderse pero también para contrarrestar el fenómeno. El gran movimiento social de esos años fue la creación de las rondas campesinas.

Para comprender las rondas hay que partir de la distinción entre rondas norteñas y rondas del centro y del sur, estas últimas también conocidas como comités de autodefensa. Las primeras, surgidas para combatir los robos y el abigeato (las más estudiadas son las de Cajamarca y Piura, en menor medida las de Ancash). Las segundas, formadas por iniciativa de los campesinos o del ejército para combatir a los grupos subversivos (principalmente en Ayacucho y la Sierra Central).

Las rondas norteñas son las más conocidas. En los últimos 15 años muchos investigadores se han ocupado de diversos aspectos de su funcionamiento, formas de organización, expansión y posibilidades políticas. Sabemos que la creación de las rondas norteñas respondió en un primer momento a la necesidad de resolver problemas de robo de ganado e inseguridad social generados por el vacío de poder dejado por la desaparición de los hacendados luego de la Reforma Agraria, y también que éstas se transformaron en una instancia relativamente exitosa, capaz de cubrir algunos vacíos en la organización de un campesinado poco integrado (comunitario) como el de la sierra norte (Gitlitz y Rojas, 1985; Starn, 1991; Huber, 1995).

Estas rondas se organizan en comités a nivel de caseríos; se agrupan en centrales zonales, comunales y distritales, las que a su vez se articulan a centrales de mayor cobertura. Su expansión se debió tanto a la necesidad de asociarse con otras para cumplir sus metas como al trabajo de autoridades, maestros o activistas políticos. Se trata de una organización campesina relativamente democrática en su base, y altamente politizada, jerárquica e incluso autoritaria al nivel de sus centrales. Se hallan por lo general en permanente conflicto con abigeos, autoridades judiciales, y policías. Han logrado imponer tranquilidad y seguridad en el campo, aunque muchas veces a costa de la aplicación de medidas de fuerza. Se han proyectado a la implementación de acciones de desarrollo comunal, con reducido éxito. En cambio, muchos de sus dirigentes han logrado proyectarse políticamente, llegando a ocupar cargos en los consejos municipales de sus distritos (Diez, 1994; Hernández Nieva, 1994).

En cambio, el paradigma de la organización de los comités de autodefensa (CADs) son aquellos formados en Ayacucho, y en menor medida en el valle del Mantaro. Su organización ha dependido del particular proceso de cada zona y re-

gión, siempre respondiendo a una particular correlación de fuerzas entre el ejército, las comunidades, y Sendero Luminoso. Parceleros del valle del Apurímac y comuneros de Huanta reaccionaron y respondieron de diferente manera y con ritmos distintos en su enfrentamiento contra Sendero Luminoso en una lucha surgida de múltiples motivaciones (incluso religiosas) en la que se produjeron coaliciones inéditas y reacomodos sociales. En el espacio que nos ocupa, la creación y la victoria de los CADs se asocian no sólo a la alianza con el ejército sino también a nuevas formas de asentamiento poblacional y control social, a la creación de nuevos núcleos de habitación con finalidad defensiva, y a la instauración de nuevas jerarquías de autoridad (Degregori, 1996)¹².

Una característica común entre las rondas norteñas y los CADs es que ambas formas de organización surgieron en zonas de débil presencia comunal, ya sea “estructural”, como en las sierras de Piura y Cajamarca, o “coyuntural”, como en Ayacucho y la Sierra Central.

En los últimos años, la derrota militar de Sendero y la restauración de la autoridad en el campo peruano parecen haber incidido en la crisis de las formas de organización surgidas como respuesta a la situación de emergencia. Las rondas norteñas no logran consolidarse como organizaciones de desarrollo, y por el contrario, se desactivan o mantienen un funcionamiento discreto en tanto instancias de control y regulación social en pequeños conflictos locales. Al sur, los comités de autodefensa pierden autonomía frente a las comunidades; la organización cuasi militar de la ronda, impuesta sobre el colectivo, termina por someterse a la autoridad comunal, que retoma sus antiguos fueros aunque con nuevas perspectivas. El ciclo de la violencia que se cierra parece también cerrar el ciclo de la autodefensa y de las organizaciones policiales y militares campesinas, que regresan a formas de organización más políticas y pacíficas.

Las regularidades entre las organizaciones locales rurales peruanas

Aunque pueden ser agrupadas en un número limitado de tipos, sin duda una de las características de las organizaciones existentes en el espacio rural es su diversidad: los pobladores rurales se integran a múltiples niveles por medio de una multiplicidad de formas de asociación heterogéneas, que cumplen una serie numerosa, aunque limitada, de funciones. Trataremos de resumir algunas características de dichas organizaciones en torno a tres problemáticas: las funciones que realizan, su organización y mecanismos de funcionamiento, y su sostenibilidad en el mediano plazo.

Aunque las funciones reales de las organizaciones no siempre están claramente definidas, no creo que sea aventurado afirmar que se viene imponiendo la idea de que una asociación eficiente debe servir para fines prácticos y tener una utilidad perceptible y reconocida para ser considerada necesaria y obtener relativo éxito. Además, si existe cierta predisposición y la intención de ampliar las fun-

ciones por parte de algunas de ellas (generalmente por intervención de agentes externos), lo normal es que las organizaciones se especialicen en alguna tarea, función o servicio. Las organizaciones de productores se ocupan de asuntos relativos a la producción, al crédito, a la comercialización o similares; las rondas se ocupan de la autodefensa, el control social y la solución de algunos conflictos; los comités “pro” se ocupan de servicios específicos (electricidad, agua, escuela).

Aunque la comunidad puede considerarse también una asociación especializada en ciertas funciones de organización de la producción y de representación política e interlocución hacia el exterior, y en particular como la institución “encargada” de los asuntos referentes a la tierra y la propiedad, es por definición -y en la práctica- una institución no especializada y de funciones múltiples. Lo mismo podría decirse de muchas asociaciones de mujeres¹³: si los comités del vaso de leche se encargan fundamentalmente de la distribución de desayunos escolares, los clubes de madres se ocupan de una serie de tareas diversas (alimentación, talleres artesanales de varios tipos, huertos y granjas, etc.). A partir de esta constatación podríamos postular una oposición entre la especialización y lo comunitario, colocando a las organizaciones en un *continuum* entre un polo más indiferenciado y más comunitario y otro de mayor diferenciación y menos comunitarismo. De un lado podría estar la comunidad de múltiples funciones, y del otro las organizaciones especializadas. Así configuraríamos la oposición entre *comunidad* y *sociedad* de los teóricos clásicos. Sin embargo, creo que la realidad no avala ni el *continuum* ni la evolución de uno a otro polo: se trata de organizaciones que existen al mismo tiempo, y que están articuladas de maneras diversas.

Además tenemos el problema de la ubicación de los municipios rurales: fundamentalmente dedicados a asuntos urbanos, tienen bajo su responsabilidad numerosas funciones relativamente especializadas (de gobierno, saneamiento, producción, etc.), pero pueden también constituirse en instancia de articulación y concertación de otros diversos tipos de organizaciones. Quizás sería entonces más apropiado hablar de división de funciones sociales, o del establecimiento específico en cada caso y región de espacios de competencia (en el sentido de “aptos para...”) de las múltiples organizaciones.

Sin embargo, y sin perjuicio de la especialización, todas las formas de asociación mencionadas comparten la triple tarea de organizar, representar y articular grupos diversos que por medio de ellas consiguen sus fines, ejercen o defienden sus derechos, y formulan reclamos o reivindicaciones. Y todo ello, tanto dentro del espacio local como hacia afuera de él.

Lo primero que salta a la vista al analizar las organizaciones rurales es que todas ellas tienen una misma “estructura” de organización y funcionamiento: las comunidades, las rondas, las asociaciones de mujeres, los comités de productores, o las asociaciones para la obtención de servicios, cuentan con una dirigencia

central (compuesta por presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales). Y todas responden a la voluntad de una asamblea general de “asociados” que tiene en principio la última palabra sobre las decisiones que competen al colectivo. Todas ellas tienen un aparato de gobierno moderno, idéntico además al de sus similares urbanas, y al igual que éstas poseen mecanismos de liderazgo que combinan la democracia de base con la imposición autoritaria en el ejercicio del poder.

Todas las asociaciones son, además, un espacio de organización intermedio entre las familias y la comunidad (entendida como conjunto humano y no como institución): por un lado posibilitan la constitución de redes sociales que articulan a los miembros de una localidad, y por otro permiten conectar a las familias comuneras con una serie de agencias y agentes externos. Estas redes no articulan necesariamente ni al conjunto de los miembros de la “comunidad” ni a los mismos individuos o familias; cada una de ellas tiene funciones específicas. Las organizaciones sirven, pues, de pivote entre lo macro y lo micro, entre el interior y el exterior de un colectivo que muchas veces es definido precisamente por ellas mismas.

La relación con lo “externo” es una constante en la descripción y análisis de organizaciones y comportamientos en el espacio rural. Agentes exógenos intervienen en la creación de organizaciones, en su regulación, en su funcionamiento, y en su evolución. No es posible comprender los cambios en la organización o funciones de las comunidades sin tomar en cuenta al Estado. Tampoco es posible analizar la creación de rondas y comités de autodefensa sin referencia a la labor de partidos políticos o del ejército. Lo mismo podríamos decir de muchos de los actuales comités de productores, y sobre todo de los clubes de madres, creados por agencias estatales o por ONGs. La relación con el exterior es constante y directa, y opera a varios niveles y en múltiples momentos en el funcionamiento de las organizaciones rurales.

Por otro lado, los cambios políticos y económicos de los últimos años han incidido de manera diferente sobre las organizaciones. En lo político, tras el ciclo de expansión de la organicidad e integración hacia arriba de las organizaciones de base (independientemente de sus contradicciones y de la politización partidaria de las cúpulas), que permitió la constitución de instancias de representación colectiva, la formulación de consensos aparentes y la elaboración de propuestas comunes, se ha pasado a un estado de desarticulación y desagregación en el que parece muy difícil la formación de consensos para ensayar respuestas colectivas de amplia cobertura frente a problemas comunes. En lo económico, en cambio, parecen abrirse brechas que brindan posibilidades al menos para cierto tipo de pequeños productores agrarios eficientemente articulados a circuitos comerciales, que se benefician de créditos bancarios palanqueados por ONGs, y que estarían gestando nuevas formas de organización con perspectivas de futuro.

La suerte y la supervivencia de las organizaciones rurales están pues ligadas no sólo a sus procesos internos, sino también a los vientos tanto de la interven-

ción externa directa como de los procesos más generales de la sociedad. Cada tipo de organización reacciona de manera diferente a estos estímulos, que son también específicos de acuerdo a la función que cumple cada uno de ellos. La comunidad se debate entre la desaparición y sus posibilidades de conversión en una instancia para la gestión de al menos una parte del proceso de producción: si pierde la propiedad de la tierra, su sobrevivencia dependerá de su capacidad de transformarse en alguna suerte de cooperativa de servicios, de constituirse en instancia de resolución de conflictos, o de afianzar su rol de representación colectiva. Las rondas campesinas parecen tener limitaciones para suplir a las comunidades allí donde éstas no existen, y son absorbidas por ellas allí donde perviven. Las asociaciones de mujeres, vinculadas la mayoría de las veces a necesidades de sobrevivencia, parecen moverse al ritmo de los *inputs* organizativos o económicos externos, y aunque se consolidan en algunos lugares, su capacidad para acumular y transmitir su experiencia es limitada, en tanto su fragilidad es aún muy grande. Las organizaciones para la producción parecen ser las de mayor auge y quizás las de mayor futuro; su éxito está hoy más que nunca estrechamente ligado a su capacidad de adaptación e inserción en el mercado, lo que supone seguir los ritmos de la modernidad económica en boga.

Las articulaciones y la integración del espacio rural

Los municipios y la disputa por la hegemonía en el espacio rural

La ley de presupuesto que concede autonomía a los municipios distritales ha cambiado significativamente su capacidad de acción, y ha provocado una serie de movimientos sociales vinculados a los poderes locales. El gobierno municipal se está convirtiendo en una institución fundamental para la intermediación con la sociedad general por la que compiten diversos grupos, unos descendientes de poderes tradicionales, y otros emergentes catapultados por movimientos de reivindicación social.

Los municipios parecen consolidarse como cabeceras de puente “urbanas” en el medio rural. Ello se traduce en la separación, cuando no en el conflicto, entre los municipios y las comunidades, estableciendo una división del trabajo y de los espacios de competencia entre lo urbano y lo rural. Esta separación deja por lo general en desventaja a las comunidades, menos amparadas por el Estado, y sin un presupuesto o ingresos regulares asignados, por lo que frecuentemente se producen conflictos de competencia entre ambas instituciones. En este contexto, la comunidad no parece ser más la instancia que regula las relaciones dentro del espacio comunal: lo normal es que las diversas asociaciones que existen en su interior no estén articuladas entre ellas. Son comunes los problemas entre organizaciones, y también entre las organizaciones y la comunidad. Ciertamente es que no sucede de la misma manera ni en el mismo grado en todas las regiones del país: en el sur andino parece conservarse cierta primacía de la comunidad, mientras que

en el norte las rondas son más importantes, y en el centro las nuevas asociaciones compiten con ella casi en pie de igualdad.

Los municipios distritales cuentan con un presupuesto asignado por el Estado, y en muchas partes del país intentan convertirse en ejes articuladores de organizaciones e instituciones, por lo menos al interior de su espacio, tratando de promover además una interlocución ordenada y unitaria hacia el exterior. Desde 1992, municipios provinciales y distritales vienen implementando procesos de concertación al interior de sus jurisdicciones. Casi todos estos procesos siguen un mismo patrón: comienzan con la realización de cabildos abiertos o reuniones en las que se convoca al conjunto de asociaciones existentes, a ONGs y otras entidades privadas, y a los representantes de aquellas agencias del Estado presentes en el distrito o en la provincia. Apartir de los primeros encuentros se crea una instancia de coordinación encargada de desarrollar una secuencia de talleres de concertación y planificación estratégica, que puede concretarse en conjunto o por medio de comisiones temáticas. En ellos se busca identificar problemas, perfilar y priorizar proyectos, y buscar la implementación de políticas comunes. Aunque estos procesos son convocados por los municipios, es frecuente que cuenten además con la asesoría de alguna ONG que trabaja en la zona, o que sean promovidos directamente por ellas.

Las experiencias y casos sobre los que existe información publicada no son muchos, pero muestran que el fenómeno se produce paralelamente en diversas zonas del país. Las experiencias son desiguales, debido a varios factores. No todas han empezado al mismo tiempo, y hay múltiples problemas a resolver: desde la debilidad de las instituciones llamadas a asegurar el funcionamiento del proceso hasta la necesidad de asegurar la continuidad del mismo (amenazada cada tres años en cada cambio de gobierno municipal), pasando por la resistencia o el bajo nivel de compromiso de algunas organizaciones para participar en el proceso, y por la resistencia de los poderes locales. Además, tratándose de procesos muy recientes, muchas veces no han sido “interiorizados” por la población, por lo que aparecen frecuentemente como externos.

Paralelamente a estas experiencias de integración al interior de los distritos, existen algunos procesos de concertación entre alcaldes distritales (reunidos por provincias pero más frecuentemente por cuencas o micro-cuencas) y también provinciales. Más que una articulación política efectiva, estos encuentros parecen constituir instancias de concertación sobre algunos problemas comunes (conservación de suelos, derechos de agua, carreteras), pero sobre todo de reivindicación de derechos frente al municipio provincial, las agencias del Estado, y el Gobierno Central¹⁴. La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), con finalidades netamente políticas de defensa de los gobiernos municipales es, a fin de cuentas, una versión institucionalizada a nivel nacional de las mesas interdistritales que pueden encontrarse en diversos espacios.

Este proceso no sería posible sin la presencia de nuevos agentes en los poderes locales. Los alcaldes y funcionarios municipales emprendedores parecen reu-

nir cuatro características: la movilidad geográfica, su condición de profesionales, su experiencia en actividades de naturaleza diferente de las que desarrollan en su gestión de gobierno y su velada vinculación con el pasado de la localidad. Se trata de gente que ha vivido fuera de la localidad o que se ha desplazado entre su espacio local y las ciudades más próximas, incluso la capital. Por lo general tienen estudios universitarios o en institutos superiores (completos o incompletos), y muchos de ellos son profesionales. Por lo general, han trabajado o ejercido cargos en instituciones u organismos diferentes al que ocupan en la actualidad, por lo que tienen una experiencia acumulada de múltiples entradas. Finalmente, aunque es posible vincularlos a la historia local, por lo menos como descendientes de hacendados, comerciantes o comuneros anteriores a la Reforma Agraria, actúan como políticos modernos, apuntando su legitimidad en el futuro prometido más que en el pasado de la localidad.

La articulación de las organizaciones en los espacios locales y fuera de ellos

Pequeños productores (organizados o no) y comuneros enfrentan un mismo problema: la falta de mecanismos, instancias u asociaciones que los articulen y les permitan, al menos a nivel regional, emprender proyectos de desarrollo tanto propios como compartidos con otras instancias sociales y económicas (empresas, gobiernos locales, ONGs, etc.)

La articulación de las diversas organizaciones agrarias de base es un reto afrontado por diversos actores: las organizaciones mismas, el Estado, los centros de promoción del desarrollo, las municipalidades, los partidos políticos, la cooperación internacional, y otros. Todos coinciden en la necesidad de articular organizaciones, pero difieren en los mecanismos que ponen en práctica para lograrlo, en el discurso político que utilizan, y en el grado de autonomía que conceden a las organizaciones.

Los resultados y los niveles de articulación son diversos dependiendo de la coyuntura, el nivel de agregación al que nos referimos, el motivo de la integración, y los procedimientos para lograrla. Por ello, abordaremos el tema por niveles de articulación: nacional, regional y microregional/local.

Los principales intentos de articulación de organizaciones agrarias al nivel nacional toman la forma de gremios, algunos con la vocación de promover o proponer políticas, pero la mayor parte de las veces para ejercer algún tipo de presión social, defenderse o demandar al Estado algún tipo de beneficios o incentivos a sus asociados (Alfaro, 1994).

En líneas generales, podemos referirnos a dos tipos: los propiamente gremiales, y los empresariales. Los primeros son por ejemplo la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, o la Asociación Nacional de

Parceleros, que articulan diversos gremios campesinos como comunidades, rondas y algunos comités de productores, además de organizaciones y gremios de carácter regional. Los segundos son organizaciones como el Fondo Nacional Ganadero Lechero o la Organización Nacional Agraria, que agrupan a pequeños y medianos empresarios agrarios y a asociaciones de productores especializados por producto (arroceros, cafetaleros, etc.)

A lo largo de la última década, ante la ausencia del Estado como promotor directo del desarrollo agrario (en la medida en que redujo drásticamente su intervención vía ministerio de agricultura) y por lo tanto como interlocutor privilegiado, los gremios reivindicativos no se adaptaron con suficiente rapidez, perdieron legitimidad y parte de su razón de ser, y entraron en un período de crisis del que aún intentan recuperarse. Por su parte, menos orgánicos que los anteriores pero también menos dependientes del Estado promotor, los gremios empresariales continúan en una línea de generación de propuestas que permitan la reactivación del sector más moderno y tecnificado de la agricultura y la ganadería.

Por las mismas razones que los gremios nacionales, los gremios regionales experimentaron una crisis que provocó la desaparición o casi desaparición de varias federaciones y ligas que apenas quince años atrás estaban muy activas. Sin embargo, algunos gremios regionales parecen estar reconvirtiéndose con relativo éxito, reorientando su accionar y sus objetivos en torno a proyectos productivos que provean beneficios materiales visibles a sus miembros, y por lo general concertando o buscando articularse con el Estado, con ONGs o con la cooperación internacional (Heredia, 1998). Por supuesto, enfrentan diversas dificultades, desde la falta de dirigencia capacitada para los requerimientos del momento en muchas de ellas, hasta la búsqueda de organismos externos en pos de inscribir a los productores agrarios en relaciones de clientela en busca de apoyo político, pasando por las relaciones de desconfianza existentes entre los propios miembros de la asociación.

Aunque la mayor parte de los proyectos de ONGs buscan articular organizaciones a nivel local, existen algunas, como las agrupadas en torno a la Coordinadora Rural, que buscan intervenir a nivel regional tratando de implementar un proyecto de reconversión de gremios rurales, adecuándolos al nuevo contexto y a los nuevos escenarios que afectan al sector agrario nacional (Vera y Monge, 1999).

En cualquier caso, los proyectos de integración con más éxito son aquellos de nivel regional que articulan circuitos económicos, integrando espacios rurales con pueblos y con ciudades intermedias vía carretera o transporte fluvial (Hurtado, 2000). La articulación de los espacios regionales y de las organizaciones existentes en ellos parece responder más a la existencia de vías de comunicación y flujos de bienes y de población que a las fronteras políticas, accidentes geográficos, e incluso diferencias culturales o étnicas. Una propuesta de integración de organizaciones sobre un esquema de corredores económicos podría tener más impacto que otras montadas sobre bases territoriales de carácter político.

La articulación a nivel local es, casi por definición, intersectorial. Además, salvo en el caso de algunos gobiernos municipales, suele ser impulsada desde el exterior, ya sea desde el Estado o desde los centros de promoción del desarrollo. En ambos casos se trata de crear institucionalidad de base, mecanismos o instancias que articulen a los diversos agentes y organizaciones existentes en un mismo espacio. Sin embargo, en ambos casos la apuesta, el procedimiento, y la cobertura de la articulación buscada, son diferentes.

Por medio de sus programas de intervención, el Estado ha optado por la articulación local y sectorial sobre la base de micro-cuencas, buscando integrar a los productores existentes con la creación de autoridades vinculadas al manejo del agua. Este planteamiento tiene la ventaja de reunir a la mayor parte de las organizaciones vinculadas al riego, pero no siempre incluye a quienes no se benefician de él, y además no siempre incluye a otros actores, como por ejemplo los municipios, cuyo papel en el desarrollo rural es también importante. Por otro lado, la experiencia muestra que las organizaciones de riego funcionan mejor a nivel de la base (aún cuando son espacios de conflicto permanente) que a nivel del conjunto de la cuenca (Diez, 2000).

La otra propuesta de articulación de espacios locales en boga en la última década es la integración local por medio de la participación ordenada de instituciones y organizaciones desde el gobierno municipal, de distrito o provincial (García y Piazza, 1998). Esta opción, iniciada en unos pocos municipios a iniciativa y bajo la asesoría de diversas ONGs, supone convocar a las organizaciones presentes en el espacio local para la conformación de una o varias mesas de concertación, con la finalidad de elaborar un plan estratégico de desarrollo que permita la intervención ordenada de diversos agentes y una asignación más eficiente de recursos de todo tipo. En su desarrollo, esta modalidad tiene dos limitaciones: por un lado las diversas organizaciones no siempre se comprometen con la propuesta; uno de los actores menos presentes es precisamente el Estado bajo la forma de sus agencias locales, sin las cuales no es posible elaborar planes sostenibles de desarrollo. Por el otro lado, al estar vinculado estrechamente a los alcaldes -y con ellos, directa o indirectamente a sus partidos o movimientos políticos-, el proceso puede detenerse abruptamente con el cambio de autoridades municipales. En un plano general, esta propuesta parece ser más efectiva para la implementación de servicios sociales (mayormente urbanos) que para la promoción directa del desarrollo agropecuario rural, en donde las acciones de los municipios suelen ser discretas o inexistentes.

Bibliografía

- Alfaro, Julio 1994 *Los gremios rurales. Rol de las organizaciones rurales en la década de los noventa* (Lima: F. F. Ebert).
- Barclay, Federica 1990 “Hacia una revisión de las imágenes de la realidad agraria de la selva”, en Chirif, Manrique y Quijandria (eds.) *Perú: el problema agrario en debate. Sepia III* (Lima: Sepia-CERAlas Casas).
- Béjar, Héctor; Eguren, Fernando; Plaza, Orlando y Remy, María Isabel 1990 *La Presencia del Cambio: Campesinado y Desarrollo Rural* (Lima: DESCO).
- Broujere, Anne Marie 1992 *¿Y por qué no quedarse en Laraos?: migración y retorno en una comunidad altoandina* (Lima: IFEA).
- Castillo, Marlene y Ruiz, Maximiliano 1996 “Metodología de planificación y gestión compartida del desarrollo en la municipalidad distrital de Morropón, Piura”, en PACT-CIPDER *Participación de la población*, Lima.
- CEPAL 1995 *Las relaciones agroindustriales y la transformación de la agricultura* (Santiago: Naciones Unidas).
- Cera las Casas 1987 *Rimanakuy '86. Hablan los campesinos del Perú. Piura, Huancayo, Cusco, Puno, Pucallpa* Cusco, Cera las Casas.
- Coral, Isabel 1995 “Desplazamiento por violencia política en el Perú 1980-1992”, en ICVA. *Desplazados. Consulta sobre desplazamiento y refugio en la región andina* (Lima: IDL).
- Cueva, Luis (comp.) 1987 *Sierra Central: comunidades campesinas, problemas y alternativas* (Lima: F. F. Ebert).
- De la Cadena, Marisol 1986 “Cooperación y mercado en la organización comunal andina”, en *Revista Andina* (Cusco) N° 7.
- De la Cadena, Marisol 1991 “Las mujeres son más indias. Etnicidad y género en una comunidad del Cusco”, en *Revista Andina* (Cusco) N° 9.
- Degregori, Carlos Iván 1996 *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* (Lima: IEP).
- Diez, Alejandro 1999[a] “Diversidades, alternativas y ambigüedades: Instituciones, comportamientos y mentalidades en la sociedad rural”, en Agreda, Diez y Glave *Perú: el problema agrario en Debate. Sepia VII* (Lima: Sepia).
- Diez, Alejandro 1999[b] *Comunidades mestizas. Tierras, elecciones y rituales en la sierra de Pacaipampa (Piura)* (Lima: Pucp-Cipca).
- Diez, Alejandro 2000 *Motivaciones y dinámicas de los tipos de organización de la población rural andina peruana (análisis a partir de microcuencas en*

- Cusco, *Huancavelica y Huaraz*) (Lima: Coordinadora Rural del Perú). Mimeo.
- Diez, Ramón y Alcantara, Miguel 1989 *Las empresas asociativas como alternativa de desarrollo para el valle de Cañete* (Lima: Concytec).
- Eguren, Fernando 1992 “Sociedad rural: el nuevo escenario”, en *Debate agrario* (Lima) N° 13, Enero/Mayo.
- García, Pilar y Piazza, María del Carmen 1998 *Sociedad y gobierno local. Espacios de concertación y democracia* (Lima: Desco).
- Gitlitz, John y Rojas, Telmo 1985 “Las rondas campesinas en Cajamarca-Perú”, en *Apuntes* (Lima) N° 16.
- Glave, Manuel y Fort, Ricardo 1999 *Organizaciones económicas campesinas. Asociación de productores y desarrollo agropecuario en el Perú* (Lima: Grade). Mimeo.
- Golte, Jurgen y De La Cadena, Marisol 1983 “La codeterminación de la organización social andina”, en *Allpanchis* (Cusco) N° 23.
- Gómez, Rosario 1995 “Exportación y relaciones contractuales en el Perú. El caso del mango”, en CEPAL *Las relaciones agroindustriales y la transformación de la agricultura* (Santiago: Naciones Unidas).
- Gonzales De Olarte, Efraín 1996 *El ajuste estructural y los campesinos* (Lima: IEP/Ayuda en acción-Perú).
- Grupo Promotor 1997 *Municipios rurales y gestión local. I Encuentro Nacional* (Lima: Punto y coma).
- Guerrero, Luis 1996 “La mesa de concertación interinstitucional, estrategia de desarrollo sustentable de la provincia de Cajamarca” en PACT-CIPDER *Participación de la población* (Lima).
- Harvey, Penélope 1991 “Mujeres que no hablan castellano. Género, poder y bilingüismo en un pueblo andino”, en *Allpanchis* (Cusco) N° 38.
- Heredia, José Alfonso 1998 *Situación actual de los gremios y organizaciones de productores agrarios en el Perú: una visión desde los protagonistas* (Lima: GTZ-F. F. Ebert). Mimeo.
- Hernández Nieva, Juan 1994 *Entre democracia y violencia: aspiraciones y contradicciones de las Rondas Campesinas en una provincia de la sierra septentrional de los Andes peruanos, Sahuay, Ancash* (Lima: PUCP). Tesis Licenciatura Antropología.
- Huber, Ludwig 1995 *Después de Dios y la Virgen está la ronda. Las rondas campesinas de Piura* (Lima: IEP-IFEA).

Hurtado, Isabel 2000 “Dinámicas territoriales: afirmación de las ciudades intermedias y surgimiento de los espacios locales”, en Brack, Hurtado y Trivelli (eds.) *Perú: el problema agrario en debate. Sepia VII* (Lima: Sepia).

INEI Perú 1996 *Características de la población que hace uso del servicio de transporte provincial e internacional* (Lima: INEI).

Marañón, Boris 1995 *Producción Campesina Y Mercado Del Banano En La Costa Piurana* (Piura: Cipca).

Marquina, Rodolfo 1996 “Explorando nuevos caminos para el desarrollo: la experiencia del consejo de desarrollo de la provincia de Caylloma”, en PACT-CIPDER *Participación de la población* (Lima).

Mejía, Carlos y Vargas, Carlos 1997 “Con la Iglesia no me meto. Relaciones de poder y nuevos liderazgos en Huari”, en Gonzales De Olarte, Revesz y Tapia *Perú: el problema agrario en debate. Sepia VI* (Lima: Sepia).

Monge, Carlos 1994 “Transformaciones En La Sociedad Rural”, en Dancourt, Mayer y Monge *Perú: el problema agrario en debate. Sepia V* (Lima: Sepia).

Monge, Carlos 1997 “El comportamiento electoral de la población rural peruana, 1980-1990”, en Gonzales De Olarte, Revesz y Tapia *Perú: el problema agrario en debate. Sepia VI* (Lima: Sepia).

Montes, Alipio 1996 *Relaciones de poder en el campo (Caso de la provincia de Condesuyos)* (Lima: IEP). Mimeo.

Pásara, Luis 1991 *La otra cara de la luna. Nuevos actores sociales en el Perú* (Buenos Aires: Cedys).

Plascencia, Rommel 1994 *Relaciones interétnicas en Lircay*. Tesis de Magister en Antropología, Lircay PUCP, Lima.

Quintín, Pedro 1994 “Continuidad y recomposición del poder local en un distrito andino: Ocongate, Cusco”, en Dancourt, Mayer y Monge *Perú: el problema agrario en debate. Sepia V* (Lima: Sepia).

Remy, María Isabel 1990 “¿Modernos o tradicionales? Las ciencias sociales frente a los movimientos campesinos de los últimos 25 años”, en Béjar, Egueren, Plaza y Remy *La presencia del cambio* (Lima: Descó).

Revesz, Bruno 1992 “Catacaos: una comunidad en la modernidad”, en *Debate agrario* (Lima) N° 14, Junio/Septiembre.

Revesz, Bruno 1997 “Espacios rurales y sociedad nacional”, en Gonzales, Revesz y Tapia *Perú: El Problema Agrario En Debate. Sepia VI* (Lima: Sepia).

Segura, José; De Jesús, Sara y Rodríguez, Lindaura 1990 *Diagnóstico de la comunidad campesina San Francisco de Asis de Salas* (Chiclayo: CES Solidaridad).

Seligman, Linda 1992 “La Jerarquía Político-Religiosa Actual En La Sierra Sur Andina”, en Urbano, Henrique (comp.) *Tradición y modernidad en los Andes* (Cusco: CERALas Casas).

Stern, Orin 1991 “*Con los Yanques todo Barro*”. *Reflexiones sobre Rondas Campesinas, Protesta Rural y Nuevos Movimientos Sociales* (Lima: IEP).

Urrutia, Jaime 1992 “Comunidades campesinas y antropología: historia de un amor (casi) eterno”, en *Debate agrario* (Lima) N° 14, Julio/Septiembre.

Urrutia, Jaime 1996 “Relaciones laborales, empleo agrícola y sociedad rural en Cajamarca”, en *Debate agrario* (Lima) N° 24, Junio.

Vargas, Silvana 1996 *Desarrollos rurales en el Perú: enfoques, proyectos de desarrollo y horizontes culturales de los campesinos: estudio de caso de las comunidades de Urcos, Cusco* (Lima: PUCP) Tesis Lic. Sociología.

Varillas Vilchez, Walter (ed.) 1995 *Desarrollo local. Una experiencia de planificación participativa en la sierra de Lima. Alis, Yauyos, 8-10 diciembre 1994* (Lima: Isat/Codalís).

Vera, Dante y Monge, Carlos 1999 “El programa de institucionalidad rural andina”, en *Cuadernos andinos* N° 19.

Notas

1 Por modernización entiendo la adopción de una serie de instrumentos, comportamientos y formas de organización relativamente generalizados que son causa y producto de una cada vez mayor integración en la sociedad y en los procesos “nacionales” contemporáneos.

2 Sobre el particular pueden consultarse los textos de: Barclay (1990), Eguren (1992), Monge (1994), Pásara (1991), Remy (1990) y Revesz (1997).

3 En muchos departamentos, algunos clasificados como mayoritariamente rurales, el porcentaje de la población que viaja es mayor que el promedio nacional: Ancash 20%, Cusco 18%, Huancavelica 30%, Huánuco 18%, Ica 23%, Junín 30%, Lambayeque 30%, Moquegua 19%, Pasco 20%, Piura 17%, Tacna 19%. Lo mismo sucede con la proporción de los que viajan por motivos de trabajo: Ayacucho 30%, Cajamarca 40%, Cusco 34%, Huánuco 39%, Iquitos 35%, Piura 35% (INEI Perú, 1996).

4 Puede ser significativo mencionar que la presencia de votos blancos y nulos es menor en zonas de comunidades, lo cual podría indicar una mayor integración y participación de los campesinos organizados.

5 En estos procesos económicos contemporáneos en el espacio rural es significativa la intervención insistente de agentes públicos y privados empeñados desde los años setenta y ochenta en implementar diversos proyectos de desarrollo productivo y de promoción social, compitiendo entre sí, tratando de implementar acciones de transformación del espacio rural. El Estado, tanto desde sus agencias ministeriales como desde sus proyectos y programas especiales, y también una serie de agencias privadas de promoción (ONGs), han tenido al espacio rural en el centro de sus preocupaciones: de manera progresiva, grandes y pequeños proyectos de inversión han ido llegando a los lugares más apartados del ámbito rural, produciendo una serie de cambios por lo menos en la dotación de servicios (educación, salud, agua potable) e infraestructura (carreteras, aulas, puentes). La desactivación de las agencias locales del Estado no generaría la desaparición de los proyectos sino su dispersión, la realización de millares de los más variopintos micro-proyectos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

6 Esta característica parece alcanzar al conjunto del territorio nacional, en mayor grado en la costa, y luego en los valles interandinos y zonas próximas a las ciudades de la sierra, y en las zonas de colonización y ciudades de la selva (Barclay, 1990).

7 Contrasta la vitalidad de algunos de estos comités de productores o de servicios, con el descrédito y la falta de identificación de los campesinos con las empresas asociativas.

8 Lo que no quiere decir que tengan éxito. Un trabajo sobre los productores de espárragos de Virú muestra que, aún integrados a circuitos de agro-exportación, los productores se hallan muy próximos a una economía de auto-subsistencia.

9 Cabe señalar que si estoy hablando de comunidades reconocidas, muchas de las conclusiones son aplicables a otros grupos “comunitarios” de base territorial existentes en el espacio rural.

10 Con raras excepciones, los numerosos estudios sobre comunidades realizados en la última década responden a enfoques diversos y se ocupan de diferentes aspectos de la organización comunal. Vistos en conjunto, forman un conglomerado de análisis de casos realizados con diversos propósitos sobre regiones diferentes. En la amplia gama de descripciones de comunidades encontramos desde descripciones culturalistas en las que no hay mención a la organización comunal o de corte atemporal estructuralista, hasta las descripciones participativas promovidas por ONGs que destacan la complejidad de las comunidades contemporáneas, pasando por los diagnósticos descriptivos clásicos.

11 No todas las organizaciones son iguales. De acuerdo a su actividad principal, podríamos clasificarlas en cuatro grandes bloques: asociaciones para actividades vinculadas a la producción, para servicios, para el control del orden, y aquellas de carácter lúdico, religioso o cultural.

12 El impacto de la violencia sobre las comunidades ayacuchanas fue devastador. De ello puede dar cuenta el estado de 33 de las comunidades de Huanta en 1994: 14 abandonadas o despobladas; 12 repobladas tras abandono total o parcial; 4 reagrupadas en bases defensivas; 1 cambió de sede, y sólo 2 se mantuvieron todo el tiempo en su lugar de origen.

13 Al menos desde hace una década parece estar produciéndose un proceso de expansión de las asociaciones femeninas, tanto de aquellas dedicadas a numerosos pequeños proyectos (huertos, granjas, talleres de artesanía y costura, etc.) ligados a “intereses concretos”, como de las desarrolladas para beneficiarse de los apoyos que brinda el Estado. La mayor parte son espacios de formación y capacitación, de apertura al exterior y a la vida pública, aunque con significativas limitaciones pues se hallan subordinadas a otros poderes locales, por lo general bajo control masculino. Con la tónica general de ocuparse de asuntos de supervivencia, las organizaciones femeninas se dedican a gran diversidad de actividades, por lo que terminan siendo tan polifuncionales y no especializadas como las comunidades campesinas.

14 En el primer encuentro de alcaldes provinciales del Cusco, por ejemplo, se incluyó en las conclusiones: fortalecer la autoridad municipal, establecer redes de comunicación entre los municipios, buscar la integración, promover

conciencia tributaria en la ciudadanía, proteger la pequeña minería, que se atienda a los municipios de frontera dándoles proyectos de desarrollo, exigir el canon minero, y exigir al Estado el 10% de presupuesto.

La estructura y la coyuntura en las luchas del movimiento campesino paraguayo

Ramón Fogel*

Las transformaciones de la sociedad y de las movilizaciones campesinas (Fogel, 1998)

En el Paraguay, las características de la estructura agraria y sus transformaciones se corresponden con las modalidades que asumen las acciones colectivas de las capas campesinas. A la agricultura estancada y atrasada, que predominó hasta la década del '60, siguió una estructura agraria con marcado predominio de la empresa agraria modelada por la modernización conservadora e impulsada por el orden autoritario. La crisis del modelo agro-exportador que se manifiesta desde comienzos de la década del '90 se prolonga y profundiza hoy tomando nuevas formas, ya en el orden democrático. Dado que la agricultura es el sector productivo más importante, esa crisis se proyecta en el resto de la economía.

El Censo de 1991 perfila algunos rasgos de la estructura agraria actual y nos muestra las tendencias. Ese año, de las 400 mil familias rurales (la mitad del total a nivel nacional) dedicadas básicamente a actividades agropecuarias, el 75% accedía a parcelas familiares, en su gran mayoría lotes de menos de 20 has. Considerando la distribución de las 307 mil explotaciones censadas ese año, el 40% de las mismas (las menores a 5 has.) controlaba menos del 1% de la superficie total censada¹. La minifundización se profundizó a lo largo de la década del '80.

* Investigador del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).

Las dos terceras partes de estas unidades campesinas tienen como cultivo de renta el algodón, y en esa medida sufren los efectos de la crisis algodonera. En el otro extremo de esta polarizada estructura agraria, las unidades mayores a 1000 has. representaban en 1991 el 1% de las explotaciones pero se adjudicaban el 77% de la superficie total censada. Dichas explotaciones son detentadas por los grupos con peso decisivo en la estructura de poder, en los cuales predominan las orientaciones marcadamente conservadoras.

La referida concentración de la tierra, una de las más marcadas de América Latina, está en la base de los conflictos agrarios abiertos y potenciales. La cuestión de la tierra permea a todos los grupos dominantes de la sociedad: desde los sectores que controlan el capital financiero hasta los funcionarios influyentes son hacendados y tienen sus intereses ligados a la tierra. Estos actores sociales dominantes también son actores políticos, circunstancia que protege doblemente los intereses ligados al latifundio.

En cuanto a la producción agropecuaria, los productos más dinámicos fueron el algodón, ligado a la economía campesina, y la soja, producida por las unidades productivas tipo *farmer* (de 50 a 200 has.) y por las medianas y grandes empresas. Estos rubros representaron el 70% de la exportación registrada en 1989, y el 37% de la producción agrícola. En la década del '90 un hecho notable está dado por la caída de los cultivos tradicionales destinados al mercado interno y al autoconsumo campesino. En estos años la expansión de la pobreza en el campo se proyecta en la emigración significativa a centros urbanos. Es notable el crecimiento simultáneo de la producción agrícola -básicamente de la soja- y la pobreza campesina a partir de mediados de la década del '80 (véase Anexo 1).

La acción colectiva en el campo también sufrió transformaciones, de modo tal que las movilizaciones campesinas aisladas entre sí que se extinguían con la consecución de la parcela familiar, se articularon a nivel nacional y ganaron fuerza en la década del '70, con las ligas agrarias. Estas organizaciones reaccionaron contra los procesos de modernización en los que se ignoraba de diverso modo a las capas campesinas, pero fueron brutaemente desarticuladas por el orden autoritario. Lo que podría haber sido una auténtica revolución social, resultó abortado a sangre y fuego por el orden autoritario articulado por la dictadura stronista.

Ya en el régimen democrático, ante el agravamiento de la crisis socioeconómica, por primera vez en la historia social y política las organizaciones campesinas se movilizan en todo el país, y el 15 de marzo de 1994 miles de campesinos se manifiestan pacíficamente en apoyo de sus demandas. En estas movilizaciones tiene incidencia la transición a la democracia, que en una sociedad agraria como la paraguaya está fuertemente condicionada por la naturaleza de las demandas campesinas y sus movilizaciones, y por las formas en que las mismas son procesadas por el sistema político y el estado. Por otra parte, las posibilidades de la acción colectiva campesina aparecen fuertemente condicionadas por las caracterís-

ticas de la estructura social rural y nacional, según se discutirá en las formulaciones que siguen. La democracia, irrelevante de cara a las demandas de las capas campesinas, es severamente alterada en marzo -el mes de las movilizaciones campesinas- de 1999, con el derrocamiento del gobierno electo por notable diferencia de votos, en manifestaciones con importante participación campesina. El golpe de estado y la nueva alianza de cúpulas que permitió el regreso del stronino y de los barones de Itaipú, viejos verdugos de los campesinos, excluyó aún más a éstos, quienes no tuvieron otra opción que el uso de la violencia para viabilizar sus demandas.

La modernización conservadora

A comienzos de los años '60 la población del país era escasa; una tercera parte se mantenía básicamente por medio de la agricultura de subsistencia, una vez que los enclaves agroindustriales que explotaban la yerba y la madera habían declinado substancialmente.

La concentración de la tierra, que constituía ya entonces un rasgo básico del contexto socio-histórico, intensificó las luchas por la tierra. Estas movilizaciones, que tuvieron ya significación histórica a principios de este siglo, se particularizaron en torno a la lucha por el acceso a la parcela familiar. Las luchas más extendidas geográfica y temporalmente fueron las articuladas por bandoleros sociales y líderes mesiánicos, que constituyeron las formas de lucha social disponibles históricamente en una sociedad sin canales de participación política y que subalterniza a los campesinos².

El rasgo saliente de la estructura de poder luego de la guerra del Chaco (1935) fue la inestabilidad política, basada en el hecho de que ninguno de los grupos dominantes podía imponer su hegemonía. La situación de empate cambia con el acceso al poder del General Stroessner. Superada la crisis de dominación política con la consolidación del orden autoritario desde mediados de los años '60 se redefinen en el marco de prácticas prebendarias las políticas agrarias, de modo de viabilizar un modelo agro-exportador. En la dinámica emergente, orientada a la modernización de la estructura productiva del campo, se impulsa la constitución y consolidación de la gran empresa agrícola operada con tecnología de punta.

Como resultado de las transformaciones anotadas se polariza la estructura social rural, de modo tal que en las posiciones dominantes aparecen nuevos actores: el moderno empresariado agrario, incluyendo a los *facendeiros*, y las capas de empresarios familiares de tipo *farmer*, que operan explotaciones mecanizadas, con tamaños que oscilan entre las 50 y las 200 has. Entre los empresarios tienen importante presencia los hacendados brasileños o *facendeiros*.

En el otro extremo los minifundistas -que operan en explotaciones de menos de 5 has.- representaban más del 40% de las unidades económicas campesinas. Los campesinos reasentados entre 1970 y 1982 constituían en el final del período referido la cuarta parte del total de unidades productivas. Esta forma de expansión de la frontera agrícola descongestionó en alguna medida la presión sobre la tierra, de modo tal que las explotaciones de menos de 5 has representaron en 1981 el 36% del total.

La agro-exportación implicó también el vuelco de las unidades campesinas a los cultivos comerciales a expensas de los cultivos de subsistencia. Así, el algodón, que representaba el 5% de las exportaciones en los años 1972/73, pasó a constituir el 47% de las exportaciones diez años después.

La constitución y expansión de la gran empresa se dio en no pocos casos a costa de los campos comunales de pastoreo de las comunidades campesinas. Por lo demás, la modernización autoritaria descalificó sistemáticamente al conocimiento y a las prácticas tradicionales, que asociaba al atraso. Mientras tanto, como resultado, comenzaban a debilitarse la identidad social y los vínculos sociales de las capas campesinas en aquellas regiones más castigadas por la atomización social.

Ante estas transformaciones orientadas a la constitución de una agricultura moderna a costa de la economía campesina, reaccionan las capas de cultivadores, movilizadas en las ligas agrarias, las cuales constituían organizaciones de base que se articulaban hacia arriba. La reacción en cuestión se hizo sentir ante los intentos de cercamiento de los campos comunales de pastoreo. En el campo educativo, el renacimiento de las tradiciones y de la cultura criolla se expresó en las escuelas campesinas, en las que se enseñaba en guaraní, constituidas como alternativa a la educación oficial.

Cuando las ligas llegan a formar una organización nacional y en esa medida se constituyen en una amenaza a los intereses representados en el pacto de dominación, fueron brutaemente reprimidas, y las aspiraciones de los campesinos a construir con sus luchas un orden social más justo regresaron a los niveles subterráneos de la conciencia, que no se expresan en forma abierta.

El desarrollo dual y la crisis de la agro-exportación

La vulnerabilidad del modelo agro-exportador y el alto costo social de la modernización conservadora comenzaban a manifestarse a mediados de la década del '80. En efecto, el control creciente de la tierra por parte de las grandes empresas contribuyó a la disminución del ritmo de la colonización oficial. Por otro lado, estas grandes empresas ocupaban poca fuerza de trabajo³. En este modelo de desarrollo dual, mientras crecía el sector de las grandes empresas también se fue intensificando la pobreza rural.

Con el estancamiento productivo crece la desocupación. La caída del precio de las materias primas en el mercado internacional se proyecta en la disminución sostenida del ingreso campesino⁴. Diversas fueron las reacciones campesinas ante los efectos en la economía campesina de las transformaciones anotadas: desaceleración de la colonización oficial, caída del ingreso real y aumento de la desocupación/subocupación.

La respuesta campesina más frecuente fue la invasión de tierras libres o latifundios improductivos: se intensificó entre 1983 y 1986, e involucró por lo menos a 15 mil familias campesinas. Se trata de unas 60 invasiones aisladas entre sí aunque altamente eficientes, que movilizan a los campesinos hasta la consecución de la parcela familiar, luego de la cual vuelven a su atomización social e individualismo habituales.

También surgen movimientos con una clara orientación sociopolítica que se articula en una perspectiva de transformación de la sociedad, la cual proponía cambios básicos en las relaciones sociales y políticas predominantes. En todos los casos fueron experiencias fragmentarias, muy localizadas y aisladas entre sí, pero que aún así contribuyeron al fortalecimiento de identidades colectivas. Este sentido de pertenencia a una colectividad que comparte una cultura, una lengua, agravios y luchas, se reaviva con las movilizaciones aun cuando los campesinos involucrados no articulen su acción a escala regional o nacional.

De hecho, en la fase final del orden autoritario, las demandas, que pasan a tener un carácter múltiple (acceso a la tierra, derecho de organización, condiciones de comercialización adecuadas, etc.), se plantean ya en el escenario nacional. Las luchas por la tierra se transforman en masivas y se tornan más intensas. En respuesta a nuevos condicionamientos se incorporaban elementos también nuevos en las movilizaciones. La respuesta frecuente consistió en el cerco represivo de los ocupantes y el desalojo violento de la fracción ocupada; incluso, en la contratación de bandas armadas para disuadir a los ocupantes.

Las movilizaciones campesinas en la transición a la democracia

El derrumbe del orden autoritario⁵ representó el final de una larga historia de opresión política y la vigencia de las libertades públicas por un período de tiempo que constituye ya el más prolongado del período independiente. No obstante sus logros, esta democracia emergente no significó en realidad una representación efectiva de los intereses campesinos en la esfera del estado. Una seguidilla de actos electorales (elecciones presidenciales, municipales, incluso de convencionales constituyentes) representó la iniciación política de los campesinos.

Desde el punto de vista organizativo, la democratización significó la incorporación creciente de los campesinos a organizaciones de tipo gremial, que buscaron

la representación de los intereses de sus adherentes en la esfera del estado y ante otros actores sociales. El proceso de globalización asociado a la inacción del estado ha provocado la constitución de múltiples asociaciones que reaccionan ante los excesos de las grandes corporaciones, resultando notable cómo algunas organizaciones de base logran en algunos casos (asentamiento Maracaná, Isleños de San Cosme, etc.) mayor resonancia que organizaciones regionales y nacionales.

Los desencuentros ideológicos entre grupos campesinos contribuyen a la atomización de las organizaciones, a tal punto que a fines de 1992 los 70 mil campesinos afiliados a 753 bases distribuían su adhesión a 53 organizaciones regionales, integradas a su vez a 10 organizaciones nacionales.

Una publicación del CDE de 1994 (Dávalos y Rodríguez, 1994[a]) refiere la existencia de 13 organizaciones nacionales censadas, 58 organizaciones regionales, 111 zonales, y 768 comités de base, incluyendo 82 comités de mujeres. El Censo en cuestión comprendió a 36.265 campesinos organizados, de los cuales 11.599 fueron mujeres. Esta población censada representaba menos del 4% de la población rural de 18 años y más. Con criterios menos estrictos, según el Censo Agropecuario de 1991, el 13,5% de los operadores de las 307.221 explotaciones pertenecía a algún tipo de organización, incluyendo comités de crédito y de comercialización. Considerando las organizaciones regionales y zonales censadas, la mayor densidad corresponde a Caaguazú, San Pedro, Alto Paraná e Itapúa (Dávalos y Rodríguez, 1994[b]).

Estos campesinos organizados se especifican algunos por su orientación político-clasista unos, gremial-reivindicativa otros, pasando por los de orientación cristiana. Lo dominante en las demandas de estas organizaciones es la reivindicación del acceso a la tierra y la prosecución del apoyo a los asentamientos ya constituidos. Precisamente, las coincidencias permiten a estas múltiples organizaciones articular algunas de sus demandas y movilizaciones.

La conducta aparentemente contradictoria de las capas campesinas organizadas, que pese a la atomización de sus organizaciones coordinan gestiones específicas y acciones puntuales, pasa a ser una constante. Lo ordinario es la atomización, que no impide acciones comunes ante circunstancias extraordinarias.

De hecho, ningún legislador es campesino, aunque los ejes de clientelas rurales se auto-proclaman campesinos. La situación campesina más bien empeoró con la democracia, ya que los grupos con orientación oligárquica y los segmentos del empresariado que fueron forjados por el orden autoritario pasaron a detentar más poder. Desde la perspectiva de los campesinos organizados, la democracia vigente es sinónimo de repartija de cargos, y no tiene nada que ver con la capacidad de la gente común de decidir qué caminos tomar o qué controles políticos deben ejercerse sobre el mercado.

En la Asamblea Constituyente de 1992 se expresó una vez más la disociación entre demandas sociales y sistema político. En esa ocasión, los convencionales

aceptaron las propuestas de la Asociación Rural del Paraguay, que nuclea a los grandes propietarios, y aprobaron una disposición que establece el pago por adelantado y a satisfacción del propietario en el caso de las expropiaciones (artículo 109 de la Constitución Nacional). Una norma notable establece que para cada expropiación debe dictarse una ley: en este caso la generalidad de la Ley no cuenta, y se da un caso paradójico de un estado de derecho en el que no se consideran los principios generales del derecho. De ese modo quedaba consumado otro retroceso en materia legislativa.

En el nuevo contexto continuó agravándose la crisis agraria y los problemas se fueron acumulando. Ahora es la economía rural en su conjunto la que se resiente, a tal punto que el crecimiento sectorial en el período 1995/98 fue sólo del 2,2% anual acumulativo. Sólo la Administración Pública creció en forma sostenida desde el advenimiento de la democracia (Véase Anexo 2). En una población de 4,5 millones que duplica la población de 20 años atrás, se extendió e intensificó la pobreza rural. La emigración a Buenos Aires y a los centros urbanos de Paraguay disminuyó la importancia relativa de la población rural -que representa en el último censo el 50% del total- y aumentó la marginalidad urbana. Tan irrelevante fue la democracia de cara a los intereses campesinos, que para 1995 la pobreza moderada afectaba al 55% de los hogares rurales y la indigencia ya alcanzaba el 33,6% de los hogares. Tres años antes, la pobreza severa afectó al 29% de los hogares.

Ya bajo el régimen democrático, la disminución en los niveles de actividad económica y la presión inflacionaria se refleja en la aceleración de la caída del ingreso campesino. Las expectativas campesinas en relación al estado democrático se expresaron en la intensificación de las invasiones en los meses que siguieron a la caída del orden autoritario. Los campesinos movilizados asociaban así democratización y acceso a la tierra.

En los primeros tres meses que siguen a la caída de la dictadura (3 de febrero de 1989) se plantearon también demandas políticas (demandas de justicia, proceso a torturadores, cese de persecuciones y libertad de organización). El carácter étnico de las movilizaciones se expresó en los reiterados reclamos de fin de la venta de tierras a los extranjeros. En este contexto, la conciencia nacional, que es un elemento básico para encarar el desarrollo, pasa a ser alimentada sólo por los campesinos.

La demanda de tierras del sector empresarial y la concentración de las tierras aptas para la agricultura en el mismo sector -sin generar empleo productivo-, sumadas a la orientación del gobierno que busca evitar la expropiación, llevaron a la constitución de colonias en tierras no aptas para la agricultura. La orientación del Estado, que pierde la capacidad de regular los procesos socioeconómicos, se corresponde con la creciente internacionalización de la economía, que se va desligando de controles políticos.

Cuadro 1

Movilizaciones campesinas 1990-1993

Años	Detenciones	Nº de conflictos	Ocupaciones	Desalojos
1990	820	99	49	51
1991	566	66	17	23
1992	120	50	16	16
1993	128	46	14	17

Fuente: CDE. **Informativo Campesino**. Asunción. 1994

En ese contexto, la Reforma Agraria, incorporada en la plataforma electoral del militar que liderara el derrocamiento del dictador, quedó en el nivel retórico, a tal punto que los asentamientos habilitados luego de la caída del orden autoritario resultaron, en la gran mayoría de los casos, de presiones campesinas. El pico de las movilizaciones orientadas al acceso a parcelas familiares se da en los meses siguientes al derrocamiento de la dictadura, sólo en los dos primeros.

Las movilizaciones campesinas se fueron intensificando a medida que sus expectativas iniciales eran defraudadas, y asumieron nuevas formas a partir del segundo gobierno democrático, esta vez encabezado por un civil (agosto de 1993). La pobreza creciente, y la falta de respuesta desde el gobierno, inciden en la intensificación de las ocupaciones de fracciones incultas en los meses de mayo/julio de 1994, mostrando la tendencia a repetir la experiencia de 1989 (año de mayor ocupación de tierras).

Por otra parte, con este segundo gobierno democrático las organizaciones movilizadas pasaron a plantear directamente sus reclamos, asumiendo su propia representación y descalificando la mediación de los partidos políticos -que van perdiendo credibilidad y los restos de legitimidad. En esa lógica, ante la ausencia de canales apropiados de diálogo y concertación entre la población rural y los organismos del estado, la acción directa es más pertinente.

Lo novedoso de las movilizaciones es que las mismas se articulan ahora a nivel regional primero, y nacional después. Así, en el departamento de San Pedro de Ykuamandyjú, donde la movilización campesina es más intensa, las acciones son coordinadas entre 27 organizaciones campesinas. En el referido Dpto. San Pedro, que puede dar una idea de la situación general, las movilizaciones campesinas alcanzaron mayor intensidad, coincidiendo con una marcada concentración de tierra y la coexistencia de explotaciones campesinas con establecimientos ganaderos de grandes extensiones. En este caso, como en otros, las organizaciones

campesinas lograron coordinar su acción a pesar de la heterogeneidad de sus orientaciones. En ese sentido debe tenerse presente que la Coordinación Intersectorial se basa en grupos formados con el apoyo de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, con líderes con arraigo local y regional. Hacia el sur del Departamento, los grupos están más ligados a partidos de izquierda.

Entre las demandas planteadas por los movimientos y las organizaciones predominan las de tipo económico corporativo. Estos campesinos reivindican básicamente el acceso a parcelas familiares y, últimamente, a condiciones mínimas de comercialización del algodón. Las luchas por la tierra implicaron hasta 1993 12 ocupaciones de grandes fracciones no explotadas desde 1989. De estas ocupaciones, solamente no resultó exitosa la ocupación de la fracción Campos Mborombí del Senador oficialista Blas Riquelme. En algunos casos las ocupaciones fueron muy peleadas, como la de Cororó, en julio de 1990, que implicó mucha tensión y arrojó como saldo 5 heridos.

En todos estos casos los campesinos movilizados enfrentaron fuertes intentos de desalojo, pero ganaron en base a una buena organización y al desarrollo de estrategias que representan una suerte de maduración de las luchas anteriores. Las mismas incluían la ocupación por centenares de familias de una fracción sin explotar, la permanencia en los costados de la fracción durante meses luego de los desalojos, la nueva ocupación de la fracción ingresando por otro sector de la misma y las negociaciones con el gobierno y con los propietarios. Las referidas estrategias complicaron terriblemente la represión, que se tornaba costosa también en términos económicos.

La crisis campesina y las protestas campesinas de 1994

Las comentadas reacciones de los campesinos del norte no son aisladas, ya que las movilizaciones, aunque con menor intensidad, se han estado dando en todo el país. En efecto, en el plano nacional, desde los primeros meses del primer gobierno civil, las organizaciones campesinas que se movilizaban anteriormente para cuestiones puntuales comenzaron a articular sus demandas y sus acciones a través de la Organización Interdepartamental Campesina (CIOC) y de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas.

En diversas regiones del país ejercen presión con concentraciones regionales, clausurando rutas, a fin de forzar la negociación con organismos oficiales. Las movilizaciones convergieron en una marcha campesina multitudinaria sin precedentes en la capital del país el 15 de marzo. Ante las sucesivas fallas del estado en sus políticas de desarrollo, los campesinos buscan espacio en las esferas del estado como cultivadores de algodón guaraní parlantes, explotados por otros sectores de su sociedad.

Como resultado de esas formidables movilizaciones, que parecen expresar que los campesinos despiertan de su largo letargo, buscan negociar a alto nivel con el gobierno y se legitiman plenamente como un sector de la sociedad con derecho a expresar sus demandas, aunque los grupos dominantes permanezcan sordos a ellas. Las capas campesinas retoman así, 20 años después, las utopías que se habían expresado con las Ligas Agrarias, y que vuelven a aflorar.

En la mesa de negociaciones con representantes del gobierno los cultivadores plantean las siguientes demandas básicas: “la agilización de los trámites para regularizar la tenencia de parcelas familiares en ocupaciones”, la prestación de asistencia inmediata a los asentamientos abandonados a su suerte, la participación en la elaboración de las políticas agrarias y la fijación de precios mínimos para el algodón. En ocasión de la segunda marcha, en marzo de 1996, las organizaciones campesinas incluyeron nuevas demandas.

En las nuevas demandas se impugna la versión oficial del neoliberalismo que pretende acabar con todo control político sobre la economía. Así, en el caso del MERCOSUR, se asume en el discurso dominante que la integración y el proceso de globalización inevitablemente conducen a la desaparición del control del estado sobre los mercados. A la apertura ilimitada que se propone oficialmente en el marco del MERCOSUR, los campesinos plantean el retiro del Paraguay de este Tratado. En la perspectiva campesina, si la integración supone empobrecimiento e imposibilidad de defender los intereses de los compatriotas, entonces al diablo con la mentada integración.

La pretensión de achicar el estado hasta el punto de amputarlo brutalmente, es rechazada por los representantes de las organizaciones campesinas en varios de los puntos que plantean en sus demandas. El pedido de participación en las políticas implica la transformación del estado, mientras que con la demanda de precios mínimos los campesinos impugnan la equiparación entre la libertad y el libre juego de las fuerzas del mercado. Para el actor campesino emergente, el hecho de que el estado regule el mercado no constituye amenaza alguna a la libertad. Aunque estas demandas no sean satisfechas o lo sean sólo parcialmente, lo destacable es el reconocimiento que implica la negociación con altos representantes del gobierno.

Además de las organizaciones y movimientos que se articulan entre sí y se expresan en el nivel regional y nacional, se van constituyendo sujetos colectivos especiales, que a su modo resisten los efectos de la globalización. Como caso ilustrativo puede apuntarse el de los campesinos de San Cosme y Damián, pobladores de islas inundadas por la represa de Yacyretá, quienes bloquearon durante semanas las obras civiles que ya llevan una inversión de 8 mil millones de dólares. Esta población afectada cuenta como aliado al gobierno municipal, que incluso prohibió la circulación de máquinas de la entidad binacional.

Recapitulando, puede señalarse que desde el ángulo de la sociedad civil la democracia pluralista va emergiendo impulsada por organizaciones de distintos sectores que aceptan el derecho a participar de todos por igual. Los campesinos aportan lo suyo en esa dinámica, pero no resuelven el problema de la representación de sus intereses en el sistema político. En ese contexto, los campesinos ganan autonomía con relación a los partidos políticos, mientras dan un alcance más instrumental a sus movilizaciones.

Como resultado de las transformaciones operadas, los movimientos y organizaciones campesinos, que aumentan la capacidad negociadora de las capas de pequeños productores, condicionan favorablemente la democratización de la sociedad civil y del estado. En este sentido debe tenerse en cuenta que la misma transición también afecta la forma y el carácter de las organizaciones campesinas, que buscan mayor protagonismo y la satisfacción de sus demandas mediante alianzas adecuadas con otros actores sociales y políticos, pero sin dejar de lado las tomas de tierra.

La transición a la democracia asociada a la descentralización facilita la multiplicación de las organizaciones campesinas y la expansión de las existentes. El emergente poder local tiene como aliado potencial a los gobiernos municipales, que ganan espacio con la descentralización.

La sucesión de eventos en los últimos meses muestra la disposición de los campesinos a una movilización creciente, sobre todo para acciones puntuales como la clausura de rutas, que no tienen un costo alto, y sí pueden dar beneficios significativos. No se trata sin embargo de la primacía de la racionalidad puramente instrumental que desplaza a la racionalidad basada en valores. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la corrupción desde las esferas del estado se tornó más visible y hasta irritante, como si hubiesen surgido nuevos estándares de justicia asumidos por los campesinos. Ante los ojos de éstos el estado democrático pierde legitimidad, ya que los que detentan el poder no están cumpliendo bien su trabajo. En realidad, a los campesinos no les interesa una democracia de fachada, sin mecanismos efectivos de representación de sus intereses sociales.

En contraste con las acciones puntuales relativamente fáciles, los campesinos se ven limitados para movilizaciones más prolongadas, y en esa medida enfrentan dificultades para alterar las condiciones de su inserción social, que en realidad se va deteriorando en forma alarmante. La liberalización económica que vino con el inicio de la transición a la democracia atrajo a la inversión extranjera, pero no se orientó a la producción de bienes, mientras que el abaratamiento de las importaciones aumentó el déficit comercial y debilitó aún más a la frágil industria doméstica. Por otra parte, el aumento del crédito en un contexto de marcada corrupción llevó a quiebras fraudulentas en el sector financiero, que costarán al estado una suma que se aproxima al 10% del PIB (Molinas, 2000). Estos descalabros, sumados al ensanchamiento del aparato estatal, siguiendo con la lógica del

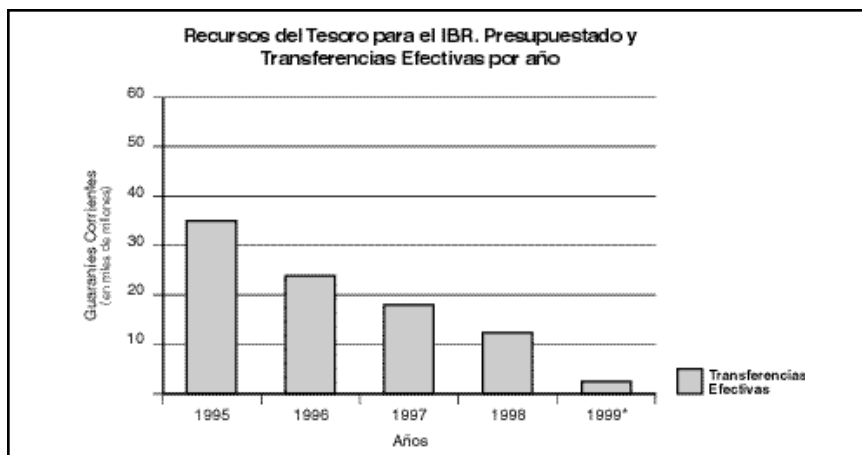
clientelismo, ya no dejaron recursos para la reactivación de la economía, y la pobreza rural se intensificó.

A medida que se agudiza la pobreza en el campo, desde el estado se van asignando menos recursos al Instituto de Bienestar Rural, entidad que ejecuta los programas nacionales de colonización y que debió ser el instrumento para luchar contra la pobreza (Fogel, 1999). La pronunciada caída en la asignación de recursos (Figura 1) muestra la indiferencia con que la clase política considera a la cuestión campesina. En ese medio, en el que las vías legales son inconducentes, sólo quedaban disponibles los desbordes, la ocupación de tierra y el cierre de rutas. Esas son las formas que utilizan los campesinos del país -quienes aún representan casi la mitad de la población-, excluidos de las políticas y marginados de procesos de concertación que canalicen sus demandas.

La magnitud de los conflictos es tal, que en 1999 ganan notoriedad 52 conflictos, los cuales involucraron a 7.397 familias que ocuparon fincas por aproximadamente 100.000 has. (véase Cuadro 2).

En 1999 la cantidad de conflictos y de ocupaciones duplica a la del año anterior. Es de destacar que la mayor cantidad de familias involucradas en las movilizaciones que reivindican el acceso a la parcela familiar, corresponde a los departamentos norteros (San Pedro y Concepción) y a los departamentos del borde este de la Región Oriental, con mucha presencia de propietarios brasileños (Alto Paraná y Kanindeyú). En estos casos, las movilizaciones de campesinos guaraní parlantes que ocupan tierras de brasileños tienen un claro alcance étnico, lo que da mayor intensidad a los conflictos. En San Pedro el campesinado combativo se expresó ya desde hace años, y su densidad organizativa es mayor que en otros departamentos.

Figura 1



Fuente: CDE. **Informativo Campesino**. Asunción 2000. *Octubre de 1999

Los movilizados incluían a los “sin tierra” mismos, y a aquellos que ya habían accedido a parcelas familiares en suelos marginales abandonados luego de la comercialización de la producción forestal (madera, postes, leña y carbón). Ante la inexistencia de políticas orientadas a la consolidación de los asentamientos, los campesinos empobrecidos se orientan por la lógica del estómago, de corto plazo, sin considerar lo que ocurrirá después. Con frecuencia estos campesinos transfieren sus derechos de ocupación a compradores que suelen agregar varias parcelas para la explotación ganadera.

Cuadro 2

Distribución de conflictos campesinos ligados a la tierra por región en 1999

Departamentos	Cantidad de conflictos	Cantidad de hectáreas	Cantidad de familias
Concepción	6	10.607*	732*
San Pedro	7	15.202	1.519
Caaguazú	4	7.750	465*
Caazapá	5	13.150*	261*
Misiones	3	5.500	336
Paraguari	1	400	70
Itapúa	6	5.767*	487*
Alto Paraná	10	15.800*	2.260*
Ñeembucú	1	2.500	130
Amambay	3	2.400*	260
Canindeyu	4	10.180	810
Boquerón	1	5.000	0**
Presidente Hayes	1	200	67
Total	52	94.456	7.397

Fuente: CDE. *Datos parciales. **Sin datos

La intervención campesina en el golpe de estado del marzo paraguayo (1999)

El estilo de desarrollo basado en la agro-exportación y la triangulación comercial estaba agotado a fines de siglo en el Paraguay. El agrupamiento social de comerciantes ligados a la triangulación tenía que buscar una nueva posición en la estructura social. Del empresariado doméstico, que siempre fue frágil, como su

clase obrera, sólo la facción liderada por los barones de Itaipú podía imponer su hegemonía. Este grupo, que bajo la sombra del régimen autoritario había logrado una notable acumulación, acrecentó aún más su poder con el control del aparato estatal en el período 1993-1998. Sólo de la quiebra fraudulenta de diversas entidades del sistema financiero, se extrajo del Estado una monumental suma que se aproxima al 10% del producto interno bruto. En la estructura social aparecía ya una suerte de empresariado de la corrupción, una nueva industria sin humo.

En la coyuntura pre-electoral de 1998 triunfó en las internas del partido oficialista una dupla (Presidente de la República, Vicepresidente) que planteaba en serio la lucha contra la corrupción, y que ganó holgadamente las elecciones nacionales. Pero pronto se enfrentó a los barones de la monumental corrupción, que controlaban los medios masivos de comunicación y en esa medida tenían gran capacidad de manipulación. Entre tanto, los campesinos que, agobiados por las deudas y la caída de sus ingresos buscaban la condonación de sus deudas, se aliaron a quienes les prometieron su apoyo, y que en ese momento buscaban el derrocamiento del gobierno.

A los siete meses de gobierno, en otro marzo campesino, ante desórdenes callejeros, aprovechando la presencia de 15.000 campesinos y las manifestaciones de jóvenes, las Fuerzas Armadas dan la espalda a su Comandante en Jefe y se declaran leales al Congreso, forzando la renuncia del Presidente de la República y la constitución de una curiosa alianza encabezada por los barones de Itaipú y de la corrupción y por la vieja guardia de Stroessner. La victoria campesina fue pírrica: obtuvieron la condonación de sus deudas, pero reinstalaron en el poder a sus verdugos, y sólo se destinaron sumas irrisorias para la colonización, apenas unos 2 millones de dólares al mes de octubre de 1999 (Figura 1). Para colmo, el protagonismo campesino en la plaza del Congreso fue desconocido por la prensa, que sólo otorgó créditos a la "heroica juventud". En esas condiciones sólo se podría prever el crecimiento de movilizaciones y desbordes. La otra alternativa, compatible con un estado social de derecho, pasa por políticas agrarias que viabilicen las explotaciones campesinas, y no necesariamente por condonaciones de deudas, inconducentes aunque produzcan un alivio circunstancial.

Ganaron notoriedad 54 manifestaciones en las que se movilizaron 70.700 manifestantes, cifra más alta que en años anteriores (Cuadro 3). La mayor cantidad de movilizaciones corresponde a Asunción. En ellas se condenaron las políticas neoliberales y se reclamaba la condonación de deudas; participaron campesinos de diversos departamentos. En Caaguazú se movilizaron por la libertad de compañeros presos, las exigencias de pagos a los acopiadores y la condonación de deudas. Estos son reclamos que se repiten en otros departamentos.

El agravamiento de la crisis campesina en 1999 se nota comparando la distribución de conflictos de tierra y las manifestaciones de ese año con años anteriores (Cuadro 4). Así, mientras en 1998 fueron detenidos 429 campesinos, el año

siguiente esta cifra llegó a 1.049, y las manifestaciones pasaron de 17 a 54. En el año se reportó el asesinato de seis campesinos, en el marco de estos conflictos, cuatro de ellos probablemente por matones armados por los hacendados brasileños (CDE, 1999). La Federación Nacional Campesina (FNC) contabiliza treinta y cinco líderes campesinos asesinados en los últimos años.

A principios del 2000 la situación se complica por calamidades naturales (heladas severas y prolongadas; sequías) que provocan la pérdida de buena parte de los cultivos. Ante la falta de respuesta frente a sus reclamos, las diversas organizaciones se van radicalizando. Una parte importante de ellas está articulada por la Federación Nacional Campesina (FNC), y tiene como punto culminante la segunda ocupación de la estancia La Esperanza -situada en General Resquín, Departamento de San Pedro-, de unas 30.000 has., propiedad del brasileño Evaldo Araujo. Poco después de iniciada esta segunda ocupación, el 9 de enero, un sangriento desalojo provoca tres bajas campesinas y 32 heridos. Estos tres campesinos muertos por la policía se suman a uno más que había sido asesinado el 14 de noviembre anterior en la misma fracción.

Cuadro 3

Distribución de manifestaciones campesinas por región en 1999

Departamentos	Cantidad de manifestaciones	Cantidad de manifestantes
Alto Paraná	3	1.450
Amambay	2	0**
Asunción	8	35.550*
Caaguazú	11	11.300*
Canindeyú	1	1.000
Central	2	0**
Concepción	10	9.550*
Cordillera	2	4.000*
Guairá	3	500*
Itapúa	2	3.500
Misiones	4	350*
Paraguari	2	0**
San Pedro	4	3.500*
Total	54	70.700

Fuente: CDE. *Datos Parciales. **Sin datos.

A partir de ese momento, las movilizaciones se multiplican: solamente el 11 de enero, organizaciones de distintos puntos de nuestro país se manifiestan bajo la consigna de “tierra o muerte”. En Caaguazú, 1.000 manifestantes se desplegaron en protesta por el brutal desalojo y bloquearon la ruta; en Itapúa también bloquearon la ruta, lo mismo que cerca de la capital; en Curuguaty, la Asociación Regional Campesina de Kanindeyú movilizó a 100 campesinos en el bloqueo durante 4 horas de la ruta Las Residentas, mientras que 500 familias campesinas permanecieron frente la propiedad reivindicada, de la que habían sido desalojadas.

Como en otras oportunidades en las que el gobierno reacciona ante situaciones críticas para apagar incendios en vez de evitarlos, los campesinos consiguieron el día 12 de enero que el gobierno adquiriera 5.000 has. de la estancia La Esperanza, y asumiera el compromiso de adquirir 3.200 has. más en las inmediaciones. Las 5.000 has. conquistadas por los campesinos tienen especies forestales de valor comercial.

Cuadro 4

Distribución de conflictos de tierra y manifestaciones

Año	Conflictos	Ocupaciones	Desalojos	Detenciones	Manifestaciones
1990	99	29	31	820	34
1991	66	17	23	566	19
1992	50	17	16	120	15
1993	46	14	17	128	18
1994	57	26	24	411	60
1995	49	23	25	359	37
1996	54	20	27	553	39
1997	43	15	13	137	15
1998	28	14	11	429	17
1999	52	31	20	1.048	54
Totales	544	206	207	4.571	308

Fuente: CDE

El análisis de las interrelaciones entre estructura socioeconómica y coyuntura no permite avizorar escenarios optimistas de cara a los intereses campesinos y a una democracia sustantiva. Los rasgos salientes de la emergente estructura social muestran a un empresariado manufacturero débil y golpeado, al igual que la

facción ligada a la triangulación comercial, que llegó a su fin. La oligarquía ganadera no sufre cambios en su orientación, y mantiene su buen posicionamiento en la esfera del Estado. Los barones de Itaipú pasan a ser el actor hegemónico, muy ligados a la corrupción. Las capas campesinas cada vez más empobrecidas ganan a su vez protagonismo, pero sólo por vías de hecho. Las capas medias urbanas muy ligadas al Estado empiezan a sentirse inseguras ante la inevitable reforma de éste.

En el plano político el actor dominante se alía con la vieja guardia stronista, y desde la esfera del estado, acogotado por los gastos ordinarios para salarios y la inacabable corrupción, los intereses mayoritarios -los de los campesinos- no están representados. En una curiosa democracia liberal ya totalmente disociada de la soberanía popular expresada en las urnas, las demandas campesinas sólo se canalizan por medios violentos.

En la coyuntura actual, parte importante de las movilizaciones son articuladas por la Federación Nacional Campesina (FNC), mientras la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) busca con un frente sindical la sustitución del actual gobierno y pide la renuncia del Presidente de la República. Esta mesa coordinadora no logra aglutinar sino a una parte de las organizaciones campesinas, que incluyen: Organización de Lucha por la Tierra (OLP), Organización Nacional Campesina (ONAC), El Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Coordinadora de Productores Agrícolas, y organizaciones regionales tales como la Coordinadora Campesina Cordillerana (CCC) y el Movimiento de Recuperación Campesina de Curuguaty (MRCC)⁶.

Esta atomización de las organizaciones no impide acciones conjuntas, que van dando fuerza a la idea de que el orden social es el resultado de luchas sociales. Mientras tanto siguen confundidos -sin entrar en conflicto- la oligarquía terrateniente y el sector modernizante del empresariado, y se rechazan las políticas redistributivas que pudieran controlar las crecientes inequidades. En ese contexto, la pobreza y la descomposición social se agudizan. La mayor polarización de la estructura social resultante de esa forma de administrar la crisis implicará en ese escenario mayor inestabilidad y riesgos de restauración del orden autoritario. En este punto debe tenerse en cuenta que una democracia con hambre no genera adhesiones, por lo menos de los sectores excluidos. Considerando la estructura socioeconómica insostenible, sólo cabe esperar, en escenarios sin la gobernabilidad mínima necesaria, situaciones insospechadas de actores emergentes.

Bibliografía

- C.D.E. 1994 *Guía de Organizaciones Campesinas* (Asunción).
- C.D.E. 1999 *Informativo Campesino* (Asunción) N° 135.
- C.E.P.A.G. 1994 *Kokueguara Rembiosa* (Asunción).
- Dávalos M. y Rodríguez J. C. 1994[a] *Organizaciones Campesinas de Mujeres 1992-1993* (Asunción: CDE).
- Dávalos M. y Rodríguez J. C. 1994[b] *Censo de Organizaciones Campesina* (Asunción: CDE).
- Fogel, Ramón 1988 “Tierra y Democracia”, en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 96.
- Fogel, Ramón 1998 “Los movimientos campesinos y la democratización de nuestra sociedad”, en Caballero, J. y Céspedes, R. *Realidad Social en el Paraguay* (Asunción: CIPSED).
- Fogel, Ramón 1999 “Manejo de Recursos Naturales, Relaciones Sociales y Cultura”, en Fogel, R. y Hay, D. (eds.) *La Responsabilidad Social y la Visión del Futuro: Paraguay en el Siglo XXI* (Asunción: CERI/APPG).
- Galeano, Luis 1987 “El Desarrollo Socio Económico y Las Tendencias de la PEA en el Paraguay 1950-1982”, en *RPS* (Asunción) N° 70.
- Molinas, José 2000 “Luces y Sombras en la Transición Económica”, en *Última Hora* (Asunción).
- O’ Donnell, Guillermo *et al* (eds.) 1990 *Transition from Authoritarian Rule. Comparative Perspective*, (Baltimore and London: The John Hopkins University Press).
- Rivarola, Domingo 1988 “Política y Sociedad en el Paraguay Contemporáneo: El Autoritarismo y La Democracia”, en *RPS* (Asunción) N° 73.
- Schvartzman, Mauricio 1989 *Contribuciones al Estudio de la Sociedad Paraguaya* (Asunción: CIDSEP).

Notas

- 1 La superficie media de estas parcelas familiares fue entonces de 1,8 has.
- 2 Debe tenerse en cuenta que más frecuentes que las movilizaciones de tipo instrumental fueron, hasta la década del '60, las luchas pre-políticas o arcaicas tales como el referido bandolerismo social y los movimientos religiosos milenaristas (Fogel, 1988).
- 3 En ese sentido téngase en cuenta que en 1981 las explotaciones de 500 has. y más ocupaban a menos de 5000 asalariados permanentes (Fogel, 1988).
- 4 Así, mientras el costo de vida entre 1980 y 1986 subió 4 veces (3,9 para ser más preciso), el ingreso real campesino, medido a través de los precios de los principales cultivos, permaneció estable. Esto es lo que se llama empobrecimiento de las capas campesinas.
- 5 La derrota del orden autoritario se consuma con el golpe militar el 3 de febrero de 1989.
- 6 Sólo en el Departamento de San Pedro están activas La Asociación de Agricultores de San Pedro Norte, La Asociación de Agricultores Ojondivepá, La Asociación Independiente de Agricultores, ACADEI, y los capítulos regionales de la ONAC y de la FNC.

Anexo 1

Producción Agrícola e Industrial y Exportaciones 1982/97

Participaciones Sectoriales (%)	1960	1970	1980	1985	1990	1995	1998
Agricultura	36,40	31,60	26,00	27,70	27,54	26,49	27,29
Industria	15,80	19,20	18,60	17,50	16,07	14,84	14,10
Construcción, Electricidad	2,50	3,50	8,90	8,70	8,03	10,06	10,55
Comercio y Transporte	34,80	31,60	32,40	31,70	30,98	30,67	28,75
Administración Pública	4,30	6,00	3,90	4,60	4,50	5,07	5,64
Otros Servicios	6,20	8,30	10,30	9,90	9,38	9,19	9,63
Comercio y otros sectores urbanos no transables	47,80	49,30	55,40	54,80	52,90	54,98	54,58
PIB TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tasas de crecimiento sectorial (%)	1960-70	1970-80	1980-85	1985-90	1990-95	1995-98	1990-98
Agricultura	3,0	6,7	3,6	4,4	2,4	2,2	2,4
Industria	6,5	8,5	1,1	3,3	1,6	-0,5	0,8
Construcción, Electricidad	8,0	19,6	1,7	4,0	9,0	2,9	6,0
Comercio y Transporte	3,5	9,6	1,9	4,0	3,0	-0,9	1,5
Administración Pública	8,0	4,2	5,7	4,2	5,7	4,9	5,4
Otros Servicios	7,4	11,3	1,6	3,4	2,8	2,8	2,8
Comercio y otros sectores urbanos no transables	4,8	10,1	2,1	3,9	3,9	2,3	3,3
PIB TOTAL	4,5	8,8	2,3	3,9	3,2	0,4	2,9

Fuente: Banco Central del Paraguay, Cuentas Nacionales; Banco Interamericano de Desarrollo. Morley y Rob Vos, PNUD/BID/CEPAL.

Anexo 2***Producción Agrícola e Industrial y Exportaciones. 1982/97***

	1982	1988	1989	1990	1992	1994	1995	1996	1997
Agri/PIB(%) (precios constantes)	26.7	27.3	27.8	27.5	26.3	25.7	26.5	26.5	27.2
Industria (PIB%)		16.2	16.2	16.1	15.6	15.1	14.8	14.3	13.9
Exportaciones Agrícolas en US\$ millones	218	383	738	629	355	402	481	552	720
Exportaciones de Algodón en US\$ millones	122	210	307	333	209	171	297	218	97
Producción de Algodón en miles de ton.		630	642	631	420	461	330	139	323
Rendimiento del Algodón t/has	1.31	1.43	1.21	1.52	1.79	1.39	1.07	1.26	1.47
Algodón, área cultivada en miles de has.	243	441	533	415	235	332	307	111	220
Soja, Producción en miles de tons.	769	1615	1795	1033	1793	2212	2395	2670	3000
Rendimiento de la Soja t/ha.	1.94	1.88	1.98	1.87	2.82	3.01	2.87	2.84	2.82
Soja, área cultivada en miles de tons.	397	860	907	552	635	735	833	940	1065

Fuente: CEPAL, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, varios años. Los cálculos de las exportaciones de algodón son de CEPAL, *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*, varios años. Los cálculos de la producción 1998-1992 son del Banco Central del Paraguay, *Estimación de la Producción Agropecuaria* (varios años), para 1993-1997, *Cuentas Nacionales*, Banco Central del Paraguay, *Producción Agropecuaria: Síntesis y Estadística Económica* y Departamento de Economía Internacional.

Democratización y globalización: nuevos dilemas para la agricultura chilena y sus organizaciones rurales

Sergio Gómez*

Antecedentes

Para ubicar los principales desafíos que debe enfrentar la agricultura chilena en la actualidad, se deben analizar dos temas de diferente orden:

a) El avance que se ha logrado en el *proceso de democratización* de la sociedad rural, expresado entre otros en el sentido de lograr un equilibrio en el grado y nivel de organización que alcancen los diferentes actores sociales. Hasta ahora, la realidad muestra una tendencia creciente en el nivel de organización de los grupos empresariales; paralelamente, las organizaciones que expresan a los campesinos y a los asalariados agrícolas se han debilitado. Esto significa que los sectores empresariales tienen una fluida interlocución en las diversas instancias de participación del Estado, logrando que sus intereses sean atendidos, mientras que los otros sectores muchas veces ni siquiera logran ser escuchados.

b) Las *condiciones de competitividad* que ha alcanzado el sector rural para participar con éxito en el proceso de globalización de la economía. En efecto, agotada la primera fase del modelo exportador, basado en las ventajas comparativas, es necesario transitar resueltamente a una segunda fase, donde

* Doctor en Sociología, Universidad de Sao Paulo, Chile.

las ventajas competitivas pasan a ocupar un rol central. Ello tiene que ver con agregar valor a las exportaciones, mejorando la competitividad de las empresas. También significa extender el proceso de modernización de las empresas al plano de las relaciones laborales.

Para completar el cuadro, es necesario considerar la heterogeneidad de la agricultura chilena, en la medida en que su proceso de inserción en el mercado internacional muestra marcadas diferencias. En efecto, mientras la agricultura modernizada del valle central consigue su inserción exitosa en la globalización, una parte importante de la agricultura de la zona Sur tiene dificultades para integrarse con éxito en los mercados internacionales.

Este es el marco necesario para ubicar los principales problemas que enfrenta la agricultura chilena. Pero además, es necesario también considerar el contexto económico social del país -incluyendo al sector agropecuario-, que ha variado substantivamente en los últimos tiempos. Luego de más de una década de crecimiento, desde mediados de 1988 han surgido problemas que han llevado a una recesión de la economía, la cual no se ha superado aún.

Desde fines de 1998, en Chile se asiste al fin de un período donde se vivió un clima de éxito del modelo político y del sistema económico luego de una década de un buen desempeño. La situación, que había sido considerada hasta entonces como un ejemplo emblemático de transición política y de mantenimiento de un sistema que era capaz no sólo de asegurar una tasa interesante de crecimiento económico, sino además de avanzar en mejorar la distribución, se derrumbó como un castillo de naipes.

Hasta mediados de 1998, en Chile todavía se discutía acerca de la posibilidad de que la economía chilena fuera o no afectada por la Crisis Asiática. Pronto se verificó una dramática caída del precio del cobre y de otros productos destinados al mercado externo. La recesión comenzó acompañada de una creciente tasa de desocupación.

En el plano político, simultáneamente, se produce la detención de Pinochet en Londres a comienzos de octubre de 1998, que culmina con su llegada a Chile a comienzos del año 2000 en medio de más de un centenar de juicios que lo culpan de graves delitos. Estos hechos han dejado al descubierto las grandes tareas pendientes de la transición política en Chile -entre ellas, el tema de clarificar la situación de los derechos humanos- y la falta de una real reconciliación entre importantes sectores de la sociedad chilena.

Además, por su importancia se debe señalar otro elemento de fondo que también ocurrió simultáneamente: la grave crisis energética que afectó al país. Este fenómeno tuvo que ver con la sequía más severa que Chile ha tenido en el siglo XX. Este problema tuvo serias repercusiones productivas (un alto dirigente empresarial estimó una pérdida de 2,5 millones de US\$), además de las molestias para la población, que sufrió racionamientos de electricidad.

A esta situación se deben agregar otros ingredientes ligados directamente a la agricultura, de diverso origen y características, pero que coadyuvan todos a definir una nueva situación:

- movilizaciones violentas de trabajadores portuarios oponiéndose a la privatización de los puertos, en los momentos claves, en los cuales se realizaba la exportación de frutas frescas;
- movilizaciones de grupos indígenas Mapuches que reivindican derechos ancestrales sobre la propiedad de tierras que en la actualidad forman parte de grandes complejos forestales.

Las movilizaciones han realizado tomas de tierras, tala de bosques, incendios forestales (se han estimado pérdidas por 80 millones de US\$), ataques a la policía, etc. Además, estas movilizaciones han contado con una generalizada aceptación por parte de la opinión pública, lo que en parte ha impedido el uso de la fuerza pública.

Este conjunto de hechos ayudó a crear un cuadro de crisis y de falta de conducción política en las postrimerías del gobierno del Presidente Frei, asunto que arroja más de una duda sobre el modelo chileno como un caso emblemático. Los primeros meses de la administración del Presidente Lagos no han logrado revertir esta situación, en la medida que la reactivación económica ha sido más lenta que lo esperado, que la tasa de cesantía se ha incrementado y que se han difundido casos de corrupción que afectan a sectores ligados a la coalición gobernante.

Aunque puede parecer un contrasentido sostener que el modelo chileno funcionó bien hasta que enfrentó dificultades, el tema de fondo es que el modelo ha carecido de mecanismos para resolver los problemas que su funcionamiento generó.

Las organizaciones rurales

En la medida en que se analizan los nuevos tipos de conflictos que prevalecen en la actualidad, se hace necesaria una breve presentación de las principales organizaciones que los diferentes actores sociales han estructurado para expresar sus intereses.

Organizaciones empresariales

Las organizaciones empresariales rurales en Chile tienen una larga historia y han desarrollado dos líneas principales de acción:

- a) fomento para el desarrollo de la actividad agropecuaria;
- b) defensa de los intereses de sus afiliados cuando han sentido que eran amenazados.

La historia de las organizaciones empresariales muestra el énfasis en uno u otro aspecto, de acuerdo a las circunstancias que han ido enfrentando.

Así, durante largas épocas, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) se dedicó al fomento de las obras de regadío, a organizar exposiciones sobre el desarrollo de la actividad, al registro de diversas materias (desde meteorología hasta inscripción de animales finos), y al establecimiento de la institucionalidad pública del sector, como fue la decisiva participación que tuvo en la creación del Ministerio de Agricultura.

Luego, en la década que va desde 1964 a 1973, en el contexto de la realización de la reforma agraria, fue un bastión importante en la defensa de los agricultores amenazados y ayudó a crear el clima para que se consumara el golpe de estado de 1973.

Durante el gobierno militar, y hasta comienzos de la década de los '80, la SNA encabezó históricos conflictos para morigerar la aplicación del modelo neoliberal, con un éxito relativo.

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

Se trata de la más antigua e importante organización gremial del medio rural en Chile. Formada en 1838, con períodos de auge y de decadencia, ha sido tradicionalmente una herramienta eficaz para el desarrollo agropecuario del país y un eficiente instrumento para defender los intereses de los agricultores. Siempre se la ha identificado con los intereses de los grandes empresarios agrícolas de la zona central, y en la actualidad con aquellos empresarios exitosamente incorporados al proceso de modernización. Esta organización afilia aproximadamente a 10.000 agricultores, pero más importante que ese número es lo que representa en términos históricos y simbólicos: la agricultura nacional.

La Confederación de Productores Agrícolas (CPA)

La CPA es continuadora de la Confederación de Sindicatos de Empleadores, cuya base fueron los sindicatos comunales y federaciones provinciales de empleadores. Fue formada en la década del '60 al calor del proceso de reforma agraria.

Durante la década 1964/1973, esta organización revitalizó el movimiento empresarial, que hasta entonces se mantenía con un carácter bastante superestructural. Cambió sus objetivos y el nombre durante el gobierno autoritario, y se la identificó con los medianos y grandes empresarios que no habían logrado incorporarse con éxito al proceso de modernización. En el pasado disputó con la SNA, sin éxito, la hegemonía de la representación de los empresarios de la zona central. En la actualidad se encuentra desactivada.

El Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur (CAS)

El CAS es la expresión organizada del empresariado de la zona sur; aquella de una colonización más tardía, con una fuerte presencia de inmigrantes europeos. Se trata de un empresariado básicamente mediano, que nunca se identificó con los sectores políticos tradicionales del país y desde siempre ha logrado contar con una capacidad de movilizar a los agricultores cuando ha sentido amenazados sus intereses.

El CAS posee organizaciones provinciales muy activas en cada una de las provincias que cubre su espacio de representación (SOCABIO, Sociedad Agrícola de Bío Bío; SAMA, Sociedad Agrícola de Malleco; SOFO, Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco; SAVAL, Sociedad Agrícola de Valdivia; SAGO, Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno; AGROLLANQUIHUE, Asociación de Agricultores de Llanquihue; OGANNA, Organización Ganadera de Aysén).

Se trata de organizaciones provinciales activas, con peso en la estructura de poder regional, varias de las cuales cuentan con una infraestructura considerable (recintos feriales, medios de comunicación, centros de comercialización de insumos, etc.).

Además, en la medida en que la economía de la zona sur del país depende casi enteramente de las actividades silvo-agropecuarias, sus agricultores resultan ser ejes fundamentales en la estructura de poder regional.

Igualmente hay que considerar a la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA), antigua organización empresarial de la región austral. Apesar de ser integrante de la SNA, esta organización mantiene un planteamiento más confrontacional, y termina insistiendo en que la agricultura requiere de un tratamiento especial al margen del funcionamiento del mercado, como se verá más adelante.

Los Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT)

Las principales organizaciones de este tipo son los Grupos de Transferencia Tecnológica (GTT), formadas por pequeños grupos de quince a dieciocho agricultores vecinos de un sector que tienen afinidad como productores. Predominan los medianos agricultores y, dentro de ellos, los jóvenes y de mediana edad, con una motivación de superación en su condición de productores mediante el uso de nuevas tecnologías.

Los GTT están compuestos por 1.200 agricultores, organizados en aproximadamente noventa grupos. Cuentan con el apoyo de la SNA para funcionar, y desarrollan una política conducente a permitir la incorporación de pequeños agricultores.

Organizaciones especializadas

Las organizaciones específicas por producto y por actividad juegan un papel de importancia creciente como elementos articuladores de los intereses cada vez más singulares que tienen los productores.

Ello no quiere decir que estas organizaciones hayan desplazado a las organizaciones gremiales o a profesionales, sino que cada una de ellas, desde su particular especificidad, representa con más fuerza los intereses de los agricultores en su conjunto.

Esto se refuerza a través de la “afiliación múltiple”, vale decir, la participación de un mismo agricultor en diferentes organizaciones, utilizándolas de acuerdo a las necesidades que enfrente en cada caso.

Dentro de las organizaciones especializadas, las más importantes son las organizaciones por producto y las que se agrupan en torno a una actividad.

Estas últimas son organizaciones que abarcan rubros productivos y que se definen de acuerdo a la ubicación que tienen en la cadena de producción y distribución. Así, por ejemplo, los productores de fruta se han organizado en la Federación de Productores de Fruta (FEDEFruta), mientras que los productores forestales y sus derivados se han organizado en la Corporación Nacional de la Madera (CORMA).

Las principales empresas exportadoras de fruta han conformado la Asociación de Exportadores de Chile. Su principal función es proteger y apoyar las actividades de sus asociados en relación a la producción, información, coordinación y apoyo de la exportación.

Además, es necesario señalar que las relaciones que se dan entre ellas son en muchos casos conflictivas. Así, se pueden mencionar los constantes conflictos que se dan entre los dirigentes de FEDEFruta, que representa los intereses de los productores de fruta, con los de la Asociación Nacional de Exportadores que, como lo indica su nombre, representa a quienes intervienen en la comercialización de la fruta en los mercados externos.

Organizaciones Campesinas y de Asalariados

Para tener una idea de la situación del movimiento campesino a comienzos de la década de 1970, se puede señalar que existían 282.617 asalariados organizados en sindicatos comunales, los que a su vez formaban federaciones provinciales que constituían las confederaciones nacionales. Por su parte, existían trescientas ocho cooperativas campesinas que agrupaban a 75.000 pequeños agricultores y minifundistas. Con respecto a la primera categoría, se encontraban organizados prácticamente todos los asalariados. En cuanto a los pequeños agriculto-

res, alcanzaban aproximadamente al 50% de los campesinos potencialmente organizables.

En cuanto a la composición del tipo de afiliados a los sindicatos, aún cuando la mayoría eran asalariados, no lo eran exclusivamente, asunto que se explica por la importancia que tenía el número de afiliados en la distribución del financiamiento. Con todo, como se ha planteado, hacia el final del gobierno de la Unidad Popular, se encontraba afiliado a sindicatos casi el 100% de la base potencialmente organizable.

Con posterioridad al golpe de estado en septiembre de 1973 se requisaron los bienes de las Confederaciones Ránquil y Unidad Obrero Campesina, y sus dirigentes fueron perseguidos y encarcelados. En 1978 se declaran disueltas estas dos Confederaciones. Finalmente, en 1979 se deroga la ley de sindicalización campesina.

Sindicatos

Los sindicatos fueron tradicionalmente las organizaciones más importantes que existieron en el mundo de los trabajadores rurales. Recordemos que prácticamente todas las organizaciones sindicales de base fueron severamente tratadas luego del golpe de estado, en un grado proporcional a la capacidad de presión que habían ejercido.

A comienzos de la década de 1990 se llegaba a 45.000 afiliados en diversos tipos de sindicatos: los independientes, los inter-empresa, y los de empresa. Los sindicatos independientes fueron constituidos como una forma de mantener estructuras partidarias en el campo, sin poder de negociación. Los sindicatos inter-empresa fueron la fórmula encontrada por el gobierno militar para desactivar los antiguos sindicatos comunales. Sólo los sindicatos por empresa tendrían capacidad para llevar adelante negociaciones colectivas.

La tendencia en la mayoría de las confederaciones se muestra descendente, desde los campesinos afiliados a sindicatos independientes (46,9%) pasando por los sindicatos inter-empresas (26,3%) y llegando a los sindicatos de empresa (22,8%).

Lo que puede constituir un signo de vitalidad es la organización que se han dado las mujeres, particularmente a partir de las temporeras de la fruta. Ellas animaron este sector desde el Departamento Femenino de la Comisión Nacional Campesina, que en junio de 1998 se ha constituido como una Asociación Gremial (AG): Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Por su potencial importancia, este tema será tratado más adelante.

Cooperativas campesinas

Las cooperativas campesinas tuvieron como ámbito espacial a la comuna. Se integraron verticalmente en Federaciones Provinciales (luego se adaptaron a las

Regiones) y en una Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas, CAM-POCOOP. Este tipo de organización ha sido unitario, a diferencia de lo que hemos visto para el caso de las organizaciones sindicales.

De las aproximadamente trescientas cooperativas que tenían 75.000 campesinos afiliados en 1973, en 1976 ya se contaba sólo con doscientas veinte cooperativas y con 51.000 socios; en el año 1992 había ciento dieciséis cooperativas campesinas con 11.947 campesinos efectivamente afiliados. Al año 1996 se podía observar una significativa recuperación, con doscientas cincuenta y cuatro cooperativas, con un total de 24.000 socios.

Las cooperativas que se forman desde 1990 en adelante afilian a un reducido número de socios, como una manera de asegurar una efectiva participación y control de éstos en la organización. También ello refleja una negativa experiencia de las grandes cooperativas del pasado, que tenían problemas de funcionamiento y eran prácticamente dirigidas por los técnicos encargados de asesorarlas.

Asociaciones gremiales (AG)

El origen de las AG se puede encontrar en una doble vertiente. Por un lado, frente al debilitamiento generalizado de las organizaciones sociales en el campo, durante el gobierno autoritario se aprovechó como resquicio legal una disposición creada por el propio gobierno para debilitar a las organizaciones corporativas de los colegios profesionales. En efecto, para debilitar a los colegios profesionales, que resultaban molestos para el régimen por la representación social que tenían y por ser considerados un obstáculo para el funcionamiento del modelo neoliberal, se crean las AG como entidades inocuas. Esta fórmula legal fue aprovechada para fortalecer la organización campesina.

Por otro lado, la actividad de desarrollo rural realizada por una mayoría de ONGs normalmente terminaba en la organización de los destinatarios de los programas, para lo cual se aprovechó la fórmula de las AG.

Estos dos elementos explican el surgimiento de las AG como organizaciones transitorias mientras se mantenía vigente el autoritarismo. Pero dichas organizaciones permanecieron en el tiempo, y se desarrollaron instancias de coordinación nacional, creándose en 1989 la "Coordinadora Nacional de AG". Básicamente, las AG reivindican los intereses de la agricultura familiar, la valorización del trabajo del campesino y de su familia, su cultura, su contacto con la naturaleza, y el arraigo a la tierra.

En referencia a la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas ya mencionada, hay que señalar que tiene bases desde la Iª hasta la Xª Región del país. Su primera Asamblea Nacional se realizó en 1999 en Santiago, con la participación de trescientas delegadas. Esta organización puede tener un efecto interesante en el conjunto del movimiento campesino.

Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile (MUCECH)

A raíz de las movilizaciones en torno a la celebración de los veinte años del dictado de la Ley N° 16.640 sobre Reforma Agraria, en algunos de cuyos eventos participaron dirigentes de organizaciones cooperativas y asociaciones gremiales, la CNC decidió convocar a los dirigentes de todas las organizaciones campesinas a un “Primer Encuentro de la Unidad del Movimiento Campesino”, reunión que se celebró en la localidad de Talagante en noviembre de 1987.

Este evento culminó con la firma de un acuerdo entre todos los dirigentes para establecer una “coordinación unitaria”, que sería el germen de la constitución del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, MUCECH, el cual debutaría públicamente en julio de 1988, con motivo de un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria.

El MUCECH incluye a todas las organizaciones expresadas en la CNC, en CAMPOCOOP, a las AG, y a las organizaciones del pueblo Mapuche “Ad Mapu”, “Nehuén” y “Arauco”. También ha establecido organizaciones regionales en aquellos lugares donde sus organizaciones de base son más activas. En la práctica, el MUCECH se ha convertido en la instancia de representación del conjunto de las organizaciones campesinas frente a las autoridades de gobierno.

Hay que destacar que las organizaciones campesinas y de asalariados, en su conjunto, se encuentran seriamente debilitadas. Partiendo de la situación de subsistencia que lograron mantener durante el gobierno militar, no se han podido desarrollar a partir de 1990.

Nuevas movilizaciones en el campo: la demanda sectorial

En esta sección se entregan antecedentes sobre los nuevos conflictos confrontacionales que se expresan en la actualidad, y que tienen como actores por un lado al conjunto del sector rural, y por el otro al Gobierno como expresión de la sociedad global.

Durante 1995, más de treinta años después del inicio de las grandes movilizaciones encabezadas por los trabajadores agrícolas a mediados de la década del ‘60, se ha asistido a movilizaciones de los empresarios agrícolas en las cuales éstos han logrado involucrar al conjunto del sector rural.

Movilización de San Carlos, 1995

Esta Asamblea, convocada por la Sociedad Nacional de Agricultores (SNA), requiere de un análisis minucioso, ya que al margen de los resultados inmediatos que pueda haber logrado, constituyó un hito en la historia reciente de la agricultura.

El acto se desarrolló en un lugar neutral dentro de las ancestrales divisiones que han caracterizado a la agricultura de este país, expresadas en el pasado en viejas rivalidades entre la SNAY el Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur (CAS). San Carlos, en la Provincia de Ñuble, el lugar escogido, es una tierra de todos.

Por otro lado, si se trata de un evento de representación de los intereses generales de la agricultura, el lugar más adecuado es una medialuna, donde se realiza el rodeo, actividad con la que se identifica al hombre de campo. Los teatros y coliseos son espacios para demostraciones de los pobladores urbanos, así como las calles y las carreteras lo son para los políticos. La medialuna de San Carlos fue efectivamente el lugar adecuado para esta manifestación del mundo rural.

Lograron reunir aproximadamente a unos 25.000 agricultores en pleno invierno, lo que no es una tarea fácil.

Dicha reunión no tiene precedentes en la historia de este país. Varias décadas dedicadas al estudio de la agricultura y de los gremios campesinos y empresariales, nos permiten aseverar que una asamblea de estas dimensiones no tiene antecedentes. Ni en la época de la reforma agraria, ni en la crisis de comienzos de los años '80.

Para reunir a ese grupo que acudió a San Carlos y que mantuvo la disciplina mostrada, se requerían varias condiciones. La primera, contar con una organización que fuera capaz de convocar y de controlar el comportamiento de sus asistentes. La presidencia de Ernesto Correa en la SNAtuvo el mérito de haber ordenado la casa. La SNAd 1995, con todos los gremios agrícolas y de todas las regiones incorporados a su estructura y dirección, es el fruto de las reformas que se introdujeron en 1994. También se necesitó contar con una eficiente organización. Pero ello no bastaba. El llamado de la SNAlogró establecer una fina sintonía con lo que en ese momento sentían vastos sectores del campo: había que superar las causas que llevaban a que un amplio sector de productores se encontrara en problemas y sin perspectivas para el futuro, cuestión que estalló con el ingreso de Chile al acuerdo del MERCOSUR, como se verá más adelante.

Los asistentes no eran sólo socios de la SNA. Había agricultores de los más diversos sectores: grandes, medianos y chicos. Es obvio que los más vociferantes pertenecían a las primeras categorías. Pero había parceleros y pequeños agricultores. Tampoco eran todos de derecha, aunque éstos pueden haber sido los más locuaces. Quienes participaron en la Asamblea eran básicamente hombres de campo. Plantear que se trataba de "acarreados", aunque fueron muchos los autobuses que transportaron a los asistentes, es simplemente no entender el sentido que tuvo el acto. El traslado de muchos participantes en autobuses puede ser considerado más bien otro indicador del grado de organización que tuvo el acto.

La asamblea comenzó con la transmisión de la grabación del discurso que pronunció el Papa Juan Pablo II en su visita a Chile, cuando en Temuco dirigió un men-

saje cuyo contenido es el apoyo a la nobleza que significa la agricultura como actividad, destacando el papel que juegan los hombres de campo. Ello provocó el silencio necesario para comenzar con solemnidad, y marcó el ambiente general en que se desarrollaría el resto del acto. Luego siguieron discursos del dirigente de los agricultores de Ñuble como anfitrión, y de los vicepresidentes de la SNA que representaban a las diferentes regiones. Fueron discursos con quejas muy precisas, y al mismo tiempo extraordinariamente duras para con los poderes públicos responsables de las políticas hacia el sector. El presidente de la SNA ofreció una visión de conjunto -también muy dura- y señaló medidas precisas que se deberían adoptar. El tono de los discursos fue duro, pero siempre respetuoso. El acto terminó con la Canción Nacional, que contrariamente a lo que algunos pedían (que se cantara con todas las estrofas, como se hacía durante el gobierno militar), se realizó en la forma acostumbrada históricamente, tal como se hace en la actualidad.

El acto, de corta duración, concluyó sin incidentes, contra las previsiones que se podían estimar. Incluso algunos creyeron que no faltaría un grupo de exaltados que al calor del entusiasmo cortara transitoriamente el camino. Todo se desarrolló en orden.

El eje central de la demanda planteada fue que los agricultores exigían al país -y por cierto, el Gobierno tiene un rol muy importante que cumplir- que querían continuar siendo agricultores. Esta fue la demanda medular. En la acepción de agricultor se dio cabida de una manera muy explícita a los pequeños agricultores y a los parceleros. Se planteó en definitiva que el campo debe seguir existiendo. Que la ruralidad es un componente importante para el desarrollo armónico del país como nación. Que se debe definir una Política de Estado que haga esto posible.

Las demandas que se basan en la propia afirmación del grupo son más fuertes que las que tienen su origen en las posiciones del contrario. En un estudio clásico sobre los orígenes de la revolución mexicana, Arturo Warman plantea que los campesinos de Morelos se involucraron en ella básicamente porque luchaban para seguir siendo campesinos. No se trata de establecer situaciones paralelas, sino de llamar la atención, en el sentido de que la demanda de San Carlos no se basaba en un ataque al Gobierno, y su eje debía buscarse en la identidad de los propios agricultores.

En la Asamblea de San Carlos no se planteó entonces la defensa de prácticas tradicionales y formas de producción ineficientes. Se exigió definir reglas de juego para que la incorporación de Chile a los tratados de comercio internacional no terminara con gran parte de la agricultura, y que en la modernización del sector tengan la oportunidad de participar amplios sectores. Llamó la atención la posición nacionalista y anti-extranjera de algunos de los oradores (anti-productos extranjeros, transnacionales en el agro, inversionistas extranjeros en proyectos agro-ecológicos), y contra los acuerdos comerciales internacionales NAFTA y MERCOSUR.

En cuanto a las perspectivas de este acto, se puede señalar que la SNA logró un activo que no poseía antes de esta movilización: afianzó la unidad de las organizaciones y pudo expresar con más fuerza sus planteamientos.

El comentario editorial de el diario *El Mercurio* así lo entiende: “...El reciente encuentro agrícola realizado en San Carlos persigue el propósito de generar un grupo de presión similar a los que se han concertado tanto en Europa como en otras latitudes para exigir cambios en ciertas políticas estatales que se estiman injustas...” (8 de julio de 1995).

En definitiva, se puede constatar un sector campesino y de asalariados agrícolas atomizados y débiles, frente a un movimiento ruralista empresarial fuerte y emergente.

Entonces, frente a esta situación, se pueden señalar algunas reivindicaciones. El ruralismo será más fuerte en Chile si considera los problemas endémicos que afectan a la pequeña agricultura. También será más fuerte si se realizan esfuerzos sistemáticos por modernizar las relaciones laborales en las empresas agrícolas, creando condiciones para que el sector laboral pueda establecer organizaciones sindicales modernas en empresas fuertes, con empresarios que las respeten. Sobre el tema de la modernización de la pequeña agricultura, del desarrollo rural sobre la base de actividades no solamente agrícolas y la integración del sector laboral a las empresas, hay un amplio camino por recorrer.

Luego de la movilización de San Carlos, la directiva de la SNA intensificó un fuerte trabajo de lobby junto a la totalidad de los partidos políticos y a las propias organizaciones campesinas.

Como resultado de este trabajo se constituyó una Comisión integrada por los presidentes de las Comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara de Diputados, por representantes de *todos* los partidos políticos con representación parlamentaria, y con representantes de la SNA y del MUCECH. Ellos elaboraron un documento titulado *Agenda para el Desarrollo de la Agricultura y la Ruralidad Chilenas* donde se plantea textualmente:

“...Con el objeto de proyectar el futuro de la agricultura y el medio rural de Chile y, a su vez, para enfrentar las dificultades por las cuales atraviesan la agricultura, los campesinos, los trabajadores permanentes y temporales del campo y la sociedad en su conjunto, las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras del Congreso Nacional convocaron en el mes de agosto a una Comisión Técnica Especial Agrícola, conformada por representantes de los partidos políticos con presencia parlamentaria y del MUCECH y de la SNA...”.

“...A partir de un trabajo realizado sobre la base de reuniones semanales, quince en total, con la presencia de especialistas y diversos sectores pro-

ductivos, gremiales e institucionales, se constituyó una plataforma de consenso. (...) Es necesario destacar que estas propuestas fueron fruto de un diagnóstico compartido, en que han quedado de manifiesto los impedimentos estructurales para que nuestra agricultura, empresarial y campesina, se desarrolle como uno de los sectores productivos dentro de la economía. (...) La agricultura requiere un tratamiento especial, no sólo por los rasgos estratégicos que conlleva, tales como la alimentación de la población, el poblamiento del territorio nacional y la salvaguardia del ambiente, sino porque todavía, a las puertas del siglo XXI, no existe un país que pueda prescindir de ella sin enfrentar costos irreparables de la más variada índole...”.

La larga cita muestra el grado de consenso que se logró a partir de esta movilización.

Es necesario dejar registrado el hecho de que a partir de esta situación, básicamente creada por la SNA, el MUCECH alcanzó una presencia y un protagonismo en los medios de comunicación social nunca antes logrados en su historia como organización.

Este documento fue ampliamente difundido durante los últimos meses de 1995.

Luego, en el mes de enero de 1996, la SNA, junto con los encargados de las Comisiones de Agricultura del Congreso Nacional, realizó once asambleas con empresarios agrícolas y pequeños agricultores en ciudades capitales entre las Regiones V y X. También participaron los parlamentarios de las regiones y representantes de las actividades políticas, económicas, religiosas y culturales de cada provincia.

El objetivo de estas reuniones fue dar a conocer las conclusiones de la Comisión y materializar el compromiso de las comunidades provinciales con el futuro de la agricultura chilena. En estas asambleas se firmó el *Acta de Compromiso con la Agricultura Chilena*. Allí se plantea sin rodeos la necesidad de lograr un tratamiento especial para la agricultura “...no sólo por los rasgos estratégicos que conlleva, tales como la alimentación de la población, el poblamiento del territorio nacional y la salvaguardia del medio ambiente, sino porque todavía, a las puertas del siglo XXI, no existe un país que pueda prescindir de ella sin enfrentarse a costos irreparables de la más distinta índole...”.

Movilizaciones en contra de negociaciones para la incorporación al MERCOSUR, 1996

Otro conflicto importante de carácter sectorial se inició formalmente en el mes de marzo de 1996, a raíz de las negociaciones del Gobierno de Chile para lograr la incorporación al tratado del MERCOSUR; concluyó en septiembre del mismo año.

La posición de las organizaciones empresariales planteaba ubicar los productos agrícolas tradicionales (trigo, maíz, arroz, remolacha y oleaginosas) y la carne de ganado vacuno dentro de una lista de excepciones permanentes, a fin de proteger la producción nacional con el arancel regular de importación (11%). Se sostuvo que esta posición se encontraba avalada por el documento ya analizado, y contaba con el apoyo del propio Ministro de Agricultura.

En otras palabras, de acuerdo a los dirigentes empresariales, altos personeros de Gobierno habían dado garantías de que esta posición sería defendida en las negociaciones. Sin embargo, en una negociación que se inició en las últimas rondas, los países del MERCOSUR plantearon como condición para continuar con las conversaciones sacar la lista de los productos agrícolas tradicionales, y en cambio negociar un plazo razonable, de quince a dieciocho años, para llegar al arancel cero. Para el caso del maíz, arroz, remolacha, oleaginosas y carne de ganado vacuno, la tasa arancelaria comenzaría a bajar en el año diez y terminaría en el año quince. Para el caso del trigo, comenzaría en el año ocho, y el arancel terminaría de bajar el año dieciocho. Parece importante recordar que en el marco del NAFTA México negoció el maíz con un plazo de diez años.

El problema que enfrentaba la agricultura tiene una doble dimensión. Por un lado, para el sector de la agricultura tradicional, los países integrantes del MERCOSUR tienen ventajas comparativas naturales para producir cereales, oleaginosas, arroz, leche y carne. A su vez, la zona centro-sur y sur no tiene condiciones para producciones exportables, y las pequeñas propiedades no poseen condiciones para aprovechar economías a escala. Esta medida afectaría a los pequeños productores situados en las Regiones VII y X, que producen pequeñas cantidades de estos productos para el mercado en condiciones tecnológicas y financieras precarias. Por el otro, también se vería agudizada la condición de los productores medianos y grandes que arrastran una situación financiera delicada desde la década del '80. Pero ésta se encontraba comprometida con o sin MERCOSUR.

A fines de marzo se realizaron asambleas de agricultores en las principales ciudades del Chile agrícola, desde Talca hasta Puerto Montt, con el objeto de planificar una "toma" de carreteras en 20 puntos entre el cruce de Bobadilla (sur de Talca) y Puerto Montt para el día 28 de marzo. La idea era perturbar el tráfico en la principal carretera del país (Ruta N° 5) mediante una caravana de vehículos que asistía a un "funeral ficticio". El deudo sería la agricultura del sur. Para ello se pidió el apoyo del comercio (abriendo el comercio con crespones negros) y de los transportistas. Estas actividades, encabezadas por organizaciones regionales de la SNA, contaron con el respaldo de la directiva nacional de la Sociedad.

En el contexto de un despliegue policial ostensible en las carreteras para asegurar el normal flujo vehicular se realizó el movimiento, que consistió en cortar durante algunas horas la carretera, en forma pacífica, en veintiséis puntos.

La SNA calificó la movilización como un éxito, mientras que el Gobierno consideró que había sido una manifestación minoritaria.

El día de la movilización, la SNA publicó un desplegable de una página completa en los principales diarios nacionales, bajo el título *La consumación de un engaño*. Dicho texto presenta un buen resumen de los motivos de la movilización y las reivindicaciones.

El movimiento se explicó por dos razones. En primer lugar, la falta de cumplimiento de un acuerdo al que el Ministro de Agricultura había llegado con los dirigentes empresariales, en el sentido de mantener listas de excepción. Esto es lo que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio denominó como las “señales equívocas” que los dirigentes agrícolas recibieron. En segundo lugar, por la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones, caracterizadas por la falta de información, de participación y de transparencia. No sólo no fueron consultados, sino que además se enteraron de algunos aspectos de los acuerdos a través de los negociadores de otros países.

La reivindicación central nuevamente fue la defensa de la ruralidad por el menoscabo de la seguridad nacional y la soberanía territorial, la agudización del proceso migratorio, el retroceso de vastas regiones del país que viven de actividades vinculadas al agro, y la irrecuperable degradación del acervo cultural que se anida en el medio rural.

En cuanto al rol que jugaron los partidos políticos, hay que destacar que promovieron verdaderos programas de apoyo integral para la reconversión agrícola. Entre ellos, Renovación Nacional dio a conocer un Plan Pro-Agro, mientras que la Unión Democrática Independiente, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido Socialista, elaboran sendas declaraciones y documentos.

Finalmente, la SNA, al sentirse respaldada por parlamentarios de todo el espectro político, intentó cambiar de escenario y llevar la discusión del acuerdo al Congreso Nacional. Para el Gobierno no era necesaria la ratificación por parte del Parlamento, por cuanto consideró que esta negociación era una extensión del Tratado de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) suscrito por Chile en 1980. Sólo bastaría la firma del Presidente de la República.

Para los dirigentes de la SNA, la ratificación del Acuerdo por parte del Parlamento y el ser recibidos por el Presidente de la República luego de cuatro meses de solicitar entrevistas, fueron las dos condiciones para evitar nuevas movilizaciones.

En cuanto a la reunión con el Presidente de la República, ésta se produce con todo el ritualismo de rigor. La directiva de la SNA fue recibida por el Ministro de Agricultura, y concuerdan preparar la reunión con el Presidente para la semana

siguiente. El mismo día de esta entrevista, el Ministro de Agricultura recibe a los dirigentes del MUCECH quienes minutos después son recibidos por el Presidente. En la ocasión los dirigentes manifestaron su conformidad con el Acuerdo del Tratado, rechazando los medios de presión utilizados por la SNA, y de paso solicitaron compensaciones.

Una semana más tarde el Presidente de la República recibe a la Mesa Directiva de la SNA y se plantea la activación del Consejo Nacional de la Agricultura, estructura integrada por autoridades del Gobierno y del sector privado. Esta entidad debe entregar un plan al Presidente que considere el MERCOSUR pero que lo trascienda, con una perspectiva de largo plazo y que abarque el desarrollo de todos los sectores de la agricultura.

Por último, la SNA logró con sus movilizaciones una mejor posición para conseguir compensaciones para sus afiliados, que se expresan en:

1. que todos los partidos políticos con participación parlamentaria en el ámbito nacional apoyarán programas de reconversión de la agricultura;
2. que el empresariado de otras ramas de la actividad económica no los dejará solos y aislados;
3. aumentar su capacidad de presión en el Congreso Nacional.

Sobre este último aspecto hay que agregar que el día 10 de septiembre de 1996 el Parlamento chileno aprobó la asociación del país con el MERCOSUR, como era previsible. Uno de los principales puntos que fue negociado por el Gobierno con los parlamentarios de todo el espectro político fue el tratamiento especial que el Gobierno otorgaría al sector agrícola. Como una condición para la aprobación, se estableció que el Gobierno implementará un plan de ayuda especial a los pequeños y medianos agricultores, que en un plazo de cinco años otorgue US\$ 500 millones a los efectos de bonificar la reconversión de los agricultores que serán afectados por la adhesión de Chile al MERCOSUR.

Finalmente, la salida del Ministro de Agricultura Emiliano Ortega en septiembre de 1996, y su reemplazo por Carlos Mladinic, el principal negociador del ingreso de Chile al Acuerdo del Tratado del MERCOSUR, marca sólo un retroceso aparente de las posiciones de la defensa por preservar una ruralidad expresiva en el país.

Prueba de ello es la primera intervención pública del nuevo ministro, quien aseguró que el Gobierno respetaría la entrega de quinientos millones de US\$ adicionales para el sector como una manera de paliar los perjuicios para un sector de la agricultura como efecto del ingreso al MERCOSUR. Más aún, planteó que el compromiso adquirido no es sólo un objetivo del Gobierno, sino que forma parte de una política de Estado.

Claramente, se logró un avance en pos de mejorar las condiciones de “competitividad” para enfrentar mejor el desempeño de la agricultura en el proceso de globalización.

Pero el avance en el proceso de la democratización tiene como tarea pendiente el hecho de que las organizaciones campesinas y de asalariados se mantienen en una situación de extrema debilidad.

La amenaza de movilizaciones de los agricultores del Sur: 2000

Los problemas que enfrentan los agricultores del Sur, sobre todo aquellos ubicados en las regiones de la Araucanía y la de Los Lagos, se han agravado en el último tiempo. A sus tradicionales problemas, como el endeudamiento endémico y problemas con la competencia de productos importados, se ha agregado la baja en términos nominales del precio de la leche, el débil funcionamiento de las bandas de precio y factores adversos de clima, como lo fueron las lluvias de verano y los temporales del otoño.

El 2 de junio se reunieron en Temuco los dirigentes de las organizaciones que integran el Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur (CAS), vale decir SOFO de Temuco, SAVAL de Valdivia, SAGO de Osorno y Agrollanquihue, y los presidentes de las federaciones de productores de leche, carne y remolacha y acordaron realizar una protesta masiva en Santiago el 21 de junio para exigir al Gobierno una serie de medidas destinadas a superar lo que, a su juicio, es una de las crisis más severas que ha enfrentado la agricultura del Sur. Luego, decidieron cambiar la fecha para el 5 de julio, quinto aniversario de la Asamblea de Agricultores de San Carlos, que se comentará más adelante.

Posteriormente, en otra reunión efectuada en Temuco el mismo 21 de junio, la protesta fue nuevamente aplazada hasta el 15 de agosto. Ello, para dar tiempo al Gobierno para que en una mesa de trabajo, un Foro Agrícola, integrado por representantes de los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Relaciones Exteriores, los presidentes de las Comisiones de Agricultura del Senado y la Cámara de Diputados, un representante del mundo académico y los máximos dirigentes de las organizaciones de los productores y de organizaciones campesinas, encuentren una solución de fondo a los problemas del sector.

Este último aplazamiento no fue fácil de lograr. En la reunión efectuada en Temuco, con una duración de 7 horas, primó la posición de dar una oportunidad al nuevo Gobierno – que daba señales concretas – para buscar solución a los problemas de arrastre de la agricultura. Esta posición sustentada por el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía – que había asistido a una reciente reunión de trabajo convocado por el Ministro de Agricultura en Punta de Tralca, de la que se marginó el presidente del CAS, Manuel Riesco – terminó por convencer a los dirigen-

tes del Sur, especialmente con el argumento sobre la necesidad de mantener la unidad gremial. En efecto, luego de una larga historia de desencuentros entre las organizaciones gremiales del campo, la anterior directiva de la SNA, bajo el liderazgo de Ernesto Correa, logró afianzar la unidad y gracias a ello, los gremios agrícolas en la actualidad tienen capacidad para hacerse escuchar. El hecho de que el presidente del CAS ocupe la vicepresidencia de la SNA, es parte importante de esta unidad gremial. En el caso de que no se llegue a una solución satisfactoria en este Foro, la manifestación del 15 de agosto sería de proporciones y con el apoyo de todas las organizaciones.

En lo que sigue se analizarán los objetivos del movimiento, la oportunidad en que fue planteado, la posición de los diversos actores del conflicto, antecedentes sobre movilizaciones empresariales en Chile y América Latina y los problemas de fondo que quedan develados a través de este incidente.

El petitorio que da cuenta de los principales problemas que aquejan a los agricultores del Sur, consta de seis puntos: 1. Piden una sobretasa para la leche importada y una Ley de la Leche, de modo de lograr sustentabilidad para los productores lecheros. 2. Mantención efectiva de las bandas de precios para el trigo, la remolacha y el aceite, evitando la perforación de las bandas a través de la importación de mezclas. 3. Aplicación del seguro agrícola, tal como fuera anunciado. 4. Inspección rigurosa de la carne importada desde Argentina exigiendo su tipificación, al igual que se trata a la producción nacional. 5. Renegociación de las deudas con los bancos y renegociar créditos con el Banco del Estado. 6. Revisión del protocolo acordado en el Senado para compensar los efectos de la rebaja de aranceles debido a la incorporación de Chile al MERCOSUR.

En cuanto a la necesidad y la oportunidad de realizar una movilización, los dirigentes del CAS estiman que el uso de mecanismos de presión resulta eficaz para que sus demandas sean atendidas. No les interesa dialogar en una oficina a puertas cerradas con una autoridad. En cambio si se movilizan con cierto escándalo, son escuchados por la autoridad y por la opinión pública. Así por ejemplo, el 15 de junio, en una bulliciosa protesta de unos 300 agricultores en la Plaza de Armas de Puerto Montt, distribuyeron papas y leche a 200 cesantes que esperaban una solución en su calidad de damnificados por los temporales, de parte de la Municipalidad. Con este tipo de actividades, muestran sus problemas reales y logran captar simpatía de la opinión pública.

La oportunidad para la movilización está dada por la cercanía de las elecciones municipales (octubre del 2000), donde la posición que adopten los diferentes sectores será un elemento importante en la decisión del voto. El peso político de los agricultores no es menor. El hecho de ser parte de la actividad económica fundamental de la región y la sobrerrepresentación política que les permite elegir tantos representantes como lo hacen centros urbanos densamente poblados, les otorga una fuerza especial. A ello hay que agregar el hecho de que su actividad atra-

viesa por una severa crisis que afecta su posibilidad de sobrevivencia. Además, algunas reacciones de parte de autoridades de Gobierno (por ejemplo, la movilización es “política”, del Ministro de Agricultura o “para qué marchan... mejor les ponemos un bus...”, del Presidente de la República) contribuyeron a subir la presión de las bases, que en varias ocasiones sobrepasan las posiciones de los dirigentes.

En definitiva, los agricultores del sur, protestan por la falta de una política que defienda los intereses de la agricultura tradicional. La SNA, en cambio, sigue preocupada por crear condiciones para el desarrollo de la agricultura que se encuentra globalizada, aún cuando recibe y procesa las demandas de los agricultores del sur.

El tema de fondo es que estas movilizaciones apuntan a pedir un tratamiento especial para la agricultura tradicional dentro del modelo neoliberal. Para el presidente del CAS “desde el punto de vista de los economistas, hay que aprovechar las ventajas comparativas. Eso es muy bonito en la teoría, pero en la práctica no se ha podido llevar a cabo en ninguna parte.” Termina afirmando: “por teoría, no quieren entender (los economistas) que la agricultura del sur de Chile compite con la tesorería y no con la agricultura de otros países”.

Veamos sumariamente los actores de este conflicto y sus principales argumentos.

1. El punto de vista del CAS y los agricultores del sur, y así lo ha sido históricamente, consiste en reivindicar una política que asegure una rentabilidad de los productores que representa, de ganado (carne y leche), trigo y remolacha. Si los productores de estos rubros en el extranjero reciben subsidios, ellos también deben tener acceso, so pena de salir del mercado. En un sentido estricto, no se plantea vagamente la defensa de los productores, sino de los productores eficientes. Su argumento central es que no los pueden someter a competir con los Ministerios de Hacienda de los países del norte. Mantener la agricultura tradicional, significa mantener una población ocupada en las regiones. La imagen final de la aplicación de la teoría de ventajas comparativas, es un sur despoblado con un gran bosque, luego de la desaparición de los pequeños y medianos agricultores.

2. La posición de la SNA difiere de la del CAS ya que debe representar una visión del conjunto de la agricultura chilena, que incluye los intereses de los agricultores de la zona central que se han incorporado con éxito al modelo. La directiva de la SNA acepta el actual modelo de desarrollo y exige que se mantengan las correcciones necesarias para que el mercado pueda funcionar (bandas de precios, etc.) considerando explícitamente las distorsiones que tiene el funcionamiento de los mercados de productos agrícolas, en función de los generosos subsidios que entregan los países desarrollados a sus agricultores.

3. Dentro del Gobierno no hay una sola posición. Hay un sector, que se expresa a través de las autoridades económicas, cuyo planteamiento central es disciplinar al sector en las reglas del modelo y, de mala gana, aceptan las correcciones actualmente existentes (Bandas de Precios, COTRISA, etc.) pero como una situación de límite. Por otro lado, se encuentran las posiciones de las autoridades del Ministerio de Agricultura, que son decididos partidarios de corregir todas las distorsiones existentes y para los cuales la situación actual es sólo un piso, desde el cual se podría avanzar.

El caso chileno no es una excepción dentro de América Latina. El tema recurrente es el nivel de protección que se reclama para mantención de la agricultura tradicional.

Lo que efectivamente se encuentra en juego es la mantención de una ruralidad expresiva en el país, al modo en que lo hacen los países desarrollados. Como lo plantean los dirigentes del CAS, si se aplica el modelo en su versión más ortodoxa, el sur del país se convertirá en un gran bosque y el tercio de chilenos que actualmente ocupa y trabaja en su territorio, migrará hacia las grandes ciudades.

Para aplicar el modelo de los países desarrollados, o sea subsidiar a sus agricultores, se requieren al menos de dos condiciones. Primero, tener los recursos para poder hacerlo. Segundo, teniendo lo primero, que no es claro que sea el caso nuestro, se requiere de la voluntad política, para lo cual es importante contar con una fuerte organización de los productores que la respalde y exija, situación que han intentado alcanzar los dirigentes de los agricultores, a través de los hechos comentados.

El resultado de esta nueva instancia resultó en una situación intermedia que no dejó satisfechos a todos, porque será producto del punto de equilibrio que se logre en la negociación. Entre tanto, quedó demostrado que la amenaza de la presión de los agricultores, sin que se efectuara, desató una inusual prestancia por parte del Gobierno para resolver una parte importante de los puntos presentados en el petitorio. En este caso, estaríamos frente a una nueva modalidad de resolución de conflictos.

La experiencia chilena: su “originalidad” y “replicabilidad”

En esta sección se presenta una serie de reflexiones sobre la “originalidad” del modelo chileno y su eventual “replicabilidad”. También se recapitula en torno a la demanda central planteada en las movilizaciones que fueron analizadas.

La originalidad se refiere a la necesidad de tomar en cuenta y recordar las condiciones existentes en el país cuando el modelo se impuso y se comenzó a aplicar.

- Un primer punto se refiere a una cierta inevitabilidad: el grado de libertad que puede tener una sociedad, o si por el contrario su destino inexorable pasa por las recetas del ajuste estructural, estableciendo luego al neoliberalismo como única receta posible. Como se plantea más adelante, lo importante es destacar qué se hizo y cómo se hizo. Esta distinción es fundamental para evitar caer en un determinismo que tiene poco sentido.

Sobre la forma en que se impuso el modelo en Chile, hay dos temas que destacar: las condiciones económicas y sociales, y las dimensiones del país.

i) *Sobre las condiciones económicas y políticas.* A mediados de los años '70 Chile enfrentaba una doble situación que es preciso no olvidar: tenía un sistema económico completamente desarticulado como producto de la situación que el país vivió entre 1972 y 1974, sin condiciones de funcionamiento; con un régimen mesiánico encabezado por Pinochet que se encontraba en guerra con el marxismo a nivel mundial (lo que le permitió las peores atrocidades en el plano de los derechos humanos) y que logró condiciones para establecer una dictadura donde un grupo de civiles le ofrecía un esquema económico ortodoxo y un régimen político corporativo. Ello crea las condiciones para que en Chile se instauraen un régimen político y un sistema económico, prácticamente en una situación de completo vacío de poder, sin consulta alguna a la ciudadanía.

ii) *Sobre las dimensiones.* El tema de las dimensiones del país no es menor para acometer una tarea de esta profundidad. El escenario donde se desarrollan los acontecimientos es un país pequeño, que en 1970 tenía 9.340.000 habitantes, con una población relativamente joven. En la actualidad el país llega a los 15.000.000 de habitantes.

La replicabilidad apunta a considerar si en otros países existen las condiciones que se observaron en Chile, y además la necesidad de tomar en cuenta la experiencia reciente. Todo ello para limpiar un poco la mirada demasiado ideológica que se tiene a veces sobre la experiencia chilena.

- Un segundo punto se refiere a la continuidad y el cambio. Es un hecho que fenómenos como la globalización, la desintegración del mundo socialista, los adelantos tecnológicos en informática, la biotecnología y otros, para nombrar algunos, han modificado radicalmente la agenda en muchos aspectos. De ahí que pensar en la validez de las recetas de antaño no tenga mayor sentido. Pero por el otro lado, tampoco hay que dejar de lado que los principales problemas pendientes de varias décadas atrás se mantienen con plena vigencia; incluso se puede afirmar que se han agravado. Los problemas del hambre y de la pobreza, del deterioro del medio ambiente, en fin, de la calidad de vida, se mantienen sin solución, aún cuando los principios del neoliberalismo campean en el mundo sin contrapeso.
- Vale la pena una reflexión sobre la ortodoxia del modelo chileno. El hecho de tomar en cuenta ciertas orientaciones no puede implicar tomar el paquete

completo. Una cosa es reorientar el aparato del Estado, realizar ciertas privatizaciones, etc., y otra muy distinta suponer un carácter emblemático de la experiencia chilena. Además, suponer que el mercado ha sido el supremo asignador de los recursos es una verdad parcial. Así, por ejemplo, las privatizaciones de las empresas públicas no fueron un ejemplo de transparencia, el éxito del sector forestal se debe en gran medida a generosos subsidios estatales al sector privado, etc.

En cuanto a la demanda central de las movilizaciones que hemos analizado, todas ellas desembocan en la defensa de la ruralidad.

Si bien los planteamientos en los que más se insiste en las movilizaciones se relacionan con recuperar un nivel de rentabilidad razonable para la actividad, lo que está en juego es la permanencia de un sector rural expresivo en el país.

En el caso de Chile, tradicionalmente la agricultura ha sido un sector políticamente sobrerrepresentado. Su peso político no se condice con el peso relativo que tiene en términos demográficos y/o económicos. En efecto, las movilizaciones campesinas que tuvieron lugar en la década de 1960 y las de los empresarios agrícolas de los años '90 sobrepasan su importancia relativa. Mientras que las primeras enfatizaban temas como la "dignidad del campesino", las segundas lo hacen en nombre de la "reserva cultural y símbolo de la identidad nacional".

Se trata en definitiva de argumentos que tienen una fuerte carga moral y ética. Partamos entonces de la definición más elemental sobre lo rural. Normalmente se lo define como oposición a otro: lo contrario de lo rural es lo urbano, un centro poblado con elementos urbanos (luz eléctrica, agua potable, presencia de servicios y trazado regular de calles). Sus habitantes desarrollan actividades diversificadas, y predominan las actividades económicas secundarias y terciarias.

Se considera que el campesinado constituye una reserva cultural, símbolo de identificación nacional (huaso, gaucho, caipira, etc.). Lo rural adquiere identidad en la medida en que se fortalece por la existencia de un conflicto entre campo y ciudad. Este es un viejo tema en la sociología rural. Se estima que el campo se encuentra en una situación de extrema desigualdad en el acceso a bienes modernos y a los servicios públicos.

La cultura agraria chilena tiene su origen en Europa, y más precisamente en el mediterráneo español, italiano y griego, que se desarrolla en torno a la predominancia de la agricultura campesina. Entonces, lo que se plantea como medio rural son pequeñas comunidades ligadas entre sí, que comparten un territorio, relaciones interpersonales y una cultura. La ruralidad es una forma de vida: se vive en pequeñas localidades donde todos se conocen entre sí.

Se critica la situación que se enfrenta en las metrópolis: violencia, miseria, población, mala calidad de vida. Todo ello conduce a una revalorización de lo rural.

Un obispo de la Iglesia Católica de reconocido prestigio nacional de una zona con alta ruralidad, denuncia: “...Hay una especie de dogma sobre que este modelo es seguro y que nada puede ser alterado...”. Y continúa: “...En este esquema se está jugando la agricultura en nuestro país. La tentación de sacrificar la agricultura y a quienes viven del agro para obtener mejores negocios internacionales es muy fuerte y todo el país atraviesa, tarde o temprano, por esta tentación: ha habido países que han optado por alimentarse con productos importados para transformarse en naciones industriales, pero en la mayoría se han establecido sistemas de defensa del mundo rural por apoyar a sus productos y exportaciones. Chile está en esta alternativa y la tendencia va hacia el sacrificio del mundo rural por una sociedad urbana en la cual lo agrícola es secundario...”

A su vez, una autoridad de la Conferencia Episcopal de Chile, órgano de dirección nacional de la Iglesia Católica, ha declarado: “...No se puede deshacer el campo porque ahí se encuentra el alma misma de la nación y una gran reserva moral para el país...”

De cualquier manera, la demanda por mantener un nivel de ruralidad importante sigue teniendo eco y fuerza en amplios sectores de la sociedad chilena. Prueba de ello es la proliferación de las parcelas de agrado donde sectores de ingresos medios y altos construyen su hábitat, aunque sea para los fines de semana, sobre la base de los valores que se asocian a la ruralidad.

Nota final: la experiencia chilena en el contexto de América Latina

La situación que se observa en otros países de América Latina no es muy diferente de la situación chilena. Las movilizaciones de los agricultores y de sus mujeres, Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, de la Asociación de Productores Rurales del Brasil, de la Mesa Coordinadora de Entidades Agropecuarias del Uruguay, del Barzón en México, etc., apuntan a diferentes aspectos puntuales, pero *todas* ellas terminan por reivindicar un tratamiento especial para el sector agropecuario, ya que amplios sectores de la agricultura de todos estos países tienen severas dificultades para integrarse exitosamente en el mercado mundial.

Ello implica una crítica frontal desde importantes sectores de empresarios agrícolas de América Latina al modelo neoliberal hoy día, en plena vigencia en la economía mundial.

Bibliografía

- Ahumada, J. 1966 *La Crisis Integral de Chile* (Santiago de Chile: Editorial Universitaria).
- Baraona, R.; Aranda, X. y Santana, R. 1961 *Valle del Putaendo. Estudio de estructura agraria* (Santiago: Universidad de Chile).
- Barraclaugh, S. y Collarte, J. C. 1972 *El Hombre y la Tierra en América Latina. Resumen de los Estudios CIDA sobre Tenencia de la Tierra en América Latina* (Santiago: Editorial Universitaria).
- Chayanov, A. 1974 *La Organización de la Unidad Económica Campesina* (Buenos Aires: Editorial Nueva Visión).
- Dahrendorf, R. 1996 *La Cuadratura del Círculo. Bienestar Económico, Cohesión Social y Libertad Política* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Gómez, S. 1997-1998 “Marco Teórico-Methodológico para el análisis de las Organizaciones Rurales en Chile”, en *Revista de Sociología* (Chile: Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile) N° 11 y N° 12.
- González y González 1972 *Pueblo en Vilo. Microhistoria de San José de Gracia* (México: El Colegio de México).
- Graziano da Silva, José 1996 *A Nova Dinâmica da Agricultura Brasileira* (San Pablo: UNICAMP, Instituto de Economía).
- Huizer, G. 1974 *El Potencial Revolucionario del Campesino en América Latina* (México: Editorial Siglo XXI).
- Landsberger, H. 1969 *Latin American Peasant Movements* (Ithaca: Cornell University Press).
- Lenin, V. 1972 *El Desarrollo del Capitalismo en Rusia* (Santiago: Editorial Quimantú).
- Merton, R. 1964 *Teoría y Estructura Sociales* (México: Fondo de Cultura Económica).
- Moyano Estrada, E. 1993 *Acción Colectiva y Cooperativismo en la Agricultura Europea* (Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) Serie Estudios.
- Quijano, A. 1967 “Los Movimientos Campesinos Contemporáneos en América Latina”, en Lipset y Solari (eds.) *Elites y Desarrollo* (Buenos Aires: Paidós).
- Warman, A. 1976 *...y Venimos a Contradecir. Los campesinos de Morelos y el estado nacional* (México: Ediciones La Casa Chata).
- Weber, Max 1966 *Economía y Sociedad* (Santiago: Fondo de Cultura Económica).
- Wolf, Eric 1971 *Los Campesinos* (Barcelona: Nueva Colección Labor).

Parte III
Cambios en el mundo del trabajo

*Población y trabajadores rurales en el contexto de transformaciones agrarias**

Diego E. Piñeiro**

La evolución del sector agropecuario uruguayo

Una aproximación histórica

Es conocido el papel del Uruguay como proveedor de cueros y tasajo desde los albores de su existencia como colonia española, y de carnes y lanas para los países europeos desde fines del siglo pasado. La demanda de subproductos de origen ganadero, sumada a sus excepcionales características ecológicas para esta actividad, produjo una temprana apropiación de la tierra con este fin. Los campos fueron alambrados y la propiedad delimitada, agotándose la frontera agrícola muy tempranamente en comparación con otros países de América Latina. Emerge un sistema de producción con predominio de la estancia ganadera que establece relaciones salariales de producción, eliminando los excedentes poblacionales, expulsándolos hacia el ejido de los pueblos y ciudades del interior y hacia Montevideo (Barrán y Nahum, 1967).

A principios del siglo XX, el *batllismo*, construido como alianza entre las emergentes clases medias y fracciones de los trabajadores, logra imponer un pacto tácito al sector de los estancieros mediante el cual sus derechos territoriales no se cuestionan a cambio de una considerable extracción económica que les realizará el Estado, y con la cual se construyó un Estado de Bienestar característico del Uruguay de la primera mitad de ese siglo (Finch, 1980).

* Este texto se ha preparado con la colaboración de la Lic. Carina Nocetti como Ayudante de Investigación.

** Master en Sociología, Universidad de Wisconsin. Profesor Titular de Sociología Rural en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.

En las décadas del cuarenta y del cincuenta se produce una fuerte urbanización del país como consecuencia de dos procesos. Por un lado un fuerte proceso de industrialización substitutiva de importaciones, y por otro lado un proceso de mecanización agraria que expulsó población rural aún en un momento de plena expansión de la agricultura cerealera. Este período se conoce como el de la “agriculturización” del país, porque además de la expansión cerealera mencionada crecerá la superficie con oleaginosos, remolacha y caña azucarera, fruticultura, vid, horticultura, etc., en un esfuerzo consciente y planificado por llegar al autoabastecimiento alimentario en todos los rubros posibles por las condiciones ecológicas. Sin embargo, aún en esta época la superficie máxima plantada nunca superó al millón y medio de hectáreas sobre los 16 millones que posee el país de superficie útil. El resto siempre fue de predominio de la ganadería de carne y lana, agregándosele recientemente la lechería.

La estructura social agraria ha sido extraordinariamente estable en el correr de este siglo. El censo agropecuario de 1908 registró aproximadamente unas 3.800 explotaciones mayores a 1.000 hectáreas sobre un total de 44.000 explotaciones, las cuales, siendo el 9% de las explotaciones, controlaban el 64% de la superficie aprovechable del país. Este conjunto de estancias ganaderas permanece prácticamente estable a lo largo del siglo. Por otro lado, a principios de siglo había una proporción limitada de pequeños productores que sin embargo crecen sostenidamente a impulsos de las políticas que tienden a desarrollar el mercado interno y el autoabastecimiento de alimentos. Así se llega a la década del sesenta, en que 65.000 explotaciones representan el 75% del total de las explotaciones pero controlan sólo el 9% de la superficie (Piñeiro, 1991). Algunos autores estimaron que con esta composición llegaron a aportar el 57% del valor de la producción agropecuaria (Astori *et al*, 1982). Posteriormente entraron en un acelerado proceso de descomposición, que actualmente los ha reducido a la mitad.

La estancia ganadera estableció tempranamente relaciones salariales de producción. En presencia de un exceso de oferta de trabajadores, pudo imponer una relación social en la cual contrató primordialmente trabajadores solteros expulsando a la familia rural de la estancia. Así, la reproducción social de los trabajadores se llevó a cabo sólo parcialmente en el establecimiento rural, y principalmente en pequeños poblados y villorrios del interior rural o en los minifundios de producción familiar (CINAM-CLAEH, 1962).

Luego de la crisis del treinta se produce un reacomodamiento de los mercados agropecuarios con la consiguiente pérdida de preeminencia de nuestro país en relación a los países del Commonwealth. La ganadería uruguaya se estanca y entra en un largo período de cincuenta años en que los índices de productividad no crecen, del cual recién parece estar saliendo en la actualidad. El estancamiento ganadero tuvo profundas repercusiones no sólo a nivel agropecuario. Siendo el principal productor de excedentes que luego se redistribuían en el conjunto de la

sociedad, su falta de crecimiento repercutió en las agroindustrias procesadoras, en el empleo, en la generación de divisas imprescindibles para las importaciones, y en general en el crecimiento del mercado interno. Este estancamiento contribuyó a explicar los conflictos sociales de la década del sesenta.

Los últimos treinta años

A partir de la década del setenta y hasta hoy, se imponen nuevos rumbos a la economía. En el agro ello significó un proceso de desregulación y de desprotección que tuvo significados diferentes para los distintos sub-sectores. Para los ganaderos permitió una mayor y mejor captación de los precios internacionales, mejorando sus condiciones de competitividad. Para la agricultura, donde había pocos rubros con competitividad internacional, significó el crecimiento de algunos como el arroz, la cebada, los citrus y la producción láctea, que registran un fuerte impulso exportador, llegando a representar la tercera parte de las exportaciones tradicionales. Pero también significó la restricción de algunos de ellos (cereales, horticultura) y la casi desaparición de otros (azúcar).

Un fuerte apoyo estatal a la diversificación de la producción agropecuaria e industrial con destino a las exportaciones permitió modificar el perfil histórico de las mismas, de tal manera que las exportaciones de carne y lana que históricamente habían representado entre el 60% y el 80% del total que exportaba el país, pasan a ser sólo un 40% en la década del setenta y un 35% en la década del ochenta. Las exportaciones no tradicionales (entre las cuales se incluyen las agropecuarias, industriales, de servicios, etc.) aumentan fuertemente, llegando a ser el 70% del total exportado en el trienio 1994-96.

La política agraria aplicada a partir de la década del '70 tuvo como consecuencia una concentración aún mayor en la distribución de la tierra y de los principales medios de producción, reforzando la extensividad como forma de producción ganadera. La agricultura familiar, que produce para el mercado interno con niveles de demanda decrecientes y teniendo que competir con la importación, se vio claramente afectada, alcanzando niveles de descomposición nunca registrados anteriormente.

Cabe agregar que en los últimos treinta años hubo una tendencia sostenida a la integración vertical entre el agro y la industria procesadora de materias primas, conformando cadenas y complejos agroindustriales. Tanto la industria frigorífica como la industria textil fueron remozadas y redimensionadas. Pero además de ello se desarrollaron fuertemente aquellas agroindustrias que producían principalmente para la exportación: los molinos arroceros, las plantas de industrialización láctea, las cervecerías, las procesadoras avícolas y las plantas de procesamiento y empaquetado de frutas (en especial cítricos).

A partir de 1991 el proceso de Integración Regional produce considerables impactos en el sector agropecuario. Uruguay es, de los cuatro países que integran el Mercosur, el que proporcionalmente más logra incrementar sus exportaciones agropecuarias a sus vecinos (principalmente al Brasil). El PBI agropecuario crece sostenidamente, más que duplicándose entre 1991 y 1997.

En los principales rubros de producción, la carne y la lana, la mejoría en los precios internos impulsa incrementos en las áreas con pasturas, la retención de vientres, las inversiones prediales, mejorando en un 20% los índices de productividad física. En 1995 un organismo oficial comentaba exultante: "...La expansión de la base forrajera, la ampliación de la capacidad criadora, y el aumento en la extracción, como fenómenos simultáneos, constituyen un hecho absolutamente novedoso para el país. El casi secular estancamiento, parece abrir paso a profundos cambios en el comportamiento de los empresarios y del sector como un todo. La adopción de tecnología, tradicional tendón de Aquiles del rubro, verifica su cuarto año consecutivo de expansión llevando la producción total y por unidad de superficie a valores considerados metas ambiciosas a comienzos de la década..." (Peyrou *et al*, 1995).

Por otro lado, durante la década del '90, los rubros con capacidad de competencia adquirida a través de las políticas de apoyo oficial (los lácteos, el arroz, la cebada y los citrus) también ostentan valores positivos, con incrementos que oscilan entre el 10% y el 28% en volúmenes físicos, aumento en la participación relativa en el PBI agropecuario, y aumento en el valor de las exportaciones.

En los cereales y oleaginosos se reduce la cantidad de productores y disminuye el área sembrada, pero al aumentar los rendimientos se mantiene o crece el producto. Algo similar ocurre en la fruticultura y viticultura, donde además una fuerte inversión en cambio de variedades mejora las condiciones para penetrar en los mercados internacionales, iniciándose una tímida pero prometedora corriente exportadora. En la horticultura la expansión de la producción empresarial bajo cobertura plástica en el litoral oeste del país desplaza lentamente a la producción familiar del área sur del país.

Durante 1998 los precios en los mercados internacionales de cereales y oleaginosos vuelven a caer, mientras que la lana no logra recuperarse de uno de los peores momentos de su historia. En enero de 1999 la devaluación de la moneda en Brasil, principal socio comercial del Uruguay, termina por echar por tierra con las expectativas del agro uruguayo. Los precios de casi todos los productos han caído estrepitosamente, y sorprende a los productores (principalmente a los empresarios agropecuarios) fuertemente endeudados en dólares. Se inicia así una etapa de depresión, iliquidez, endeudamiento, liquidación de stocks y movilizaciones agrarias que ha sido el signo del cambio de siglo. Pero ésta es otra historia.

La cuestión del volumen de la población rural

El Uruguay nace a la vida independiente como un país con escasos habitantes. Con una reducidísima población, de origen indígena y con características nómades, el país se pobló a partir de la inmigración de origen europeo. A mediados del siglo XIX la población del país ascendía a unos magros 132.000 habitantes, de los cuales 62% residían en la campaña. Sucesivas oleadas inmigratorias hacen crecer la población hasta que llega a un millón de habitantes para inicios del siglo XX. Sin embargo, dada la temprana apropiación del territorio, esta población inmigrante tendrá escaso acceso a la tierra. Es por ello que en su mayor parte se radicará en las ciudades y principalmente en Montevideo, la ciudad puerto y centro de las actividades comerciales del país. De esta manera, si bien la población rural continuará creciendo en las primeras décadas del siglo, su proporción en el total de la población disminuirá paulatinamente. En la década del '30 el 30% de la población del país ya estaba asentado en su capital portuaria.

En las décadas recientes, los volúmenes totales de población crecerán lentamente como consecuencia de las reducidas tasas de natalidad en un contexto en que el país ya prácticamente no atrae más inmigrantes. Por otro lado, la inmigración rural-urbana se agudiza y adquiere características inéditas. Uruguay se convierte en el país más urbanizado de América Latina¹.

Cuadro 1

Uruguay. Evolución de la población según área de residencia (en miles)

	1963	1975	1985	1996
Población Total	2.596	2.788	2.940	3.164
Población Urbana	2.097	2.314	2.535	2.872
Población Rural	498	474	405	292
Población Rural %	19	17	14	9

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos e Instituto Nacional de Estadísticas. Censos de Población y Vivienda respectivos.

A fin de poder delimitar con claridad a la población rural es pertinente clarificar cuáles son los criterios operativos empleados para definir la categoría "rural". En el Uruguay esta tarea le compete al Instituto Nacional de Estadística (INE), quien desde el Censo de 1963 aplica un criterio basado en la Ley N° 10.723, denominada Ley de Centros Poblados, según la cual es de competencia exclusiva de los gobiernos departamentales la autorización para subdividir predios rurales con destino a la formación de centros poblados, así como también el

trazado y apertura de calles, caminos o cualquier vía de tránsito. Es así que a través de diecinueve “competencias exclusivas”, la población y todo el territorio nacional quedan subdivididos en áreas urbanas y rurales.

Cabe además aclarar que los gobiernos departamentales no han empleado criterios similares para crear centros poblados o declarar zonas urbanas. Más aún, muchas veces han primado criterios puramente fiscales en la asignación de la categoría urbana a pequeños agrupamientos de población. Así se aprecia que, excluyendo las diecinueve capitales departamentales, en todo el país se han declarado urbanos 566 asentamientos poblacionales, *la mayoría de los cuales tienen menos de cien habitantes*.

Si se adopta el criterio más frecuentemente empleado en los censos de otros países según el cual la población que vive en poblados de menos de 2.000 habitantes es considerada rural, se encuentran algunos resultados sorprendentes. De los 566 poblados existentes en el Censo de 1985, 491 (es decir, el 87%) son pequeños poblados con menos de 2.000 habitantes. Por lo tanto, la población rural, que era el 13% de la población en 1985 según los criterios del INE, pasa a ser el 17%. Pero si se hace abstracción de la población que reside en Montevideo, que es la mitad de la población del país, es decir, si se considera sólo los dieciocho departamentos del interior del país con el criterio de calificar como rural a la población que reside en pueblos de menos de 2.000 habitantes, entonces la población rural del interior del país llega a ser el 28% del total de la población de los 18 departamentos (véase Anexo Cuadro A).

Puede realizarse otro ejercicio igualmente válido para tratar de delimitar la población rural. Si se emplea el criterio de considerar como rural a la población que reside en localidades en las que, independientemente de su tamaño, la mayor parte de la población activa labora en la Rama 1 (agricultura, silvicultura, caza y pesca), se define una cantidad de localidades de las cuales se podría decir que, con poca duda por la naturaleza de la ocupación principal de sus habitantes, son rurales. Si se hace este ejercicio, se aprecia que la población rural llega a ser el 16% del total del país (véase Anexo Cuadro B).

En síntesis, los datos presentados más arriba no modifican la percepción de que el Uruguay es un país fuertemente urbano. Pero muestran al menos dos aspectos poco considerados hasta ahora: en primer lugar, que para los dieciocho departamentos que constituyen lo que se entiende como el “interior” del país, la población rural según criterios internacionalmente aceptados llega a ser casi un tercio de la población total. En segundo lugar, que la delimitación demográfica de la población rural no es sencilla, y las dificultades encontradas en realidad obedecen a que el concepto de “lo rural” no ha podido ser definido con claridad. En los párrafos que siguen mostraremos cómo la delimitación de “lo rural” se puede complicar aún más.

Los cambios en la población económicamente activa rural

La población económicamente activa de la Rama I² es sólo un 15% de la PEA total. Dentro de ella, las principales categorías son los patrones³, los trabajadores por cuenta propia (que se pueden asimilar a lo que se conoce como productores familiares), los trabajadores familiares no remunerados, y la categoría más numerosa: los asalariados rurales (obreros privados).

Cuadro 2

Uruguay. Población económicamente activa de la Rama I por categoría de la ocupación. Total del País 1985-1996

<i>Categoría de la ocupación</i>	1985	%	1996	%
Patrón	14.812	9	19.085	13
Obrero público	2.047	1	2.328	2
Obrero privado	94.667	56	74.034	50
Cuenta propia	44.639	26	34.433	23
Familiar	12.744	7	12.034	8
Cooperativa	607	0	640	0
Otros e ignorados	667	1	4.961	4
TOTAL	170.183	100	147.515	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, VI Censo de Población y IV de Viviendas 1985. Instituto Nacional de Estadística, VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas 1996.

El cuadro muestra que en el período bajo análisis hubo una disminución de la población económicamente activa en la Rama I del orden del 13%. En números absolutos, se pierden 22.668 trabajadores activos.

Si se analiza al interior de las categorías de ocupación, se percibe que los patrones son la única categoría relevante que *crece* tanto en términos absolutos como relativos. El grupo de los otros e ignorados también crece, pero esto debe atribuirse más bien a problemas de relevamiento del Censo del '96 que al crecimiento de trabajadores sin categorización.

Las categorías que *decrecen* en el período intercensal son las que tienen mayor volumen relativo. Por un lado lo hacen los trabajadores por cuenta propia

(productores familiares), que si bien pierden tres puntos porcentuales en términos relativos, significa la desaparición de cerca de 10.206 trabajadores o el 23% de la categoría. Paralelamente, también disminuyen los trabajadores familiares sin remuneración, aunque en menor proporción: algo más de 700 trabajadores, representando el 7% de la categoría. Pero la categoría que pierde más trabajadores es la de los trabajadores asalariados privados: disminuye en 20.633 trabajadores, representando una disminución del 22% de la categoría.

Cabe ahora intentar explicar estos movimientos para hacer comprensible el cuadro general. El incremento de los empleadores habla de la extensión de las relaciones capitalistas en el agro. Esta tendencia de larga data en el Uruguay (posiblemente uno de los países de América Latina donde estas relaciones se extienden más amplia y tempranamente) continúa su proceso. Ello coincide con la disminución de los trabajadores por cuenta propia y de los trabajadores familiares no remunerados. Por lo tanto, es posible suponer que algunos productores familiares logran acumular riqueza y transformarse en pequeños empleadores. Aunque la categoría de empleadores también puede crecer por otros caminos: por ejemplo, al desaparecer productores familiares, sus tierras son compradas por capital extra-agrario (posiblemente provengan de los sectores enriquecidos de los medios urbanos, profesionales o comerciantes de localidades cercanas que invierten sus ganancias comprando tierras) que entonces maneja su nueva explotación con trabajo asalariado. Una tercera posibilidad es que algunos de estos nuevos patrones sean pequeños productores que, residiendo en su explotación o trasladando su residencia al pueblo más cercano, se emplean ellos o sus familiares fuera del establecimiento como una forma de mejorar sus ingresos familiares totales. Como contrapartida, emplean a un trabajador rural para que se haga cargo de las tareas del establecimiento. Este movimiento se ve facilitado por el nivel extraordinariamente bajo de los salarios rurales.

Los trabajadores cuentapropistas y familiares sin remuneración, es decir, aquellos que laboran bajo relaciones no plenamente de carácter capitalista, constituyen aún un contingente importante de la población económicamente activa: el 31%. Su disminución, comentada más arriba, tiene una estrecha asociación con la disminución de las explotaciones de menos de 100 hectáreas (en Uruguay se puede asimilar esa extensión como de carácter familiar). Según los Censos Agropecuarios, entre 1980 y 1990, éstas pasan de 46.935 a 33.811, pautando un proceso de descomposición de este tipo social agrario.

Los trabajadores asalariados privados constituyen la principal fuerza laboral del agro, representando el 50% del total. Su notoria disminución en el período intercensal se produce entonces en un contexto de expansión de las relaciones salariales (dado que aumenta la cantidad de empleadores). Además se produce mientras el Valor Bruto de la Producción del sector agropecuario experimenta un lento crecimiento del 2,6% entre 1986 y 1995 (Irigoyen, 1996). Posiblemente ha

ya dos movimientos simultáneos: por un lado un lento crecimiento del sector agropecuario, y por otro procesos de cambio tecnológico tendientes a ahorrar mano de obra. El análisis de la variación del Valor Bruto de Producción en el período mencionado entre rubros al interior del sector muestra que el rubro de mayor importancia y que más mano de obra emplea, la ganadería, apenas creció al 0,6%. Los rubros más dinámicos como el arroz, la agricultura de secano y la lechería, crecen a tasas interesantes (8,7%, 6,5% y 3,8%), pero son también rubros en los cuales los cambios tecnológicos ocurridos en estos diez años fueron ahorradores de mano de obra.

La distinción entre lo rural y lo agrícola: nuevas categorías para pensar la ruralidad

Como lo hace notar García Sanz (1997), hasta no hace mucho tiempo lo rural coincidía con lo agrícola. Hoy es preciso reconocer que ha habido una ruptura entre lo rural y lo agrícola. En efecto, si se entiende por población activa rural a aquella que reside en forma dispersa o en pequeñas localidades (por ejemplo de menos de 2.000 habitantes) y trabaja en actividades agrícolas, y por actividades agrícolas a aquellas que resultan de una principal relación con la naturaleza (Rama I), es posible distinguir con cuatro categorías lo que antes eran sólo dos, según el siguiente cuadro:

Cuadro 3

PEA según residencia y rama de ocupación

	Rama I	Demás Ramas
Residencia Rural	a. Trabajadores con residencia rural empleados en tareas agrícolas	b. Trabajadores con residencia rural empleados en servicios, comercio, industria, etc.
Residencia Urbana	c. Trabajadores con residencia urbana y empleos agrícolas "Boias frias", trabajadores volantes, trabajadores zafrales, etc.	d. Trabajadores con residencia urbana empleados en actividades no agrícolas.

La particularidad de esta situación consiste en que las categorías empleadas por los censos no son capaces de captar esta nueva situación. *Se complejiza entonces el concepto de ruralidad*. Si por población rural se entiende aquella que reside en áreas categorizadas como rurales (áreas de baja densidad de población), en-

tonces es preciso sumar la población de las celdas a y b. Si en cambio se entendiese como aquella que trabaja vinculada a tareas agrícolas independientemente de la residencia, es preciso sumar la población de las celdas a y c. Finalmente, si tal como era antes se quisiese definir como población rural sólo a aquella que reside en el medio rural y trabaja en tareas agrícolas, entonces se debe considerar únicamente a la población de la celda a. Sin embargo, este criterio tan restrictivo explica mal la situación actual de la población rural. A nuestro juicio cualquier explicación sobre la población rural hoy debe partir de la existencia de estas tres categorías (celdas a, b y c), y en lo posible debe tratarlas y explicarlas por separado.

En los párrafos que siguen se realizará un análisis de la situación de la población económicamente activa y de los trabajadores asalariados según estas nuevas categorías.

La población económicamente activa

En primer lugar, para ubicar el contexto en que se producen las modificaciones en la PEA rural es preciso destacar que hay un notable incremento en el total de la Población Económicamente Activa en el país, que crece un 24% en la década. Como se sabe, este crecimiento se debió en buena parte a la feminización de la población activa. Como se aprecia del cuadro, en la Rama I no hubo un crecimiento de la PEA sino, por el contrario, una disminución del 13%. El incremento de la PEA ocurre entonces en las otras ramas de la economía. Si se estudian las variaciones de la PEA según su residencia, inmediatamente se advierte que mientras la PEA con residencia rural apenas crece, se incrementa considerablemente la PEA con residencia urbana. En síntesis, el crecimiento de la PEA en la década ocurre principalmente en las ramas de la economía que no son la agricultura, e incorporando población urbana.

Como se dijo, la PEA agrícola (celdas a+c) disminuye un 13% en la década. Si se analiza por la residencia, se advierte que mientras la PEA agrícola con residencia rural disminuye en un 20% (celda a), la PEA agrícola con residencia urbana (celda c) permanece sin cambios. En síntesis se podría decir que una parte importante de la PEA agrícola que tenía residencia urbana en 1985 fue atraída hacia ocupaciones en las otras ramas. O visto de otra manera, se podría inferir que, como la Rama I disminuyó su capacidad de proporcionar ocupación, fueron los activos de dicha Rama pero con residencia rural los que tendieron a ocuparse en otras ramas de la economía.

La PEA con residencia rural sólo creció un 8% (celdas a+b). Sin embargo, este crecimiento esconde dos movimientos contradictorios. Por un lado la PEA de la Rama I con residencia rural (celda a) que disminuyó un 13%, y por otro lado la PEA de las demás ramas con residencia rural que creció un 75% (celda b). Es posible hipotetizar que una parte importante de la PEA que era agrícola y rural en

1985 no pudo ser absorbida por el agro, y buscó ocupación en otras ramas de la economía sin abandonar su residencia rural.

Cuadro 4

***Población económicamente activa por rama de actividad
según área de residencia 1985-1996***

	1985			1996		
	Rama 1	Demás Ramas	Total	Rama 1	Demás Ramas	Total
Residencia Rural	120.760 71%	49952 5%	170.712 15%	96.870 66%	87.450 7%	184.320 13%
Residencia Urbana	49.423 29%	956.673 95%	1.006.096 85%	50.645 34%	1.205.524 93%	1.256.169 87%
TOTAL	170.183 100%	1.006.625 100%	1.176.808 100%	147.515 100%	1.292.974 100%	1.440.489 100%

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, VI Censo de Población y IV de Viviendas 1985. Instituto Nacional de Estadística, VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas, 1996.

Finalmente, y para dar una idea de las proporciones relativas, nótese que en 1996 los trabajadores con residencia rural y empleos agrícolas y los trabajadores con residencia rural con empleos no agrícolas representan dos quintas partes cada uno, mientras que la población con residencia urbana y tareas agrícolas representaba el quinto restante.

Los asalariados

Como era de esperar, los trabajadores asalariados en tareas agrícolas (celdas a+c) también disminuyen fuertemente (un 22%), pasando de noventa y cuatro mil a setenta y cuatro mil en el período intercensal. Los asalariados agrícolas con residencia urbana (celda c) disminuyen más pronunciadamente (23%) que los asalariados agrícolas con residencia rural (celda a) (21%).

Por otro lado, si se contempla la residencia de los trabajadores, se observa que los trabajadores asalariados con residencia rural que trabajan en cualquier rama de la economía (celdas a+b) disminuyen levemente: de ochenta y seis mil a ochenta y dos mil trabajadores en el período. Sin embargo, esta cifra contiene dos movimientos divergentes: el decrecimiento de los trabajadores asalariados agrícolas con residencia rural (celda a), y el incremento de los trabajadores asalariados de las demás ramas de la economía pero que tienen residencia rural (celda b).

La conclusión puede ser similar a la del párrafo anterior: los trabajadores asalariados con residencia rural que no pueden ser absorbidos por la agricultura se desplazan a trabajos en otras ramas de la economía manteniendo la residencia rural.

Cuadro 5

***Trabajadores asalariados por rama de actividad
según área de residencia 1985-1996***

	1985			1996		
	Rama 1	Demás Ramas	Total	Rama 1	Demás Ramas	Total
Residencia Rural	57.732 61%	28.709 6%	86.502 15%	45.666 62%	37.295 6%	82.961 12%
Residencia Urbana	36.935 39%	462.755 94%	499.729 85%	28.368 38%	600.398 94%	628.766 88%
TOTAL	94.667 100%	491.464 100%	586.331 100%	74.034 100%	637.693 100%	711.727 100%

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos, VI Censo de Población y IV de Viviendas 1985. Instituto Nacional de Estadística, VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas 1996.

En resumen, del análisis de los dos cuadros se desprende que en el período intercensal la característica distintiva ha sido la incapacidad del sector agropecuario para proporcionar ocupación y empleo. Aquellos trabajadores con residencia rural que no encuentran ocupación tienden a ocuparse en las otras ramas de la economía sin cambiar de residencia. Esto es entendible en la medida en que la vivienda rural les permite disminuir los costos de reproducción de la unidad doméstica, que percibirá tanto los ingresos provenientes de las ocupaciones no agrícolas como aquellos provenientes de la posibilidad de producir alimentos en el propio medio rural, al mismo tiempo que se ahorran los costos de una vivienda urbana. Esta situación se ve facilitada por la mejoría en los medios de transporte y comunicación en las áreas rurales. Por otro lado, se percibe que aquellos que en 1985 tenían residencia urbana pero estaban activos en la agricultura, al disminuir la demanda de trabajadores de este sector se moverán con mayor facilidad hacia otras ramas, permaneciendo en las ciudades.

Repensando la ruralidad en el siglo XXI

La mayor parte de los esfuerzos por definir la ruralidad provienen de los sociólogos rurales preocupados por recortar y precisar las particularidades de su objeto de estudio. En general, la mayor parte de ellos son tributarios de una temprana clasifi-

cación que elaboraran Sorokin y Zimmermann (1929). Solari (1958) la retoma en su obra *Sociología Rural Nacional*, y la adapta a las condiciones del Uruguay. La ruralidad es definida por oposición a lo urbano sobre la base de nueve categorías.

1. La ocupación: "...la sociedad rural está compuesta por individuos activamente alistados en una actividad agrícola como explotación y cultivo de plantas y animales..." (p. 32).
2. Las diferencias ambientales: "...el habitante rural está mucho más expuesto a las condiciones del medio físico y a las variaciones de esas condiciones y en un contacto mucho más estrecho con la naturaleza..." (p. 33). El trabajador rural no controla las fuerzas de la naturaleza, y debe más bien adaptarse a ellas.
3. Las comunidades agrícolas son de volumen reducido: cuanto mayor sea el volumen de la comunidad, menos cantidad de gente estará vinculada a las tareas rurales.
4. La densidad de población en el medio rural es baja como consecuencia de la ocupación extensiva del territorio que hacen las actividades productivas rurales.
5. Las comunidades rurales son más homogéneas en sus características psicosociales que las comunidades urbanas.
6. La movilidad social es menor en el campo que en la ciudad.
7. Las diferencias entre los estratos sociales en el medio rural son menores que en el medio urbano.
8. La frecuencia en la interacción social es menor en el campo que en la ciudad.
9. Las comunidades rurales tienen mayor solidaridad social que las urbanas.

Estudios y autores posteriores han cuestionado seriamente algunas de estas características. Hoy sabemos que las distancias entre los estratos sociales (al menos en el campo de América Latina) son tantas o aún mayores que en las sociedades urbanas. La solidaridad interna en las comunidades rurales también se ha cuestionado a partir de la comprensión de que éstas están tensionadas y cruzadas por antagonismos de grupos, de familias y de interés. Mas aún, estudios de pequeñas comunidades en el contexto de grandes ciudades han encontrado fuertes lazos de solidaridad interna.

Por su parte, Howard Newby (1983), al realizar su conocida revisión del estado de la Sociología Rural "institucionalizada", hacía notar que "...lo rural es una categoría empírica y no sociológica..." (Newby, 1983:20), y que las sociedades rurales pueden ser definidas como las que existen "...en localidades geográficas donde el tamaño y la densidad de población sean relativamente pequeños..." (Newby, 1983:21).

García Sanz (1997) destaca que en realidad son tres las características que se deberían tomar en cuenta para definir la ruralidad: a) la cuestión demográfica, es decir del volumen y la densidad de población; b) la cuestión de la actividad (el trabajo) de la población rural; c) la cuestión de la cultura rural.

Sin embargo, no es posible abordar la discusión sobre la “ruralidad” en América Latina sin hacer referencia a los cambios que están ocurriendo a nivel de las estructuras agrarias. Hoy el capitalismo ha penetrado plenamente en el agro de la mayoría de los países del continente, siendo el modo de producción hegemónico, a través de la generación de cadenas y complejos agroindustriales. Esto ha llevado a la emergencia de una clase de empresarios agrarios integrados a los complejos, con ocupación de mano de obra asalariada, junto con productores familiares y campesinos que también lograron integrarse. Sin embargo, esta estructura hegemónica convive con otra conformada por empresarios latifundistas, campesinos no integrados que producen para los mercados locales, trabajadores excluidos y sin tierra que alternan entre trabajos rurales y urbanos y la desocupación, viviendo en condiciones de extrema pobreza (Piñeiro, 1995).

Más aún, el agro no es ajeno a los procesos de globalización del capital que son los signos de nuestros tiempos. Como hace notar Ianni (1997), “...En escala creciente y en el ámbito mundial, las corporaciones transnacionales del sector agropecuario, de la agroindustria o del *agribusiness*, inducen, organizan o determinan completamente la producción y la comercialización de mercaderías destinadas a la alimentación de pueblos y multitudes. (...) La revolución que la globalización del capitalismo está provocando en el mundo agrario transfigura el modo de vida en el campo, en sus formas de organización del trabajo y la producción, en sus matrices e ideas socioculturales, en sus significados políticos...” (p. 46. Traducción nuestra).

Son estas transformaciones las que disuelven las fronteras entre el mundo rural y el urbano, aquellas que los sociólogos rurales se habían esforzado en definir y delimitar como forma de circunscribir su objeto de estudio. En el mundo actual, y más aún en el futuro, los límites entre lo rural y lo urbano se volverán cada vez más difusos.

En el Uruguay de hoy es posible identificar una serie de procesos, muchos de los cuales ya se han descrito en las páginas anteriores, que caracterizan y explican estas tendencias.

A continuación, resumimos y caracterizamos.

Páginas atrás se ha visto que aquello que parecería tan evidente como la simple enumeración de la población urbana y la población rural, no lo es, al menos para el caso del Uruguay, por las dificultades que emergen de la operacionalización extremadamente heterogénea que hace de lo que sería población urbana o rural la institución responsable de los censos nacionales. Se apuntaba que dicha di-

ficultad emergía justamente como consecuencia de la falta de una definición clara de la población rural. De esa manera, la población rural del Uruguay podía ser del 13% (en 1985) o del 17% (si se considera población rural también a la que reside en poblados de menos de 2.000 habitantes) según el criterio que se utilizase para definirla. Más aún: si se recortaba el Interior (separándolo de Montevideo), la proporción de población rural podía llegar hasta el 28%.

Se ha hecho referencia a que una característica básica que define la situación actual es la ruptura entre lo rural y lo agrario.

- De esta manera, la Población Económicamente Activa vinculada a actividades rurales se puede desdoblar en tres categorías diferentes: la PEA que vive y trabaja en actividades agrícolas, la que vive en pueblos y ciudades y trabaja en actividades agrícolas, y la que vive en el medio rural pero trabaja en actividades no agrícolas. Los datos que se manejaron para Uruguay muestran que, mientras que la primera y la segunda categoría decrecen, la tercera crece considerablemente. ¿Cuál es el significado de estas tendencias? Si bien la primera categoría (la de la PEA que vive en el medio rural y trabaja en actividades agrícolas) es la propiamente rural, las otras dos pueden interpretarse como formando parte de una nueva forma de ser rural o, por el contrario, como formas en que lo urbano penetra a la sociedad rural. En cualquiera de las dos interpretaciones, es preciso reconocer que la situación actual ya no es como la que describía Solari.
- Dentro de la PEA, la categoría de los patrones es una de las que ha incrementado su residencia urbana. Este movimiento puede estar vinculado a dos tipos de movimientos poco estudiados en nuestro país: el incremento del ausentismo de los patrones rurales de los establecimientos mayores o, por el contrario, la urbanización de los patrones más pequeños motivada por la necesidad de tener otros ingresos además de los que provienen de sus establecimientos (la pluriactividad). Estos dos movimientos son distintos porque obedecen a situaciones objetivamente diferentes de quienes los realizan. Pero en ambos casos implica también un desdibujamiento de la frontera rural-urbana.
- Los datos que se mostraron anteriormente también muestran que en el Uruguay la ruptura entre lo rural y lo agrario abarca a los trabajadores asalariados rurales. Aunque en menor proporción que para la PEA, los datos también muestran que mientras decrecen los trabajadores rurales y agrícolas y aquellos con residencia urbana y tareas agrícolas, crecen los trabajadores con residencia rural pero con tareas no agrícolas. Para el caso de la segunda categoría, varias investigaciones que han estudiado la situación de los trabajadores en diversos rubros de producción muestran que en ciertos sectores como los citrus, la fruticultura, la horticultura de primor, la viticultura e incluso la forestación, los trabajadores zafrales rurales que se emplean provienen de ciudades y pueblos vecinos (Riella y Tubío 1997; Bálsamo, 1999; Morena, 1999). El estudio de los trabajadores del citrus mostró que en realidad los

trabajadores zafrales de la cosecha del citrus eran trabajadores urbanos desocupados, que recurrían en última instancia a trabajos agrícolas.

Ya se ha hecho referencia al profundo proceso de descomposición de la agricultura familiar que ha llevado a que la mitad de los productores familiares fuesen expulsados del campo en los últimos treinta años. Algunos de ellos se han transformado en trabajadores rurales. Otros han emigrado a las ciudades en búsqueda de empleo. En todos los casos, son portadores de una cultura rural que hoy permea a la sociedad urbana. Una encuesta reciente realizada a una muestra de la población urbana nacional detectaba que el 40% de los entrevistados sabía andar a caballo, y que un 33% había vivido más de un año en el campo en el término de su vida (El País, 1999). Mucha de la población que es legítimamente urbana por residencia y por actividad, tiene, en un país de fuerte emigración, profundas raíces con su pasado rural. En este caso, la disolución de la frontera pasa por lo cultural.

La electrificación se ha expandido de manera importante en los últimos años. En el Uruguay rural, el 58,5% de las viviendas cuenta con energía eléctrica. Detrás de ella aparecen la televisión y otros elementos del confort que antes eran propios de e identificables con la vida ciudadana. La televisión permite informarse y vivir los cambios que ocurren en las partes más alejadas del globo, y no solamente lo que ocurre en el país. Las fluctuaciones en los mercados agropecuarios son hoy permanentemente seguidas por miles de empresarios y productores familiares del campo. El teléfono se difunde velozmente: si hasta hace pocos años era un lujo y un elemento inalcanzable para la mayoría de los que vivían en el campo, hoy se está transformando en un elemento accesible: vale sólo el equivalente a ciento cincuenta kilos de carne, a mil litros de leche, o a una tonelada de trigo, y con tendencia a disminuir. Si antes vivir en el campo era sinónimo de aislamiento y por ende de retraso cultural, hoy es preciso reconocer que se está en presencia de cambios en este sentido, que en el futuro serán aún mayores.

Finalmente, en Uruguay la hegemonía de los complejos agroindustriales ha ligado aún más fuertemente a la producción agrícola (la etapa agrícola) con las etapas de transformación agroindustrial y de comercialización. Se estima que algo más del 80% de la producción agropecuaria sufre algún proceso de transformación antes de ser consumido. La mayoría de las agroindustrias están localizadas en pueblos y ciudades del interior del país. Sus trabajadores son trabajadores urbanos industriales. Sin embargo, sus trabajos y sus vidas, y con ellos las de miles de personas vinculadas al comercio y los servicios en dichas localidades, dependen cada vez más de lo que ocurre en el medio rural en la etapa agrícola del complejo: sus miradas y su atención están puestas tanto en las heladas y en las lluvias como en la situación de los mercados agrícolas internacionales que pueden hoy determinar sus futuros. En este sentido, son trabajadores industriales urbanos que tanto escudriñan el cielo en busca de lluvias como miran el informativo para conocer la situación de los mercados agrícolas.

Bibliografía

- Astori, Danilo *et al* 1982 *La Agricultura Familiar Uruguaya: Orígenes y Situación Actual* (Montevideo: CIEDUR) Fundación de Cultura Universitaria, Colección Temas Nacionales, N° 8.
- Bálsamo, Gonzalo 1999 “Los Trabajadores de la Forestación”. Montevideo: Facultad de Agronomía, Universidad de la República. República Oriental del Uruguay. Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo.
- Barrán, José P. y Nahum, Benjamín 1967 *Historia Rural del Uruguay Moderno (1851-1885)* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental) Vol. 1.
- CINAM-CLAEH 1962 *Situación Económica y Social del Uruguay Rural* (Montevideo: Centro Latinoamericano de Economía Humana).
- Dirección General de Estadística y Censos. IV Censo General de Población y II de Viviendas. 1963
- Dirección General de Estadísticas y Censos. V Censo General de Población y II de Viviendas. 1975
- Dirección General de Estadísticas y Censos. VI Censo de Población y IV de Viviendas. 1985.
- El País. Montevideo. 28 de Marzo de 1999. Segunda Sección: 4 - 5.
- Finch, Henry 1980 *Historia Económica del Uruguay Contemporáneo* (Montevideo: Editorial Banda Oriental).
- García Sanz, Benjamín 1997 *La sociedad rural ante el siglo XXI* (Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) Serie Estudios.
- Ianni, Octavio 1997 *A Era do Globalismo* (Rio de Janeiro: BCD Uniao de Editoras S.A.).
- Instituto del Tercer Mundo. Guia del Mundo 1998. Mosca Editores. Montevideo. 627 pags.
- Instituto Nacional de Estadística. VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas. 1996.
- Irigoyen, Rodolfo 1996 *El País Agropecuario* (Montevideo. Sección del Diario El País) Año 1, N° 12, Febrero.
- Morena, Victoria 1999 “Los trabajadores de la viticultura” (Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. República Oriental del Uruguay). Monografía Final para optar al título de Licenciado en Sociología.
- Newby, Howard. La Sociología Rural Institucionalizada. In: Howard Newby y Eduardo Sevilla Guzmán, 1983. *Introducción a la Sociología Rural* (Madrid: Alianza Editorial).

Peyrou, Juan, Julio Preve y Hector Laca. Carne Vacuna: situación actual y perspectivas para 1996. In: MGAP. OPYPA. Anuario '95. Montevideo. Uruguay. 1995.

Piñeiro, Diego 1991 *Nuevos y No Tanto. Los Actores Sociales para la Modernización del agro uruguayo* (Montevideo: Editorial Banda Oriental/CIESU).

Piñeiro, Diego 1995 "El Impacto del MERCOSUR en la Agricultura Uruguaya", en Cloquell, Silvia y Santos, Eduardo (comps.) *Argentina frente a los Procesos de Integración Regional. Los efectos sobre el Agro* (Rosario: Homo Sapiens Ediciones, Facultad de Ciencias Agrarias (UNR), REDCAPA).

Riella, Alberto y Tubío, Mauricio 1997 *Los Asalariados Zafrales del Citrus del Uruguay. Unidad de Estudios Regionales. Regional Norte de la Universidad de la República* (Salto, Uruguay) Documento de Trabajo N° 31/97.

Solari, Aldo 1958 *Sociología Rural Nacional* (Montevideo: Edición de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).

Sorokin y Zimmermann 1929 *Principles of Rural-Urban Sociology* (New York).

Notas

1 Población rural de algunos países del continente: Argentina, 13%; Bolivia, 41%; Brasil, 29%; Chile, 16%; México, 26%; Paraguay, 49%; USA, 24%. Todos los datos para 1995 (Guía del Mundo, 1998).

2 Rama de Actividad es la actividad del establecimiento en el que una persona trabajó durante la semana anterior al Censo. Por Rama I el INE entiende las actividades de Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca.

3 Por patrones se entiende a todos aquellos que hayan dado empleo a por lo menos una persona.

Anexo: Cuadros

Cuadro A

Distribución de población en áreas rurales y urbanas, 1985

	Población sin Montevideo	%	Población con Montevideo	%
Rural	304.140			
Menos de 2000 habitantes	142.888			
Subtotal de Pob. Rural	447.028	29	374.154	13
Más de 2000 habitantes	514.559			
Capital departamental	601.880			
Subtotal Urbano	116.439	71	2.581.087	87
Total país	1.563.467	100	2.955.241	100

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, VI Censo de Población y IV de Viviendas 1985.

Cuadro B

*Población rural y urbana según dos criterios
Según Censo 1985 y según criterio de actividad (*)*

	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Diferencia en población rural
Población total %	2.602.397 87	374.154 13	2.976.551 100	2.500.302 84	476.249 16	2.976.551 100	102.095
PEA total %	1.006.096 85	170.712 15	1.176.808 100	988.518 84	188.290 16	1.176.808 100	17.578
PEAde la Rama 1 %	49.423 29	120.760 71	170.193 100	12.849 26	157.334 74	170.183 100	36.574

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, VI Censo de Población y IV de Viviendas 1985

(*) Para clasificar la población total en urbana y rural según un criterio de actividad, se analizó cada una de las localidades del país. Aquellas que cumplían con la condición de tener mayoría porcentual o numérica de población ocupada en agricultura, silvicultura y pesca, fueron incluidas como rurales. La población de aquellas localidades que tenían mayoría de población activa dedicada a la industria manufacturera, servicios y comercio, fue considerada como urbana.

Reestruturação produtiva e os impactos sobre os migrantes

Maria A. Moraes Silva*

O objetivo deste texto é tecer algumas considerações sobre as mudanças ocorridas nas relações de trabalho na agricultura brasileira, especificamente, na cultura da cana-de-açúcar em São Paulo e seus desdobramentos sobre outras áreas do país.

As reflexões serão baseadas em pesquisas desenvolvidas na região de Ribeirão Preto, situada no nordeste do estado de São Paulo, considerada uma das mais ricas do país, e responsável por capitanear o atual processo de modernização das usinas de açúcar e álcool, mediante a mecanização do corte da cana, atividade que empregava um grande número de trabalhadores.

A mecanização do corte da cana com o corolário das milhares de demissões sucessivas coloca uma grande questão acerca dos demitidos. Sabe-se que se trata de uma mão-de-obra desqualificada, desvalorizada, que, segundo as palavras de um trabalhador: “*o cortador de cana não passa de um cortador de cana, ele não é outra coisa*”. A situação se agrava em virtude da inexistência do seguro desemprego. Ademais, boa parte deste contingente não possui sequer o registro formal de trabalho. Portanto, se trata de trabalhadores que não possuem os direitos trabalhistas, logo, são excluídos da cidadania, mesmo quando estão empregados.

Em outro trabalho (Silva, 1999), abordei o processo histórico responsável por esta realidade. Ademais, vários autores (Alves, 1991; Veiga Filho, 1993;

* Professora adjunta do Programa de Pós-graduação em Sociologia da UNESP/Araraquara e do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UNESP/Botucatu/São Paulo/Brasil e Pesquisadora do CNPq/Brasil.

Scopinho, 1996), além de setores ligados aos movimentos sociais (Promotoria Pública da cidade de Ribeirão Preto/SP, Pastoral dos Migrantes, Sindicatos) têm apontado para os efeitos perversos desta modernização no que tange aos trabalhadores. De um modo geral, as temáticas da modernização e da exclusão ocupam um lugar central em todas estas discussões.

Neste momento, gostaria de propor algumas reflexões tendo como eixo a realidade dos chamados excluídos. Os dados de pesquisa e as informações coligidas nos textos e Boletins da Pastoral dos Migrantes têm mostrado que os excluídos desta modernização têm se transformado em verdadeiros itinerantes em busca de trabalho em várias regiões do país. A ausência de alternativas e a omissão do Estado têm criado as bases para um deslocamento espacial e temporal incessante. Ao contrário da realidade de muitos países ricos, onde os direitos e a cidadania ainda preservam o status dos desempregados, a situação brasileira, especificamente deste contingente, é marcada pela “desposseção” e desenraizamento constantes. São vidas definidas por um vaivém perene, por uma eterna migração forçada que lhes impinge a marca de um destino social. Na luta pelo direito à sobrevivência, resistem à condição de párias, de mendigos. Os trajetos de suas andanças refletem a busca de um ponto fixo na escala social. Resistem ao processo descendente imposto pela estrutura social e independente de suas vontades. Esta postura é contrária àquela que mostra que as pessoas migram porque querem¹. Defende-se, de antemão, a idéia de uma migração forçada, imposta pela estrutura social, econômica e política atual. A migração é resultado de um processo histórico e, ao mesmo tempo, causa de um outro. É justamente aí que residem as bases analíticas da ação dos sujeitos envolvidos. A exclusão não pode ser vista como algo absoluto, pronto, fechado, finito. Entende-se a migração como uma abertura, como caminho para novos ciclos que se abrem e se fecham constantemente. Desta sorte, considera-se a exclusão em termos relativos, gerando contraditoriamente, possibilidades e alternativas realizadas pelos próprios sujeitos. Os atos de violência ligados ao tráfico de drogas, considerados negativos; a participação em movimentos sociais e políticos organizados; a inserção em trabalhos precários e a migração, são fissuras abertas, provocadas pela exclusão. Neste sentido, defende-se a idéia da existência de um processo de *exclusão-inclusão precária*, que remete à disjunção, porém com continuidade, ainda que precária. Esta idéia está ancorada na noção de “desafiliação”, proposta por Castel:

“Falar de desafiliação... não é pressupor uma ruptura, mas recompor um percurso. A noção pertence ao mesmo campo semântico da dissociação, da desqualificação ou da invalidação social. Desafiliado, dissociado, invalidado, desqualificado, em relação a quem?” (Castel, 1995: 15).

Deste modo, esta noção pressupõe uma análise diacrônica, longitudinal, um quadro de relações entre passado e presente: o passado como o espaço da

centralidade e da inserção e o presente como o da exclusão-inclusão precária. Este mesmo autor, parafraseando M. Pialoux, afirma sobre a existência de *uma precariedade como destino* (p. 411). Retomando as inflexões acerca das fissuras, dos poros existentes neste processo, pode-se compreender o hífen, situado entre a exclusão e a inclusão como um espaço que além de unir os dois pólos, caracteriza-se como espaço de alternativas diferenciadas, como conexões de diferentes matizes sociais, como, segundo as palavras de Castel, “*zonas de integração, zona de vulnerabilidade, zona de assistência, zona de exclusão ou sobretudo de desafiliação*” (p. 414). Ainda há um outro ponto importante nas reflexões deste autor. A noção de desafiliação não significa necessariamente a ausência de vínculos. Neste sentido, as gangues de jovens desocupados possuem vínculos, no entanto, eles são frágeis, incapazes de criarem projetos sociais, capazes de sustentar as ações dos sujeitos e lhes permitirem a integração social assentada em relações de sociabilidade. Portanto, a noção de desafiliação contém, além dos aspectos relacionados ao trabalho, aqueles referentes às relações de sociabilidade, que se produzem na esfera do trabalho propriamente dita e em outras esferas sociais, tais como, a família, comunidade etc.

Acredita-se que tais reflexões são extremamente importantes à compreensão da realidade de milhares de trabalhadores rurais, migrantes ou não, despedidos em razão do processo de modernização das usinas de açúcar e álcool desta região. Os efeitos mais visíveis deste processo sobre os trabalhadores são a *modernização e a exclusão*, que têm sido consideradas como as definidoras da situação de instabilidade e miséria de milhares de trabalhadores desta região: Assim sendo, as 29 usinas e as 17 destilarias, responsáveis pela produção de mais de 42 milhões de sacas de açúcar e mais de 3,5 bilhões de litros de álcool em 1998, foram responsáveis pela supressão de mais de 15 mil postos de trabalho nestes últimos seis anos. Estima-se que somente na região de Ribeirão Preto, existam mais de 500 colhedeiros de cana, sendo que cada uma possui capacidade de colher 700 toneladas por dia, o que corresponde à substituição de 100 homens. Deste modo, o equivalente a 50 mil trabalhadores seria o saldo total das demissões provocadas por estas máquinas. Segundo cálculos existentes, para cada 100 demissões, são abertas 12 vagas para funções especializadas, dentre elas, aquelas referentes aos condutores destas máquinas, pois elas operam durante as 24 horas do dia, subvertendo, portanto, totalmente os limites impostos pela natureza, no que tange ao trabalho na agricultura.

Qual o destino destas pessoas, trabalhadores locais e migrantes provenientes de várias regiões do país, principalmente das áreas mais pobres, como o Vale do Jequitinhonha, situado no norte e nordeste do Estado de Minas Gerais e outros Estados do Nordeste? Como estão sobrevivendo? Sem ter a pretensão de dar respostas definitivas a estas questões, nem estabelecer relações mecânicas, e retomando as inflexões acima, acerca dos poros, das fissuras entre a exclusão e a inclusão precária, propõe-se a apresentação de um quadro descritivo, que, pelo

menos possa oferecer uma cartografia da “mobilidade precária” existente. Apenas um estudo mais aprofundado em várias partes do país poderia dar conta deste universo. Conquanto, frisa-se que, em virtude das imensas dimensões geográficas, aliadas às facilidades dos meios de transportes e à existência de muitas áreas agrícolas, principalmente canavieiras, cujo grau de tecnificação ainda é inferior àquele das usinas desta região, cria-se a possibilidade de inserção dos despedidos, sob diferentes formas.

Os precários

O aumento da precarização do trabalho, manifesta pela diminuição dos salários, atrasos constantes no pagamento dos mesmos, presença das cooperativas de trabalhadores, que correspondem ao fim dos direitos adquiridos ao longo de várias décadas de lutas dos canavieiros desta região. Segundo informações recentes, algumas usinas estão utilizando-se de vales (tickets) como forma de pagamento. Outras, ainda, estão parcelando, em até três vezes, os salários. Quanto às cooperativas de trabalhadores, elas na verdade, representam uma maneira de escamotear os direitos, como o registro em carteira, bandeira de luta dos trabalhadores durante décadas seguidas. Elas são chamadas na região de copergatas, em alusão aos “gatos”, arregimentadores, deste mercado de trabalho.

Por outro lado, intensificam-se as exigências quanto à qualificação, principalmente no tocante aos níveis de escolaridade. Vários depoimentos de trabalhadores atestam para uma exigência insólita: quatro anos de escolaridade para os cortadores de cana e oito anos para aqueles que se destinam às tarefas da área industrial da usina. Vejamos, afim de ilustrar estas afirmações, alguns exemplos, coligidos pela Pastoral dos Migrantes em várias partes do país.

“A turma, que trabalha com o gato Nenzão, está cortando 7 ruas de cana” (Boletim CÁ e LÁ, N° 99[b]). Isto representa um enorme retrocesso na luta dos trabalhadores rurais desta região. As greves em 1984 e 1985 tiveram como principal motivo a reivindicação da passagem de 7 para 5 ruas².

“Na zona rural do município de Minas Novas, nas primeiras semanas do mês de maio, saíram em torno de trinta ônibus com trabalhadores, que se destinavam às usinas de São Paulo e Mato Grosso. Um trabalhador que não conseguiu emprego se jogou do ônibus e morreu, outro voltou doente em estado de choque amarrado num banco do ônibus” (Boletim CÁ e LÁ, N° 98).

“Em Iracemópolis e Itápolis, as prefeituras estão pressionando as usinas para que sejam contratados apenas os trabalhadores locais” (Boletim CÁ e LÁ, N° 99[a]).

“Na entressafra, aumenta a precariedade do trabalho. Muitos trabalhadores se destinam às atividades da colheita de amendoim, cujo pagamento é em

torno de R\$ 0,01 (um centavo) por metro de amendoim colhido. Outros colhem algodão apelo preço de R\$ 1,00 (um real) por arroba” (Boletim CÁ e LÁ, N° 91).

“Algumas prefeituras da região de Ribeirão Preto estão pagando ônibus para levar os migrantes de volta para suas cidades. Uma delas é Santa Cruz das Palmeiras”(Boletim CÁ e LÁ, N° 85).

“Em Santa Cruz das Palmeiras/SP, a contratação da mão-de-obra é feita pelas usinas, que retira parte do salário dos trabalhadores para pagar aos donos de pensão, uma vez que elas não possuem alojamentos. Não há contrato de trabalho. Foram registrados duas mortes em razão de meningite e mais 14 casos notificados”.

“Na lavoura de laranja em Araraquara e Matão, nos salões de açúcar, nas atividades de ensacamento e empilhamento, da usina Bonfim (Guariba), os trabalhadores estão sendo contratados pelas Copergatos, sem registro formal de contrato de trabalho” (VAIVÉM, N° 68).

Em relação às mulheres, elas estão alijadas do corte da cana, sob o pretexto de não lograrem os níveis de produtividade exigidos. Aquelas que conseguem trabalho, estão sendo relegadas às piores tarefas, como as de bituqueiras (que consistem em recolher as bitucas, ou seja, os pedaços de cana que não são recolhidos pelas máquinas após o corte), ou então como aplicadoras de veneno no controle das pragas da cana, (atividades denominadas descarte), ou ainda, nos viveiros onde se preparam as gemas para a plantação da cana, que, igualmente, demandam o manuseio de agrotóxicos. A prática (ilegal) da exigência do atestado de esterilidade continua existindo. Foram encontradas várias mulheres com doenças em razão da utilização de agrotóxicos: alergias, coceiras, queimaduras, câncer de pele, de garganta e muitas doenças que afetam os aparelhos respiratório, circulatório e digestivo.

Duas delas morreram alguns meses depois de terem concedido os depoimentos em razão de câncer na garganta e nos pulmões. Por outro lado, as bituqueiras padecem com sérios problemas de coluna, em razão da postura corporal curvada, obrigatória durante todo o desempenho da tarefa. (Silva, 1999: cap. “As meninas do descarte”).

A precarização tem ainda outras facetas, dentre elas, a superexploração do trabalho, evidenciada não apenas pela forma de salário baseada no quantum de produção e pela elevação da média de produtividade, atualmente fixada entre nove a dez toneladas de cana cortada por dia, como também pela recente introdução de uma outra atividade relacionada à colheita do amendoim. O amendoim é plantado no canavial logo após o corte, para evitar os males causados à terra pelas máquinas em virtude da compactação do solo. Durante a fase da colheita do amendoim, são utilizadas duas máquinas, uma para arrancá-lo e outra

para debulhá-lo. Entre as duas, trabalhando em geral de joelhos, ficam os trabalhadores, geralmente velhos e crianças, cuja atividade consiste em sacudir as plantas a fim de lhes retirar o excesso de terra para não comprometer o funcionamento da segunda máquina. Este é mais um exemplo do processo de precarização do trabalho nesta cultura.

Os vulneráveis

Em recente visita a um alojamento de trabalhadores migrantes, provenientes do Vale do Jequitinhonha/MG, constatou-se que um deles havia migrado em 1996 para as usinas de São Paulo, em 1997 para as de Mato Grosso e em 1998 migrou para o estado de Amazonas também para cortar cana. Relatou que fora levado de avião por um “gato”, aí permanecendo por três meses apenas, pois, não suportara o calor de mais de 45 graus. Os dados da Pastoral dos Migrantes confirmam a situação de itinerância de milhares de trabalhadores de um lado para o outro do país.

“Inúmeros maranhenses que trabalhavam na usina de Alcopam de Poconé/MT saíram a pé e de carona ao longo dos 120 km que os levaria até Cuiabá. Paralisaram o trabalho porque há três meses não recebiam, a não ser pressões, humilhações e comida de péssima qualidade... Após denúncias ao CPM (Centro de Pastoral dos Migrantes), foram contactados sindicalistas, representantes da FETAGRI e dos usineiros. Foram feitos acordos com os mais de 400 trabalhadores, maranhenses e baianos, pelos quais, os mesmos receberam os salários atrasados, muito embora muito aquém dos preços estipulados pelos gatos. Os trabalhadores receberam as passagens de retorno” (Notícias- SPM, N° 51).

“Esta usina não atende as normas de segurança e saúde exigidas por lei; as condições de saúde nos alojamentos são aviltantes e atentam contra a dignidade e a saúde dos trabalhadores; os banheiros são imundos, restos de comida estão espalhados pelo pátio, onde homens e moscas convivem em situação deprimente; os trabalhadores em dia de folga só recebem o almoço às 15,30hs; eles não dispõem de água para lavar suas roupas e para higiene pessoal; o registro d’água só é aberto quando chegam da roça e não é suficiente para todos; o transporte é feito em caminhões – gaiola, próprio para o transporte de gado; em caso de acidentes no trabalho, eles são levados para os alojamentos sem nenhum socorro”. (VAIVÉM, N° 77).

Esta situação guarda fortes semelhanças com aquelas vivenciadas por mim e pela professora Marilda de Menezes, por ocasião de uma visita aos alojamentos de trabalhadores paraibanos nas usinas da Zona da Mata de Pernambuco. Um pequeno excerto das anotações do caderno de campo revela a situação de miserabilidade vivenciada.

“Havia poucos trabalhadores no local, recentemente chegados do trabalho. Havia apenas um trabalhador de Fagundes. Os demais eram oriundos do próprio estado de Pernambuco. Alguns já haviam trocado de roupa, outros estavam preparando o almoço. Em virtude do controle, estávamos muito apreensivos não somente em relação ao nosso trabalho, como também aos trabalhadores. As condições de vida neste alojamento eram semelhantes àquelas vistas pela pesquisadora em julho de 1985, por ocasião de uma visita a um barracão de migrantes, provenientes do Vale do Jequitinhonha, na região de Ribeirão Preto/SP. Lembrei-me daquela situação experimentada há quase 14 anos atrás, quando imaginei que, em nenhum lugar poderia encontrar algo semelhante. Precariedade, total desconforto são palavras pouco significativas para retratar estes lugares. Somente o registro feito pela imagem poderá dar conta da dimensão do processo de exploração, dominação, desqualificação e depredação destes homens. O alojamento é o prolongamento daquilo que se observa no eito dos canaviais. Amontoados em quartos escuros, mal ventilados, sujos, estes homens sentem o peso de serem mercadoria barata num mundo em que os direitos apenas existem no papel. Vivem vigiados e escondidos. Os quartos de dormir estão cheios de roupas sujas, panelas, botas, redes, instrumentos de trabalho, como os facões, lenha utilizada para o preparo da comida. Trata-se de um lugar não de morada, mas de passagem. Tudo reflete miséria e transitoriedade. As instalações sanitárias são precaríssimas, sem considerar, o local destinado ao preparo da comida. Aqui, nenhum cuidado referente à higiene existe. No centro de um grande compartimento, há um conjunto de fogões à lenha, onde os trabalhadores preparam suas refeições às pressas. Os caldeirões, enegrecidos pela fumaça, trazem em seu interior um pouco de feijão com carne de sol. Pela manhã, quando saem para o trabalho, levam um pouco de fubá cozido (‘quarenta voltas’, isto é, mexido com uma colher de pau, quarenta vezes), o qual serve como refeição por volta das 9 hs. Em se tratando de uma atividade que exige um grande dispêndio de energia, pode-se avaliar quão esta alimentação é deficiente e insuficiente para garantir a saúde e as condições mínimas de reprodução desta força de trabalho. Seus corpos refletem a situação à qual são submetidos. Corpos esqueléticos, rostos com marcas profundas estampados nos olhares entristecidos, sem muitas indagações. Nosso tempo de permanência neste alojamento foi muito curto. A vigilância não nos permitiu um maior contato. Por isso, despedimo-nos dos trabalhadores, e, em seguida, dirigimo-nos a um outro, denominado Alojamento do Engenho Japomin, situado nas terras da Usina Santa Teresa também em Pernambuco.

Ao aproximarmos do alojamento, percebi um pequeno conjunto de casas, cercadas por uma cerca. Primeiramente, o conjunto de casas, encravado no

meio dos canaviais, contrastava enormemente com a paisagem do Estado de São Paulo, onde as usinas foram responsáveis pela demolição de todas as casas dos antigos colonos de café. O resultado foi a homogeneização do espaço, possibilitando, portanto, uma nova leitura, através da qual, a cana preenche o olhar dos observadores. Tal processo, ao destruir a história objetivada, engendrou a nova leitura do espaço, onde o antigo sucumbiu-se diante do novo, não deixando rastros, a não ser nas lembranças daqueles que ali viveram.

A presença daquelas casas, portanto, causou-se um espanto, enquanto pesquisadora, proveniente do Estado de São Paulo, porque nelas vi ou pressenti algum rastro de uma história passada e presente. A informação, transmitida por Marilda (Marilda Meneses, professora da UFPB), de que se tratava de antigos moradores, sem dúvida remete à análise da resistência. No entanto, outros elementos surgiram neste cenário: a cerca e os quadros pintados nas cores verde e vermelha, nas paredes da frente de cada uma das casas. Em razão do conhecimento prévio, Marilda procurou pelo Sr. Bil, um dos depoentes de sua pesquisa. Antes de relatar a conversa com este antigo morador, é necessário algum comentário sobre este espaço. Trata-se de dois conjuntos de casas, separados por uma rua. Não sabemos quantas famílias vivem ali nas vinte casas, aproximadamente. No fundo das casas, algumas plantações de mandioca, algumas bananeiras e mangueiras. Em toda sua área, a cerca construída pela usina.

Depois de informados da presença do Sr. Bil, que repousava na casa de farinha, localizada nos fundos de sua casa, dirigimo-nos ao seu encontro. Após os cumprimentos e da alegria manifesta com a presença de Marilda e do padre Lírio, o Sr. Bil iniciou seu relato, contando-nos sobre a cerca. Segundo ele, esta era uma decisão tomada recentemente pelos atuais proprietários da Usina São José.. Também se referiu às marcas nas paredes das casas. Na realidade, a cor verde indicava que as pessoas tinham permissão para permanecer, enquanto a cor vermelha indicava o contrário, ou seja, haveria aí, uma ação de despejo embutida nesta decisão. No que tange à casa de Sr. Bil, ela estava marcada com a cor vermelha. Segundo nos disse, tentou, por diversas vezes, dialogar com um dos administradores da Usina, utilizando em sua argumentação, o relato de sua própria história. Seus pais foram moradores da Usina, ele ali trabalhou durante 50 anos, e um dos filhos está atualmente trabalhando, sem contar que, aos 79 anos, nunca viveu em outro lugar, que não aquele. Seu discurso, sua defesa, assentam-se em sua história. Para ele, estar na casa de farinha, sentir o frescor do vento, é o que ele almeja, depois de uma vida de intenso trabalho. No entanto, tal argumentação, até o momento não fora levada em conta, porque nenhuma resposta lhe foi dada, apesar de dizer que está vivendo com o filho que é trabalhador da Usina”.

No entanto, esta realidade não é relatada quando o migrante regressa ao seu lugar de origem. Pobres em experiência, silenciam-se sobre a violência à qual são submetidos cotidianamente. Os migrantes que trabalham no corte da cana raramente contam sobre as condições extenuantes do trabalho e das humilhantes condições de moradia nos alojamentos.

“Dois migrantes, tendo a família com residência em Mato Grosso do Sul, foram contratados com mais oito pessoas por um “gato”, que lhes prometeu um salário de R\$15,00, por hectare, para catar raízes e pedaços de madeira que restaram das queimadas... Ao chegarem à fazenda, foram morar num barraco de lona preta com mais 38 trabalhadores... As camas eram feitas pelos próprios trabalhadores com paus roliços, a comida e péssima qualidade e a água barrenta... Por quatro meses de trabalho, receberam apenas R\$50,00... Apesar das reclamações nada conseguiram... e, resolveram abandonar o acampamento. Todo grupo caminhou mais de 100 km... hoje só pensam em retornar como derrotados para junto de suas famílias” (Notícias-SPM, N° 45).

“Migrantes em trânsito, os trecheiros, geralmente são provenientes do interior do Estado, com destino ao litoral ou ao Rio de Janeiro. O trecheiro, geralmente não possui documentos, quando os têm estão em péssimas condições. Como pertences, carregam uma sacola plástica” (VAIVÉM, N° 76).

“Submetidos ao trabalho escravo na fazenda Novo Horizonte em Serrânia/Minas Gerais, 37 dos 58 trabalhadores rurais baianos, inclusive oito menores e quatro mulheres, aliciadas na cidade de Caetité/Bahia, agenciados por um pastor da Igreja Assembléia de Deus, recebiam apenas R\$ 2,00 por dia, alimentavam-se apenas de arroz e passavam fome”.

A seqüência deste relato revela que os trabalhadores conseguiram fugir da fazenda e denunciar a situação de trabalho escravo à qual estavam submetidos (VAIVÉM, N° 67).

A diminuição constante da oferta de emprego, provocada pela supressão de milhares de postos de trabalho durante todos os anos, tem contribuído para o aumento do contingente dos excedentários, principalmente, adultos com mais de trinta anos, jovens sem experiência de trabalho, mulheres e migrantes. Este fato, aliado às conseqüências da reestruturação produtiva em outros setores da economia, é um dos responsáveis pelo aumento da violência na região, sobretudo aquela advinda do tráfico de drogas, atividade que está sendo desempenhada por muitos filhos de trabalhadores rurais e também por migrantes.

A mobilidade precária

Recente estudo (Aguiar, 1998) sobre o perfil dos canavieiros da bacia do Alto Paraguai/MT mostrou que há um deslocamento constante de trabalhadores para

esta região, proveniente de várias partes do país, principalmente dos estados de AL, PE, BA, MG, PB, GO e, em menor escala, SP. A metodologia empregada se baseou nas definições de áreas de origem, entendidas, como os locais de moradia destes trabalhadores. No entanto, no que se refere às migrações temporárias, os lugares de destino são os mais diversos possíveis. A metodologia do estudo das trajetórias é um instrumento valioso para detectar a realidade desta mobilidade. Em outros trabalhos (Silva, 1994; Silva, 1998), comprovaram-se casos de migração, para a mesma pessoa, para as mais diferentes áreas do país, sem contar que o número de vezes que migrou está relacionado à idade. Este fato é um indicador da existência de *uma permanente migração temporária*. Eles mesmos afirmam que “*o canavieiro é rodado, sem família, vai atrás de onde ganha mais*” (Aguiar, 1998: 308).

Outro dado importante constatado por estas pesquisas é que parte destes migrantes são pequenos proprietários em suas regiões de origem. Neste caso, estariam os migrantes do interior da Paraíba, sudoeste baiano, da Chapada Diamantina, da região nordeste de Minas Gerais (Vale do Jequitinhonha). Dedicam-se em geral à agricultura de subsistência. São, portanto, camponeses pobres com terra, assolados pelas secas constantes. Durante mais de quatro décadas, estes camponeses trabalharam nas usinas da região de Ribeirão Preto, sobretudo os mineiros e baianos.

Os migrantes de Fagundes não encontram nas grandes cidades o que esperavam e muitos acabam voltando ou migrando para outros estados. A juventude não encontra trabalho e muitas crianças estão trabalhando no corte de cana, nas usinas de Pernambuco (Notícias-SPM, N° 60).

Em muitas usinas, houve redução de salário e implantação de turnos fixos de horário, prejudicando os que trabalham à noite. Além do pagamento sob a forma de tickets, o número de trabalhadores migrantes diminuiu muito em relação à safra passada. Várias prefeituras estão forçando as usinas a empregarem trabalhadores locais (Notícias-SPM, N° 57).

Este fato tem contribuído para o recrudescimento da segmentação racial/étnica do trabalho mediante o aprofundamento do fosso entre trabalhadores “de fora” e os locais.

Durante o ano de 1996, foi realizado pela Pastoral dos Migrantes, um levantamento da realidade migratória nos municípios baianos, Botuporã, Caturama e Tanque Novo. Foram aplicados mais de 2000 questionários, incluindo a zona urbana e rural. A fim de se ter uma idéia da dimensão da realidade migratória, apresentam-se as cifras para apenas um dos municípios, Botuporã: 62% das famílias pesquisadas possuem entre um ou dois migrantes; a grande maioria é constituída de homens, havendo também mulheres; quanto à idade, 48% estão na faixa entre 15 e 15 anos; o tempo de permanência no lugar

de destino é inferior a um ano; em relação ao número de vezes que migrou, mais de 82% migraram entre 1 e 5 vezes; quase a totalidade dos migrantes migra sempre para os mesmos lugares. Esta pesquisa revelou para o conjunto dos municípios, que os camponeses migrantes se destinam majoritariamente para a cidade de São Paulo, onde se empregam na construção civil, e para os canaviais da região de Ribeirão Preto. As mulheres se destinam às atividades domésticas.

Houve também a constatação de um grande número de menores de 14 anos de idade. Mais da metade dos trabalhadores não possui registro formal, o que denota a realidade precária de trabalho (Pastoral dos Migrantes).

Segundo a Pastoral dos Migrantes, “ a comunidade Lagoa das Costas, no município de Botuporã, está com 41 casas fechadas, a maioria de famílias que foram trabalhar e morar em São Paulo. A migração na entressafra para o plantio da cana na região de Ribeirão Preto é intensa. Na sua maioria são jovens, que estão vindo pela primeira vez; recebem salário de R\$ 230,00; alguns ficam para a safra de cana, enquanto outros partem para outros lugares” (CÁ e LÁ, N° 84).

Em Campos Novos/SC, foram encontrados migrantes paulistas trabalhando na colheita do feijão.

“Esses migrantes são jovens entre 16 e 23 anos de idade que parece Ter assinado a carteira de andarilhos. Entre eles, há algumas crianças de 9 a 10 anos. Vindos, principalmente de Itaporanga/SP, permanecem em Campos Novos de janeiro a abril, arrancando feijão. De maio a junho vão para São Paulo para a colheita do café. Em julho e agosto, vão para Nova Mutum/MT para a colheita de feijão. De setembro a outubro, voltam para São Paulo, também para a colheita do feijão. Vivem amontoados em pequenas casas, em Campos Novos, sendo muito discriminados. Recebem salários baixos, não são registrados. São considerados peões itinerantes (VAIVÉM, N° 69).

Os excluídos

“O catador de papel, Joaquim Moreira, 34 anos, perambulou cinco dias pelo Ipiranga e Zona Sul de São Paulo... além de sua sorte, relatou que funcionários da prefeitura de Santos lotaram duas Kombis de sem-teto e os despacharam para São Paulo. Recentemente, um grupo de carentes, incluindo menores, foram largados na Via Dutra por uma perua. Eles não denunciaram o fato nem falaram de onde vieram por medo de represálias. No dia 02 de fevereiro, o prefeito de Corumbá, Éder Brambila, admitiu que despachou 32 moradores de rua porque eram mendigos de São Paulo e Minas Gerais” (Notícias-SPM, N° 56).

“Só em Palmares Paulista cerca de 1000 trabalhadores foram dispensados., o que corresponde à metade da safra passada. Os ônibus estão voltando mais lotados do que os que chegam” (Notícias-SPM, N° 49).

Algumas alternativas políticas

“Em Itápolis, Bebedouro, Catanduva e outras cidades da região, a Justiça mandou fechar as Coopergatos e registrar os trabalhadores. Nos contatos que a Pastoral Migratória teve com sindicalistas, Prefeituras e Assistentes sociais, nota-se uma preocupação muito grande com o desemprego em massa nesta região, com isso muitas famílias começam a passar necessidades básicas, sem perspectivas de solução” (Boletim CÁ e LÁ, N° 87).

Em razão da situação de expulsão de muitos migrantes itinerantes nas cidades da região de Ribeirão Preto/SP, as quais adotaram o sistema das cancelas para evitar a entrada dos “estrangeiros”, ou ainda, a prática da circulação, via computador, das fichas dos in (aceitáveis), chegando até mesmo, àquela do trabalho forçado em algumas cidades.

Quizá um dos casos limites de precarização do trabalho possa se referir aos carvoeiros. Além de ser uma atividade extremamente penosa, é prejudicial à saúde e emprega crianças. Recente pesquisa com as famílias de carvoeiros em Ribas do Rio Pardo/Mato Grosso, revelou que mais de 85% eram analfabetos. A existência do trabalho infantil provocou o surgimento do Movimento Projeto Vale da Cidadania, cuja finalidade era retirar as crianças do trabalho, possibilitando-lhes a frequência à escola, mediante a participação do Estado na concessão de R\$ 50,00 a cada família que possuísse crianças nas carvoarias. A grande maioria destes trabalhadores é proveniente do Vale do Jequitinhonha/MG.

Na região de Ribeirão Preto, existem nos acampamentos de sem terra, muitos migrantes, que não conseguiram emprego nas usinas ou fazendas. A participação dos migrantes neste Movimento, que no momento é o mais expressivo do país, é um indicador importante das possibilidades de mudanças e buscas de alternativas por parte daqueles que estão vivenciando o processo de exclusão-inclusão precária.

Concluindo

Ao longo deste texto, procuramos traçar a cartografia dos excluídos da modernização da agricultura, tendo como parâmetro a mecanização do corte da cana nas usinas da região de Ribeirão Preto/São Paulo. No tocante ao processo de acumulação de capital, estas usinas empregam as tecnologias mais avançadas do país, tanto na agricultura propriamente dita, quanto na área industrial.

A partir de meados dos anos de 1980, elas começaram a utilizar as máquinas para a atividade do corte, que exigia em torno de 100.000 trabalhadores, boa parte dos quais, era constituída por migrantes temporários, provenientes das regiões mais pobres do país, como o Vale do Jequitinhonha/Minas Gerais e Estados do Nordeste. Desde então, a cada ano, o espectro das demissões e do desemprego passou a atingir milhares de pessoas. Aliado a este fato, as fazendas de café desta região, que também utilizam grande quantidade desta mão-de-obra, vêm, sistematicamente, suprimindo a oferta de emprego, em razão do emprego das colhedoras mecânicas.

Apesar da diminuição desta demanda, assiste-se a cada ano, às cenas de centenas de trabalhadores, que, mesmo sem terem a certeza de encontrarem trabalho, chegam às cidades desta região. Muitos são obrigados a regressar aos locais de origem, embarcando nos próprios ônibus que os trouxeram. Outros se empregam. Outros perambulam de um lugar a outro em busca de trabalho para a sobrevivência.

No que tange aos residentes nesta região, muitos também estão migrando para outros lugares. Nos últimos anos, tem-se observado os dois processos, da imigração e da emigração, sobretudo daqueles mais velhos, que já não conseguem os níveis de produtividade exigidos, em torno de 10 t/dia. Esta situação tem produzido um quadro de itinerância generalizado, aliado à situação de desespero de muitas famílias, posto que não há o seguro desemprego e nem a aplicação do Fundo de Assistência Social, equivalente a 4% (1% do açúcar, 1% da cana e 2% do álcool), do total do faturamento das usinas. Este fundo consta da Lei Federal Nº 4.870, de dezembro de 1965.

Em virtude desta realidade, assiste-se, como nos demais setores da economia, ao refluxo do movimento sindical, o que tem contribuído para aumentar os níveis de exploração, em razão dos baixos salários e da progressiva perda dos direitos trabalhistas, conseguidos, após muitas décadas de lutas.

Neste texto, objetivou-se analisar o sucedâneo deste processo de exclusão. Foi possível verificar que, na verdade, há entre os dois pólos opostos, o da exclusão e o da inclusão, uma zona de alternativas possíveis, caracterizadas sobretudo pela mobilidade precária, pela vulnerabilidade, que se definem como momentos de luta para evitar a queda no fosso da exclusão. Pode-se dizer, tal como o relato de uma das depoentes de P. Bourdieu (1999: 425-436), estas pessoas têm a vida *suspensa por um fio*. Vagando de um canto a outro neste imenso país, suportando as tarefas as mais pesadas, discriminadas, muitas vezes, suportando até mesmo a escravidão, desprovidas dos mínimos direitos, inclusive do direito de ir e vir, posto que muitas cidades constróem barreiras para evitar sua entrada, a única esperança que possuem é não se tornarem mendigos, seres desgarrados, condenados por uma verdadeira morte social. Mesmo distantes, prendem a utopia de rever a família, de voltar um dia à terra de origem, de

encontrar trabalho para remeter aos que ficaram. É este sentimento de pertencimento à família, a um determinado lugar, à condição de trabalhador, de provedor, que lhes identifica, que lhes define. Esta é sua identidade, ainda que em trânsito, transitória, provisória. Aqueles que chegaram à condição de mendigos, consideram-se como excluídos, à margem, porém, assim mesmo, conservam a utopia, através da memória de trabalhadores que foram num tempo passado, de, num futuro, ainda, reaver o tempo e o espaço perdidos.

Atualmente, os Sindicatos de trabalhadores rurais da região e as Federações, sobretudo a FERAESP (Federação dos Assalariados Rurais do Estado de São Paulo) estão concentrando suas atividades na luta pela terra, na organização de acampamentos e nas ocupações e assentamentos. Um total de mais de mil famílias acham-se assentadas em terras públicas da região nos seguintes municípios: Araraquara, Boa Esperança, Bocaina, São Simão e Pradópolis. A terra tem aparecido como alternativa ao desemprego e ao processo de exclusão, principalmente para os trabalhadores que residem nas cidades desta região. Mais recentemente, o MST (Movimento dos Sem Terra) registrou a ocupação de terras pertencentes à uma das grandes usinas no município de Matão. Estas terras estavam sendo arrendadas pela Usina Bonfim. Em todos estes casos, tudo leva a crer que a maioria dos ocupantes seja constituída por trabalhadores locais e não por migrantes. Esta é uma das estratégias políticas dos Sindicatos e dos prefeitos da região, cujo intuito é a diminuição das tensões e da violência urbana.

Bibliografia

- Aguiar, M. V. A. 1998 “Perfil social dos canavieiros cortadores de cana-de-açúcar da bacia do Alto Paraguai (BAP), Mato Grosso”, in SPM, CEM, CNBB, LABUR, CSEM (orgs.) *O fenômeno migratório no limiar do 3º milênio* (Petrópolis: Editora Vozes) pp. 286-316.
- Alves, F. J. C. 1991 *Modernização da agricultura e sindicalismo: lutas dos trabalhadores assalariados rurais da região canavieira de Ribeirão Preto* (São Paulo: Campinas). Tese de Doutorado.
- Boletim CÁ e LÁ 1997 Ano 12, N° 84, Fevereiro/Março.
- Boletim CÁ e LÁ 1997 Ano 12, N° 85, Abril.
- Boletim CÁ e LÁ 1997 Ano 12, N° 87, Junho/Julho.
- Boletim CÁ e LÁ 1998 Ano 12, N° 91, Fevereiro/Março.
- Boletim CÁ e LÁ 1999 Ano 12, N° 98, Abril/Maio.
- Boletim CÁ e LÁ 1999 Ano 12, N° 99[a], Junho/Julho.
- Boletim CÁ e LÁ 1999 Ano 12, N° 99[b], Agosto/Setembro.
- Bourdieu, P. 1999 “Suspensa por um fil”, in Bourdieu, P. (coord.) *A miséria do mundo*, Petrópolis FCE.
- Castel, R. 1995 *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat* (Paris: Fayard).
- Martins, J. S. 1998 “O problema das migrações no limiar do Terceiro Milênio”, in SPM, CEM, CNBB, LABUR, CSEM (orgs.) *O fenômeno migratório no limiar do 3º milênio* (Petrópolis: Editora Vozes) pp. 19-34.
- Notícias-SPM 1997 N° 45, Novembro/Dezembro.
- Notícias-SPM AÑO N° 49 MES
- Notícias-SPM 1998 N° 51, Setembro.
- Notícias-SPM 1999 N° 56, Abril/Maio.
- Notícias-SPM 1999 N° 57, Maio/Junho.
- Notícias-SPM 1999 N° 60, Agosto/Setembro.
- Scopinho, R. A. 1996 “Modernização e superexploração na agroindústria sucroalcooleira”, in Scopinho, R. A. Vallarelli (org.) *Modernização e impactos sociais* (Rio de Janeiro: FASE) pp. 50-86.
- Silva, M. A. M. 1994 “Destinos e trajetórias de camponeses migrantes”, in Blass, L. S. (org.) *Temas* (Araraquara: F. C. L/UNESP) pp. 65-100.
-

Silva, M. A. M. 1998 “As Andorinhas. Nem cá. Nem lá”, in *Cadernos CERU*, Série 2, N° 9, p. 29-44.

Silva, M. A. M. 1999 *Errantes do fim do século* (São Paulo: Editora da UNESP).

SPM, CEM, CNBB, LABUR, CSEM (orgs.) 1998 *O fenômeno migratório no limiar do 3º milênio* (Petrópolis: Editora Vozes).

VAIVÉM 1996 Ano 15, N° 67, Abril, Maio, Junho.

VAIVÉM 1996 Ano 15, N° 68, Julho, Agosto, Setembro.

VAIVÉM 1996-1997 Ano 16, N° 69, Outubro/Março.

VAIVÉM 1999 Ano 19, N° 76, Abril, Maio, Junho.

VAIVÉM 1999 Ano 19, N° 77, Julho, Agosto, Setembro.

Veiga Filho, A. A. *et al* 1993 “Análise da mecanização do corte da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo”, in *Informações Econômicas* (São Paulo) Vol. 24, N° 10, pp. 43-52.

Notas

1 Segundo esta visão, pode-se citar a seguinte passagem: “... *muitas pessoas que migram, migram porque decidiram migrar; migram porque migrar era a melhor alternativa. Isso não quer dizer que seja a correta alternativa, mas era a melhor alternativa no julgamento do migrante*”. Ver a respeito, Martins (1998: 19-34).

2 Estas greves são conhecidas como as greves de Guariba, pois foi nesta cidade de trabalhadores rurais que os movimentos de revolta começaram. O maior fator responsável pelos conflitos foram as mudanças implantadas pelas usinas no processo de trabalho. Até então, o corte da cana era feito levando-se em conta as cinco ruas, ou seja, cada trabalhador cortava cinco fileiras de cana. A passagem para sete ruas implicava maior intensidade do trabalho, portanto, o aumento da mais valia relativa, maior exploração, já que os salários continuavam os mesmos. A maior vitória destes movimentos foi a fixação de cinco ruas (fileiras de cana).

Trabajo, migraciones e identidades en tránsito: los zafreiros en la actividad cañera tucumana

Norma Giarracca*, Karina Bidaseca** y Daniela Mariotti***

Introducción

El trabajo rural en Argentina se caracterizó desde los inicios del siglo XX por su relación con procesos migratorios: fuertes contingentes de europeos viajaron periódicamente para la cosecha cerealera de la rica región pampeana desde fines del XIX hasta que se mecanizaron los procesos de trabajo, y las economías regionales se conformaron alrededor de un cultivo (vid, azúcar, yerba mate, etc.) cuya producción demandaba trabajo en forma estacional. Esto requería del desplazamiento tanto de población de otras regiones en los picos de cosecha, como de los trabajadores locales durante los períodos inter-cosechas (Sabalain y Reboratti, 1982).

Tucumán, donde se localiza el estudio que da lugar a este artículo, es la provincia más pequeña del país. Si bien ocupa sólo el 0,8% de la superficie nacional, es la región de mayor densidad poblacional: 50,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta provincia fue una región pionera en la producción de azúcar durante el siglo XIX, lo que le permitió una integración temprana al desarrollo capitalista nacional (Campi, 1995). La producción de caña fue decisiva en la generación de espacios territoriales, pero también sociales y culturales. Sigue siendo hoy la que mayor actividad produce en el espacio rural y en el de las pequeñas ciudades, tanto por la generación de trabajo agrario directo como por el trabajo

* Socióloga. Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora del Grupo de Desarrollo Rural de CLACSO.

** Socióloga. Becaria de Maestría, UBACYT, de la Universidad de Buenos Aires en el Grupo de Estudios Rurales.

*** Socióloga. Becaria FONCYT en el Grupo de Estudios Rurales, Universidad de Buenos Aires.

en ingenios, y en tareas subsidiarias que se llevan a cabo en esos pequeños poblados que encadenan la zona cañera.

Fue una provincia que por un lado atrajo población de sus vecinas en razón del desarrollo de su industria azucarera, pero que también expulsó gente en proporción notable durante los años sesenta, cuando su principal actividad entró en crisis. Este doble movimiento es la característica poblacional de Tucumán: receptora de mano de obra de provincias vecinas y expulsora de su propia población. En los ochenta, cuando los centros industriales dejaron de ofrecer empleos, los tucumanos expulsados del agro buscaron insertarse en los pequeños centros poblados provinciales, tratando de lograr algún empleo público de bajas remuneraciones.

La población ocupada en las cosechas de la caña de azúcar sólo en la etapa agraria alcanzaba a 50.000 jornaleros durante 1960. Las distintas etapas de mecanización de estos procesos condujeron a una disminución constante y sostenida de dicha cantidad de trabajadores. A partir de comienzos de la década de 1990, la expansión de las formas mecanizadas de cosechas acentuó dicha tendencia.

En este trabajo nos centraremos en el fenómeno social que constituyen las migraciones estacionales generadas alrededor de la actividad cañera azucarera. Nuestra investigación acerca de los trabajadores rurales de la actividad prestó especial atención a estos procesos migratorios y a las consecuencias que tienen en la vida de los pueblos y en los mundos de vida de sus protagonistas.

En efecto, por un lado se registran fuertes relaciones entre estos procesos y las características de los mercados laborales (tanto los de Tucumán como los de las provincias receptoras o expulsoras), y por el otro entre estos procesos y las políticas de trabajo en el nivel nacional y provincial. Pero también es importante registrar el impacto que estos traslados transitorios producen en la vida de familias e individuos. Las migraciones exponen al individuo a pasar por estados de “incertidumbres valorativas”, en tanto pueden constituir o disolver vínculos horizontales que constituyen parte del capital cultural de las poblaciones rurales. Los pueblos pierden gran cantidad de hombres en los meses de las migraciones. Las mujeres, los niños y los ancianos reacomodan sus vidas: cumplen nuevas funciones, afrontan soledades y riesgos¹.

En este trabajo tomaremos dos niveles de análisis del fenómeno de las migraciones de los “zafreiros”: 1) en el primero haremos hincapié en la mecanización y la cuantificación de los procesos migratorios; 2) en el segundo, focalizaremos en los mundos sociales y de vida, para lo cual haremos uso de conceptos tales como “trayectorias vitales” o “cursos de vida”.

Este último concepto, tomado en parte de Elder (1994), permite pensar estos procesos al interior de las familias como una interacción entre trayectorias generacionales tales como las historias laborales de desplazamientos o permanencias, y las sendas familiares del hoy (entendidas como una tensión entre opciones

conscientes y contingencias que el individuo o la familia aceptan) que están sujetas a condiciones cambiantes, a tendencias macro-sociales muy difíciles de controlar desde el nivel de los sujetos.

El migrante cruza límites, no sólo una frontera física entre provincias o naciones, sino también aquellas que definen las culturas regionales o locales (pautas de vida, consumos, costumbres, etc.), y también las emociones y las pautas afectivas. Pero, asimismo, la migración puede producir una ampliación de los horizontes sociales, económicos y culturales. En nuestros estudios de caso, los trabajadores de la caña van y vienen; sus lugares de residencia se asientan en Tucumán o en otra provincia cuando se trata de los que van a la cosecha de caña. Los desplazamientos requieren adaptaciones temporales y también pérdidas temporales. Sin embargo, no hay que descartar la función positiva de expandir horizontes: “abrir” aquellos elementos de las relaciones laborales o de la convivencia familiar del encierro local, jerarquizado y patriarcal que suele mantenerlos indiferenciados, naturalizados.

Antes de presentar los procesos migratorios, haremos una introducción general a la actividad cañera, enfatizando los procesos de mecanización que se han dado en los últimos años.

El trabajo en la actividad cañera: cambios en la década de 1990

En 1996, según una encuesta aplicada por nosotros, plantaban caña en Tucumán alrededor de 7.365 productores independientes y ocho ingenios que la producían mediante determinados arreglos y ya no de manera directa. Estas cifras reflejaban alrededor de un 24% menos de unidades que el Censo Nacional Agropecuario de 1988 (y nuestros propios trabajos de ese mismo año). Los cambios más notables estaban en el orden tecnológico: aumento en el uso y en el número de tractores, y aumento en el número de cosechadoras integrales. Más del 20% de las explotaciones utilizaron en esa oportunidad la cosechadora integral para levantar su zafra, cifra que se eleva significativamente si la medimos por superficie cosechada, ya que son los productores empresariales y familiares cooperativizados (la cooperativa es la propietaria de la cosechadora) los que utilizan mayoritariamente esta modalidad (Giarracca y Aparicio, 1997).

Cuadro 1

Formas de cosecha por tipología de productores en %

Tipo de cosecha \ Tipo de productor	Campesino Transicional	Campesino Capitalizado	Familiar	Empresario	Total
Manual	53,3	93,8	28,8	-	43,0
Semi mecánica Corte Manual	19,0	-	26,7	21,6	20,2
Semi mecánica Corte Mecánico	11,4	-	16,7	53,2	16,2
Integral	16,3	6,2	27,8	25,2	20,5
Total	100 (2.577)	100 (921)	100 (3.135)	100 (740)	100 (7.373)

Fuente: Encuestas GER, 1996.

En efecto, el cuadro anterior nos muestra que un 20% de las explotaciones cañeras utiliza la cosechadora integral. Lo más sorprendente es que, discriminando por tipo de productores, es usada por el 16,3% de campesinos, y que el estrato que presenta la mayor frecuencia absoluta y relativa es el de los “familiares capitalizados” (27,8%). Si bien los cañeros que siguen haciendo la cosecha manualmente representan una porción importante (43% y casi un 94% de los campesinos mecanizados), la mecanización cobra otra significación si comparamos con la situación de 1988 sin discriminar tipo de productores.

Cuadro 2

Formas de cosecha en % en 1988 y 1996

Formas de cosecha	1988	1996
Manual	81,7	43,0
Corte manual y carga mecánica	8,3	20,3
Corte y carga mecánica	9,9	16,2
Integral	0,1	20,5
Total	100	100

Fuente: Encuesta GER, 1988 y 1996.

Como podemos observar se registra una fuerte disminución de la forma manual de cosecha, aumentan las formas mecanizadas y aparece una extraordinaria expansión de la cosechadora integral. La gran cantidad de cosechadoras que ingresó en la provincia en los últimos años es utilizada por los ingenios, las cooperativas y los grandes productores para tierras propias y de terceros. Este proceso, además, se ha fortalecido en los últimos cuatro años.

La mecanización en la principal tarea -la cosecha- acarrió consecuencias en todos los sectores sociales involucrados en la actividad. No obstante, los trabajadores asalariados representan el sector social donde se han producido las transformaciones más profundas, tanto para los ocupados en el surco (los rurales) como para los obreros de los ingenios. La reconversión de la actividad se basó en la introducción de tecnologías que bajaron costos de producción, reemplazando trabajo humano por maquinarias: es decir, se buscó subir la productividad por hombre ocupado en la actividad. Estos cambios significaron por un lado la reducción del número de personas ocupadas -tanto transitorias como permanentes-, y por otro cambios en el perfil de los trabajadores demandados por la actividad.

Se trata de transformaciones que se originan en los niveles técnico-laborales y han repercutido en los mercados de trabajo, pero también en las modalidades migratorias de las poblaciones involucradas. En Tucumán han emergido nuevas configuraciones socioculturales: nuevos tipos de migraciones, combinaciones laborales distintas, fragmentaciones en la población laboral y aumentos de la desocupación.

En 1966 el volumen de trabajadores del surco ocupado por los ingenios ascendía a 13.000 (3.300 permanentes y 9.700 transitorios), en tanto los ocupados por los cañeros independientes sumaban 8.000 permanentes y 42.000 transitorios. El 35% de estos últimos eran migrantes de otras provincias (Murmis y Waisman, 1969).

Cosechar manualmente requería alrededor de treinta jornales por ha. Cuando se utilizaba el cortar y/o cargar mecánicamente la tarea disminuía a diez y quince jornales por ha, y la cosechadora integral permitía cosechar en 0,6 jornales. Estos datos son elocuentes en cuanto al impacto de las tecnologías de cosecha sobre la demanda de trabajadores, tanto en el número requerido como en las calificaciones demandadas. Comenzaba a incluirse a quienes sabían manejar y reparar las máquinas, mientras disminuían los requerimientos de los trabajadores manuales (Tort, 1982; Aparicio, 1996).

Los trabajadores arrinconados

La provincia de Tucumán, y sobre todo sus sectores subalternos, sufrieron dos grandes impactos que deben ser considerados para lograr una comprensión

más compleja de la situación actual: 1) la represión política y social del período 1975-1983; 2) la total desregulación económico-institucional de 1991.

En efecto, las nuevas condiciones económicas desplegadas en marcos regulatorios legales por los gobiernos elegidos democráticamente desde 1984 hasta la actualidad, fueron precedidas por períodos de fuerte represión política y social. La provincia de Tucumán fue, sin lugar a dudas, una de las que más sufrieron los efectos de la represión. Los operativos militares desarrollaron programas de exterminio a dirigentes gremiales, a sindicalistas, a militantes políticos, y a la población en general. El presidente de la FOTIA² fue asesinado el mismo 24 de marzo de 1976 (día del golpe de Estado). Luego de su entierro, se asesinaba al dirigente gremial de los maestros. Comenzó de ese modo uno de los períodos más sangrientos de la historia de la provincia. La muerte del dirigente cañero, la desaparición de delegados de base, los rastrillajes militares e incendios de cañaverales enteros con gente en su interior, son los recuerdos más penosos de la población, que aún rememora con horror aquellos años.

Un militar, Domingo Bussi, se hizo cargo de la represión y del gobierno con un programa que tendió a neutralizar sus efectos represivos en el nivel económico abordando una política “populista conservadora”. Desarrolló un plan de obras públicas que dio empleo a los expulsados del campo; mantuvo un acuerdo con algunos de los ingenios que contenía un pago a un supuesto “fondo patriótico azucarero” (hace poco tiempo éste fue denunciado como parte de su enriquecimiento personal). El efecto económico de su gestión no tuvo la misma magnitud que el político, el social y el cultural.

Con el “disciplinamiento social” de la represión “bussista” las formas de zafas mecanizadas se fueron generalizando, e ingresaron las primeras cosechadoras integrales en los campos de los ingenios. La represión desbarató la organización tanto sindical como social de una población trabajadora que durante décadas se había caracterizado por demandar derechos sociales.

El segundo gran impacto en la actividad cañera y en la vida social de sus sectores subalternos (campesinos y trabajadores) fue el decreto de desregulación económica que formó parte del programa económico del gobierno de Menem en 1991. La formación de un “mercado” en un sector económico industrial acostumbrado a producir sobre la base de subsidios estatales y en un sector agrario que producía y vendía por cupos se realizó de un modo desordenado, casi caótico, donde los más perjudicados fueron los pequeños campesinos y los zafros. Entre los productores familiares se generalizaban las formas mecanizadas de cosecha a través de los contratistas de maquinarias para hacer frente a la nueva situación. Paradójicamente, como el precio de la mano de obra bajó, los campesinos eran los que acudían a ésta para cosechar y quedar ellos “libres” a los efectos de salir a trabajar fuera de la finca.

No existen cálculos confiables acerca de la magnitud de la disminución de trabajadores. El gremio (FOTIA) calcula que de 45.000 transitorios zafreros de los años setenta, permanecieron alrededor de 15.000. Nuestros propios cálculos son inferiores a esa cifra.

Las principales características que hemos registrado a través de nuestro estudio del mercado de trabajo y de la población zafrera son:

- la generalización del “contratista” como mediador en el vínculo laboral entre el trabajador y el productor/ingenio. Anteriormente los contratistas recibían un sueldo por parte de los ingenios. Actualmente perciben un porcentaje del jornal de los trabajadores que él contrata. Localizamos alrededor de cien contratistas, que estratificamos en tres grupos según la cantidad de obreros movilizados. Entre los pequeños contratistas se encuentran medianos productores que salen a amortizar el capital representado por las maquinarias y contratan gente para realizar el servicio de maquinarias y de cosecha.
- gran parte de los trabajadores “enganchados” por los contratistas está “en negro”, es decir, no está declarada, y por lo tanto no se efectúan los aportes previsionales correspondientes.
- para la zafra sigue arribando a Tucumán población de otras provincias (Jujuy, en particular). Del mismo modo continúan los desplazamientos de población de los Valles Calchaquíes tucumanos y de zonas del norte de la provincia, en muchos casos en grupos familiares, que se ubican en barrios o “campamentos” que carecen de las comodidades mínimas. La vida allí se desarrolla en condiciones muy precarias.
- se pudieron registrar grandes variaciones de los salarios recibidos por las distintas categorías de trabajadores (maquinistas, capataces, cosecheros, etc.).
- del mismo modo, se registró una variación muy importante de lo que pueden obtener mensualmente por sus trabajos.
- a través de nuestra investigación pudimos tener acceso a las características demográficas de dos tipos de población: 1) la población total, que incluye al zafrero y a su familia; 2) la población constituida por los zafreros que han sido encuestados³.
- la mecanización del trabajo produjo la disminución de los zafreros empleados -lo cual se acentuó aún más por el acortamiento del período de zafra de nueve meses a seis-, pero indujo la aparición de nuevas actividades ocupacionales: “cuarteros”, “mecánicos”, “maquinistas”. Según los datos de nuestra investigación acerca de la “ocupación en la finca/empresa”, el mayor porcentaje de los encuestados corresponde a peones cosecheros (57,7%); en segundo lugar se ubican los maquinistas/tractoristas con un 22,3%, y el resto se distribuye entre: peón general (9,3%), capataz de cosecha (4,7%), apuntador-

/planillero y casillero (2,3%), cuartero (1,7%), jefe de cuadrilla y auxiliar (1%), chofer/transportista (0,7%), volteador (0,3%), etc.

- se registró un bajo nivel de sindicalización y una gran insatisfacción con relación a los dirigentes sindicales. Los datos muestran que el 65,7% de los encuestados no está afiliado a FOTIA; el 77,3% de ellos desconoce al delegado sindical, y el 90% al secretario general del gremio. Asimismo, las opiniones con respecto al impacto producido por la mecanización están teñidas de un gran fatalismo y resignación.

Las migraciones inter-zafras

Los migrantes tucumanos

Cuando termina la zafra, aproximadamente en el mes de noviembre, el fantasma de la desocupación ronda la provincia. Las ocupaciones agrarias de verano son las tareas del tabaco -algunas tareas culturales y la cosecha-, y una de las cosechas anuales del limón. No obstante, los requerimientos para las mismas no permiten emplear a la población desocupada por la actividad cañera. Una opción establecida desde hace muchos años es entonces la migración golondrina hacia otras provincias.

Para efectuar el análisis estadístico de las migraciones inter-zafras en Tucumán, nos basamos en dos fuentes.

Por un lado accedimos a la documentación que el gremio (FOTIA) solicitaba para gestionar el pago del traslado de la migración inter-zafra: la fotocopia de las primeras hojas del documento. FOTIA actúa en esta instancia como intermediario entre el Ministerio de Trabajo Nacional -a través de los subsidios aportados por el mismo para los viajes de los migrantes- y los trabajadores. Procedimos a organizar la información según lugar de destino (la cual consta por carpetas). Del total de los migrantes tucumanos⁴ que pasaron por esta instancia institucional, seleccionamos una muestra al azar de alrededor del 22%, por lugar de origen, para la inter-zafra correspondiente al período 1997/1998, manteniendo las proporciones de migrantes al lugar de destino. Cabe recordar que no todos los migrantes viajan a través del gremio.

Por el otro, efectuamos una encuesta a trescientos zafreros durante el período de la zafra (de julio a octubre), que concentramos en el mes de agosto de 1999. De los trescientos tucumanos trabajadores del surco de nuestra encuesta, sólo migran hacia otras provincias noventa y nueve trabajadores, es decir, el 33%. Los mismos se caracterizan por ser todos varones con una edad promedio de treinta y tres años. Por otra parte, los trabajadores que vienen de otras provincias a la zafra tucumana son sesenta y siete casos del total de encuestados.

Queremos advertir con respecto a la primera fuente (FOTIA) que por lo menos un 42% son zafreros agremiados al sindicato azucarero (pueden ser muchos más). Pero además, la misma incluye, además de los zafreros, datos de diferentes tipos de trabajadores (citrus, caña, etc.) y de pequeños productores.

Datos generales de FOTIA y datos de trabajadores de la encuesta

Los datos provenientes de FOTIA para el período inter-zafra mencionado nos muestran que existen cuatro lugares de destino privilegiados por los migrantes tucumanos para trabajar: Río Negro, Mendoza, Buenos Aires y La Rioja. Río Negro constituye el lugar elegido por la mayor parte de los migrantes (58%). De éstos, sólo el 12,6% está afiliado a FOTIA. En segundo lugar se ubica Mendoza (31,8%), pero a diferencia de Río Negro se desplaza hacia allí el 26% de los agremiados a FOTIA (Cuadro 3).

Cuadro 3

Lugar de destino de las migraciones inter-zafras elegido por los agremiados y no agremiados al sindicato en una muestra del total de migrantes en %

Destino/Condición de Agremiado	Buenos Aires	Río Negro	La Rioja	Mendoza	Total
Agremiados	0,8	12,6	3,2	26	42,7 (434)
No Agremiados	4	45,4	2,3	5,8	57,3 (583)
Total	4,8 (48)	58 (589)	5,5 (56)	31,8 (324)	100 (1017)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales sobre la base de los datos otorgados por FOTIA, 1999.

Por otro lado, según los datos obtenidos en nuestra encuesta podemos observar que son tres los lugares elegidos por los zafreros. Si bien la mayor parte de ellos decide migrar a Buenos Aires (35,4%), los porcentajes se distribuyen en forma bastante homogénea entre Mendoza (29,3%) y Río Negro (21,2%) (Cuadro 4).

Cuadro 4

Lugar de destino de las migraciones inter-zafras elegido por los trabajadores del surco en %

Destino	%
Buenos Aires	35,4
Mendoza	29,3
Río Negro	21,2
Otras	13,1
N/S	1
Total	100 (99)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales, Encuesta 1999.

Con relación a esta última provincia, en la década de 1960 y principios de 1970 el flujo de trabajadores migrantes que llegaban del NOA hacia el Alto Valle del Río Negro era escaso, y se concentraba en el sector oriental, caracterizado por un déficit importante de mano de obra (Bendini *et al*, 1999: 43). Según las autoras, este proceso se revierte en la década de 1990, cuando disminuye la migración estacional chilena y aumenta la presencia de golondrinas, en especial de tucumanos. De acuerdo a la investigación realizada por el GESA (Grupo de Estudios Sociales Agrarios) en el año 1998/1999, los trabajadores estacionales del NOA representaban las tres cuartas partes del total de golondrinas; de ellos, el 50% provenía de diferentes localidades de la provincia de Tucumán. Los tucumanos representaban el 15,6% del total (Radonich *et al*, 1999: 59). Entre ellos hay asalariados agrícolas, pero también campesinos cañeros con pequeñas parcelas que empiezan a incorporarse en los últimos años de la década.

Cuando se iniciaba la década de 1990, el salario mensual obtenido en la cosecha de peras y manzanas en la región valletana era aproximadamente cuatro veces mayor al ingreso originado en la cosecha de caña de azúcar. Esa diferencia se redujo en los últimos años a dos veces, e incluso menos. No obstante, los migrantes continúan yendo al Valle principalmente por dos motivos: para mantener la antigüedad en función del régimen de trabajadores de cosecha que rige desde 1991, y por la falta de oportunidades laborales en sus lugares de origen (Radonich *et al*, 1999: 68).

Según nuestra investigación, el cultivo elegido para el trabajo agrícola mientras dura la migración es la fruta (52,5%), en tanto el 19,2% se dirige a la cose-

cha de la papa. Con respecto a la cantidad de meses que los trabajadores se ausentan de sus hogares para trabajar en otros lugares, la información provista por nuestra encuesta denota una ausencia prolongada. El 55,6% de los encuestados trabaja fuera de la provincia por un período de tiempo superior a los 3 meses, mientras que el 39,4% lo hace por un lapso de 2 a 3 meses. Tan sólo el 5,1% migra durante un mes.

Por otro lado, relacionamos el subconjunto de los migrantes (33%) con el “tipo de vínculo laboral” en caña. Suponíamos que las relaciones de trabajo más precarias habilitaban desplazamientos inter-zafras, pero no fue así. En efecto, los datos arrojados con relación al “tipo de contratante” (“finca grande”, “finca chica” y “finca s/información”, “cooperativa”, “contratista grande” y “contratista pequeño”) y al “tipo de vínculo” establecido con el patrón (“años que trabaja para el mismo patrón” y “recepción de aportes jubilatorios”) nos muestran que no existe una relación entre estas variables y los procesos migratorios en la época de inter-zafra (Cuadros 5 y 6). Aún más, si debiéramos señalar algún tipo de relación, la más fuerte es la que se observa en el Cuadro 6, donde más del 60% de los que viajan pertenece al grupo de vínculos laborales estables.

La información cualitativa obtenida a partir del extenso trabajo de campo en Tucumán a través de la realización de entrevistas, historias de vida y descripción etnográfica, nos permite inferir que en estas instancias las *redes familiares y/o de amistad* constituyen vínculos importantes a la hora de decidir el destino de la migración.

Cuadro 5

Tipo de contratante en caña de los trabajadores migrados en %

Tipo de contratante	%
Finca grande	25,3
Finca chica	13,1
Finca s/información	7,1
Cooperativa	15,2
Contratista grande	11,0
Contratista pequeño	27,3
N/S	1
Total	100 (99)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales, Encuesta 1999.

Cuadro 6

Tipo de vínculo laboral en caña de los migrantes en %

Tipo de vínculo⁵	%
Estables y formales	30,3
Estabilidad media y formales	31,3
Estabilidad media e informales	20,2
Inestables e informales	18,2
Total	100 (99)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales, Encuesta 1999.

Las migraciones constituyen procesos que marcan la vida de los individuos y de las familias. En este sentido, los datos obtenidos a partir de los listados del gremio nos indican que 201 trabajadores beneficiados con el pasaje viajaban solos, en tanto que 242 lo hacían con sus familias, incluyendo niños, mujeres y jóvenes trabajadores. Los migrantes que se desplazan solos lo hacen en mayor proporción a Río Negro. Este dato coincide con el estudio realizado por el GESA, según el cual son poco frecuentes los casos de trabajadores que migran con su familia. Cuando lo hacen, sus destinos son las explotaciones más pequeñas. Ello se debe en parte a una infraestructura habitacional poco propicia para albergar a las familias, y a disposiciones propias de las empresas valletanas, que requieren sólo mano de obra masculina, desalentando de este modo la migración de las familias.

Según la muestra de FOTIA, las “familias migrantes” se desplazan en mayor porcentaje hacia Mendoza. El resto lo hace en forma pareja hacia Río Negro, La Rioja y Buenos Aires. Migrar en grupos familiares tiene ciertas ventajas laborales, sobre todo cuando los hijos están en edad de colaborar en las tareas y sumar “toneladas” o “bandejas” de las frutas cosechadas. No obstante, tiene como complicación un desplazamiento grupal, con niños pequeños, en condiciones muchas veces muy precarias.

Cuadro 7

Trabajadores migrantes que viajan con familias y migrantes que viajan solos por lugar de destino en una muestra del total de migrantes en %

Destino	Jefe de familia	Solos
Buenos Aires	12,0	8,5
Rio Negro	14,0	62,5
La Rioja	14,0	4,5
Mendoza	60,0	24,5
Total	100 (242)	100 (201)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales sobre base de los datos otorgados por FOTIA, 1999.

En relación a los datos de nuestra encuesta, como indica el Cuadro 8, el 43,4% de los trabajadores tucumanos de la caña migran en “cuadrilla” (grupo de trabajadores, generalmente vecinos, familiares o amigos, que migran en forma colectiva liderados por un “cabecilla”), el 19,2% en forma individual, y el 21,2% en familia. En el 74,7% de los casos han sido reclutados en Tucumán.

Por otro lado, según los encuestados el trabajo se consiguió tanto a través del “cabecilla” (28,3%) como de otro trabajador (19,2%). Esto último abonaría nuestra hipótesis acerca de la factibilidad de las redes de amistad con respecto a estos procesos.

Cuadro 8

Forma que adquiere la migración en los trabajadores del surco en %

Forma de migración	%
Solo	19,2
Con amigo/vecino	16,2
En familia	21,2
Cuadrilla	43,4
Total	100 (99)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales, Encuesta 1999.

En el caso del Alto Valle, la figura del “transportista” es un eslabón fundamental para vincular a los trabajadores con las empresas o fincas. Este se encarga de difundir el momento de la partida a través de los medios de comunicación locales (avisos en diarios o radios locales).

Con respecto a los miembros de las familias migrantes (Cuadro 9), podemos observar que el 74% son mayores de 16 años. En la provincia de Mendoza los migrantes varones mayores de 16 años representan el 79,6%, mientras que las mujeres constituyen el 63%. Entre los menores de 16 años el mayor porcentaje se da entre las mujeres (37%), en tanto los varones representan un 16% menos.

En la provincia de Río Negro el comportamiento de las migraciones es homologable al de la provincia de Mendoza, ya que el mayor porcentaje de migrantes está formado por varones mayores de 16 años (77,6%). Los migrantes menores de 16 años representan el 22,4% en los varones, y el 38,8% en las mujeres.

Si tomamos como lugar de destino a la provincia de Buenos Aires, registramos lo siguiente: dentro del grupo de migrantes mayores de 16 años, el porcentaje entre varones y mujeres es similar. En relación con la edad de los migrantes, el porcentaje de menores de 16 años es muy bajo tanto entre las mujeres como entre los varones (7% y 6%, respectivamente). En el caso de La Rioja se destaca el incremento de migrantes menores de 16 años varones (30,3%) respecto de sus pares mujeres. El porcentaje total de mujeres (incluidas las mayores y menores de 16 años) alcanza tan sólo el 25%. Como en el resto de las provincias, el mayor porcentaje de migrantes se registra en el grupo formado por varones mayores de 16 años (44%).

Cuadro 9

Miembros de familias migrantes por edad y género según lugar de destino en %

Edad	Mendoza		Río Negro		Buenos Aires		La Rioja		Total
	V	M	V	M	V	M	V	M	
Mayor de 16 años	79,6	63	77,6	61,2	94	93	59,5	71,4	74 (749)
Menor de 16 años	20,4	37	22,4	38,8	6	7	40,5	28,6	26 (268)
Totales parciales	100 (216)	100 (108)	100 (419)	100 (170)	100 (34)	100 (14)	100 (42)	100 (14)	100 (1017)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales sobre la base de los datos otorgados por FOTIA, 1999.

En relación con la situación legal de los zafreros durante su residencia en el lugar de destino, los datos arrojados por nuestra encuesta muestran situaciones de trabajo sumamente precarias. El 73,7% de nuestros encuestados no recibe salario

familiar, aun cuando sabemos que se trata de familias muy numerosas; el 66,7% no percibe aguinaldo; el 62,7% no tiene obra social; y el 59,6% no percibe aportes jubilatorios.

Cuando preguntamos por el tipo de establecimiento en que trabajaron durante la última migración, el 77,8% de los casos se desempeñó en 1998/9 en una “finca agraria” (Cuadro 10).

Cuadro 10

*Tipo de establecimiento en el que trabajó en el migrante
en el lugar de destino en 1998/9 %*

Tipo de establecimiento	%
Empresa agroindustrial	18,2
Finca agraria	77,8
Otros	3,0
NS/NC	1,0
Total	100 (99)

Fuente: Grupo de Estudios Rurales, Encuesta 1999.

En relación con el contrato establecido con el patrón, en el 73,7% de los casos éste no paga el traslado, que generalmente se realiza en ómnibus (93,9%). La forma de pago negociada con el patrón es “a destajo” en el 48,5% de los casos; la vivienda se brinda en forma gratuita en el 86,9% de los casos; el 61,6% de los contratos no incluye comida.

Las migraciones estacionales forman parte de las trayectorias vitales de muchas familias o grupos de trabajadores. Muchos tucumanos acompañaron a otras provincias a sus padres y tíos, y luego lo hicieron con sus propias familias. Pueblos enteros quedan casi despoblados en los meses de verano, a la espera del regreso de la población y del comienzo de la nueva zafra. Pese a las penosas condiciones de trabajo y al distanciamiento con el lugar de origen y la familia, el 70,7% de los migrantes tucumanos piensa retornar el próximo año (encuesta GER, 1999).

Las trayectorias vitales

En este punto abordamos la relación entre la trayectoria laboral, los desplazamientos geográficos (las migraciones o trabajos distantes en la misma provincia), y la conformación y dinámica familiar. Lo encaramos desde los relatos e información proporcionados por la joven familia de un zafrero: Juan. En efecto, a partir del seguimiento de los eventos pasados y presentes de una familia que conectamos en los primeros momentos de nuestra investigación, nos proponemos articular estos procesos laborales, migratorios, así como aquellos que se entremezclan y actúan sobre las primeras inscripciones sociales. La familia elegida está conformada por Juan de 29 años, Rita de 29 años y la pequeña hija, Danita, de 5 años⁶.

La comuna de Los Sosa, según Rita

Está ubicada a 7 Km. de Monteros (...) por el año 1975 tomaron posición los militares y comenzaron con el operativo "independencia" de reubicación rural...

En ese año tenía 950 habitantes que vivían en la Colonia de Tondori o en los montes, todos eran obreros del surco. Los militares crearon pueblos y rutas que los conectaban:

"Capitán Cáceres", "Sargento Moya" [nombre de militares caídos en el período de la guerrilla]... En 1985 vino la apertura política, se eligieron gobernantes y comisionados rurales que los elige el pueblo. En 1986 fue fundado el primer dispensario médico por la FOTIA que le brinda atención médica al pueblo en general... también donaron un terreno para una capilla que lleva el nombre de San Cayetano [santo protector del trabajo]... También desde 1996 se instala alumbrado público que abarca desde el pueblo Soldado Maldonado hasta las capillas de San Cayetano, que debe haber 2 Km.

Nuestra perspectiva de análisis -el paradigma orientado al actor (Long, 1992)- nos orienta a buscar las causas y consecuencias de la vida laboral o las migraciones no sólo en los niveles del mercado de trabajo o de la "población" de la provincia, sino también en el nivel de cómo se inscriben en la historia de cada familia y de cada sujeto. Como sostiene Bertaux (1995), toda historia familiar constituye un espejo donde se refracta la historia social de una sociedad, sus diferentes dimensiones. En esta familia, cada uno de sus integrantes son puntos nodales de una serie de circunstancias, discursos en el sentido de Laclau (1987), que atravesaron los mundos sociales de una de las provincias más complejas del país. No obstante, con esto no estamos argumentando que la familia de Juan sea "representativa" del mundo del trabajador cañero, ni que a través de la historia de Juan y Rita podamos conocer la infinidad de circunstancias que rodean las decisiones y experiencias de los casi 4.700 trabajadores que cada verano buscan salir de la provincia para encontrar trabajo.

Juan comienza a trabajar

Cuando salí de la escuela no quería estudiar. Me querían mandar a Monteros a la escuela. No me gustaba el estudio, entonces me ofrece trabajo mi tío. Mi tío es un cañero más grande y yo trabajaba para él. Me pagaba; ahí figuraba que tenía 18 años.

Mi papá tenía 100 surcos, 150. Antes con 100 surcos se decía que era un cañero, ahora para que digan que es cañero tiene que tener 500 surcos por el precio del azúcar. 100 surcos hoy en día no es nada, en cambio antes con 100 surcos ya era un cañero.

Ahora papá tiene 300 surcos. Vamos a buscar [para vender la caña] a quienes mejor pagan, papá y yo en un mes o un mes y medio hacemos los 300 surcos.

Este año vendimos la caña al ingenio Providencia.

La propuesta, magistralmente argumentada en los últimos años por Pierre Bourdieu, es *comprender*, darse una *comprensión genérica y genética* de lo que los entrevistados son, fundada en el dominio teórico y práctico de las condiciones sociales que los producen: es decir, sostiene el autor, dominio de las condiciones de existencia y de los mecanismos sociales cuyos efectos se ejercen sobre el conjunto de la categoría de la que forman parte (los trabajadores rurales en nuestro caso), y dominio de los condicionantes inseparablemente psíquicos y sociales, vinculados a su posición y sus trayectorias particulares en el espacio social (1999: 532).

El primer trabajo de Rita

Tuve que trabajar en casa de familia con una maestra que me enseñó en la escuela 285 de Los Sosa.

Ella me hizo entrar a trabajar en su casa.

Ella sabía que yo nunca había trabajado pero me enseñó.

Esta maestra, la cual se llama Mirta, me hizo entrar en Monteros en otra casa donde me podían pagar más y era amiga de ella.

Empecé a trabajar con los Villarreal en la capital “con cama dentro”; entraba el lunes temprano y salía el sábado a las tardes.

Muchas horas de entrevista con esta familia y mucho recorrido del mundo rural tucumano nos habilitan para comprender la relación entre algunos acontecimientos de sus vidas: las historias laborales de los padres y los primeros trabajos que tienden a marcar las futuras trayectorias; sus propias trayectorias laborales; las migraciones

como estrategias sociales; los encuentros de dos jóvenes y la formación de una familia; la fuerte identidad social presente en las familias de cañeros; etcétera.

La cultura local da a los sujetos un sentido de pertenencia a partir del cual se desarrollan las primeras experiencias conformativas, cierta seguridad ontológica (Giddens, 1997) que se perpetúa en el mundo de la vida y es ritualizada a través de las prácticas sociales en el devenir del tiempo. Son esas primeras inscripciones, las familiares, las de la pequeña localidad, las que albergan los sentidos que conforman la identidad en las comunidades locales, rurales en nuestro caso, y pasan a constituir un marco de referencia y red de relaciones sociales que puede ser movilizado con fines prácticos (de Haan 1997: 160). La comunidad deviene así en un constructo simbólico que actúa como referente y refiere a las primeras identidades sociales de los sujetos.

Primer viaje de Juan según Rita

Ese año Juan trabajaba juntando limón en una quinta llamada “Campisi”. Ayudaba a su padre a pelar la poca caña que tenía. Un buen día una cuadrilla andaba buscando gente para llevar a Tafí del Valle a sacar papa. Juan se enteró de ese viaje y se animó a viajar, fue la primera vez que nos separamos, fue muy feo. Yo no quería que él viajase, no era un viaje largo, pero para mí sí lo era ya que yo lo necesitaba mucho (...)

Al año siguiente cuando él me dijo que se iba a sacar papa a Mar del Plata pensé que se terminaba todo. No se trataba de un simple viaje a Tafí, sino algo más lejos, de más tiempo, de casi seis meses.

A los 19 años Juan volvió a viajar a la papa y así sucesivamente.

Los relatos de esta familia refieren a lo local, a los pequeños mundos sociales de los trabajadores tucumanos o de los pequeños campesinos. Permiten incorporar en el análisis de la vida de Juan y Rita, como veremos, conexiones de eventos y circunstancias específicos que los han conducido a buscar “adentro” y “afuera” de la comunidad de origen los espacios habilitantes para constituir una familia que lucha por mejorar sus condiciones de existencia en todo sentido: lograr ingresos que les permitan construir su vivienda, el cuidado de la salud, etc., pero también una conformación familiar que no les cause desdichas personales. Y en tal sentido, “las batallas” de Rita no son sólo contra la pobreza, sino también contra una ubicación social que depara cierto fatalismo a las hijas mujeres o contra un espacio familiar con jerarquizaciones generacionales inflexibles y autoritarias.

Juan es lo que en nuestros trabajos anteriores conceptualizamos como “un multocupado” (Giarracca y Aparicio, 1991, 1997): lleva a cabo diferentes trabajos agrícolas, y a veces de servicios. Su padre tiene trescientos surcos de caña (alrededor de cinco ha), y él comparte el trabajo en esa pequeña finca. Además trabaja como “co-

sechero” en la finca de un productor mediano, tarea que realiza desde hace más de cuatro años consecutivos, y en diciembre viaja a Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) a trabajar en grandes explotaciones que producen cereales y papas. Migra todos los años desde muy joven con su hermano y otros compañeros del lugar. Hace unos años lo acompañó Rita, pero cuando nació Danita dejó de hacerlo.

Experiencias laborales de Rita en Mar del Plata

Al siguiente año por primera vez viajé con él a Mar del Plata.

Ya no quería que yo me quedase aquí en Tucumán.

Vivía con una familia amiga de él.

Y a los días que llegué ya empecé a buscar trabajo.

Encontré y empecé a trabajar para una arquitecta con cama adentro (...)

Mi vida siempre fue trabajar...

Al año siguiente pasó como el mes de octubre, y me llama el patrón de la casa de Monteros y me dice si yo quería trabajar de cocinera en una casa, en El Manzano, Mar del Plata.

Y me presento el 25 de diciembre y allá pasamos el año nuevo...

Empiezo a trabajar en la mansión.

Éramos cinco empleados: yo cocinera, había dos mucamas, una niñera y un chofer.

Yo jamás en mi vida había visto un caserón como era ése. Nos presentan a la señora, estábamos todos con uniforme, todos desfiladitos los empleados.

¿Usted sabe cocinar, supongo? Me pregunta la señora que era portuguesa.

–Sí, sí, le digo yo. Bueno, quiero que empecemos con tal y tal...

Cuando indagamos acerca del origen de esta práctica laboral, nos encontramos con el mismo tipo de argumentaciones que sostienen los campesinos: es el resultado de un diagnóstico práctico de lo que la provincia les ofrece laboralmente. En el caso de Juan, su relación con la caña es parte de su identidad social. Su padre es un campesino cañero en una superficie que no alcanza para la “sociedad familiar”; por lo tanto, se combina la ayuda familiar con los trabajos como asalariado. No obstante está presente la esperanza de que en algún momento esa finca sea de mayor superficie o mayor productividad, y de que “se pueda vivir de lo que se produce”. Como tal situación no ha ocurrido nunca, Juan trabaja afuera de la finca desde los 12 años. Su condición de “trabajador” signa su trayectoria vital y laboral tan fuertemente como la de origen. A esa edad él debía trasladarse a

Monteros (la pequeña ciudad más cercana a su comunidad rural) si quería seguir estudiando, pero prefirió aceptar un trabajo que le ofreció un tío, quien lo contrató con un salario. Y allí comenzó a alternar el trabajo en la finca cañera (su tío era un productor mediano) con el de trabajador golondrina en Mar del Plata y Miramar en la provincia de Buenos Aires.

Los sujetos buscan migrar como una estrategia social, como sostiene Freidin (1998), como parte de un ejercicio de la capacidad de acción, como recurso, como medio visualizado para posibilitar un cambio. En el migrante se ponen en juego la percepción de un espacio más amplio que el local, una posibilidad de desplazamiento, y el desafío de enfrentar aquello que aún no es familiar. Por eso es frecuente encontrar que la decisión primera está fuertemente relacionada con otros -familiares, vecinos-, con quienes emprender los primeros pasos torna más simples estos desafíos aún cuando la migración forme parte del repertorio de acciones familiares.

¿Cómo aparece en el horizonte de posibilidades el migrar a la provincia de Buenos Aires? Su padre había alternado su trabajo como campesino cañero con el de trabajador golondrina. Viajar en verano, ausentarse de Tucumán, formaba parte del repertorio de acciones familiares. Más tarde los viajes se hicieron con un hermano y amigos del lugar.

Los encuentros

En el mes de octubre del año 1992 lo buscaron, si él se animaba a regar la papa, y él aceptó, así que viajamos a fines de noviembre del '92. Viajamos sólo Juan, su hermano y yo. A Juan le fue muy bien en ese trabajo.

Yo me iba al campo a verlo ya que ellos estaban solos, él y su hermano, así que salía del trabajo y me tomaba el colectivo hasta la terminal, otro colectivo hasta Miramar y de ahí hasta el campo, había como ocho kilómetros por ruta, y desde la ruta hasta el campo había como tres kilómetros. No me importaba caminar hasta el campamento pero era la única forma que yo podía ver a Juan. Así fue durante todo el verano.

En la familia de Rita migrar había sido una acción desplegada por su padre. No obstante, para ella emergió como una posibilidad cuando conoció a Juan y se convirtió en su compañera.

Las opciones en relación con las acciones a desarrollar no son iguales para hombres y mujeres. Las posibilidades de tomar ese tipo de decisiones están mucho más acotadas para las mujeres que para los hombres tucumanos. El repertorio de opciones es menor para las mujeres. En efecto, hay una larga tradición en la provincia de expulsar a las jóvenes -casi niñas- para trabajar como empleadas domésticas en las grandes ciudades del país. Existe una vieja red construida por

lazos de parentesco que ubica a las niñas en casas de familias en edades muy tempranas. No es frecuente que las jóvenes viajen a conseguir otro tipo de empleo, y menos aún a trabajar solas en las tareas agrícolas.

El nacimiento de Danita

Así fue hasta el '95, cuando llegó la noticia tan esperada por nosotros, que Dios nos daba otra oportunidad de ser padres, fue algo increíble.

Cuando llegó Danita cambió todo para nosotros. Ella nació en Mar del Plata, yo no quería que naciera en Tucumán (...) Fue todo tan rápido que ni siquiera nos dimos cuenta.

Juan estaba a mi lado en todo momento.

Riley y Gardner (citados por Freidin, 1999) argumentan que existe una relación significativa entre edad, género, y cómo se van jugando papeles diferentes a lo largo del ciclo vital en cuanto a la capacidad de acción. Así, en la etapa de la niñez y de la primera adolescencia la edad es más importante que el género, ya que tanto unos como otros dependen de las decisiones de los mayores; pero una vez superada esta etapa de la vida aparecen diferencias importantes por género en la toma de decisiones. La autonomía femenina es menor, sobre todo en esta comunidad rural tucumana. No obstante, cuando las mujeres comienzan a desplegar sus acciones, sobre todo a partir de experiencias migratorias que las alejan de los núcleos familiares más tradicionales, pueden desarrollar un nivel mayor de autonomía y emprender procesos de aprendizajes que refuercen capacidades agenciales.

Los individuos, dice Cohen (1984: 101), tienden a orientar sus acciones en relación a los mapas cognitivos que forman parte del acopio cultural acumulado por generaciones y fuertemente reforzados por el pasado. No obstante, la migración puede alterar las imágenes que el migrante ha construido en su experiencia de vida y resignificarlas a partir de las nuevas vivencias.

Rita viajó a Mar del Plata con Juan, aun cuando se veían muy poco, ya que él paraba en una finca alejada de la ciudad donde ella consiguió trabajo. Pero las experiencias de viajar y trabajar son muy valorizadas por ella. Viajaron juntos hasta el nacimiento de Danita, que fue en Mar del Plata. Los veranos que ella permaneció en Tucumán mientras cuidaba a la niña, realizó trabajos que le permitieron obtener otros ingresos. Preparó empanadas y humitas (comidas tradicionales tucumanas) para vender en las ciudades cercanas. Cuando con el dinero ahorrado en los veranos de Juan lograron comprar un viejo automóvil para trabajarlo, Rita se convirtió en “remisera” (trasladaba gente por encargo durante el verano), y se las arregló para que su suegra o su madre la ayudaran con el cuidado de Danita. Cuando ese automóvil fue cambiado por un tractor Rita volvió a cocinar para

afuera, y en el último verano, provista de una pequeña motocicleta, cocinaba para la venta en una casa de la ciudad cercana donde además realizaba algunos trabajos domésticos.

En el auto y de a pies

Cuando volvimos faltaban 20 días para que Danita cumpliera su primer año. A Juan se le ocurrió comprar el auto para el cumple de ella. Iba a ser como su regalo y así fue, Juan se dio el gusto de comprar el auto. Era un Renault 12 rojo. Él trabajaba con el auto haciendo viajes.

Así que aprendí a manejar y fui a sacar el carnet y me fue muy bien con el auto, trabajé mucho. Yo hacía viajes a Concepción, a Famaillá, a Berdina y casi no tenía horarios, mi hermana cuidaba a Danita porque yo casi no tenía tiempo para cuidarla. Trabajé durante dos años con el auto hasta que Juan decidió venderlo porque le hacía falta un tractor, para cultivar la caña, así que yo quedé a pies. En los tiempo en que no viajaba yo empecé a trabajar de nuevo en casa de familia en Monteros. Danita quedaba con su abuela y yo trabajaba haciendo humitas para una señora, la cual las vendía en el Mollar o en Tafí. Las llevaban desde Monteros congeladas hasta Tafí del Valle.

La emigración estival es parte de la vida de esta familia. Con el verano llega el momento de la separación familiar. La comunicación entre ellos comienza a depender de los teléfonos o las cartas. Pero los trabajos durante el verano incrementan los ingresos familiares. En efecto, los ingresos de tal período, siempre y cuando las buenas condiciones climáticas permitan realizar el trabajo, son más importantes que los del resto del año: Juan puede sacar en el riego o cosecha de la papa montos cercanos a los de un trabajador industrial calificado; Rita se las arregla para no gastar lo que Juan le envía usando sus propios ingresos. Al final del verano llega la posibilidad de avanzar en la construcción de la casa de material, que es una de sus mayores aspiraciones actuales. La casa es amplia, y tiene un fondo donde se colocó un horno de barro que permite cocinar empanadas o pan para la familia o para la venta.

El Delegado Gremial

Los traslados los he pagado yo, nunca conseguí que los pagaran, ni que el delegado me incluyera en un Plan Trabajar, aunque sea un mes, después de trabajar diciembre, enero, febrero, algo en marzo. Hay que pedirle a él y no sale. Él viaja con su familia, su mujer pero no consigue para los trabajadores.

El modo y costo del traslado de Juan a Mar del Plata es un tema controvertido. Muchos migrantes viajan con programas de viajes del gobierno nacional, que hasta el año 1998 estaban gestionados por el gremio (FOTIA). Asimismo, es el

gremio el encargado de asignar y gestionar programas de empleos para los desocupados del período inter-zafra. Juan nunca logró ni lo uno ni lo otro porque el delegado gremial de la zona utiliza estos recursos entre parientes y amigos, según la interpretación del entrevistado⁷. Por lo tanto pagó su propio pasaje, que es del orden de los \$ 140 y nunca fue beneficiado por ningún programa de trabajo.

Durante 1998 trabajó en el riego de la papa y no se quedó para la cosecha. Una cuadrilla con otros tucumanos que viajaron en febrero lo reemplazó para esta otra tarea. Le adjudicaron vivienda en forma gratuita como parte del contrato laboral, que es totalmente informal (en negro).

El regreso de Juan a Tucumán en febrero es el momento más dificultoso para obtener ingresos. Allí se está terminando en ese momento la cosecha del tabaco, y se produce una de las varias cosechas anuales del limón.

La familia habita en la parte central de la zona cañera; más al sur, en los últimos departamentos de la provincia, el tabaco y la caña se entremezclan en un mismo paisaje agrario. La gente de esta zona central no acostumbra a participar en la cosecha del tabaco; busca en estos meses trabajo en el limón. Para Juan la cosecha del limón funciona como “un comodín”: acude a ella cuando no aparecen otras oportunidades laborales y no reclama estar legalizado ni cobrar lo fijado por convenio. Para él son “changas” en un período laboralmente difícil. En marzo de 1999 estaba trabajando con un patrón de una finca citrícola que forma su propia cuadrilla de trabajadores y suele contratarlo.

El verano en Los Sosa, para Rita

En el año 1996 yo ya no viajé más, era como volver el tiempo atrás. Era difícil para nosotros separarnos, ya nos habíamos acostumbrado a viajar juntos, pero ahora está solamente tres meses, no más. Danita no sabe lo que es pasar una Navidad con su padre.

Aquí en Los Sosa no quedan muchas opciones de trabajar, ya que en el mes de enero queda desolado, no hay casi movimiento, los hombres todos viajan, algunos a Río Negro, otros a Mendoza, a Mar del Plata, y a Balcarce.

Aquí se quedan sólo las mujeres y los chicos. Es muy triste pero no queda otra cosa por hacer.

Es así, ahora que Danita es grande, pienso viajar, no estoy segura, para ver si puedo trabajar allá en Mar del Plata, ya que mi sueño es volver allá para ver si podemos terminar nuestra casa ya que le falta el piso, terminar el baño y el revoque.

Su actitud es diferente con relación al trabajo de zafrero. En este caso reclama sus derechos como trabajador y negocia con su patrón (hace cuatro años que traba-

ja para el mismo) las condiciones laborales, aportes patronales, y un precio de trabajo que se acerque o supere al fijado por convenio. Para Juan el trabajo en la caña es la ocupación principal en su provincia, en “su lugar”: es la tarea que llevaron a cabo sus padres, sus otros familiares y sus amigos. No derrocha críticas al comportamiento actual de su delegado gremial, y argumenta que la conducta de esta gente violenta sus derechos como trabajador de caña. En Juan (no así en otros casos) tal conciencia de los derechos laborales se debilita afuera de la provincia, o incluso en la cosecha del limón. Estas otras son vividas como tareas complementarias. Su actitud hacia el trabajo cañero es diferente de la de muchos otros que tratan de buscar mayor inserción en otras actividades, y que por ejemplo ven en el limón una posibilidad de trabajo a más largo plazo. En tal circunstancia se puede apreciar cómo la actividad cañera en la provincia de Tucumán es conformadora de identidad social.

En efecto, la actividad no sólo jugó un papel económico fundamental para la inserción temprana de la región al capitalismo nacional, sino que fue decisiva en el paisaje espacio-territorial, en la formación de una cultura, en el acervo lingüístico provincial, y en la identidad social de la gente. Juan es hijo de un cañero, y como vemos, aspira a ser cañero. Las migraciones inter-zafras forman parte de tal identidad, ya que desde tiempos remotos el trabajo en caña se complementa con las migraciones. El trabajador cañero tucumano está acostumbrado a recibir gente de otras provincias y a marchar hacia el sur cuando se termina la zafra. ¿Cómo se combina este conjunto de identidades laborales con la identidad cañera?

Cuando el migrante tucumano se inserta en otro espacio, aunque sea rural como el de origen, se produce una interacción con la nueva situación que lo induce a buscar pautas de adaptación desde los elementos y dimensiones de su matriz cultural; produce una traducción de sentidos y no una simple adaptación. Asimismo incorpora nuevos elementos, prácticas y códigos del nuevo lugar. Se “lleva” a su lugar de origen experiencias y recursos simbólicos que lo diferenciarán de “los que nunca salieron”.

El limón, Juan

Este año fui al limón, 2 días fui con la cuadrilla.

El patrón que hace la cuadrilla nos llama todos los años. Yo no tengo la obra social del limón porque voy poco, algunos días...

[Los demás] se han ido a trabajar a la Comuna. En las comunas hay muchos que se acomodaron con la política, y los demás trabajan con el limón. Nadie quiere ir para la caña, nadie, nadie, porque los que trabajan con el limón, trabajan de las 10 de la mañana, las 11 hasta las 5 de la tarde y sacan un jornalcito. En cambio con la caña tienen que andar en el alba, a veces mojados, a veces con calor y para ganar un jornal de casi lo mismo.

Dentro del conjunto de zafreos encuestados, una importante mayoría sale o salió en algún momento. La otra cara de la moneda es que gran parte de los que a lo largo de la década de 1960 migraron a Buenos Aires estaban conectados familiarmente a la actividad cañera, y muchos de ellos volvían periódicamente, porque participaban en alguna sucesión familiar y no querían vender sus tierras a sus parientes que permanecieron allí. Las migraciones -temporales y definitivas- forman parte del mundo social de los sectores subalternos de la actividad cañera. De allí la imagen que sirve de título a este trabajo. La identidad social y laboral de las vastas poblaciones relacionadas con la caña se constituyó tanto por los surcos cañeros como por los desplazamientos, las migraciones “en tránsito”.

Algunas reflexiones a modo de conclusión

Las migraciones constituyen procesos que delimitan las configuraciones socioculturales de las regiones, lo local, pero también lo subjetivo: la migración es un cambio tan importante que moldea la identidad de los sujetos, pues los obliga a incursionar por lugares desconocidos y a menudo distantes, y a interactuar con otros sujetos diferentes de sus mundos sociales delimitados por la territorialidad. En este contexto la comunidad juega un rol fundamental en tanto constructo simbólico y social que le da al individuo el sustento de un mundo de la vida en común en las instancias de desarraigo.

La noción de “cursos de vida” de Elder (1994), entendida como una interacción de las trayectorias generacionales tales como las carreras laborales y las sendas familiares que están sujetas a las condiciones cambiantes y a opciones futuras, resulta interesante para comprender las trayectorias familiares y su carácter procesual, contingente y de creación perpetua.

Juan, Rita y Danita forman parte de esas familias migrantes tucumanas que viven en condiciones de precariedad y “arrinconamiento”, y que por lo tanto cotidianamente se desplazan entre diferentes regiones en búsqueda de otras alternativas de trabajo y de vida.

Los actores incorporan la migración dentro del repertorio de acciones. Si bien en este contexto es modular, depende de la capacidad de los individuos ponerla en acto en un momento determinado. Es en el momento de la toma de decisiones cuando se evidencian los procesos a través de los cuales los sujetos producen y reproducen la propia vida social, desplegando en tales momentos sus capacidades creativas, y ciertas prácticas que les permitan por ejemplo persistir en las actividades laborales o mejorar sus condiciones de vida.

Como sostiene Long (1997), los sujetos traducen de acuerdo a sus propios esquemas interpretativos los cambios que ocurren tanto en el nivel local como en el global. Para Rita, la migración adquiere diferentes sentidos cuando Juan es quien

parte o cuando quien se va es ella. En esta última situación la migración significa algo más que un proyecto de trabajo: es la posibilidad de ir cumpliendo las metas propuestas como grupo familiar joven.

Las posibilidades de migrar están condicionadas fuertemente por la condición de género. Rita debió interrumpir los viajes a Mar del Plata cuando Danita nació para dedicarse a su cuidado y el de su hogar.

Nuevamente se instala en los discursos la tensión no resuelta entre los espacios privado y público en los cuales debe desempeñarse la mujer, hecho que en los mundos rurales, con ciertas pautas tradicionales, se complejiza aún más. Para Rita esto se traduce en el acto de llevar a Danita con ella, con todas las dificultades que esto comporta, o dejarla en Los Sosa con algún pariente.

Muchas familias deben separarse durante cortos o largos períodos de tiempo. Ello implica, como dice Rita, “pasar la Navidad sin Juan” y tratar de explicarle a Danita la ausencia momentánea de su padre.

A través de los relatos fragmentados de esta familia, de la autobiografía de Rita, de las reflexiones acerca de las vidas de estos jóvenes trabajadores, intentamos comprender las acciones de unos sujetos insertos en un espacio social con restricciones -condicionamientos estructurales determinados por las características económicas de una provincia “inviabile” para el discurso neoliberal- pero con la capacidad para inventarse proyectos, resignificar sus restricciones y generar recursos.

Un importante número de familias rurales se encuentra desde siempre en situaciones de desplazamiento como parte de una tradición inscripta en sus trayectorias vitales. No obstante, las mismas condiciones no sólo económicas y laborales sino también jurídico-institucionales y políticas, contribuyen al sedimento de esta acción. Una práctica se perpetúa. Desde el gremio el desamparo a los zafreros se proyecta aún más lejos, en situaciones de desarraigo que bordean la precariedad o el aislamiento y que van moldeando la identidad en tránsito de estos actores.

En síntesis, la identidad social del zafrero tucumano está muy marcada por las migraciones como signo de una falta importante -el trabajo en el verano tucumano- pero también como recurso que les permite no sólo la supervivencia sino también ciertas experiencias que luego transmiten a sus descendencias (recordemos que Rita quiso que Danita naciera en Mar del Plata y no en Tucumán). El “exterior” a la provincia no es ni mejor ni peor, es distinto, y juega como “otra” posibilidad diferente a la que ofrece el propio terruño.

Por último, retomemos una de las primeras ideas de este trabajo: la precarización del trabajo rural tiene que ver con las condiciones socio-jurídicas y políticas más que con las económicas. FOTIA, combativa y eficiente en otras épocas, está sola en una pobre carrera por el “asistencialismo” (con todas las características de clientelismo y corrupción que suelen trasvasar las áreas de subsidios). El

argumento esgrimido es que no hay margen para la lucha gremial por el papel que juegan las máquinas reemplazando a los trabajadores. No obstante, los trabajadores se quejan porque FOTIA no lleva a cabo con eficiencia lo poco que puede hacer (por ej. fiscalizar y gestionar las obras sociales y los subsidios de viaje eficientemente), y no por los convenios que se consiguen. Y esto porque la mayoría de los trabajadores está “en negro”.

La representación a través de las viejas organizaciones gremiales dejó de funcionar entre los trabajadores cañeros de Tucumán, y en este nivel aún no existen más alternativas que la participación espontánea en los “cortes de rutas” o “quemadas de llantas”, que constituyen las expresiones de conflictos más usadas en la provincia durante estos últimos años.

Bibliografía

- Aparicio, Susana 1996 “El mercado de trabajo rural en el Noroeste Argentino”. Ponencia presentada en las Jornadas Agriculturas Latinoamericanas y transformaciones sociales, Grupo Montevideo, La Plata.
- Bendini, Mónica *et al* 1999 “Historia de la vulnerabilidad social de los golondrinas en la cuenca frutícola del Río Negro”, en *De golondrinas y otros migrantes* (Buenos Aires: Editorial La Colmena) Cuadernos del GESA II.
- Bertaux, Daniel 1995 “Des familles comme acteurs des transformations sociales”, Mimeo.
- Bertaux, Daniel 1996 “Historias de casos de familias como método para la investigación de la pobreza”, en *Revista de Sociedad, Cultura y política* N° 1, Vol. 1, Julio. Buenos Aires.
- Bourdieu, Pierre 1999 *La miseria del mundo* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- Campi, Daniel 1995 *La industria azucarera en Tucumán* (Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán).
- Cohen, A. P., 1984 *The Symbolic Construction of Community* (Londres: Open University).
- de Haan, Henk 1997 “Locality, Identity and the reshaping of Modernity. An analysis of cultural confrontation in two villages”, en de Haan, H. y Long, N. *Images and Realities of Rural Life* (Holanda: Editorial Van Gorcum).
- Elder, G. 1994 “Time, Human Agency and Social Change: Perspectives on the Life Course”, en *Social Psychology Quarterly* (EE.UU.), Vol. 57, 1: 4-15.
- Friedin, Bettina 1998 “Migración femenina, trabajo y familia. Un estudio cualitativo de trayectorias vitales”. Tesis de Maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1997 “La acción social en los procesos económicos. El caso de la actividad cañera en Tucumán”, en Jorrat, R. y Cantón, D. *La investigación social, hoy* (Buenos Aires: Editorial del Ciclo Básico Común).
- Giarracca, N. y Aparicio, S. 1991 “Los campesinos cañeros: Multiocupación y Organización”. Cuaderno N° 3 del Instituto de Investigación Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. UBA, Buenos Aires.
- Giddens, Anthony 1997 *Modernidad e identidad del yo* (España: Editorial Península).
- Gordonava, Alfonso *et al* 1999 *Estrategias migratorias: entre la subsistencia y la búsqueda de oportunidades en el valle tarijeño* (Bolivia: P. I. E. B.).

Laclau, E. y Mouffe, Ch. 1987 *Hegemonía y estrategia socialista* (España: Ed. Siglo XX).

Long, Norman 1992 “An actor-oriented paradigm”, en Long, N. y Long, A. *Battlefields of knowledge* (Londres: Routledge).

Long, Norman 1997 “Agency and constraint, perception and practices. A theoretical position”, en De Haan y Long N. (eds.) *Images and Realities of rural Life* (The Netherlands: Van Gorcum).

Murmis, M. y Waishan, C. 1969 “Monoproducción agroindustrial, crisis y clase obrera: La industria azucarera tucumana”, en *Revista Latinoamericana de Sociología* (Buenos Aires) Vol. 15, Nº 69/2.

Radonich *et al* 1999 “Cosechando temporadas. Los trabajadores estacionales en el Valle”, en *De golondrinas y otros migrantes* (Buenos Aires: Editorial La Colmena) Cuadernos del GESA II.

Reboratti, Carlos 1976 “Migraciones estacionales en el Noroeste argentino y su repercusión en la estructura agraria”, en *Demografía y Sociedad* (México: El Colegio de México) Nº 2, Vol. X.

Sabalain, C. y Reboratti, C. 1982 “Vendimia, zafra y alzada. Migraciones estacionales en la Argentina”, en Lattes, Alfredo (comp.) *Migración y desarrollo* (Buenos Aires: CLACSO) Serie Población 6.

Thomas, W. y Znaniecki, F. 1919 *The Polish Peasant in Europe and America* (EE.UU: Ghotan Press).

Tort, María Isabel 1982 “La mecanización de la cosecha de caña de azúcar”, Informe de beca de perfeccionamiento. CONICET. (Inédito).

Otras fuentes

Archivos de FOTIA.

Encuesta Grupo de Estudios Rurales, agosto 1999.

Entrevistas, biograma e historia de vida.

Notas

1 Los riesgos son dobles: cada año algún transporte de migrantes sufre un accidente que enluta a pueblos enteros, y por otro lado la violencia delictiva aumenta año tras año en las zonas rurales del Noroeste argentino. En tal sentido, los pueblos de migrantes son más propensos a este tipo de ataques.

2 La FOTIA es la “Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarrera”, formada por treinta y cuatro sindicatos localizados en toda la región cañera provincial: quince de obreros de fábrica y diecinueve de obreros del surco.

3 Con respecto a la población total, ésta se caracteriza por un importante porcentaje de niños y jóvenes. El grupo etario integrado por menores de hasta catorce años constituye el 34,7% de la población; el grupo de quince a cuarenta y cuatro años es el más numeroso y representa el 48,3%, concentrándose en la franja de veintiséis a cuarenta y cuatro años (21,9%); y la franja etaria que va de los cuarenta y cinco a sesenta y cinco y más años, constituye el porcentaje más bajo: 17%. En relación a la edad del segundo tipo de población, los menores de siete a catorce años -que son los hijos que ayudan a sus padres en la cosecha de la caña- representan tan sólo un 1,1%. El grupo etario que va desde los quince a los cuarenta y cuatro años es el grupo más numeroso, y representa el 73,3%, concentrándose en mayor medida en el grupo de edad de veintiséis a cuarenta y cuatro años (46%). Finalmente, la franja compuesta por aquellos encuestados que tienen entre cuarenta y cinco y más de sesenta y cinco años, representa el 25,6%.

4 Los migrantes tucumanos que se dirigen hacia otras provincias a trabajar para el período interzafra 1997-1998 según los listados de FOTIA sumaron la cantidad de 4.618, distribuidos del siguiente modo:

- A Mendoza: 1.232 trabajadores;
- A Río Negro: 2.728 trabajadores;
- A Buenos Aires: 413 trabajadores;
- A La Rioja: 245 trabajadores.

5 La variable “tipo de vínculo laboral” de los trabajadores del surco se confeccionó a partir de cuatro categorías: *estables y formales*: aquellos trabajadores con más de tres años de antigüedad con aportes jubilatorios; *estabilidad media y formales*: trabajadores con uno a tres años de antigüedad con aportes jubilatorios y trabajadores con más de tres años de antigüedad sin aportes jubilatorios; *estabilidad media e informales*: trabajadores con uno a tres años de antigüedad sin aportes jubilatorios y trabajadores en cuya primera zafra reciben aportes jubilatorios; *inestables e informales*: trabajadores en cuya primera zafra no reciben aportes jubilatorios.

6 La investigación que llevamos a cabo desarrolla una estrategia metodológica que combina la encuesta estadísticamente representativa con métodos que se orientan a captar mundos sociales y de vida. En este trabajo se presentan los primeros resultados de la investigación a través de los relatos de una de las familias estudiadas, la de Juan, Rita y la pequeña Danita, zafrero él, trabajadores multiocupados y migrantes ambos. Con Juan trabajamos con entrevistas abiertas y relatos de vida, y con Rita establecimos una relación que nos permitió hacer una “historia de vida” en forma de entrevista y una “historia biográfica” o “biograma”. Esta última técnica comporta haber establecido un acuerdo con Rita por el cual ella escribió en un cuaderno, durante unos meses, los acontecimientos más importantes acerca de su vida y una descripción de su comuna. Esta técnica, utilizada por Thomas y Znaniecki (1919) en el famoso estudio acerca de los campesinos polacos, permite captar ciertas circunstancias de la vida de los entrevistados difíciles de trabajar en el “cara a cara” de la entrevista.

7 Tratamos de entrevistar al delegado gremial pero fue muy difícil encontrarlo en su casa o en el local del gremio. No obstante, los datos de la encuesta a trescientos trabajadores coinciden en calificar muy duramente a los delegados gremiales.

Hacia una configuración de trabajadores agrarios en la fruticultura de exportación de Brasil y Argentina

Josefa Salete Barbosa Cavalcanti* y Mónica Isabel Bendini**

En este artículo focalizamos la atención en los trabajadores de la fruticultura de exportación de la región valletana del Río Negro en el noroeste de la Patagonia en Argentina y del valle de San Francisco en el nordeste de Brasil a partir de la consideración de las características de la producción frutícola y de la reestructuración productiva actual en ambas regiones. Se analiza cómo, en la búsqueda de formas más competitivas de inserción en los mercados globales, regiones productoras de agroalimentos pasan a orientar o reorientar su producción atendiendo a los requerimientos externos de calidad, lo cual a su vez produce impactos significativos sobre el proceso y la organización del trabajo y en los perfiles de demanda de los trabajadores. Como bien lo analiza Lara, "...se ponen en marcha nuevas formas productivas y nuevas formas de organizar el trabajo, o se reformulan viejas técnicas y modalidades productivas para incorporar diferentes normas de calidad..." (1999: 322).

Por una parte, la modernización de importantes segmentos agroindustriales está produciendo una creciente polarización a nivel empresarial entre unidades altamente tecnificadas y otras con problemas de acceso a la tierra, el capital, la tecnología y los mercados. Por otra parte, los distintos actores sociales agrarios son llevados a modificar su comportamiento respecto de las dimensiones técnico-or-

* Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Pos-Doctorado, University of Wisconsin-Madison, Estados Unidos y Cardiff University, Reino Unido, Ph. D. Sociology, University of Manchester, Master en Antropología Social, Museu Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro.

** Mónica Isabel Bendini, Licenciada en Sociología, Universidad de Buenos Aires y Doctora en Sociología, Universidad de Belgrano. Profesora e Investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Coordinadora del Grupo de Estudios Sociales Agrarios, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue, Argentina.

ganizativas internas, produciéndose cambios en los controles del proceso de trabajo y en las relaciones intersectoriales que revelan una reestructuración no solamente productiva sino también social.

Apartir del estudio comparativo de dos regiones productivas dinámicas en la fruticultura de Argentina y de Brasil¹, el enfoque adoptado permite examinar problemas relativos a los cambios recientes en los procesos de trabajo y en las condiciones de empleo en el contexto de las transformaciones globales y las especificaciones locales. Sobre esta caracterización se intenta presentar algunos elementos que delinear la configuración de trabajadores en ambos espacios sociales.

Es importante resaltar que aún teniendo orígenes distintos, marcados por diferentes paisajes rurales y tiempos de expansión frutícola, los casos estudiados revelan similitudes en cuanto a los mecanismos que facilitaron inicialmente el desarrollo del potencial ofrecido por estas regiones semiáridas, a través de la implementación de sistemas intensivos de riego y de proyectos públicos para la generación de infraestructura y empleo. A pesar de las diferencias relativas a la incidencia de recursos gubernamentales y privados en la transformación de estos territorios económicos (Cavalcanti, 1996a; Bendini y Pescio, 1996), tanto las regiones como los actores sociales dinámicos que en ellas poseen interacción, encuentran en el actual contexto de globalización situaciones coincidentes en la búsqueda de una inserción flexible, las cuales impactan en el resto de los actores redefiniendo sus posiciones productivas.

Producción y trabajo en las cadenas frutícolas

Los productores frutícolas de regiones agroexportadoras de Argentina y Brasil están integrados en circuitos agroalimentarios mundiales, y a su vez condicionados por las políticas de ajuste impuestas por los organismos financieros internacionales. Experimentan internamente crecientes desigualdades sociales, que condicionan el carácter de las relaciones entre los actores, quienes se asocian para seleccionar los mecanismos de desarrollo. En las regiones semiáridas de los dos valles seleccionados, los procesos de reestructuración productiva y de reorganización del trabajo y las formas consecuentes de inclusión/exclusión social, presentan similitudes y peculiaridades que iluminan procesos y modalidades de inserción a escala global.

En general, el nivel de “externalización” de la producción agraria, relativo a la calidad y a los requerimientos de los consumidores, se define por parámetros de mercado que impactan en el conjunto de la cadena de valor agrícola. Sin embargo, la organización interna de la producción y la dinámica social están también condicionadas por los respectivos contextos históricos, las formaciones socioeconómicas, y las trayectorias de los diferentes actores sociales (Long, 1996). Este es-

tudio delinea algunos elementos de estos procesos en las regiones seleccionadas.

En la región valletana del Río Negro, las unidades familiares de producción caracterizaron la fases de inicio de la fruticultura y de consolidación de su matriz productiva. El *chacarero* -productor familiar- se constituyó así en la fuerza de trabajo necesaria para su desarrollo y expansión, a la vez que en el actor social y político protagónico. La consideración de los chacareros como productores familiares merece una aclaración contextual: corresponde al tipo social “farmer” que incorpora trabajo asalariado -no familiar- en las unidades de producción. Esta organización social del trabajo ha sido una constante desde los inicios de la actividad. En el valle de San Francisco, el carácter familiar de la fuerza de trabajo requiere un análisis más cuidadoso. Apesar del reconocimiento y relevancia de los *colonos* (productores familiares de tipo campesino) en términos de la política de empleo y de generación de renta para la región, el proyecto de desarrollo de este valle ha explicitado el carácter empresarial de los emprendimientos, reservando una parte importante de las áreas irrigadas para unidades mayores, de colonización privada, con trabajo exclusivamente asalariado, que en la actualidad se incrementan. Sin embargo, estas diferencias entre las regiones se atenúan en la actualidad al intensificarse la concentración, la integración y la transnacionalización de la actividad.

En las posteriores fases evolutivas del complejo en la región frutícola argentina, los chacareros pierden progresivamente su condición de productores protagónicos y su posición de fuerza en el circuito, pero no desaparecen: se articulan subordinadamente al sector industrial bajo variadas formas (altos niveles de endeudamiento, agricultura por contrato, renta parcial de la tierra, pluriactividad multisectorial). La subsunción al sector industrial todavía sigue siendo una alternativa para los chacareros argentinos, mientras que en el caso brasileño los colonos iniciales no logran posicionarse como productores independientes y/o integrarse, y poco a poco van siendo sustituidos, aunque con resistencias, por pequeños empresarios dinámicos.

Las políticas de ajuste y los procesos de reestructuración productiva implementados expresan la subordinación y dependencia de las nuevas condiciones y demandas del mercado. Por consiguiente, las estrategias usadas por las empresas más dinámicas, y la continua subordinación de las unidades familiares, conllevan en algunos casos la exclusión de los actores históricos y la emergencia de nuevos. Ello se evidencia en la venta o alquiler de chacras a productores rurales más capitalizados y competitivos, en las fusiones y estrategias defensivas tipo “joint venture”, y en la pérdida de áreas destinadas a la fruticultura por cambio en el uso del suelo, entre otros ejemplos. Se generan procesos de sustitución de actores y reconversión productiva, orientados hacia una respuesta más competitiva y eficaz del sector frutícola a las demandas de los mercados a través de una multiplicación de estrategias de gerenciamiento y de cambios en las relaciones intersectoriales (Cavalcanti, 1999[a]; Bendini, 1999).

Tendencias en la reestructuración productiva

Teniendo en cuenta la clasificación de regiones rurales agrícolas que realiza Marsden (1997), estas dos regiones se ubican en la esfera de producción para un mercado alimenticio de calidad -de productos frescos- destinado a nichos extranjeros o nacionales de altos ingresos.

Los criterios de calidad y de gerenciamiento definidos desde el exterior impactan diferencialmente en la organización productiva y del trabajo según las trayectorias históricas de los espacios sociales en estudio. En tal sentido, la reestructuración productiva es más profunda y compleja en la región argentina, con más de medio siglo de desarrollo de la actividad frutícola y casi cuatro décadas de conformación del complejo agroindustrial, en comparación con la reciente expansión frutícola del nordeste brasileño, actividad iniciada en los años setenta. Las principales tendencias que caracterizarían a esta reestructuración son:

- En primer lugar, la globalización del consumo que induce a la diversificación y/o reconversión productiva y a la modernización tecnológica: continuos cambios varietales de crecimiento rápido, reconversión de especies, superintensificación de la producción primaria, automatización del empaque, regulación internacional de los controles de calidad (Tsakoumagkos *et al*, 1999).
- En segundo lugar, la globalización creciente de los circuitos del capital agroindustrial, que en estas regiones, por el hecho de abarcar los segmentos agrícola, industrial y comercial y/o por la presencia de capitales internacionales en asociación con empresas agroindustriales locales, se vuelve más compleja y menos visible (Bendini y Tsakoumagkos, 1999).
- En tercer lugar, una redefinición de las posiciones productivas de productores, empresarios y trabajadores en la cadena (Bendini, 1999; Cavalcanti, 1999[b]).
- En cuarto lugar, también se produce una revalorización del espacio por expansión empresarial a nuevas zonas productivas (Radonich y Steimbregger, 1999).

En la actualidad estas cadenas frutícolas profundizan su integración e intensifican la modernización tecnológica en la búsqueda de una mayor flexibilización productiva², que transforma las características no sólo de la producción agraria sino también del mercado de trabajo regional. Si bien la configuración de cada uno de esos mercados es diferenciada al interior en términos de calificación, permanencia, retribución y formas de contratación de la mano de obra, existe en ambos casos una tendencia hacia la contratación de trabajadores más calificados asociada a los requerimientos de calidad y a los nuevos cambios tecnológicos. La reestructuración de la fruticultura en los valles estudiados estaría siguiendo -aunque con variaciones locales de intensidad y cualidad- la tendencia señalada por Lara y De Gramont (1999) al implicar el desarrollo de formas flexibles de trabajo que combinan criterios de una nueva organización laboral, como mayor calificación

y/o especialización de la mano de obra, estímulos a la productividad y plurifuncionalidad, con estrategias tradicionales de flexibilidad laboral como la capacidad de establecer contratos transitorios y precarios, adaptar los horarios de los trabajadores según requerimientos empresariales, subcontrataciones y terciarizaciones, etc.

Las configuraciones regionales

La región valletana del Río Negro comprende el tradicional alto valle del Río Negro, los valles medios de los ríos Negro y Neuquén, y el valle inferior del río Limay, en la patagonia norte de argentina, abarcando una superficie total de alrededor de 135.000 ha. La actividad frutícola representa más de los dos tercios del producto sectorial, y los cultivos más importantes son los de pepita, manzanas y peras, que representan algo más del 80% de la producción nacional de esos cultivos.

El área frutícola Petrolina-Juazeiro está situada en el valle irrigado del sub-medio del río San Francisco en la zona del “*sertão*” en el nordeste brasileño. Actualmente el área implantada es de ochenta y un mil hectáreas, con predominio de cultivos frutícolas típicos tropicales y subtropicales, predominantemente de uva y mango, pero también banana, coco verde, goiaba, melón, maracuyá, limón, acerola, papaya y piña, con un volumen de producción superior a las seiscientas mil toneladas anuales.

Ambas regiones frutícolas se encuentran en áreas con clima semiárido, donde la posibilidad del aprovechamiento hídrico permitió el desarrollo de oasis bajo riego con agricultura intensiva y alta especialización en el uso del suelo, que contrastan fuertemente con el medio circundante, caracterizado por un paisaje desértico y con baja densidad demográfica, principalmente en el caso argentino.

La intervención estatal en la dotación de infraestructura básica -riego, sistematización, transporte- y en la distribución de tierras, conjuntamente con los emprendimientos privados posteriores, hicieron posible que estas áreas se transformaran en espacios altamente productivos y sumamente atractivos para el asentamiento de población. “...En general las nuevas regiones productivas ofrecen oportunidades de trabajo y empleo que atraen migrantes de distintos orígenes, quienes se establecen y son incluidos (en el proceso productivo) de acuerdo con esas distinciones...” (Cavalcanti, 1999[b]: 157). En el caso brasileño, el proyecto gubernamental original estaba orientado hacia la consolidación de un modelo de producción basado en la pequeña producción familiar como alternativa a los problemas sociales del *sertão*, y esto hizo que la presencia directa del Estado en el proceso de colonización fuera mucho más permanente que en el caso argentino.

A pesar de que la irrigación para pequeños productores aún continúa siendo parte del discurso oficial en Brasil, en la actualidad la producción de frutas para exportación se concentra en unas pocas grandes empresas, las que “...se aprove-

chan de la infraestructura de riego construida por el sector público y de los incentivos estatales colocados a disposición de los grandes grupos económicos interesados en invertir en la agricultura irrigada...” (Lopes y da Mota, 1997).

Desde el inicio, aunque en diferentes momentos históricos, ambas regiones se incorporan al mercado externo como agroexportadoras de productos frescos de alto valor comercial. A pesar de que la infraestructura de riego en el valle de San Francisco data de fines de los años sesenta, el área frutícola de Petrolina-Juazeiro se desarrolla hacia mediados de la década del ochenta, con especialización en mango y uva. La fruticultura en la región valletana del Río Negro se inicia con anterioridad, a partir de los años treinta, con los cultivos básicos ya mencionados: peras y manzanas.

En las últimas décadas se produce en la región valletana del Río Negro una intensa y continua expansión a nuevas áreas productivas con creciente participación de capitales transnacionales, y en forma casi simultánea, el desarrollo expansivo del polo Petrolina-Juazeiro en el valle de San Francisco. Ambos desarrollos tienen lugar en el marco de las transformaciones globales operadas en el sistema agroalimentario mundial.

El proceso de reacomodamiento empresarial en el comercio internacional de frutas frescas y de contra-estación no sólo genera una refuncionalización de las regiones frutícolas tradicionales y la incorporación de nuevas áreas productivas; también induce importantes cambios en la organización del trabajo y en el empleo (Radonich y Steimbregger, 1999).

En ambas regiones la fruticultura ha sido desde sus inicios una actividad importante en la generación de empleos tanto directos como indirectos, incorporando en su desarrollo mano de obra familiar y asalariada. Si bien es cierto que al configurarse nuevas regiones productivas, automáticamente son generados empleos con fuerte impacto en la economía, existe un límite para tal fenómeno y éste está definido por el propio desarrollo de las relaciones entre los productores y el mercado, por las opciones que se presentan y por las elecciones hechas por los distintos actores sociales, inclusive por el Estado.

Los trabajadores en la fruticultura

En el marco de este estudio comparativo, el foco de análisis son los trabajadores frutícolas de las dos regiones caracterizadas como dinámicas e integradas al mercado internacional en diferentes momentos históricos: la región valletana del río Negro en Argentina y el polo Petrolina-Juazeiro en el valle de San Francisco en Brasil. En estos espacios, las decisiones en torno a la producción y a la comercialización condicionan la modalidad de incorporación de mano de obra al circuito frutícola y los perfiles de demanda laboral.

Trabajos anteriores (Friedland, 1994; Cavalcanti, 1995; Bendini y Pescio, 1996) consideran a la ampliación de la cadena de frío, que favorece el abastecimiento mundial de productos frescos, como una de las consecuencias relevantes del desarrollo tecnológico en el sector. De esta forma, en los años setenta ciertas producciones agrícolas del hemisferio sur adquirieron un gran dinamismo en el marco del “nuevo sistema agroalimentario” y produjeron cambios significativos en el uso del suelo y la estructura ocupacional de los espacios agrícolas, implicando nuevas formas de organización empresarial facilitadas por posteriores innovaciones tecnológicas.

El nuevo escenario de los sistemas agroalimentarios se caracteriza por cambios tecnológicos que demandan mayor flexibilidad empresarial y perfiles de calificación de la mano de obra más versátiles y polivalentes, acordes con la nueva organización del trabajo. La tecnología actúa como potencial heterogeneizador, no sólo de la base productiva, sino también del sistema ocupacional.

Surgen requerimientos diferenciales en calidad y volumen de mano de obra que se manifiestan en transformaciones en las posiciones de trabajo y en el empleo (Bendini, 1999).

Los procesos de modernización tecnológica, tanto en la producción primaria como en las etapas postagrícolas, comportan una redefinición de las posiciones productivas de trabajadores, productores y empresarios. Actualmente esa redefinición se inscribe en nuevas formas de organización del trabajo de alcance transnacional. Si bien no pueden ser descartadas las especificidades regionales que condicionan dicha organización, la emergencia de las nuevas posiciones de trabajo no se explica sólo en esa escala de análisis (Tsakoumagkos y Bendini, 1999).

Naturalmente, la importancia de esos procesos no puede ser comprendida sin que se analicen los tipos de “dominación” sobre el trabajo (Lautier, 1999). En los dos casos aquí presentados, la organización de la producción y las formas de gestión de los emprendimientos agroalimentarios dependen cada vez más de profesionales calificados para implementar técnicas y controles de la producción basados principalmente en recursos electrónicos e informáticos.

Además de los cambios en los tipos de calificación y especialización requeridos, se producen transformaciones en la división sexual y espacial del trabajo: “...el proceso de reconversión productiva de la agricultura latinoamericana (...) se acompaña de una feminización del asalariado rural que interviene en la producción y procesamiento de los cultivos de exportación “no tradicionales” como son las flores, las frutas y las hortalizas...” (Lara, 1998: 15). En el caso argentino, existen algunos indicadores en torno al proceso de feminización del trabajo que volvería menos nítida la división sexual histórica del trabajo (predominio de fuerza de trabajo masculina en la etapa primaria, y femenina en las tareas de acondicionamiento y selección de peras y manzanas). En el caso brasileño existe una división se-

xual del trabajo por tipo de producto. En el cultivo y empaque de uva continúa requiriéndose mayoritariamente mano de obra femenina, mientras que para la producción de mango se requiere preferentemente mano de obra masculina.

En ambos casos las empresas procuran aumentar la productividad y reducir los costos laborales utilizando mecanismos tales como las investigaciones en innovaciones biológicas, químicas y de gestión, y dispositivos de gerenciamiento para reducir los límites impuestos por la naturaleza, aumentar los rendimientos y garantizar una producción “just in time”. Estas estrategias son acompañadas por formas más flexibles de trabajo, lo cual en el caso argentino se traduce en una precarización creciente del empleo.

Junto a la necesidad creciente de personal calificado para la fruticultura, como por ejemplo técnicos especializados en el uso y control de instrumentos electrónicos, se observan procesos de descalificación y empobrecimiento del trabajo, principalmente en las tareas de acondicionamiento y embalaje. Las tecnologías electrónicas se caracterizan en general por ser ahorradoras de mano de obra. Las modernas “*packing houses*” y los instrumentos electrónicos de “*timing*” reducen significativamente los requerimientos de trabajo humano.

En ambas regiones las condiciones climáticas impactan diferencialmente en tanto condicionantes de los usos y volúmenes de trabajo. Por ejemplo: la producción de frutas es de carácter marcadamente estacional en Argentina, y las cosechas de peras y manzanas se concentran en un período del año que va de enero a mediados de abril (contra-estación del norte). Sin embargo, y a propósito de los cambios técnicos señalados, se produce en las últimas décadas una atenuación de la estacionalidad en la producción primaria, que es la más importante en la etapa de acondicionamiento y embalaje. En el valle de San Francisco es posible producir frutas durante todo el año (dos cosechas y media de uva, por ejemplo), lo que permite el uso continuo de los recursos productivos a lo largo del tiempo. Por otro lado, aunque la cosecha de mango esté más concentrada en los meses de octubre a febrero (otoño e invierno europeo), es posible producir también todo el año. El desarrollo de investigaciones sobre nuevas variedades de plantas y/o sobre las formas de inducir o retardar la fase de maduración de las frutas y espaciar la cosecha, permite a los productores y exportadores de ambas regiones responder a las demandas puntuales de los mercados.

En el valle de San Francisco la falta de combatividad del sindicato de trabajadores rurales -a pesar de algunas pequeñas conquistas relativas a licencia femenina y salarios- se suma a la escasa intervención frente a los recientes cambios tecnológicos y a las nuevas formas de gestión de las unidades productivas. En el caso argentino, en las actuales condiciones de subempleo y desempleo surgen nuevas variantes de precarización del trabajo asociadas a la flexibilización. Los trabajadores agrarios y los sindicatos que los nuclean se tornan más vulnerables para encaminar sus reivindicaciones (Bendini y Pescio, 1996). Sin embargo, los

sindicatos de la fruta aún son agencias de vigilancia en el control y registro de las condiciones laborales y de remuneración de los trabajadores, aunque no tienen fuerza política para contrarrestar las presentes tendencias de la flexibilización.

En la región valletana del Río Negro, Argentina

A propósito de la actividad frutícola, esta región argentina se ha caracterizado por ser generadora de empleo desde el inicio de dicha actividad. Respecto del volumen, se estima que a comienzos de los años noventa el conjunto del sistema frutícola involucraba unos 56.300 trabajadores (familiares y asalariados, permanentes y transitorios, rurales y no rurales), mientras que en la actualidad esa cifra habría disminuido a 53 mil. Una idea de la importancia de este guarismo en la población regional surge al considerar que más de un tercio de las familias de la zona obtiene sus ingresos directos total o parcialmente de la fruticultura, magnitud que aumenta al examinar las actividades conexas.

Esta estimación global puede discriminarse como sigue: en la producción primaria hay 16.200 trabajadores familiares permanentes; 7.100 trabajadores asalariados permanentes y 18.800 trabajadores transitorios en el período pico de demanda. En empaque, hacia fines de la década de los años ochenta había 12.500 trabajadores, cifra que según los informantes gremiales actualmente es inferior. De todas maneras, no existe certidumbre de su disminución por la presencia de las pseudo-cooperativas de trabajo, que producen el doble efecto de invisibilizar parcialmente a los diferentes tipos de trabajadores e introducir una menor confiabilidad en los datos disponibles. En frigoríficos e industria del jugo habría aproximadamente 1.650 trabajadores, cifra que seguramente ha sido afectada por las recientes tendencias, las cuales señalan una disminución en las exportaciones de jugo.

El total del personal ocupado en la producción primaria en el período de máxima demanda -algo más de 42.000 personas- se descompone en un 38% de familiares permanentes, un 17% de asalariados permanentes, y un 45% de asalariados transitorios. Al intensificarse la integración de la cadena se produce un incremento de trabajadores asalariados y una disminución relativa de la mano de obra familiar. Esta última categoría, que fue muy importante en el espacio valletano, aún representa el 70% del personal permanente, pero su presencia es menos significativa en las nuevas áreas frutícolas de exportación.

Cuadro 1

Trabajadores rurales permanentes y temporarios, durante el mes de mayor requerimiento de mano de obra (marzo) según zonas tradicionales y nuevas en la región valletana del Río Negro

Zonas productoras	Personal permanente	Personal temporario	Total
Total	23.339	18.782	42.121
Zonas tradicionales	18.505	15.294	33.799
Zonas nuevas	4.834	3.488	8.322

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censar '93 y Censo-Frut '94

Cuadro 2

Trabajadores rurales permanentes (familiares, no familiares y temporarios) durante el mes de mayor requerimiento de mano de obra en la región valletana del Río Negro

Trabajadores	Región valletana
Total (mes de marzo)	42.121
Familiar (incluido productor)	16.236
Permanente no familiar	7.103
Temporario (mes de marzo)	18.782

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censar '93 y Censo-Frut '94

El volumen absoluto del trabajo rural temporario -ateniéndonos a los datos proveniente de los censos frutícolas provinciales de 1993 y 1994- oscila entre 6.940 personas en julio y 18.782 en marzo, es decir, una relación cercana a un tercio de trabajadores temporarios entre los períodos de menor y mayor demanda de mano de obra.

La modernización tecnológica ha desplazado personal y modificado los requerimientos de mano de obra. En esta dinámica se ha ido conformando un sistema específico de puestos de trabajo caracterizado por distintos niveles de calificación, estabilidad, y modalidades de contratación. En esta agroindustria las ten-

dencias en la variación cuantitativa de la demanda hasta hace algunos años se han visto compensadas por la expansión de la actividad en su conjunto. Sin embargo, las actuales condiciones normativas y fácticas de la vinculación laboral alteran las modalidades clásicas de incorporación y regulación de mano de obra en todo el circuito (Tsakoumagkos, Bendini, Radonich y Steimbregger, 1999).

Teniendo en cuenta las transformaciones agroindustriales y las posiciones de trabajo emergentes en el conjunto de la cadena, se consideran a continuación algunos elementos en la configuración de nuevos tipos de trabajadores.

En la producción agrícola se produce una diferenciación tanto en los trabajadores permanentes como en los transitorios:

- por un lado va configurándose un obrero permanente central quien es polivalente o con habilidad extensiva y semicalificado, en las unidades productivas reconvertidas de mediano o gran tamaño;
- por otro, persiste el peón permanente periférico de baja calificación, dedicado a tareas generales y estacionales, predominantemente en las chacras de menor tamaño y/o no reconvertidas;
- en cuanto a los transitorios se verifica también una segmentación, ya que puede hablarse de transitorios centrales en el caso de aquellos trabajadores que son requeridos para algunas tareas calificadas;
- por otro lado, hay también un transitorio periférico, sobre todo en el caso de los cosecheros; ésta es la actividad de mayor demanda estacional.

En términos de volumen hay una disminución de permanentes por hectárea. En cuanto a los transitorios, hay un aumento absoluto y relativo de trabajadores en cosecha.

En el empaque:

- por un lado persiste una diferenciación entre trabajadores permanentes sin suspensión, permanentes con suspensión (un sector más voluminoso que el anterior), y temporarios (en el pico estacional de cosecha). En conjunto, las nuevas tecnologías tienden a aumentar la polivalencia y la desjerarquización.
- por otro cobran importancia los estamentos técnicos vinculados a las nuevas tecnologías, constituyéndose en el núcleo central o fuerte del proceso de producción. Es frecuente que este tipo de personal cumpla también tareas en la producción primaria.

Al profundizarse la incorporación de tecnologías automáticas y electrónicas con nuevos requerimientos de calificación, que fundamentalmente aumentan el ritmo y la intensidad del trabajo, se modifican y/o surgen nuevas posiciones laborales. En conjunto, disminuye el volumen de trabajadores y aumenta la deses-

tacionalización del trabajo. Las transformaciones laborales estarían señalando que los cambios en la etapa de producción primaria se vinculan más con la continuidad y calificación, mientras que en las etapas postagrícolas están más asociados a los cambios tecnológicos, en especial a la automatización y la flexibilización del vínculo contractual (Bendini y Tsakoumagkos, 1999).

La fuerte estacionalidad de la actividad y la expansión a nuevas zonas de producción provocan una importante demanda de mano de obra estacional. A pesar del dinamismo demográfico que caracteriza a la región desde hace más de medio siglo, el crecimiento poblacional no cubre los requerimientos de mano de obra para la época de recolección de fruta. La cosecha, tarea estacional y de poco prestigio, no puede ser cubierta con trabajadores locales, y continúa demandando la presencia de trabajadores migrantes “golondrinas”. Si bien es difícil cuantificar el volumen de golondrinas que año tras año arriban a la zona, éste se estima en aproximadamente 8.000 trabajadores.

Este déficit de mano de obra fue cubierto hasta los años ochenta por trabajadores estacionales transandinos, en su mayoría campesinos del sur de Chile, que en la etapa de expansión de la actividad se asentaron en la región conformando villorrios rurales en la vera de los canales de riego y colindantes a las zonas de producción -calles ciegas con escasa infraestructura y servicios. A partir de la década de los noventa se reducen las migraciones estacionales de origen chileno y se observa una presencia creciente de trabajadores del noroeste del país.

“...Ahora tengo pocos migrantes chilenos, no como antes. Antes (la cosecha) dependía de ellos...” (productor mediano de zona tradicional).

“...Años atrás trabajábamos con chilenos que venían con contrato de trabajo, en realidad la cosecha no se levantaba si no era por ellos. Actualmente vienen muchos de Tucumán...” (empresario de la región).

“...Antes venían más chilenos, ahora vienen menos. Aumentó la cantidad de norteños; traen compañeros y amigos. De acá no anda mucha gente...” (capataz de empresa frutícola).

En los últimos años se destaca la presencia -aunque escasa- de mano de obra estacional proveniente de la Línea Sur rionegrina. Este movimiento fue inducido tanto desde la necesidad empresarial de contar con mano de obra suficiente y en término para la época de la cosecha, principalmente en las nuevas zonas de expansión, como desde la necesidad de los gobiernos locales de atenuar el problema del desempleo urbano y la crisis de la ganadería extensiva regional.

La complementariedad regional que se estableció a través del tiempo entre el área centro-sur de Chile, la región del noroeste argentino y el espacio agrario valletano, ha permitido no sólo que los trabajadores estacionales pudieran encadenar actividades agrícolas en diferentes momentos del año, sino también que los

empresarios de los valles del Río Negro pudieran asegurarse la mano de obra necesaria para los momentos pico de demanda (Ozino C.; Radonich y Steimbregger, 1999).

“...El problema no es que no consigamos mano de obra sino que directamente no hay. La empresa recurre a trabajadores de lugares alejados porque no puede conseguir mano de obra local en la época de cosecha; los trabajadores locales son absorbidos por las demás empresas de la zona y no alcanzan...” (gerente de empresa en nueva área de expansión).

Dentro del segmento de trabajadores rurales, los migrantes estacionales han sido y son los más vulnerables, debido a su invisibilidad social y a su mayor desprotección legal. En la región en estudio, esta mano de obra representa además uno de los eslabones más frágiles, en el cual recaen más directamente -vía disminución de la demanda- las crisis productivas derivadas de la pérdida de producción por problemas climáticos o por problemas de sobreproducción en el comercio internacional con bajo levantamiento de cosecha. Actualmente la condición de vulnerabilidad se ha acentuado como consecuencia de los mayores requerimientos de calificación vinculados a los cambios técnicos incorporados al proceso productivo.

En el valle de San Francisco, Brasil

Al igual que en la región valletana del Río Negro, en el valle de San Francisco el desarrollo agroindustrial de la fruticultura fue desde sus comienzos una actividad que generó una fuerte y creciente demanda de trabajadores. Para el año 1999 se estimaba que el conjunto de la actividad regional involucraba un total de 83.000 empleos directos y aproximadamente 330.000 empleos indirectos. Se estima que este volumen está sobredimensionado, ya que el conjunto de trabajadores directos no supera los 60.000. Los cálculos de mano de obra en la región continúan realizándose en base a proyecciones de los proyectos iniciales, en las cuales están previstos cuatro empleos indirectos por cada empleo directo.

En primer lugar hay que aclarar que los principales cultivos, orientados en gran medida hacia la exportación (mango y uva), difieren en cuanto a los requerimientos de mano de obra permanente y temporaria. En el caso de la uva las empresas coinciden en tener un plantel de trabajadores permanentes con continuidad en las tareas a lo largo del año, sin que se observe un pico importante en la demanda. El escalonamiento de cosechas a lo largo del año establece una relación más permanente entre el trabajador y el patrón/empresa. Este cultivo requiere además un patrón de calificación definido. Por esta razón es escasa la presencia de trabajadores temporarios y migrantes estacionales. En el cultivo de mango, por el contrario, se observa una mayor concentración de la actividad para la recolección de la fruta. Esta situación implica mayores requerimientos estacionales de

trabajadores, aunque no en la misma magnitud planteada en la región valletana del Río Negro. La mano de obra adicional proviene principalmente de la región, aunque algunas empresas contratan trabajadores extra regionales para la cosecha, del *sertão* de Bahía y de Pernambuco.

Cuadro 3

Generación de empleos en la región del valle de San Francisco según producto

Producto	total plantado (en hectáreas)	mano de obra (porhectárea)	empleos	
			directos	indirectos
Total	35.000		83.200	332.800
Mango	12.500	1,5	18.750	75.000
Uva	6.200	5	31.000	124.000
Banana	7.400	2	14.800	59.200
Goiaba	3.500	2,5	8.750	35.000
Coco verde	4.500	1	4.500	18.000
Acerola	900	6	5.400	21.600

Fuente: VALEXPORT, 1999

El 60% de los trabajadores proviene de otros municipios del nordeste -Ceará y Piauí, entre otros. Hace aproximadamente una década que la mayoría ha comenzado a radicarse en localidades próximas a las zonas productoras, como Petrolina, Juazeiro, Lagoa Grande, Nova Descoberta, Santana do Sobrado. Otros se establecieron como colonos y luego se emplearon en las grandes explotaciones para obtener ingresos extra-prediales. Se trasladaron directamente desde sus lugares de origen o llegaron peregrinando en busca de trabajo, por la posibilidad de conseguir un lote, vivienda y trabajo para su familia.

“...Estos trabajadores no nacieron acá, ellos son de todas partes, del nordeste (...) y como acá en Petrolina hay mucho trabajo, ellos vienen para acá...”
(director de gran empresa).

“...Vinieron con la expectativa de conseguir un lote, algunos lo lograron...”
(informante de CODEVASF)³.

Como se mencionó, y a diferencia de lo que sucede en la región frutícola del Río Negro, la presencia de migrantes temporarios no es significativa en el valle de San Francisco. La mayor parte de la mano de obra es permanente. Dentro de esta categoría de trabajadores es relevante la mano de obra familiar, ya que apro-

ximadamente el 60% son pequeños productores (el 40% restante corresponde a explotaciones con organización empresarial del trabajo). El resto de la fuerza de trabajo permanente y temporaria está conformado por asalariados que viven en la periferia de las principales ciudades del valle de San Francisco. La mano de obra permanente realiza diferentes labores: irrigación, poda, raleo, etcétera. Son trabajadores polivalentes que deben conocer todas las tareas, e incluso, en algunos casos, cuando la empresa lo requiere, el trabajador puede rotar entre las labores de campo y de empaque o viceversa, siempre dentro de un mismo cultivo (en general no circulan entre diferentes cultivos, por ejemplo, entre mango y uva).

Respecto de la mano de obra estacional migrante, la mayoría de estos trabajadores proviene de la región del nordeste.

“...Hay un grupo de personas, unos cien, que nosotros traemos de la región donde viven: Paraíba, un estado cerca de Pernambuco. Todos los años ellos vienen para acá y se quedan viviendo en la finca. Los vamos a buscar a Paraíba para la cosecha de mango porque la cosecha de mango precisa que la jornada empiece antes del horario normal de trabajo y a veces durante el fin de semana...” (director de una gran empresa).

Normalmente, las personas que arriban al valle de San Francisco para la cosecha de mango son las mismas que en el ciclo anterior. Aunque se requiere menos especialización que para el cultivo de uva, el mango también necesita cierta capacitación. El entrenamiento se les da en las mismas explotaciones por medio de personal que tienen las empresas para tal fin. Al igual que en la región valletana del Río Negro, los migrantes estacionales permanecen en la explotación durante el tiempo que dure la cosecha, y son alojados en habitaciones que comparten con otros trabajadores. En su mayoría se trata de hombres adultos jóvenes, con muy bajo nivel de instrucción. El contacto laboral se realiza a través de un trabajador al que denominan “líder”, asimilable al “capataz temporario” o “jefe de cuadrilla” para el caso argentino.

“...Hace 4 ó 5 años teníamos un agrónomo que era de una ciudad de Paraíba y él fue a su ciudad natal y se contactó con esta gente. Después él dejó de trabajar en la empresa pero mantenemos contacto con un líder de ellos. Todos los años hablamos por teléfono y le decimos cuándo vamos a empezar la cosecha, que junte la gente, que vamos a enviar un ómnibus para tal fecha...” (director de gran empresa).

Las empresas no envían un listado con los nombres de los trabajadores; sólo se les manda la cantidad de personal que necesitan, y como ocurre en la región del Río Negro, el “líder” realiza una preselección de la mano de obra en función del perfil de trabajador que exige la empresa.

En cuanto a la obligación legal de contratar todas las temporadas a los mismos trabajadores para la cosecha, el informante comentó que no existe ningún

compromiso en ese sentido, a diferencia del caso argentino, en que la normativa lo exige pero de hecho sólo se cumple formalmente.

“...Pero a mí me gusta que regresen los mismos porque ya saben cómo hacer las cosas que tienen que hacer. Pero no es por una obligación...” (director de empresa).

La empresa realiza la selección de los trabajadores según criterios de disponibilidad, responsabilidad y productividad observadas durante la temporada de cosecha. Sin embargo, esto no implica que se pague ningún estímulo por producción.

“...Algunos que vienen, se quedan acá hasta el final de la temporada; y a otros no les gusta seguir trabajando o a nosotros no nos gusta el trabajo que hacen y regresan antes de terminar la temporada...” (director de una gran empresa).

En sus lugares de residencia habitual estos trabajadores estacionales suelen alternar actividades agrícolas y urbanas; en general se trata de empleos de bajo prestigio y escasos salarios. Por esta razón migran temporalmente para poder complementar sus ingresos trabajando en la recolección y/o empaque de la fruta en el valle de San Francisco.

“...Cuando cierra la cosecha regresan a sus lugares. En la época en que ellos vienen al valle, en su lugar de origen “está la seca”, en esta época no hay lluvias en la región de ellos, entonces cuando empieza la temporada de lluvia, más o menos en febrero, se quedan en su ciudad y nada va a retirarlos de allá porque hacen cultivos de porotos, maíz. Normalmente plantan en la tierra de otros productores mayores y la ventaja para estos productores es que cuando se da la cosecha ellos quedan con la paja del maíz para su ganado. En esta época no hay trabajo donde viven ellos porque sin lluvia no tienen nada que hacer allá...” (director de empresa).

“...Trabajo haciendo muebles. En invierno trabajo en la cosecha, en plantación de arroz y maíz, en verano hago muebles...” (migrante de Itaporanga, estado de Paraíba).

“...Allá trabajo con un mototaxi; también trabajo como ayudante en limpieza y construcción...” (migrante de Itaporanga, estado de Paraíba).

El resto de la mano de obra temporaria está representado por trabajadores que se fueron radicando en la región. La diversidad de cultivos y de tareas culturales que deben llevarse a cabo a lo largo del ciclo productivo anual permite que aún sin ser trabajadores permanentes puedan tener trabajo a lo largo del año, ya sea en una misma empresa o en forma alternativa en diferentes empresas. Esta mano de obra podría asimilarse a la categoría de “trabajador permanente discontinuo” mencionada en el caso argentino.

“...La cosecha acá se puede hacer de distinta manera, no hay una imposición climática que tiene una cosecha limitada. Es posible cosechar uva to-

do el año, es posible cosechar mango todo el año. No hay problemas, acá es posible hacer eso. Entonces, hay distintas formas, hay otras culturas por ejemplo, acerola, hay trabajo todo el año. Goiaba, hay trabajo todo el año. Hay otras frutas que se producen aquí y dan trabajo. Por lo tanto, cuando la gente no está trabajando acá hay otra finca que está cosechando...” (director de gran empresa).

A semejanza de lo que ocurre en la región argentina, los empresarios expresan cierta preferencia en cuanto al origen de la mano de obra para la realización de determinadas tareas. Las diferencias -étnicas, entre otras- son utilizadas para establecer la forma y las características de la inserción laboral, ya sea permanente o temporal, de cada grupo de migrantes en el proceso productivo de la fruticultura regional (Cavalcanti, 1999[b]). Como explica un informante:

“...Estos que vienen de Paraíba son la gente que tiene mucha disposición para el trabajo, los agrónomos que trabajan con ellos sienten que esa gente trabaja bien porque los de acá no hacen lo mismo. Y dentro de los “locales” hay diferencias, la gente de Bahía no es igual que los otros que son de acá. En Juazeiro hay muchas fiestas, a ellos les gustan mucho las fiestas y los trabajos no tanto...” (director de empresa).

Finalmente, hay coincidencia entre los empresarios en que la demanda de trabajadores aumentará simultáneamente con la puesta en producción de nuevas áreas y con el incremento en el volumen de fruta cosechado. Cuando se haga más continua la actividad a lo largo del año, se estima que aumentarán los trabajadores permanentes discontinuos y disminuirán los trabajadores temporarios migrantes, tendencia algo distinta a la observada para el caso argentino.

En general los productores familiares no contratan trabajadores permanentes. La inserción de trabajadores se da en base a contratos por tareas o requerimientos, para un número definido de actividades que hay que desarrollar por día de trabajo. Es así en la cosecha de tomate, y también en las tareas culturales que demanda la uva.

En cuanto a los contratos de trabajo, según un informante de CODEVASE, sólo las grandes empresas realizan contratos en el marco legal vigente, tanto para los trabajadores permanentes como temporarios. En general los productores familiares no poseen trabajadores permanentes, y quienes los tienen pasaron a estimular una mayor participación, integrándolos como socios del emprendimiento y compartiendo el trabajo y los riesgos de producción.

Perfil del trabajador migrante estacional en ambas regiones frutícolas⁴

Características	Región valletana del Río Negro	Polo Petrolina-Juazeiro
Sexo	en su mayoría hombres	solamente hombres
Grupo etáreo	adultos jóvenes	adultos jóvenes
Origen	diverso: en su mayor parte provienen de las provincias del noroeste argentino, de Chile y en menor medida de la Línea Sur rionegrina	casi exclusivamente de la región del nordeste en la que está ubicada la nueva área frutícola.
Instrucción	bajo, el 50% no completó el nivel primario o no posee instrucción	bajo, alto nivel de analfabetismo
Recurrencia	vienen siempre los mismos, solos o acompañados de familiares y/o amigos	vienen los mismos, con otros trabajadores del lugar de origen
Tarea destino	casi exclusivamente cosecha	cosecha y empaque
Tarea de origen	rurales, urbanas, desempleado	combinación de trabajos rurales y urbanos
Salario mensual	500 dólares en promedio	75 dólares

Algunas consideraciones finales

El texto precedente intentó iluminar cómo se redefinen las posiciones productivas y cómo se expresan a nivel local las transformaciones globales en áreas frutícolas de exportación con intensa penetración de capital y modernización tecnológica.

Los espacios productivos analizados se reconvierten, y las relaciones sociales se reestructuran en un contexto de mayor concentración y transnacionalización. En los casos de Brasil y de Argentina las cadenas frutícolas intensifican su integración, y las nuevas tecnologías facilitan la flexibilización y las nuevas formas de organización del proceso de trabajo. Si bien esto tiene efectos positivos sobre la calificación de un grupo de trabajadores, se profundiza la diferenciación en los mercados de trabajo.

La búsqueda de competitividad y de control de calidad parecería inducir y definir los procesos de trabajo, los requerimientos de mano de obra, y las condiciones laborales. Sin embargo, las nuevas configuraciones en los mercados de trabajo implican además dinámicas específicas de las fuerzas sociales.

En ambas regiones, aunque con diferencias de magnitud e intensidad, hay aumento del trabajo asalariado respecto del familiar, aumento del trabajo permanente discontinuo o transitorio permanente, y aumento relativo del trabajo temporario. Estas son consecuencias de la expansión territorial de la actividad, del incremento de los rendimientos por ha, de la prolongación de tareas debido a la atenuación de la estacionalidad, y/o de los cambios en la normativa. Dicho de otra manera, los cambios se deben a distintos procesos de flexibilización interna (tecnológica) o externa (contractual).

Si bien la configuración de cada uno de los mercados de trabajo es diferenciada en términos de calificación, permanencia, retribución y formas de contratación de la mano de obra, existe en ambos casos una tendencia hacia la contratación de trabajadores más calificados, asociada a los requerimientos de calidad y a los nuevos cambios tecnológicos. En general, y coincidiendo con Piñeiro (1996), los “sabereshacer” tradicionales, de menor calificación, van dejando lugar a los “sabereshacer” vinculados a la gestión de la actividad, lo cual modifica y precariza las posiciones laborales agrarias.

Surgen así nuevas variantes de precarización. Con respecto a las relaciones contractuales, se flexibiliza el vínculo laboral y aparecen nuevas modalidades de contratación y terciarización como las pseudo-cooperativas de trabajo o los trabajadores socios, principalmente en la etapa de producción agraria en Brasil, mientras que en Argentina las mismas están más vinculadas al empaque de fruta.

En síntesis, el análisis sugiere que si bien estas configuraciones de trabajadores dan cuenta de especificidades regionales, también responden a determinaciones que superan el alcance local o regional, y que tienen que ver con la complejidad de los procesos de globalización y de reestructuración productiva. En la búsqueda de una integración flexible, el proceso de reestructuración productiva provoca una diversidad de formas. Graziano da Silva (1999) señala que en los países del Norte se alcanza fundamentalmente a través de los más altos niveles de tecnología y de alianzas entre industrias clave, y en los países del Sur se obtiene principalmente a través de nuevos mecanismos de movilización y precarización de la fuerza de trabajo. Los casos presentados darían cuenta de situaciones mixtas. Asimismo, se observa una tendencia hacia la diferenciación de trabajadores entre un núcleo central, calificado, estable, y otro periférico mucho más voluminoso y en condiciones más precarias.

La nueva organización del trabajo busca la adaptación flexible a un mercado inestable y volátil, que exige calidad limitando riesgos. La precarización histórica o renovada del empleo agrario es una de las respuestas, como también lo son

las nuevas formas de inclusión/exclusión (Murmis, 1994). En estos contextos de la agricultura flexible se puede concluir que "...las nuevas modalidades productivas no eliminan los problemas de segmentación de la fuerza de trabajo ni resuelven las asimetrías en la estructura agraria y en el sistema ocupacional: más bien reproducen desigualdades sociales. Al lado de una producción de vanguardia que integra métodos y tecnologías modernas, se encuentra una mano de obra sometida a diferentes formas de discriminación o minorización que se traduce en empleo precario..." (Lara, 1999: 61).

Bibliografía

- Bendini, Mónica 1999 “Entre maçãs e peras: globalização, competitividade e trabalho”, en Cavalcanti, J. S. B. (org.) *Globalização, trabalho, meio ambiente* Recife, Editora Universitaria.
- Bendini, Mónica y Pescio, Cristina (coords.) 1996 *Trabajo y cambio técnico. El caso de la agroindustria frutícola del Alto Valle* (Buenos Aires: Editorial La Colmena).
- Bendini, Mónica y Tsakoumagkos, Pedro 1999 *Transformaciones agroindustriales y laborales en nuevas y tradicionales zonas frutícolas del norte de la Patagonia*. Mimeo.
- Bendini, Mónica; Cavalcanti, Josefa S. F. y Steimbregger, Norma 1999 Informe de Investigación. Proyecto CNPq-CONICET. Mimeo.
- Cavalcanti, Josefa S. B. 1995 “Globalização e agricultura: processos sociais e perspectivas teóricas”, en *Estudos de Sociologia, Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia* (Recife) N° 2; Vol. 1.
- Cavalcanti, Josefa S. B. 1996[a] “Globalização, urbanização, constituição e reprodução da força de trabalho: políticas energéticas e irrigação no Vale do São Francisco”, en Magalhães, S. B.; Brito, R. C. y Castro, E. R. (orgs.) *Energia na Amazônia* (Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi) Vol. 1.
- Cavalcanti, Josefa S. B. 1996[b] “Globalização, novas regiões de produção agrícola e desigualdades sociais”, en *Revista do CRH* (Salvador) N° 24/25.
- Cavalcanti, Josefa S. B. 1999[a] “Globalização e processos sociais na fruticultura de exportação do vale do São Francisco”, en Cavalcanti, J. S. B. (org.) *Globalização, trabalho, meio ambiente* Recife, Editora Universitaria.
- Cavalcanti, Josefa S. B. 1999[b] “Desigualdades sociais e identidades em construção na agricultura de exportação”, en *Heterogeneidades no Trabalho. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo* (San Pablo) N° 9; Año 5.
- CODEVASF 1998 *Relatorio Anual de Monitoria* (Brasilia).
- Friedland, William 1994 “The new globalization the case of fresh produce”, en Bonnano, Alessandro *et al* (eds.) *From Columbus to Conagra: the globalization of agriculture and food* (Lawrence, University of Kansas: Rural America).
- Graziano da Silva, José 1999 “Agroindústria e globalização: o caso da laranja do Estado de São Paulo”, en Cavalcanti, Josefa S. B. (org.) *Globalização, trabalho, meio ambiente* Recife, Editora Universitaria.
- Lara, Sara 1995 (coord.) *Jornaleras, temporeras y bóias frias* (Caracas: Nueva Sociedad-UNRISD).

Lara, Sara 1998 *Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización del trabajo en la agricultura mexicana* (México: Juan Pablos Editor).

Lara, Sara 1999 “Criterios de calidad y empleo en la agricultura latinoamericana: un debate con el postfordismo”, en De Grammont, Hubert (coord.) *Empresas, Reestructuración Productiva y Empleo en la Agricultura Mexicana* (México: Plaza y Valdés Editores San Rafael).

Lautier, Bruno 1999 “Para uma Sociologia da Heterogeneidade do trabalho”, en *Heterogeneidades no Trabalho. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo* (San Pablo) Año 5.

Long, Norman 1996 “Globalization and localization: new challenges to rural research”, en Moore, Henrietta L. de *The Future of Anthropological Knowledge: The uses of knowledges: Global and Local Relations* (London and New York: Routledge) ASADecennial Conference Series.

Lopes, Eliano A. y da Mota, Dalva 1997 *Tecnología e renda na agricultura familiar irrigada de Sergipe* (Brasil: Editora Universidad Federal de Sergipe-EMBRAPA).

Marsden, Terry K; Cavalcanti, Josefa S. B. y Ferreira Irmão, José 1996 “Globalisation, regionalisation and quality: the socio-economic reconstitution of food in the San Francisco Valley Brazil”, en *International Journal of Sociology of Agriculture and Food* (EE.UU.: Pullman) Vol. 5.

Marsden, Terry K. 1997 “Creating space for food: the distinctiveness of recent agrarian development”, en Goodman, David y Watts, Michael *Globalising Food* (London: Routledge).

Murmis, Miguel 1994 “Temas en la sociología rural latinoamericana: reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e incluidos”, en *Ruralia* (Buenos Aires) N° 5.

Neiman, Guillermo; Bocco, Adriana y Miranda, Omar (s/f) *Reestructuración y empleo en actividades agroindustriales seleccionadas*. Mimeo.

Ozino C., María S.; Radonich, Martha y Steimbregger, Norma 1999 “Cosechando temporadas”, en Bendini, Mónica y Radonich, Martha (coords.) *De golondrinas y otros migrantes* (Buenos Aires: Editorial La Colmena) Cuaderno GESA II.

Piñeiro, Diego 1996 “Desafíos e incertidumbres para la sociología agraria en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo”, en Piñeiro, Diego (comp.) *Globalización, integración regional y consecuencias sociales sobre la agricultura* (Montevideo: Grupo Montevideo-UNESCO- Universidad de la República).

Radonich, Martha y Steimbregger, Norma 1999 *Estrategias empresariales y nuevas áreas de expansión territorial*. Ponencia presentada en Congreso de Geografía. Chillán. Mimeo.

Subsecretaría de Fruticultura 1994 *Censar'93. Censo agrícola rionegrino* (Río Negro: Ministerio de Economía).

Subsecretaría de Producción Agraria 1994 *Censo Frutícola 1994* (Neuquén: Ministerio de Producción y Turismo).

Tsakoumakos, Pedro y Bendini, Mónica 1999 *Dimensiones para el desarrollo sustentable en el Alto Valle. Documento de base* (Río Negro: FDHSP-GESA) Mimeo.

Tsakoumagkos, Pedro; Bendini, Mónica; Radonich, Martha y Steimbregger, Norma 1999 *Transformaciones en el empleo en regiones de exportación*. Ponencia en Seminario-taller: Los cambios en el empleo rural en Uruguay desde una perspectiva comparada. Universidad de la República. Salto. Mimeo.

Notas

1 Investigación apoyada por el Proyecto CNPq/CONICET. Registramos la colaboración de la profesora Norma Graciela Steimbregger en el trabajo de campo, procesamiento de datos y en el debate de las ideas aquí presentadas, así como la contribución de Ana Cristina Belo da Silva en la etapa de recolección de datos.

2 El concepto de flexibilidad productiva "...permite dar cuenta de la gran capacidad para hacer combinaciones de distintas formas de producción, no necesariamente excluyentes ni contradictorias, incluso no necesariamente coherentes entre sí, pero que permiten una gran adaptación para hacer frente a las distintas especificaciones de calidad que hoy plantea el mercado..." (Lara, 1999: 337).

3 Corporación de Desarrollo del Valle de San Francisco.

4 Resumen de cuadro organizado por Norma Steimbregger (Cavalcanti, J. S. B., 1999a).

Análisis del mercado de trabajo rural en México en un contexto de flexibilización

Sara María Lara Flores*

De los trabajadores agrícolas al mercado de trabajo rural

En México aún son pocas las investigaciones que se refieren al estudio del mercado de trabajo rural. La temática surge como tal hacia mediados de la década de los ochenta. Antes, el interés estuvo enfocado al análisis de la estructura agraria y/o de los sectores o clases sociales que la integran.

Autores como Stavenhaguen (1969), Gutelman (1971), Pozas y Horcacitas (1971) y Bartra (1974), así como el trabajo realizado por el CDIA (1974), tuvieron como objeto de estudio la *estructura agraria del país*, y en este contexto analizaron la existencia de campesinos pobres o de agricultores sin tierra, que podrían ser considerados como jornaleros o proletarios porque dependían básicamente de la venta de su fuerza de trabajo para lograr su subsistencia. Especialmente Gutelman y Bartra se interesaron en el proceso de “descampesinización” o “proletarización” del campesinado pobre, que a su modo de ver era el resultado del tipo de desarrollo capitalista que se había impuesto en el campo mexicano.

Sin duda se trata de estudios fuertemente influenciados por las tesis de Lenin en *El Desarrollo del Capitalismo en Rusia* y de Kautsky en su obra sobre *La Cuestión Agraria*. Por lo mismo, otorgaron especial importancia a la conformación de una clase social cuya existencia está directamente relacionada con la posesión o no de la tierra, su productividad, la pertenencia de otros medios para ha-

* Doctora en Antropología. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

cerla producir, así como con la capacidad para trabajarla por sí mismos, con ayuda familiar o mediante la contratación de mano de obra asalariada. En este sentido, la metodología utilizada descansaba fundamentalmente en una estricta contabilidad de factores que intervienen en la producción, lo que permitió la elaboración de complejas tipologías de unidades de producción. Así, el libro del CDIA (1974) se convirtió en un “clásico” para los estudiosos del campo mexicano, porque presenta una tipología de los distintos estratos en los que se pueden agrupar las unidades productivas a nivel nacional.

Por su parte, el libro de Roger Bartra acerca de la *Estructura Agraria y Clases Sociales en el Campo* desató una importante polémica entre dos corrientes de análisis que se hicieron famosas en México: la de los “campesinistas” y la de los “descampesinistas”, también llamados “proletaristas”¹.

Bartra hizo un minucioso análisis de las clases sociales que pueden encontrarse entre los productores agrícolas. Su método consistió en contabilizar los insumos y la producción de cien unidades agrícolas encuestadas en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Para realizar este análisis considera importante imputarle un precio a la renta de la tierra (como mecanismo de extracción de plusvalía), al desgaste de la maquinaria y medios de producción, y al trabajo aportado (aun si se trata de trabajo familiar o propio). Sus variables intentan reflejar las condiciones en las que operan las distintas unidades productivas al enfrentarse al mercado, y detectar cuáles de ellas arrojan un saldo positivo o negativo. Sus conclusiones señalan un intenso proceso de proletarización del campesinado, imposibilitado de revertirse.

Un poco más tarde, pero como parte de esa discusión orientada a explicar la tendencia de la estructura de clases en el campo mexicano, aparecen los estudios que tienen como objeto de investigación a *los trabajadores agrícolas* o, más concretamente, al *proletariado rural*. El libro de Luisa Paré (1977) es pionero en este tema en México, y fueron relevantes el libro de Mario Aguirre-Beltrán y Hubert C. de Grammont (1982) y la compilación de C. de Grammont (1986), que recoge distintas situaciones en México. Uno de los méritos indiscutibles de estos libros es ante todo el haberle dado visibilidad social a un grupo social escasamente estudiado en esa época².

La propuesta metodológica de Luisa Paré consistía en hacer un recuento del origen de los ingresos de los trabajadores: en tanto que considera que la proletarización consiste en un proceso que se refleja en la paulatina pérdida de los medios de producción, su objetivo consiste en estudiar las situaciones que van desde la semiproletarización hasta la completa separación del trabajador de sus medios de producción y su sostenimiento básicamente a partir de la venta de su fuerza de trabajo. Su estudio se apoya en la aplicación de un cuestionario a trabajadores agrícolas del Valle del Mezquital, en Hidalgo, y de la zona cañera de Atencingo, en Puebla.

El libro de Luisa Paré (1977) y los trabajos de Aguirre-Beltrán y Hubert C. de Grammont (1982 y 1986) buscaron dar cuenta de la importante heterogeneidad entre los asalariados agrícolas. En este sentido elaboraron tipologías no de unidades productivas, como en los estudios anteriormente citados, sino de los trabajadores. Para ello tomaron como base distintos indicadores de diferenciación de este grupo social. Paré considera como elementos importantes de clasificación del asalariado a su vínculo con la tierra, el carácter eventual o permanente del empleo, su calificación, la condición migratoria y la empresa contratante. Grammont, además de dichos elementos, incluye también la pertenencia o no a un grupo étnico.

En la medida en que el objetivo de estas investigaciones fue el estudio de los sujetos que se incorporan al mercado de trabajo destacando su carácter de clase (no por nada se estudia “al proletariado”), sus instrumentos metodológicos buscaron captar la situación de los responsables de las unidades productivas, fundamentalmente de hombres adultos con tierra y sin tierra. Por lo mismo dejaron de lado la situación de otros grupos que también forman parte del asalariado rural, como son las mujeres y los niños, que pocas veces tienen acceso a la tierra (aunque esto ha cambiado recientemente)³. Por otro lado, si bien se interesaron en las empresas contratantes, al poner el acento en el estudio de los trabajadores no analizaron el mercado de trabajo como el espacio donde se realiza la venta de la fuerza de trabajo.

El enfoque de los mercados de trabajo

Sin duda fue Enrique Astorga (1985) el primero en México en tener como objeto de estudio al *mercado de trabajo rural* propiamente dicho. Su libro constituye un importante aporte por la amplitud con la que se aborda el tema y por los ejemplos que ofrece. Bajo su enfoque, el mercado de trabajo rural se analiza como un espacio en donde la fuerza de trabajo se comporta como cualquier otra mercancía. Por ello su metodología se orientó a captar las fases (promoción, acopio, transporte, almacenamiento y consumo) y los niveles (nacional e internacional) que comporta dicho mercado de trabajo.

Para Astorga el mercado de trabajo rural se refiere tanto a los procesos de producción de peones como a la distribución y consumo de la fuerza de trabajo, así como a los canales y niveles por los cuales ésta transita. Considera al trabajador agrícola o peón como una “mercancía humana”, que responde a una demanda definida por el número de jornales que cada planta requiere, de acuerdo al nivel tecnológico existente en un momento dado. En este sentido, el empleo estaría dado por el tipo de demanda que se genera en torno a cada cultivo.

Su análisis concuerda con el enfoque neoclásico, que considera que la movilidad de los trabajadores se rige por las leyes de la oferta y la demanda, factores que tenderían a equilibrarse tal como sucede en otros mercados. Nada más lejos

de esto. El mercado de trabajo no es un lugar donde oferentes y demandantes se encuentren libremente, porque tanto la oferta como la demanda se encuentran mediadas por contextos sociales y culturales complejos que segmentan a los trabajadores en un sinnúmero de categorías: tantas como la sociedad misma ha creado con criterios de clase, etnia, sexo y generacionales.

Para dar cuenta de esta segmentación en el mercado de trabajo rural algunos autores se han apoyado en la teoría del mercado dual desarrollada por Piore (1971). Este es el caso del trabajo de Antonieta Barrón (1993), para quien el mercado de trabajo es "...el lugar en donde se ofrece y demanda fuerza de trabajo asalariada...". Otro estudio es el de Emma Lorena Sifuentes (1996), quien analiza el comportamiento de los mercados de trabajo en el estado de Nayarit, al noroeste del país, en las dos últimas décadas. Ambas investigaciones ponen particular interés en estudiar la situación de las mujeres en el mercado de trabajo rural.

Barrón se apoya en la teoría institucional que considera la existencia de un mercado de trabajo dual con la presencia de mercados primarios y secundarios: forman parte de los mercados primarios aquellos mercados desarrollados propios de las empresas modernas dedicadas a la producción hortícola. Estos se caracterizarían, desde su punto de vista, por tener una división social del trabajo más marcada. Por su parte, los mercados secundarios serían los menos desarrollados, con una débil división del trabajo. El empleo femenino se daría principalmente en los mercados primarios, como resultado de una mayor diversificación de ocupaciones. Para apoyar su tesis Barrón realiza un estudio en doce localidades productoras de hortalizas ubicadas en seis estados del país.

De acuerdo con este planteamiento se ha propuesto una metodología que permitiría captar el tipo de mercado al que concurre la fuerza de trabajo⁴. Para ello se considera relevante estudiar las siguientes cuestiones: el patrón de cultivos, las características de los productores y el perfil de las unidades de producción, el estudio del volumen y la comercialización de la producción, los rasgos generales de la mano de obra asalariada que interviene en la producción y su perfil sociodemográfico, las distintas etapas del proceso de trabajo, la condición en la que laboran los trabajadores y las migraciones que se generan, así como los conflictos sociales y laborales. Como temas particulares se añaden algunos aspectos que se refieren a las mujeres (fecundidad, anticoncepción, etc.) y a la relación del trabajador con la tierra.

La teoría del mercado dual surge como parte de la corriente institucionalista, que critica fuertemente los postulados neoclásicos. Considera que el mercado da origen a instituciones y reglas, y que los postulados neoclásicos se alteran por una serie de normas, costumbres y procedimientos administrativos (Carrillo y Hualde, 1990; De la Garza, 1996). Esta teoría surgió gradualmente de una serie de estudios históricos realizados en Estados Unidos, Francia e Italia, así como del análisis de mercados de trabajo urbanos. En esta corriente debe ubicarse el texto de Michael Piore sobre el mercado de trabajo dual (1971).

De acuerdo con dicho enfoque se plantea lo siguiente:

- a) Que el mercado laboral se divide en dos segmentos: el primario y el secundario. En el *sector primario* se reagrupan los empleos mejor pagados, más estables, más interesantes, y los trabajadores más privilegiados. El sector *secundario*, que se caracteriza por los elementos opuestos, comprende a todos los grupos en desventaja o “marginados”: las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, así como los empleos peor pagados y más inestables, de manera tal que se conforma por los sectores más débiles políticamente.
- b) La dicotomía del mercado se explica por factores institucionales e históricos: tecnología, estructura ocupacional, costumbres y composición de la fuerza laboral.
- c) La movilidad de los trabajadores dentro de los mercados es muy limitada, y son sobre todo los trabajadores del segmento secundario los que se encuentran atrapados en él.
- d) Las características del capital humano que plantean los neoclásicos (años de escolaridad y adiestramiento) casi no tienen influencia sobre los sueldos y los puestos de trabajo, de manera que quienes se encuentran en el mercado secundario no lo están porque carezcan de las calificaciones adecuadas, sino por la dificultad que existe para acceder a los mejores trabajos y por la escasez de éstos (Llamas, 1987).

De acuerdo con este enfoque, los mercados primarios y secundarios forman parte de una misma unidad en donde los trabajadores se encuentran escindidos por mecanismos institucionales que legitiman la existencia de la segmentación de ciertos grupos.

En el mercado de trabajo rural encontramos en efecto una dicotomía entre grupos de trabajadores clasificados como calificados, que ocupan los mejores puestos y cuentan con mejores condiciones de trabajo y empleo, frente a aquellos que serían típicamente clasificados en el segmento secundario. Sin embargo, el mercado de trabajo rural ofrece un abanico de situaciones complejas, que dificultan la aplicación mecánica del enfoque dual.

Por ejemplo: las modernas empresas exportadoras de flores en México privilegian la contratación de mano de obra femenina local para tareas de corte y manejo de flores en los invernaderos, cuya realización sin duda requiere de una calificación que no es reconocida por las empresas, en tanto que ocupan mano de obra indígena y migrante para tareas de campo, realizando los peores empleos. Ambos grupos, mujeres e indígenas, participan de lo que podría caracterizarse como mercados desarrollados y con una fuerte división del trabajo. Sin embargo, laboran en condiciones de extrema precarización.

La corriente segmentacionista es una variante de la teoría institucional. Define al mercado de trabajo como el conjunto de mecanismos e instituciones a tra-

vés de los cuales la fuerza de trabajo es comprada y vendida. Su aporte sustantivo se encuentra en la noción de estratos, entre los que existe poca movilidad "...por falta de información y calificaciones, pero principalmente por el tipo de actitudes con respecto al trabajo..." (De la Garza, 1996: 53).

En trabajos posteriores, Michael Piore matiza su punto de vista con respecto a la teoría del mercado dual, para formar parte de esta corriente (Piore, 1975, Piore y Berger, 1980: citados por Llamas, 1987). Plantea que al interior del sector primario se encuentran dos estratos: en el superior se ubican los profesionistas y gerentes, cuya movilidad se asocia con el avance de la profesión, y en donde el nivel educativo es fundamental. Este segmento tiene más posibilidades de desarrollar su creatividad e iniciativa. En tanto que en el nivel inferior, aunque éste correspondería a trabajos calificados, la mayoría serían taylorizados, y por lo tanto rutinizados y con pocas posibilidades de creatividad (De la Garza, 1996).

Podría identificarse a las mujeres como formando parte de un estrato superior escindido sexualmente, en donde los hombres ocupan los puestos de ingenieros, técnicos, mecánicos, tractoristas, etcétera, reconocidos como calificados, mientras que ellas, aun si están calificadas, no son reconocidas como tales, y son asignadas a trabajos taylorizados dentro de los empaques y agroindustrias.

El enfoque radical de la corriente segmentacionista plantea que la segmentación estará ligada a la voluntad de los empleadores de reforzar su libertad de acción económica dividiendo a los trabajadores ("dividir para reinar"). Las empresas, en el cuadro de un mercado en crecimiento, se esfuerzan por integrar aquella parte del personal que juega un papel decisivo en la producción. Pero para limitar el costo de esas políticas intentan al mismo tiempo exteriorizar la fracción de los trabajadores que ocupan un lugar periférico con relación a la actividad central.

En las modernas empresas agroexportadoras encontramos distintas estrategias. Puede detectarse un grupo de trabajadores de planta para tareas de mantenimiento, supervisión y organización de la empresa. Este grupo es fundamentalmente masculino. Por su parte, las empresas florícolas ubicadas en el estado de México contratan mano de obra femenina para realizar tareas centrales en la producción de rosas y otras flores de invernadero. Estas mujeres son un segmento relativamente estable, contratado tiempo completo para llevar a cabo las tareas de corte y manejo de flores en los invernaderos, o de selección y empaque: gozan de ciertas prestaciones sociales y se les ofrecen estímulos a la productividad. Por el contrario, en el caso de las hortalizas, en el Noroeste del país, las mujeres son contratadas para las tareas de empaque y acondicionamiento de productos. No gozan de ningún tipo de contratación ni de estabilidad contractual, son remuneradas por tarea, y la variabilidad de horarios y duración en el empleo es muy grande. Esta situación complejiza la estructura del mercado de trabajo.

Actualmente, la introducción de nuevas tecnologías y de nuevas formas de organizar el trabajo que se ponen en marcha con los procesos de reestructuración

que han tenido lugar en el sector agropecuario, complica aún más la situación del mercado de trabajo rural. Especialmente, el problema de la flexibilidad agrega una variante conceptual y metodológica importante en la que vale detenerse.

La segmentación del mercado de trabajo en el contexto de la flexibilidad productiva

Aunque el punto de partida de la flexibilidad es que la mano de obra es fácilmente sustituible y movilizable dadas sus características de calificación, en la práctica la segmentación del mercado de trabajo ofrece precisamente un aspecto contrario, pues ni la mano de obra ni los puestos de trabajo son fácilmente intercambiables, aun al aplicarse nuevas formas de organizar el trabajo e incorporar tecnologías blandas.

En cambio, algunos grupos son sistemáticamente excluidos y condenados al desempleo o a ocupar empleos precarios. De esta manera surgen distintas explicaciones respecto de qué es lo que reproduce la segmentación del mercado de trabajo al ponerse en marcha los nuevos modelos productivos.

Sengenberger plantea que la segmentación es el resultado estructural de la solución de los problemas de mano de obra, teniendo en cuenta los diferentes intereses y condiciones de las empresas. No significa reducción ni estancamiento de la flexibilidad, sino una reestructuración de ésta guiada por el interés empresarial (1988: 349). Para tal efecto considera que las empresas pueden optar por generar *mercados internos*⁵, es decir, aquellos que existen al interior de algunas empresas, con una estructura más o menos rígida y una complejidad variable (Carrillo y Hualde, 1990). De acuerdo con este autor, los mercados internos favorecen la flexibilidad cualitativa de la empresa e incrementan la movilidad de la mano de obra así como su capacidad y disposición para adaptarse a los cambios técnicos, restringiendo con ello el intercambio con el *mercado de trabajo externo* (Sengenberger, 1988: 349).

Para Sengenberger, las restricciones en la intercambiabilidad de los puestos y de la mano de obra con calificaciones iguales o comparables da por resultado una *segmentación horizontal*, que a menudo es el resultado de barreras interpuestas por grupos de profesionistas o de especialistas, mientras que la *segmentación vertical* designa las desigualdades entre distintos segmentos de trabajadores (1988). En ambos casos se trata de cantidades diferenciadas de trabajo de acuerdo con determinadas características, y por ello intercambiables en forma limitada. Pero considera también que la intercambiabilidad de la mano de obra y de los puestos de trabajo se restringe aun cuando en la práctica tienen contenidos similares de calificación, basándose en una normatividad explícita o implícita, por lo cual cierto tipo de trabajadores no pueden acceder a cierto tipo de puestos. Esta normatividad pue-

de tener como “mecanismo consolidador” la estigmatización de ciertos grupos, a los cuales “...se les asignan iguales o similares cualidades o un mismo comportamiento laboral, aun cuando objetivamente puedan ser muy variables...”. Por ejemplo, cuando se considera que todas las mujeres tienen las mismas cualidades: delicadeza, paciencia, habilidad, etcétera (Sengenberger, 1988: 355).

La situación que sufren indígenas, migrantes e ilegales en el mercado de trabajo rural en México, es típica de una segmentación vertical. Porque la estigmatización que se hace de sus características físicas se convierte en mecanismo consolidador o justificador de una estructura de empleo que los condena a los peores puestos y a los trabajos más penosos. En la mayoría de los casos son empleados para realizar tareas de corte y cosecha, para labores de desyerbe, raleo, etc., que se realizan a pleno sol, pagadas las más de las veces “a destajo”, sin contratación formal, sin prestaciones sociales, en forma eventual y con horarios de duración indeterminada.

A su vez, entre los trabajadores no indígenas son las mujeres las que viven una situación similar, aunque gozan de ventajas frente a los indígenas. Las tareas que realizan ellas por lo regular se llevan a cabo en lugares cerrados (invernaderos, empaques, procesadoras de alimentos, etc.). Sus condiciones de trabajo son mejores porque se desempeñan en un local con ciertos servicios, pero sobre todo porque tienen un mejor trato por parte de supervisores y empleadores. En tanto, los indígenas son maltratados con actitudes racistas que justifican que no se les ofrezca ningún tipo de servicio ni mientras trabajan ni para vivir, ya que en la mayoría de los casos se trata de migrantes que se quedan a vivir temporalmente cerca de las empresas.

No obstante, frente a la población local masculina las mujeres guardan una clara situación de desventaja. Jamás se les ofrece un puesto que sea tipificado como calificado. Sería el caso del trabajo de tractorista, estibador, chofer, mecánico o técnico de algún empaque o invernadero. La mayoría de las veces desempeñan trabajos manuales, sin herramientas, bajo el argumento de que carecen de calificación para acceder a mejores puestos. El razonamiento es contrario a la realidad: las mujeres están en los puestos que se les ofrecen, y su calificación corresponde adecuadamente a ello (Kergoat, 1982).

En otros trabajos hemos demostrado que las mujeres que participan en las empresas agroexportadoras pueden contar con la calificación que se requiere para el desempeño de su tarea, y sin embargo la desvalorización de sus competencias lleva a legitimar la asignación de los puestos más bajos que los de los hombres en la estructura ocupacional, con el consecuente efecto en términos salariales (Lara, 1993 y 1995[b]). Esta situación se pone más en evidencia hoy, al introducirse en las empresas agroexportadoras nuevas modalidades productivas que plantean nuevas exigencias de calificación y polivalencia a los trabajadores, elementos que dan nuevas dimensiones a la segmentación del mercado de trabajo.

Michon (1987) considera que la segmentación actual del mercado de trabajo es resultado de la existencia de dos tipos de flexibilidad: la *cuantitativa* y la *cualitativa*. Si el acento en la introducción de los cambios organizativos se pone en los aspectos cuantitativos que resultan de las fluctuaciones temporales de la actividad o de las variaciones en la demanda, la flexibilidad significa simple *variabilidad*, y por lo regular deriva en inestabilidad laboral y precarización del empleo. Mientras que si se trata de aspectos cualitativos, en particular referidos a la diversificación de productos, cambios en los gustos o preferencias de los clientes, o desplazamiento de la demanda de un producto a otro, la flexibilidad significa *polivalencia*⁶ y recalificación.

Atkinson⁷ analiza un esquema de empresa flexible basado en dos tipos de flexibilidad: la *numérica*, que se asegura mediante una mano de obra periférica, y la *funcional*, que se logra gracias a la polivalencia de los trabajadores del núcleo central. De esta manera se considera que hay inestabilidad referida a la flexibilidad cuantitativa o numérica, y estabilidad con la cualitativa o funcional. En este esquema la línea de división entre seguridad e inseguridad se encuentra en la empresa, y no se toma en cuenta la diferenciación en los mercados de productos ni en las estructuras productivas. La flexibilidad numérica se refiere a las relaciones de la empresa con el *mercado externo* de trabajo, y se traduce en flujos de mano de obra, entradas y salidas de personal, despidos, renunciaciones, licencias, etcétera. El otro tipo de flexibilidad funcional no desestabiliza el empleo y no afecta más que al *mercado interno* de trabajo, ya que supone modificaciones en el contenido del trabajo, y transferencias de trabajadores de un puesto a otro dentro de la misma empresa⁸.

Este autor plantea que cuando las empresas se ven obligadas a reducir su personal, al menos temporalmente, para satisfacer sus necesidades de flexibilidad cuantitativa, limitan las contrataciones para cierto tipo de personal, para los empleos menos necesarios, y para las personas más fácilmente recontratables. Mientras que cuando la empresa desarrolla la polivalencia de su personal para lograr una flexibilidad cualitativa, será sólo en última instancia que decidirá separarse de éste.

En el contexto del mercado de trabajo rural en un país como México, en donde la protección laboral ha sido escasa si no nula, difícilmente se desarrolla un mercado interno compatible con condiciones de estabilidad laboral. Lo que regularmente encontramos es la capacidad para generar mercados internos con personal local que vive cerca de las empresas. Los hombres que se insertan en estos mercados lo hacen para desempeñar tareas centrales de la empresa, frecuentemente relacionadas con el manejo y mantenimiento de alguna maquinaria; actividades de control y supervisión de procesos productivos, tanto en campo como en invernaderos o empaques; y tareas que requieren de una calificación para el manejo de nuevas tecnologías (fertilización, manejo de invernaderos, conducción de plantas, etc.). En ocasiones pueden ser parte de una minoría que conforma el personal de planta de las empresas.

No obstante, en el caso de las mujeres locales que laboran en empaques, invernaderos o fábricas de acondicionamiento de productos, quisiera aventurar la hipótesis de que ellas forman parte de este mercado interno pese a la inestabilidad laboral a la que están sometidas. Si bien el esquema típico del mercado interno supone que las empresas conservan al personal que ha logrado calificarse y desempeña las tareas centrales o “claves” para su buen éxito, y que para lograrlo otorgan estabilidad, mejores salarios y contrataciones regulares a cierto sector, en las condiciones del mercado de trabajo rural mexicano se adoptan otras modalidades. Justamente porque se trata de una mano de obra cautiva, que no tiene mejores alternativas de empleo, la mano de obra femenina se ofrece para laborar en las empresas cada temporada. Su participación cíclica en estas empresas (aunque no se trate de una misma empresa) les ha permitido capacitarse y calificarse en tareas puntuales y desempeñarlas con rapidez y destreza. No obstante, son despedidas al finalizar cada temporada y recontratadas al iniciarse la siguiente sin generar ningún compromiso laboral por parte de quien las emplea. Sin duda esto permite contar con una gran flexibilidad, no sólo cuantitativa o numérica, sino también cualitativa y funcional.

De acuerdo con Kern y Schumann, la segmentación actualmente se genera porque no existe una relación directa entre una situación económica satisfactoria y la adopción de nuevos modelos de producción. En gran parte ello se debe a la persistencia de un extenso campo de operaciones manuales sencillas, en el que desde el punto de vista capitalista no se ve la menor ventaja en una renovación cualitativa⁹. Es decir, consideran que hay cierto tipo de industrias en donde la valorización óptima del capital pasa por una combinación de métodos de producción nuevos y tradicionales. Ello no se explica como resultado de un desfase temporal que en el corto plazo puede superarse, sino como el producto de una elección “perfectamente consciente” entre dos lógicas diferentes de fabricación.

En la agricultura es claro que la reestructuración productiva no sigue un solo camino: combina diferentes métodos de producción y de organización del trabajo. En otros trabajos (Lara, 1998) hemos demostrado que en el sector agroexportador las estrategias empresariales son sumamente versátiles, y se ajustan a las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales y ecológicas de cada lugar (Long, 1996).

Byé y Fonte (1994) plantean que los productores hacen un balance de las ventajas que les reporta cualquier cambio técnico u organizativo a partir de dos elementos que han analizado: la inercia y la irreversibilidad¹⁰. Muchos cambios técnicos corresponden a un mejoramiento del modelo tecnológico en vigor, por lo cual se pueden modificar partes del proceso productivo sin involucrar al conjunto. En ese caso se habla de la inercia de los cambios técnicos. Pero otros cambios son de una índole tal que obligan al productor a modificar toda su tecnología, y lo enfrentan a nuevos problemas difíciles de resolver: formación técnica del per-

sonal, reorganización de las formas de trabajo, rentabilización de las inversiones involucradas, etcétera. En ese caso se habla de irreversibilidad, porque la innovación no permite, en caso de dificultades, regresar a la situación anterior¹¹. La irreversibilidad se justifica cuando el salto productivo permite rentabilizar la inversión e incrementar la tasa de ganancia. Los fuertes riesgos que una situación de irreversibilidad tecnológica supone, normalmente llevan al productor a intentar mantener la inercia de sus opciones técnicas, limitando si es necesario la modernización de su empresa. Sin embargo, las inversiones que responden inicialmente a una lógica de inercia pueden finalmente inducir la adopción de alguna innovación que conduce hacia una situación de irreversibilidad, ampliando las consecuencias del cambio técnico y organizativo de la empresa.

En México, si bien algunos agricultores incorporan nuevas tecnologías ahorradoras de energía y de agua -como la labranza cero, el riego por goteo, la platicultura, los abonos verdes, el uso de fertilizantes y plaguicidas naturales-, este balance no es sólo de índole técnica sino también social, ya que se realiza tomando en cuenta las oportunidades locales y las ventajas que ofrece la presencia de un sector campesino con potencial productivo al que puede delegarse la parte de los procesos productivos más intensivos en mano de obra a través de formas asociativas o de agricultura “de contrato”. De la misma manera puede recurrirse a un sector de trabajadores agrícolas entre los cuales existe una presencia indígena y femenina significativa, contratados como mano de obra temporal, para que cumplan con habilidad y a bajo costo la realización de numerosas tareas que garantizan una mayor calidad del producto.

La reestructuración en la agricultura ha conducido a una modernización de las empresas y a la incorporación de cambios tecnológicos importantes. No obstante, la competencia por parte de los propios países desarrollados en la producción de cultivos no tradicionales, la vulnerabilidad de los mercados, la rapidez con la que se vuelven obsoletos o se masifican ciertos productos, las grandes fluctuaciones de los precios, la dependencia tecnológica y el monopolio en la comercialización y distribución por parte de las transnacionales, reducen las posibilidades de competir y de hacer rentable la incorporación de tecnologías, demasiado costosas o mal adaptadas a las condiciones tecnológicas de los países subdesarrollados. Así, encontramos que en México las empresas no basan su competitividad internacional en el uso de tecnologías caras y sofisticadas. La estrategia hasta ahora consiste más bien en poner a prueba una innovación para saber si ésta ofrecerá ventajas adicionales a las que se obtienen gracias a las bondades del clima y al uso no racional de los recursos naturales, pero sobre todo gracias al empleo que puede hacerse de una fuerza de trabajo que sigue siendo abundante y barata en nuestros países¹².

La presencia de diferentes tipos de trabajadores y su especialización en el desempeño de variadas funciones a lo largo de los ciclos productivos tanto en el campo como en los empaques o procesadoras de productos, permite a las empre-

sas establecer formas flexibles de organización del trabajo que aseguran el control de calidad de los productos y una gran adaptabilidad a los ritmos del mercado, limitando el riesgo que representan las inversiones en capital fijo.

De esta manera se recurre a una *flexibilidad cuantitativa*, que se expresa en términos contractuales mediante variabilidad de horarios y eventualidad en el empleo, o en términos salariales mediante formas de pago a destajo por tarea o por producto propias de las formas de organización de tipo taylorista-fordista. A la vez, puede suceder que se descansa en una *flexibilidad cualitativa*, que se traduce en exigencias de calificación, especialización e implicación para los trabajadores, organización en equipos o círculos de trabajo, estímulos a la productividad, y otras formas propias de los nuevos modelos productivos aplicados en la industria. Una y otra modalidad no son incompatibles (Lara, 1998).

Según De la Garza (1993: 63) se trata de un tipo de *flexibilidad primitiva* propia de los sistemas fordistas-tayloristas, "...que busca no sólo eliminar las trabas para el uso de la fuerza de trabajo, sino una relación diferente entre trabajadores y supervisores en el proceso productivo...". Indudablemente, el resultado del desarrollo de este tipo de flexibilidad genera una segmentación del mercado de trabajo no sólo en el nivel de la empresa, sino también de las ramas de producción y de la sociedad en su conjunto.

Conclusiones

La reestructuración de la agricultura mexicana ha profundizado la segmentación del mercado de trabajo rural: ésta se expresa ahora no sólo en las condiciones de contratación y de empleo, sino además en el contenido del trabajo que desempeñan los diferentes grupos que laboran como asalariados en este sector.

Un cambio significativo para entender los mecanismos que conducen a esta segmentación ha sido el pasar del estudio de la estructura agraria al de los sujetos que la integran y participan en ella como asalariados. Pero sin duda el paso cualitativo más importante aconteció cuando la clasificación y la elaboración de tipologías de los asalariados dieron lugar al análisis de los sujetos que participan de la dinámica de los mercados de trabajo.

No obstante, el estudio del mercado de trabajo como un espacio que funciona con la misma lógica que cualquier otro mercado y se regula naturalmente por la ley de la oferta y la demanda, como lo plantea el enfoque neoclásico, se convirtió en una traba para la comprensión de múltiples dimensiones que se expresan en este espacio social. Entre otros motivos, porque bajo este enfoque la fuerza de trabajo se considera como una mercancía homogénea e indiferenciada (el hombre-peón).

Es el enfoque dual el que incorpora una dimensión sociológica al estudio de los mercados de trabajo. En el caso del mercado de trabajo rural, tuvo la virtud de

poner énfasis en las diferencias que existen al interior mismo de los trabajadores. Diferencias que no pueden ser analizadas como simples categorías que dan lugar a complejas tipologías, sino en cambio como segmentos que se contraponen en una estructura de fuertes asimetrías.

Sin embargo, el supuesto de una segmentación del mercado de trabajo basada en oposiciones binarias entre mercados primarios y secundarios, internos o externos, o aquella provocada por la aplicación de dos formas de flexibilidad distintas (cualitativa/cuantitativa o numérica/funcional) adoptadas por las empresas de acuerdo con sus intereses, no logra dar cuenta de la complejidad del mercado de trabajo rural y de la dinámica que la reestructuración productiva ha generado recientemente.

La exclusión y precarización del empleo van de la mano con la aplicación de las nuevas modalidades productivas y se hacen extensivas al conjunto de la clase trabajadora, de manera tal que resulta un tanto ocioso clasificar a los trabajadores como formando parte de mercados primarios o secundarios. Por ejemplo, la calificación como eje de distinción ha dejado de tener un lugar privilegiado, dando paso al reconocimiento de “competencias” que se vuelven más valorizables en ciertos nichos laborales, y tampoco se convierte en garantía de mejores condiciones de trabajo ni salariales ni contractuales (menos aun para las mujeres, de quienes se ignora su calificación).

Pero por otro lado no todo el interés de las empresas se concentra en adquirir mano de obra barata. En el contexto de la reestructuración, las exigencias de las empresas son de distinta índole. Resulta imprescindible tanto contar con una mano de obra capaz de pasar por todas las etapas del proceso productivo conociendo las distintas labores que requiere un cultivo (calificación y polivalencia), como poder contratarla y despedirla con un amplio margen de libertad. Por eso, el análisis de mercados internos/externos resulta limitado. Porque los mercados internos suponen que las empresas conservan a sus “mejores cuadros” y desarrollan la movilidad interna, externalizando al personal menos importante para cubrir sus necesidades.

Hemos visto la gran habilidad que poseen las empresas agroexportadoras mexicanas para contar permanentemente y por sobre todo con mano de obra femenina local, la cual desempeña tareas centrales de las empresas sin contar con ningún tipo de estabilidad ni protección laboral. De este modo, consiguen tener las ventajas que les proporciona un mercado interno, pero con una mano de obra que se mantiene externa.

Finalmente, resulta alejado de la realidad explicar la segmentación a través de una oposición entre flexibilidad cualitativa y cuantitativa, suponiendo que esta última es sólo un resabio del pasado que poco a poco tendería a desaparecer, dando lugar a formas de flexibilidad más enriquecedoras tanto para los trabajadores como para las empresas. Tampoco es cierto que las empresas modernas re-

quieran de una flexibilidad cualitativa más que cuantitativa. En las empresas agroexportadoras encontramos que los puestos que ocupan las mujeres ofrecen mayor flexibilidad en términos de contratación (horarios, temporalidad) y formas de pago (destajo, por productividad y otras), pero al mismo tiempo pueden otorgar ventajas en términos de calificación, polivalencia e implicación sin que éstas sean reconocidas ni valorizadas como tales. Igualmente, la mano de obra indígena e infantil que participa en las cosechas y labores de campo de los productos hortícolas ofrece una gran flexibilidad cuantitativa en términos contractuales y salariales, ya que es empleada en las peores condiciones laborales.

Por modernas que sean las empresas, y a pesar de que la mayor parte de su producción se dirija a la exportación, manteniendo una fuerte división del trabajo en los procesos productivos, parece difícil considerar que generen mercados primarios, en el sentido tomado por Piore en su teoría del mercado dual, porque actualmente los mercados se entrelazan.

Las empresas combinan formas de producir tradicionales en las que existe una ligera división del trabajo con formas muy modernas (equipos de trabajo o círculos de calidad) en las que precisamente se busca eliminar la rigidez en la división del trabajo. Ellas se asocian con pequeños productores y pueden mantener etapas del proceso de producción con formas de organización fordistas-tayloristas (principalmente en los empaques). Tampoco se puede decir que estas empresas conformen mercados internos con puestos de trabajo relativamente estables, buenas condiciones laborales y salariales, equidad y estabilidad en el empleo, condiciones propias de los mercados primarios.

Esta manera de operar de los mercados de trabajo exige nuevas herramientas conceptuales que es necesario construir. Si bien en el ámbito de la Sociología del Trabajo se analizan las características de los nuevos modelos productivos y sus efectos en el mercado de trabajo, resulta importante detenerse a estudiar la manera en que profundizan la segmentación del mercado de trabajo, el efecto en las calificaciones obreras, en las modalidades de empleo y en el contenido del trabajo, entre otras cosas que hasta ahora han sido poco analizadas.

Algunos de estos problemas fueron planteados con anterioridad, al estudiar los efectos de la mecanización y de la implantación de los métodos científicos de producción sobre el trabajo. Ahora vuelven a retomarse para analizar lo que sucede al introducirse cambios en la base tecnológica y organizativa de los procesos de trabajo¹³. Sin embargo, la teoría sociológica debe construir las herramientas teórico-metodológicas adecuadas para dar cuenta de estos nuevos procesos que están teniendo lugar en el mercado de trabajo rural.

Bibliografía

- Aguirre-Beltrán, M. y de Grammont, H. C. 1982 *Los jornaleros agrícolas en México* (México: Editorial Macehual).
- Astorga, E. 1985 *El mercado de trabajo rural en México: la mercancía humana* (México: Editorial ERA).
- Barron, M. A. 1993 *Los mercados de trabajo rurales: el caso de las hortalizas en México* (México: Facultad de Economía, UNAM). Tesis de doctorado.
- Barron, M. A. 1997 “Características de los mercados de trabajo en los cultivos no tradicionales de exportación: el caso de las hortalizas en México”, en Barrón, M. A. y Sifuentes, E. L. (coords.) *Mercados de trabajo rurales en México: estudios de caso y metodologías* (México: Facultad de Economía-UNAM/Universidad Autónoma de Nayarit).
- Barron, M. A. y Sifuentes, E. L. 1997 *Mercados de trabajo rurales en México: estudios de caso y metodologías* (México: Facultad de Economía-UNAM/Universidad Autónoma de Nayarit).
- Bartra, R. 1974 *Estructura agraria y clases sociales en México* (México: Editorial ERA).
- Botey, C.; Heredia, J. L. y Zepeda, M. 1975 *Los jornaleros agrícolas migratorios: una solución organizativa* (México: Secretaría de Reforma Agraria).
- Boyer, R. 1987 “Crise et flexibilité”, en *La Flexibilité du Travail* (París) La Documentation Française, Cahiers Français N° 231.
- Bye, P. y Fonte, M. 1994 “Is the technical model of agriculture changing radically?”, en McMichael, Philip (ed.) *The Global Restructuring of Agro-Food Systems* (London: Cornell University Press and Ithaca).
- Carrillo, J. y Hualde, A. 1990 “Mercados internos de trabajo ante la flexibilidad: análisis de las maquiladoras”, en González-Aréchiga, B. y Ramírez, J. C. (comp.) *Subcontratación y Empresas Transnacionales* (México: COLEF-Fundación Friedrich Eber).
- CDIA(Centro De Investigaciones Agrarias) 1974 *Estructura agraria y desarrollo agrícola en México* (México).
- De Grammont, Hubert C. 1986 *Asalariados agrícolas y sindicalismo en el campo mexicano* (México: Juan Pablos Editores).
- De Grammont, Hubert C.; Lara, S. y Rubio, B. 1996 “La política agropecuaria mexicana: balance y perspectivas”, en De la Garza, Enrique (coord.) *Políticas Públicas Alternativas en México* (México: La Jornada Ediciones y CIICH/UNAM).

De La Garza, E. 1993 *Reestructuración Productiva y Respuesta Sindical en México* (México: IIE-UNAM/División de Ciencias y Humanidades-UAM-I).

De La Garza, E. 1996 *La Reestructuración Productiva en América Latina* (Inglaterra: Universidad de Warwick) Mecanoscrito.

Deere, C. D. y Leon, M. (compiladores) 1986 *La mujer y la política agraria en América Latina* (Bogotá: ACEP-S.XXI).

Feder, Ernest 1977 “Campesinistas y descampesinistas: tres enfoques divergentes (y no compatibles) sobre la destrucción del campesinado”, en *Comercio Exterior* (México) N° 12, Vol. 27.

Gutelman, M. 1971 *Capitalismo y reforma agraria en México* (México: Editorial ERA).

Kautsky, K. 1970 *La cuestión agraria* (París: Ruedo Ibérico).

Kergoat, D. 1982 *Les Ouvrières* (París: Editorial Sycomore).

Kern, H. y Schumann, M. 1987/88 “Hacia una reprofesionalización del trabajo industrial”, en *Sociología del Trabajo* (Madrid: Nueva Epoca).

Kerr, Clark 1954 “The balkanization of labor markets”, en *Labor Markets and Wage Determination* (Los Ángeles y Londres: University of California Press) pp. 21-37.

Lara, Sara M. 1988 “El perfil de la jornada agrícola actual y su mercado de trabajo”, en Aranda, Josefina B. (comp.) *Las Mujeres en el Campo* (México: Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca).

Lara, Sara M. 1991 “Las obreras agrícolas, un sujeto social en movimiento”, en *Nueva Antropología* (México) N° 39, Junio.

Lara, Sara M. 1992 “La flexibilidad del mercado de trabajo rural”, en *Revista Mexicana de Sociología* (México: IISUNAM) N° 1.

Lara, Sara M. 1993 “Le conditionnement des produits maraichers dans l'état de Sinaloa: où comment une solidarité se façonne à travers solidarités et conflits”, en *Cahiers du GEDDIST* (París: IRESCO) N° 7.

Lara, Sara M. 1995[a] *Jornaleras, temporeras y bóias-frias: el rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina* (Caracas: UNRISD-Nueva Sociedad).

Lara, Sara M. 1995[b] “Las empacadoras de hortalizas en Sinaloa: historia de una calificación escatimada”, en González, Soledad y Salles, Vania (coords.) *Género y transformaciones agrarias* (México: PIEM-COLMEX).

- Lara, Sara M. 1998 *Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización flexible del trabajo en la agricultura mexicana* (México: Procuraduría Agraria-Juan Pablos Editor).
- Lara, Sara M. 1999[a] “Criterios de calidad y empleo en la agricultura latinoamericana: un debate con el *postfordismo*”, en De Grammont Hubert C. (coord.) *Innovación tecnológica y reorganización productiva en el sector agroexportador* (México: IIS-UNAM-Plaza y Valdés).
- Lara, Sara M. 1999[b] “Características del Mercado de Trabajo Rural en el México de hoy”, ponencia presentada en Coloquio *El Campo Mexicano: Los Retos de Fin de Siglo* (Hermosillo, Sonora: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo) 15 de Marzo.
- Lenin, V. I. 1971 *El desarrollo del capitalismo en Rusia* (México: Ediciones de Cultura Popular).
- Long, Norman 1996 “Globalización y localización: nuevos retos para la investigación rural”, en Lara, Sara M. y Chauvet, Michele (coordinadores) *La Sociedad Rural Mexicana frente al Nuevo Milenio*, de Grammont H. C. y Tejera, H. (coordinadores de Serie) (México: Plaza y Valdés, INAH-UAM/Az.-IIS/UNAM).
- Llamas, I. 1987 “Teorías del empleo y de la determinación del salario”, en *Revista Iztapalapa* (México: UAM-Iz) Año 7, N° 14, Junio/Diciembre, pp. 71-85.
- Michon, F. 1987 “Flexibilité et marché du travail”, en *La Flexibilité du Travail* (París) La Documentation Française, Cahiers Français N° 231, Mayo/Junio.
- Osterman, P. 1984 *Los mercados internos de trabajo* (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).
- Paré, Luisa 1977 *El proletariado agrícola en México. ¿Obreros agrícolas o campesinos sin tierra?* (México: Siglo XXI Editores).
- Piore, M. 1971 “The dual labor market: theory and complications”, en Gorgon, D. M. *Problems in political economy: an urban perspective* (Lexington: Mass, D.C. Heath and Company).
- Piore, M. 1975 “Notes for a Theory of Labor Market Stratification”, en Edwards, R.; Reich, M. y Gordon, D. *Labor Market Segmentation* (Lexington: Mass, D.C. Heath and Co.).
- Piore, M. y Berger, S. 1980 *Dualism and Discontinuity in Industrial Societies* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Pozas - Horcacas, R. 1971 *Los indios en las clases sociales de México* (México: Siglo XXI Editores).
-

Sengenberger, W. 1988 "Introducción sobre la investigación del mercado de trabajo en la RFA. Instituciones y Factores", en *Lecturas sobre Mercado de Trabajo en la República Federal de Alemania(I). Mercado de trabajo, ocupación y desempleo* (España: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

Stavenhagen, Rodolfo 1969 *Las clases sociales en las sociedades agrarias* (México: Siglo XXI Editores).

Sifuentes, E. L. 1996 *Los mercados de fuerza de trabajo en la agricultura de Nayarit en el período 1970-1994 y la participación femenina* (México: Facultad de Economía, UNAM). Tesis de maestría.

Notas

1 Se encuentra una importante cantidad de artículos y tesis de grado que se adscribían a una y otra corriente y alimentaban el debate. Sus principales teóricos fueron Armando Bartra, Roger Bartra, Manuel Coello, Ariel Contreras y Arturo Warman, entre otros. Una síntesis de dicha polémica puede encontrarse en Feder (1977).

2 En ese momento sólo se había realizado el estudio de Botey, Heredia y Zepeda (1975).

3 Un análisis crítico de estos trabajos se encuentra en Lara (1991).

4 Se trata de una propuesta que surge como resultado de un Seminario sobre Mercados de Trabajo Agrícolas, organizado por Emma Lorena Sifuentes y Omar Wicab en el marco del Programa Interdisciplinario de Investigación e Informática sobre Asuntos Rurales de la Universidad Autónoma de Nayarit, que tuvo lugar en mayo de 1993. Véase Barrón y Sifuentes (1997).

5 Para un análisis de los mercados internos en las empresas norteamericanas, véase Osterman (1984).

6 Se entiende como la posibilidad que tiene un trabajador de ocupar varios puestos de trabajo, gracias a que cuenta con una formación general y técnica suficientemente amplia y un interés especial en la calidad de su trabajo. El símbolo de ese nuevo perfil de trabajador es el antiguo obrero “proudhoniano” (Boyer, 1987).

7 “... Flexibility planning for an uncertain future...” en *Focus*, 1985 (citado por Michon, 1987).

8 Kerr desarrolla un modelo dual basado en la existencia de *mercados internos* y *externos*. Los primeros se refieren a la movilidad que las empresas generan en su interior, colocando a sus propios trabajadores en mejores puestos, en tanto que para los puestos más bajos de su estructura ocupacional incorporan personal externo o nuevo (Kerr, 1954: 21-37, citado por Pries, 2000).

9 Para ejemplificar este proceso dicen que “basta con pensar en la falta de interés económico de una tecnología sofisticada en ciertas etapas de fabricación, tales como el embalaje” (Kern y Schumann, 1987/88: 15).

10 Aunque Byé y Fonte (1994) sólo señalan estos procesos en relación con la biotecnología, considero que de hecho pueden aplicarse al conjunto de elementos que conforman la reestructuración.

11 Por ejemplo, la introducción de una nueva semilla conduce en un momento dado a la redefinición del uso de insumos, a la investigación para solucio-

nar distintos problemas (adaptación de la semilla al ambiente local, el problema de los residuos tóxicos) y a la reorientación de las labores culturales.

12 En 1950 en los países desarrollados los salarios agrícolas eran de 15 a 20 veces más elevados que en el Tercer Mundo, y la productividad 7 veces más alta. En 1985, los salarios eran de 22 a 28 veces más altos, pero la productividad era 36 veces más alta (De Grammont; Lara y Rubio, 1996).

13 Cabe recordar el planteamiento de Harry Braverman en su libro de 1974 *Trabajo y capital monopolista*, en el cual retoma las posturas de Marx sobre el problema de la alienación y el fetichismo para desarrollar su tesis sobre el proceso de homogeneización de los trabajadores, la descalificación obrera y la pérdida de control del obrero sobre su trabajo como resultado de la división del trabajo y la mecanización.

Este libro se terminó de imprimir en el
taller de Gráficas y Servicios en el
mes de enero de 2001.
Primera impresión, 700 ejemplares

Impreso en Argentina